

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento de Antropología Social



TESIS DOCTORAL

**Las políticas sociales en perspectiva socio-antropológica:
estudio de la gestión y aplicación de la renta mínima de
inserción de la Comunidad de Madrid con el colectivo gitano**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Ariadna Ayala Rubio

Directores

María Isabel Jociles Rubio

Madrid, 2012

Las políticas sociales en perspectiva socio-antropológica: estudio de la gestión y aplicación de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid con el colectivo gitano

Doctoranda: Ariadna Ayala Rubio
Directora: María Isabel Jociles Rubio
Departamento: Antropología Social, UCM
Programa Doctorado: "Antropología
Social de la Diversidad Cultural y la
Ciudadanía"

Marzo de 2012

Agradecimientos:

A Aitana, por regalarnos su presencia. A Inti, por acompañarme en este camino y ayudarme hasta el final. A mi directora de tesis, María Isabel Jociles, por el apoyo y dedicación que le ha prestado a mi tesis. A mi vecina, por brindarme un espacio de tranquilidad para trabajar y decirme que podía ser madre y doctoranda. A mi madre, Ana, y a mi tía, Pili, por la fortaleza y los cuidados que nos han prodigado para que pudiera sacar este proyecto adelante. Muchas gracias.

Índice

Introducción	1
0.1 Presentación	1
0.2 Estado de la cuestión	8
0.2.1 Los estudios sobre las rentas mínimas en Francia y España	8
0.2.2 Apuntes sobre otros estudios y otras cuestiones relacionadas con éste	16
0.3 Metodología	18
0.3.1 Trabajo de campo	19
0.3.1.1 Las fases del trabajo de campo	19
0.3.1.2 El acceso al campo	20
0.3.2 Descripción de los asentamientos donde se realizó observación participante	23
0.3.2.1 El Cañaveral o La Jungla	24
0.3.2.2 Santa Catalina	24
0.3.2.3 Cañada Real Galiana	25
0.3.2.3.1 Cañada Real-zona de Valdemingómez	26
0.3.2.3.2 Cañada Real-zona Rivas	27
0.3.3 Metodología seguida en la investigación sobre hábitos de salud en el colectivo gitano	28
0.3.4 Metodología seguida en la investigación sobre la RMI y el colectivo gitano	29
0.3.4.1 Entrevistas	29
0.3.4.2 Observación participante	30
0.3.4.2.1 Observación en proyectos educativos para beneficiarios de la RMI	31
0.3.4.2.2 Observación en foros y jornadas	33
Capítulo 1: El Estado frente a la exclusión social. Las políticas de rentas mínimas	35
1.1 Las rentas mínimas en el Estado Español	42
1.2 El Ingreso Madrileño de Integración, predecesor de la Renta Mínima de Inserción en Madrid	46
1.2.1 El IMI, y el trabajo con el colectivo gitano: el contexto de la intervención social en los 90	52
1.2.1.1 IMI y estrategias de intervención de los trabajadores sociales de Servicios Sociales	60
1.3 La RMI en la Comunidad de Madrid	66
1.3.1 La prestación económica	72
1.3.1.1 Requisitos para percibir la prestación económica de la RMI	72
1.3.1.2 La cuantía de la prestación económica de la RMI	72
1.4 Resumen del proceso de solicitud de la prestación	74
1.5 Algunos datos numéricos sobre los perceptores de la RMI durante el 2010	77
1.6 Recapitulación	79
Capítulo 2: Factores que dificultan la aplicación y gestión de la RMI	83
2.1 Factores concernientes a la ambigüedad de la ley	83
2.2 Factores concernientes a la inclusión de la gestión de la RMI dentro de la lógica administrativa	98

2.2.1	Algunas excepciones a los protocolos de la RMI para usuarios que trabajan en la economía informal.....	102
2.3	Condiciones estructurales que dificultan la implantación de la RMI	104
2.4	Factores políticos. El contexto social de los Servicios Sociales actuales: el electoralismo ‘ciudadanista’ y la intrusión política en los Servicios Sociales	111
2.5	Los profesionales “técnicos” como conocedores parciales de las medidas de inclusión social	116
2.6	El establecimiento de jerarquías poco claras entre instituciones que gestionan o ejecutan la RMI	117
2.7	Condiciones laborales debidas a la externalización y precarización del ámbito de la intervención social	123
2.8	Los gitanos en los Servicios Sociales: su construcción como colectivo “resistente” y “demandante”	128
2.8.1	La RMI y la precariedad económica: la desconfianza hacia los gitanos derivada de la compatibilización de la RMI con ingresos provenientes de la economía informal.....	133
2.8.2	Tensiones con el colectivo gitano en el marco de las instituciones públicas	135
2.9	Recapitulación	138
Capítulo 3: Concepciones de los profesionales sobre la exclusión social, la integración, el sujeto legítimo de la intervención social y el colectivo gitano		143
3.1	Exclusión, integración y sujeto legítimo de la intervención social	143
3.2	La importancia del “hacer algo” como constitutivo del sujeto racional moderno	155
3.3	El lenguaje de la autonomía en el ámbito de la intervención socio-educativa	159
3.4	Recapitulación	163
Capítulo 4: Lo gitano como categoría – problema de la intervención social		165
4.1	Las deportaciones de gitanos en Francia y en España	165
4.2	Lo socio-cultural como raíz del problema de los gitanos: cuando la discriminación y estigmatización proviene de informes técnico-profesionales.	169
4.2.1	Un caso concreto: el informe de los asentamientos marginales del área 1	172
4.3	Recapitulación	186
Capítulo 5: Estrategias profesionales en la aplicación de la RMI		191
5.1	Estrategias del grupo fiscalizador para hacer cumplir el PII	207
5.2	Una aplicación diferente: los trabajadores sociales que se desvinculan de la autoridad	220
5.3	Recapitulación	230
Capítulo 6: Las experiencias y los puntos de vista de los gitanos sobre la RMI		233

6.1	La clasificación de los beneficiarios gitanos de acuerdo a clases sociales	234
6.2	RMI, desconfianza y contexto de percepción de los Servicios Sociales	237
6.3	Estrategias productivas del colectivo gitano perceptor de la RMI	243
6.4	La relación subjetiva con el trabajo	245
6.5	El nerviosismo ante los Servicios Sociales: la auto-representación de los beneficiarios de clase baja y media-baja como sujetos sin poder de negociación con respecto a los profesionales de Servicios Sociales	254
6.6	La petición de recursos sociales: estrategias de auto-presentación y legitimación ante los profesionales	259
6.7	RMI y profesionales	274
6.7.1	La demanda gitana como demanda desadaptada: la búsqueda de alianzas personales con los profesionales del trabajo social.....	276
6.7.2	Trabajadores sociales vs. educadores sociales	279
6.8	Recapitulación	284
Capítulo 7: Las actividades educativas con gitanos en los grupos de la RMI		287
7.1	La mujer gitana como terreno abonado para la intervención social	288
7.2	La resocialización de la mujer gitana en los cursos de alfabetización la RMI. Los contenidos más frecuentes	295
7.2.1	La autonomización de la mujer como etapa necesaria en “la “evolución hacia la liberación femenina”	302
7.2.2	Un inciso: las mediadoras sociales como emblema de la modernización de la mujer gitana.....	305
7.2.3	Algunas hipótesis sobre la participación en “el culto” y el cambio de roles de género de las mujeres gitanas	310
7.3	Alfabetización e infantilización: consecuencias corporales de la práctica de la lectoescritura en los grupos RMI	314
7.4	El “control blando” en los espacios educativos asociados a la RMI y algunas tácticas de resistencia de las alumnas	318
7.5	Maternalismo y moralización en los grupos RMI: lo que implica educar	323
7.6	Recapitulación	330
Conclusiones		333
Bibliografía		349
Anexo:	Guiones de entrevistas	369

Introducción

0.1 Presentación

Esta tesis doctoral parte de algunas hipótesis que se generaron en el desarrollo de una investigación titulada “Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña”¹, que se llevó a cabo en el año 2008. Ahora bien, aunque arranque de dichas hipótesis, esta investigación no ha sido la única que le ha servido de base empírica, sino que hay que añadir otra, también de carácter socio-antropológico, que ha supuesto un desplazamiento temático y conceptual importante con respecto al objeto de estudio que guió a la primera, puesto que se ha centrado en la gestión de la Renta Mínima de Inserción (en adelante la RMI²) y en su aplicación con esa misma población. En el transcurso del primer estudio, que versaba sobre las prácticas relacionadas con el cuidado de salud del colectivo gitano madrileño en situación de vulnerabilidad, se destacó una vertiente de este colectivo que entonces no pudo ser investigada, pero se convirtió en el núcleo de reflexión del segundo estudio y, de este modo, de la tesis doctoral que aquí se presenta: el uso de la referida prestación económica para promover, desde diferentes espacios educativos y de intervención social vinculados a ella, un cambio de comportamientos en la población gitana. Así, la RMI aparecía recurrentemente en los discursos de los profesionales socio-sanitarios³ entrevistados durante la primera investigación mencionada como un medio que permitía captar a una población gitana para poder así intervenir socio-educativamente en diferentes ámbitos, alrededor de los cuales se congregaban diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, la mayoría subsidiarias de la Administración Pública. Y en distintos documentos técnicos sobre exclusión social que entonces consulté, la RMI era

¹ El informe de esta investigación, realizada para el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid a través de un convenio de esta entidad con el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en 2008, puede ser consultado en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161769242584&language=es&pagename=PortalSalud%2FPPage%2PTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017.

² La Renta Mínima de Inserción se conoce, en el lenguaje técnico de los profesionales y de algunos beneficiarios de la misma, como “la remi”. A efectos de facilitar la lectura de este trabajo, en adelante usaré preferentemente los términos “remi” o la RMI para designar esta prestación económica.

³ En la fase de acercamiento al campo contacté con el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid, así como con asociaciones y ONG que conocía por haber estado trabajando antes como educadora en una ONG que realizaba actividades de promoción de la salud con drogodependientes en Las Barranquillas, asentamiento chabolista de la zona sur de Madrid, cercano a Merca Madrid, conocido por la venta de sustancias ilegales y por ser el espacio donde la Agencia Antidroga ubicó la primera sala de consumo supervisado de España en el año 2000, también conocida como “narcosala” y que, en diciembre 2011, fue clausurada por la CM. Su nombre oficial era Dispositivo Asistencial de Venopunción (DAVE). Fuentes:
<http://www.abc.es/20111212/madrid/abcp-cuando-cierre-narcosala-quedaremos-20111212.html>;
<http://www.abc.es/20111227/madrid/abcp-ultima-noche-narcosala-20111227.html>;
http://elpais.com/diario/2011/11/13/madrid/1321187059_850215.html.

presentada como la única opción que se tenía para poder encaminar a los gitanos hacia una modificación de hábitos. Así, esta política social era concebida abiertamente, al menos en esos discursos y documentos técnicos, como un instrumento de intervención social que permitía presionar a este colectivo a asumir cambios personales y sociales que había que procurar "por su bien". Lo que más me llamó la atención de la RMI es que revela una paradoja que es, a la vez, un dilema ético que no desconocen los profesionales más progresistas que la aplican, puesto que se convence a los gitanos para que participen en las actividades dirigidas a intervenir con ellos mediante la idea, no del todo cierta –como se verá–, de que pueden perder la prestación económica si no lo hacen, pero ello se justifica a ojos de esos profesionales sólo a costa de asumir acríticamente la bondad (tanto de intenciones como de resultados) de dicha intervención.

En los primeros meses de trabajo de campo etnográfico, del orientado al estudio de las pautas de comportamiento relacionadas con la salud, no cesé de escuchar frases, en boca de dichos profesionales, del tipo: “Ya se sabe que los gitanos vienen porque cobran la *remi*” o “No estarían aquí si no fuera por la paga”. De este modo, por un lado, todo apuntaba a que manejaban una imagen muy negativa del colectivo gitano basada en la creencia de que carecían de capacidad, motivación y autonomía y, por el otro lado, parecía que tenían la necesidad de trabajar con los gitanos en situación de exclusión social utilizando *la remi* como un medio para “educarlos” con relación a diferentes temáticas, como la planificación familiar, la higiene, la prevención del consumo de sustancias adictivas, las reglas de utilización de las instituciones públicas, la vacunación infantil, la gestión de la tarjeta sanitaria, etc.⁴ Por su parte, las personas de etnia gitana en contacto con esos profesionales hacían referencia a la RMI como un elemento que les llevaba a la toma de determinadas decisiones, lo que revelaban mediante frases como “Si no llevas a los niños al colegio, te quitan la paga” o “Mi trabajadora social me ha dicho que tengo que ir a la revisión anual si quiero seguir cobrando”⁵. La Renta Mínima, gran desconocida para mí, no dejaba de aparecer continuamente en cada uno de mis acercamientos al campo de estudio de la promoción de la salud. Es por ello por lo que, al cabo de ocho meses de trabajo de campo, consideré que sólo podía comprender la intervención socio-sanitaria que se estaba implementando si estudiaba en

⁴ En el documento mimeografiado titulado “Situación de los asentamientos marginales del área sanitaria 1”, producido por SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros (2006), encontramos un argumento bastante significativo de lo que se acaba de exponer: “en muchas ocasiones, se consiguen resultados utilizando el la RMI como medida de presión para mejorar la adherencia a los controles y seguimientos previstos”.

⁵ Han sido numerosos los casos encontrados de mujeres que expresaron que debían ir a la revisión ginecológica como parte del acuerdo con su trabajadora social de Servicios Sociales, afirmando que en caso de no hacerlo, su prestación económica estaría en peligro.

profundidad la Renta Mínima de Inserción, dado que ésta era el eje que daba sentido a la mayor parte de los dispositivos ideados para intervenir con los gitanos españoles residentes en Madrid que se encontraban en situación de exclusión social.

Igual que esta investigación marcó mi interés por la Renta Mínima de Inserción, también fue el origen de mi interés académico por el colectivo gitano. La minoría gitana es la minoría étnico-nacional más numerosa de España, siendo también una de las más estigmatizadas y que más rechazo genera en la población general⁶. Como colectivo-diana que ha sido recurrentemente de la intervención social, supone un caso bien paradigmático ya que permite analizar los dispositivos de gestión de la exclusión social cuando éstos atienden a una población que ha sido siempre caracterizada, al menos en España, como prototipo de la diversidad étnica y cultural. Además, se puede hablar de una peculiar relación del Estado y sus instituciones con el colectivo gitano que, ya desde el siglo XV, ha sido fundamentalmente represora, lo que hace que lo gitano se asocie comúnmente “con situaciones de conflictividad, peligrosidad y vagancia” (Fernández Torres, 2008: 148).

La aplicación de la RMI con esta población tiene que ver con una definición, por parte de los profesionales del ámbito de la intervención social, de lo gitano como problema; un problema que se ha construido en términos culturalistas y que ha sido magnificado, por ejemplo, por recientes actuaciones de los medios de comunicación que ha legitimado la expulsión de gitanos rumanos de varios países de Europa, y han sacado a la luz las actitudes xenófobas de buena parte de la población europea. Los debates surgidos en el panorama internacional a raíz de estas expulsiones han servido para poner en evidencia el marco ideológico en el que se desarrollan, además de estos fenómenos represivos, algunos otros relacionados –en lo que aquí interesa– con la Renta Mínima de Inserción que es objeto de estudio de esta tesis doctoral, dando sentido, por un lado, a ciertos conflictos subyacentes en las relaciones entre los profesionales que implementan esta prestación económica y los gitanos y, por otro, a las estrategias punitivas extremadamente duras que despliegan cuando aplican la RMI con ellos, coherentes con la "mano dura" que se está imponiendo a este respecto a escala internacional.

El interés que este panorama me suscitó me animó a orientar la investigación etnográfica destinada a realizar la tesis doctoral que ahora se presenta al análisis de la intervención social que tiene lugar cuando la RMI se implementa con el colectivo gitano en

⁶ Amnistía Internacional (2005, citado en Fernández Torres 2008: 151, nota a pie) destaca que los gitanos son el colectivo peor valorado socialmente, Cebrián (1992:15-18) recuerda varias investigaciones que corroboran el racismo de la población española hacia el colectivo gitano.

situación de exclusión social, prestando especial atención al quehacer de los trabajadores sociales (y otros profesionales) que la aplican y a las consecuencias de carácter socio-cultural que ese quehacer (y la RMI, en general) tiene sobre la población-diana.

Para ello, he llevado a cabo, en primer lugar, un recorrido histórico que busca enmarcar el surgimiento de las políticas sociales de rentas mínimas en el Estado Español y, en segundo lugar, una descripción de la Renta Mínima de Inserción tal como se ha estructurado en la Comunidad de Madrid (la RMI o *la remi*), sobre todo a partir de la Ley 15/2001 de 27 de diciembre y del Decreto 147/2002, de 1 de agosto, que regulan las nuevas funciones de los profesionales del trabajo social con relación a los solicitantes/beneficiarios de esta prestación económica, al igual que los derechos y obligaciones de unos y de otros. Así, en el capítulo 1, se presenta tanto dicho recorrido histórico como el estudio de esos textos legales que rigen la RMI, con la intención de reconstruir el contexto social, económico y legal de las estrategias que los trabajadores sociales despliegan en su aplicación de la misma con el colectivo gitano; analizándose a la par las distintas interpretaciones que hacen de la legislación relativa a la RMI, que –como se verá– dan cabida a estilos profesionales diversos y, en ocasiones, contradictorios.

En los capítulos 2, 3 y 4 se identifican las representaciones de los profesionales sobre el colectivo gitano, la exclusión social y los sujetos legítimos de la intervención social, al mismo tiempo que se reflexiona sobre la medida en que la RMI está cumpliendo el objetivo para el que fue pensada, esto es, para favorecer la inserción social de las personas que reciben la prestación económica y para promover la dignificación de sus vidas. Para ello, se analizan tanto los discursos de los profesionales que participan en su implementación como algunos informes, denominados "técnicos", elaborados por trabajadores sociales y socio-sanitarios de la Comunidad de Madrid, en los que, entre otras, se estigmatiza al colectivo gitano al recurrir a representaciones de éste, sin ni siquiera tratar de justificarlas, profundamente estereotipadas e, incluso, infamantes, como las que presentan la violencia de género como algo intrínseco al colectivo gitano o como las que parten, como si viniera de por sí, de que los padres gitanos no tienen interés en la mejora de las vidas de sus hijos; todo lo cual se interpreta como propio de la irresponsabilidad étnica, del “atraso” o de la escasa “evolución cultural” que ha experimentado el colectivo.

El cruce entre, por una parte, el objetivo de proteger a los ciudadanos que se encuentran en situación de exclusión social (que es el de la RMI), por otra, los dispositivos que se generan para alcanzarlo y, por último, las concepciones de etnicidad que se manejan en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas orientadas a ese objetivo sirve de

escenario para analizar cómo se construye técnica y académicamente la figura del “gitano excluido”, así como para reflexionar acerca de cómo se plantean, en este escenario, las cuestiones de ciudadanía (por ejemplo, a quiénes se considera ciudadanos a la hora de redistribuir los recursos y sobre la base de qué requisitos), de reconocimiento de los derechos sociales por parte del Estado (a quiénes se tiene por sujetos de derecho y en qué situaciones) y de justicia social (cuándo y en qué condiciones se justifica ideológica, política y socialmente que se apliquen medidas de discriminación positiva para ciertos ciudadanos que se catalogan como excluidos). Ello es trabajado principalmente en los capítulos 4 y 5, como se podrá ver más adelante.

La focalización de esta investigación sobre la RMI en el colectivo gitano permite reflexionar, así mismo, sobre la dificultad que entraña implementar algunas políticas con pretensiones de universalidad, es decir, que nacen con vocación de ser aplicadas del mismo modo a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos necesarios para ello y que no permiten un margen de flexibilidad y/o de adaptación suficientemente amplio para adaptarse a las características de colectivos socialmente estigmatizados y que cuentan con una historia de relación con la sociedad mayoritaria, en general, y con las instituciones sociales de ésta, en particular, que tiene un carácter marcadamente distintivo, como es el caso del colectivo gitano. Es por ello por lo que en esta tesis doctoral se dedican varios apartados (el apartado octavo del capítulo 2, el apartado tercero del capítulo 3, el segundo apartado del capítulo 4 y los apartados tercero y cuarto del capítulo 6) a estudiar los factores que obstaculizan que los profesionales que trabajan en el ámbito de la RMI puedan desarrollar con los gitanos (en este caso, con los gitanos españoles) una intervención social mutuamente satisfactoria. Para entender lo que a ese respecto se dirá en las páginas que siguen, hay que advertir que lo que se denomina “etnicidad gitana” o “colectivo gitano” es considerado en todo momento como una categoría social creada por los propios dispositivos que se encargan de gestionar la pobreza (Sassier, 2008: 102), aquí los de la RMI, sin que se pretenda con ello negarle la existencia de una “identidad propia” (Cebrián, 1992: 15), sino únicamente explicitar la razón por la que esta tesis doctoral se ocupará no del análisis de ésta, sino de los mecanismos políticos relacionados con la prestación económica que producen representaciones de “lo gitano” ante las cuales los solicitantes/beneficiarios de la RMI han de contestar cuando son interpelados a partir de ellas.

La RMI no se aborda aquí, por tanto, sólo como una política de protección social, sino teniendo en cuenta también los efectos de estigmatización que generan sus procedimientos y dispositivos de acción con la población excluida que se considera que forma parte de la minoría gitana. De este modo, se estudian igualmente (esta vez en los capítulos 6 y 7) las

experiencias de los gitanos solicitantes/ beneficiarios de la RMI y los discursos que elaboran sobre sí mismos, precisamente a partir de sus relaciones con los Servicios Sociales y los profesionales de la red de intervención social madrileña; y se presentan las actividades que tienen en las ONG o entidades de iniciativa social en las que es común que participen los gitanos beneficiarios de la RMI como contraprestación al cobro de esta prestación.

Los sujetos *excluidos y/o asistidos* (aquí los gitanos), que se van conformando como tales en sus relaciones con las instituciones que se ocupan de las ayudas sociales y a través de su condición de receptores de las mismas, van construyendo subjetividades coherentes con los modos institucionales y sociales de entender, definir y gestionar, en este caso, la Renta Mínima de Inserción. Con relación a ello, en los capítulos 5 y 6, se presentan casos etnográficos paradigmáticos en los que los gitanos solicitantes/beneficiarios de esta prestación económica se ven confrontados con largos itinerarios de inserción social (de “activación”) que se les ofrece desde las instituciones sociales competentes y, a través de los cuales, aprenden el uso de ciertas categorías de beneficiarios legítimos (como la de “pobre” o la de “mujer maltratada”) que se están manejando en ellas y, en general, en el ámbito de la intervención social. Relacionado con ello, también se exponen –en los capítulos 6 y 7– los comportamientos que adoptan los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI así como las estrategias de adaptación que despliegan ante las diferentes situaciones a las que se ven confrontados por el hecho de recibir la prestación económica.

La RMI de la Comunidad de Madrid es también analizada como una herramienta que permite, a la Administración Pública, establecer un vínculo con una población, la gitana, que de otro modo estaría al margen de la gestión institucional del Estado⁷. Es, por tanto, una “tecnología política” (Agudo, 2009: 64) que establece un puente entre distintos actores sociales presentes en la arena socio-política madrileña, en la que algunos de ellos (en especial, los profesionales del trabajo social) buscan intervenir en la vida de “los “otros” excluidos, definidos generalmente a partir de variables étnicas y culturales. En este sentido, en los capítulos 1 y 2, se enumeran y describen algunos de los cambios acaecidos en el ámbito del trabajo social, sobre todo los que apuntan a su tecnificación, que están derivando el quehacer de los profesionales de Servicios Sociales hacia “la gestión de recursos” (Zamanillo, 2011) y diluyendo todo lo relacionado con lo que, en este ámbito, se denomina “acompañamiento social”. De hecho, esta función de “acompañamiento social”, que ha formado parte tradicionalmente del trabajo social comunitario, ha sido externalizada hoy en día al

⁷ Ver más adelante, en la nota a pie 149, por qué hablo de “Estado” a pesar de que las rentas mínimas estén a cargo de las comunidades autónomas en el caso de España.

subcontratarse para su puesta en práctica a entidades de iniciativa social. La subcontratación de funciones, como las de acompañamiento o de seguimiento continuado a las familias beneficiarias de la RMI, pasa a ser uno de los factores que dificultan el desarrollo cabal de esta política social; tema al que también se dedica un espacio en esta tesis doctoral, en particular los apartados tercero y séptimo del capítulo 2. Entre esos factores se encuentran, por ejemplo, la ambigua redacción de la ley y de su decreto regulador, la complejidad de su gestión debido al reparto de funciones entre instituciones diferentes y la no-clarificación de la jerarquía existente entre ellas, así como la fragmentación de la estructura de la intervención social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

La Renta Mínima de Inserción, una prestación económica destinada a garantizar un mínimo de ingresos a las personas consideradas en situación de exclusión social, sirve aquí como núcleo organizador de un análisis socio-antropológico de una política pública⁸. A través del estudio de la lógica que subyace a esta política y de la intervención profesional ligada a ella, se puede indagar acerca de cuestiones como las formas institucionales de gestionar la vulnerabilidad, los conceptos y la retórica que emanan de los programas de intervención social, las definiciones étnicas y morales que producen las instituciones y sus trabajadores “expertos”, las formas de protección social y la generación de categorías de ciudadanía que emanan de la estructura normativa de una determinada política social. En última instancia, se trata de abordarla como a un espejo que, al mirarlo, nos devuelve como imagen los fundamentos mismos de la sociedad, sus modos de regulación y las estrategias que se despliegan para alcanzar la “integración social” de sus miembros. Por ello es por lo que algunas de las preguntas que nos hemos hecho con relación a esta temática son las que se exponen a continuación; exposición con las que damos por finalizada esta Introducción de la tesis doctoral que después se presenta. Dichas preguntas son:

- ¿Qué categorías de sujeto excluido legitiman los Servicios Sociales y sus trabajadores?
- ¿Qué derechos y obligaciones tiene el sujeto excluido y ante quién los puede reclamar?
- ¿Qué roles diferenciados ocupan los trabajadores sociales y los educadores sociales en su relación con los sujetos excluidos?

⁸ Agudo (2009: 63) señala que las obras recientes de antropología política discuten procesos de formación del Estado, globalización y cambio cultural, pero no suelen abordar la cuestión de las políticas públicas a pesar de su significativa vinculación con dichos procesos.

- ¿Existen distintas interpretaciones y/o aplicaciones de la ley de la RMI por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales y de los profesionales de ONG?
- ¿Hay interpretaciones y/o aplicaciones de la ley de la RMI divergentes por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales y de los profesionales de ONG?
- ¿El reglamento de la RMI tiene en cuenta acciones de discriminación positiva para poblaciones culturalmente diferenciadas?
- ¿Cómo se negocia la firma del contrato de inserción (ahora llamado Programa Individual de Inserción)?
- ¿Es la RMI una prestación económica legitimada por los profesionales que la aplican y, en tal caso, cómo la legitiman o la deslegitiman?
- ¿Qué noción de dependencia/autonomía manejan los trabajadores sociales?, ¿afecta ésta a la manera de gestionar la RMI con la población gitana española?
- ¿El hecho de ser aplicada a gitanos españoles cambia el contenido y la forma de aplicación de la RMI?
- ¿Categorías supuestamente técnicas, como las de “colectivo excluido” o “colectivo gitano”, están invisibilizando las diferencias internas dentro de estas poblaciones?
- Y, finalmente, ¿qué representaciones sociales sobre la población gitana manejan los diferentes profesionales?

0.2 Estado de la cuestión

0.2.1 Los estudios sobre las rentas mínimas en Francia y España

Las rentas mínimas son prestaciones económicas concebidas para que ningún ciudadano se quede sin nada para vivir y marcan un nivel mínimo de protección social (Milano, 1990). Se trata, por tanto, de los recursos a los que pueden acudir individuos y familias cuando carecen de otras fuentes de ingresos y/o protección, por lo que constituyen la ‘última red’ de protección social (Arriba y Pérez, 2007) o, en términos de otros autores, son “las políticas destinadas al ‘último eslabón’ social” (González Temprano, 2003). Al hablarse de ‘última red’ de protección se hace alusión a una serie de dispositivos que se caracterizan por ofrecer unos ingresos mínimos a los que se accede mediante la demostración de

insuficiencia de recursos económicos y que, en ocasiones, van acompañados de la posibilidad/obligación de participar en diversas actividades y servicios. En algunos de los programas de rentas mínimas se regulan mecanismos de financiación para los programas y los proyectos orientados a la inserción (servicios sociales, educación y formación, empleo y cooperación) de la población beneficiaria de la RMI, que son llevados a cabo –en la mayoría de los casos– por entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, suponiendo una colaboración entre los sectores público y privado (Arriba y Pérez, 2007: 117, 123).

Las cuestiones relacionadas con las rentas mínimas de inserción han sido objeto en Francia de un importante número de investigaciones realizadas desde las ciencias sociales. Así, en el ámbito de la sociología y, en concreto, en lo que se refiere al análisis de las políticas públicas, existe –desde los años 80– una fuerte tradición de reflexión y de evaluación de los dispositivos políticos y administrativos a nivel estatal (Thoenig, 1985; Lafore, 1989, 1989a, 1991; Laborde y Lafore, 1991). En particular sobre la RMI, hay trabajos en los que se comparan diferentes experiencias de implantación de las rentas mínimas a nivel europeo desde finales de los 90 (Euzeby, 1989). Así, autores como Paugam (1993) han estudiado la Renta Mínima de Inserción con relación a las distintas políticas diseñadas por el Estado francés para luchar contra la pobreza. De hecho, Paugam (1993) describe estas políticas tal como se desarrollan en las décadas de los 80-90, y hace hincapié tanto en el tratamiento discursivo-político de la pobreza como en los efectos que la RMI tiene sobre quienes la reciben a raíz de la promulgación, en 1988, de la ley francesa que la regula. Estudia, además, la polisemia que caracterizó la noción de inserción en los debates previos a la creación de esta ley, estableciendo además, a través de una encuesta, una tipología de “remistas” (personas que cobran la RMI o beneficiarios de la misma) a tenor de sus experiencias en cuanto a la integración laboral y a la intensidad de sus vínculos sociales. Por su parte, Castel y Laé (1992) llevan a cabo un análisis sociológico de la forma en que se está aplicando la RMI en Francia y se centran en explicitar las perspectivas de los principales actores que han estado implicados en la implantación de esta política social, entre ellos, los responsables políticos y administrativos, los sociólogos que han estado encargados de la evaluación y los “técnicos” que la aplican sobre el terreno. Estos autores se preguntan sobre aspectos de la RMI que aún hoy son considerados centrales, como el que apunta a si es un salario social que abre la posibilidad de financiar actividades que caen fuera del ámbito productivo o, por el contrario, es una prestación de supervivencia para las personas que han sido dejadas atrás por la modernidad.

A principios de los años 90 empiezan a producirse, también en Francia, diversos informes sobre la RMI debidos a las Comisiones Nacionales de Evaluación (CERC, 1991; MIRE, 1991; CERC, 1997; Commissariat Général du Plan, 1998), en los que se hace referencia a la dificultad que esta política social tiene para insertar a sus beneficiarios, a la vez que aparecen otros análisis acerca de los efectos de la misma (Viveret, 1989; Nicole-Drancourt, 1991; Zoyem, 1999, 2002; Perret, 2001). Se da comienzo, de este modo, a una serie de evaluaciones del proceso de implantación de la RMI⁹, entre ellas la realizada por Valerenberghe (1992), quien equipara la intervención social con beneficiarios de la RMI con “el desafío de la inserción” dado que, según indica, la inserción laboral a la que éstos pueden aspirar es tan endeble que muchos prefieren permanecer cobrando la prestación económica a dicha inserción. En la misma línea, Dubet y Véréttout (2001) publican un artículo en el que aluden al “enquistamiento” de algunos beneficiarios en el cobro de esta prestación y buscan dar cuenta de la racionalidad que hay detrás de algunas de sus decisiones a este respecto, como la de no buscar empleo.

A partir de 1997, con estudios como el de Astier (1997, 1998) o el de Astier y Duvoux (2006), el análisis de la RMI adquiere otro cariz, enfocándose hacia cuestiones relativas a la forma que toman las peticiones de ayuda de los solicitantes de la RMI o, dicho con otras palabras, a la manera en que los pobres narran su situación de pobreza ante las distintas instituciones públicas y la relación que ello tiene con la valoración a la que son sometidos por parte de los organismos encargados de aprobar su concesión. Se abre una línea de investigación sociológica y socio-antropológica que profundiza en temáticas como el respeto (/no-respeto) de la intimidad de los beneficiarios o como la gestión profesional de la inserción social, que se relaciona con la moralización de la que son objeto las personas excluidas que han de recurrir a los procedimientos burocráticos vinculados a esta política social. Dentro de esta corriente de pensamiento, podemos incluir trabajos como el de Fassin (2000) o el de Memmi y Fassin (2004), en los que se da cuenta de las denominadas “estrategias discursivas de súplica” de los demandantes de ayudas sociales. Bajo la mirada de la “sociología de los lugares de escucha”, varios autores (Fassin, Aïach, Boulenger, Bretin, Cèbe, Kessar, Klinberg y Philippe, 2004) se aproximan a los usuarios de la RMI –y de otros dispositivos de intervención social– fijándose en los modos a través de los cuales las distintas instituciones públicas se acercan a las personas que sufren o, dicho en otros términos, prestando atención a las formas de gobierno que se tejen a través de los distintos dispositivos “de la escucha” que

⁹ En la página web <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr> se pueden encontrar varios informes de evaluación de la RMI y de las políticas que la suceden (RMA y RSA).

han sido diseñados para los excluidos (Fassin, 2004b: 9). Ponen énfasis, así, en las diversas modalidades de fragilidad, marginalidad o descalificación que son aprehendidas a través de las prácticas gubernamentales y/o institucionales.

Ya a finales de los 90, tienen lugar una serie de estudios que enfatizan todo lo que atañe a las relaciones de dominación que sufren los demandantes de prestaciones sociales (entre ellas, la RMI) cuando entran en contacto con los dispositivos que las diferentes organizaciones encargadas de ello destinan a recibirlos. Uno de los precursores de esta otra manera de acercarse al tema es Dubois (1999), quien reflexiona sobre el proceso de victimización de los usuarios de la RMI cuando han de plegarse a la forma de disciplina que les imponen estos organismos. La obra de Weller (1999) puede ser considerada como complementaria a la de Dubois, puesto que se ocupa de las transformaciones que han sufrido las instituciones públicas –entre ellas los Servicios Sociales– a raíz de la inclusión de la lógica de servicio a los usuarios como parte de su modo de funcionamiento. Por su parte, Moulière, Rivard y Thalineau (1999) estudian los procesos de culpabilización a los que son sometidos los perceptores de la RMI y la dificultad que éstos tienen para satisfacer las expectativas de los distintos profesionales; y Dubois y Dulong (2003) prosiguen esta línea de investigación al profundizar en aspectos relativos al control social de los beneficiarios de prestaciones sociales.

Los estudios se van interesando, de este modo, cada vez más por conocer y dar cuenta de la subjetividad que se va produciendo a raíz del contacto de los solicitantes/beneficiarios de la RMI con los servicios públicos que la gestionan. De Gaulejac y Taboada-Leonetti, por ejemplo, a partir de una investigación ligada a una evaluación de la RMI (De Gaulejac y Taboada-Leonetti, 1994; Gaulejac, 1996), reflexionan sobre aquellos beneficiarios que sienten vergüenza de encontrarse en la situación de tener que depender de ayudas sociales, abriendo una vía de análisis a través de historias de vida que se centra en los destinos individuales de quienes reciben prestaciones sociales instauradas en el sistema de protección del Estado. Estos autores muestran que hay una serie de “rupturas” que producen el “desenganche” de los sujetos de la vida social, y originan diferentes reacciones en ellos, que van desde las estrategias de resistencia y las de adaptación hasta las que califica de estrategias de instalación, consistentes esta últimas en combinar la percepción de la RMI con ingresos provenientes de la economía informal o bien en recibir paralelamente otras ayudas sociales, lo cual desincentiva la participación en actividades dirigidas a la inserción laboral y, por consiguiente, –según se sostiene– también social.

Algo más tarde aparece otra tendencia de análisis (Paugam, 2007, 2007b; Duvoux, 2007; Duvoux, 2009) que se ocupa de los aspectos de la RMI relativos a “la contractualización”, es decir, a la forma en que, a través de ella, se insta a los solicitantes de la misma a que firmen o se comprometan a realizar ciertas actividades que se incluyen en un contrato de inserción. A través de esta corriente teórica, calificada por Duvoux (2009) de “sociología de las políticas de inserción”, estos autores enfatizan cuestiones como la individualización de los problemas sociales que tiene lugar a través de las políticas sociales semejantes a la RMI o como el peligro que supone para los excluidos la “conminación a la autonomía”, que tiene lugar a través de instrumentos como el mencionado contrato de inserción. Por su parte, Bessin, Bory, Cardí, Herman, Murard y Steinauer (2009) se centran en analizar las consecuencias de género de dicha interpelación a la autonomía procedente de la intervención social, y otros investigadores hacen hincapié en la psicologización que se produce alrededor de las políticas de inserción (Vrancken y Macquete, 2006). Entre este conjunto de estudios, se puede situar el de Murard (2003), que trata de la subjetividad de las personas que entran en contacto con las instituciones de beneficencia social; el de Astier (1995), sobre los relatos biográficos que estas instituciones incentivan; así como una serie de recopilaciones, correspondientes a la misma época, que buscan dar cabida al abordaje de las tácticas y estrategias de esas mismas personas¹⁰ (Châtel y Soulet, 2002; Bessin y Roulleau-Berger, 2002; Dubois, 2003). Y, en lo que se refiere al panorama francés o de habla francesa, hay que hacer referencia, por último, a los trabajos sociológicos y/o filosóficos que analizan los dilemas de la aplicación del trabajo social en tanto que trabajo de proximidad y/o cercanía (Donzelot, 1977; Verdès-Leroux, 1978; Chopart, 2000; Avenel, 2002, 2003; Breviglieri, Pattaroni y Stavo-Debaugé, 2004; Bessin, 2005; Ion, 2005; Laugier y Paperman, 2005; Pattaroni, 2007).

Se han traído aquí a colación los diversos estudios relacionados con la aplicación de la RMI en Francia debido a que, como se verá en el Capítulo 1:, esta implantación y los debates que llevaron hasta ella han servido de espejo a las distintas Comunidades Autónomas españolas para diseñar sus políticas de rentas mínimas. Además, la amplitud, profundidad y larga tradición de los estudios franceses en torno a cuestiones relacionadas con la Renta Mínima de Inserción contrastan con la escasez de los existentes en el contexto español y con la menguada diversidad que presentan los enfoques desplegados en ellos.

¹⁰ El número 7 (2003) de la revista *Pyramides* se titula “Relation de service et secteur public”, consagrándose así al análisis de la relación entre los “usuarios” o “clientes” y los servicios públicos a los que acuden.

En este panorama de falta de estudios y de debates en España sobre los programas de rentas mínimas, la iniciativa de comenzar a trabajar en esta dirección, cuando se ha tomado, ha ido a menudo de la mano de Cáritas Española. Así, en 1989, momento histórico en el que se discutía, en distintas Comunidades Autónomas, la creación de programas de rentas mínimas, Cáritas elaboró –de la mano de Aparicio, Fernández, García Nieto, Rojo y Salinas (1989)– un dossier titulado *Renta mínima y salario ciudadano*, en el que se recogían las distintas experiencias europeas a este respecto, así como algunas discusiones internacionales en torno a esta cuestión, para después analizar la experiencia del País Vasco, primera Comunidad Autónoma en la que se implantó un programa de rentas mínimas.

Los distintos gobiernos autonómicos han sido promotores de informes sobre sus programas, aunque con distinta intensidad y haciendo referencia a información muy dispar. Hay que reseñar la precocidad de los promovidos por el gobierno vasco, que realizó el primer *Balance del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza* en el año 1991, en donde ya eran estudiados los perfiles de los beneficiarios del llamado Ingreso Mínimo Familiar (IMI) vasco y los motivos por los que entraron en contacto con los Servicios Sociales. En la misma Comunidad, el Departamento de Trabajo y Seguridad Social evaluó el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi (1988-1992) y produjo, en 1993, una obra titulada *La inserción, a debate*, en la que se ponía en relación la política de inserción vasca con los dispositivos que habían sido creados en Francia con el mismo objetivo, ilustrando así el profundo vínculo que existía entre los textos franceses y la creación de programas de esta índole a nivel del Estado Español. Se puede decir –por otro lado– que, además de Cáritas, eran ya las Comunidades Autónomas las que lideraban el proceso de debate, implantación y evaluación de los programas de rentas mínimas.

Se publican entonces, es decir, a finales de los 80 y principios de los 90, algunas obras en las que se aborda el problema de la pobreza y la desigualdad, algunas de las cuales recomiendan el desarrollo de políticas de rentas mínimas. EDIS-CARITAS (1989) es la responsable de un libro, titulado *Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid*, en el que se enfatiza la insuficiencia de las políticas estatales en materia de pobreza. Y la Comunidad de Madrid presenta, en 1990, una serie monográfica sobre el Ingreso Madrileño de Integración –IMI– (Comunidad de Madrid, 1990)¹¹ que, en 1993, se completa con la primera evaluación del mismo, elaborada por Aguilar, Gaviria y Laparra.

¹¹ Vol. I: “El Programa de Ingreso Madrileño de Integración”. Vol. II: “La Integración”. Vol.III: “La exclusión”. Vol. IV: “Los excluidos y la protección social”. Vol. V: “La exclusión y la vivienda”. Consejería de Integración social.

Esta Comunidad implanta el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en 2002, es decir, más de una década después que el País Vasco. Como paso previo al Plan, se realiza una serie de estudios de base para comparar la implantación del IMI, programa predecesor de la actual RMI que entró en vigor en 1990, con la implantación de esta última (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003: 21-50). Se compila una obra que reúne las distintas investigaciones y que, entre otras cosas, reflexiona sobre las dificultades de realizar un trabajo de intervención centrado en los apoyos sociales (“acompañamiento social”) con los beneficiarios de la RMI desde los Servicios Sociales (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003b: 83-118).

El primer estudio que, a nivel general, analiza y evalúa las características de los programas de rentas mínimas en España fue efectuado por la Universidad Pública de Navarra en 1995, redactado por Aguilar, Gaviria y Laparra y financiado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). En él, se comparan los requisitos y coberturas existentes en las distintas Comunidades, así como el tipo de beneficiarios que accede a este tipo de programas sociales, y se introducen los problemas y conflictos ligados a la práctica profesional del trabajo social en este ámbito. El estudio destaca asimismo que únicamente tres Comunidades Autónomas, es decir, una mínima parte de ellas, han evaluado sus programas de rentas mínimas; y en la misma línea se pronuncia Arriba (1999), quien se hace eco al mismo tiempo de la complejidad que entraña la tarea de comparar la implantación de los distintos programas a nivel nacional debido a la diversidad y dispersión de los datos producidos por cada Comunidad Autónoma.

En el ámbito de las ciencias económicas, y desde mediados de los años 90, también se han realizado estudios comparativos sobre las rentas mínimas. Así, Ayala Cañón (1997) realizó, en su tesis doctoral, un análisis económico de los sistemas de rentas mínimas en España y, en trabajos posteriores, ha examinado los efectos de la distribución de la renta que este tipo de programas supone a nivel europeo (Ayala Cañón, 1994, 1994a, 2000, 2007). Se da inicio con ello a una línea de estudios sobre el Estado de Bienestar auspiciados por el Consejo Económico y Social, que se centran en estudiar la consolidación de este modelo general de organización social a través del análisis del gasto que la Administración, tanto central como autonómica, dedicada a la protección social (Cabases y Monserrat, 1990; González Temprano, Centella, López y Torres, 2003). La Fundación Ramón Areces y la Fundación Luis Vives han contribuido a consolidar el análisis económico de las políticas del Estado destinadas a luchar contra la exclusión social, financiando trabajos como el de Gimeno (2004), que se ha enfocado a medir el efecto compensador de las políticas redistributivas del Estado de Bienestar con respecto a las desigualdades de rentas existentes.

En el ámbito de la sociología, hay también una línea de investigaciones que, desde finales de los 90, se ocupa de las instituciones y de las políticas sociales desde una perspectiva comparada, incluidas las políticas de rentas mínimas de inserción. Muchos de estos trabajos han sido efectuados por sociólogos que forman parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas (del antiguo Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA, o del moderno Instituto de Políticas y Bienes Público, IPP) o que colaboran en proyectos de investigación con él¹². Es cierto que algunos, como el de Moreno y Pérez Yruela (1992), auspiciado por el Ministerio de Asuntos Sociales, se llevaron a cabo en la primera mitad de los 90, pero la mayoría de ellos se han emprendido en los últimos años de esta década. En la obra de Moreno (2001) *Pobreza y exclusión: “la malla de seguridad” en España*, se recogen los planteamientos de diversos científicos sociales sobre los sistemas de protección social del Estado de Bienestar como “última malla” de protección para hacer frente a la pobreza y exclusión social. Arriba (2001) dedica, en esta compilación, dos capítulos a las rentas mínimas: uno a los procesos de implantación de estas políticas en España y otro a las características del Ingreso Madrileño de Integración¹³. En cuanto a los estudios de Aguilar, Gaviria y Laparra (1995, 1995a, 1996, 2004), pueden ser ubicados asimismo dentro de esta corriente de análisis de las políticas de protección social del Estado de Bienestar.

Por último, el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales (GETS), del departamento de Sociología III de la UNED, ha coordinado y publicado obras como la de Tezanos (2004), en las cuales se hace una recopilación de trabajos sobre las políticas que atañen a la exclusión social, con especial énfasis en las condiciones de vida de la población excluida y en las dificultades que ésta experimenta a la hora de acceder a diferentes recursos, como la vivienda o la educación, por ejemplo¹⁴. En cuanto a las aportaciones hechas desde el trabajo social, cabe destacar un reciente artículo de Martín Giner (2007) en el que esta autora analiza las contradicciones e incertidumbres de la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, principalmente en lo que se refiere a las dinámicas de control que surgen en el desarrollo del trabajo social de Servicios Sociales vinculado a esta política. Y Molleda, por otra parte, trata

¹² La obra de Moreno (2001) que se citará después es el resultado de la financiación de la CICYT (Comisión Interdisciplinar de Ciencia y Tecnología), durante el período 1997-2000, del proyecto: “Exclusión e integración en el Estado de Bienestar: La ‘última red’ de protección social en España”, en el que han colaborado investigadores del CSIC, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Salamanca.

¹³ La tesis doctoral de Ana Arriba fue presentada en 1999 en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. En ella, la autora presentaba un análisis comparado de los procesos de implantación, a nivel nacional, de los programas de rentas mínimas. Desde entonces, no ha dejado de escribir acerca de estas políticas, contando en su haber numerosas publicaciones al respecto (1998, 1999, 2002, 2002a, 2007).

¹⁴ Esta obra recoge las propuestas recogidas en el Foro sobre tendencias sociales que organiza el grupo GETS desde 1998.

en dos de sus obras (2007, 2008) algunos de los dilemas éticos a los que se enfrentan los trabajadores sociales en su aplicación de la RMI.

A la par que los estudios sobre las políticas de rentas mínimas, han surgido en España, aunque no en el seno de una sola disciplina social, una serie de obras que debaten sobre la llamada renta básica o salario ciudadano (Iglesias, 1998; Espada, 1999; Iglesias, Busqueta y Sáez, 2001; Raventós, 2001; Antón, 2003; Carro, 2003; Pisarello y de Cabo, 2006; Casassas y Raventós, 2011), que se ha concebido fuera del marco de la protección social vinculada al trabajo asalariado y ha sido defendida por asociaciones sindicales y colectivos de izquierdas.

En todo caso, si algo se puede extraer de este rápido y breve recorrido por los estudios realizados sobre políticas sociales como la renta mínima de inserción, es la casi total ausencia de los mismos en la antropología social española, aspecto ya señalado por autores como Agudo (2009) en lo que se refiere a la antropología social en general. Así, no se ha abordado la RMI desde la antropología política, para poner un caso, a pesar de su vinculación con procesos de formación y consolidación del Estado o de su relación con la aplicación de determinados derechos sociales. Se puede decir, por tanto, que el campo de lo que el autor antes citado llama antropología de las políticas públicas (Agudo, 2009: 64-65) no está consolidado dentro de la disciplina. De este modo, en lo que atañe, por ejemplo, a los países de habla hispana, en España –como se ha dicho– hay escasas contribuciones en esta línea que se refieran a la RMI, ya se contabilicen atendiendo a los estudios realizados por antropólogos (Ayala Rubio, 2009; Ayala Rubio y García García, 2009) o por sociólogos que adoptan perspectivas teórico-metodológicas muy cercanas a la antropología social (Serrano y Arriba, 1998). Y, en cuanto a Latinoamérica, sólo recientemente se están haciendo contribuciones relativamente numerosas a este campo de estudios (Escobar y González de la Rocha, 2000; Escobar y González de la Rocha, 2004; Villatoro, 2004; Agudo, 2006; 2008, 2009; González de la Rocha, 2006, 2006a; Levy, Santiago y Evelyne, 2005; López y Salles, 2006; Molyneux, 2006).

0.2.2 Apuntes sobre otros estudios y otras cuestiones relacionadas con éste

Fuera del marco de las políticas sociales, sí han sido trabajadas desde la antropología otras cuestiones que guardan relación con la temática de esta tesis doctoral, como las relativas a la exclusión social, que se han enfocado, además, desde diferentes perspectivas teóricas. Así, hay que señalar, por ejemplo, las aportaciones que han buscado enriquecer las nociones

de pobreza (Monreal, 1996, 1999; Martínez Veiga, 1999), de cultura de la pobreza (Monreal, 1999) o de marginación (San Román, 1991; Romaní, 1992; 1996).

En cuanto al estudio de la comunidad gitana, las ciencias sociales han sido bastante prolíficas, teniendo la antropología social un importante papel en ello. En este sentido, San Román (1976, 1984, 1986, 1987, 1997, 1999, 2010, 2010a) posee una larga trayectoria investigadora acerca de las condiciones de vida y estrategias socio-culturales de los gitanos españoles. Montoya (1987) realiza un acercamiento socio-antropológico a la comunidad gitana. Y Gamella (1996), en un ambicioso trabajo, trata de abarcar una amplia gama de aspectos de la vida social de los gitanos andaluces e incluir también en su descripción las representaciones de diferentes profesionales en contacto con el colectivo; concentrándose más tarde (Gamella, 2000) en la exclusión social del mismo que se deriva de su pertenencia étnica. Por su parte, Ardèvol (1987, 1988, con Llinás, 1988, y con Pérez-Tolón, 1991) ha realizado trabajo de campo entre la comunidad gitana de Granada, principalmente en los ámbitos de la antropología visual y la antropología urbana. Por otro lado, en el departamento de Antropología Social de la Complutense, se han presentado al menos dos tesis doctorales que se ocupan de diversos temas relacionados con la comunidad gitana (Giménez Adelantado, 1994; Sama, 2009). Y, desde la Universidad de Sevilla, Cantón (1999, 2004, 2007) y Cantón y Mena (2004) concentran su mirada en las prácticas de los gitanos pentecostales en Andalucía. En el campo de la antropología médica, diversos estudios (Laguna, 2000; Otegui, 2002; Ramírez Hita, 2003; Salud y Comunidad Gitana, 2004; EDIS, 2005; Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villaamil y otros, 2008; Abad, Garrido, Abéjar, Chacón y García, 2008) han abordado aspectos relativos a la salud de los gitanos. Así, por ejemplo, en 2002, Otegui realiza una investigación cualitativa sobre los conocimientos, actitudes y comportamientos del colectivo gitano relacionados con la transmisión del VIH-SIDA. Ramírez Hita defiende, en 2003, una tesis doctoral en la que se propone articular los diferentes modelos médicos manejados por este colectivo, y analiza la manera en que distintos gitanos dan sentido a sus padecimientos, a la vez que la relación entre las representaciones de éstos y las políticas sociales francesas. En 2008, Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villaamil y otros, a partir del estudio mencionado en la Introducción, realizan una aproximación a las prácticas de cuidado de la salud de la comunidad gitana madrileña. Y, por su parte, Berna (2010) centra su investigación en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad dentro del colectivo gitano. En lo que atañe a las relaciones de la comunidad gitana con la educación o, en particular, con el sistema educativo español, se cuenta con trabajos como los de Abajo y Carrasco sobre el

éxito escolar del alumnado gitano (2004), así como con los de Abajo (1997), Giménez Adelantado (2001; 2003; 2003a, 2008), García Pastor (2009) o Sama (2001; 2009).

Se han realizado en los últimos años varios estudios sectoriales y/o informes “técnicos” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006; ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006; o ACCEM, Fundación Secretariado General Gitano, 2010) que han buscado sobre todo diagnosticar los problemas de la intervención social en asentamientos chabolistas o en zonas como la Cañada Real Galiana de Madrid. Y desde distintas instituciones públicas (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación, principalmente), también se han apoyado financieramente investigaciones sociales sobre la comunidad gitana, como las llevadas a cabo por Laparra (2007), García Serrano, Marbán Gallego y Rodríguez Cabrero (2009) o Grañeras y Parras, (2010).

En el ámbito de las asociaciones o entidades de iniciativa social, no se puede dejar de mencionar a la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG), ya que a través de sus publicaciones periódicas y de los estudios que elabora y/o financia, está siendo una importante propulsora de la divulgación del conocimiento relativo a la comunidad gitana. De igual modo hay que hacer referencia, por último, a las jornadas que organiza la Asociación de Enseñantes de Gitanos, que son un foro de encuentro profesional en el que se debaten y reflexionan cuestiones contemporáneas de gran interés sobre la educación gitana.

En este Estado de la Cuestión se ha presentado, de forma breve y esquemática, una panorámica general de los estudios que se han llevado a cabo –sobre todo en España– sobre la RMI, sobre otras temáticas que son tratadas en la tesis doctoral que aquí se presenta, así como sobre el colectivo, en este caso el gitano, al que esas temáticas se refieren. Se ha optado por la brevedad a la hora de elaborar este apartado dado que, en los capítulos que se presentan más adelante, se aborda de forma más detenida las contribuciones que realizan dichos estudios, en particular los que se ocupan específicamente de la RMI, puesto que sus aportaciones teóricas han informado el análisis de los datos recopilados acerca de la manera en que esta política social es aplicada con el colectivo gitano, y sus aportaciones empíricas han permitido, en muchos casos, hacer comparaciones relevantes a este respecto. Todo ello, como se ha dicho, se muestra más adelante.

0.3 Metodología

El presente trabajo se ha basado en el desarrollo de una metodología de investigación etnográfica, para la cual se ha acudido principalmente a la observación participante

prolongada en distintos espacios de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con la implementación de la RMI (sobre todo en asentamientos chabolistas, en instituciones públicas y en proyectos educativos dirigidos a población gitana beneficiaria de esta prestación económica), a la realización de entrevistas en profundidad a profesionales de la intervención social y a personas de etnia gitana solicitantes y/o perceptores de la Renta Mínima de Inserción, así como a la consulta/análisis de diferentes documentos (legislativos, informes de evaluación, etc.) relacionados con la misma

0.3.1 Trabajo de campo

0.3.1.1 Las fases del trabajo de campo

El trabajo de campo fue llevado a cabo en distintas fases, que se detallan a continuación:

- **Primera fase:**
 - En mayo de 2006, emprendí la fase de acercamiento a diferentes asentamientos chabolistas en los que residían miembros del colectivo gitano (como El Cañaveral, Santa Catalina y Cañada Real¹⁵).
 - De mayo a junio de 2006, mantuve reuniones con representantes de distintos organismos públicos y ONG que trabajaban con población gitana beneficiaria de la RMI, de cara a solicitar apoyo para contactar a posibles informantes de etnia gitana y acceso a otros asentamientos.
 - De junio de 2006 a febrero de 2007, llevé a cabo observación participante en asentamientos chabolistas, en talleres de formación de perceptores gitanos de la RMI, entrevistas a gitanos y a profesionales, así como acompañamiento a algunos de los primeros a consultas médicas.
- **Segunda fase:**
 - De julio de 2007 a agosto de 2008, realicé observación participante en talleres de la RMI, entrevistas a gitanos beneficiarios de la RMI y a profesionales del ámbito de la intervención social.
- **Tercera fase:**
 - De mayo a agosto de 2010: culminé las últimas entrevistas a solicitantes/beneficiarios de la RMI gitanos, acompañé a una beneficiaria de la RMI durante todo el proceso de solicitud de una vivienda de protección oficial y efectué una entrevista grupal a educadores sociales.

¹⁵ Las zonas en las que realizó el trabajo de campo se describen en detalle en la sección 0.3.2.

0.3.1.2 El acceso al campo

La gestión del acceso al campo se inició durante la realización de la ya mencionada investigación realizada para el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (ver p.1). Durante ese tiempo se establecieron una serie de contactos que sirvieron de base para la elaboración de esta tesis doctoral. Uno de nuestros objetivos era hacer observación participante en distintos asentamientos chabolistas, así como en los proyectos educativos – principalmente de alfabetización– implementados por distintas ONG para la población gitana beneficiaria de la RMI. Para poder conseguir lo anterior se utilizaron distintas estrategias, algunas de las cuales resultaron ser especialmente fructíferas. Primeramente, se contactó con instituciones gubernamentales que trabajaban con población gitana, y se establecieron reuniones, por ejemplo, con cargos dirigentes del Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS)¹⁶. En segundo lugar, se movilizaron “contactos” profesionales provenientes de mi experiencia laboral previa como educadora en una ONG que realizaba actividades de prevención de la salud en el asentamiento madrileño Las Barranquillas (zona sureste de Madrid). Durante ese periodo de tiempo comencé a asistir, como integrante de la mencionada ONG, a las reuniones de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas¹⁷, lugar de encuentro profesional en el que conocí a personas que me abrieron las puertas de sus asociaciones. De igual modo, algunos compañeros de ONG me proveyeron de contactos de gitanos a los que conocían de su barrio, a quienes posteriormente pude contactar y entrevistar. En tercer lugar, utilicé los contactos de amigos/conocidos de la universidad, algunos de los cuales ejercían como trabajadores sociales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, ofreciéndome acceso a algunos de los usuarios gitanos que asistían a sus centros de Servicios Sociales y la posibilidad de contactar con otros trabajadores sociales a los que poder entrevistar. De igual manera, algunos familiares cercanos que desempeñaban cargos en la Administración Pública (en el Instituto de

¹⁶ El Instituto de Realojamiento e Integración Social es el organismo de la Comunidad de Madrid (CM) creado en 1998 y dedicado a erradicar el chabolismo y la infravivienda y facilitar su integración dentro de la sociedad. Antes de ser llamada IRIS, existía una organización, creada en 1986, denominada Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada que se encargaba de realojar a la población gitana que vivía en asentamientos chabolistas. Se puede decir, entonces, que el Consorcio es la organización predecesora del IRIS. Esta última institución depende de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. En el año 2005, el programa social del IRIS contaba con un total de 93 profesionales (entre trabajadores sociales, educadores sociales, orientadores laborales y maestros) y atendía a unas 18.897 personas gitanas residentes en la CM (Nogués 2007: 7, 9).

¹⁷ Esta comisión inter-profesional reúne mensualmente a profesionales del ámbito sanitario (médicos y enfermeros de la zona) y del ámbito de la intervención social (Servicios Sociales, ONG que trabajan en el Área 1 de Vallecas, que concentra varios asentamientos chabolistas y parte de la Cañada Real Galiana, representantes y/o voluntarios católicos que trabajan en la zona).

la Vivienda de Madrid o IVIMA de la CM, por ejemplo) me consiguieron valiosos contactos, al igual que algunos amigos de la familia que trabajaban en organizaciones como, por ejemplo, Cáritas, quienes también me pusieron en relación con sus alumnos gitanos.

Pude constatar que todas estas vías de acceso al campo fueron más prolíficas que la solicitud de acceso por la “vía oficial” a las instituciones que intervenían con población gitana residente en asentamientos o en barrios de realojo de la CM. De hecho, la gestión del acceso por los cauces oficiales resultó ser complicada, haciéndome pasar por varios “filtros” (reuniones con distintos cargos dentro de la jerarquía del IRIS o remisión de cartas oficiales desde Salud Pública para explicar el propósito de la investigación, por ejemplo) antes de que se diera el visto bueno a colaborar con mi entrada al campo. Incluso cuando la Jefa del Área de Integración Social del IRIS, después de una negociación para ello, se mostró favorable a ayudarme y procedió a escribir una carta a varios coordinadores que estaban a su cargo, varios de éstos fueron reacios a colaborar en el estudio y así lo declararon en reuniones que mantuvieron posteriormente conmigo.

La resistencia o la falta de voluntad para a esta colaboración fue patente en distintos momentos de la gestión del acceso al campo. Por poner un ejemplo, en la primera reunión que tuve con el coordinador de IRIS de la zona sureste de Madrid, éste expresó abiertamente que estaba en contra de la investigación planteada por el Instituto de Salud Pública y sostuvo que me ayudaría “únicamente porque venían órdenes desde arriba”. También afirmó que estaba cansado de que los gitanos estuviesen “de moda”, añadiendo que esta investigación no sólo les iba a suponer “perder el tiempo” a él y a los otros trabajadores sociales a su cargo, sino que consideraba que todos ellos estaban en una mejor posición para realizarla –por su conocimiento y experiencia con la población– que quienes la iban a hacer. Además, no dudó en cuestionar, con tono paternalista, que no veía a una mujer joven como yo hacer trabajo de campo sola por los distintos poblados. Su actitud sólo cambió cuando, al final de la reunión, mencioné que había hecho voluntariado en los años 90 con un trabajador social del entonces llamado Consorcio (antecedente del IRIS), Paco, al que resultó conocer, en el asentamiento chabolista Los Focos (zona Las Rosas, San Blas). Tras decirle esto, el coordinador del IRIS me presentó a una trabajadora social de su sede, Marta, encargada de un asentamiento chabolista de la zona que él coordinaba. Marta me llevó varias veces a ese poblado y me puso en contacto con varios gitanos hasta el momento en que comencé a moverme sola en él.

La segunda reunión con un coordinador de IRIS la mantuve en la Unidad de Trabajo Social de un asentamiento gestionado por esta entidad y ubicado en la zona sureste de Madrid. Y si bien él manifestó su visto bueno a la investigación, la trabajadora social responsable del

poblado, también presente en esa reunión, no hizo amago alguno de ofrecerme información de la zona y/o de contactarme con sus residentes. Meses después pude acceder a ese poblado, pero fue gracias a las trabajadoras de una ONG a la que se le había concedido financiación para desarrollar un proyecto de alfabetización en la sede de IRIS de ese asentamiento.

Si me estoy deteniendo en describir la dificultad que supuso acceder por la vía oficial a la población gitana es por el contraste entre la cerrazón profesional de instituciones como el IRIS y la apertura y facilidad con la que, una vez realizado el primer contacto, me abrieron la puerta la mayoría de los gitanos¹⁸. Durante los primeros meses de trabajo de campo tuve la sensación de que los gitanos se habían convertido en un público “cautivo” de los profesionales de las distintas instituciones y ONG que trabajaban con ellos. Así, mientras que éstos se habían erigido en cancerberos de la población gitana de cara al exterior, los gitanos, acostumbrados a esa situación, respondían abriendo las puertas de sus casas y de sus historias personales a cualquiera que por allí pasase, incluidos los profesionales.

En todo caso, la misma actitud de resistencia u oposición a facilitarnos el acceso a los gitanos que mostraron algunos trabajadores de IRIS fue desplegada por la dirigente de una conocida ONG que trabaja con población gitana beneficiaria de la RMI en un barrio de realojo de la zona sur de Madrid. Ésta, después de escucharme cuando le presenté el estudio y le solicité ayuda para el acceso al campo, dijo no sólo que estaba en contra de los objetivos del mismo sino también de cualquier estudio vinculado a la universidad, porque ésta, según ella, no reportaba información de utilidad para su ONG. Por tanto, no me facilitó el acceso ni a su ONG ni a gitanos perceptores de la RMI que ella conociera.

Contrariamente, el acceso a otras tres ONG fue muy diferente. A dos de ellas llegué por contactos personales y directamente se me permitió hacer observación participante en sus proyectos educativos y, a la tercera, lo hice a través de la persona a la que me remitió una trabajadora social del Instituto Salud Pública que participaba en la investigación.

En suma, que de no ser por los contactos personales-profesionales que había ido fraguando a lo largo de mis años como educadora en asentamientos chabolistas, el acceso al campo hubiera sido mucho más complicado y, probablemente, infructuoso.

¹⁸ Lejos de querer hacer apología de la “simpatía gitana”, esta reacción de exceso de apertura o de desvelamiento de información íntima o personal, observada en muchos gitanos, será un elemento analizado en esta tesis como consecuencia de la intervención profesional alrededor de la RMI.

0.3.2 Descripción de los asentamientos donde se realizó observación participante

La entrada al campo se realizó, como ya se ha descrito, con la colaboración de organizaciones gubernamentales (IRIS) y no gubernamentales (Asociación El Fanal, Asociación Mujeres Opañel y Asociación Caminar), que sirvieron de agentes facilitadores para poder establecer un primer contacto con la población residente. Se logró, así, acceder a distintos asentamientos chabolistas¹⁹:

- 1) La Jungla o El Cañaveral.
- 2) Santa Catalina.
- 3) Dos tramos de Cañada Real Galiana:
 - a. Por un lado, en parcelas aledañas al vertedero de Valdemingómez, entre el km 14 de la carretera de Valencia y la incineradora.
 - b. Y, por el otro, en un tramo cercano al municipio de Rivas Vaciamadrid, al noroeste de éste, entre la carretera M-623 y la M-50.

Además, se contactó con informantes de barrios de vivienda en altura (en este caso, no se llevó a cabo una observación sistemática, sino algunas visitas consecutivas para entrar en relación con nuevos informantes):

- 1) Carabanchel (zona suroeste de Madrid).
- 2) Valdebernardo (zona sureste de Madrid).
- 3) Hortaleza (zona noreste de Madrid).
- 4) Asamblea de Madrid/Entrevías (zona sureste de Madrid).

A continuación expongo, de manera breve, información relativa a la ubicación geográfica de los distintos asentamientos mencionados.

¹⁹ Se puede encontrar fotos y planos de los distintos asentamientos chabolistas en los informes que se mencionan a continuación, a los dos primeros de los cuales cabe acceder por Internet: 1) Informe diagnóstico sobre la Cañada Real Galiana (de ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010); 2) Informe “Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña” (publicado por el Servicio Madrileño de Salud, Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención en 2008); 3) Análisis de la realidad de la Cañada Real Galiana-Villa de Vallecas (documento mimeografiado de ACCEM, Asociación El Fanal, EDES e IRIS, 2006); 4) *Situación de los asentamientos marginales del área sanitaria 1* (documento mimeografiado de SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006). Además, el fotoreportaje que se hizo después de los desalojos ocurridos en El Gallinero permite ver imágenes de las chabolas de este asentamiento ubicado en Cañada Real (localizable en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/05/album/1330958063_868150.html#1330958063_868150_1330976879).

0.3.2.1 El Cañaveral o La Jungla

Este asentamiento, originariamente concebido como un barrio de tipología especial²⁰, se encontraba en la carretera de Vicálvaro a Rivas, a 10-15 minutos en coche particular desde el barrio de Vicálvaro. Comenzó con 80 familias en 1988, que residían en casas bajas prefabricadas y compartían espacios de uso común como una guardería, unos lavaderos y los establos. Según datos del informe realizado por EDIS S.A. para la Consejería de Sanidad y Consumo (2005), en El Cañaveral habitaban 214 familias durante el año 2005, la mitad de las cuales lo hacían en casas de tipología especial, mientras que la otra mitad vivía en chabolas. Este poblado comenzó a ser desalojado por IRIS (mediante convenio con el Ayuntamiento de Madrid) en noviembre de 2008²¹.

Uno de los principales contrastes observados durante el trabajo de campo en este asentamiento era el relacionado con la apariencia física de las distintas áreas del poblado. Así, la zona central de éste, donde se concentraban las casas de tipología especial, estaba relativamente limpia y asfaltada, mientras que en la zona exterior (en dirección a Rivas), habitada sobre todo por las familias de origen portugués y/o extremeñas más pobres, había gran concentración de basuras, escombros y cristales, no estando los caminos pavimentados. La construcción de la mayoría de las chabolas de esta zona era extremadamente endeble, con materiales como tablas y latón, y la presencia de animales domésticos, por ejemplo, de gallinas, era común dentro de las casas. Algunas de las mujeres portuguesas de esta zona del poblado a las que entrevisté vivían de la mendicidad, siendo las únicas en hacerlo de toda la población de etnia gitana que fue entrevistada.

0.3.2.2 Santa Catalina

Este asentamiento chabolista se encontraba en el distrito de Puente de Vallecas, cerca del polideportivo municipal de Entrevías (a media hora caminando). Por un lado, colindaba con el parque forestal de Entrevías y por el otro con las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes. Según datos facilitados por IRIS en junio de 2007, en Santa Catalina había entonces 175 chabolas, lo que suponía un total de 174 familias y 676 personas residentes en este asentamiento. En octubre 2010, la Comunidad de Madrid hizo público que había

²⁰ Barrios de viviendas prefabricadas construidas fuera de los entornos urbanos para un colectivo específico.

²¹ En abril de 2009 se habían realojado 292 personas, de las que 134 eran menores de edad (79 familias). Por su parte, el Ayuntamiento realojó a las 78 familias que residían en las casas bajas construidas en 1988. En mayo de 2009 quedaban media docena de infraviviendas pendientes de permiso judicial para ser demolidas (Fuente: diario *El Mundo*, 01/04/2009: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/01/madrid/1238600576.html>)

realojado a 44 de las 100 familias que tenían derecho a ello, y que el resto de personas que residían en Santa Catalina sería desalojado a comienzos del año 2011. El caso es que las últimas chabolas fueron derribadas en octubre 2011²².

La entrada a Santa Catalina no era tan desoladora como la de El Cañaveral. Las calles de este poblado estaban asfaltadas, no se veía tanta basura y en él se erigían también casas bajas de cemento y algunos chalets. Varias de las chabolas contaban con aparatos de aire acondicionado y dentro de alguna de las parcelas aledañas a las casas bajas se veían coches nuevos aparcados. Por tanto, había mayor contraste que en La Jungla entre las viviendas más lujosas y las más precarias. A estas últimas tuve acceso gracias a la trabajadora social de IRIS, habiendo algunas que estaban básicamente sin amueblar y en las que residían hacinados todos los miembros de la familia extensa. Varios hombres de este asentamiento afirmaron que trabajaban de “guardas” de obra y, en general, la chatarra o el desguace de electrodomésticos (que se llevaba a cabo en una explanada del centro del poblado) eran también ocupaciones habituales de los vecinos.

0.3.2.3 Cañada Real Galiana

La Cañada Real se sitúa al sureste de Madrid, a la altura del km. 14 de la carretera de Valencia (A3), y está compuesta por distintos asentamientos. Abarca terrenos pertenecientes a cinco municipios: San Fernando de Henares, Coslada, Madrid (distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas), Rivas-Vaciamadrid y Getafe. Las edificaciones se suceden a lo largo de una antigua cañada (es decir, de un camino destinado al paso de ganado ovino trashumante) que es conocida como Senda Galiana o Cañada Real Galiana.

En los años 60 y 70 del siglo XX, parte de este enclave era utilizado por personas procedentes de Getafe, Vallecas y otros lugares próximos como área de descanso de fin de semana, por lo que se construyeron casas y huertas que eran trabajadas para el abastecimiento familiar. El informe producido por ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid y otros (2006) sobre la Cañada Real Galiana señala que, a partir de esa época, empezaron a llegar familias, algunas de etnia gitana, procedentes de otros distritos y municipios; unas para hacerse cargo de las huertas y otras buscando un lugar donde establecerse.

²² Notas de prensa de la Comunidad de Madrid (Fuente: www.espormadrid.es/2011/10/derribo-de-las-ultimas-chabolas-del.html).

En la última década, ya en el nuevo milenio, se ha incrementado el número de personas de etnia gitana residentes en este enclave, tanto españolas (madrileñas, extremeñas y gallegas, principalmente) como de Europa del Este. A estas personas y a las autóctonas que no tienen origen gitano y ya residían allí, se han sumado otras procedentes de Marruecos y del Este de Europa (en especial, rumanos, búlgaros, bosnios, serbios y croatas).

Para la investigación que aquí se presenta, he realizado trabajo de campo en dos zonas de Cañada Real:

0.3.2.3.1 Cañada Real-zona de Valdemingómez

Esta zona se ubica en las parcelas aledañas al vertedero de Valdemingómez, entre el km. 14 de la carretera de Valencia y la incineradora. El tramo de la red viaria cercano a esta incineradora, esto es, el comprendido entre ésta y la entrada desde la carretera de Valencia (de unos 7 km aproximadamente), se encuentra asfaltado. A partir de ahí comienza un camino de tierra, sin asfaltar (de otros 7 km), que desemboca en otro tramo, de 2 km, que está también asfaltado y que se extiende hasta las inmediaciones de Perales del Río, pedanía del municipio de Getafe. La única forma de llegar hasta el interior de esta parte de la Cañada Real es el transporte privado o caminando.

Aunque la población se agrupa según lugares de procedencia, no hay límites claros entre las zonas de residencia de unos grupos y otros. Por ejemplo, en el tramo donde se ha realizado observación participante, residen familias tanto de etnia gitana y como de origen magrebí. En esta parte de Cañada Real las viviendas se encuentran ubicadas dentro de terrenos o parcelas de tierra a cuyo interior no se puede acceder visualmente si se camina desde la carretera asfaltada que va de la incineradora a la carretera de Valencia (A-3). Sus entradas suelen ser puertas metálicas opacas o enrejadas que dan a la carretera. Por tanto, para acceder a estas “parcelas”, en las que normalmente varias familias han construido sus casas bajas o chabolas, se ha de contar con conocimiento previo de la familia y de la dirección exacta donde viven (las parcelas suelen tener, al lado de las puertas, un número dibujado en la pared o algún cartel improvisado que lo indica).

El tráfico de droga es visible en el tramo de Cañada Real cercano a la incineradora de Valdemingómez. Ello lo confirma la información aportada por IRIS al informe, ya mencionado, elaborado por ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid y otros (2006), en el que se constata que desde el año 2003 se ha detectado un desplazamiento progresivo de la población residente en Las Barranquillas, estimándose que se han trasladado hasta Valdemingómez unas 126

familias. Esta zona se caracteriza, además, por el intenso tráfico rodado de camiones que, junto con la falta de aceras y cunetas, ha ocasionado varios accidentes en los últimos años. Tanto en este informe como en el de la Consejería de Sanidad y Consumo (2005), elaborado por EDIS y también citado más atrás, se señala que la población de la zona de Cañada Real perteneciente al Área de Salud 1 (que engloba la parte sureste de la Comunidad de Madrid) se estima en 3261 personas (1130 de 0-16 años y 2131 de 17 años en adelante, estando 1497 de estas últimas en la franja de edad comprendida entre los 25 y los 64 años)²³.

Las tres familias de etnia gitana a las que estuve visitando en la zona de Valdemingómez residen en chabolas y casas bajas en las parcelas que compartían con miembros de su familia extensa. Todas ellas se dedican a la chatarra. Accedí a ellas gracias a la asociación El Fanal, que tiene un local en este lugar en el que, además de dar cursos de alfabetización a mujeres gitanas y magrebíes, realiza actividades con menores.

Para dar una imagen de las pautas de distribución territorial de las familias a las que visité en esta zona, describo a continuación a las personas que vivían en las viviendas que componían una de las parcelas del asentamiento, ubicada al lado de la incineradora. En esta parcela, de unos 500 metros cuadrados, había construidas cuatro chabolas, cada una en una esquina de la misma. Una de estas chabolas correspondía a Sonia, una mujer de 45 años de origen portugués, y a Pedro, su marido, un gitano de origen extremeño que trabajaba con permiso oficial recogiendo desechos de la incineradora. Otra pertenecía a la hija de Sonia, Marta, de 21 años, que estaba casada con un primo hermano suyo que también trabajaba en la incineradora. La tercera era del hermano de Marta, de 23 años, Enrique, que también estaba casado con una prima. Y la cuarta chabola era la del hermano de Pedro, en la que vivía con su esposa. Esta familia incentivaba el casamiento de las hijas con primos hermanos para mantener la residencia conjunta de carácter virilocalidad y evitar que las jóvenes recién casadas se marcharan a residir con la familia del marido. Esta era una práctica común entre las familias gitanas que conocí durante el trabajo de campo.

0.3.2.3.2 Cañada Real-zona Rivas

He realizado trabajo de campo en un tramo de la Cañada Real que colinda con el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Este tramo está ubicado al noroeste de Rivas, entre la carretera M-623 y la M-50. Se trata de una zona de casas bajas y chabolas que se han construido siguiendo la dirección de la Cañada Real (a ambos bordes de la misma) cuyo acceso me ha sido facilitado asimismo por la Asociación El Fanal. En este tramo, también sin

²³ Datos procedentes de los padrones de municipales de Madrid y Rivas Vaciamadrid.

asfaltar, no hay tráfico de camiones ni ruido. Además, desde allí se puede acceder caminando a los comercios de la avenida Covibar de Rivas, que se encuentran a unos 20 minutos, aproximadamente.

Dos de las familias a las que he visitado en esta zona viven en casas de ladrillo “compradas”²⁴ o alquiladas, mientras que la tercera de ellas reside en una parcela en la que varios miembros de su familia extensa han construido chabolas. La mayoría de los hombres de estas familias se dedican a la chatarra, mientras que las mujeres participan en proyectos de integración desarrollados por asociaciones y vinculados al cobro de la RMI. Aun así, varias de estas mujeres, las que habitan en la parte más lejana al núcleo urbano de Rivas, afirmaron durante las entrevistas que les hice que dependían de sus maridos para poder realizar la compra o ir al médico, por ejemplo.

0.3.3 Metodología seguida en la investigación sobre hábitos de salud en el colectivo gitano

Dado que, como comenté en la presentación, algunas de las hipótesis e ideas utilizadas para este trabajo de tesis doctoral provienen de la investigación “Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña”, a continuación indico el número de entrevistas, de grupos de discusión y la duración de la observación participante que llevé a cabo para dotar de base empírica a esta investigación.

- **Observación participante** (durante 8 meses, entre mayo de 2006 y febrero de 2007).
- **46 entrevistas semi-estructuradas a 52 personas de etnia gitana** de diferentes edades y clases sociales²⁵, entre ellas 2 a hombres de respeto, 4 a pastores evangélicos (2 pastores y 2 pastoras) y 1 a un candidato a pastor. Algunas de estas entrevistas han sido realizadas en grupo, razón por la cual la suma de las entrevistas es menor que el número de personas entrevistadas.
- **4 grupos de discusión con mujeres gitanas:** 3 con participantes en grupos de alfabetización ya preconstituidos y 1 con mujeres mozas pertenecientes a una misma familia. Uno de los tres grupos de discusión mencionados en primer lugar fue

²⁴ Los terrenos de la Cañada Real no se pueden legalmente comprar ni vender; sin embargo, es una práctica común que las personas que llevan años residiendo en terrenos de la Cañada decidan traspasar sus parcelas, lo que implica que a pesar de no ser legal, venden sus terrenos por precios que suelen ser superiores a los 10.000 euros. Es por ello que hablo de compra y que lo escribo entrecomillado.

²⁵ Ver en el Capítulo 6: qué se entiende por clases sociales en el contexto de esta tesis doctoral.

realizado con madres jóvenes, entre los 18 y los 22 años, y los otros dos con madres con edades comprendidas entre los 25 y los 35 años.

- **3 grupos de discusión con hombres gitanos**²⁶: 2 de ellos con participantes en grupos de alfabetización ya preconstituidos. Uno –el constituido según la metodología ortodoxa de los grupos de discusión– estaba compuesto por hombres jóvenes (17-25 años) y los dos restantes por hombres más mayores (30-50 años).
- **1 grupo de discusión mixto**: integrado por hombres y mujeres de un mismo grupo familiar con edades entre los 17 y los 45 años.
- **3 seguimientos de casos** de enfermedad (visitas al domicilio, acompañamiento a centros de salud y hospitales).
- **10 entrevistas a profesionales** (5 del ámbito sanitario y 5 del ámbito social).

La cantidad de personas entrevistadas, así como su posición social, se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1: Entrevistas realizadas para la investigación sobre salud y gitanos (mayo 2006 – febrero 2007).

Clase social	Mujeres	Hombres	Total
Baja	6	5	11
Media-baja	6	6	12
Media	11	12	23
Total	23	23	46

Fuente: Elaboración propia

0.3.4 Metodología seguida en la investigación sobre la RMI y el colectivo gitano

0.3.4.1 Entrevistas

Las entrevistas han sido semi-estructuradas, dado que contaba con un guión de entrevista que comprendía aquellos temas que pensaba imprescindible tener en cuenta para

²⁶ El hecho de que sólo uno de los grupos de discusión se haya realizado siguiendo la metodología ortodoxa para constituirlos (Orti, 1986; Ibáñez, 1986; Canales y Peinado, 1994), de manera que en los demás no se ha cumplido el requisito de que los participantes no se conocieran previamente entre sí, responde a las dificultades prácticas encontradas para ello, puesto que resulta casi imposible aplicar esta norma metodológica cuando se trabaja con colectivos como el gitano. Así, por ejemplo, varios de los gitanos que se comprometieron a participar en el grupo de discusión que se trató de constituir siguiendo la referida norma no acudieron a la cita hasta que se les dijo de dónde procedían los otros gitanos invitados y se les permitió ir acompañados de algún familiar y/o amigo. Además, algunos otros, residentes en asentamientos chabolistas, se negaron a salir de sus poblados para participar en el grupo alegando problemas de desplazamiento.

poder abordar la temática estudiada²⁷. Se ha entrevistado a personas de etnia gitana, tanto a solicitantes/beneficiarias de RMI como a familiares de éstas que no perciben la prestación.

Tabla 2: Entrevistas a personas de etnia gitana (verano 2007–verano 2010).

Clase social	Mujeres		Hombres		Total
	RMI	No RMI	RMI	No RMI	
Baja	4	-	5	-	9
Media-baja	12	2	4	-	18
Media	4	3	2	3	12
Total	20	5	11	3	39

Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha realizado entrevistas a profesionales del ámbito social y del ámbito sanitario, dado que algunos de estos últimos trabajan dando charlas de educación para la salud a perceptores de la RMI e interesaba, de cara a esta investigación, contrastar sus puntos de vista con los de los profesionales del ámbito social.

Tabla 3: Entrevistas a profesionales relacionados con la RMI (verano 2007–verano 2008).

Ambito social:	
Servicios Sociales (trabajadores sociales)	8
Profesionales de ONG:	
<i>Mediadores gitanos</i>	3
<i>Otros</i>	8
Técnicos administrativos	2
Sindicalistas	1
Expertos-investigadores	2
	24 75%
Ambito sanitario:	
Médicos	5
Matronas	1
Enfermeras	2
	8 25%
Total:	32

Fuente: Elaboración propia.

0.3.4.2 Observación participante

Además de la implementada en los asentamientos chabolistas mencionados, se ha llevado a cabo observación participante durante las actividades que componen los proyectos educativos destinados a personas gitanas beneficiarias de RMI y durante los procesos de

²⁷ En el Anexo I que se encuentra al final de esta tesis se pueden ver los principales bloques temáticos alrededor de los cuales se realizaron las entrevistas semi-estructuradas a gitanos y profesionales.

solicitud de vivienda pública cuando he acompañado a estas personas a diferentes instituciones públicas para efectuar los trámites correspondientes.

0.3.4.2.1 Observación en proyectos educativos para beneficiarios de la RMI

Se ha realizado observación participante, en particular, en “los cursillos” que forman parte de los proyectos educativos destinados a población gitana perceptora de la RMI, que han sido impartidos mayoritariamente por parte de entidades de iniciativa social (ONG y/o fundaciones). En la Tabla 4 se enumeran los distintos proyectos educativos que fueron objeto de observación, así como información relativa a los mismos (ubicación geográfica, tipo de alumnado, contenidos educativos de los grupos, etc.).

Tabla 4: Observación participante en proyectos educativos destinados a beneficiarios de la RMI (junio 2006–julio 2008).

Proyecto	Zona	Público	Nº asistentes	Duración	Frecuencia	Temáticas	Nº observaciones	Periodo de observación	Espacio físico
Proyecto 1	Cañada Real, Valdemingómez	Mujeres gitanas, mayoritariamente de clase baja	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, debates (relaciones de género, crianza, educación para la salud).	10	may. 2006 – mar. 2007	Local asociación
Proyecto 2	Cañada Real, Rivas	Mujeres gitanas, mayoritariamente de clase media-baja	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates sobre temas de género.	9	may. 2006 – mar. 2007	Local asociación de vecinos
Proyecto 3.1	La Jungla o El Cañaveral	Mujeres gitanas españolas de clase media-baja y media	5-8 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, debates libres.	4	may. 2007 – may. 2008	Local IRIS
Proyecto 3.2	La Jungla o El Cañaveral	Mujeres gitanas de origen portugués de clase baja	6-8 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, debates libres.	4	may. 2007 – may. 2008	Local IRIS
Proyecto 4	Barrio Opañel (Carabanchel)	Mujeres gitanas de clase media-baja y media	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates libres, excursiones.	5	may. 2006 – mar. 2007	Local ONG
Proyecto 5	Usera	Mujeres gitanas de clase media-baja y media	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates libres, actividades deportivas.	15	mar. 2007 – jul. 2008	Local ONG
Proyecto 6	Hortaleza	Hombres gitanos beneficiarios de la RMI de clase media-baja	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, debates libres.	2	may. 2006 – mar. 2007	Local Servicios Sociales
Proyecto 7	Barrio San Isidro (Carabanchel)	Hombres gitanos de clase media-baja y media	6-8 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates libres.	2	mar. 2008 – jun. 2008	Local Servicios Sociales
Proyecto 8	Villaverde	Mujeres gitanas de clase media-baja	6-8 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates libres, actividades deportivas.	3	mar. 2008 – may. 2008	Local ONG
Proyecto 9	Moratalaz	Mujeres gitanas de clase media-baja y media	8-10 por sesión	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Alfabetización, lecto-escritura, educación para la salud, debates libres, actividades deportivas.	2	abr. 2008 – may. 2008	Local Servicios Sociales
Proyecto 10	Vallecas	Grupo mixto: gitanas y latinas de clase media-baja, y un hombre payo de clase media	8-10 por sesión (mas niños)	sesiones de 1,5 h.	2 veces por semana	Crianza, educación para la salud, debates libres.	3	may. 2009 – oct. 2009	Local Servicios Sociales

Fuente: Elaboración propia.

Este periodo de observación se ha encaminado a analizar el tipo de actividades educativas en los programas financiados por la Comunidad de Madrid para población beneficiaria de la RMI, la clase de conocimientos que se transmite en ellos, el grado de participación de las personas que asisten, así como las relaciones que se establecen entre los profesionales que imparten los talleres y estas personas, la mayoría de ellas mujeres. En el proyecto que aparece con el número 5 en la tabla 2, tuve la oportunidad de acompañar a las perceptoras de la RMI a las sesiones de promoción de la salud que tuvieron lugar en el centro de Atención Primaria más cercano. De este modo, no sólo se ha realizado observación participante en los programas de alfabetización para población beneficiaria de la RMI sino en los talleres de educación para la salud que se han desarrollado como parte de alguno de estos programas. Estos talleres se imparten en los centros de salud de la zona. Durante este periodo, se ha profundizado en cómo los profesionales de las ONG conciben la RMI y el tipo de intervención social que realizan en el marco de esta política social, así como en las representaciones que éstos manejan sobre sí mismos y sobre su actividad profesional, en ocasiones en oposición a aquellas a las que recurren los trabajadores sociales de Servicios Sociales. También se han abordado las representaciones que todos estos profesionales usan a la hora de pensar y actuar con respecto al colectivo gitano.

0.3.4.2.2 Observación en foros y jornadas

Se ha efectuado observación participante en foros de intercambio profesional y en jornadas de formación dirigidas a profesionales y a población gitana. En algunas de las jornadas formativas que se han referido a la intervención social con personas en situación de exclusión social, se ha recogido información sobre la manera en que la Comunidad de Madrid, los Servicios Sociales y las entidades de iniciativa social se han enfrentado a esta cuestión, a la vez que han servido como lugar desde el cual contactar con profesionales que posteriormente han sido entrevistados.

- Los **cursos y jornadas** de formación para profesionales sociales y sanitarios que han sido objeto de observación son los siguientes:
 - Jornada de “Promoción de la salud y atención sanitaria en la comunidad gitana” (1 de marzo de 2006), organizada por la Fundación Secretariado Gitano, Salud Madrid y la Comunidad de Madrid y celebrada en Madrid.
 - Jornadas de “Exclusión social y salud” (25 y 26 de junio 2007), organizadas por la Agencia Laín Entralgo en colaboración con la Dirección General de Atención al Paciente y Relaciones Institucionales.

- Encuentro “Gitanas hacia la igualdad” (7 y 8 de mayo 2007), organizadas por el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.
- Encuentro “Estrategias y políticas de inclusión en la Comunidad de Madrid”, realizado el 18 de octubre de 2007, organizado por la Fundación Luis Vives, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Curso de “Formación para mediadores en salud y comunidad gitana” (17 y 16 de noviembre de 2007), organizado por la Fundación Secretariado Gitano y el Ministerio de Sanidad y Consumo y celebrado en Valladolid.
- Curso “El papel de las Corporaciones Locales en la lucha contra la exclusión social” (28 de noviembre de 2007), organizado por el IMAP y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
- Curso “A favor de la inclusión social. Seminario final” (11 de diciembre de 2007), organizado por la Fundación Luis Vives y la European Anti Poverty Network (EAPN).
- Además, entre los años 2007-2009 se ha realizado observación participante en la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas, reunión mensual en la que coinciden profesionales del ámbito social y sanitario del Área 1 (zona sureste de la Comunidad de Madrid) que trabajan en contacto con población en situación de exclusión social.
- Durante el año 2009 se llevaron a cabo dos sesiones de observación en reuniones de intercambio profesional organizadas por trabajadores sociales de Servicios Sociales en la sede del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales en Madrid.

También se ha efectuado una revisión de estudios, informes y otros documentos relativos a la RMI y a las políticas sociales de la Comunidad de Madrid en materia de exclusión social, que –como se verá– han sido analizados para el desarrollo de esta tesis doctoral.

Capítulo 1: El Estado frente a la exclusión social. Las políticas de rentas mínimas

La renta mínima garantizada obedece inicialmente, en el periodo previo a la crisis de los años 70, a la idea de que los poderes públicos creen una última red de seguridad (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 35), fundamentalmente de carácter económico, destinada a satisfacer las necesidades esenciales de quienes no tienen la posibilidad de obtener recursos por otras vías, sin importar la causa o circunstancia concreta de la que deriva esa situación de necesidad. Sin embargo, a partir de los años 80 es cuando esa idea cobra realmente fuerza, coincidiendo con un momento histórico caracterizado por la crisis del empleo y de la Seguridad Social provocada por las transformaciones sociales y económicas que tienen lugar en Europa. En efecto, frente a los altos niveles de empleo y de crecimiento económico existentes en la etapa en la que surgen los primeros sistemas de garantía de ingresos mínimos (en los años 50 en Gran Bretaña, que lidera la iniciativa, en los 60 en Alemania y Países Bajos, y en los 70 en Bélgica e Irlanda), los cambios posteriores demostraron la imposibilidad de atender por las vías convencionales –el trabajo asalariado y las prestaciones de la Seguridad Social– las necesidades de protección de una parte importante de la población que antes quedaba efectivamente amparada.

En el proceso histórico de surgimiento y consolidación de las políticas que garantizan un mínimo de recursos a la población que no puede conseguirlos mediante el trabajo asalariado se pueden distinguir dos grandes generaciones de este tipo de políticas sociales, cada una de las cuales tiene como fundamento categorías de derechos diferentes (García Roca, 1989: 32). La primera generación de las mismas (a la que pertenece el Ingreso Madrileño de Integración o IMI, precursor de la Renta Mínima de Inserción) pone el acento en la esfera de los derechos individuales y subraya la importancia de las prestaciones destinadas a asegurar el sustento en situaciones de necesidad. Surgen así las prestaciones económicas de subsistencia, basadas en un estricto derecho subjetivo²⁸ (Porrás, 1998; Martín Giner, 2007). Al tratarse de un derecho subjetivo en lugar de objetivo, en este tipo de prestaciones el solicitante debe probar la situación de necesidad (Ramírez Hita, 2003: 87). Las decisiones de la admisión quedan en manos de los responsables de su adjudicación, y las acciones poseen siempre un carácter subsidiario (Join-Lambert, M.Th., 1997). Esta primera

²⁸ Un derecho subjetivo es una capacidad que tiene una persona para hacer o no hacer algo, o bien para impeler o impedir a otro hacer algo. Es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, un poder otorgado por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del Derecho.

generación de rentas mínimas, llamadas también “tradicionales” (Serrano y Arriba, 1998: 49), consistía en prestaciones económicas que exigían ciertas contraprestaciones o compromisos “ligeros” a cambio, como la aceptación de ofertas de empleo o la realización de cursos de formación²⁹. Algunos autores señalan que ello conlleva “una exigencia de disposición favorable” por parte de los receptores (Laparra, Aguilar y Pérez: 2003: 42). Por otra parte, estas prestaciones se construyeron a partir de la idea de que solamente un número reducido de personas resultarían excluidas del mercado de trabajo y de la protección de la Seguridad Social, y fueron concebidas como una última “malla de seguridad” (García, Losa, Esteban, 2005: 17; Moreno, 2001) o “última red protectora” (Arriba, 2001; Serrano y Arriba, 1998: 50) que debía permitir afrontar las necesidades más elementales. La finalidad básica de estos programas era la de satisfacer las “necesidades vitales” de personas (García, Losa y Esteban, 2005: 19) que se consideraban extremadamente necesitadas, no la de garantizar los recursos sociales y económicos como parte de los derechos ciudadanos. Y aunque estos programas de rentas mínimas difieren, según los países, en varios aspectos relativos al importe de las prestaciones, al método de cálculo, a las condiciones fijadas para su atribución y a las formas de financiación, presentan el defecto común de que resultan ineficaces para combatir la pobreza dado que, cuando surgieron, los elevados niveles de empleo y de crecimiento económico hicieron que no contemplaran el objetivo de la integración social (García, Losa y Esteban, 2005; Serrano y Arriba, 1998).

La segunda generación histórica de ingresos mínimos, a la que pertenece la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, coincide con la aparición de los derechos sociales, cuyo significado va a ser concretado mediante las prestaciones básicas de solidaridad. La esencia de este otro tipo de ingresos mínimos reside en que, además de tener en cuenta el riesgo de la pobreza (entendida como una insuficiencia de medios económicos), contempla también el riesgo de la exclusión social. En este sentido, los ingresos mínimos se conciben como una estrategia de lucha contra la pobreza en la perspectiva de la inserción (Estivill, 1991: 253). Una vez que se acepta que la inserción a través del empleo será difícil para todos los miembros de la sociedad, se comienza a hablar de nuevos tipos de reconocimiento social, afirmando que todas las personas tienen derecho a la participación en la actividad social más allá de la división entre trabajador – no trabajador (Castel, 1992: 32) y

²⁹ Serrano y Arriba (1998: 49) y Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 52) se refieren a esta primera generación de rentas mínimas haciendo referencia a la falta de complejidad de estos programas primigenios y a la existencia de compromisos “ligeros” o “más simples” que los que incluyen los programas de rentas mínimas de segunda generación.

estableciéndose, por parte de la Administración (y, concretamente, por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales), los apoyos profesionales para diseñar y llevar a cabo medidas de inserción social y profesional. En este sentido, podemos ver cómo las políticas sociales contra la exclusión social son programas colectivos de acción encaminados a convertir el bienestar de los ciudadanos en un objetivo político garantizado (Durán, 1988: 121) y cómo las rentas mínimas van variando sus prioridades políticas y transformándose en programas de acción concretos (Durán, 1988: 129), que se orientan cada vez más a colectivos específicos y cuentan, por lo general, con menos recursos económicos (Serrano y Arriba, 1995) a pesar de haber ampliado sus objetivos políticos (dar cobertura a todos los excluidos de las prestaciones sociales generales).

A esta clase de regímenes específicos pertenecen las medidas adoptadas por la ley luxemburguesa de 26 de julio de 1986 sobre el Derecho a unos Ingresos Mínimos Garantizados y la creación de un Servicio Nacional de Acción Social, así como la ley francesa de 1 de diciembre de 1988 sobre el Ingreso Mínimo de Inserción, siendo el mismo esquema que se utiliza en las regulaciones adoptadas en materia de rentas mínimas por las Comunidades Autónomas españolas entre 1989 y 1995, al haberse inspirado claramente en el caso francés. Así, estas nuevas prestaciones aparecen en un contexto socio-económico (entre mediados de los 80 y mediados de los 90) en el que el desempleo es un elemento indisoluble del paisaje social. De hecho, el diseño de estos modernos ingresos mínimos parte de una hipótesis distinta a la que sirvió de base a los sistemas de garantía de ingresos mínimos anteriores a la crisis de los 70: la sociedad está lejos de ofrecer un puesto de trabajo a todos los ciudadanos y la inserción requiere la previa creación de tales puestos. Por ello, se estima que el fomento del empleo, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo, constituye el mejor medio para evitar que la protección social ejerza un efecto desincentivador del trabajo, esto es, que perpetúe la necesidad de asistencia³⁰ (Stoffaës, 1974).

Esta segunda generación de programas de rentas mínimas coincide, entonces, con un momento de escasez económica, por lo que a nivel político se busca mostrar a la ciudadanía que el reparto de estas prestaciones solidarias está justificado y que se intenta no fomentar la “dependencia” en los perceptores de las mismas. Ello se materializa en mayores

³⁰ Ayala Cañón (2008: 59-79) ofrece una síntesis interesante sobre cómo el lenguaje de la eficiencia se ha introducido en los análisis económicos de las políticas redistributivas después de las críticas que vinculan el cobro de prestaciones económicas tipo la RMI con la desmotivación y desincentivo del empleo. Así, en la actualidad existe un común acuerdo, a nivel político o estatal, sobre la necesidad de que todos los ciudadanos tengan una garantía de recursos, pero se considera que además de ofrecérseles una prestación económica, se habrá de reducir su dependencia con respecto a este tipo de ayudas.

interpelaciones a éstos, exigiéndoles, por ejemplo, un cierto compromiso para realizar actividades conducentes a la inserción social y/o laboral (lógica de la “activación”). Por tanto, se considera que la lucha contra la exclusión social requiere que las políticas sociales se fijen el objetivo más ambicioso de ayudar a las personas a encontrar un lugar en la sociedad y aumentar su productividad (Comisión de las Comunidades Europeas, 1993: 21). En el caso del programa de rentas mínimas de la Comunidad de Madrid, aparece un matiz que suaviza la posibilidad de exigencia de una contraprestación a sus perceptores; matiz que se encuentra en la ley que lo regula (15/2001) y es reforzado en uno de los documentos que están en el origen del Servicio de Prevención de Exclusión de Rentas Mínimas de la CM (2005: 4-6), y que consiste en que, aun en el caso de que los beneficiarios de la RMI incumplan los compromisos estipulados en sus Programas Individuales de Inserción, no por ello se retirará la prestación económica. Por tanto, aunque a nivel europeo –como se ha señalado– los programas de rentas mínimas tiendan a demandar ciertas contraprestaciones a los beneficiarios, esta correlación entre prestación económica y contraprestación no está tan clara en lo que se refiere a la RMI. En ésta, los perceptores están obligados, una vez cobran la prestación económica, a aceptar los apoyos sociales de los centros de Servicios Sociales, que se materializan en la firma de un Programa Individual de Inserción (PII), documento en el que, de forma consensuada entre los perceptores de la RMI y los trabajadores sociales de Servicios Sociales, se establecen los compromisos que los primeros aceptan asumir de cara a cambiar su situación social. Por tanto, la firma del PII es obligatoria, pero la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (2005) insiste en que el no cumplimiento de los compromisos y/o actividades que en él se consignan no será considerado causa directa de extinción de la prestación económica:

El desarrollo del programa hacia una Renta Mínima de Inserción garantizada facilita esta concepción de la inserción como doble derecho y no tanto como prestación, y por tanto las actividades de inserción no condicionarán la permanencia de las personas en el programa. Esta estará únicamente definida por el mantenimiento de los requisitos de acceso, por tanto, el incumplimiento del programa individual de inserción o el no cumplimiento de objetivos no serán causas directas de cese del cobro de la prestación, aunque sí serán abordados desde la lógica de la amonestación. (Servicio de Prevención de la Exclusión y Prevención de Rentas Mínimas de la CM, 2005: 5-6)

Este matiz, que sin bien pudiera parecer nimio, está en la base de algunas dificultades que los trabajadores sociales que aplican la RMI encuentran en la interpretación y aplicación de la ley que la regula en la Comunidad de Madrid. Este programa se diferencia de otros similares en cuanto que deja abierta la posibilidad de que los beneficiarios no realicen actividad alguna. De este modo, y a pesar de la existencia de un contexto internacional

proclive a la exigencia de mayores cotas de “activación”³¹ a los perceptores de este tipo de prestaciones sociales, en el caso madrileño la Consejería de Familia y Asuntos Sociales hace especial hincapié en que los apoyos sociales han de ser tolerantes con los ritmos de esos perceptores y establecidos negociadamente con ellos, procurando así escapar a lo que algunos autores han denominado la “paradoja de apoyo-control” que se daba en la aplicación de la prestación predecesora a la RMI (Aguilar, Laparra y Pérez, 2001).

Así, esta segunda generación de programas de rentas mínimas está orientada a la participación social (en la línea de la “activación”) y vincula las prestaciones económicas (asistencia social) con las medidas de inserción que tendrán que desarrollar las personas receptoras de la prestación económica. La evolución de estas políticas sociales la podemos ver en la incorporación de un nuevo vocablo en la literatura anglosajona, al pasarse del término “welfare” o renta mínima garantizada al de “workfare” o renta mínima de inserción, para cuya recepción es preciso hacer algo a cambio (Cabases, Montserrat y Codorniu, 1990: 73). En este sentido, los ingresos mínimos se conciben como una estrategia de lucha contra la pobreza en la perspectiva de la inserción (Estivill, 1993) y/o de la integración (Martínez Román, 2001), no tratándose ya sólo de ayudas económicas, sino que se las conecta con medidas tendentes a la superación de la exclusión social³².

La idea de renta nacional mínima que se manejaba en los regímenes europeos había sido hasta entonces radicalmente distinta a lo que, en Estados Unidos, se entendía como subsidio activo o “workfare”³³, pues partía de la idea de que la supresión de la pobreza requiere el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales, entre los que deben figurar la garantía de unos ingresos mínimos y la inserción profesional y social. En la filosofía de estos regímenes europeos, el trabajo no era el principio para tener derecho a la protección como ocurre en el sistema del “workfare”, sino que el derecho a la protección figuraba como

³¹ Más adelante se describe en qué consiste esta “activación”.

³² Martínez Román (2001) afirma que tanto el término de integración como el de inserción se han utilizado como opuestos al de exclusión social. Para esta autora, la exclusión es el resultado de dificultades (privación de opciones) de inserción o de integración, y sostiene que hay una preferencia por el término de inserción puesto que al término de integración se le adjudican “connotaciones negativas relacionadas con tentativas de asimilación y homogeneización de las personas con dificultades” (Martínez Román, 2001: 75-76). Se puede decir que hoy en día los términos de inserción social y de inclusión social se utilizan indistintamente.

³³ Según definición dada por *The Collins English Dictionary*, debe entenderse como un dispositivo de acuerdo con el cual el gobierno de un país exige a las personas desempleadas la realización de trabajos comunitarios de utilidad general o formación profesional como contrapartida de las prestaciones percibidas. Aunque esta idea del subsidio activo tiene una larga historia –sus principios se formularon por primera vez en la Ley de Pobres promulgada en Inglaterra en 1536, en relación con los llamados «vagabundos aptos para el trabajo»–, su denominación surgió en los Estados Unidos a finales de la década de los 60 (Perrin, 1989: 25; Standing, 1990: 499).

principio para la inserción adaptada a la capacidad del interesado³⁴. Sin embargo, los sistemas europeos de ingresos mínimos, terminan por presentar marcadas analogías con la política del *subsidio activo* estadounidense, en el sentido de que estos ingresos se configuran como la contrapartida de un trabajo obligatorio o del seguimiento de cursos de formación profesional. La prueba de ello es que el incumplimiento por el usuario del compromiso adquirido a cambio de la transferencia de ingresos realizada por cuenta del Estado conlleva, en la mayoría de los casos, la suspensión o, incluso, la supresión del derecho a la prestación económica. De este modo, se puede afirmar que en el momento en el que se introduce el lenguaje de la inserción en el ámbito de los derechos sociales, se asume el lenguaje de la contraprestación a cambio de la prestación económica.

Esta idea de la contraprestación (que en el caso de la RMI madrileña aparece en los discursos de los profesionales que la gestionan y aplican, y no –como se ha apuntado y luego se tratará más a fondo– en los textos de la ley o de las investigaciones de base para la misma), es coincidente con muchos de los argumentos esgrimidos a favor de las medidas de inserción social que llevan implícitas las nuevas políticas europeas de ingresos mínimos garantizados. Lo anterior es congruente, a su vez, con los planteamientos en defensa del subsidio activo: la demanda de contraprestaciones combate la “cultura de la dependencia”, reduce la pobreza, es un instrumento de desarrollo de la formación educativa, es un medio de restaurar la “ética del trabajo”, contribuye a reducir la economía sumergida, restablece la unidad familiar, etc.³⁵ (Lafore, 1989: 570, en García, Losa y Esteban, 2003: 20). En el contexto español, un estudio de evaluación de la implantación de los programas de rentas mínimas (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1996: 20) también puso de manifiesto que la cobertura de éstos se restringía precisamente en su proceso de aplicación práctica, debido sobre todo a la “desconfianza social hacia los excluidos”, que conlleva que los profesionales insistan en asegurar acciones como contrapartida del cobro de la prestación económica.

En definitiva, se ha ido creando una atmósfera progresivamente favorable a la exigencia de contraprestación por parte de los beneficiarios de rentas mínimas, que hace que

³⁴No obstante, en los últimos años, la argumentación relativa al subsidio activo en los Estados Unidos ha pasado de la idea de “trabajo a cambio de una contraprestación” a la de “preparación para la autosuficiencia durante el período de percepción de las prestaciones”. Así, casi todos los Estados de la Unión han instaurado planes que imponen, a los usuarios que no quieren perder las percepciones, la elección entre aceptar un empleo no contractual, asistir a «clases de búsqueda de trabajo» y reanudar los estudios escolares o emprender cursos de capacitación profesional a tiempo completo (Standing, 1990: 500-501).

³⁵ Los debates parlamentarios desarrollados en la Asamblea Nacional francesa a propósito del proyecto gubernamental sobre la RMI pueden servir de ejemplo de los argumentos que se aducen a favor de que el ingreso mínimo garantizado se enfoque desde la perspectiva de la inserción: «El mínimo garantizado hace perdurar las situaciones de pobreza, manteniendo a los beneficiarios en la asistencia y favoreciendo los bajos salarios; puede ser un factor de desintegración de la familia; en fin (...), la RMI amenaza con dar un nuevo impulso al trabajo clandestino; la respuesta a esos reproches está en una sola palabra: la inserción» (Lafore 1989).

esta idea penetre cada vez más en amplios segmentos de la opinión pública de los países europeos, lo que deja traslucir el peso creciente que, frente a la naturaleza incondicional de los derechos, adquiere el principio de reciprocidad en la definición de la justicia social, en el sentido de que los miembros de la sociedad tienen derechos en la medida en que adquieren obligaciones respecto de esa misma sociedad y de sus componentes. Esta deriva hacia el establecimiento de contrapartidas por parte de los receptores de prestaciones económicas se pone de relieve en la reforma de la RMI recientemente operada en Francia, mediante la ley número 2003-1200, de 18 de diciembre de 2003, relativa a la descentralización de esta renta y a la creación de un ingreso mínimo de actividad (RMA). De acuerdo con el dispositivo RMA, se puede proponer a las personas que sean receptoras de éste, durante un período de dos años, la suscripción de un contrato de trabajo con un empresario del sector privado o con un empleador del sector no comercial, con una duración mínima de 20 horas semanales y una remuneración al menos igual a 20 veces el salario mínimo hora vigente (García, Losa y Esteban, 2003: 23).

Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 18-20) señalan que, a nivel de España y previamente a la instauración en Madrid de la RMI, uno de los déficits que minaban la efectividad de los programas de inserción tipo Ingreso Madrileño de Inserción, precedente de la Renta Mínima de Inserción, era su vinculación con la “lógica de la contrapartida-penitencia”, que desviaba esfuerzos hacia la persecución del fraude, en lugar de primar la acción de inserción social, diluyendo la dimensión de afirmación de derechos sociales (en este caso, a la asistencia y a la integración) que debería ir de la mano de toda política de lucha contra la exclusión social³⁶. No obstante lo anterior, el lenguaje de la RMI como derecho social no ha calado –como veremos– entre los trabajadores que la aplican, quienes tienen la lógica de la contraprestación como telón de fondo cuando valoran la actuación de los usuarios de la prestación económica, de quienes siempre esperan que “den algo a cambio” de ella. De este modo, podemos decir que la RMI no ha cuajado como derecho social, pues hay una fuerte resistencia a proteger económicamente (ayudándoles a conseguir y/o mantener la RMI) a los usuarios que no demuestran una cierta actitud para “salir” de su situación. La RMI es tratada, en consecuencia, más bien como un cuasi-derecho, dado que los profesionales que la gestionan no actúan como si todos los ciudadanos tuvieran derecho a ella y manejan una visión un tanto reduccionista (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 107) o “selectiva” (Aguilar,

³⁶ En el texto publicado por la Consejería de Integración de la Comunidad de Madrid (1990: 21) para presentar el IMI se incide en recordar, así, que el IMI “no fomenta la vagancia ni la pasividad. Al contrario, el receptor del IMI debe adoptar una actitud activa sobre su vida cotidiana a través del Contrato de Integración”.

Laparra y Pérez, 2003: 22) de la inserción social, puesto que la entienden casi exclusivamente como la participación de los beneficiarios (afectados por la exclusión social) en alguna actividad que contribuya a promoverla a título individual.

Por tanto, se puede concluir que a pesar de que el discurso sobre las rentas mínimas de inserción ha cambiado a nivel internacional, introduciéndose en él la noción de derecho social de solidaridad ante situaciones de necesidad, el contexto de aplicación de estas políticas sociales es –también a nivel internacional– cada vez más proclive al lenguaje de la contraprestación, adquiriendo el principio de reciprocidad mayor peso en la gestión de estas rentas.

1.1 Las rentas mínimas en el Estado Español

La RMI forma parte de las prestaciones y de las ayudas que las Comunidades Autónomas establecen en el marco de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, no existiendo una ley de rentas mínimas o de salario social a nivel estatal y, como se ha dicho, variando los requisitos y las cuantías de las mismas entre unas comunidades autónomas y otras. Ello está relacionado con la inexistencia en España de una ley de Servicios Sociales de carácter estatal. Por tanto, cada comunidad autónoma, en virtud de las competencias asignadas en su Estatuto de Autonomía, ha desarrollado sistemas paralelos de “promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención” (Decreto 147/2002: 4).

El hecho de que el sistema de rentas mínimas haya sido desarrollado por los poderes públicos regionales, y no por el gobierno central, es considerado por algunos autores como “bastante atípico”, puesto que en España se ha dado, además, una oposición del gobierno central –independientemente de quien gobernara– a la instauración de un sistema de esta índole³⁷, quien se ha negado durante mucho tiempo a intervenir en ese espacio de la protección social (Aguilar, Laparra, y Gaviria, 1995: 34-61; Arriba, 1999; García, Losa y Esteban, 2005: 99; Arriba, 2007). Se puede recordar a este respecto una frase con la que el ministro de Asuntos Sociales expresó, en 1988, su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno Vasco de instaurar un programa de rentas mínimas: hay que “enseñar a pescar en lugar de dar

³⁷ Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 34-61) indican que, a lo largo de los años 80, tanto el gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) como el del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevaron a cabo distintas reformas de la Seguridad Social, pero no se plantearon en ninguna de ellas la incorporación de prestaciones del tipo de rentas mínimas de inserción.

el pez”; aforismo que a partir de entonces acompaña el debate sobre los programas de renta mínima en las distintas comunidades autónomas³⁸ (Arriba, 2001: 180).

Entre 1989 y 1992 nacieron, en la mayor parte de estas comunidades autónomas, una serie de programas conocidos popularmente bajo el nombre genérico de salario social³⁹. Estos programas, dirigidos a luchar contra las situaciones de necesidad económica más extremas, tomaron –salvo excepciones– formas similares a las llamadas rentas mínimas de inserción⁴⁰. Es más, el proceso de generalización de estas rentas por todo el país fue bastante rápido, pues tuvo lugar entre el año 1989, en que el País Vasco regula la primera renta de inserción, hasta 1995, cuando se establece un dispositivo de este tipo en las Islas Baleares, última comunidad autónoma que quedaba sin hacerlo (García, Losa y Esteban, 2003: 99-101). Estos programas constituyen lo que algunos autores han denominado “una realidad peculiar” (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 31), caracterizada por su difícil encaje en un sistema de protección social parcialmente descentralizado, por su heterogeneidad (incluyéndose, entre las personas destinatarias, desde las que no pueden trabajar hasta las que tienen dificultades para ello o las que están en situación de pobreza), y por actuar sobre un sector de la población pequeño y mal conocido desde el punto de vista de las políticas sociales, esto es, el de quienes están en situación de exclusión social.

El País Vasco comenzó con un Ingreso Mínimo Familiar, que modificó para pasarlo a llamar Ingreso Mínimo de Inserción, siendo Castilla y León la segunda comunidad autónoma que dispuso de una normativa específica en esta materia, seguida de Cantabria, Cataluña, La Rioja, Navarra, Madrid, Valencia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Asturias, Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Aragón, y con bastante retraso, Baleares⁴¹. Una de las

³⁸ Uno de los libros más conocidos que compara la implantación de las políticas de rentas mínimas en las distintas comunidades autónomas lleva por título *La caña o el pez* (ver Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995), haciendo una referencia clara a ese aforismo.

³⁹ Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 51-52) aseguran que el término salario social puede llevar a equívocos, puesto que las rentas mínimas no son salarios “salvo en los casos de empleo social protegido”. Indican que el término salario social se ha venido utilizando por diversos autores para designar el conjunto de prestaciones en servicios y transferencias que complementan el *salario monetario*, lo cual añade confusión al uso de este concepto.

⁴⁰ Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 55-107) hacen un análisis de los distintos programas de rentas mínimas a nivel Estatal y sostienen que los de comunidades autónomas como Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cantabria pueden ser catalogados como “programas de ayudas económicas regladas, con un grado de desarrollo muy reducido y criterios muy restrictivos” (p. 57). Por su parte, autores como García, Losa y Esteban (2005: 100-101) indican que salvo en el País Vasco, los programas de rentas mínimas no nacieron de un planteamiento del problema de la pobreza extrema y la exclusión social ni de una reflexión sobre cómo abordarla. En muchos casos, su instauración se produjo por la inercia generada a causa del peculiar proceso político-sindical de negociación. En general, según sostienen, en el nacimiento de estos programas se apreció “una falta de referencias políticas claras”

⁴¹ Un análisis cronológico tanto del proceso de implantación de las rentas mínimas en el Estado español, así como las características comunes de estas prestaciones, se encuentra en García, Losa y Esteban, (2003) y en Aguilar, Gaviria y Laparra (1995).

características comunes a todos estos ingresos mínimos de inserción es que se dirigen a las personas que —como se ha dicho— sufren exclusión social:

Por razones no catalogables médicamente como minusvalía, que pueden abarcar desde la baja cualificación y adaptabilidad para el empleo hasta la acumulación de problemas sociales (marginalidad), de salud (enfermedades mentales o físicas crónicas, drogodependencia, alcoholismo). (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 45)

Tienen carácter subsidiatorio o complementario (con respecto a las prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, si se tiene derecho a alguna prestación de la Seguridad Social, la renta mínima no es concedida y, para acceder a ella, se debe demostrar un nivel de ingresos inferior a un determinado baremo (Arriba, 2001: 177)⁴². Otro de los rasgos comunes de los diferentes sistemas de rentas mínimas de las comunidades autónomas es el condicionamiento del disfrute de la misma a las disponibilidades presupuestarias de acuerdo con las dotaciones aprobadas anualmente por las diversas Asambleas Regionales. Ello introduce un elemento de inestabilidad y excepcionalidad en la protección otorgada, que impide la consideración del ingreso mínimo de inserción como un auténtico derecho subjetivo al que pueda tener acceso toda persona que reúna los requisitos exigidos (de edad, residencia, insuficiencia de rentas, etc.).

Varios autores (como Ayala Cañón, 2008 o Renes y Lorenzo, 2007: 8) hacen referencia a los problemas de inequidad intraterritorial detectables en las prestaciones sociales españolas, que se manifiestan, por ejemplo, en uno de los criterios que se estipulan para acceder a la renta mínima: la demostración de residencia habitual en la correspondiente comunidad autónoma. Así, Madrid exige acreditar una residencia de un año, mientras que hay cuatro comunidades que tienen condiciones más restrictivas: una requiere 36 meses (Canarias) y las otras tres, 24 meses (Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra). Sólo Baleares aligera esta condición al reducir el tiempo exigido a 6 meses. El requisito de la residencia se establece debido a la preocupación existente frente a posibles migraciones desde comunidades limítrofes. La necesidad misma de interponer este tipo de precauciones revela que hay diferencias en la protección social lo suficientemente importantes entre territorios próximos como para convertirse en factor estimulante de una movilidad artificial intraterritorial y, por ende, muestra una falta de coherencia en el diseño de los mecanismos asistenciales. Esto es lo que dice Luis Ayala Cañón:

El desarrollo completamente descentralizado de los sistemas de rentas mínimas ha dado lugar a diferencias notables en la cobertura que reciben hogares con similares necesidades pero residentes en zonas distintas del territorio nacional. Dichas diferencias son crecientes y guardan un vínculo claro con la capacidad económica de cada área geográfica, de tal forma que las regiones con más

⁴² Aguilar, Gaviria y Laparra (1995) afirman que se encargan de “taponar” los huecos que deja la Seguridad Social.

recursos son las que ofrecen las cuantías más elevadas y las que realizan un mayor esfuerzo presupuestario. (Ayala Cañón, 2008)

Y en la misma línea, la Fundación Luis Vives (2008: 33) hace hincapié en la existencia de “desequilibrios territoriales extremos” que afectan al cálculo de la cuantía económica de la prestación, volviéndola insuficiente para la subsistencia.

Otro elemento que los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas españolas tienen en común consiste en que, en todas las normativas autonómicas vigentes en la materia, se impone a los destinatarios la obligación de suscribir, en el momento de formular su demanda de prestación, un "compromiso de inserción" para la realización de actividades de promoción personal y socio-profesional (en el sentido expresado más atrás). Asimismo, varias comunidades autónomas (Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra) establecen el deber de escolarizar a los menores de dieciséis años, a pesar de que esta escolarización es ya obligatoria con independencia de la normas que afectan a las rentas mínimas. En algunas comunidades autónomas, no así en Madrid, se pide a los perceptores de éstas que demuestren una conducta favorecedora del proceso de integración social, utilizando para ello diferentes fórmulas. Así, Asturias y País Vasco demandan "actuar diligentemente para evitar el agravamiento de su situación"; Castilla-La Mancha requiere "poner de manifiesto un cambio de actitudes, en su comportamiento personal y familiar, que impidan la permanencia o el agravamiento de la situación de necesidad en que se encuentran"; y Castilla y León exhorta a los usuarios a "intentar superar la situación en que se encuentran" (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995).

Puede decirse que las rentas mínimas son prestaciones económicas concebidas, al menos en el plano de la intencionalidad política, para que ningún ciudadano se quede sin nada para vivir y marcan un nivel mínimo de la protección social (Milano, 1990). En España las diferentes rentas mínimas de inserción comparten algunas de las características básicas señaladas por Euzéby (1989) para este tipo de prestaciones, que posibilitan que respondan a esa intencionalidad (son complementarias al sistema de protección social, estableciéndose como última red protectora, son prestaciones con carácter universal, tienen carácter de derecho o cuasi derecho y su finalidad es cubrir necesidades básicas en situación de necesidad). No obstante, existen suficientes diferencias entre las distintas comunidades autónomas, sobre todo en lo que se refiere a las restricciones y a los requisitos de acceso, tal

como se ha dicho, como para que se haya llegado a cuestionar que todas ellas puedan ser consideradas rentas mínimas de inserción⁴³.

1.2 El Ingreso Madrileño de Integración, predecesor de la Renta Mínima de Inserción en Madrid

Es conveniente describir escuetamente, antes de centrarse en el funcionamiento de la RMI, la dinámica del programa predecesor, el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), dado que algunas de las contradicciones o dificultades que ya aparecían en éste (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003; Arriba y Serrano, 2002; Serrano y Arriba, 1998; Arriba, 2001) siguen siendo claves a la hora de comprender la intervención profesional en el actual programa RMI⁴⁴.

El IMI fue un programa puesto en marcha por la Consejería de Integración social de la Comunidad de Madrid (CM) a mediados del año 1990 (en julio de este año se publicó el decreto regulador y, de forma paralela, se firmaron los convenios con los Ayuntamientos para que se pudiera llevar a término), que compartía una serie de rasgos con los otros programas de rentas mínimas de inserción de aquella época:

- Tomaban como unidad de referencia la unidad familiar o de convivencia.
- La edad del titular oscilaba entre los 25 y los 64 años.
- Para acceder a ellos, se debía mostrar un nivel de ingresos inferior a un determinado baremo.
- Todos incluían algún mecanismo encaminado a restringir la movilidad entre comunidades autónomas mediante la exigencia de periodos previos de residencia en ellas.
- La concesión se hacía por un periodo de tiempo determinado.
- Vinculaban la prestación económica a acciones de inserción que se establecían explícitamente con carácter de contrapartida.
- Eran incompatibles con ingresos que fueran más allá de la cuantía mínima de la prestación que concedían (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1996, 1996; CES, 1996).

⁴³ En especial, si se las valora de acuerdo a los elementos definitorios expuestos por Arriba (2001b: 177-178).

⁴⁴ Aquí se contraponen las características del IMI a las de la RMI con objeto de mostrar, por un lado, los elementos que diferencian estos programas de rentas mínimas y, por otro lado, aquellos otros que, provenientes de la dinámica de implantación del IMI, han sido heredados por los trabajadores sociales que aplican actualmente la RMI. Soy consciente de que, por ello, he obviado aspectos que dan cuenta de las similitudes entre ambos programas, presentando, en cierto sentido, un esquema con tintes dicotómicos. No obstante, he optado por hacerlo así en aras de clarificar un tipo de continuidades y discontinuidades difíciles de entender en su justa medida si no se remiten a los contrastes entre los dos modos imperantes de intervención social en los tiempos de aplicación de cada una de estas prestaciones sociales.

Los Proyectos de Integración comenzaron a gestionarse en 1991. Eran un conjunto de actividades orientadas a la promoción personal y social de los usuarios del IMI (Serrano y Arriba, 1998: 53-54); estaban gestionados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro; eran financiados, total o parcialmente, por la Consejería de Integración Social, disponiendo en aquel momento de una asignación presupuestaria de carácter anual⁴⁵; iban dirigidos a los perceptores del IMI con dificultades especiales de integración; y debían “asegurar el acompañamiento y seguimiento propios del trabajo social de las personas incorporadas al mismo” (Serrano y Arriba, 1998: 56). En el año 1996 se subvencionaron 52 proyectos de los 80 presentados (Comunidad de Madrid, 1997). De estos 52, sólo 4 fueron llevados a cabo por instituciones públicas, mientras que el resto lo fueron por entidades privadas.

En el IMI se optó por una concepción más restringida de la exclusión social que en la actual RMI. En el preámbulo del decreto que regulaba el IMI (73/1990) se afirmaba que se trataba de un programa “tendente a erradicar toda forma de exclusión extrema del funcionamiento y modo de vida normal en la Comunidad”, no de lucha contra la pobreza o la desigualdad social, por lo que desde sus inicios fue concebido como una medida paliativa de situaciones extremas. Se consideraba que los colectivos a los que se dirigía tenían, además de las carencias económicas, otro tipo de necesidades (por ejemplo, de relaciones sociales, de salud mental, etc.). Es por ello que autores como Laparra, Aguilar y Pérez (2003: 21) consideran que el IMI –a diferencia de la RMI– no pretendía garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una renta mínima, sino implementar determinadas acciones y apoyos para la inserción en un sector de población delimitado de forma discrecional por la Administración, al que se le ofrecía además una prestación económica. Estos autores añaden que, por parte del personal de Servicios Sociales, se daba una “gestión selectiva” de los usuarios del programa, mediante la cual no se permitía que solicitantes del IMI con dificultades económicas que no contasen con “determinado perfil de excluido” accedieran a la prestación económica (Laparra, Aguilar y Pérez 2003: 22 y 28). Este hecho, es decir, el que no se pudiera acceder a él únicamente por dificultades económicas, ocasionó que los perceptores “con perfil IMI” tuviesen unas características añadidas de fragilidad y marginalidad. Por ello, los mismos autores sostienen que el Ingreso Madrileño de Integración no implicaba un compromiso pleno por garantizar el derecho a unos ingresos mínimos. Así, por ejemplo, algunos trabajadores

⁴⁵ Sus actividades pueden ser: formativas (nivel educativo básico, formación de “hábitos y habilidades sociales” o cualificación profesional), ocupacionales (tareas de utilidad colectiva o rehabilitación profesional) y laborales (autónomas o por cuenta ajena).

sociales de Servicios Sociales extinguían la prestación a usuarios aduciendo como motivo el que se hubieran cumplido (“el cumplimiento de”) los objetivos de inserción, a pesar de no haber alcanzado un mínimo de ingresos económicos que les permitieran cubrir sus necesidades básicas. Esta práctica elevaba el índice de entradas y salidas de usuarios del programa, lo que le dotaba de poca sostenibilidad⁴⁶ a largo plazo, aspecto éste que jugaba en contra del propósito de la integración social. Otras autoras (Serrano y Arriba, 2001: 259-260) mantienen que el objetivo del IMI, la integración social, se concretaba en la consecución de suficiencia económica y también de autonomía personal, y el eje ideológico que articulaba lo que debía ser dicha integración era el trabajo como elemento básico de pertenencia a la colectividad y de participación social.

Desde los inicios del IMI, el colectivo gitano se encontraba entre los ocho para los que se financiaban Proyectos de Integración. Según la *Memoria de gestión* de la Comunidad de Madrid⁴⁷ correspondiente al año 1996, en la que se analiza información obtenida a partir de las hojas de seguimiento que firmaban los trabajadores sociales de Servicios Sociales cada vez que se reunían con los usuarios IMI⁴⁸, en diciembre de ese año un 19’2% de las familias atendidas pertenecían a esta minoría étnica. De hecho, fueron 26.813 familias –un total de 85.801 personas– las que, en un momento u otro de 1996, habían sido atendidas por el programa. Esto equivalía a un 1’69% de la población total de dicha comunidad (Comunidad de Madrid, 1997).

Para solicitar el IMI por primera vez, los solicitantes lo hacían en nombre de la unidad familiar con la que convivían. Los requisitos para acceder al IMI eran:

- a) Empadronamiento en el momento de la solicitud y un año de residencia en la CM.
- b) Tener 25 años cumplidos y no haber llegado a los 65 años. Se exceptuaban de este requisito las personas con niños a su cargo y los menores de 25 que participaran en un proyecto de integración.

⁴⁶ Se dice que un proceso es sostenible en la medida en que puede perdurar en el tiempo sin necesidad de ayuda externa. En el caso que nos ocupa, esto es, en la aplicación del IMI por parte de los profesionales, la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de inserción no estaba asegurada dado que, como estrategia profesional, se les suspendía a los perceptores la prestación económica, aspecto que obstaculizaba que siguieran asistiendo a las actividades de inserción.

⁴⁷ A partir del año 1996, la Consejería de Integración Social de la CM. comenzó a publicar anualmente el informe titulado *Programa Ingreso Madrileño de Integración (IMI). Memoria de gestión*, en el que se ofrecen datos cuantitativos sobre el perfil demográfico de los usuarios IMI, el número de proyectos de integración financiados, etc. Esta *Memoria de gestión* es la precursora de los actuales *Balances de gestión de la RMI* que publica anualmente la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la misma entidad.

⁴⁸ En ocasiones, utilizaremos expresiones como “usuarios IMI”, “usuarios RMI”, “beneficiarios RMI” o “perceptores RMI”, etc. para referirnos de manera sintética a los sujetos destinatarios de estas prestaciones sociales.

- c) Hasta 1994 (momento en el que se suprimió el requisito) era imprescindible tener la nacionalidad española.
- d) No disponer de ingresos económicos en cuantía igual o superior a la prestación periódica del IMI.
- e) Comprometerse a la realización de actividades de promoción personal o social.

La gestión del IMI giraba en torno a los centros de Servicios Sociales (llamados también centros de Atención Primaria), dado que se supone que son los que conocen mejor la situación de (y tienen una relación más cercana con) los potenciales usuarios o demandantes del IMI. Los solicitantes de IMI debían acudir a ellos para hacer la demanda de la prestación económica. El proceso que debía seguir quien la solicitaba por primera vez era el siguiente: los trabajadores sociales de los referidos centros valoraban, tras varias entrevistas, su situación y decidían si aceptaban la solicitud. Una vez cumplimentada ésta, se enviaba a la Dirección de Servicios Sociales (de la CM), donde un equipo evaluaba y resolvía la concesión o no de la prestación económica. Los trabajadores sociales de Servicios Sociales entrevistados, en particular los que en esa época trabajaron con población solicitante de IMI, afirman que su opinión era decisiva para que el equipo evaluador decidiera en un sentido u otro, es decir, que ellos tenían un peso considerable en la toma de decisiones a este respecto.

Una vez comunicada la concesión tanto al centro de Servicios Sociales como al usuario, comenzaba el trabajo para favorecer la integración social. El beneficiario de IMI estaba obligado, una vez concedida la prestación, a firmar lo que se denominaba “contrato de integración” o “acuerdo de inserción”. En este contrato, establecido entre los Servicios Sociales y el perceptor, se configuraban tanto las posibilidades de mejora de la situación como las actividades para conseguirla, teniendo el trabajador social un papel central en el diseño y seguimiento del mismo. Serrano y Arriba (2001: 260) exponen que la intervención social se orientaba a fomentar la integración social a través de la elaboración de itinerarios que movilizasen las capacidades del sujeto para salir de su situación de exclusión e iniciar así un proceso de inserción (Castel, 1990; Paugam, 1996). Por otro lado, los mismos trabajadores sociales antes mencionados aseguran que, bajo este programa, la posibilidad de amenazar con proceder a extinguir la prestación económica estaba casi siempre presente en su relación con los usuarios, lo que les provocaba la sensación de que la vida de éstos estaba en sus manos puesto que, entre otras cosas, podían decidir que dejaran de cobrarla. Este aspecto ha sido señalado por algunos autores (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003; Laparra, Aguilar y Gaviria, 1995) como uno de los obstáculos principales que se interponen a la promoción de verdaderos

procesos de inserción social. De este modo, si bien los requisitos de entrada para el IMI eran similares a los de la actual RMI, el papel del trabajador social cambia enormemente entre uno y otra, pues en el primero ejercía un rol considerado por el propio colectivo profesional como eminentemente autoritario.

En el IMI, la integración social de los excluidos pasaba por su inserción y por su activación a través de medidas de ayuda, disciplinamiento y control, orientadas principalmente por la ética del trabajo. El contenido de la inserción era definido, en la práctica, por los trabajadores sociales mediante la mera enumeración de las actividades (a realizar por los beneficiarios) que incluían en el contrato de integración, por lo que algunas autoras (Serrano y Arriba, 1998) han indicado que, detrás de esta concepción de la inserción social, había una falta de planteamiento teórico, lo que los trabajadores sociales resolvían del modo señalado, esto es, proponiendo y describiendo las actividades que, por lo que suponían, contribuirían a la inserción de esos beneficiarios.

Hablar de inserción social en el marco del IMI y de los Servicios Sociales implica hacerlo necesariamente del trabajo social, así como de la centralidad que, en esta área profesional, tiene “la búsqueda de la autonomización y de la responsabilización de las personas en dificultad” (Donzelot y Jaillet, 1998, en Pattaroni, 2005: 183). Así, si nos fijamos en las imágenes sobre la inserción que se encuentran apuntadas en la normativa y en la práctica profesional del Ingreso Madrileño de Integración, se puede apreciar que reflejan una concepción del trabajo social de carácter tutelar y de la inserción como un conjunto de actividades que legitiman la recepción de la prestación económica (Serrano y Arriba, 2001: 261), en el sentido de un “toma y daca” que debe marcar la relación del usuario con la Administración que le concede la prestación. Duvoux (2009: 58) plantea que la visión de la inserción como “contrapartida” al cobro de la prestación está implícita en la firma del contrato de inserción, y autores como Haber (2005: 170) se refieren incluso al “*bulldozer* del principio moral de la reciprocidad”. En el contexto español, trabajos de evaluación y comparación de los programas de rentas mínimas (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 18-20) también han señalado que uno de los déficits que minan la efectividad de los programas de inserción se encuentra en cómo están vinculados a esta “lógica de la contrapartida-penitencia”, la cual hace que los profesionales no centren su trabajo en lo que debería ser prioritario en toda política contra la exclusión social, es decir, en garantizar los derechos sociales a la asistencia y a la integración. Así, Aguilar, Laparra y Pérez (2003) afirman que el trabajo social que se implementó a través del IMI era de carácter discrecional dado que estos

profesionales tenían la autoridad para suspender el cobro de la prestación económica ateniéndose únicamente a su criterio.

De este modo, la aplicación del IMI estaba permeada por la idea de la reciprocidad obligatoria, erigiéndose el contrato de integración en la herramienta que plasmaba el compromiso de los perceptores con su inserción y recogía las distintas actividades que tenían que realizar para ello. Aguilar, Gaviria y Laparra (1995: 20) reconocen que la intervención con los excluidos “requiere en ocasiones de cierta presión terapéutica o pedagógica” que debe pasar por “hacer que las personas hagan frente a sus responsabilidades”, pero rechazan que deba efectuarse desde la imposición de penitencias o deberes inútiles. Refiriéndose a esa presión, Heredia (1983) ha denunciado, con palabras más duras, la tendencia asimilacionista de los proyectos educativos llevados a cabo en esta época con el colectivo gitano.

La obsesión por no parecer que se repetía la sopa boba o la limosna ha llevado no tanto a una preocupación por la inserción, sino más bien a su distorsión en clave de control y legitimación social. (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 20)

La asimetría entre el rol del trabajador social y el del beneficiario del IMI era patente. El primero tenía la autoridad para decidir qué tenía que hacer el segundo, mientras que éste estaba conminado a asumir lo que era diseñado y organizado para su “integración”. No se hacía referencia en el decreto IMI a que los solicitantes tuvieran voz y/o voto en el proceso de configuración de su proceso de inserción social. Sorprende, por tanto, que algunos profesionales expresen su asombro ante la falta de implicación o de motivación con la que ciertos beneficiarios vivían (y viven actualmente también con la RMI) el “tener que” participar en las actividades propuestas por sus trabajadores sociales⁴⁹.

Si en el IMI la realización de actividades de inserción condicionaba la permanencia en el programa, en la normativa de la RMI (no así en su aplicación práctica, como se tratará en otro apartado de manera más detenida) se aprecia un talante muy diferente, que se explicita a través de un vocabulario que hace hincapié en la negociación del contenido de las actividades de inserción con los demandantes de la prestación y en el carácter de derecho social de la prestación económica y de los apoyos sociales vinculados a la misma. En este sentido, la RMI surge con el objetivo de “garantizar el derecho a una renta mínima” para la ciudadanía madrileña en situación de necesidad (Aguilar, Laparra y Pérez, 2003: 21). A su vez, en ella, se les sustraen a los trabajadores sociales –al menos a nivel formal– las funciones de control y fiscalización de las actividades económicas de los beneficiarios, y se les insta a realizar

⁴⁹ Soy consciente de que esta afirmación parte del presupuesto de que la participación en los procesos de toma de decisiones favorece la motivación o grado de compromiso por parte de los participantes. Si bien no tengo datos empíricos que avalen esta idea, dado que forma de los supuestos de los profesionales, he querido señalar la incongruencia de aquellos que esperan motivación sin dar pie a que los usuarios puedan participar en la negociación.

principalmente labores de acompañamiento y/o de apoyo social, dotándoles de herramientas para “simetrizar” la relación con los usuarios. Otro cambio importante en los documentos que la regulan es la aparición de la retórica de los derechos de ciudadanía, asumiéndose que la RMI cae dentro del paraguas de los derechos a la protección social que todo ciudadano tiene siempre que cumpla determinados requisitos. Más adelante veremos cómo los trabajadores de Servicios Sociales y de ONG en contacto con la RMI son conscientes de que ésta es hoy en día un derecho ciudadano difícilmente extingible si no hay causas objetivas que lo justifiquen.

1.2.1 El IMI, y el trabajo con el colectivo gitano: el contexto de la intervención social en los 90

A pesar del carácter autoritario y discrecional que llegó a tener la práctica del trabajo social que se realizaba a través del IMI, el contexto político y de intervención social de mediados de los años 90, momento en el que surgió el IMI en Madrid, facilitó que esa práctica estuviera marcada por la cercanía con los colectivos considerados “marginados”, con los que trabajaban principalmente asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica y grupos de estudiantes y voluntarios en los asentamientos marginales. Trabajar con colectivos específicos o con lo que se denominaba “tipología de excluidos” era considerado “una innovación técnica importante” (Goizueta, 1991, en Equipo IMI, 1991). El Equipo IMI⁵⁰, pionero en la teorización sobre la importancia de sistematizar el trabajo según estas tipologías, redactó varios volúmenes para justificar el programa de su mismo nombre, desarrollando detalladas descripciones monográficas referidas a la casi veintena de tipos de excluidos a los que se suponía que este programa iba dirigido (Goizueta, 1991).

Cáritas fue una organización pionera en el trabajo con gitanos tanto a nivel estatal (Heredia, 1983) como en la CM (Perales, 1991: 218), al igual que la asociación Desarrollo Gitano (1970-1987), cuyos profesionales fueron absorbidos en buena parte, a partir de enero de 1986, por el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada en Madrid (actual Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid, conocido como el IRIS). Desarrollo Gitano surgió de grupos de estudiantes que empezaron a intervenir como

⁵⁰ A lo largo de 1990, la Consejería de Integración creó el Equipo IMI, conjunto de investigadores y profesionales que reflexionaron y realizaron las investigaciones preparatorias para la implantación del Ingreso Madrileño de Integración. Dirigido por Ildefonso Goizueta Adame, Director General, en esa época, de Servicios Sociales de la Consejería de Integración Social de la CM, estaba formado por los siguientes investigadores: Manuel Aguilar, Nieves Alonso, María Luisa Ancín, Paula Dólera, Chus Gabeiras, Mario Gaviria, Miguel Laparra, Balbina Liberal, José Luis López, Miguel Muñoz, Ramón Pérez, Lola Redolí, María Carmen Valladares, y a partir de septiembre de 1990, Kristina Alfaro, Javier Berrozpe, Concha Fernández, Javier Ferrer, Blanca Izcue, Amalia Muelas, Gloria Parra, José Antonio Perales, Isabel Pérez y Josefina Vegas.

voluntarios en los distintos barrios de Madrid, y es considerada como la asociación española de carácter civil más antigua dedicada al trabajo específico con gitanos (Perales, 1991: 214). De hecho, los primeros trabajos con gitanos realizados en la ciudad se remontan a finales de la década de los 50 y se circunscriben, como se ha apuntado, a los impulsados por Cáritas Diocesana y por esos grupos de estudiantes voluntarios que actuaban en poblados chabolistas, que constituyeron la base para la génesis, a finales de los 60, de un movimiento asociativo que jugó un destacado papel reivindicativo y sirvió para captar fondos públicos con destino al trabajo social con esta minoría étnica (Perales, 1991: 224).

A mediados de los 80 y en los inicios de los 90, es decir, poco antes de ponerse en marcha el IMI, existía un “complejo abanico asociativo”, en ocasiones “descoordinado y contradictorio” (Perales, 1991: 214), que se caracterizaba por el trabajo social de cercanía, no profesional ni identificado únicamente con los Servicios Sociales, que aglutinaba a instituciones religiosas, a voluntarios y a multitud de pequeñas asociaciones o secretariados gitanos⁵¹ con influencia inicial de la Iglesia Católica. Por tanto, el campo del trabajo social de calle o comunitario contaba más con presencia religiosa militante y laica voluntaria que con la de la Administración Pública. Fue a partir de un conflicto vecinal en el barrio de Vicálvaro, que tuvo que ver con el crecimiento de los núcleos chabolistas de ese distrito, cuando el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma y la Administración Central decidieron crear el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada en Madrid en enero de 1986.

Se trata de un periodo histórico en que se hablaba en términos reivindicativos de los derechos y necesidades de esta minoría étnica, buscándose un acercamiento a ella a través del trabajo social comunitario y considerando que se debía saber qué necesitaba e implicarla en su proceso de cambio. De este modo, se pensaba en los gitanos en tanto que agentes responsables de su propio desarrollo (Trigueros, 1995: 112-115 y 117-118). Es muy relevante que se hacía referencia no sólo a los aspectos carenciales del colectivo, sino también a los recursos comunitarios con los que contaba, aspecto este último que ha desaparecido por completo de la intervención social profesionalizada que se practica hoy en día en la CM. En los proyectos de integración que se redactaban en esta época, se mostraba interés en formar a los gitanos laboralmente en ocupaciones cercanas a sus intereses (mercadillos, talleres mecánicos, talleres de carpintería y de confección), lo que denota que eran vistos como “empleables”. Actualmente, se ha pasado a una visión multi-carencial del colectivo que enfatiza el trabajo en

⁵¹ El primero de los cuales nace en 1958.

habilidades sociales básicas (entendimiento de las normas básicas de acceso/utilización de las instituciones públicas, nociones básicas de educación para la salud, etc.), que son consideradas como el paso previo a la búsqueda de empleo. Había, en general, un clima más propenso a una pedagogización respetuosa, que trataba de fomentar el asociacionismo gitano y la formación de personas pertenecientes a éste, por considerarse que contaban con herramientas identitarias útiles para ello.

Lo anterior permite ver la existencia, por un lado, de un contraste notable entre la situación descrita y la imperante en la actualidad en el ámbito de la intervención social, que se ha profesionalizado casi por completo mientras que, en la época de instauración del IMI, tenía un carácter más heterogéneo en este sentido; y, por otro lado, de un trabajo social muy ligado a movimientos católicos interesados en intervenir con “colectivos marginados” (Perales, 1991: 213) y que no dudaban en reivindicar políticamente el cumplimiento de ciertos derechos sociales. Así, cuando se creó el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada de Madrid (de ahora en adelante, el Consorcio), que estableció las denominadas UTS (Unidades de Trabajo Social) en los asentamientos chabolistas en 1989, fue notable la colaboración que, en todo el proceso, se desarrolló entre los trabajadores sociales de esta entidad y el movimiento asociativo católico.

Por tanto, los límites profesionales entre las tareas de unos y de otros eran bastante difusos, coincidiendo todos en la necesidad de trabajar con una población que no recibía mucha atención por parte de la Administración y considerando útil aunar esfuerzos, ya provinieran de católicos de base, de estudiantes voluntarios o de personal profesional. Se partía de que uno de los papeles de los trabajadores sociales era servir como “vía de comunicación e información para que la Administración Pública asuma sus responsabilidades” (Trigueros, 1995: 117). En cambio, en el contexto actual de aplicación de la RMI, los trabajadores sociales se han vuelto Administración, siendo el brazo ejecutor de ésta en la gestión de prestaciones sociales. Abramovitz (2000) asegura que en el origen del propio trabajo social convivían dos fuerzas: una a favor de las transformaciones sociales y otra dirigida a la protección social, siendo esta tensión positiva. Sin embargo, la institucionalización y profesionalización del trabajo social están en la base de una reducción de la visión transformadora y de crítica social de los trabajadores sociales, favoreciendo una tendencia, en cierto sentido conservadora, hacia la gestión administrativa de prestaciones sociales.

En lo que se refiere a las asociaciones gitanas, que –como se ha dicho– fueron también protagonistas del trabajo social con el colectivo, varios autores (San Román, 1999; Cardiel y

Laparra, 2007: 181) han hablado de la patrimonialización por parte del Estado del movimiento asociativo gitano desde sus inicios en los años 60-70, y señalan que éste surgió en un contexto patriarcal y fuertemente familista, en el que la Administración establecía relaciones clientelares con los líderes de las asociaciones gitanas. Ello se concretaba, por ejemplo, en que la Administración otorgaba a las distintas asociaciones atribuciones para la distribución de bienes y servicios entre sus afiliados, lo que condicionaba significativamente su relación con los gitanos, puesto que el acceso de éstos a los recursos estaba supeditado a su pertenencia y/o al tipo de relación (más o menos cordial) que pudiesen mantener con la asociación y, especialmente, con sus líderes. Se da, así, una situación que pone de manifiesto, por otra parte, que tanto la Administración como las propias asociaciones o secretariados gitanos se relacionaban entonces (y siguen relacionándose hoy en día) con el colectivo casi exclusivamente a través de la distribución de recursos (becas, empleos, viviendas, etc.), aspecto que innegablemente ha condicionado históricamente la relación y ha fomentado una imagen recíproca, es decir, entre los gitanos y las instituciones públicas y asociaciones que reciben recursos de ellas, nada halagüeña.

Una diferencia que el contexto de intervención social en el que surgió el IMI presenta con respecto al actual es la relativa al despliegue de estudios descriptivos que se puso en marcha a comienzo de los años 90 para justificar la implantación del IMI. En aquel momento, al ser vista la catalogación de colectivos de excluidos como una innovación técnica, se desarrollaron esfuerzos para producir descripciones complejas de cada uno de ellos; un ejemplo de lo cual lo encontramos en el tercer volumen del informe producido por el Equipo IMI (1991: 1-280), que se dedica a la temática de la exclusión. Estas descripciones eran consideradas como el paso previo a la elaboración de Proyectos de Integración adaptados a cada “tipo específico de exclusión” (Goizueta, 1991). Más adelante se hará referencia a cómo, en el contexto madrileño del nuevo milenio, se ha sustituido el esfuerzo investigador (productor de descripciones “densas” de las formas de comportamiento de los grupos de excluidos) por la redacción de informes técnicos “ligeros” que reseñan algunos aspectos visibles de la exclusión social en barrios marginales y que concluyen con largas listas de recomendaciones de actuación parciales que normalmente sirven para legitimar el propio trabajo que ya están realizando las organizaciones productoras de cada informe. Por tanto, se puede decir que la visión actual sobre la exclusión social está muy mediada por el carácter institucional de los profesionales que elaboran dichos informes, que –por otro lado– son redactados en tiempos muy breves, no favoreciéndose perspectivas complejas y/o amplias del fenómeno de la exclusión social.

La conceptualización del colectivo gitano implicada en los estudios realizados a comienzos de los 90 se relacionaba con un intento de identificar las condiciones sociales del mismo, que eran atribuidas a la marginación y a la “desviación” de sus hábitos de conducta con respecto a lo que es considerado como “normal”.

Finalmente estarían los vendedores ambulantes sin vehículo y sin carné, los *busqueros* de vertedero, chatarreros de carro y mulo, “yonquis” y “camellos”, parados y mendigos, entre los que se encontrarían además los gitanos portugueses o trasomontanos llegados a Madrid en los últimos años. Todos ellos –o la inmensa mayoría– vivirían hacinados en chabolas o infraviviendas sin luz ni agua corriente, con importantes carencias sanitarias, los niños semiescolarizados –o desescolarizados totalmente– y en muchos casos un alto grado de desestructuración familiar. Los miembros de este grupo estarían atendidos –o no– por Cáritas, los trabajadores sociales del Consorcio –en el caso de tratarse de núcleos censados por esta entidad– o por los del Ayuntamiento correspondiente. (Perales, 1991: 213)

En las obras que, en esta época, aparecen sobre la marginación del colectivo gitano y sobre cómo tratarla desde la intervención social, la primera es concebida, desde una perspectiva mayoritariamente psicológica (Hernández, Quintana y Rodríguez, 2000⁵²), como un distanciamiento de las normas imperantes.

Es difícil ofrecer una definición operativa de marginal; sin embargo, a nuestro juicio, un individuo es marginado cuando sus valores no coinciden con las normas imperantes. (Paíno, Rodríguez y Carbonero, 2000: 24)

Y se considera que los déficits en la socialización familiar son una de las variables principales vinculadas a la marginación.

La familia es el primer agente de socialización del individuo; es la encargada, en primera instancia, de transmitir las normas y los valores socialmente aceptados. (...) Las condiciones ambientales (físicas) empobrecidas sumadas a las deficiencias familiares van a repercutir negativamente en el desarrollo y socialización del individuo, ya que las características deficitarias del hábitat físico van a dificultar la transmisión de normas y valores institucionales establecidos. (Paíno, Rodríguez y Carbonero, 2000: 24 y 36)

Así, se afirma que los gitanos forman parte de una familia que –como se dice en la anterior cita– vive en unas “condiciones ambientales (físicas) empobrecidas” que, “sumadas a las deficiencias familiares”, repercuten en la socialización infantil en un doble sentido: por un lado, porque esas “condiciones y deficiencias” dificultan “la transmisión de los valores y normas” establecidos y, por otro, porque propician un bajo nivel cultural que, al llegar los niños a la escuela (segunda institución socializadora por excelencia), es el responsable de que se produzca un alto fracaso escolar entre ellos que se traduce, a su vez, en “conductas desviadas⁵³” (Paíno, Rodríguez y Carbonero, 2000: 38).

⁵² Llama la atención que esta perspectiva aparezca avalada, en un informe financiado por el Fondo Social Europeo, por el entonces presidente de la Asociación Secretariado General Gitano, José Manuel Fresno.

⁵³ Lo que supone una clara adscripción a las teorías del déficit, expulsadas de la antropología y la sociolingüística de la educación desde la década de los 70 (ver Philips, 1972; Labov, 1985, 1969; Irvine y York, 1995; Poveda, 2011; Jociles, 2006).

Esta visión del colectivo gitano se alternaba con reflexiones críticas acerca de la pésima actuación que la Administración, en su condición de responsable de las políticas públicas contra la exclusión social, desarrollaba con él, lo que significa que a pesar del cuestionamiento que luego recibió su concepto central, el de “marginación”, el marco de análisis que se manejaba con relación al IMI era más amplio que el que ahora acompaña a la RMI. Los textos del Equipo IMI (1991) tenían en cuenta la falta de coherencia de las políticas sociales llevadas a cabo con el colectivo, así como la discriminación que el Estado había desplegado históricamente hacia esta minoría étnica, erigiéndose en parte central de los distintos análisis y propuestas. Tanto es así que en el informe elaborado por el Equipo IMI, en concreto en el volumen tercer referido más atrás, que fue presentado por el Director General de Servicios Sociales de la Consejería de Integración Social de la CM, se criticaba la “falta de voluntad política” (Equipo IMI, 1991: 37) para implementar las medidas de realojamiento de núcleos chabolistas acordadas, e incluso se afirmaba que ha sido un colectivo objeto de una política esquizofrénica. Ello pone de manifiesto que la vertiente de transformación social y de crítica a diferentes instancias, entre ellas, el organismo público encargado de estas políticas sociales, está presente en el núcleo de las reflexiones y de los trabajos analíticos que informaban su diseño, implementación y evaluación.

El trabajo social, además, era considerado de una manera amplia, incluyendo las actividades que estaban realizando las diversas asociaciones con el colectivo y asumiendo la importancia del acompañamiento social como parte esencial del mismo. En suma, era entendido como un trabajo no vinculado únicamente con los Servicios Sociales, sino también con la labor del mundo asociativo. A la par, se elaboraba una visión compleja del colectivo gitano, incluyéndose en su descripción variables analíticas como las formas de trabajo, la historia, las asociaciones en las que participaba, etc., en tanto que, como mantiene Cardiel (2007: 88), los informes actuales no dedican tiempo ni espacio a generar explicaciones que permitan ver la diversidad interna del mismo.

Por una parte, la complejidad del tema, que dificulta extraordinariamente la comprensión y diagnóstico adecuados del problema –no hay que olvidar que los gitanos constituyen en sí mismo una realidad compleja, debido a su origen y evolución histórica, a su dispersa localización geográfica, su organización en linajes, sus distintos niveles de integración, etc.–. Por otra parte, al racismo que explica muchos de los prejuicios y estereotipos que sobre los gitanos han existido siempre, y que dan hoy como resultado una imagen social muy deteriorada del este colectivo. (Perales, 1991: 224-225)

Se daba un consenso profesional en cuanto a la necesidad de iniciar medidas de “discriminación positiva” (Perales, 1991: 225) como un modo de compensar las formas históricas de exclusión social que durante siglos había sufrido el colectivo. En la actualidad,

sin embargo, los profesionales del trabajo social y/o de la intervención social profesionalizada no están de acuerdo en los beneficios que estas medidas compensatorias generan y, por tanto, en la necesidad de aplicarlas; erigiéndose en una cuestión que les provoca dilemas éticos y contradicciones (Villareal, Estivill, Aiguabella, 1997: 76). De hecho, la mayoría de los profesionales entrevistados para esta investigación son reacios a ellas dado que las identifican con la posibilidad de favorecer actitudes de vagancia, de dependencia o de discriminación con respecto a otros colectivos a los que consideran “tan necesitados” como el gitano.

A pesar de estos elementos más complejos que se manejaban en análisis que se llevaban a cabo en torno al año 90, el núcleo de la intervención profesional con el colectivo gitano se centraba en una cuestión simple (por lo que entraña de restricción y, de este modo, de simplificación del horizonte de la intervención social): el cambio de los hábitos de conducta, en el sentido de lograr que se asemejasen a los de la sociedad mayoritaria, de manera que el “proceso de modificación” de esos hábitos se entendía como parte de un “proceso de normalización”.

Cabe señalar también que el incumplimiento del contrato de integración, si no llevara aparejada la suspensión económica, podría servir para devaluar o estropear el trabajo desarrollado hasta ahora por el Consorcio y otras organizaciones, que piden *esfuerzo y responsabilidad* tendentes sobre todo a la *modificación de sus hábitos* de conducta –como un paso más en el *proceso de normalización*. (Perales, 1991: 228: 229)

El IMI se veía como una forma de trabajar desde la discriminación positiva, financiando proyectos de promoción del colectivo que ya se habían puesto en marcha desde el mundo asociativo, creando nuevos Proyectos de Integración en núcleos donde no existían y sirviendo como prestación económica que permitiera paliar las carencias en este ámbito. Aun así, los profesionales que trabajaban con el colectivo gitano recelaban de la incidencia perniciosa que una política pública como el IMI podría tener en él, puesto que manejaban una representación de dicho colectivo como excesivamente dependiente de las prestaciones sociales. Así, consideraban que una aplicación estándar del IMI podría producir efectos perversos, por lo que afirmaban que haría falta “personal suficiente y preparado para realizar el necesario acompañamiento y seguimiento de los casos *IMI-Gitanos*” (Perales, 1991: 226). El Consorcio era el encargado de realizar estos seguimientos –principalmente con los gitanos chabolistas– en coordinación con trabajadores sociales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. También se temía que, de no ir acompañados de suspensión de la prestación económica, los incumplimientos de los Contratos de Integración por parte de los usuarios conllevaran una devaluación del programa y una desincentivación del cumplimiento de estos contratos. Ello denota, en todo caso, cautela a la hora de trabajar con el colectivo gitano.

Podría ser que la asistencia a cursos de alfabetización, o la participación en proyectos de promoción laboral, etc. se viera desincentivada –según comentan algunos trabajadores del Consorcio– si algunos gitanos o payos detectan que otros están cobrando el IMI sin necesidad de cumplir el contrato de integración. Ello, si es así –convendría no pecar en ello de excesivo puritanismo–, podría contribuir a perpetuar la dependencia y exclusión manifiesta que muchos miembros del colectivo tienen de la etnia mayoritaria, a través de las distintas prestaciones sociales de las que han sido, y son, clientes habituales. (Perales, 1991: 229-230)

Por tanto, la idea de que hay que tener “mano dura” con los gitanos, para evitar que se vuelvan más dependientes o que puedan “aprovecharse” de la prestación económica, estaba ya presente en los inicios de la aplicación del programa IMI (Hernández Jiménez, 2000: 41-80). Esta idea la encontramos no sólo en textos producidos por instituciones y ONG, sino también en artículos cuya autoría corresponde al presidente gitano de una de las asociaciones, quien recomienda lo siguiente:

En todo momento se les debería hacer saber que si no cumplen con su compromiso se les retiraría toda clase de ayuda que estén recibiendo por parte de los diferentes organismos competentes. (Hernández Jiménez, 2000: 77)

El IMI parece concebido como un señuelo para motivar al cambio, pero contiene una cierta desconfianza de fondo acerca de los efectos que pudiera ocasionar en el colectivo gitano. Aun así, se confiaba en que pudiera, por ejemplo, capacitarse para el trabajo, de manera que, en los documentos que se crearon durante su implantación, se hacía hincapié en los proyectos de promoción laboral dirigidos a los gitanos; algo que se ha perdido en la actualidad, cuando se ha pasado a primar los proyectos de habilidades sociales y alfabetización, que destinan predominantemente a las mujeres.

La diferencia entre el enfoque de la intervención social de los 90 y el del nuevo milenio estriba en que, en el primer período, la actuación con los gitanos a través del IMI partió de un intento serio de diagnóstico de la realidad social del colectivo, teniendo en cuenta la complejidad de éste y de sus problemáticas y valorando que había que hacer un esfuerzo por averiguar qué era lo que necesitaban. A pesar de ser tenidos por “marginados”, se les consideraba a la vez como sujetos con voz cuando se trataba de determinar sus necesidades. Perales (1991), autor del capítulo sobre los gitanos en el informe del Equipo IMI (1991), empieza enmarcando sus problemas en un contexto histórico, para pasar luego a establecer los diferentes tipos de gitanos presentes en Madrid y a describir el mundo asociativo en el que se insertan, para terminar reflexionando sobre las potencialidades y los peligros que el trabajo a través del IMI podría conllevar. En cambio, en los informes elaborados hoy en día dentro del marco de la intervención social, se detecta una concepción del colectivo gitano entroncada con la idea de exclusión multicarencial, que abona una imagen del mismo como resistente al cambio, aquejado de múltiples problemas-carencias y con comportamientos cotidianos

errados en diversas áreas (en prevención de la salud, en formación, en motivación el cambio, etc.), esto es, una imagen altamente estigmatizadora.

En resumen, la implementación del IMI estuvo más vinculada al asociacionismo gitano y a la militancia católica de base (y no católica, aunque en menor medida) que lo que la implementación de la RMI lo está en la actualidad. Ello ha supuesto que la intervención social en este ámbito, a la par que se ha profesionalizado, haya perdido gran parte de su potencial analítico-transformador.

1.2.1.1 IMI y estrategias de intervención de los trabajadores sociales de Servicios Sociales

En una obra sobre las estrategias de intervención de los trabajadores sociales de Servicios Sociales a través del IMI, Serrano y Arriba (1998) reflexionan sobre las contradicciones que emergen en el trabajo con población gitana, principalmente por el manejo de una “concepción de la integración como proceso único” que no tiene en cuenta sus diferencias culturales (Serrano y Arriba, 1998: 102). Estas autoras señalan que si bien algunos de los trabajadores sociales entrevistados por ellas reconocían, por ejemplo, que el mercado laboral excluía a los gitanos por motivos de rechazo étnico, también subrayaban que intervenir con ellos a través del IMI se parecía a un “tira y afloja” que acababa desgastando a todos los agentes implicados. Se puede decir, así, que trabajar con el colectivo gitano producía, ya en el periodo de implantación del IMI, cansancio y hastío en los profesionales. En este sentido, cabe señalar que los trabajadores sociales de Servicios Sociales, cuando entraban en contacto con este colectivo, demandaban de (y a veces presuponían en) sus integrantes una serie de actitudes, sentidos y prácticas que, en unos casos, son ajenos a su cultura y, en otros, pueden entrar incluso en contradicción con ella. El trabajo de intervención social con él implicaba, en línea con lo que sostienen Serrano y Arriba (1998: 109), una serie de dificultades y malentendidos que culminaban en tensión y, por ende, en desconfianza.

En parte, esa desconfianza proviene de un insuficiente conocimiento del origen de algunas de las actitudes y prácticas de los beneficiarios gitanos que, a menudo, responden a lógicas y parten de principios culturales radicalmente distintos a los que los trabajadores sociales presuponen en todo ser humano y/o en todo grupo social, es decir, que puede provenir de desconocer que la cultura no es algo cosmético y/o ritual, sino que penetra profundamente las subjetividades, los modos de pensar, sentir y actuar de los agentes sociales.

Algunos autores han tratado de dar cuenta de la distancia que se establece con este colectivo cuando se trata de trabajar con él todo lo relativo a la inserción social. Villareal,

Estivill y Aiguabella (1997) sostienen que las estrategias de integración de la etnia gitana, dedicada históricamente a nichos laborales informales (chatarra, cestería, etc.), requieren que se fomenten aprendizajes que difieren de los necesarios para participar en el mundo escolar y laboral formal. Y Fernández Enguita (1996: 20-21) afirma que lo que a los gitanos les interesa de la escuela es solamente “aprender a leer y escribir discretamente, porque lo necesitan para obtener el carnet de conducir y las cuentas porque viven en una economía de mercado”, resultando todo lo demás “superfluo para ellos”. Serrano y Arriba (1998: 103), por su parte, señalan que los gitanos desarrollaron, en el periodo de aplicación del IMI, una “cultura de la prestación” que combinaba una historia de vida en los márgenes de la sociedad, la segregación, el rechazo étnico y una relación continuada con los Servicios Sociales y otras instituciones de beneficencia. En línea con lo anterior, exponen que, para los perceptores gitanos de IMI, la búsqueda de empleo normalizado a través del INEM y de los mecanismos de la sociedad mayoritaria era algo ajeno, por lo que actividades como ir a sellar la demanda de empleo o acudir a cursos de inserción laboral, frecuentemente requeridos por el IMI, se convertían en un mero trámite por el que debían pasar para recibir la prestación. De cara al cumplimiento de sus obligaciones, para esos beneficiarios “buscar trabajo era igual que estar apuntado al INEM” de modo que –según decían– sólo desempeñarían un puesto de trabajo “si se lo dieran” (Serrano y Arriba, 1998: 105).

El desconocimiento de los trabajadores sociales y otros profesionales de las condiciones sociales, económica y culturales que dan cuenta de las prácticas y actitudes de los usuarios gitanos con los que se relacionaban guarda relación con el establecimiento de un vínculo con este colectivo sentido históricamente como problemático por los trabajadores sociales de Servicios Sociales, quienes se acercan a él –como ya se ha dicho– desde la desconfianza. Así, el supuesto de que el trabajo social ha de basarse en la confianza y el conocimiento de la situación social, familiar y económica de la población usuaria (Serrano y Arriba, 1998; Fernández y Tapia, 2007) es difícilmente alcanzable en este colectivo.

Los trabajadores sociales esperaban de los gitanos lo mismo que del resto de sus usuarios (implicación en su proceso de cambio personal, deseo de mejora individual, interés por las actividades de inserción que les proponían, etc.), por lo que les molestaba lo que referían como “la falta de motivación hacia el cambio” de estos perceptores de IMI. Se desplegaban, entonces, estrategias de intervención con los gitanos elaboradas para un colectivo que se consideraba “cronificado” en las instituciones y bajo la presión que supone tener que intervenir con ellos de manera “preventiva” (Comunidad de Madrid, 1990: 21), esto es, evitando fomentar la vagancia y la pasividad. La consigna profesional de los trabajadores

sociales era la de evitar que los gitanos “se acomodaran”, “se cronificaran” o “se enquistaran” en el cobro de la prestación, lo que supondría la desincentivación hacia el empleo o hacia las actividades educativas que se consideraban pertinentes para ellos⁵⁴.

Esta imagen del colectivo gitano como “acomodado”, “cronificado” o “enquistado” en el IMI da sentido a varias estrategias profesionales que se vienen desarrollando desde los inicios del programa. Una de ellas consiste en tratar de presionarles al cambio (de actitud, de participación en actividades de forma más sostenida, etc.) para que así dejen de depender de la prestación pues, por lo general, se les atribuía un elevado grado de incumplimiento de las contraprestaciones establecidas para el cobro del IMI. Es preciso decir a este respecto que algunos de los trabajadores sociales entrevistados que trabajaron gestionando el IMI en los Servicios Sociales indican que recibían presión de sus superiores cuando los perceptores prolongaban su estancia en el programa, lo que se aducía como signo de que no se estaba realizando una intervención adecuada con ellos

En el período de aplicación del programa IMI, el trabajo social con el colectivo gitano se centraba especialmente en controlar la asistencia de los menores a la escuela, y se dice que los padres ofrecían “muchísima resistencia” a que sus hijos permanecieran en ella más allá de los catorce años (Serrano y Arriba, 1998: 112). El absentismo escolar de los niños se convierte, de hecho, en la causa de muchas de las extinciones de la prestación económica. En general, es decir, más allá de que la causa fuera el absentismo escolar, los trabajadores sociales hacían uso de su capacidad para incidir en estas extinciones como “forma de prevenir las cronificaciones en el Programa”.

En especial, los usuarios que llevan más de tres años percibiendo la prestación son sospechosos de inactividad, de cronificación o dependencia (...). Así, cuando se tienen dudas sobre si realmente existe necesidad, si hay ingresos no declarados o si existe una actitud favorable a realizar actividades de inserción, se fuerzan las extinciones mediante contratos más exigentes o se establecen obligaciones más apegadas a la norma (por ejemplo, se extingue si faltan a una entrevista). (Serrano y Arriba, 1998: 173-174)

En un itinerario ideal, el momento de la extinción habría sido aquel en que se cumplían los objetivos marcados en el Contrato de Integración, esto es, aquel en que se habría conseguido la inserción del individuo o de la familia atendida. Sin embargo, en la práctica, la extinción de la prestación y de la intervención a través del IMI tenía lugar cuando éste o ésta

⁵⁴ Se denomina “cronificados” (Estivill, 2003: 98; Ayala Cañón y Rodríguez Coma, 2007: 76) a aquellos colectivos con una permanencia prolongada en contacto con las instituciones que gestionan las prestaciones económicas y sociales del tipo IMI o la RMI. Serrano y Arriba (1998) hablan de más de tres años cobrando el IMI. Dubet y Véréttout (2001: 409), refiriéndolo a Francia, aluden a este fenómeno usando el término “enquistamiento” y sostienen que a más tiempo cobrando la RMI, menos posibilidades de inserción laboral tienen los usuarios, puesto que se produce una disminución del capital humano al mismo tiempo que un efecto desincentivador para las empresas, que consideran como un elemento negativo llevar mucho tiempo en paro o cobrando esta clase de rentas.

conseguían ingresos superiores a los establecidos por el baremo. Serrano y Arriba también manifiestan que los trabajadores sociales de la época IMI incluso adaptaban determinados procedimientos (como retirar la prestación aduciendo unas causas que no eran las reales) para poder controlar la duración del período en que los usuarios no podían volverla a solicitar. Estas autoras ponen como ejemplo el hecho de que algunos trabajadores sociales calcularan cuándo proceder a extinguirla para que, con el tiempo que tomaba el proceso de solicitud de reincorporación (de tres meses en adelante, según la falta cometida), se pudiera hacer presión para que se escolarizara a los menores. Las siguientes palabras de una trabajadora social lo reflejan claramente:

Se habló con las familias y pasados unos meses se volvió a los colegios y de nuevo volvió a haber mucho absentismo. Se extinguieron muchos IMIs en junio y como la penalización era de tres meses se intentaba que lo volvieran a solicitar en septiembre cuando los niños tenían que volver al cole. (Entrevista a trabajadora social realizada por Serrano y Arriba, 1998: 113)

Dentro de las causas de extinción a las que recurrían los trabajadores sociales para explicar el porqué de la misma se encontraban el que los objetivos se hubieran cumplido (aunque no fuera así), el superar los ingresos económicos establecidos por el baremo, el rechazo a participar en el proceso de inserción (no firmar el contrato, no cumplir con las actividades acordadas, no comunicar cambios, no escolarizar a los menores, etc.) y la actuación fraudulenta. A partir del análisis de documentación administrativa y de la observación participante en Servicios Sociales, las autoras mencionadas destacan el hecho de que, según la falta, se daban diferentes tipos de penalización (Serrano y Arriba, 1998: 173). Así, la actuación fraudulenta o el rechazo de medidas de inserción suponían un período de penalización de doce meses antes de poder volver a solicitar la prestación mientras que, en las demás faltas, ese periodo era solamente de tres meses (Orden 234/1991, modificada por Orden 234/1991 de desarrollo del decreto). Conscientes de estas diferencias, los trabajadores sociales procuraban ser “benévolos” y apelar, para lo que cabría denominar como “extinciones punitivas” o “amonestadoras”, a aquellas causas que tenían menores penalizaciones. Estas extinciones se usaban, de hecho, como forma de presión para el cambio. Podemos ver de nuevo, a través de estas medidas, que los trabajadores sociales en el período IMI eran proclives a amonestar usando las herramientas burocráticas como forma de afianzar y expresar su autoridad ante los usuarios.

Un problema frecuente al que tenían que enfrentarse los trabajadores sociales era la demostración de algunas de las circunstancias que justificaban la extinción, conocidas por ellos pero que no se podían documentar, como eran, por ejemplo, el rechazo de medidas de inserción, la existencia de ingresos no formalizados, una composición familiar distinta a la

que aparecía en el empadronamiento o un bloqueo del proceso de integración (Ayuntamiento de Madrid, 1996). Ante estas situaciones se flexibilizaba el uso de determinadas categorías causales a las que se acudía con frecuencia para solicitar la retirada de la prestación, de manera que se terminaron convirtiendo en cajones de sastre en los que cabía de todo, como fue el caso de la que aludía al “cumplimiento de objetivos”. Ello constituye un elemento más de los que evidencian que, en el IMI, la extinción era una herramienta en manos del trabajador social para incidir en el proceso de integración social de las personas y para evitar la “cronificación”; que respondía, además, al uso de criterios subjetivos o discrecionales de los profesionales, como también reconocen Aguilar, Gaviria y Laparra (1995, 1995a).

Llegados a este punto, se puede hacer un resumen de las diferencias más significativas que presenta el IMI con relación a la prestación objeto de este estudio, la RMI, que si bien suele ser concebida como distinta, arrastra algunos de sus dilemas y “zonas grises”, como ocurre con la frustración que causa a los profesionales el intento continuado por su parte de motivar al colectivo gitano a asumir ciertos cambios y la falta de confianza que, con todo, expresan con respecto a él. Además, cabe subrayar que, en informes técnicos en los que se habla de la RMI y del colectivo gitano, no aparece incorporado lo más novedoso de ésta: que es un derecho social, de manera que se sigue hablando a este respecto como si la etapa del IMI no se hubiese acabado (tratándola como una herramienta profesional para trabajar cambios de hábitos y conductas en la población gitana). Podría afirmarse, como hipótesis plausible, que la aplicación del Ingreso Madrileño de Integración ha creado escuela, favoreciendo ciertas estrategias y cierto estilo profesional en el trabajo con el colectivo gitano que cuesta dejar atrás.

Como ejemplo de ello, en los mencionados informes elaborados ya en la etapa la RMI (ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006; SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006), cuando se hace referencia a la asistencia a clases de alfabetización por parte de los usuarios gitanos, se alude a la supuesta obligatoriedad de la misma como “contraprestación” al cobro de la RMI⁵⁵. La siguiente cita, que no deja lugar a dudas a este respecto, pertenece a una directora de Centro de Servicios Sociales:

Un ejemplo: enviamos a una persona perceptora de una renta mínima a un proyecto de búsqueda de empleo porque el cobro de la renta mínima *exige* una contrapartida, porque obtener un empleo es una buena forma de prescindir de la renta mínima, porque su programa individual de inserción *así lo exige* (explicaciones todas ellas dentro de la racionalidad de funcionamiento del medio, la renta mínima). (Molleda, 2007: 142)

⁵⁵ En Ayala Rubio (2009) analizo cómo se construye la obligatoriedad en la aplicación de esta política social.

Por tanto, si uno lee estos informes y estas obras sin haber estudiado las características fundamentales de la RMI, deduce fácilmente que la intervención con el colectivo gitano hace necesaria la utilización de estrategias educativas coercitivas, siendo el uso de la presión a través de la RMI una de ellas. Por otro lado, en ellos no se dan elementos de análisis que permitan contextualizar el porqué de esta situación y se construye una imagen de este colectivo como carente no sólo de formación, sino de interés y motivación para la consecución de la misma⁵⁶.

El “problema gitano” aparece, así, presentado de manera mucho más simplista que en los años 80-90, dado que no se realizan esfuerzos de teorización o de mayor descripción de las formas de hacer, sentir y pensar o de la situación de los miembros del colectivo con los que se trabaja, propagándose afirmaciones muy estigmatizantes y sin contextualización alguna. En los referidos informes, no se llevan a cabo esfuerzos explicativos sobre este modo de intervención, lo cual sugiere que el intercambio de dinero (la RMI) por asistencia a cursos de formación es un método legítimo para intervenir con la población gitana. Planteamientos de esta índole, que recuerdan al periodo IMI, determinan –como se ha dicho– el contexto de intervención en el periodo actual. Sin embargo, como trataré en el siguiente apartado, la ley que regula la RMI no permite forzar la asistencia a actividades, sino que pretende abrir la puerta al establecimiento de una negociación activa entre profesionales y usuarios en el diseño de las actividades de inserción incluidas en el Programa Individual de Inserción (PII)⁵⁷. Un elemento clave que no se puede perder de vista para entender cómo la ley concibe la RMI es el establecimiento –ya mencionado– de esta prestación como un derecho social que, por serlo, no puede ser retirado discrecionalmente. En este sentido, mediante la RMI se trata de desvincular, al menos *a priori*, la función de los trabajadores sociales de Servicios Sociales de todo aspecto relativo al control del fraude y/o a los procedimientos de extinción de la prestación económica. Se pretende, por tanto, que el núcleo de su intervención –a diferencia de lo que ocurría en el periodo IMI– sea el acompañamiento social de las personas perceptoras de la RMI, y se incide en que el incumplimiento de las actividades de inserción no condicione la permanencia de las personas en el programa de la RMI. Se hace hincapié, así mismo, en que este nuevo rol profesional para la intervención social ha de incluir un alto grado de co-diagnóstico y negociación con los usuarios de las medidas de inserción y del

⁵⁶ Esta misma imagen de la población gitana como desmotivada para la formación educativa se encuentra en el informe reciente producido por ACCEM y la Fundación Secretariado General Gitano (2010: 64), a su vez que en el libro de Villarreal, Estivill y Aiguabella (1998).

⁵⁷ En Ayala Rubio y García García (2009) analizamos las contradicciones profesionales de la gestión de la RMI y algunas de las resistencias de los usuarios gitanos ante las ambigüedades de la intervención profesional.

momento oportuno de implementarlas (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003: 41 y 2003b: 86). De este modo, como se sostiene en las investigaciones de base que sirvieron para diseñar la RMI, se busca superar “el enrarecimiento de la relación entre profesionales y personas usuarias” (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003b: 86) eliminando las funciones de fiscalización y de control de requisitos que antes tenían los trabajadores sociales. Por tanto, se puede decir que la RMI nace con una vocación distinta a la del IMI.

1.3 La RMI en la Comunidad de Madrid

La ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, promulgada a finales del año 2001, reconoce y garantiza a los ciudadanos madrileños dos derechos sociales: por un lado, la asignación de una prestación económica a las personas que cumplan determinados requisitos y, por otro, el derecho a la inserción social, el cual se hace efectivo mediante apoyos personalizados para la misma (Ley 15/2001:1). Esta prestación sustituye y amplía la anterior, el Ingreso Madrileño de Integración, que se encontraba únicamente regulado a nivel de decretos⁵⁸, dotando a la RMI de un mayor rango jurídico y situándola “en el contexto más amplio de los sistemas públicos de protección estatales, en cuanto que viene a proteger situaciones de desvalimiento o especial vulnerabilidad no previstas en aquellos” (Decreto 147/2002: 4).

Así, mediante el reconocimiento de los dos derechos mencionados (prestación económica y apoyos sociales para la inserción social) se establecen criterios para la concesión de la prestación y nuevos mecanismos de gestión de la misma, suponiendo a nivel formal una garantía para los ciudadanos, ya que al ser una prestación garantizada por derecho puede ser reclamada y exigida por cualquier persona que cumpla los requisitos (Alonso, 2002). Por tanto, se puede decir que si el IMI estaba considerado por algunos como un cuasi-derecho (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 62), dado que en ocasiones se otorgaba (o se mantenía) con restricciones o bajo condiciones que –como se ha visto– se planteaban como

⁵⁸ Decreto 73/1990, de 19 de julio, que regula el Ingreso Madrileño de Integración. (BOCM de 28 de septiembre de 1990); Decreto 80/1990, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 73/1990, de 19 de julio, que regula el Ingreso Madrileño de Integración (BOCM de 28 de septiembre de 1990); Orden 178/1991, de 22 de marzo, de la Consejería de Integración Social, que desarrolla los Decretos 73/1990, de 19 de julio, y 80/1990, de 20 de septiembre, reguladores del Ingreso Madrileño de Integración (BOCM de 11 de abril de 1991; corrección de errores: BOCM de 22 de abril de 1991); Orden 234/1992, de 4 de mayo, de la Consejería de Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 21/1992, de 24 de abril, relativo al Ingreso Madrileño de Integración (BOCM de 4 de mayo de 1992).

contraprestaciones, la RMI ha convertido los apoyos a la inserción⁵⁹ en derecho de protección social.

Lo esencial de la ley de la RMI se refiere al reconocimiento y desvinculación, a nivel formal, de los dos derechos, estableciendo una nueva relación entre dos lógicas, la de la prestación económica y la de las actividades de inserción o apoyos sociales, y admitiendo incluso que, en ocasiones, la RMI debe concederse sin mayores condicionamientos (Ley 15/2001: 9)⁶⁰.

La relación entre prestación económica y actividades de inserción deberá plantearse de un modo diferente. Aun dentro del marco de las llamadas rentas mínimas de inserción, es preciso admitir de partida que una parte de los perceptores no necesitará de ninguna o casi ninguna acción de inserción. Para ellos la renta mínima no supondrá más inserción que un seguimiento preventivo mínimo (estar a su disposición por si se complican las cosas). (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003: 41)

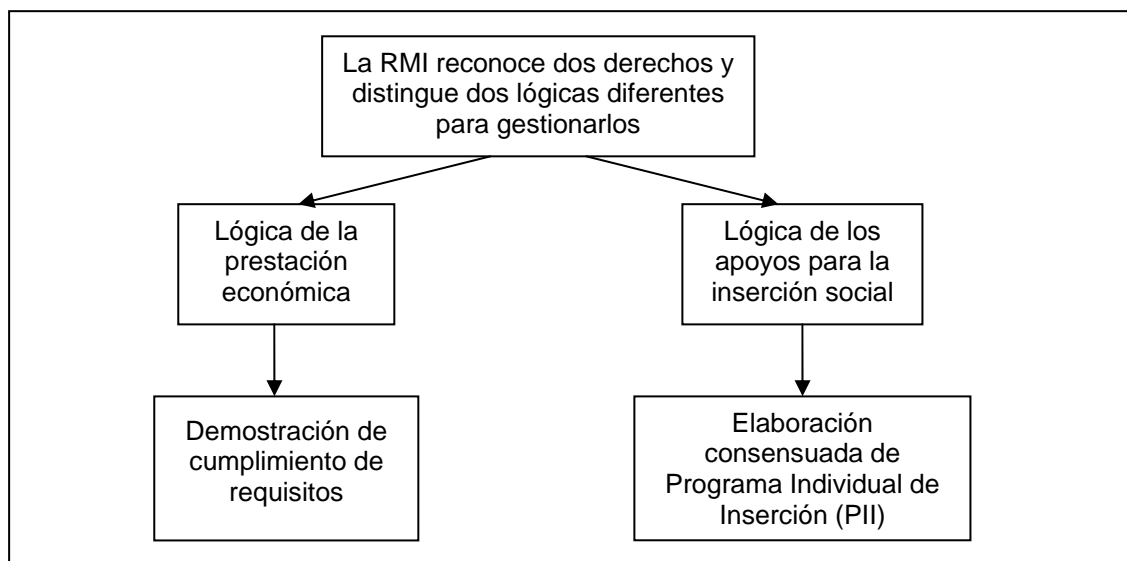
Esta separación entre las dos lógicas (ver la Figura 1) aparece mencionada, sin embargo, únicamente en la exposición de motivos de la ley (Ley 15/2001: 10), no quedando en este texto especificada herramienta alguna que materialice protocolos o actuaciones concretas para su puesta en práctica. Por su parte, el Reglamento de la RMI explicita que los Centros de Servicios Sociales son los encargados de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación, pudiendo solicitar datos e informes a los organismos competentes para “recabar la veracidad de la documentación presentada por el solicitante y su adecuación a los requisitos” (Decreto 147/2002: 42). En la práctica, y aunque no lo mencione el citado decreto, son los trabajadores sociales de Servicios Sociales los que realizan esta labor, por lo que la separación entre las dos lógicas que se afirma en la ley se dificulta debido a la coincidencia de funciones referidas a ambas en la figura del trabajador social. Éste, en cierto sentido, sigue desarrollando quehaceres relativos al control de los requisitos para acceder a la RMI, por lo que los solicitantes pueden fácilmente percibirle como alguien con autoridad para influir en la concesión o retirada de la prestación económica. En todo caso, a diferencia de lo que sucedía en el período IMI, en el que –como ya se ha indicado– los trabajadores sociales de Servicios Sociales tenían voz y voto en las retiradas o denegaciones de la prestación económica, tanto en la ley como en el decreto que regulan la RMI se indica que será la Consejería competente de la Comunidad de Madrid la

⁵⁹ En los tiempos de la RMI, a diferencia de la época de implementación del IMI, hay una preferencia por el término “inserción” y un rechazo del término “integración”, adjudicándose a éste connotaciones negativas relacionadas –como se ha apuntado más atrás– con tentativas de asimilación y homogeneización de las personas con dificultades a partir del uso de un modelo implícito basado en la población considerada “normal” (Martínez Román, 2001: 76).

⁶⁰ La compleja naturaleza del vínculo entre renta mínima e inserción se aborda desde las concepciones más abiertas, como la del “*doble derecho*” (derecho a la renta mínima y derecho a la inserción social), hasta las más autoritarias, como la de la inserción como “*contrapartida o condición*” para acceder a la renta mínima (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 36).

encargada, por un lado, de valorar la concesión o denegación de la prestación y, por otro, de iniciar los trámites relativos a la suspensión y extinción de la misma (Ley 15/2001: 24-27; Decreto 147/2002: 36-44). De este modo, se determina que la parte principal del procedimiento burocrático administrativo lo regule una instancia superior (la CM), siendo esto una novedad respecto al IMI.

Figura 1: Los diferentes lógicas a las que responden los dos derechos reconocidos por la RMI.



Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto innovador de la ley que rige la RMI es el establecimiento de un procedimiento sancionador. Se trata de un sistema administrativo que regula las suspensiones y extinciones de la prestación y establece una jerarquía de obligaciones y sanciones para aquellos que incumplan sus compromisos. Ahora bien, la retirada de la prestación ya no depende, en principio, de la opinión de los trabajadores sociales de Servicios Sociales, aunque éstos son los encargados de informar semestralmente a dicha Consejería sobre la participación (o falta de participación) de los usuarios en las actividades recogidas en sus Programas Individuales de Inserción. El incumplimiento de alguna de las medidas que se consignan en ellos es una de las causas recogidas en el procedimiento sancionador que generan una amonestación por infracción leve (y la acumulación de varias de ellas puede conllevar la extinción de la RMI) (Decreto 147/2002: 49). De este modo, el rol del trabajador social aparece vinculado –en cuanto “informante” o transmisor de datos sobre los usuarios a la CM– a las posibles sanciones o amonestaciones que reciban los perceptores de la prestación económica. Así, estos profesionales siguen cumpliendo una función que fácilmente se asocia –como expresan algunos beneficiarios de la RMI entrevistados– con el peligro de perderla. En

estas circunstancias, es difícil que éstos no perciban con cierta desconfianza el rol del trabajador social. Así, podemos sostener que la vinculación de su labor con la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador se convierte en un poderoso disuasivo que imposibilita el cumplimiento de algunos de sus principales objetivos; entre ellos, el de lograr establecer una relación cercana con los usuarios de la RMI que permita la elaboración (negociada y consensuada) del Programa Individual de Inserción.

Si bien es cierto que, a diferencia de lo que ocurría en el periodo IMI, los trabajadores sociales no participan en la gestión del procedimiento sancionador, no están desvinculados completamente de la iniciación del mismo. Como expondré más adelante, algunos de estos profesionales utiliza estratégicamente su función de “transmisores” de información a la CM para afirmar, delante de los usuarios, que todavía tienen cierto poder a la hora de influir en la retirada de la prestación económica toda vez que, en la práctica, no han incorporado que su trabajo de cara a la inserción social pasa por distanciarse de la utilización de esa amenaza como herramienta de intervención social. Por tanto, la separación entre las dos lógicas (a saber de nuevo: la de la prestación económica y la de apoyar para la inserción social), considerada como una de las mayores novedades de la RMI (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003: 41), es difícilmente implementable debido a la coincidencia de funciones relativas a ambos derechos en la figura de los trabajadores sociales. Una separación clara de ambas lógicas implicaría que, entre las funciones de estos profesionales, no hubiese ninguna relacionada con el control del cumplimiento de los requisitos de acceso o de salida de la RMI. Al no ser así, se les sitúa en una posición ambigua y un tanto “paradójica” (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003b: 86), ya que sus funciones no se limitan, al fin y a la postre, a garantizar a los beneficiarios los apoyos sociales dirigidos a la inserción social. Este hecho permite que los trabajadores sociales que no están de acuerdo con que la RMI se haya convertido en un derecho social que se mueve fuera de la lógica de la contrapartida (entre ellos, 5 de nuestros 8 entrevistados de Servicios Sociales), se acojan a ese papel de transmisores de información sobre el incumplimiento de los compromisos consignados en el PII con la esperanza de que, a la larga, los perceptores de la RMI puedan ser amonestados por la CM. Por su parte, los trabajadores de ONG que desarrollan los PII ayudan a expandir esta representación de los trabajadores sociales como dotados de autoridad para castigar en caso de participar en ellos. Estas prácticas de los distintos profesionales, que obstaculizan la implementación coherente de la RMI, serán analizadas en el siguiente capítulo.

Otro aspecto innovador de la ley que regula la Renta Mínima de Inserción consiste en introducir el Programa Individual de Inserción, ya mencionado, como instrumento destinado a

garantizar los apoyos sociales para la inserción social. Programa Individual de Inserción que suple a su predecesor Contrato de Integración.

El programa individual de inserción es una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión personal, social y laboral, y contribuir a la inserción social de quienes carezcan de los recursos personales o sociales suficientes para desarrollar una vida independiente. (Decreto 147/2002: 56)

En el PII se diseña la intervención de carácter integral que va a realizarse, no sólo en el ámbito de los Servicios Sociales, sino también en los de empleo, vivienda, educación, salud y cualquier otro que se estime necesario para conseguir los “objetivos de inserción”, y se concretan las acciones específicas que el perceptor de la RMI habrá de llevar a cabo “para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión social”. Así, se establece un proceso o itinerario individualizado que deberá “contar con la participación y consentimiento de las personas a quienes se dirige” (Decreto 147/2002: 56-60). Esta idea de elaboración conjunta y negociada del PII supone una ruptura con la concepción más asimétrica de la relación trabajador social-usuario que, como se ha visto, se daba en el IMI.

A fin de favorecer su eficacia, deberá contarse con la participación y consentimiento de los usuarios. (...) Cada programa individual de inserción deberá ajustarse a las circunstancias, capacidades y preferencias de las personas a quien se dirige. (Ley 15/2001: 36-37)

Entre las actividades en las que pueden participar los perceptores de la RMI, se encuentran la participación en programas de orientación laboral, de promoción social, de búsqueda de empleo, de promoción de hábitos saludables de vida, así como en los denominados “proyectos de integración”, que son definidos como:

Actividades organizadas, dirigidas a la promoción personal y social de un grupo de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión, y promovidas por Corporaciones Locales o entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. (Decreto 147/2002:63-66)

Los “proyectos de integración” los ejecutan las ONG, financiadas por la CM, con el visto bueno de los centros de Servicios Sociales, quienes deciden sobre la pertinencia de desarrollar dichos proyectos en sus distritos. La mayoría de los usuarios de la RMI gitanos, que son los sujetos que han sido estudiados para la investigación que aquí se presenta, participan en proyectos donde se trabaja la alfabetización y el desarrollo de habilidades sociales para la inserción social, y suelen acudir dos o tres días a la semana. La especificación en la ley y en el decreto 147/2002 de la necesidad de una elaboración consensuada y conjunta del Programa Individual de Inserción por parte del centro de Servicios Sociales⁶¹ y de los

⁶¹ En la Comunidad de Madrid hay 43 Centros de Servicios Sociales gestionados por los diversos Ayuntamientos (29 de ellos bajo la gestión del Ayuntamiento de Madrid).

solicitantes de la prestación es un elemento del mismo que, en principio, podría ser considerado como empoderador de esos usuarios, a la vez que como uno de los cambios más significativos con respecto a la prestación predecesora. De hecho, en la ley de la RMI se quiere fomentar una mayor implicación por parte de los trabajadores sociales en la generación de mecanismos consensuados de participación para promover así una mayor eficacia de la intervención social.

La ley de la RMI establece que la prestación económica está condicionada a que la persona encuentre un empleo, momento en que se extingue. A la vez, cualquier ciudadano madrileño tiene derecho a solicitar los apoyos personalizados para la inserción sin que, para ello, tenga que estar percibiendo la prestación económica. Por tanto, si algún beneficiario de la RMI quisiera continuar con la ejecución de las medidas del PII después de que, por cualquier motivo, se le extinguiera la prestación económica, podría hacerlo⁶². Por otra parte, la RMI es una prestación subsidiaria del resto de las acciones protectoras de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como en su modalidad no contributiva, o de cualquier otro régimen público de protección social (Decreto 147/2002: 9). Por tanto, previamente a la tramitación de las solicitudes, se ha de comprobar que los solicitantes no tengan derecho a alguna de esas otras prestaciones, dado que, de ser el caso, habrían de pedir las primero y sólo si demuestran que le han sido denegadas, pueden solicitar la RMI.

La gestión de la RMI entraña bastante dificultad debido a la complejidad de los trámites administrativos conducentes a su concesión y al hecho de que son diferentes instituciones (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) las que los realizan. Además, el establecimiento de requisitos de concesión y de un trámite anual de revisión de los mismos exige que se pida frecuentemente la entrega de documentación, además de informes de los profesionales sobre el cumplimiento, por parte de los usuarios, de las medidas que aparecen en los Programas Individuales de Inserción. Esta complejidad de los trámites ha sido señalada como uno de los principales obstáculos a la efectiva implementación de este tipo de políticas sociales. Complejidad que se ha incrementado, de modo paradójico, con la descentralización o el intento de acercar hasta los usuarios, a nivel de las Comunidades Autónomas y/o de los Ayuntamientos, procesos cuya gestión se quiso facilitar con ello (Ramírez Hita, 2003: 86, 92). Esa descentralización, sin embargo, se ha acompañado del establecimiento de jerarquías y fragmentaciones entre los distintos organismos de gestión, así como de la subcontratación de

⁶² No he encontrado ningún profesional del trabajo social que me haya relatado casos de usuarios que acudan a las actividades de inserción sin cobrar la prestación económica, de modo que infiero que, en la práctica, la lógica económica ha quedado vinculada a la lógica de inserción.

empresas y ONG para la realización del trabajo de intervención más continuado, lo que introduce nuevos elementos de complejización en la cadena de intervención social.

1.3.1 La prestación económica

1.3.1.1 Requisitos para percibir la prestación económica de la RMI

Los requisitos exigidos para poder ser titular de la prestación económica⁶³ son los siguientes:

- Estar empadronado en un municipio de la Comunidad de Madrid y residir en él un año antes a la solicitud de la prestación.
- Ser mayor de 25 años y menor de 65 (salvo en el caso de personas menores de 25 años con hijos o con personas discapacitadas a su cargo).
- Constituir una unidad de convivencia independiente antes de los 6 meses previos a la solicitud.
- Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida.
- Con carácter excepcional, y aun no cumpliendo los anteriores requisitos, pueden solicitar la prestación económica las personas en “estado de extrema necesidad” (por ejemplo, víctimas de malos tratos, con graves problemas de exclusión y en situación sobrevenida de extrema necesidad socioeconómica, siempre con informe emitido por el trabajador social del centro municipal de servicios sociales correspondiente) (Ley 15/2001:17).

1.3.1.2 La cuantía de la prestación económica de la RMI

La cuantía mensual de la prestación económica está integrada por la suma de una cantidad básica y un complemento adicional variable en función de los miembros que formen la unidad de convivencia. En caso de que alguno de los componentes de ésta esté percibiendo ingresos, se deducirá de la cuantía mensual de la prestación los ingresos mensuales que pueda percibir. El importe mensual de la prestación no puede ser superior a la cuantía establecida para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el cual fue establecido por primera vez en julio de 2004⁶⁴.

⁶³ Aunque la prestación está pensada para cubrir las necesidades básicas de la unidad familiar, únicamente puede aparecer una persona como titular de la misma.

⁶⁴ Fuente: www.ocu.org

Hasta esa fecha, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) servía de referencia para acceder a muchas prestaciones sociales, como el subsidio de desempleo, ayudas a la vivienda, becas, reducciones fiscales, etc., pero desde julio de 2004 el SMI ha pasado a tenerse en cuenta exclusivamente en el ámbito laboral, usándose para determinar la retribución salarial mínima, las garantías salariales como el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), las bases mínimas de cotización y los requisitos de acceso y mantenimiento de la protección por desempleo. El resto de los asuntos relativos a becas, ayudas para vivienda, subsidio por desempleo o prestación de renta mínima se establecen a partir del IPREM.

La cuantía del IPREM (que en 2011 era de 532,51 euros mensuales)⁶⁵ se actualiza a principios de cada año y se determina tomando en consideración, al menos, la previsión o el objetivo de inflación de los presupuestos generales del Estado. En la práctica, esto permite que, aunque suba el SMI, no lo haga en paralelo el resto de prestaciones, que ahora no se calculan a partir de él. En la Tabla 5 podemos ver una comparación del monto económico que suponen el IPREM y el SMI en el año 2011.

Tabla 5: Cuantías de prestaciones de la RMI.

	SMI	IPREM
Diario:	21,38 Euros	17,75 Euros
Mensual:	641,40 Euros	532,51 Euros
Anual:	8.979,60 Euros	6.390,13 Euros
	En el caso de los empleados de hogar que trabajen por horas, el salario mínimo será de 5,02 Euros por hora efectivamente trabajada.	IPREM en cómputo anual (que incluya prorrateo pagas): 7.455,14 Euros.

Fuente: Elaboración propia.

El SMI se ha incrementado en un 1,3% respecto al año anterior, mientras que el IPREM no ha aumentado en el mismo periodo. Por otro lado, el Baremo de la Renta Mínima de Inserción para el año 2011 es el siguiente:

⁶⁵ Fuente: Folleto sobre la RMI publicado digitalmente por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1132040462101&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977

Tabla 6: Ingresos de la prestación económica RMI por persona de la unidad familiar

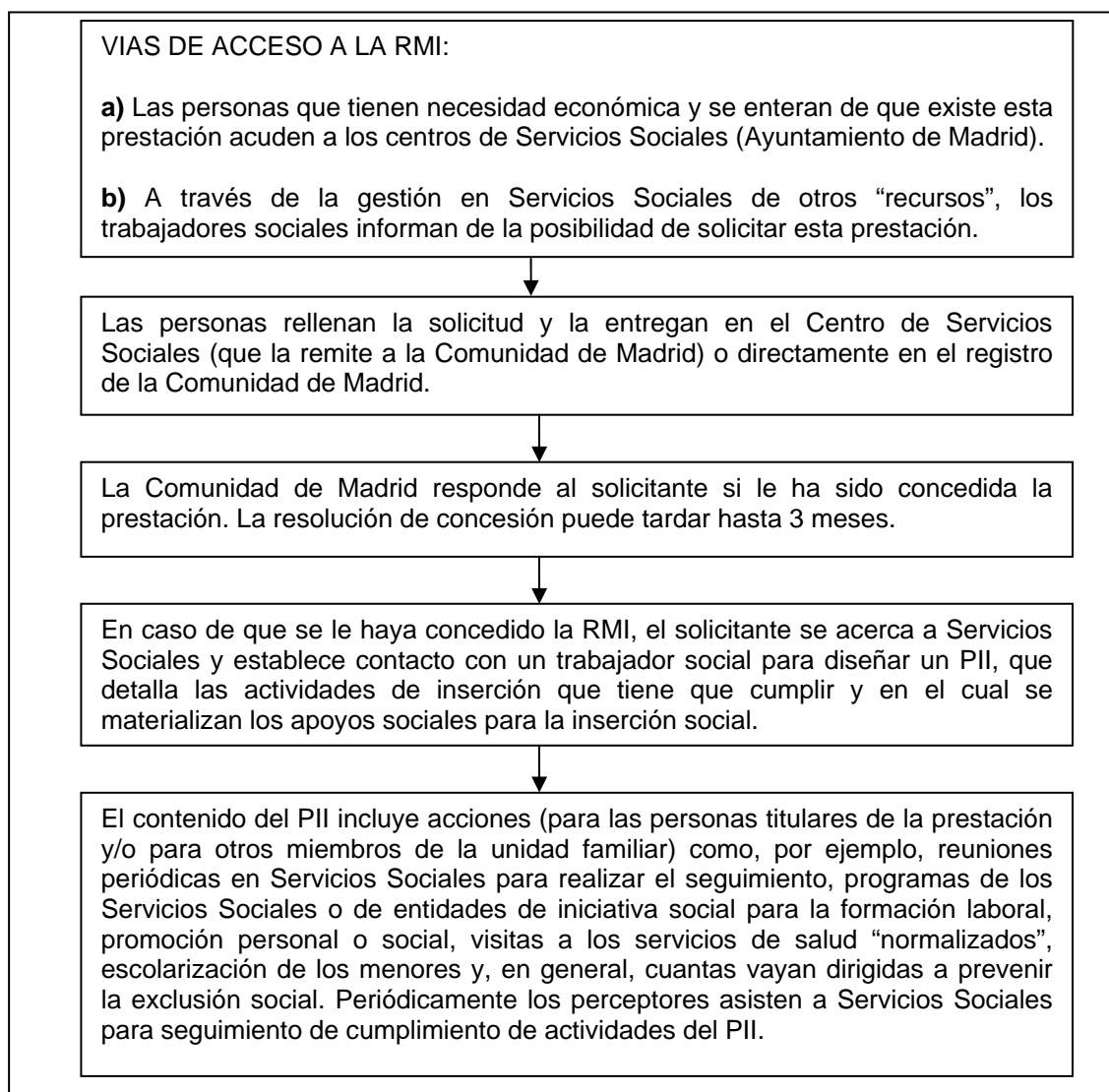
Primera persona:	375,55 Euros
<i>Complemento variable por personas adicionales:</i>	
Segunda persona:	112,67 Euros
Tercera persona y siguientes:	75,11 Euros
Tope RMI = IPREM	532,51 Euros

Fuente: www.madrid.org.

1.4 Resumen del proceso de solicitud de la prestación

El proceso de solicitud de la prestación económica de la RMI y de los apoyos sociales (definidos en el Programa Individual de Inserción) puede sintetizarse según refleja la Figura 2.

Figura 2: Resumen del proceso de solicitud de la prestación económica vinculada a la RMI y de los apoyos sociales para la inserción.



Fuente: Elaboración propia.

La gestión de la prestación se encuentra actualmente dividida entre, por un lado, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (que actúa a través del Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas)⁶⁶, encargada de valorar qué personas tienen derecho a la prestación económica y, por otro lado, los centros de Servicios

⁶⁶ La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales, es el órgano superior de la Comunidad de Madrid al que se atribuye la dirección y ejecución de la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de familia y asuntos sociales. Entre sus competencias, se encuentra el desarrollo y ejecución de las políticas de protección a la familia, servicios sociales, atención a personas mayores y fomento del voluntariado, además de la elaboración y ejecución de planes con relación a las personas con discapacidad, enfermos mentales crónicos y otros colectivos, así como la ejecución de los planes y programas de actuación que tengan como destinatarios a dichos colectivos y la gestión de las prestaciones que, en su caso, se deriven de los mismos. Corresponde igualmente a esta Dirección General la ordenación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, elaborando a tal efecto las normas, proyectos, planes y programas en dicha materia. Fuente: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/CM_Presentacion_FA/fichaConsjeria_Organismo&cid=1109168838397&c=CM_Presentacion_FA&language=es.

Sociales Municipales gestionados por el Ayuntamiento de Madrid (a través de la figura del trabajador social de zona)⁶⁷, que se hacen cargo de facilitar cuanta información y orientación sean precisas para la tramitación de la solicitud de la RMI y los apoyos sociales orientados a la incorporación social. Estos centros recogen las solicitudes iniciales de RMI y se ocupan de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación económica, adjuntando a la solicitud los documentos que acrediten el cumplimiento de los mismos. Una vez verificada la solicitud, la remiten a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CM para que valore a qué solicitantes les será concedida la prestación (Decreto 147/2002: 42-44). De este modo, los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid desempeñan un papel esencial en las demandas de RMI, que suelen ser numerosas aunque su peso no constituye la mayor carga que éstos tienen que soportar. De cara a hacerse una idea de lo que suponen las demandas de RMI sobre el total de las que se reciben en los centros de Servicios Sociales, se puede consultar la tabla 3, en donde se comprueba que en 2010, por ejemplo, representan tan sólo un 16% de las mismas.

Tabla 7: Demandas de RMI sobre el total de las realizadas en los centros de Servicios Sociales.

Demanda	Nº Demandas	% Total
1. Ayuda a domicilio	25.651	26%
2. Renta Mínima de Inserción	15.466	16%
3. Dependencia	8.939	9%
4. Centro de día para mayores	3.170	3%
5. Escuela infantil	2.776	3%

Fuente: Memoria de Actividades, Ejercicio 2010, Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Ayuntamiento de Madrid.

La Figura 2 pone de manifiesto, por otro lado, que estos centros de Servicios Sociales de los ayuntamientos madrileños tienen también otras funciones muy importantes en el proceso de la RMI, que se han ido apuntando en las páginas precedentes y que serán tratadas más detenidamente en los capítulos que siguen.

⁶⁷ Dentro del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, a la que corresponden las competencias ejecutivas en materia de familia e infancia, servicios sociales y atención a las personas en situación de dependencia. Y dentro de esta área está la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, encargada de la organización, planificación y programación de la red de servicios sociales municipales de Atención Social Primaria en el ámbito del municipio de Madrid. Actualmente en la Comunidad de Madrid se cuenta con 87 centros de Servicios Sociales de dependencia municipal: 53 gestionados por Ayuntamientos de fuera de Madrid-capital y 34 por el Ayuntamiento de esta ciudad. Fuente: Memoria de Actividades de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia 2010, Ayuntamiento de Madrid.

1.5 Algunos datos numéricos sobre los perceptores de la RMI durante el 2010

En el *Balance Anual de Gestión de la RMI 2010*, publicado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se ofrece información del número de familias que recibieron la RMI en el año 2010, siendo 13.218 familias cuando se cerró el año, bastantes más que las 10.329 que eran perceptoras en la misma fecha del año 2009. No obstante, el número total de unidades familiares que obtuvieron, en uno u otro momento del 2010, la prestación se eleva a 15.014, siendo 29.402 las familias que la han percibido desde la entrada en vigor, en el año 2002, de la Ley 15/2001 de la Renta Mínima de Inserción. Debido al incremento de la demanda de la RMI, la Consejería tuvo que pedir un aumento de presupuesto para responder al pago de todas las prestaciones. El caso es que, en el citado *Balance*, se señala el número de familias que cada mes ha recibido la prestación, oscilando entre las 10.681 de enero y las 13.218 de diciembre de 2010, fijándose la media en unas 12.119 familias, muy por encima de las 9.606 de 2009, acentuándose una tendencia al incremento en el número de familias perceptoras de la RMI.

Varios de los profesionales entrevistados durante el año 2008 en el marco de este trabajo de investigación afirmaron que, a pesar de que el índice de pobreza en la Comunidad de Madrid había crecido, los perceptores de la RMI estaban disminuyendo. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, un trabajador social que, desde su cargo de técnico de la Comunidad de Madrid, se ocupa de valorarlas, y cuyas palabras se reproducen en la siguiente cita etnográfica. Sin embargo, en el contexto actual de pérdida de empleo, se observa que, en efecto, se está produciendo un aumento de las familias madrileñas que solicitan esta prestación económica.

En el 2006, eran unos 10.500-10.700 perceptores los que estaban en ese momento dados de alta. Actualmente ha bajado en unos 2.000 perceptores. Estará en unos 8.700-8.500. Se ve que hay un descenso bastante amplio. Ese descenso ocurre por una cosa muy concreta: porque desde hace 3 años se está procediendo a una revisión anual, que exige una declaración perceptiva de ingresos y de mantenimiento de requisitos, que muchas personas dejan de enviarlo o acreditarlo y supone su suspensión o su extinción. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Y esto otro es lo que nos narra una trabajadora social que trabaja en un sindicato y fue entrevistada también en 2008:

Hoy por hoy, en Madrid, están recibiendo la RMI 10.700 personas aproximadamente. Estamos hablando de una diferencia de 17.000 familias (con respecto a la previsión que se hizo cuando se diseñó la RMI), o sea, no se ha llegado ni al 50% de la previsión. Entonces, es un dato significativo que en la CAM haya habido un crecimiento económico importante, que significa que se puede ralentizar la demanda, pero curiosamente la demanda no crece, está estancada. No aumenta, no hay nuevas solicitudes. Las solicitudes que hay son mínimas. (Entrevista a trabajadora social contratada por uno de los principales sindicatos de la CM, 38 años)

En cuanto a la distribución territorial de la prestación durante el año 2010, los distritos de la CM con más familias perceptoras son, según el citado *Balance*, Puente de Vallecas (con 1.601, lo que supone un 18,45% del total de la ciudad), seguido de Carabanchel (con el 10,89%: 945 familias), Usera (con el 9,40%: 816 familias) y Latina (con el 6,53%: 567 familias), pero son los municipios del sur del área metropolitana los que tienen una mayor presencia en la RMI, con el 59,01% del total de familias de la misma.

El presupuesto inicial para atender el pago de prestaciones económicas de la RMI en el año 2010 fue de unos 48.000.000 euros, habiéndose tenido que ampliar el crédito a 11.741.000.00 más para garantizárselo a todas las personas demandantes que acreditaron el cumplimiento de requisitos (modificación aprobada por el Consejo de Gobierno el 9 de septiembre de 2010). Por tanto, a diferencia de lo que sucedió –por ejemplo– en 2007, cuando el presupuesto inicial no fue totalmente utilizado dado que habían disminuido los perceptores respecto al 2006, en el 2010 hubo un claro incremento respecto al 2009.

En lo que atañe al perfil demográfico de los perceptores de la prestación, la mayoría son mujeres, que representan el 61,92% en el año 2010 en tanto que los varones suponen un 38,08%. Se trata de una población joven, siendo el 59% menor de 45 años. La edad media de los titulares de la RMI se sitúa en 42,5 años, y son las mujeres el grupo más joven, con poco más de 41 años frente a los casi 45 de los varones. Un 36,87% son familias con menores a su cargo, en su mayoría constituidas por mujeres con responsabilidades familiares no compartidas (26,14%), por mujeres con menores a cargo (13,87%) o por parejas también con menores a cargo (22,31%). Las personas solas mantienen una presencia significativa en la RMI, representando un 32,89%. El nivel de instrucción de estas familias es bajo, siendo analfabetos hasta un 11,72% de los titulares de la prestación. Un 63,89% presenta niveles de instrucción por debajo del Graduado Escolar, un 19,73% tiene el título de Graduado Escolar y un 15,36% supera dichos estudios. De estos últimos, el 2,77% dispone de estudios universitarios. Son las mujeres quienes presentan mayores niveles de analfabetismo, puesto que las que no saben leer ni escribir suponen un 13,85% del total de mujeres titulares de la prestación, mientras que ese porcentaje es sólo de un 8,26% entre los hombres.

La mayoría de las personas que perciben la RMI son parados (70,73%), estando el 12,50% en busca del primer empleo. Un 82% del total de hombres se encuentra en esa situación mientras que, entre las mujeres, el paro alcanza a un porcentaje menor (a un 63,7%), si bien una proporción mayor de ellas (un 16,40%) busca su primer empleo. En cuanto a la vivienda, la mayoría de las familias perceptoras de la RMI viven en régimen de alquiler (un 45,77% del total), seguidas de las que ocupan una vivienda cedida (un 14,70%), siendo las

menos las que tienen una vivienda en propiedad (un 11,79%), bien sea pagada o con pagos pendientes. Por otra parte, el 7% habita en infravivienda, y las personas consideradas "sin hogar" constituyen el 15,78% del total de las que perciben la prestación económica de la RMI.

En los balances de los últimos años se ha introducido un apartado titulado “Presencia de minorías susceptibles de discriminación étnica” que, aunque nos advierte de que la información cuantitativa ofrecida puede no ser del todo fiable (puesto que es de carácter semestral y se basa en los datos recabados por los trabajadores sociales a partir de los Programas Individuales de Inserción, en los que no siempre se hace referencia a la etnia o a la identidad de los perceptores de la RMI), nos sirve para tener una cifra aproximada de cuántas familias de etnia gitana hay entre ellos en Madrid. Así, podemos calcular que en el año 2010, un total de 2.819 familias de etnia gitana fueron perceptoras de esta prestación económica RMI, lo que representa un 18,78% de las unidades familiares. En la tabla 4 se refleja la presencia de la población gitana en el marco de los perceptores de la RMI en el mes de diciembre de 2010: son exactamente 2.656 familias, que representan el 20,09% sobre un total de 13.218. Por lo que respecta a las que llevan cinco o más años como titulares de la prestación (a las que se llama “familias con presencia crónica en la RMI”), son 1.063 las de etnia gitana que, en el mismo mes, se encuentran en esa situación, suponiendo el 20,65% del total. Mencionar, por último, que de los Proyectos de Integración financiados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en el mismo año, un 21,15% estuvieron destinados a población gitana.

Tabla 8: Total de familias de etnia gitana perceptoras de la prestación económica RMI y de “familias con presencia crónica” en diciembre 2010.

Sexo	Total familias de la minoría gitana perceptoras de la RMI		Nº de personas titulares la RMI con 5 años o más de permanencia	
Hombre	706	26,58%	288	27,09%
Mujer	1.950	73,42%	775	72,91%
Total	2.656	100,00%	1.063	100,00%

Fuente: *Balance Anual de Gestión de la RMI 2010*, Consejería de Familias y Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid.

1.6 Recapitulación

Para finalizar este capítulo, se hará a un breve resumen de lo tratado en él. En primer lugar, se ha dibujado el proceso histórico de surgimiento y consolidación de las políticas de rentas mínimas a nivel europeo y nacional, así como la manera en que estas políticas han ido

enfocándose cada vez más a colectivos específicos, entre ellos, los considerados como excluidos sociales. El lenguaje de la inserción como derecho social ha configurado un complejo panorama de desarrollo de estas políticas, influido por las ideas de contraprestación y de actividades para la inserción. La aplicación de las rentas mínimas tiene en común en todos los países de la Europa Occidental y en todas las comunidades autónomas del Estado Español el hecho de que el principio de reciprocidad ha ganado fuerza como base de la conceptualización y distribución de los derechos sociales, asumiéndose que los ciudadanos tienen estos derechos en la medida en que cumplan determinadas obligaciones.

Se han expuesto, además, los elementos básicos que configuraban la atmósfera de la intervención social durante la época IMI, en la que se arraigaron determinados "estilos profesionales" que aún hoy, con las novedades que introduce la ley de la RMI, influyen en la intervención social con el colectivo gitano, ocasionando tensiones y dilemas entre los profesionales. En el periodo IMI, la utilización de medidas coercitivas por parte de los trabajadores sociales era parte de la aplicación cotidiana de ese programa. No obstante, el contexto social e ideológico en que tenía lugar la intervención social era proclive al despliegue de un trabajo social comunitario que se esforzaba por definir las necesidades desde la perspectiva de los colectivos con los que se iba a intervenir y que buscaba acercarse a éstos. Era un contexto del que formaba parte constitutiva la reivindicación de los derechos sociales de quienes se consideraban "marginados", y en el que se realizaban importantes esfuerzos teóricos por definir de una manera compleja los aspectos relevantes a cada colectivo de excluidos.

En cambio, en el panorama actual de aplicación de la RMI, se ha perdido este intento teórico-descriptivo, enfatizándose una visión carencial de los colectivos con los que se trabaja y ganando espacio un trabajo social individualizado con alto cariz burocrático. Por tanto, a pesar de que el lenguaje que aparece en la ley de la RMI y en su decreto regulador reconoce la importancia del acompañamiento social y de la protección social como derechos, ocurre que, en la práctica, algunos aspectos relacionados con el IMI, que supuestamente deberían haber desaparecido, siguen estando presentes en la aplicación de la RMI. Actualmente, la mayoría de los profesionales consideran que los gitanos se han "cronificado" en el cobro de esta prestación económica y expresan no estar de acuerdo con medidas de discriminación positiva para este colectivo. Puede afirmarse, así, que se ha perdido la vertiente crítico-transformadora que era esencial en el contexto de la intervención social vinculada al IMI. Además, existen algunos factores, concernientes a la redacción de la ley de la RMI o a la subcontratación de la

intervención social en la Comunidad de Madrid, que dificultan su aplicación. Estos últimos aspectos, y algunos otros, serán tratados en el siguiente capítulo.

Capítulo 2: Factores que dificultan la aplicación y gestión de la RMI

Varios son los factores que, en el contexto madrileño, obstaculizan la efectiva implementación de la RMI. Algunos de estos factores promueven aplicaciones poco coherentes de la ley de la RMI, pues permiten interpretaciones muy diferentes por parte de los profesionales. Por ello, en este capítulo, profundizo en la ambigüedad de la redacción de la ley, en las dificultades de gestión que entraña la inclusión de la RMI en una lógica administrativa sin el establecimiento de jerarquías claras entre las instituciones que participan en ello, y en las condiciones estructurales en que se produce la intervención social en la Comunidad de Madrid, que están imposibilitando la correcta aplicación de la ley. Todo ello tiene como consecuencia, por ejemplo, la saturación de los profesionales que han de aplicarla, la falta de recursos, la ausencia de coordinación entre éstos y las instituciones que la gestionan y aplican y, en lo que se refiere a cómo se aplica al colectivo gitano, la estigmatización y la representación del mismo como grupo-problema, resistente y excesivamente demandante, lo que complica la implementación de la RMI con este colectivo.

2.1 Factores concernientes a la ambigüedad de la ley

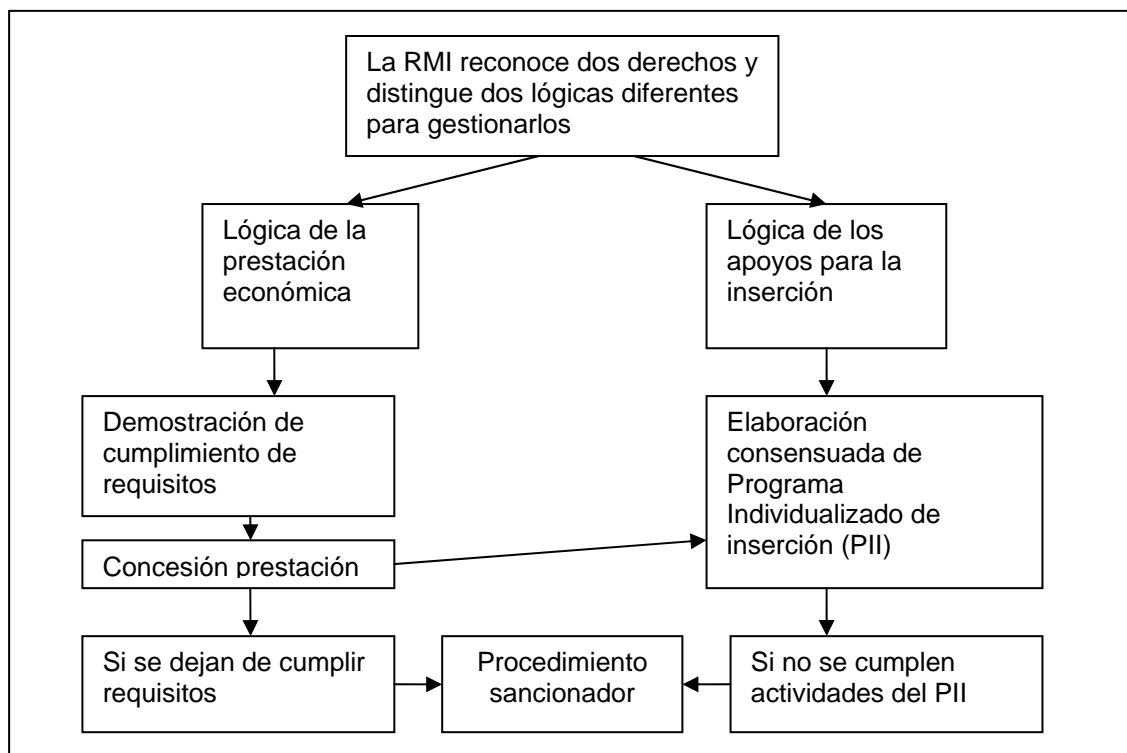
El estudio de la ley RMI y del real decreto que la regulan me ha llevado a detectar diversos aspectos que dificultan –como antes he indicado– una aplicación coherente de la RMI, como son la no separación, en la práctica, de los dos derechos que la ley reconoce, la ambigüedad de la función que se les atribuye a los trabajadores sociales (relativa a posesión o no de autoridad para “controlar” la prestación económica), la falta de regulación de mecanismos de control que garanticen que el diseño de la intervención social sea efectivamente consensuado, y la vaguedad que afecta asimismo a las sanciones que se pueden imponer por la falta de cumplimiento por parte de los usuarios de las actividades que aparecen en el Programa Individual de Inserción. En este apartado, voy a tratar de explicitar estas contradicciones a fin de iluminar los aspectos formales y estructurales que están posibilitando interpretaciones y, así, también aplicaciones dispares de la ley. Los aspectos que conciernen al rechazo histórico que ha sufrido el colectivo gitano y a la construcción de éste como problemático se abordan tanto en este capítulo como en el siguiente. Sin embargo, hasta el séptimo no serán analizados los factores que inciden en las diferentes interpretaciones de la ley por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales.

1) Primeramente, la ley cuenta –como se ha adelantado en el capítulo anterior– con contradicciones internas referentes a la separación promulgada de los dos derechos que regula: derecho a una prestación económica y derecho a apoyos sociales para la inserción. Mientras que, en la presentación de la misma, se define la RMI como derecho subjetivo y se distingue los dos mencionados, la ley se vuelve contradictoria al establecer, en el resto de su articulado, la obligatoriedad de la participación en actividades de inserción (Ley 15/2001:23). Por tanto, podríamos decir que, a efectos reales, no separa los dos derechos de los que habla, sino que los une al establecer que la persona que cobre la RMI ha de firmar obligatoriamente un Programa Individual de Inserción y cumplir las actividades en él descritas: “participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el PII elaborado por el centro de Servicios Sociales correspondiente” (Decreto 147/2002: 33). De este modo, después de que el profesional de Servicios Sociales realiza el diagnóstico social de la persona beneficiaria de la RMI, se pasa a desarrollar el PII y, una vez que lo firma, los compromisos que en él se establecen pasan a formar parte de sus obligaciones.

Lo que dice el papel es que el trabajador social de Unidad de Trabajo Social, que es el que solicita la RMI, el que tramita la RMI y el que tiene que firmar el diseño de intervención y el programa individualizado de inserción con la familia, y que por lo tanto es el que centraliza la intervención con la familia o con la persona que cobra la RMI, aunque luego en esa intervención entren otros profesionales: proyectos de ONG o profesionales como mediadores o educadores. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años)

Esta contradicción (que tiene como efecto el que no sea “real” la distinción de los dos derechos) aparece expresada de manera resumida en el siguiente cuadro, donde podemos ver que la obligatoriedad de la suscripción del PII por parte del perceptor de la RMI vincula las dos lógicas que la ley pretendidamente quiere disociar:

Figura 3: La interrelación entre los dos derechos que la ley pretende separar.



Fuente: Elaboración propia.

También se puede apreciar que la ley no separa realmente los dos derechos en el hecho – también apuntado más atrás– de que el incumplimiento por parte de los usuarios de las actividades establecidas en el PII tiene consecuencias sobre la continuidad del cobro de la prestación. Así, según los datos del *Balance de gestión de la RMI 2010*, de los procedimientos sancionadores emprendidos ese año que acabaron en extinciones de la misma, 21 de ellos se iniciaron debido al incumplimiento de los compromisos suscritos en los Programas Individuales de Inserción; y del total de los abiertos por cualquier causa (79), el 50% se resolvió con la retirada de la prestación de la RMI como sanción:

En estos casos la prestación no podrá ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un periodo de entre 3 y 6 meses o seis y doce meses, en función de que la sanción sea impuesta por falta grave o muy grave. (*Balance de Gestión de la RMI*, 2010: 39)

Martín Giner (2007) ha señalado que esta ambigüedad de la ley facilita la conceptualización de la RMI como una prestación condicionada, que obliga a que los beneficiarios de la misma estén vinculados a un profesional de Servicios Sociales.

De un lado, se dice que es una prestación de derecho: “derecho subjetivo” (el derecho que tiene cualquier ciudadano de reclamar para sí la aplicación de una norma, esto es la aplicación de la Ley de la RMI), por lo que se elimina el concepto de “prestación graciable”. Sin embargo, se sigue hablando de una renta de inserción condicionada, ya que se concede en determinadas

condiciones de rentas y obligaciones, vinculándola a la intervención de un profesional. (Martín Giner, 2007)

Hay controversia en torno a esta cuestión entre los profesionales de Servicios Sociales y los expertos entrevistados, lo que muestra que existen formas diferenciales y, a veces, contradictorias de interpretarla. Así, algunos conciben la RMI como un derecho condicionado al cumplimiento de las actividades de inserción, siendo éstas entendidas como la contraprestación que, mediante un acto de reciprocidad, hacen los beneficiarios por el dinero otorgado por el Estado.

En cualquier caso, eres un profesional de los Servicios Sociales y ellos están vinculados a Servicios Sociales porque tienen una prestación y, entonces, tiene que haber un trabajo. No es un derecho subjetivo, o sea, que aunque ahora como Renta Mínima se diga que es una prestación por derecho, no es como tal, porque está condicionada y vinculada a un proyecto de integración. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años)

En cambio, otros consideran que la RMI debería ser un derecho social no condicionado, por lo que se tendría que imposibilitar su uso como herramienta para forzar la participación en procesos de inserción. Así, desde el primer tipo de posicionamiento (no así desde este segundo, por otro lado, minoritario entre los profesionales) se construye la idea de la contraprestación obligatoria, naturalizándose y divulgándose en diversos foros profesionales, es decir, tratándose como si “viniera de por sí”. Un ejemplo de ello lo encontramos en la afirmación de Molleda (2007), directora de Centro de Servicios Sociales ya citada, quien sostiene lo siguiente a este respecto:

Un ejemplo: enviamos a una persona perceptora de una renta mínima a un proyecto de búsqueda de empleo porque el cobro de la renta mínima exige una contrapartida, porque obtener un empleo es una buena forma de prescindir de la renta mínima, porque su programa individual de inserción así lo exige. (Molleda, 2007: 142; énfasis añadido)

Las palabras que se utilizan en este y en otros discursos correspondientes a profesionales que intervienen en este ámbito (como, por ejemplo, “se exige”) afirman la obligatoriedad de la participación y enfocan los instrumentos técnicos vinculados a la RMI (en este caso, el PII) como impersonalizados, sobre los que los profesionales no tuvieran control alguno, obviando especificar que el PII, por ley, debe ser consensuado con la persona que lo va a llevar a cabo y que no propiciar ese consenso o no informar a los beneficiarios de los nuevos derechos que les amparan es una decisión personal del profesional. Por tanto, el Programa Individual de Inserción, en sí mismo, no es una figura que obligue a nada, sino que es una herramienta para concretar aquello a lo que el usuario está dispuesto a comprometerse de cara a mejorar su situación actual. En todo caso, autores como Duvoux (2009) hacen

referencia a que el propio hecho de que adopte la forma de un contrato lleva consigo, a nivel simbólico, una serie de implícitos sociales; entre ellos, la idea de que firmarlo implica obligatoriedad por ambas partes.

Los proyectos de integración, claro, son una herramienta dentro del segundo derecho, el derecho a apoyos personalizados para la incorporación social y laboral. La garantía de ingresos y el derecho a los apoyos teóricamente son derechos independientes, aunque en el caso del perceptor sí que está obligado a un proceso, consensuado en teoría, pero (está obligado) a hacer algo. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

En desacuerdo con esta interpretación, algunos expertos que participaron en las negociaciones de la RMI en las mesas sindicales de la Comunidad de Madrid desde finales de los años 90 hasta que, en diciembre de 2002 se publicó la ley de la RMI, entienden que la ley que regula dicha prestación da un salto cualitativo con respecto al IMI, porque desvincula los dos derechos sociales que reconoce –tal como hemos enfatizado– y confiere mayores garantías a los perceptores de la misma. Escudándose en el espíritu garantista de la ley, no quieren admitir que otros profesionales están aplicando la prestación como un derecho condicionado.

¡No es un derecho condicionado!, tú tienes el derecho, ¡reúnes los requisitos y punto! Ahora, como cualquier prestación, tú tienes una serie de obligaciones. Si no cumples con esas obligaciones, te pueden extinguir la RMI. Pero es un concepto distinto a que un profesional juegue con una prestación a la que tú tienes derecho. Los profesionales tenemos que ser conscientes de que el ciudadano tiene derecho a esto. Aquí no hay contraprestación: “yo te doy y tú me das a cambio”. No, no, no, la persona tiene derecho. Ahora, si tú incumples con tus obligaciones... (Entrevista a trabajadora social contratada por uno de los principales sindicatos de la CM, 38 años)

De este modo, la ambigüedad de la ley y la resignificación que de ésta realizan los profesionales tendentes a asemejarla a la prestación predecesora, el IMI, hacen plausibles interpretaciones divergentes que están afectando a su aplicación. Ahora bien, no cabe duda que la RMI supera al IMI en cuanto al establecimiento de medidas orientadas a instituir la prestación como derecho: se hace depender de instancias más altas de la Comunidad Autónoma (Dirección General de Servicios Sociales, Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas), intentándose así garantizar que no se extinga de manera discrecional como en la época del IMI. De este modo, los trabajadores sociales de Servicios Sociales pierden oficialmente el poder de “castigar” mediante la retirada de la prestación. No obstante, en el capítulo séptimo veremos que han encontrado otras formas de seguir manteniendo elevadas cotas de poder sobre los perceptores de la RMI, al menos sobre los de origen gitano.

2) La ley tampoco es clara en lo que se refiere al procedimiento sancionador que establece ni en la medida en que el incumplimiento de los compromisos del PII puede suponer que se retire la prestación. En este sentido, no especifica cuál es el propósito ni la forma de regular dicho procedimiento. Pero ¿qué es el “el procedimiento sancionador”? Es el que se orienta a suspender o extinguir la prestación económica a aquellos perceptores que se encuentren en las situaciones siguientes:

- no cumplir los requisitos que hicieron que se concediese la prestación (lógica económica)
- y no cumplir los compromisos establecidos en el PII (lógica de la inserción social).

Lo que no queda regulado con claridad es cuándo, y bajo qué circunstancias, se inicia el procedimiento sancionador, encontrándose información contradictoria si se comparan el decreto y la ley RMI. Así, mientras que en la exposición de motivos de la ley se sostiene que únicamente se extinguirá la prestación ante situaciones extremadamente inaceptables (calificadas de “muy graves”), en el decreto regulador se reglamentan al detalle las infracciones menos importantes: las leves y las graves. Así, por ejemplo, la negativa “injustificada” a cumplir las medidas establecidas en el Programa Individual de Inserción o la falta de notificación a la Administración (en un plazo de dos meses) del cambio de domicilio o de la variación de los requisitos exigidos para percibir la prestación son consideradas infracciones leves, las cuales serán sancionadas con advertencias escritas. La acumulación de tres infracciones leves en un tiempo no superior a dos años es considerada como una infracción grave (Decreto 147/2002: 49). La “negativa reiterada a someterse al PII o el incumplimiento injustificado de las medidas establecidas en él” se consideran infracciones graves⁶⁸ (Decreto 147/2002: 50), cuya acumulación (dos en un periodo no superior a dos años) supondrá la extinción de la prestación económica. De este modo, se puede afirmar que la forma en la que el procedimiento sancionador está redactado supone que, a efectos formales, la baja participación recurrente sí es considerada causa de extinción de la prestación, poniendo en peligro, por faltas leves, el derecho a la prestación económica que se reconoce en la exposición de motivos y, por otro, dando cabida a que los profesionales con mentalidad más punitiva puedan acogerse a la forma en la que está redactado el procedimiento sancionador para amenazar a los usuarios que tengan una baja participación en

⁶⁸ Se consideran infracciones muy graves las actuaciones fraudulentas del usuario para percibir o mantener la prestación, así como la acumulación de dos infracciones graves en un tiempo no superior a dos años. Éstas se sancionarán con la extinción de la prestación económica, que no podrá ser solicitada de nuevo hasta que pasen entre seis y doce meses. El abandono de la participación en un programa de inclusión, siempre que ésta fuese la causa que motivó la incorporación a la Renta Mínima de Inserción, será igualmente una causa de extinción de dicha prestación (Decreto 147/2002: 37).

las actividades previstas en sus Programas Individuales de Inserción de estar poniendo en riesgo el cobro de la prestación económica, aspecto que, como veremos en el capítulo séptimo, es una de las estrategias que se desplegando en la implementación de la RMI con los beneficiarios gitanos que no muestran interés por participar en dichas actividades.

Una de las responsables del Servicio de Prevención de la Exclusión y de Rentas Mínimas afirmaba en una entrevista, sin embargo, que no se retiran prestaciones económicas por “baja participación” en los PII⁶⁹ y que están tratando de superar, mediante cursos de formación impartidos a trabajadores sociales de Servicios Sociales, la mentalidad punitiva con la que trabajan muchos de ellos. Ahora bien, los datos ofrecidos por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CM en el *Balance de gestión de la RMI* del año 2010 revelan que, este año, se impusieron sanciones por dos infracciones leves relacionadas con el PII en 5 casos (el 0,30% del total, esto es, de 428 casos), resultando en suspensiones temporales del cobro de la RMI; y las sanciones que abocaron en extinción de la prestación debido a infracción grave o muy grave (relacionada también con el PII) fueron 35, constituyendo el 2,52% del total de extinciones (es decir, de 1.389). De este modo, se puede ver que, si bien no han sido muchas, estas sanciones ponen de manifiesto que la falta de participación en las actividades establecidas en los Proyectos Individuales de Inserción sí permite retirar (con carácter temporal o, más o menos, duradero) la prestación económica. En suma, si bien desde el Servicio de Prevención de Rentas Mínimas se trata de desvincular la baja participación en las actividades incluidas en los PII (que, en el caso de los gitanos beneficiarios de la RMI, consisten en los proyectos de integración implementados por ONG) de la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, éste establece sanciones por no participar en dichas actividades, por lo que apoya la visión de los profesionales que conceptualizan la RMI como un derecho condicionado y las actividades de inserción como una contraprestación que compromete a los perceptores de la misma. Es decir que aunque la regulación del procedimiento sancionador es clara, la que no es clara es la manera en que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales la interpreta, entrando en contradicción con lo que señala el decreto regulador, cuya redacción, por otro lado, da pie a que los profesionales que quieren aplicar la RMI como derecho condicionado puedan usar la acumulación de sanciones leves – como se ha visto– para sancionar a los usuarios que, desde su punto de vista, no están

⁶⁹ En el capítulo V del Decreto 147/2002 que regula la RMI, “Obligaciones de los beneficiarios”, se incluye la de “participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el programa individual de inserción” (pp.33). En este sentido, para algunos profesionales que quieren aplicar la RMI como un derecho condicionado, la baja participación sí debería ser un motivo para iniciar un procedimiento sancionador ya que, según ellos, responde a un incumplimiento de los compromisos suscritos en el PII.

cumpliendo con las obligaciones del PII. Así, aunque en el actual folleto explicativo de la RMI se afirme que el apoyo a la inserción social es voluntario, se ha podido ver que, a efectos reales, se dan extinciones por no participar en las actividades que para ello se establecen en el PII. Se puede concluir, por tanto, que la legislación relativa a este aspecto es contradictoria. .

3) Es más, el desarrollo normativo del procedimiento sancionador pone mayor énfasis en controlar el fraude y en exponer cómo penalizar los diversos comportamientos irregulares de los beneficiarios de la RMI que en desarrollar la vertiente garantista de la ley, para lo que habría sido necesario establecer herramientas que garanticen la negociación consensuada del PII como, por ejemplo, la firma de un consentimiento informado que dé cuenta de la comprensión, por parte de los solicitantes de la RMI, de sus derechos y/o de las actividades a las que se están comprometiendo, y la toma de decisiones autónoma por parte de los usuarios. Con la insistencia en el procedimiento sancionador y la falta de esas herramientas para fomentar Programas Individuales de Inserción respaldados por los usuarios, se dota de más peso a la regulación de la prestación económica que a la de la promoción y consolidación de los apoyos sociales para las personas en situación de exclusión social. Dicho con otras palabras, el abundante aparato normativo orientado a regular el procedimiento sancionador en el marco de la RMI contrasta con el escaso, o más bien nulo, esfuerzo legislativo por denotar de nuevos instrumentos de intervención social a los profesionales, que les permitieran promover procesos consensuados para el establecimiento de las actividades incluidas en los PII, dejando así la puerta abierta a que éstos rellenen ese vacío a partir de “inercias” procedentes de su práctica profesional y de valores personales sobre la intervención social y la justicia en el reparto de los bienes sociales, incluidas las que cristalizaron con la aplicación del IMI.

Se crea, entonces, un contexto propicio a múltiples y divergentes interpretaciones de esta política social por parte de los profesionales que la aplican, quienes pueden enfocar su dimensión sancionadora desde una visión “ligera” de la normativa (por la que dejan al margen las sanciones a no ser que vean un claro fraude) o desde una visión “dura” (por la que castigan a quienes incurren en la más mínima infracción, comunicándola a la CM en cuanto aparece y pidiéndole que incoe el procedimiento sancionador). Por otra parte, la falta de coherencia entre la legislación, por un lado, y la información que difunde el Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínima de la CM, genera confusión en estos profesionales y hace que, en ocasiones, quieran actuar como lo hacían con respecto al IMI, en cuyo periodo –como se ha repetido– la Comunidad de Madrid podía extinguir la prestación a los beneficiarios a raíz de

una petición de los trabajadores sociales sin necesidad de demostrar incumplimiento de requisitos. Así, incluso algunos de los menos partidarios de un uso punitivo de la RMI, señalan que la nueva legislación les ha situado en una posición incómoda y poco clara ante los perceptores de la misma.

Fíjate que yo creo que con el IMI, a pesar de que es verdad que había una parte que se prestaba al abuso profesional o a la arbitrariedad, yo creo que lo tenía más claro. Estos son los compromisos: tienes que llevar al niño al colegio, tienes que hacer tal y tienes que hacer cual y, si no, lo vamos a extinguir. Y yo creo que eso sí que les quedaba más claro. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años)

Ahora bien, aunque la concesión o la suspensión de la prestación económica ya no depende del criterio profesional de los trabajadores sociales de los centros de Servicios Sociales, éstos tienen potestad para informar a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de las anomalías que detecten en el cumplimiento de los requisitos, siempre y cuando puedan demostrarlo documentalmente, siendo dicha Consejería la que decide si inicia o no el procedimiento sancionador. Con la RMI, para que los trabajadores sociales puedan demostrar la veracidad de las infracciones cometidas por los usuarios, tienen que llevar a cabo un seguimiento real de los casos de que se trate según los protocolos administrativos establecidos. Esto es, tienen que mandar cartas informativas certificadas a los mismos pidiéndoles, por ejemplo, que no se salten más reuniones de seguimiento, y sólo tras varias negativas, que deben demostrar con los acuse de recibo de esas cartas, su petición ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales estaría justificada. Los técnicos que trabajan en esta entidad afirman que no hay apenas trabajadores sociales que desarrollen estos protocolos:

Es decir, que si como trabajador social me fundamentas una petición de suspensión de la prestación en: “Le he citado 3 veces para suscribir el programa individual de inserción y no viene”, no me vale así. Tienes que mandar citación escrita, con acuse de recibo, ver que lo ha firmado o ver que te lo han devuelto y qué pasos has dado. Eso hizo bajar muchísimo las peticiones de extinción (por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales), porque no se hace ese tipo de trabajo. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Algunos trabajadores sociales dicen haber llamado en repetidas ocasiones a la Consejería para protestar por casos que, según ellos, no mejorarían si no se procedía a extinguir la prestación. Otros sostienen que, a pesar de todo, cuando la Comunidad de Madrid tiene alguna duda sobre la extinción o no de la prestación, consulta en última instancia con los profesionales de Servicios Sociales, por lo que sí tienen algún tipo de autoridad en ello, aunque menor que en épocas pasadas. De ser así la situación, el profesional de Servicios Sociales no está desvinculado totalmente del procedimiento sancionador, quedando su posición indefinida a este respecto, como en una especie de limbo en el que cada cual

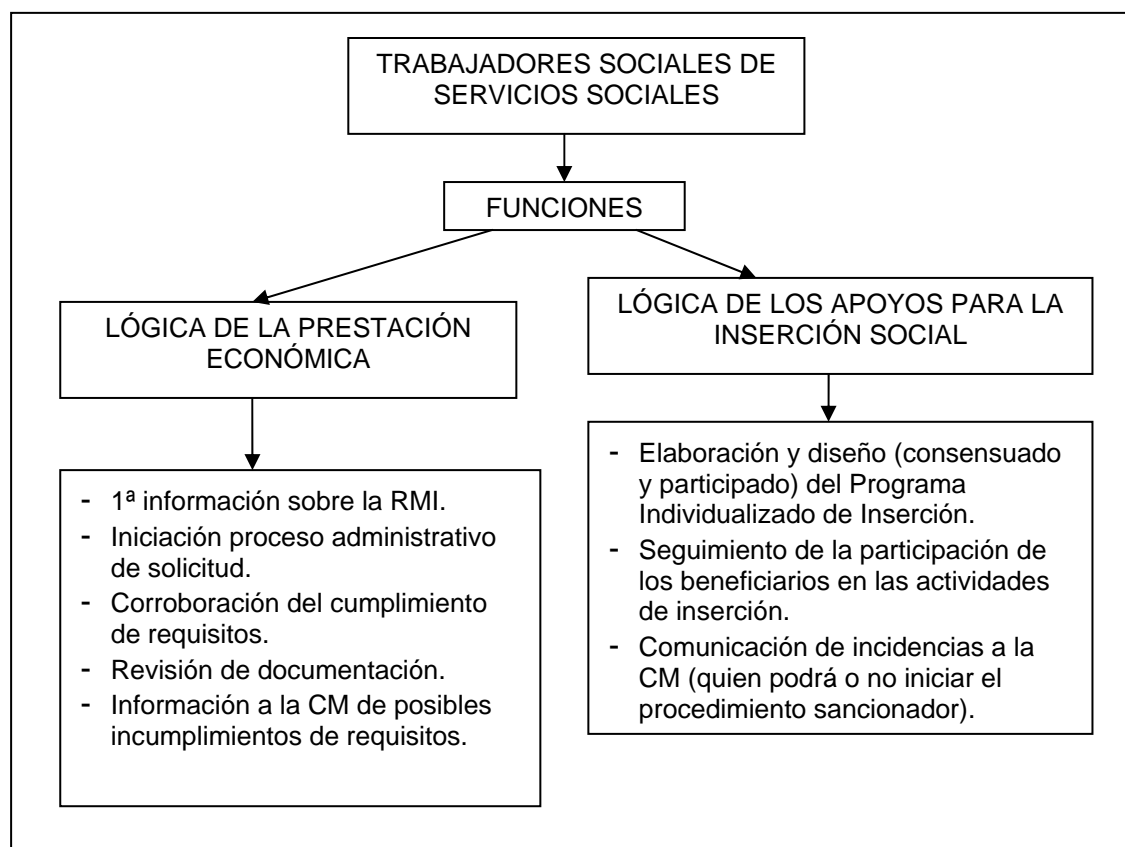
establece los criterios de intervención social con los que más cómodo se siente, y a partir de ellos determina centrarse o no en el control de los requisitos para acceder a la RMI, por ejemplo, o cuándo y ante qué hechos comunicarse con la Comunidad de Madrid para solicitar que se inicie el procedimiento sancionador.

La discrecionalidad está servida: los trabajadores sociales pueden o no, según decidan, poner trabas a la consecución o al mantenimiento de la prestación económica; y la Comunidad de Madrid puede o no, según decida, tomar en consideración las peticiones de sanciones de los trabajadores sociales.

Una trabajadora social, en una entrevista en la que no me deja poner la grabadora, me dice que está harta de tener información sobre personas beneficiarias de la RMI de etnia gitana que tienen negocios informales en el barrio (que comparte con ellos), de lo que ha informado a la CM, ante lo cual no han hecho nada. Añade: “Todo el mundo en el barrio lo sabe”. (Registro de campo: conversación con trabajadora social de Servicios Sociales, zona sur de la CM, 37 años, mayo 2008)

4) Otro aspecto que no queda definido sin vaguedades en los documentos que regulan la RMI es el contenido concreto de las funciones de los trabajadores sociales de Servicios Sociales, quienes tienen que asumir tareas concernientes a la gestión de las dos lógicas que establece la Ley (ver Figura 4).

Figura 4: Funciones de los trabajadores sociales de Servicios Sociales



Fuente: Elaboración propia.

Estos profesionales están autorizados para supervisar e informar a la Consejería de los requisitos de acceso a la prestación económica y de los compromisos adquiridos por parte de los usuarios que no se cumplen. La coincidencia en el mismo profesional de funciones, por una parte, de control y/o vigilancia del cumplimiento de requisitos para recibir/mantener la RMI y, por otra, relacionadas con al diseño de la intervención social para dar los apoyos sociales correspondientes entraña una de las principales dificultades de la aplicación de la ley: entre otros motivos, porque esos usuarios, debido a ello, no se fían de los trabajadores sociales de Servicios Sociales (García García, 2005: 11). Ello entorpece que la elaboración de la intervención social responda a los intereses, demandas y circunstancias de los usuarios, puesto que éstos no pueden arriesgarse a tener conflictos con quienes disponen de influencia sobre la continuidad del cobro de la prestación económica. Por tanto, aceptan suscribir el PII estipulado por estos profesionales con tal de no tener problemas, en detrimento de la co-participación en la preparación de una intervención social adaptad⁷⁰a. Es más, se puede

⁷⁰ Otro factor que afecta a que la elaboración del PII no sea verdaderamente consensuada es el corto periodo de tiempo que establece la ley RMI para su firma, siendo de un mes desde que se concede la prestación, aunque actualmente la Consejería está ampliando el plazo a 6 meses.

aventurar que el hecho de que la participación se conciba como obligatoria por profesionales y solicitantes/beneficiarios, como una contraprestación, influye en que estos últimos no se interesen realmente por las propias actividades previstas para su proceso de inserción social, lo que provoca que, cuando la prestación se suspende o extingue por cualquier causa, dejen de participar en dichas actividades. Consecuentemente, se obstaculiza la posibilidad de negociación del proceso de inserción.

En el momento en que la gente deja de percibir la RMI por lo que sea, deja de asistir al proyecto. No continúan. Directamente retiran la RMI y se van. Exactamente igual que era con el IMI. Por eso te digo que nosotras no hemos notado realmente cambios. Además, la norma de siempre ha sido: si ya no tienes IMI, ya no tienes obligación. (Entrevista a directora de asociación que recibe financiación de la CM, 50 años)

Un ejemplo de confusión en lo que se refiere a la obligatoriedad de suscribir un Programa Individual de Inserción es el caso de Alma, una mujer gitana de 21 años de origen extremeño que reside en una vivienda ocupada en el barrio madrileño de Colonia Jardín. En el momento de solicitar la RMI le dijo a su trabajador social de zona que estaba, a efectos prácticos, separada. En ese momento tenía un hijo de 1 año. Su trabajador social, que entendía que no era su papel presionar en exceso para que Alma participara en actividades de inserción, le hizo firmar un PII donde básicamente sólo se enumeraba que iba a comenzar alguna actividad de búsqueda de empleo, además de las visitas periódicas a Servicios Sociales para la renovación del PII. En la entrevista que, en el marco de esta investigación, le realicé a Alma, cuando le pregunté si sabía que podía tener voz acerca de qué incluir en el PII y le informé de que una vez que se firma ese documento, sí que adquiere un carácter obligatorio, comentó: “Ya sabía yo que me estaban engañando”⁷¹. Y si bien es cierto que su trabajador social, por concebir la RMI como un derecho de protección social, no trató de convencerla para que participara en proyectos de integración (incluso ha faltado a varias reuniones con él y no ha informado a la CM), el hecho de que Alma sienta que ha sido engañada da cuenta de dos fenómenos: por un lado, que concibe la prestación desde la desconfianza, elemento omnipresente en la relación entre usuarios y trabajadores sociales en el periodo IMI y, por otro, que no ha contado con suficiente información de cómo funciona la RMI y qué elementos de ésta puede utilizar para tomar parte efectivamente (con conciencia y conocimiento) en la elaboración de su itinerario de inserción y en la firma de los distintos documentos de demanda y renovación de la RMI. Alma siente que ir a Servicios Sociales no conlleva que se le ayude

⁷¹ Fue esta una de las pocas veces que pregunté directamente, durante la realización de las entrevistas, si sabía que no se la podía obligar a firmar el PII.

en nada de lo que necesita. Aun así, y por la “buena relación” con su trabajador social, suele aparecer periódicamente por el centro donde éste trabaja para charlar con él, pero sobre todo para insistir en la demanda de alguna “ayuda de emergencia” cuya existencia ha conocido por medio de algún familiar. Se podría sostener que ir de vez en cuando a reunirse con los trabajadores sociales se vivencia como una estrategia “preventiva” de cara a no poner en riesgo el cobro de la prestación económica de la RMI.

Aunque se considera que la inserción ha de ir de la mano de procesos de autonomización e individualización de los usuarios, la gestión de la RMI peca de una notoria falta de voluntad por parte de los trabajadores sociales de comunicarles los elementos más empoderadores de la Ley, al menos en todo lo relativo a garantizar una mayor participación de los mismos en la toma de decisiones que atañen a su proceso de inserción. No se les informa, por ejemplo, de que no tienen por qué firmar un Programa Individual de Inserción con el que no estén de acuerdo pero que, una vez que lo firman –como se ha adelantado más arriba–, se vuelve obligatorio realizar las actividades establecidas en él. En todo caso, las preconociones que los gitanos manejan sobre la RMI, así como la falta de formación escolar y de habilidades para la comprensión de los procedimientos oficiales, dificultarían probablemente, en el supuesto de ser informados, la comprensión de los aspectos novedosos relativos a esta política social.

La confusión, además de originarse en la mezcolanza de funciones que han de cumplir los profesionales de Servicios Sociales, se acrecienta como consecuencia de lo que establecen ciertos documentos oficiales de la CM, que divulgan mensajes divergentes y, a veces, contradictorios con lo expresado por la legislación de la RMI, al dejar un amplio abanico de posibilidades para que los propios profesionales elijan aquellas funciones con las que más cómodos se encuentren. Así, mientras que la función del trabajador social definida en la legislación da pie a una intervención con cierto aspecto fiscalizador, en otros documentos oficiales, como el Plan contra la Exclusión Social 2002-2006, se obvia el aspecto del control y se define al trabajador social como aquel que acompaña, comprende y apoya a las personas en situación de exclusión. Se introduce así la noción de “acompañamiento social” como tarea estelar del profesional de Servicios Sociales, definiéndose como la relación personal continuada y relativamente duradera que trata de comprender y apoyar a las personas para contribuir a que ellas mismas empiecen a dominar su situación y las claves de sus dificultades. Se trata, por tanto, de contribuir a que las personas activen y movilicen recursos, capacidades y potencialidades tanto suyas como de su entorno. Este Plan quiere reordenar y

reforzar la Red de Servicios Sociales y fomentar la transversalidad de la metodología del “acompañamiento social” en las medidas y estrategias de carácter normalizado “de cara a potenciar la inserción desde principios de acción positiva”, tratando de recuperar de este modo una de las funciones básicas del trabajo social en el desarrollo de itinerarios de inserción social. Desde el Servicio de Prevención de la Exclusión de Rentas Mínimas (2005: 4-5), de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se refuerza la idea de que, con la ley RMI, “el acompañamiento social se contempla como un derecho además del cobro de la prestación económica”. Se incide, así, en lo que son considerados aspectos positivos de la RMI, puesto que tanto el reconocimiento del doble derecho como la importancia del acompañamiento son garantías para la consecución de la inserción social de los beneficiarios.

Sin embargo, según varios trabajadores sociales entrevistados, esta función de “acompañamiento social” no se está llevando a cabo debido a la saturación de las agendas de estos profesionales y a la negativa de muchos de ellos a desarrollar trabajo de calle en un marco de trabajo social comunitario (Serrano y Arriba, 1998: 187). Además, la “fragmentación del espacio social de la intervención social” (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995: 37) ha supuesto la burocratización de la renta mínima, con una división de tareas entre el personal con mayor estabilidad laboral (de Servicios Sociales), que realiza las funciones más relacionadas con la gestión, el control y la documentación, y el más inestable (educadores sociales, psicólogos, pedagogos y demás profesionales de ONG contratados con financiación a cargo de los Proyectos de Integración), que desempeñan las funciones educativas y de “acompañamiento social”.

Por tanto, a pesar de los intentos de redefinir la labor del trabajador social como agente de cambio y de “acompañamiento social” (como los que, según se ha dicho, se recogen en el Plan contra la Exclusión Social 2002-2006), son las entidades de iniciativa social (ONG y Fundaciones) y las corporaciones locales (Ayuntamientos y Mancomunidades)⁷² que gestionan los proyectos de integración las que desarrollan actividades innovadoras en el campo de la intervención social mediante metodologías flexibles, y las que dinamizan la participación social y refuerzan el tejido social en el territorio. Además, estas entidades realizan el trabajo de intervención más intensivo con los usuarios de esta prestación, pudiendo llegar a relacionarse con ellos de dos a tres veces por semana. Por ello, algunos trabajadores de Servicios Sociales entrevistados consideran que estas entidades llevan a cabo una labor

⁷² La Consejería de Familia y Asuntos Sociales financia por separado los proyectos de integración desarrollados por corporaciones locales (Ayuntamientos y Mancomunidades) y los proyectos desarrollados por las entidades de iniciativa social.

más válida que ellos mismos en cuanto a la intervención social se refiere y reconocen que son las que hacen efectivo el “acompañamiento social”.

La labor que están haciendo los proyectos es mejor que la nuestra, porque están viéndolos y realmente es tres veces a la semana y ahí es donde están haciendo un trabajo fuerte con ellos.
(Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

Es preciso señalar que el concepto de “acompañamiento social” no aparece ni en la ley de la RMI ni en el decreto que la regula referido a la función de los trabajadores sociales de Servicios Sociales, sino que se menciona exclusivamente en el apartado que alude a los proyectos de integración desarrollados por las entidades de iniciativa social (Ley 15/2001: 40; Decreto 147/2002: 68) o en los textos clásicos que evalúan los programas de rentas mínimas a nivel nacional (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1995). Igualmente, sólo dos de los trabajadores sociales entrevistados mencionan ese término, coincidiendo que ambos son personas que dan cursos de formación y tienen contacto con los documentos oficiales. El “acompañamiento social” es, por tanto, una categoría legitimada en el contexto de cursos formativos a profesionales de la intervención social y en los discursos de quienes, trabajando en condiciones precarias, quieren dotar de valor a su labor profesional. En general, los trabajadores sociales de Servicios Sociales desconocen lo que dicho término implica y, cuando lo conocen, sostienen no poder realizar la función que supone por la cantidad de personas a las que tienen que atender, lo que les genera cierto desasosiego y frustración.

En suma, se están difundiendo imágenes contradictorias sobre cuál es la función de los trabajadores sociales de Servicios Sociales. Desde los cursos de formación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, así como desde el Plan contra la Exclusión, se incide en la importancia de escuchar, acompañar y empatizar con las personas excluidas aunque, en la práctica, la estructura de los Servicios Sociales, la sobrecarga de casos que lleva cada trabajador social y el incremento de las labores burocráticas ligadas a la aplicación de la RMI no dejan hueco a que estos profesionales puedan, en los casos en que quieren hacerlo, realizar un trabajo de “acompañamiento social” a los perceptores de la RMI.

5) Por otro lado, lo que atañe a la negociación consensuada del proceso de inserción social de los usuarios de la RMI no queda regulado ni en la ley ni en el decreto, en donde no aparecen mecanismos ni herramientas destinadas a garantizar que el diseño de esa inserción sea realmente negociado y participado, como podría ser mediante la firma de un consentimiento informado que ratificara que se ha recibido información completa sobre los distintos elementos de la renta mínima antes de rubricar ninguna documentación vinculante.

Se deja que cada trabajador social de Servicios Sociales resuelva este tema a su modo, revelándose un vacío de contenidos en uno de los aspectos más novedosos de la actual ley⁷³. Tampoco se hace referencia a qué mínimos han de aparecer en el PII, pudiendo establecerse cualquier actividad acorde con el diagnóstico social que realice el trabajador social de Servicios Sociales. Por tanto, los profesionales pueden incluir en el PII unos mínimos “muy mínimos”, como escolarizar a los hijos y acudir a controles pediátricos, o elaborar programas individuales de inserción que impliquen que los perceptores de la RMI tengan que asistir a talleres periódicos o a cursos de formación, pues la legislación no establece qué participación se les puede pedir; algo que ha sido destacado por autores como Olmeda (1997).

Podemos decir, a modo de resumen de este apartado, que la legislación relativa a la RMI no logra separar los dos derechos que establece, produciéndose una serie de zonas grises, de vacíos o de dudas razonables, que dan cabida a que cada profesional interprete y aplique la RMI de la forma que considere oportuna. Además, como se ha señalado, los elementos más novedosos de la ley de la RMI, aquellos que podrían dotar de más poder y autonomía a los beneficiarios para iniciar procesos de toma de decisiones informadas y responsables sobre las actividades a las que están dispuestos a comprometerse, no aparecen regulados. En contraste con lo anterior, la forma en la que el procedimiento sancionador está redactado (incluyendo el riesgo de que la acumulación de sanciones leves legitime la retirada o la suspensión de la prestación económica) da pie a interpretaciones de la ley que abren la posibilidad de usarlo como medio para presionar a los beneficiarios de la RMI a que participen en distintas actividades de inserción.

2.2 Factores concernientes a la inclusión de la gestión de la RMI dentro de la lógica administrativa

Otro de los aspectos que dificultan la aplicación efectiva de la ley de la RMI guarda relación con la introducción de una lógica jurídico-administrativa en la gestión de la misma. Una de las primeras consecuencias de ello es la burocratización de esa gestión, que ha afectado de diversas maneras a las instituciones que la llevan a cabo y que ejecutan proyectos de integración vinculados a ella. De este modo, el exceso de requisitos y la necesidad de documentarlos rigurosamente ha complejizado los procedimientos y ha aumentado la carga de trabajo administrativo de los trabajadores de Servicios Sociales.

⁷³ Aguilar, Gaviria y Laparra (1993: 137) apuntan, después de evaluar la implantación del IMI, el déficit de información con que cuentan los perceptores sobre cómo funciona el programa y la dificultad de los trabajadores sociales para establecer procesos de negociación con ellos.

Llegó más carga de trabajo burocrático. Que en lugar de 15 papeles, eran 25, que al ser ley y al ser más severa, había que ser más riguroso con la documentación, que ya no valían tanto declaraciones o informes nuestros, sino que tenía que acreditarlo documentalmente el solicitante. Eso yo lo vi bien porque nos liberaba de la tarea burocrática. Al final, se demostró que tampoco fue así, porque seguíamos haciendo informes también. Si la CM tenía dudas sobre una documentación, te pedía un informe. Recuerdo que fue más carga de trabajo, que hubo conflictos, por lo menos en mi centro, porque en las sesiones preparativas de la RMI se dijo que esa carga de trabajo la iba a llevar la unidad administrativa, pero al final recayó en nosotros porque la unidad administrativa estaba igual dotada que antes. No se dotó de más recursos para gestionarla. Además, cometían muchos fallos porque no estaban familiarizados con el procedimiento, con lo que ahorrabas haciéndolo tú. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años)

Además, la gestión de la RMI exige el conocimiento de muchas otras prestaciones aplicables en la Comunidad Autónoma de Madrid, dado que es subsidiaria del resto de acciones protectoras de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. Por tanto, previamente a la tramitación de las solicitudes, se ha de comprobar que los solicitantes no tengan derecho a alguna otra de esas prestaciones puesto que, de ser el caso, tendrían que solicitarlas primero y, sólo si demuestran que les han sido denegadas, pueden pedir la RMI. Por ello, el lenguaje de quienes trabajan en la gestión de la prestación económica en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid está plagado de terminología jurídica, incluso cuando hablan de cuestiones referentes al aspecto social de la prestación.

Cualquier persona que tenga derecho a una prestación de desempleo, a un subsidio, que tenga una pensión contributiva o no contributiva, siempre estaría fuera de lo que sería ser perceptor (de la RMI). Luego hay que cumplir con unas pautas que son económicas; no tener ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de... Hay cuantías que se computan y otras que no, pero eso nos llevaría varios días explicarlo, porque luego hay excepciones: por ejemplo, no tener 1 año de empadronamiento, el estar sin empadronamiento temporalmente porque la casa les han desahuciado, etc. (Entrevista a trabajador social que trabaja como técnico de la CM, 37 años)

Desde el punto de vista de los técnicos y los profesionales, la implantación de la RMI fue caótica, anárquica, no sólo por la falta de personal competente en la materia, sino por la entrada en vigor de la ley (a partir de enero de 2002) sin la publicación del decreto regulador (que salió a la luz ocho meses después, en agosto del mismo año). Así, los que han sido entrevistados, y recuerdan el primer año de la RMI, sostienen que entonces aplicaron la ley sin pautas claras de actuación.

La ley se aprobó sin haber desarrollado las novedades que aportaba la ley. Coincidió con periodo de falta de decreto, o sea, de reglamento de aplicación de esa ley. Se hizo un procedimiento muy de salir del paso, muy precipitado, sin reglamento, y con cuatro reglas nuevas que se dijeron. Y todo eso ha costado. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Es decir, lo hicieron sin saber muy bien cómo y sintiéndose al margen de las decisiones políticas sobre la prestación. Incluso alguno de ellos afirma que les fue impuesta “desde arriba”, lo que ha contribuido probablemente a algunas de las reticencias hacia la RMI expuestas por los trabajadores sociales de Servicios Sociales.

Pues, es que yo creo que fue una implantación muy desde arriba, muy así, ¿sabes?, sin haber un intercambio de qué nos parecía, sin poder evaluarla nosotros, o sea, muy impuesta desde la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, luego también desarrollada por técnicos de allí que no estaban en contacto con la realidad. (...) Manuales que llegaban, que llegaban, que llegaban, que estuvimos esperando el decreto sin saber cómo aplicar, gestionar. Rumores también. Fue muy caótico ese cambio. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años)

Por otra parte, la falta de dotación administrativa de los centros de Servicios Sociales, encargados de iniciar el proceso de solicitud y de verificar la veracidad de la información antes de remitirla a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, provoca que a menudo los solicitantes tengan que rellenar las instancias por sí mismos, alargándose así el periodo de concesión debido a la cantidad de errores que cometen en el cumplimiento de esta tarea. Eso, al menos, es lo que dicen los profesionales:

Si tú reconoces cuáles son los impresos de la RMI, verás que hay campos que están codificados, con lo que si una persona de determinado nivel de instrucción y con un desarrollo de habilidades muy básico (rellena la solicitud), la fiabilidad de los datos deja mucho que desear y, si no ha sido supervisado ni por un profesional del trabajo social ni por un auxiliar administrativo... Teóricamente nosotros (la CM) deberíamos valorar y resolver. La realidad es que aquí el 95% de lo que llega tenemos que subsanarlo, o sea, nos falta documentación que hay que pedir... En parte porque la RMI es subsidiaria de todo lo demás, tienes que tener un nivel de conocimiento de cómo están las prestaciones de desempleo, las de Seguridad Social, las de pensiones, las de cualquier medida. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Algunos trabajadores sociales consideran que la parte administrativa no debería recaer en ellos, a pesar de que la ley establece que han de ser los que inicien el procedimiento de solicitud de la prestación.

S: Luego coincidió que se empezaron a tramitar todas las cosas en el Ayuntamiento de Madrid a través de registro. El solicitante la llevaba a registro y ya nos venía registrada con toda la documentación y tal.

A: ¿No supervisabas antes que (los solicitantes de la RMI) la llevaran al registro?

S: Nosotros propusimos que no fuera ésa nuestra obligación porque, si no, estábamos otra vez metidos entre papeles. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años)

En caso de que la solicitud de la RMI llegase incompleta a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, ésta se vería obligada a volver a pedir, mediante carta escrita, la

documentación oportuna a los solicitantes, alargándose aun más los trámites de concesión de la ayuda.

Al principio creo que la RMI tardaba mucho, y al final también. En el trámite podías tirarte fácilmente 5-6 meses. El acceso era más difícil, pero el mantenimiento más fácil. Una vez dentro, daba seguridad, pero hasta conseguirlo era una angustia porque pedían tantos documentos, te volvían a mandar una carta: “Esto no está bien”. La solicitud tardaba un montón hasta que estaba completo el expediente en la CM. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años)

La complejidad del procedimiento administrativo, el hecho de que la gestión de la solicitud fuera llevada a cabo por dos instituciones diferentes, junto con la escasez de personal en el momento del trasvase del IMI a la RMI generaron, entre otras cosas, que los trabajadores sociales de Servicios Sociales estuvieran, de entrada, en contra de esta prestación, que les supuso mucha incertidumbre por las razones ya señaladas (falta de regulación de la misma, aumento de su carga de trabajo y de las tareas burocráticas relativas a su tramitación, etc.). La complejidad del proceso de implantación y la falta de medios para ello produjeron que el tiempo de resolución de la concesión pudiese llegar hasta seis meses. Y, aunque actualmente dicho tiempo se ha reducido a tres meses, el propio procedimiento administrativo ralentiza y dificulta la consecución del objetivo principal para el que fue concebida la RMI, a saber, la cobertura de las necesidades básicas de la vida en personas en situación de exclusión social. Por tanto, si bien los protocolos se han establecido como una medida para garantizar que todos los ciudadanos puedan, objetivamente, reclamar el cobro de esta prestación, a la vez imposibilitan la atención rápida y efectiva a los casos más severos. De hecho, el exceso de carga burocrática implicada en la gestión de la RMI ha sido destacado por algunos profesionales como uno de los factores que más les han desmotivado en su desempeño laboral:

No es lo que yo esperaba. Me esperaba, me pensaba que estaba más humanizado. Veo que hay mucho distanciamiento. Son papeles, y a mí siempre me ha gustado el trato directo con los usuarios, porque es donde ves realmente. Tenemos que tener mucha empatía cuando tratas con ellos, y tratar de descubrir cuáles son sus necesidades. Que te transmitan, saber escucharles y ver de qué manera puedo serle yo útil en su vida. Que a lo mejor sólo quiere que se le escuche, y lo que veo es que trabajo de una manera burocratizada, con papeles. Y no es lo que quiero. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Algunas personas encargadas de resolver las dudas de los trabajadores sociales sobre el procedimiento administrativo de la RMI nos han asegurado que éste no es bien conocido por ellos.

Hay gente que tendría derecho a cobrar una diferencia cobrando, por ejemplo, un subsidio, porque su unidad familiar está por encima del baremo de lo que realmente está percibiendo y, a lo mejor, le correspondería un derecho, pero creen que si nos dicen que están cobrando eso, se lo vamos a quitar. Y es un poco desconocimiento. Quiero hacer hincapié en que hay muchos profesionales en los centros de Servicios Sociales que no conocen cómo funciona la prestación, y te llaman sólo porque tienen dudas y, a lo mejor, no se han leído ni el reglamento para saber cómo tiene que actuar para ayudar a ese usuario. Entonces, a lo mejor, no le saben focalizar (...). Es un poco todo como que si tú a esa persona no le indicas bien qué pasos a seguir, a lo mejor, tampoco va a venir allí a preguntarnos. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Este desconocimiento, así como la desmotivación antes indicada, obstaculizan que los trabajadores sociales puedan cumplir una de las funciones que les competen, esto es, informar a los perceptores de la RMI sobre los derechos y obligaciones que tienen cuando cobran la prestación económica.

2.2.1 Algunas excepciones a los protocolos de la RMI para usuarios que trabajan en la economía informal

Lo expuesto en el apartado anterior hace referencia a las dificultades que encuentran algunos trabajadores de Servicios Sociales para comprender los procedimientos administrativos establecidos por la legislación de la RMI. Dicho esto, se encuentran con un problema extra en la gestión de las solicitudes de quienes afirman trabajar en la economía informal, como es el caso de la mayoría de los solicitantes de etnia gitana. Así, éstos no son tratados de acuerdo a lo que los técnicos de la Comunidad Autónoma denominan el “procedimiento “regular”, que incluye que los trabajadores sociales demanden cierta documentación. Para estos solicitantes, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se ha visto forzada a establecer cauces extraordinarios. Así, los requisitos establecidos en la ley no son válidos para todas las personas que demandan la prestación como, por ejemplo, las que consiguen sus ingresos a través de la chatarra o de la venta ambulante sin permiso. De este modo, si un solicitante afirma tener algunos ingresos en la economía sumergida pero no poder demostrarlos, se le pide que realice una declaración jurada de los ingresos obtenidos, pasando a ser tenida en cuenta como prueba del nivel de los mismos. Mientras que quienes han estado trabajando en la economía formal tienen que presentar extractos bancarios, nóminas y declaraciones de impuestos para demostrar sus ingresos, estos otros (mayoritariamente gitanos) escriben en un papel la cantidad que ganan al mes, que se valida como equivalente a la documentación que entregan los primeros. Algunos profesionales están disconformes con este “doble rasero” que se aplica a unos solicitantes y a otros, en tanto que otros reconocen que las declaraciones juradas son la forma que han encontrado para poder actuar cuando se

trata de solicitantes que de ninguna manera podrían entregar la documentación solicitada, prevaleciendo entre ellos el objetivo de asistencia a los necesitados sobre el estricto cumplimiento de los requisitos marcados en la ley. Aun así, el siguiente entrevistado reflexiona sobre cómo esos otros procedimientos habilitados para las personas que no pueden presentar prueba documental de sus ingresos implican, en el fondo, la no declaración de muchos de los que se consiguen mediante el trabajo en la economía sumergida.

Evidentemente hay que cuestionarse que esto no es lo único que tienen, que tienen que estar con una parte de economía sumergida, que todos nos ponemos la venda en los ojos, porque no aflora, y así podemos actuar. Y, entonces, efectivamente, favorecemos sin querer determinados comportamientos que a la vez atacamos. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Hay que recordar que, si bien cuando se instauró el IMI, el movimiento asociativo era partidario de la creación de medidas de discriminación o acción positiva para los miembros del colectivo gitano, actualmente se penaliza –bajo la retórica de los derechos de ciudadanía– distinguir a favor de unos ciudadanos y no de otros. Serrano y Arriba (1998) ya hablan de la dificultad de trabajar con el colectivo gitano al utilizar los trabajadores sociales que trabajaban con el IMI un modelo de integración único que querían aplicar tanto con *payos* como con gitanos. Hoy, al igual que entonces, el manejo de un concepto de derecho social que vincula la solicitud de la RMI al cumplimiento de determinados requisitos (que han de los mismos para todos los ciudadanos) produce inconformidad en algunos trabajadores sociales cuando han de implementar procedimientos específicos para algunos ciudadanos.

En definitiva, la propia complejidad del procedimiento administrativo, la forma en que se implementó la RMI en sus inicios y la burocratización que ha supuesto para los trabajadores sociales han ido construyendo una atmósfera poco proclive a que los profesionales que han de aplicarla implementen voluntariamente los elementos más empoderadores de la misma, que –como se ha indicado– no aparecen regulados apropiadamente en la legislación. Además, hoy en día buena parte de estos profesionales están en contra de las adaptaciones específicas que se han de realizar para atender las situaciones vitales de los solicitantes gitanos; lo cual, junto al aumento de la carga burocrática que recae sobre dichos profesionales, hace que estos solicitantes entrañen un trabajo extra que incomoda a los que, bajo la retórica de los derechos de ciudadanía, consideran “injusto” que los gitanos reciban un trato preferencial y defienden que todos los solicitantes deberían de ser tratados igual. Estas no son las únicas circunstancias que son propicias para que surjan conflictos con los usuarios gitanos. En los siguientes apartados recojo otros factores que, junto con la concepción de los gitanos como “usuarios difíciles” de los Servicios Sociales, dificultan la

aplicación de la RMI y, principalmente, su puesta en práctica con colectivos que no se comportan siguiendo las pautas “normalizadas “ –según la jerga profesional– de las instituciones públicas.

2.3 Condiciones estructurales que dificultan la implantación de la RMI

Hay otra serie de condicionantes más estructurales que dificultan que los profesionales de Servicios Sociales puedan afrontar la realización de labores de intervención social intensiva como, por ejemplo, trabajo de calle, “acompañamiento social” continuado o incluso los seguimientos periódicos de cumplimiento de actividades de la RMI. Nos estamos refiriendo a la situación estructural de escasez de recursos y de saturación que afecta a la organización de los Servicios Sociales madrileños y obstaculiza, así, la coordinación con las diferentes instituciones que participan en la intervención social con los usuarios de la RMI.

La retórica de la crisis por la que pasa España está suponiendo un recorte de los Servicios Sociales, que están quedando reducidos a sus aspectos más básicos, más cercanos a lo benéfico-asistencial. La Presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales así lo expresaba en agosto 2011:

Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado (Entrevista a Ana Lima, en Morán, 2011: 26-27).

Igualmente, los profesionales de la RMI que hemos entrevistado nos dicen que no cuentan con suficientes recursos para realizar su trabajo, están “saturados” y no dan a basto para el desempeño de sus funciones.

Yo estoy en 50 cosas, con lo cual no puedo mucho más. Este es el primer año que se ha hecho un curso de rentas para entidades de iniciativa social pero, claro, de cada proyecto ha ido una persona, porque hemos hecho dos cursos a las 47 entidades a las que subvencionan proyectos. Entonces, tendríamos que hacer muchos más, pero es que somos los mismos siempre. Es que no llegamos a todo. Yo creo que hemos empezado a ver un poco la luz a final del 2004, que ya se había hecho algo de revisión anual, algo de sancionador, y sobre todo 2005. Y el problema es que deberíamos tener un apoyo estructural mayor. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Las narraciones sobre cómo se trabaja con prisas, sin poder descansar, aparecen continuadamente en las entrevistas:

Yo lo que sí te reconozco es que nosotros trabajamos muchas veces a contrarreloj. No se le da la importancia que realmente conlleva una persona, de hacerle un seguimiento más concreto, de poderte leer el expediente desde el principio, por qué ha llegado a esa situación o cómo se encuentra, o hablar con ese profesional de referencia para ver cómo podríamos trabajarlo mejor – la palabra sería con coordinación–, a solamente el hecho de dar: “Pues, venga, a éste le quito, a éste le doy, éste cuánto tiene derecho”. Un poco todo como muy escéptico: “Venga, aquí tienes

una cantidad y, venga, vamos a ser administradores de recursos, y cómo aquí lo que se hace es dar dinero, pues, venga, a los buenos sí, a los malos no, a éstos se les quita”. Y es un poco la imagen que yo tengo, que es lo que no me gusta. No está personalizado. Lo que se hace no está personalizado. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

En este contexto social y económico se abren los servicios de los Centros de Servicios Sociales a la subcontratación de múltiples empresas y organizaciones neogubernamentales (Bustelo, 2000: 271), que asumen parte de sus funciones a menor coste. En todo caso, la mayoría de los profesionales de estos centros de la ciudad de Madrid me han manifestado no tener tiempo para realizar los seguimientos de las actividades de los Programas Individuales de Inserción con la frecuencia que les gustaría, y han establecido reuniones cada tres o cuatro meses con los perceptores de la RMI, lo que diluye el sentido de esos seguimientos. Sólo los dos profesionales entrevistados que pertenecen a Centros de Servicios Sociales de la periferia de la ciudad dicen haber podido realizarlos, dedicándoles un tiempo suficiente.

Les vemos según la situación de la persona, o sea, si hay que hacer un seguimiento de que empiezas en un recurso, vamos a ver cómo te va ese recurso, vamos a hacer una evaluación a la semana... ¡Eso no se puede!, ¡con las listas de espera que hay, no se puede!: “El mes que viene ya me cuentas cómo te va en ese proyecto, qué has hecho de esto, o bien si ya está encauzado”. Después cada 2 meses, luego cada 3, cada 4, no más de 6. Cada 2 meses si es una intervención muy intensiva. Bueno, si es muy intensiva, a veces cada semana y sin cita, pero la media son 2, 3 meses de seguimiento. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años)

Así, se sienten desbordados, sin capacidad para afrontar la cantidad de trabajo que tienen.

El tema del nivel tan elevado de los ratios de atención en los Servicios Sociales influye muchísimo e impide que se pueda hacer una verdadera intervención social. En muchos casos, los Servicios Sociales, los trabajadores sociales se convierten en auténticos gestores de prestaciones en vez de profundizar en el papel del acompañamiento social... No se puede hacer acompañamiento social porque cuando un profesional está desbordado, con una lista de espera de 3 meses para atender a la gente y, además, gente con necesidades inmediatas, y tiene que esperar 2 meses para que se le atienda en Servicios Sociales, pues, ¿qué intervención social vas a hacer ahí?, ¿qué acompañamiento social vas a hacer ahí? (Entrevista a trabajadora social contratada por uno de los principales sindicatos de la CM, 38 años)

Las listas de espera, la saturación de las agendas de los profesionales, la falta de tiempo... son factores que impiden que el peso que la ley da a los apoyos sociales se pueda cumplir en la práctica. De este modo, el lenguaje de la escasez se convierte en un lugar común en el discurso de los profesionales de la intervención social (gestores, administradores, trabajadores sociales, personal de ONG, etc.), al menos entre quienes han sido entrevistados.

Tú me dices... a lo mejor esa gitana mayor no tendría que ir nunca al proyecto. Tendrían a lo mejor que, desde Servicios Sociales, hacer un grupo dos veces al mes con gitanas de esa edad y

acordar pequeñas cositas, pero no hay tantos Servicios Sociales que estén dispuestos a eso, ni hay tantos profesionales... ¡Están sobrecargadísimos! (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Estas condiciones estructurales en que desarrollan su trabajo han podido influir en el cambio que se ha operado en las funciones tradicionalmente desempeñadas por los trabajadores de Servicios Sociales, que han pasado de ser referentes de la intervención social a ser gestores de prestaciones. Aguilar, Gaviria y Laparra (1993: 161) indican que, durante la implantación del IMI, la saturación y el exceso de trámites burocráticos eran los principales factores mencionados por estos profesionales entre los que dificultaban la realización de “un adecuado trabajo social de integración”.

A: Realmente no se ha hecho una apuesta presupuestaria en los Servicios Sociales y los trabajadores sociales, que son la figura de referencia, como están desbordados, ¿qué se ha hecho?: externalizar competencias que son propias de la atención primaria de Servicios Sociales. Es como si a un médico parte de su diagnóstico y parte de su competencia profesional la externalizara a otros servicios.

E: ¿Y esos otros servicios cobran igual?

A: Cobran menos, y luego eso añadido a que ese tema de externalizar servicios, de privatizar servicios, que sale más barato, unido a que vacían de contenido las competencias profesionales, con lo cual se queda que un trabajador social, el referente de la intervención social en el sistema de Servicios Sociales, se queda como gestor, básicamente, y la intervención social la gestionan otros. Y esto lo adornan diciendo que hay que fomentar la participación social..., que el movimiento social debe participar también en el desarrollo de las competencias y habilidades ciudadanas. Entonces, empiezan a florecer todo un conjunto de asociaciones y entidades que empiezan a participar en la intervención social. (Entrevista a trabajadora social contratada por uno de los principales sindicatos de la CM, 38 años)

Esas condiciones tampoco facilitan que se produzca la necesaria coordinación entre las diferentes instituciones. Así, la coordinación interinstitucional que viene establecida tanto en la ley de la RMI como en el Plan de Exclusión de la CM responde, cuando tiene lugar, más a voluntades de profesionales particulares que a lógicas de esas instituciones. Quizá por ello la recomendación que muchas veces surge de las reuniones técnicas interprofesionales sea la de “mejora de la coordinación”⁷⁴.

La ley sí determina que tiene que haber. Tiene que haber actuaciones de coordinación inter-administrativa. Lo que pasa es que el peso está mucho en la persona y muy poco el compromiso de las políticas públicas para facilitar eso. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

La falta de coordinación era una de las preocupaciones que, también en los 90, se enumeraban como uno de los elementos que podían obstaculizar la implementación eficaz del

⁷⁴ En los informes que han sido publicados en los últimos años sobre la situación de los asentamientos chabolistas del Área Sanitaria 1, así como sobre Cañada Real, se hace hincapié en esta recomendación. Y en las reuniones de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas aparece también repetidamente, tanto que se ha convertido en una especie de “mantra” que tranquiliza la conciencia profesional.

IMI (Perales, 1991) y actualmente, más de 20 años después, continúa siendo uno de los fallos conocidos del sistema de intervención social.

Queda por ver si la coordinación entre los técnicos del Ayuntamiento y el Consorcio va a ser realmente efectiva –algunos trabajadores del Consorcio se mostraban pesimistas al contemplar la desproporción entre el número de coordinadores IMI, y la previsible demanda de beneficiarios en sus núcleos respectivos–, y también la incógnita de cómo se va a llevar a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación de los ‘IMI gitanos’ en los núcleos donde el Consorcio no tiene presencia (Perales, 1991: 228).

Por tanto, se puede afirmar que la falta de coordinación es un mal endémico de la implementación de los programas de rentas mínimas en la Comunidad de Madrid. Además, el actual contexto de escasez y de ahorro del gasto a través de recortes en ayudas sociales es otro factor que crea inestabilidad en la aplicación de la RMI. Por poner un ejemplo, el hecho de que la partida presupuestaria de las rentas mínimas dependa de los presupuestos generales puede generar que no haya dinero suficiente para pagar las prestaciones económicas. Así, fue denunciado, a 11 de agosto 2011, que las RMI no habían sido pagadas en Cataluña (diario *Público*, 11 de agosto de 2011: 6; Gracia, 2011: 23). En el caso de la Comunidad de Madrid ya se dijo que en septiembre 2010 el Consejo de Gobierno amplió a 11.741.000 euros el presupuesto para pagar la RMI debido a la alta demanda.

La situación de escasez de recursos para atender los casos más extremos hace que algunos trabajadores sociales de Servicios Sociales expresen que se sienten avergonzados cuando, confrontados con perceptores en situaciones vitales muy precarias, han de decirles que no tienen ni para darles una pequeña ayuda de emergencia. Más adelante veremos con mayor detenimiento que se está produciendo un efecto bola de nieve que está propagando la sensación de “falta de fe” de muchos de los profesionales de la intervención social. La escasez de recursos, la distancia con los usuarios, la falta de tiempo para realizar intervenciones significativas sostenidas en el tiempo, etc., son algunas de las razones que están haciendo que pierdan esa “fe” en lo que hacen.

S. (trabajador social) me dice: “El otro día vino Aurora (usuaria de la RMI) y me dio vergüenza, ante su situación de inminente desahucio, no poder ofrecerle ninguna residencia temporal subvencionada por la Comunidad o por el Ayuntamiento. Al final le terminé dando las direcciones de Cáritas y de una asociación de mujeres, para que pruebe a ver si tiene suerte.” Al rato me comenta que no tiene ninguna fe en Servicios Sociales pero que no sabe qué otro trabajo le podría permitir vivir bien, en cuanto salario decente y buen horario (Registro de campo: conversación con trabajador social de Servicios Sociales de la zona sur de Madrid, 38 años, junio 2010).

La ley de la RMI establece que, como parte del seguimiento que realizan los Servicios Sociales del proceso de inserción de los usuarios, se deben producir reuniones entre los

trabajadores sociales de Servicios Sociales y las entidades que ejecutan los proyectos de integración. Aquellos a los que hemos entrevistado sostienen que, en la práctica, estas reuniones son muy complicadas dada la intensidad del trabajo burocrático y de atención directa que llevan a cabo en los centros de Servicios Sociales. Así, la frecuencia de las mismas varía mucho según la ratio de atención existente en los distritos en los que trabajan.

A: ¿Y cuál era vuestra relación con los proyectos de integración?

S: Pues era contacto escaso. (...) Y a lo mejor cada dos meses sí te juntabas con las entidades que había más relación. Cada dos meses, y siempre a la carrera, de si hay tiempo. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 38 años)

Trabajadores de asociaciones con financiación de la Comunidad de Madrid para desarrollar proyectos de integración con población gitana en Cañada Real nos han señalado la falta de contacto con los centros de Servicios Sociales de Vallecas; sin embargo, otros que trabajan en distritos como, por ejemplo, el de Villaverde, aseguran que la comunicación entre las ONG y los servicios municipales es frecuente:

Almuerzo con una trabajadora social que trabaja en una asociación impartiendo proyectos de integración a población gitana. Me cuenta que está harta de que el trabajador social de Servicios Sociales que “supuestamente” la supervisa no haya aparecido por la asociación en todo el año, y ahora la llame con prisas para que vaya a Servicios Sociales y le lleve un informe sobre el número de perceptores de la RMI con los que ha trabajado a lo largo del año y el grado de cumplimiento de los objetivos. Me dice enfadada que seguramente le pidan hacer un informe anual para Servicios Sociales y que por eso la ha llamado. (Registro de campo: conversación informal con trabajadora social de ONG, proyecto 1, zona sureste de Madrid, mayo 2007).

De este modo, aunque en diversos textos oficiales (como la orden 2675/2007, de 31 de diciembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, o el Plan contra la exclusión 2002-2006 de la Comunidad de Madrid) se haga referencia a la importancia de la intervención complementaria entre los centros de Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social, la falta de tiempo de los diferentes profesionales para acudir a las reuniones imposibilita la coordinación efectiva entre los mismos y desvirtúa el carácter de “intervención integral” que se contempla en la ley de la RMI y en el citado Plan para llevar a cabo los apoyos orientados a la inserción social.

Uno de los posibles efectos de la saturación, la escasez de recursos y la falta de visión y entendimiento global de la prestación de la RMI consiste en que algunos profesionales de Servicios Sociales derivan hasta las ONG a perceptores de la RMI de características muy dispares, por lo que éstas encuentran que dichas personas no cumplen el perfil para el que fueron creados algunos de los proyectos que ejecutan. Aunque desde la Comunidad Madrid se afirma que se está comunicando –tanto a los diferentes Ayuntamientos como a las ONG que

reciben financiación– que los proyectos de integración no han de ser “cajones de sastre” a los que tengan que ir todos los perceptores de la RMI con el mero propósito de tenerlos ocupados, ello está ocurriendo bastante, al menos en lo que se refiere a la población gitana.

Sí insistimos con las entidades y con los Servicios Sociales en ese sentido, de que no pretenden ser cajones de sastre, sino realmente ver qué población tengo yo con unas mínimas situaciones comunes que me vendría bien un proyecto para que trabaje esta problemática. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Todo ocurre como si con respecto a los perceptores de la RMI que son considerados “no empleables”, como es el caso de las mujeres de etnia gitana analfabetas con edades comprendidas entre 40 y 50 años, la única forma de participación en su propia inclusión social que se concibe como posible fuera acudir a cursos de alfabetización en una ONG. Martínez Román (2001: 78) se pregunta si la generación de dispositivos de inserción social que sólo buscan una participación “blanda”, en el sentido de dotar de reconocimiento a las personas por el solo hecho de participar, no está produciendo una segunda categoría de ciudadanos: la de aquellos de los que no se puede esperar que se inserten a través del empleo y para los que se idean, consecuentemente, diferentes “dispositivos” con objeto de mantenerlos ocupados. A tenor de esta problemática, en un encuentro profesional en Madrid sobre estas cuestiones organizado por la Fundación Luis Vives⁷⁵ (en diciembre, 2007), se habló acerca de la oportunidad de que no se planteara la inserción socio-laboral como objetivo de las prestaciones de la RMI, reservando estas últimas para quienes que no tuvieran posibilidades de la primera. Se crea, entonces, la fórmula de la “incorporación social”, que recuerda a la del “acompañamiento social”:

La incorporación social estaría basada en un refuerzo del acompañamiento personal y del “proyecto personal” del titular, con el objetivo de formular y realizar actuaciones de tipo social (Fundación Luis Vives, 2008: 34).

Volviendo al tema de la coordinación, o más bien de la falta de coordinación, hay que hacer notar que además de la irregularidad con la que se están realizando las reuniones de coordinación entre diferentes Administraciones y entidades que colaboran en el proceso de inserción social de los usuarios de la RMI, aparece un nuevo condicionante que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos para los que se creó la RMI: la falta de evaluación sistemática de los efectos de la misma. Así, es notorio que la Comunidad de Madrid únicamente solicita a las entidades a las que financia información de carácter cuantitativo sobre las altas y bajas de

⁷⁵ Durante el año 2007 la Fundación Luis Vives organizó una serie de talleres con objeto de sensibilizar a la población y a los profesionales de la intervención social sobre la Estrategia Europea para la Inclusión Social.

usuarios de la RMI en los proyectos de integración, información que publica anualmente en los balances de gestión que se pueden revisar en la página *web* de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales⁷⁶.

A: ¿Y qué os piden desde la CM?, ¿cómo evalúan el trabajo que hacéis?

P: Una evaluación cuantitativa, números, tantos por ciento de gente que ha ido, tantos por ciento de gente que ha faltado, tantos por ciento de objetivos alcanzados, y no sé qué. O sea, nosotros tenemos una evaluación cualitativa de los proyectos RMI así de gorda, de los dos años que tenemos guardada para nosotros. (Entrevista a directora de asociación que ejecuta proyectos de integración con financiación de la CM, 53 años)

Decir, para terminar con este apartado, que los profesionales y técnicos piensan en términos dicotómicos su relación con los políticos que han regulado las rentas mínimas (u otros ámbitos de actuación de los Servicios Sociales). Así, los conciben como los que diseñan “desde arriba” políticas como la RMI, esto es, los que elaboran exigentes objetivos pero sin dedicar los recursos suficientes para que se cumplan, situando así a los trabajadores sociales entre la espada y la pared. En todo caso, es interesante comprobar que, en la cartera formativa a la que pueden acceder los trabajadores de Servicios Sociales en Madrid, aumentan los cursos sobre gestión del estrés o sobre cómo dar malas noticias de buena manera. Se pretende, por tanto, que cada profesional frustrado tenga herramientas individuales para solventar sus emociones y poder seguir trabajando en similares circunstancias.

Son como cosas más sociopolíticas lo que sale con la RMI. Y realmente a los que estamos como más abajo, que estamos ahí, palpando la realidad, y vemos lo que necesita esta gente, que a lo mejor no es tanto... Son temas políticos, temas sociales metiendo política ahí para querer mejorar, pero luego ¿eso cómo se inflexiona y qué diferencia ha habido (con la RMI)? La Jungla (asentamiento chabolista madrileño) existía antes y sigue existiendo ahora. (Entrevista a directora de asociación que recibe financiación de la CM, 53 años)

En suma, las condiciones de saturación de los Servicios Sociales y la desconexión entre los técnicos que aplican la RMI y los políticos que la diseñan, la falta de coordinación entre los diferentes agentes que participan en la implementación de esta política social, la inexistencia de debates profesionales para analizar y mejorar la actual aplicación de la RMI, así como la decisión de no difundir evaluaciones en las que se reflexiona sobre estos problemas, son otros tantos obstáculos para la correcta implementación de la ley, además de configurar el contexto actual de aplicación de esta política social.

⁷⁶ Durante el trabajo de campo tuve la oportunidad de entrevistar a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que me dio acceso a un informe de evaluación de la RMI realizado en el año 2008. Encargado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, este informe no salió a la luz debido a lo que, según la entrevistada, fue considerado como críticas a la forma de implantar la RMI por la CM y el Ayuntamiento.

2.4 Factores políticos. El contexto social de los Servicios Sociales actuales: el electoralismo ‘ciudadanista’ y la intrusión política en los Servicios Sociales

La “falta de fe” –ya mencionada– de algunos de los profesionales y técnicos que aplican la RMI se ve nutrida por la desvinculación que encuentran entre su ámbito de actuación profesional (de carácter práctico y bien delimitado) y el de los cargos políticos; terreno en el que consideran que se toman decisiones que terminan por afectarles. Varios son los entrevistados que sostienen que la intervención social se ha convertido en una arena política proclive a ser utilizada para lograr réditos electorales. Así, sostienen que “lo políticamente correcto” no pasa por la implementación coordinada y dotada de recursos de la RMI u otras medidas sociales, sino por la rentabilidad electoral que se consigue visibilizando al máximo tanto los proyectos de integración más estelares que son financiados por las instituciones públicas como el número de ayudas otorgadas.

¿Pero qué es lo que queremos hacer con esas personas que se encuentran con esas situaciones y que queremos que formen parte de la sociedad que tenemos ahora y que estén incluidos? Para eso hay que poner un poco de todos, y luego colectivamente, profesionalmente, habría que mejorar muchas cosas de políticas que se hacen actualmente. Pero te vuelvo a repetir, eso son cosas que no venden. (...) ¿Qué harán (los políticos)? Lo que es políticamente correcto y lo que venda al electorado. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Y tampoco pasa –aseguran– por el diseño planificado de las políticas que se quieren implantar, lo que genera un distanciamiento radical de los profesionales con respecto a los objetivos políticos.

- P: ¿Que hay una saturación en Servicios Sociales? Sí, la hay. ¿Que ahora mismo en Villa de Vallecas las trabajadoras que tienen la zona de Cañada Real, además, tienen que llevar la zona de Ensanche⁷⁷ y están que no dan abasto? Es cierto, ¡claro que es cierto!
- D: Pero si es que aquí nada más que se construye sin ninguna cabeza, pues, es que a lo mejor no hay ni agua siquiera para estas viviendas que están haciendo.
- P: Pero, Dolores, ¡si hay construido hasta un colegio!
- D: O sea, ¡nada más que van a la puta pela!
- P: ¡Han construido un colegio concertado en todo el PAU (de Vallecas)! Venga, por favor, antes de edificar el PAU, dota de colegios, de Centro Social y de centro de Servicios Sociales. Entonces, ahora mismo están desbordadas, ¡como para hablar con ellas y decirles: “vamos a ver, según el programa individualizado de inserción que has hecho, deberían seguir asistiendo las mujeres aunque ya no tengan prestación!” (Entrevista a directora y coordinadora de asociación que recibe financiación de la CM para proyectos de integración con mujeres magrebíes y gitanas, 53 y 50 años respectivamente.)

⁷⁷ Zona de nueva construcción en el PAU de Vallecas, que ha sido dotada de nuevos colegios y centro de atención primaria, mientras que el número de los profesionales de Servicios Sociales no ha aumentado.

Desde su punto de vista, ni siquiera el hecho de que las dos instituciones de Madrid que tienen competencias en la RMI (Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) estén regidas por el mismo partido político (el Partido Popular en el momento de realización de esta tesis doctoral) supone ventaja alguna para la coordinación técnica.

No sé. El análisis es mucho más complejo, y que por debajo de todo hay determinadas cosas que mandan que no se puedan hacer determinados cambios. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo dos administraciones del mismo color y en el mismo territorio? Quiero decir: ¿por qué es tan difícil? Bueno, desde la CM te puedo decir que hay cosas que a mí no me importa que el Ayuntamiento no mencione. Yo sé lo que he hecho para que el Ayuntamiento se ponga esa medalla. (...) Si yo a la primera o de entrada digo: “Pero tiene que quedar muy claro en la foto que yo estoy al mismo nivel que tú”, y empiezo ya con esas condiciones, mal vamos. Y, en cambio, eso es lo habitual. Y digo en lo técnico, ya no hablo de lo político. (Entrevista a técnica con cargo de responsabilidad en el Departamento de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas de la CM, 50 años)

Sin embargo, cuando distintos profesionales del movimiento sindical y del ámbito de la investigación social se han unido para reflexionar en conjunto sobre cuestiones de inclusión social (Fundación Luis Vives, 2008: 33), las carencias y las limitaciones de las políticas de rentas mínimas se han diagnosticado y descrito con relativa claridad (desequilibrios extremos intraterritoriales a nivel estatal; falta de garantía de las prestaciones como derecho subjetivo por su carácter discrecional; escasez de las cuantías económicas, que no garantizan unos “mínimos” suficientes para la subsistencia; contradicción esencial en la aplicación de la RMI por no desvincular realmente los dos derechos que reconoce; estigmatización de los más excluidos por falta de herramientas profesionales para trabajar con ellos y exceso de énfasis en su “activación”⁷⁸), por lo que no se puede decir que no se cuente con diagnósticos adecuados en el caso de querer implementar mejoras en torno a las deficiencias del programa RMI de la CM

En cuanto a la organización de la intervención social en Madrid, a la actual fragmentación institucional, con externalización/subcontratación de servicios a través empresas de intervención, se suma un contexto de electoralismo utilitarista nada propenso a aceptar o a promover críticas a las actuaciones de la Administración Pública (o de los proyectos financiados por ella). Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en lo acontecido en algunas de las reuniones de la Comisión de Población Excluida del Área de Vallecas, lugar de encuentro de profesionales de la intervención social y sanitaria, tanto de la Administración como de las ONG, fundaciones e Iglesia Católica de la zona, a las que estuve acudiendo entre los años 2005 y 2008. En estas reuniones, se dio el caso de que cuando los educadores

⁷⁸ La lógica de la “activación” es aquella que plantea que *si no haces algo* (sobre todo, si no diseñas un plan de futuro y no te movilizas) es porque *no quieres ser autónomo, no quieres salir de la situación*, en este caso, de exclusión en que te encuentras.

sociales de una de las empresas de intervención subcontratadas por el Ayuntamiento para trabajar en Cañada Real se atrevieron a criticar la actuación de los Servicios Sociales en esta área territorial (entre otras cosas, por no estar presentes en ella, la falta de voluntad política para proveerla de servicios básicos o el escaso interés por dotar de autobuses escolares a los menores), la directora de los mismos les hizo saber, con tono admonitorio, que mientras ella asistiera a las reuniones de la Comisión, no haría falta que ellos también lo hicieran puesto que, en cumplimiento de su cargo, podría transmitir la información que le remitieran. En estas reuniones, en general, se originaba una interrelación en la que los profesionales y técnicos buscaban sobre todo legitimar su autoridad. Esperaban que su criterio fuera escuchado y reconocido por el hecho de provenir de un experto, pero no daban lugar ni estaban abiertos a verdaderos debates sobre las cuestiones más “calientes” de la ciudad. De hecho, se creaba una atmósfera en la que cada organización presente trataba de salvaguardar su parcela de intervención, no admitiendo que nadie la tocara o cuestionara. Algunas directoras de ONG llegaron a decir que “hay mucha gente luchando por la misma tarta”, para señalar que no se podía dar demasiada información acerca de las necesidades que una entidad descubría en una zona determinada, no fuera que otra entidad redactara un proyecto y consiguiera la financiación antes que ella.

Al igual que en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid hay un clima político tendente a censurar la información que pueda revelar al electorado deficiencias en la gestión del gobierno autonómico, como se puede apreciar a través del siguiente registro de campo:

Estoy conversando con una representante institucional de la CM en lo referente a colectivos vulnerables. Marta coordina, entre otras cosas, la investigación cualitativa en temas sociales y está presente, además, en la mesa sanitaria para la exclusión social de la CM. Es una mujer de unos 50 años formada en enfermería y sociología. Me cuenta que “las cosas” dentro de la Consejería de Sanidad cada vez están peor, y que lo último que les ha pasado es que han hecho un estudio sanitario en Madrid en el que ha salido que la percepción de la gente sobre la sanidad ha empeorado, y en el que analizaban el porqué y en qué situaciones ha empeorado. Me dice que cuando “los de arriba” leyeron el informe directamente censuraron las partes más emblemáticas que tenían que ver con el empeoramiento de la sanidad pública. Marta, con cara cansada, expresa que cada vez está “más difícil” poder “hacer salir” la información referente a cosas que no están funcionando, y que se guardan de hacerlo antes de un periodo electoral. (Registro de campo: conversación informal con representante institucional para colectivos desfavorecidos, área sanitaria, julio 2009)

En este contexto de instrumentalización política de la intervención social, de profesionalización de la misma y de falta de debates con potencial de transformación social, es la Iglesia Católica de base la que adopta un posicionamiento más crítico, al menos en lo que se refiere –para seguir con el anterior ejemplo– a las intervenciones en Cañada Real. Así, han expresado duras críticas a través de los medios de comunicación y de sus propios órganos

informativos⁷⁹ y, para poner un caso, los representantes con más autoridad de la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada, en Cañada Real, han dejado de asistir a las reuniones “técnicas” antes referidas, dado que, según han expresado, “no sirven para nada”.

En estas reuniones, se da a menudo el caso de que las demandas en principio más sencillas (como, por ejemplo, que en las zonas de Cañada Real donde hay niños pasen los camiones del Ayuntamiento para recoger la basura y limpiar el terreno de jeringuillas y desechos tóxicos, o que pongan paradas de autobuses escolares dada la alta presencia de menores) se vuelven imposibles, puesto que ninguno de los participantes con cierta autoridad pública quiere trasladar “hacia arriba” (esto es, a sus superiores) la necesidad de gastar dinero para dotar de recursos a una zona que oficialmente “no existe”.

Un caso que ejemplifica el clima que se vive en las reuniones de la Comisión de Población Excluida de Vallecas es el ocurrido cuando profesionales del EIPE (Equipo de Intervención con Población Excluida) denunciaron palizas de la policía a personas rumanas residentes en Cañada Real. Cáritas fue la única entidad que fue a reunirse con la policía para pedir información de lo ocurrido, mientras que la opción del mediador social contratado por los Servicios Sociales, que participaba en esta reunión, fue la de “invitar” a la policía a acudir a la siguiente que se celebrara dado que, según argumentaba, era “uno de nosotros” puesto que estaba realizando “intervención profesional en la zona”. Los educadores sociales y los miembros del EIPE allí presentes no estuvieron en absoluto de acuerdo, pero buena parte de los participantes sí consideraron plausible la invitación.

A diferencia de lo que sucedía en el mundo asociativo y de base de los 90, la intervención social es en la actualidad, por un lado, un nicho laboral para muchas personas subcontratadas por la Administración que trabajan en organizaciones neogubernamentales, y son quienes no se pueden permitir perder su empleo y, por otro lado, un terreno de intervención de los poderes políticos del que éstos esperan sacar réditos electorales. Por ello, se confía en que quienes están al frente de los Servicios Sociales, por ejemplo, tengan “controlada” la información sobre su zona y solucionen y “parcheen” los problemas más acuciantes que, si no, podrían “explotar” en la cara de las autoridades gubernamentales.

Dos trabajadores sociales de IRIS cuentan en una reunión de la Comisión de Población Excluida que, después de un programa de televisión en el que se mostraba a unas familias gitanas de Cañada Real viviendo muy precariamente con muchos menores en la zona, las autoridades se coordinaron para realojar a las pocas familias que vivían en ese núcleo. Los trabajadores expresaban que estaban cansados de ser utilizados, y de que estas actuaciones desacreditaran la

⁷⁹ El blog de la Iglesia Santo Domingo de la Calzada (“Se hace Cañada al andar”) o el de la Parroquia de Entrevías San Carlos Borromeo, por ejemplo.

intervención que llevaban haciendo con otras familias desde hace años para que pudieran ser realojadas, pues mostraban que no hace falta seguir los procedimientos, sino que a determinadas personas se las realoja porque han salido en televisión (Registro de campo: observación participante en reunión de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas, marzo 2007).

Cuando alguno de los problemas “urgentes” se muestra en los medios de comunicación es cuando se despliegan estrategias para demostrar ante la opinión pública que se están poniendo los medios para solucionarlos por parte de la Administración. Ello es así, al menos en parte, porque el contexto de la intervención social con los excluidos muestra una ausencia de movimiento ciudadano reivindicativo que luche por los derechos de las personas en situación de exclusión social. Las instituciones públicas (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad) y sus técnicos no quieren que se les pise sus “áreas profesionales” y no reciben bien las críticas abiertas a su labor.

Con todo, en ocasiones se establecen alianzas “clandestinas” entre personal contratado por el Ayuntamiento y personal de las ONG y la Iglesia Católica de base. Fue lo que sucedió en el caso de la elaboración de un video donde se criticaba la escasa presencia de los Servicios Sociales en Cañada Real, en donde se demandaba la construcción de paradas de autobuses escolares y la construcción de pasos de cebra por el elevado tráfico de camiones, que había ocasionado varios accidentes en 2008, incluyendo el atropello de una niña marroquí. Esta denuncia fue tomada como un agravio por las trabajadoras sociales de Servicios Sociales más veteranas que asistían a las reuniones de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas, que se enemistaron con el personal de la ONG que había promovido ese video, puesto que consideraban que era un insulto personal a su trabajo. En una de estas reuniones, la ONG en cuestión se defendió declarando que lo único que estaban pidiendo era alcantarillado, pasos de cebra y transporte escolar para los menores residentes en Cañada Real. Aún así, como consecuencia de ello, dejaron de recibir financiación del Ayuntamiento para alguno de los proyectos que tenían en la zona. Las jefas de Servicios Sociales no se llegaron a enterar de que algunas mediadoras sociales contratadas por el propio Ayuntamiento también colaboraron en la elaboración del video. En todo caso, lo anterior muestra que las críticas abiertas, por muy poco radicales que sean, no sólo no son bienvenidas, sino que son objeto de medidas punitivas que tienen importantes consecuencias económicas para las ONG que osan expresar desacuerdo con el Ayuntamiento o con la Comunidad de Madrid.

La presencia de representantes del Ayuntamiento (incluido el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón) en jornadas de mujeres gitanas auspiciadas por este organismo público es común en momentos previos a las elecciones. En estas jornadas, se suele animar a las mujeres a

formarse y se promete el apoyo del Ayuntamiento para la subsiguiente inserción laboral. El hecho de utilizar las elecciones para comunicarse con las gitanas y el posterior olvido de las promesas hechas, han sido denunciados por algunas ONG en el año 2008:

Pero todo este entusiasmo (por la formación de mujeres gitanas, en concreto mediadoras) se convierte en agua de borrajas si las administraciones se limitan a prometer en momentos electorales y a olvidarse de sus promesas, una vez pasados estos. (Alfonso, 2008: 236)

En suma, el actual panorama político no es propicio para promover cambios estructurales, sino para ejecutar soluciones puntuales que sirven, sobre todo, para aumentar la popularidad del gobierno local y/o autonómico ante el electorado mostrando cómo los Servicios Sociales y las instituciones públicas están solucionando temas importantes. En un contexto como éste, las personas con más autoridad dentro de las instituciones públicas no se atreven a expresar críticas ni a tomar la iniciativa para mejorar situaciones de gran desigualdad, limitando su papel a estar presentes en distintos foros para recoger la información pertinente, a “contener” las posibles rebeliones de algunos de sus trabajadores y a utilizar la información de forma que parezca que sí que se están haciendo cosas para solucionar los problemas “diagnosticados”. En este contexto político, está claro que no tiene cabida ninguna acción que pudiera poner en cuestión las actuaciones (o ausencia de actuaciones) de los organismos gubernamentales, y de sus políticas de subcontratación, en el ámbito de la inclusión social.

2.5 Los profesionales “técnicos” como conocedores parciales de las medidas de inclusión social

Hay que hacer notar también que el personal contratado por las instituciones públicas para trabajar en el ámbito de la inclusión social no tiene un conocimiento suficiente de los procedimientos que hay que seguir para el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con ella. Ello lo pude comprobar, por ejemplo, cuando acompañé a Aurora, perceptora gitana de la RMI de 24 años, a solicitar una vivienda de protección oficial según le había aconsejado su trabajador social de Servicios Sociales. Después de solicitarle para ello gran cantidad de documentación (para demostrar la falta de ingresos, la no declaración de la renta, la falta de vivienda en propiedad o la carencia de ahorros en alguna entidad bancaria), de realizar diversas visitas a las oficinas de la Agencia Tributaria y del IVIMA más cercanas a su residencia, y de solicitar un informe de habitabilidad en el Ayuntamiento, Aurora se enteró de que no tenía derecho a solicitar vivienda de protección oficial por estar residiendo en una casa ocupada. Ninguno de los profesionales y/o funcionarios con los que había tenido contacto

hasta entonces le había insinuado ni siquiera esa imposibilidad. Ninguno de ellos (su trabajador de Servicios Sociales, dos funcionarios distintos del IVIMA, la técnica del Ayuntamiento que había elaborado el informe de habitabilidad) contaba con información suficiente sobre las políticas sociales en materia de vivienda de protección oficial como para explicarle a Aurora que todas esas gestiones que estaba realizando no iban a dar ningún fruto. No es sólo que no se lo dijeran, sino que pude comprobar que fue informada incorrectamente dos veces en la oficina del IVIMA puesto que, ante mi insistencia, preguntó si podía pedir vivienda estando en una casa ocupada, recibiendo un sí como respuesta.

Así, como se ha dicho, es raro que los técnicos que dan información sobre los procedimientos burocráticos a los que se dirige a los usuarios de la RMI conozcan y comprendan los procesos globales de los que esos procedimientos forman parte, pues tienen una visión y una experiencia fragmentaria de los mismos, por lo que a veces se producen casos como el descrito, que terminan por descorazonar a los perceptores de la RMI con menor formación e ingresos económicos y a prevenirlos del contacto con las instituciones.

2.6 El establecimiento de jerarquías poco claras entre instituciones que gestionan o ejecutan la RMI

Dada la complejidad del proceso de demanda de la RMI, y de la existencia de una estructura compleja de intervención que otorga diferentes funciones y grados de autoridad a cada institución/actor social participante, es común que los perceptores de la RMI no tengan claro qué función desempeña cada institución/actor social o cuál de ellas tiene más autoridad; es decir, les resulta poco evidente y comprensible cuál es el cometido de cada una y la jerarquía existente entre ellas.

Esta jerarquía está relacionada, por un lado, con las distintas funciones que la ley asigna a cada institución/actor social que interviene en la gestión de la RMI y, por otro, con el diferente grado de autoridad que cada una tiene para supervisar y/o pedir a información a las otras, así como con el reparto de la financiación destinada a los proyectos de integración (que desarrollan las actividades concretas con la población que recibe la RMI). Este último aspecto afecta principalmente a las entidades de iniciativa social, que —como se ha dicho— se encargan de los proyectos de integración, puesto que entre ellas se establecen relaciones de competitividad por la escasez de los fondos públicos dedicados a estos proyectos. La fragmentación de la gestión y de la aplicación de la RMI, como mostraré a continuación, produce la sensación de que cada una de las instituciones/actores sociales tiene intereses

propios y, a veces, contrapuestos, no siempre tendentes al cumplimiento del propósito de la inclusión social. Tal vez en ello se basa, en parte, la falta de claridad –señalada más arriba– que existe tanto en las funciones que desempeñan como en las relaciones que se establecen entre ellas/ellos. En la Tabla 9 se resumen las funciones que la Ley de Rentas Mínimas de la CM y su decreto regulador, ya citados, estipulan para las distintas instituciones y actores sociales.

Tabla 9: Funciones de las distintas instituciones y actores que gestionan/solicitan la RMI

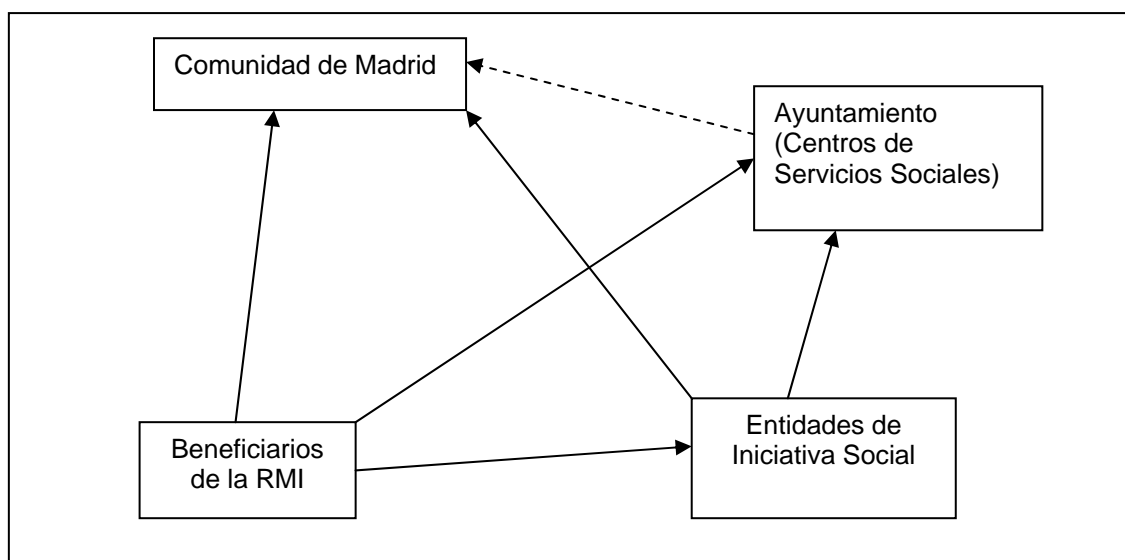
Comunidad de Madrid (Departamento de Rentas Mínimas)	Ayuntamiento (Centros de Servicios Sociales)	Entidades de iniciativa social y corporaciones locales	Beneficiarios de la RMI
Valoran y deciden a qué usuarios les es concedida la RMI.	Informan a los posibles solicitantes sobre la RMI.	Diseñan y ejecutan proyectos de integración social a los que asisten perceptores de la RMI.	Solicitan la prestación siguiendo los trámites oportunos.
Realizan las revisiones anuales de cumplimiento de requisitos.	Recogen las solicitudes y las envían a la CAM.	Informan a la CM sobre el resultado de dichos proyectos y el grado de cumplimiento de objetivos en PII y número perceptores que asisten.	Una vez concedida elaboran conjuntamente con los servicios sociales el PII.
Inician y resuelven el procedimiento sancionador.	Diseñan el programa individual de inserción y derivan a los perceptores a los proyectos de integración y otros programas.	Informan a los centros de servicios sociales sobre el resultado de dichos proyectos y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el PII.	Firman el PII comprometiéndose a realizar las actividades que en él se incluyan.
Deciden, mediante la comisión de valoración, qué perceptores de la RMI pueden no suscribir un PII.	Realizan seguimientos periódicos de cumplimiento de actividades del Phi con los perceptores de la RMI.	Diseñan, con el visto bueno de los servicios sociales, nuevos proyectos de integración que se consideren oportunos para las zonas donde trabajan.	Acuden a dichas actividades.
Son supervisados por una comisión de seguimiento de la que forman parte, junto con representantes de sindicatos y empresas.	Mandan reportes semestrales a la CAM sobre los perceptores.	Son supervisadas por la CAM y por los centros de servicios sociales.	Acuden periódicamente a reuniones de seguimiento con los trabajadores sociales de servicios sociales para ver cumplimiento de actividades.
Dan formación sobre la RMI a profesionales del ámbito de la intervención social.	Se coordinan con las ONG que tienen perceptores de la RMI.		Dan información a la CAM sobre el mantenimiento de requisitos.
	Informan a la CM del incumplimiento de requisitos por parte de los perceptores.		Dan información a los centros de servicios sociales en caso de querer gestionar más prestaciones.
	Modifican o cierran PIIs en caso de considerarlo oportuno.		Son supervisados por la CAM, los centros de servicios sociales y las ONG.
	No son supervisados por otra institución que no sea ellos mismos.		

Fuente: Elaboración propia.

Y en la Figura 5 se representan las relaciones jerárquicas que se establecen entre unas y otros, que se han identificado y valorado tomando como indicadores tanto el traspaso (/la recepción) de información de unas entidades/actores sociales a otras/otros, como la

dependencia económica respectiva y la realización o no de trabajo directo con los beneficiarios de la RMI⁸⁰.

Figura 5: El flujo de relaciones que se establece entre las distintas organizaciones que gestionan y/o aplican la RMI.



Fuente: Elaboración propia.

Según se desprende de la Figura 5, mientras que la CM recibe información de todo el mundo, los perceptores han de dar información sobre sí mismos y sus circunstancias al resto de actores⁸¹. En tanto que la CM gestiona la prestación sin establecer contacto con la población beneficiaria de la RMI, los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento realizan una gestión con atención directa a la población perceptora de la RMI, derivándolos a diferentes actividades y realizando reuniones periódicas con las entidades que las ejecutan, que suelen ser las entidades de iniciativa social. Estas últimas, por su parte, llevan a cabo el trabajo de intervención social más intensivo. Así, el Ayuntamiento de Madrid (a través de sus centros de Servicios Sociales) aparece un nivel por debajo de la CM, dado que tiene que darle información a la CM, y ésta última se hace cargo de los aspectos más relevantes de la prestación económica (concesiones y denegaciones, suspensiones y extinciones, iniciación del procedimiento sancionado). No obstante, los centros de Servicios Sociales de los Ayuntamientos son las instituciones competentes en atender e intervenir con la población en

⁸⁰ La toma en consideración de estos criterios a la hora de representar las relaciones entre las distintas organizaciones/actores que participan en la gestión y aplicación de la RMI se deriva del análisis de las entrevistas realizadas a profesionales, en las que éstos se posicionan, en el marco de aplicación de la RMI, como integrantes de relaciones desiguales que responden a la diferenciación de funciones entre unos y otros y al grado de poder que cada uno maneja dentro de esas relaciones.

⁸¹ En el decreto regulador de la RMI se indica que tanto los Servicios Sociales como las entidades de iniciativa social han de enviar información a la CM relativa a los beneficiarios.

situación de exclusión en cada comunidad autónoma (Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid). Este hecho es utilizado por los Ayuntamientos de la CM para no compartir toda la información que tienen con ella, de manera que, según nos narraron varios representantes del Departamento de Exclusión y Rentas Mínimas de la CM y trabajadores sociales entrevistados, los centros de Servicios Sociales no envían de forma íntegra ni los diagnósticos sociales que elaboran de los perceptores ni los PII, por lo que la CM no cuenta con información completa de la situación social de cada solicitante, a pesar de que se encargue de gestionar la mayoría de los trámites de la RMI.

Se producen así distintos niveles de conocimiento sobre los perceptores por parte de las dos instituciones. La CM es la única que, en todo el proceso, tiene información actualizada sobre las cotizaciones a la Seguridad Social y las declaraciones de impuestos de los solicitantes de la RMI, dado que es la encargada de valorar y conceder las prestaciones económicas. Este hecho obstaculiza la gestión coherente de la RMI, ya que el Ayuntamiento, que tiene las funciones de iniciar el proceso de solicitud de la prestación y de verificar que se cumplen los requisitos exigidos a los solicitantes, no cuenta con esa información, necesaria para poder cumplir estas funciones. De igual modo, la CM establece suspensiones cautelares de la prestación económica sin toda la información de las circunstancias sociales de los solicitantes de la RMI, con los que tiene relación únicamente a través de documentación parcial, puesto que –como se ha dicho– la recogida en los Programas Individuales de Inserción no le es reenviada en su totalidad por los Centros de Servicios Sociales.

El hecho de que no todas las instituciones manejen la misma información sobre los distintos casos hace que las relaciones entre ellas no sean fluidas y, entre los profesionales y técnicos, crea la sensación de que a veces realizan un trabajo de gestión de la RMI poco eficiente:

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el trabajador social de Servicios Sociales está a merced de lo que le dice la persona, y nosotros estamos con una información de primera mano y actualizada, con lo cual lo que nos dice la persona y el trabajador social lo contrastamos. Entonces, ese desfase o esa desigualdad de partida dificulta muchísimo un buen procedimiento. (Entrevista a responsable de la CM, 50 años)

La posición de las ONG con respecto a la CM y a los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento es una posición subordinada. Para entender esa situación de subordinación, es preciso tomar en consideración la externalización de que han sido objeto los servicios orientados a la gestión de la RMI, que ha supuesto la subcontratación de entidades de iniciativa social para el desarrollo del trabajo directo de intervención social con los usuarios (a

través de los proyectos de integración, como se ha visto, en los que se les da sobre todo formación). Mediante esta subcontratación, el Ayuntamiento y la CM abaratan el coste de la intervención social y transfieren esta función a organizaciones ajenas a los Servicios Sociales. Ello fue denunciado, por ejemplo, por representantes sindicales de UGT en unas jornadas sobre inclusión social a las que asistí en octubre 2007, y demandaban que se crease un convenio según el cual la Administración se responsabilizase de la intervención social directa con la población perceptora de la RMI para romper con la dinámica clientelista que la externalización estaba generando entre ONG y Administración.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid establece una línea de financiación específica para las entidades de iniciativa social que presentan proyectos de integración destinados a población perceptora de la RMI⁸². El hecho de recibir esta financiación compromete a las ONG a compartir información con los centros de Servicios Sociales (encargados, como se ha comentado más atrás, del seguimiento del proceso de inserción social de los usuarios) y con la mencionada Consejería (encargada también de supervisar el cumplimiento de los requisitos del PII y de iniciar acciones en caso de que haya incidencias). Así, la CM y el Ayuntamiento de Madrid conservan el papel de supervisores del proceso general de inserción social pero se liberan de la parte correspondiente a la intervención social continuada con la población perceptora de la RMI. La CM, por otra parte, se apoya en los Centros de Servicios Sociales para decidir sobre la pertinencia de los proyectos de integración que presentan las ONG, por lo que la opinión de los representantes de estos Centros es determinante para la concesión de financiación a éstas. Igualmente, las entidades de iniciativa social, en caso de querer financiación de la Comunidad de Madrid para nuevos proyectos en sus zonas de acción, necesitan informes favorables de los Servicios Sociales, a pesar de que el trabajo más intenso con la población recaiga en ellas y suelen tener, por tanto, un conocimiento directo sobre la situación en que se encuentran los usuarios y, consecuentemente, de los efectos de esos proyectos del que carecen los Servicios Sociales.

Pero claro, tu dices: “Sí, sí, en los Servicios Sociales de la zona están contentas con el trabajo que estamos haciendo. Sí, sí, además, pues, bueno, ha habido una coordinación más o menos; no ha habido ningún informe negativo ni hemos incumplido ninguna ley”. Se supone que nos lo van a conceder mientras las prioridades de subvención sigan siendo similares. Tuvimos una reunión en Servicios Sociales en la que nosotros propusimos qué era lo que tenía que ir en el proyecto RMI del año que viene. Entonces, un poco también para que ellas vieran que lo que nosotros

⁸² Resolución 1097/2007, 25 de abril, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la relación de Corporaciones Locales, a quienes se ha otorgado subvenciones con cargo a la convocatoria promulgada en la Orden 2375/2005, de 29 de diciembre (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 13 de enero de 2006). Y Orden 2675/2007, de 31 de diciembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos de integración y se aprueba la convocatoria, mediante tramitación anticipada, de dichas subvenciones para realización de proyectos de integración en los años 2008 y 2009.

proponíamos desde el suelo tenía que ver con la línea que se estaba dibujando desde Administración. (Entrevista a directora de asociación que recibe financiación de la CM, 50 años)

Así, las ONG dependen para su auto-reproducción de esta financiación, lo que las coloca en la base de la relación jerárquica con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento⁸³. Cabe señalar que uno de los requisitos para que las ONG que diseñan proyectos de integración puedan recibir financiación de la CM consisten en que, entre la población a la que se dirigen, se cuente con un número determinado de perceptores de la RMI.

El proyecto siempre requiere que el 50% de la población sea perceptor de la RMI y que incorpore a otro 50% que, no siendo perceptores, tengan un perfil similar. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años)

Esta posición subordinada de las ONG guarda relación con la sensación, que tienen algunos profesionales de las mismas, de sentirse evaluados y supervisados.

Almuerzo con una psicóloga y una pedagoga que trabajan en una ONG, quienes llevan varios años trabajando en una zona de Madrid con mucha población chabolista. Una de ellas me dice que ha oído que para el año siguiente esa zona se va a volver prioritaria para la CM y que se va a aumentar la financiación para proyectos. La otra contesta algo así: “Mira que llevamos años trabajando ahí nosotras solas y casi sin financiación, pues, ahora que la va a haber, seguro mil fundaciones nuevas a quitarnos la tajada”. (Registro de campo: conversaciones informales con directivas de ONG que trabajan en Cañada Real, proyectos 1 y 2, marzo 2008)

El hecho de que la política de subvenciones no contemple la posibilidad de financiar a instituciones que trabajen en red obstaculiza, por otro lado, la labor conjunta de ONG que abordan temas similares y genera una actitud de competencia entre ellas por unos recursos que son (y son percibidos como) escasos.

Mira, la tarta es una, ¿vale? Al final hay un mensaje paralelo y contradictorio desde las propias administraciones: por un lado, digo que voy a valorar el trabajo en red, pero a la vez la política de subvenciones distorsiona mucho eso, porque primero no es fácil, con la ley de subvenciones, que se subvencione un proyecto que ejecuten varias entidades. Y, por otro lado, hay mucho malestar, porque al final hay una gran dependencia económica. ¡Una súper-dependencia económica! Y el dinero es escaso y limitado. Entonces, hay mucho celo y recelo de: “Si yo causo buena impresión (en la CM), ¡yo que voy a compartir con esta otra entidad todas mis buenas prácticas!, ¡qué se busque la vida ella sola!, porque si lo hace mejor que yo, me quita a mí dinero”. Entonces, no es fácil... Y por otro lado, vamos a ver, se juega con la falta de planificación y de buen estudio de las necesidades, de la propia Administración. (Entrevista a responsable del Departamento de Rentas Mínimas de la CM, 50 años)

⁸³ Durante los años 2006-07 fueron financiados 4 proyectos de integración de corporaciones locales (Getafe, Parla, Fuenlabrada y Móstoles), con un presupuesto total de 1.583.434 Euros. Durante el mismo periodo se subvencionaron 74 proyectos de integración presentados por 47 entidades promotoras, con un presupuesto total de 5.087.500 Euros. Ello deja ver claramente cómo, en el ámbito de la ejecución de proyectos de integración, las entidades de iniciativa social son las que mayor número de proyectos realizan, estando el 13,31% del presupuesto (677.095,52 Euros) destinado a trabajar con población gitana que supone el 18,93% de la población que realiza este tipo de actividades de inserción. Fuente: Comunidad de Madrid (2006) Proyectos de integración. También disponible en la web:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1132040462101&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114181651609&sm=1109265843983

Las prácticas fragmentadas y competitivas entre entidades de iniciativa social se contradicen con las recomendaciones de varios informes “técnicos” elaborados por profesionales del trabajo social y del ámbito sanitario (ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010; ACCEM, Asociación El Fanal, EDES e IRIS, 2006; SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006), en los que se afirma que el trabajo en red es la fórmula que hay que fortalecer para poder acabar con las situaciones de exclusión social.

En este apartado he querido mostrar que, debido a los distintos niveles de conocimiento sobre los usuarios, se establece una relación desigual entre las distintas organizaciones/agentes que participan en la implementación de la RMI; relación que no favorece el trabajo en red y/o la comunicación amistosa entre las distintas organizaciones. Lejos de establecerse reuniones de coordinación que solventen este aspecto y permitan implementar coherentemente la RMI, se escudan en lo que marca la legislación que las atañe (la RMI, para la Consejería y las ONG; y la ley de Servicios Sociales para los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento) para comunicarse únicamente cuando es menester, favoreciendo así que se consolide el ya de por sí fragmentado contexto de la intervención social en Madrid. La dependencia de las entidades de iniciativa social con respecto a la financiación de la Comunidad de Madrid (la cual depende, en ocasiones, del visto bueno de los Servicios Sociales), las sitúa en una posición de subordinación que las desincentiva, por tanto, de criticar cualquier actuación de dichas instituciones. Por su parte, los beneficiarios de la RMI gitanos –como veremos en el capítulo octavo– no tienen generalmente el conocimiento ni las habilidades para captar todos estos matices, por lo que acaban confundiendo las funciones de unos y de otros.

2.7 Condiciones laborales debidas a la externalización y precarización del ámbito de la intervención social

En este apartado se analizan con mayor profundidad algunas de las condiciones laborales que afectan a los trabajadores de entidades de iniciativa social que han sido mencionadas en páginas anteriores, condiciones que se consideran un factor limitante a la hora de poder implementar la RMI de forma eficiente y conseguir aquellos objetivos que ésta persigue, principalmente el de la integración social de sus perceptores. La vacilante sostenibilidad económica de las ONG y el debilitamiento de los derechos laborales de los profesionales de la intervención social se encuentran entre esas condiciones.

La gestión de las subvenciones de la CM introduce un elemento de inestabilidad en las ONG. Por un lado, estas organizaciones reciben menores beneficios por su actividad profesional de lo que recibirían los profesionales de los Servicios Sociales si tuvieran que realizar ese mismo trabajo y, por otro, al estar en la base de la cadena de subcontratación, asumen mayores riesgos y ven debilitados los derechos laborales de sus empleados. Uno de estos riesgos es la dependencia de una financiación que llega meses después de haber sido solicitada y de que hayan iniciado los proyectos de integración. De este modo, las ONG pequeñas, con poca solvencia económica, se ven impelidas a no comenzar los proyectos hasta que llegue la financiación, con lo que la intervención social que realizan se ve profundamente empeorada (al tener que paralizar 4-6 meses los proyectos y romper el vínculo con los perceptores que asisten a sus actividades), o bien a que los profesionales trabajen sin cobrar un sueldo hasta que llegue el dinero de las subvenciones. Los trabajadores de las ONG que tienen pocas fuentes de financiación, y dependen en gran medida de la CM para los proyectos de integración vinculados a la RMI, acostumbran a trabajar algunos meses al año sin sueldo mientras esperan las subvenciones públicas, momento en el que recuperan el salario no cobrado. Algunas directoras de ONG y asociaciones afirman tener que pedir créditos durante esos meses para poder asumir el pago de los sueldos y evitar así que se vayan los trabajadores.

Mientras hablo con dos profesoras de proyectos de alfabetización financiados por la CM una de ellas me comenta que el año pasado estuvieron 3 meses trabajando sin salario en los proyectos de integración para mujeres gitanas, hasta que llegó la subvención de la CM. Sostiene que están acostumbradas a trabajar algunos meses al año sin cobrar, pero que prefieren hacerlo que paralizar los programas, porque sería contraproducente para las personas que asisten paralizarlos durante meses y luego sería mucho más difícil que vuelvan a acudir a la asociación. (Registro de campo: observación participante en ONG proyecto 8, zona sur de Madrid, mayo 2008)

De igual modo, profesionales jóvenes de algunas asociaciones en las que he realizado trabajo de campo me han expresado que han tenido que hacer tareas que estiman poco cualificadas y que no responden a su formación, tales como limpiar, organizar, amueblar, etc. Las asociaciones están quedándose como fuente de empleo para personas que provienen de un contexto histórico de militancia y reivindicación, dado que trabajan por motivaciones más allá de lo profesional y asumen hacerlo sin sueldo, puesto que consideran que su labor tiene un componente vocacional.

El comienzo, por parte de estas asociaciones y entidades sociales, de nuevos proyectos de intervención social también está marcado por la incertidumbre y el riesgo. Cuando persuaden a los Centros de Servicios Sociales de que se debería iniciar un nuevo proyecto en determinada zona en la que observan grandes necesidades sociales, si les dan el visto bueno, han de arriesgarse y empezar el proyecto antes de recibir la financiación de la Comunidad de

Madrid. La escasez de fondos, junto con la dificultad de encontrar profesionales que quieran trabajar en ciertos entornos (como es el caso de algunas zonas de Cañada Real, donde hay tráfico de droga, mala pavimentación, además de ruido y polvareda constantes), con contratos temporales y bajos salarios, obstaculiza que algunas entidades de iniciativa social emprendan nuevos proyectos que piensan que son necesarios en las zonas donde intervienen.

P: Desde Servicios Sociales nos han dicho: “Vais a necesitar mucho más dinero porque nosotros queremos apoyar un proyecto muchísimo más ambicioso”, pero claro...

R: Nosotros les hemos dicho: “Queremos un colegio más ambicioso”. Entonces han dicho: “Tenéis toda la razón en todo lo que proponéis, es verdad. Contad con todo nuestro apoyo”. Pero es como... (tono de incredulidad)

P: A ver, ¿qué hacemos?, ¿contratamos a todos los profesionales que necesitamos desde ya para desde enero llevar adelante el proyecto que nos sugieren? ¿No sabemos si nos van a conceder la cantidad que hemos pedido...! (Entrevista a directoras de asociación que recibe financiación de la CM, 50 y 53 años respectivamente)

El proceso de externalización de la intervención social a través de la subcontratación de ONG transfiere la responsabilidad de la cobertura de derechos reconocidos en la ley de la RMI a las entidades de iniciativa social y ocasiona una precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores. Ello, denunciado –entre otros– por el Fiscal del Tribunal Supremo y ex-Fiscal de Menores como “pseudo-privatización”, acontece en varios ámbitos de intervención social (educación, centros de menores, sanidad, etc.), descargando a las comunidades autónomas de su responsabilidad y produciéndose “*de facto* una privatización de la ejecución⁸⁴” (Pantoja, 2009: 20-21).

Las entidades de iniciativa social son, así, un ejemplo claro de la denominada flexibilidad laboral: cuentan en sus plantillas con un alto porcentaje de contratados temporales, condicionan sus periodos de contratación a las fechas en las que se recibe la financiación pública y aprovechan el trabajo de voluntarios o de estudiantes “en prácticas”. Estos profesionales no sólo cobran menos que los contratados por los Servicios Sociales, sino que trabajan más horas y en peores condiciones laborales. Además, tienen que dedicar parte de su tiempo a enviar información a la CM y a los centros de Servicios Sociales sobre el cumplimiento de objetivos de los beneficiarios de la RMI. La alta rotatividad que afecta a los profesionales de estas entidades no permite que se lleve a cabo la función de “acompañamiento social” (que se caracteriza por el establecimiento de relaciones duraderas y continuadas con los perceptores de la RMI), siendo un elemento desestabilizador de la

⁸⁴ Un ejemplo concreto de esta mercantilización de la intervención social podemos encontrarlo en la denunciada apropiación económica e intelectual que ha sufrido la entidad sin ánimo de lucro CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) por parte de una empresa privada. Tras 22 años de servicio, todo el presupuesto público que recibía dicha entidad ha sido transferido a la empresa prestadora de servicios *Grupo 5 Acción y Gestión Local*, aduciendo, por parte de la Comunidad de Madrid, que su decisión responde a la “ampliación y mejora del servicio” (Diagonal N°95, 5 al 18 de febrero de 2009, p. 20, o <http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article7264>). De este modo se va consolidando la promoción de la lógica empresarial por parte de la Administración en la gestión de los Servicios Sociales.

intervención social y ocasionando que la población esté ciertamente “cansada” de contar la misma historia a los contratados de turno. De este modo, la subordinación de las entidades de iniciativa social con respecto a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, la precarización de las condiciones laborales de sus profesionales y la intensidad y dificultad del trabajo de intervención social que desempeñan, son factores que impiden la realización de algunas funciones claves para la inserción social de los beneficiarios de la RMI, como el “acompañamiento social” continuado, como ya se ha indicado, o la evaluación sistemática de los efectos de las actividades que se llevan a cabo.

Algunos autores (Beck y Beck-Gernsheim, 2008: 65; Sennet, 2000) han señalado que el cambio estructural del mercado laboral exige a los trabajadores mayor adaptabilidad y el aumento de la auto-explotación, lo que afecta más drásticamente a los jóvenes. Éstos han interiorizado un lenguaje individualista y falta de referencias colectivas para describir sus situaciones personales de búsqueda de empleo y sus vivencias sobre la precarización laboral (Rivas, 2000). El trabajo asalariado “deja de representar el soporte privilegiado de inscripción relacional sólida”, dado que ya no es fuente de valores duraderos y proyectos a largo plazo, para convertirse en “un factor de aislamiento y fragilidad relacional” (Rivas, 2004: 69). Sennet (2000: 29) sostiene que el trabajo flexible ya no es capaz de dotar de coherencia a las trayectorias vitales: “Las empresas se desintegran o se fusionan. Los puestos de trabajo aparecen o desaparecen, como hechos desconectados”. Esto se ve fomentado por multitud de tipos de contratos que generan empleos temporales. Como consecuencia de estas circunstancias socio-económicas, los trabajadores de entidades de iniciativa social cuentan con condiciones laborales que imposibilitan la organización de su vida a largo plazo, cambiando frecuentemente de empleo y estando insertos en una búsqueda continua de mejores puestos de trabajo.

Esta pérdida de derechos asociados al trabajo de intervención social no sólo afecta a las entidades de iniciativa social, sino que ha ido modificando también las condiciones laborales de los trabajadores de Servicios Sociales, quienes han pasado de ser mayoritariamente funcionarios a ser, en un alto porcentaje (en algunos casos, hasta el 30%), trabajadores temporales. Actualmente es un hecho común en la organización de los Servicios Sociales la cobertura de parte de la plantilla a través de la contratación de personal de empresas privadas de intervención social. Así, el panorama actual de las relaciones internas de estos centros incluye la contratación en condiciones muy precarizadas de trabajadores sociales. Esto ha provocado la dualización interna en los Servicios Sociales: por un lado, están aquellos que ejercen su labor en condiciones de empleo fijo, relativamente bien remunerado

(1.700 euros/mes) y con ventajas laborales asociadas a la condición de funcionarios y, por otro lado, aquellos otros que trabajan en el mismo sitio bajo condiciones de temporalidad y mayor precariedad económica, con menos derechos laborales y, por ende, con menor estabilidad laboral.

La plantilla de funcionarios es la que es, y a lo mejor somos un 70%, pero luego el otro 30% son contrataciones con empresas privadas, gente a lo mejor muy joven que encuentra otro trabajo luego rápidamente. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años)

La Administración ha ido adaptándose a los requerimientos del mercado privado y se ha producido, como se ha dicho, una dualización laboral en los Servicios Sociales y una reordenación paulatina de los mismos. Autores como García García (2005) señalan que se han generado expectativas diferenciales con respecto al trabajo que realizan los trabajadores sociales: de los trabajadores precarizados y externalizados (empleados por empresas, fundaciones y asociaciones) se espera que intervengan en profundidad siguiendo unas pautas marcadas por los trabajadores sociales funcionarios, mientras que se confía en que estos últimos lleven el peso burocrático. De este modo, la calidad de la atención de los Servicios Sociales se ve mermada debido a la elevada concentración de trabajo administrativo en los profesionales de plantilla, la alta rotatividad de los profesionales subcontractados y la gran cantidad de personas en lista de espera para ser atendidas.

Cuando me fui de mi centro (de Servicios Sociales) he llegado a tener 800 expedientes a mi nombre, 800 familias, que yo creo que batí el record del Ayuntamiento de Madrid en expedientes. Eso son expedientes activos, que no quiere decir que intervengas con todos. Ahí tienes desde gente que ha solicitado un centro de día, ayuda a domicilio, temas de menores, ahí está todo. En el trabajo semanal eran 3 días de citas, lunes, miércoles y viernes, 6 citas cada día, y de 1 a 3, tiempo de gestión o para reuniones, reuniones internas, reuniones entre profesionales, y martes y jueves igual, para ese tipo de reuniones, para visitas a domicilio, etc. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años)

En suma, la reorganización de los Servicios Sociales (entendidos éstos de una manera amplia, es decir, incluyendo a las entidades de iniciativa social) que han tenido lugar como consecuencia de las políticas de externalización de que han sido objeto, ha afectado a la calidad del trabajo directo con los perceptores de la RMI, así como a la de las condiciones laborales de los trabajadores de estas entidades de iniciativa social. Ello hace sospechar, como se ha podido ver a través de los discursos de los profesionales de las ONG, que su trabajo no es valorado por las instituciones públicas y que todo el esfuerzo que realizan por atender a los “usuarios difíciles” (entre los que se encuentran los gitanos) no es tenido en cuenta por parte de esas instituciones. Aseguran que se sienten molestos con los trabajadores sociales de Servicios Sociales cuando, por ejemplo, “derivan” a sus proyectos a beneficiarios gitanos que tienen características y niveles educativos muy dispares, dado que consideran que esto

responde, por un lado, a que los centros de Servicios Sociales no conocen las características del trabajo que hacen con ellos desde las ONG y, por otro, a un plus de esfuerzo que se les pide que realicen a pesar de estar trabajando en condiciones laborales de por sí deterioradas. Si a ello se le suma la tensión que deriva de trabajar con un colectivo que se conceptualiza en términos negativos, no resulta difícil inferir que se está constituyendo un clima de trabajo nada propicio a implementar de manera entusiasta las novedades de la ley de la RMI.

2.8 Los gitanos en los Servicios Sociales: su construcción como colectivo “resistente” y “demandante”

Los datos que manejan los profesionales muestran que en la Comunidad de Madrid residen 65.000 personas de etnia gitana (Fundación Secretariado General Gitano, 2007)⁸⁵, y medio millón aproximadamente en el Estado Español (Cantón, Marcos, Medina y Mena, 2004; Gamella, 2006). Un número significativo de ellos se encuentra en situación de exclusión social, con serias dificultades para acceder a una vivienda, alta tasa de desempleo, altos niveles de abandono prematuro del sistema educativo, etc. Más de siete de cada diez gitanos españoles mayores de 15 años son analfabetos absolutos o funcionales (71%) y apenas un 15% alcanza un nivel de estudios superior al de primarios completos. El desempleo afecta más a la población gitana que a la madrileña en su conjunto, con una tasa de paro del 15,8 % frente al 6,2% para el total de la Comunidad; diferencia que se acentúa en tramos de edad más jóvenes, ya que la tasa de paro gitano en menores de 25 años es del 29,3% frente al 18,1 % de todos los madrileños (Fundación Secretariado General Gitano, 2007; Laparra, 2007).

El colectivo es conceptualizado como molesto, conflictivo y resistente a la intervención de los profesionales⁸⁶, lo que crea tensiones cuando acude a instituciones de la Administración Pública, que no están preparadas para ofrecerle un trato adaptado a sus necesidades y esperan que las utilice de la misma manera que la población mayoritaria. El cumplimiento de las normas burocráticas se ha convertido en un valor en sí mismo para los funcionarios de muchas instituciones, acentuado por una retórica de los derechos ciudadanos que enaltece que todos han de respetar las mismas normas y obligaciones. La “normalización” de ese cumplimiento se ha erigido, así, en un objetivo no cuestionado en los dispositivos administrados por el Estado, de manera que cuando dicha “normalización” no se da, como

⁸⁵ Los datos sobre esta minoría étnica son siempre aproximados. El Ayuntamiento de Madrid, en su memoria de actividades (2010: 78-79), afirma que en el municipio habita una población de etnia gitana que se cifra entre 45.000 y 50.000 personas.

⁸⁶ En una evaluación del IMI realizada por Aguilar, Gaviria y Laparra (1993: 162), se habla de los beneficiarios pertenecientes a minorías étnicas como “usuarios difíciles”.

sucede con frecuencia con el colectivo gitano, ello ocasiona tensiones y/o conflictos que ponen de manifiesto una intersección de dominios: el de la etnicidad frente al de la eticidad/moralidad (Cardoso de Oliveira, 1993: 25). Los gitanos, al “saltarse” algunas de las normas hegemónicas en sus relaciones con las instituciones públicas, confrontan ética y moralmente a los trabajadores de éstas.

Hablar del “caso de los gitanos” supone, para esos trabajadores, hacerlo de su “elevada resistencia ante el sistema educativo” (Gaviria, 1996: 149), de la asunción de pautas de vida poco saludables (ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006; SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006) y/o, entre otras cosas, de las “resistencias internas” y de su “escasa disposición a desarrollar sus actividades de un modo reglado y empresarial” (Villareal, Estivill y Aiguabella, 1997: 73). Ya en la época del IMI, según aseguran Serrano y Arriba (1998), los trabajadores sociales de Servicios Sociales estaban cansados del “tema gitano”, habiéndose establecido una relación de desconfianza mutua ocasionada, en muchos casos, por la sospecha de que los gitanos tenían ingresos no declarados por su participación en la economía sumergida (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1993: 163). Ello es extensible a lo que sucede ahora, por lo que se puede sostener que este colectivo no responde a las expectativas profesionales del excluido que demanda humildemente (con “lealtad y sumisión”, como dirían Serrano y Arriba, 1998: 188) una prestación económica. Estas autoras señalan que los trabajadores sociales consideran que los gitanos “saben demasiado” sobre cómo funciona la RMI y llegan a los Servicios Sociales exigiendo sus derechos de un modo que los sitúa en una posición simétrica a la de los profesionales, lo cual no deja de resultarles inoportuno y desagradable.

La mayoría de los trabajadores sociales de Servicios Sociales que gestionan la RMI no está de acuerdo, como se ha señalado en páginas precedentes, con la idea de que ésta pueda ser otorgada sin contraprestación y consideran que el gitano es un colectivo que demanda en exceso. Hay, así, discursos profesionales que narran cómo los gitanos llegan al despacho con sus derechos “bien aprendidos”, lo que les quita a ellos control sobre la información concerniente a la prestación (cómo pedirla, quiénes tienen derecho a ella). La individualización de la intervención social que afecta a los Servicios Sociales hace que el colectivo gitano sea percibido como un grupo especial, principalmente porque funciona, en un sistema que trata con individuos descolectivizados, como un colectivo, al menos en cuanto que maneja información recabada y transmitida colectivamente, lo cual le otorga un tipo de poder al que los trabajadores sociales no están acostumbrados. Así, entre los profesionales se comenta que los gitanos saben qué dice cada trabajador social en los despachos y cuáles son

sus “estilos profesionales”, lo que les permite conocer las diferencias en las intervenciones de cada uno así como reclamar ayudas que saben que les fueron otorgadas a otros miembros del colectivo. Es lo que los trabajadores sociales expresan cuando aseguran que, si se le dice una cosa a un gitano, en seguida se enteran los demás:

Caminando con una trabajadora social de IRIS por Santa Catalina, me comenta que los gitanos son un colectivo en el que si le das a uno y no a otro, sueles tener problemas con ellos. Me cuenta que, si se enteran que alguna persona conocida ha recibido alguna prestación o ayuda, van a ella a preguntarle directamente por qué y a demandar la misma ayuda. Añade que piden “demasiado”, poniendo muchas veces a los profesionales entre la espada y la pared (Registro de campo: conversación con trabajadora social, asentamiento chabolista Santa Catalina, junio 2007).

A este respecto, Serrano y Arriba hacen referencia a que hay una cierta “cultura del IMI” entre los gitanos que se transmite de unos a otros y que les proporciona la información que necesitan para desenvolverse: “conocen los documentos que tienen que aportar, cuándo hacerlo, dónde se piden, las diferentes formas de ser de los trabajadores sociales o los baremos que les corresponden” (1998: 111).

Se presenta a los gitanos, por un lado, como colectivo cronificado y con problemas de exclusión cultural (analfabetismo, inadaptación a la sociedad mayoritaria, falta de formación escolar, etc.) y, por otro, como colectivo pícaro, inteligente, demasiado demandante, que protesta para conseguir cosas, que demuestra un conocimiento de sus derechos y que lo expresa de una manera que los profesionales consideran agresiva (lenguaje inapropiado, petición excesiva, etc.). Todo ocurre como si los gitanos cuestionasen el sistema de valores de los profesionales, esto es, la bondad del ascenso social meritocrático, la ética del trabajo o la necesidad de que los beneficiarios de la RMI den algo a cambio de la prestación económica. Es también molesto para algunos de ellos que, a diferencia de otros grupos de perceptores, los gitanos no acepten voluntariamente ciertos itinerarios de inserción que se les propone, lo que ocasiona una imagen del colectivo que lo presenta, además de cómo problemático, como propenso a poner “muchas pegas a cualquier tipo de inserción” (Serrano y Arriba, 1998). Con respecto a lo anterior, otros autores refieren lo que consideran un déficit importante en los trabajadores sociales de Servicios Sociales:

No acaban de asumir determinados valores y principios básicos en este proceso de negociación, el propio reconocimiento del usuario como interlocutor, sus aspiraciones y sus deseos: perdemos de vista que tienen derecho a decir que no (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1993: 136).

Por lo general, los profesionales suponen que los gitanos llegan a Servicios Sociales con un plan previo que les permite obtener el máximo de prestaciones posibles ofreciendo el mínimo de adhesión o implicación en las actividades que se les propone. Aguilar, Gaviria y Laparra (1995b) aseguran que las familias gitanas están adoptando una estrategia de “integración selectiva”, es decir, de integración en aquello que les resulta beneficioso. Y hay

quienes atribuyen al colectivo gitano “una cierta cultura de la resistencia frente a la integración social”:

Está arraigada entre los gitanos una cierta cultura de la resistencia frente a la integración social, que ha sido aprendida y reforzada a lo largo de los siglos y que les ha aportado ventajas funcionales para la supervivencia del grupo, pero que hoy en día continúa operando como un factor que dificulta la participación de la juventud gitana en los espacios cívicos (Martínez Ten, Tuts y Pozo, 2003: 12).

Se considera, entonces, idiosincrásico de los gitanos todo lo relativo a la resistencia cultural, y se sostiene que su estrategia más habitual consiste en realizar demandas crecientes, lo que provoca rechazo por parte de los trabajadores sociales y, en general, de la sociedad. Trigueros (1995) vincula esa actitud con las intervenciones que les son “impuestas”, de manera que desliga la causa de los problemas del propio colectivo gitano, esto es, de un supuesto defecto personal o “étnico”:

Los medios que hasta ahora se han utilizado para mejorar la situación de los gitanos casi siempre han sido ineficaces porque ha sido “impuestos”, es decir, no se han tenido en cuenta sus costumbres, sus tradiciones, sus necesidades y sus prioridades, lo que realmente ellos querían, por lo que han optado por ‘aprovechar’ sólo lo que les era útil, y desechar lo que no, generando al mismo tiempo un espíritu de autodefensa y automarginación que a su vez alivia la conciencia soterrada que los payos tenemos de su discriminación y marginación. (Trigueros, 1995: 114)

Por todo lo anterior, sostengo que la intervención con el colectivo gitano es enfocada por los profesionales como una incomodidad que se añade a la fragmentada, jerarquizada y externalizada red de intervención social madrileña. En contacto con los gitanos beneficiarios de la RMI, estos profesionales se tensan y critican con facilidad a todo el colectivo. Estas reacciones responden a lo que se puede considerar una “sobre-representación” del mismo desde el estereotipo de grupo problemático (Caselles, 2008), que se ve exacerbado por el marco culturalista en el que se mueven la RMI y, en general, las políticas de inclusión social del colectivo gitano. Los comportamientos de los gitanos se conciben en términos dicotómicos, esto es, oponiendo las actitudes y tradiciones gitanas (tenidas siempre por “atrasadas”) a lo que se entiende como comportamientos objetivos, racionales, “evolucionados” o “en clave de avance”. En este marco interpretativo, cualquier elemento creativo o autónomo de los gitanos perceptores de la RMI es obviado o, lo que es lo mismo, reinterpretado como resistencia colectiva o como ausencia de deseos de cambio. Su falta de sumisión y su “carácter explosivo” (que muchos profesionales interpretan como “falta de contención de las emociones”) los enemista con los largos trámites burocráticos a los que se les remite y con los diferentes profesionales con los que tienen que tratar para solicitar cualquier ayuda social. Éstos pretenden que se comporten “como ciudadanos”, refiriéndose con esta expresión a una categoría neutra que se maneja como si estuviera exenta de

atribuciones de clase, etnia o género y presupone que el mismo tipo de conducta puede ser desplegada por todos los sujetos en contacto con la Administración.

Los gitanos, debido a esta imagen de “colectivo demandante” y resistente a la intervención social, a pesar de vivir en una situación de vulnerabilidad social constatable bajo parámetros objetivos (vivienda, índices de morbi-mortalidad, bajos ingresos económicos, residencia inadecuada, etc.), son difícilmente transformables en “víctimas”; condición que probablemente apaciguaría las reacciones que a algunos profesionales les provoca el trato con ellos (Cantón y Gil, 2011: 83). Y, del mismo modo, lo que cabría ser interpretado como un problema de discriminación social, de fricción étnico-moral de valores de grupos culturalmente distintivos y de desigualdad de poder, se suele leer únicamente en términos culturalistas, que terminan por inferiorizar cualquier acción de los miembros del colectivo.

Los gitanos que solicitan cualquier prestación social (vivienda o RMI, por ejemplo) no suelen comportarse según lo que se espera de los ciudadanos que emprenden trámites administrativos. No se sitúan en el espacio público como el resto y, cuando están en él, “se hacen notar” (ocupan más sitio, hacen más ruido, dejan correr a sus hijos libremente, se hablan unos a otros desde lejos en caso de encontrarse con conocidos...), contraviniendo el carácter anónimo y poco personificado de las relaciones en las instituciones sociales. En consecuencia, los funcionarios se ponen tensos, se preparan para el conflicto, que es abonado por las prenociones que unos y otros llevan consigo. Manejan la idea de que los gitanos “darán la nota” y formularán su petición “fuera de tono” o a través de exigencias. Éstos, por su parte, estando seguros de que se les tratará mal y se les informará peor que al resto, tenderán a la sobreactuación, al dramatismo y/o a la demanda desproporcionada, en contenido y en tono, dando así pábulo a su imagen de maleducados y conflictivos.

Abajo y Carrasco (2004: 25) consideran que no tiene sentido que se mencione la existencia (en este caso, en la escuela) de un conflicto cultural entre los gitanos y la sociedad mayoritaria cuando, en realidad, lo que se da es una tensión interétnica creada por la desigualdad de poder (en la información, en el dominio de las gestiones permiten la consecución de ayudas sociales, etc.).

Igualmente contraproducente es seguir declarando la existencia de contraposición entre los valores culturales de la cultura gitana y la escuela mayoritaria, aunque nunca se explicita en qué consiste esta contraposición. Más bien, lo que al parecer se confunde con esta supuesta contraposición, es la tensión interétnica que se produce fuera de la escuela y que tiene que ver con las relaciones de poder (Abajo y Carrasco, 2004: 25)

No obstante, la lectura en términos culturalistas de la relación de los gitanos con la sociedad mayoritaria es común en los discursos de los profesionales y de los mismos

perceptores gitanos de la RMI, así como en algunas obras que al proceder, por ejemplo, a evaluar la prestación predecesora, esto es, el IMI, califican a algunos de sus usuarios de problemáticos debido casi exclusivamente a su pertenencia a una minoría étnico-cultural:

Aparece de forma bastante extendida una dificultad grave de los servicios sociales para trabajar con los llamados usuarios difíciles. Esas dificultades afectan sobre todo a los casos en los que hay un corte cultural fuerte (el caso de las minorías étnicas marginales) (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1993: 162).

La centralidad que ha adquirido el propósito de “la normalización”, así como la persistencia del referido marco culturalista para dar sentido a la actuación de los gitanos, influyen en el disgusto que algunos profesionales sienten cuando trabajan con los beneficiarios de la RMI pertenecientes a este colectivo. Así, como ya se ha indicado, el hecho de que éstos no declaren cuánto ingresan con actividades como el chatarreo o la venta ambulante es interpretado por dichos profesionales como una transgresión del procedimiento normalizado de gestión de la RMI, en cuanto que se saltan los requisitos regulares que establece la legislación sobre la misma; no siendo frecuente que reparen en que ello pueda ser debido a la inadaptación de la ley de la RMI a la realidad que caracteriza a colectivos que desarrollan actividades en la economía informal.

2.8.1 La RMI y la precariedad económica: la desconfianza hacia los gitanos derivada de la compatibilización de la RMI con ingresos provenientes de la economía informal

La escasa cuantía de la prestación económica de la RMI es otro de los elementos que pueden estar impidiendo que se consiga la promoción de los derechos sociales de los ciudadanos en situación de exclusión social. En todo caso, se entiende que esta prestación haya sido considerada unánimemente por todas las personas entrevistadas como insuficiente para cubrir el objetivo para el que fue establecida: garantizar una subsistencia digna a esos ciudadanos.

Yo creo que es una ayuda que sirve para no morirte de hambre o no tener que atracar a una anciana en un portal, que sirve para derechos humanos, derechos básicos, nada más. Para inserción, bien poco, pero ya no porque esté mal hecha la RMI o bien hecha, sino porque estamos hablando del mundo del que hablamos y del sistema del que hablamos, y de que quien cae en la RMI, salvo alguna persona que ocurrió la desgracia en su vida y servía la RMI precisamente como un colchón y luego ya salía a flote, en general, yo creo que sirve para esa población flotante que se mueve entre el trabajo legal, el trabajo alegal o ilegal, las ayudas, y que va sobreviviendo, pero que no va a ascender socialmente a través de la RMI... Algo asistencial, vaya. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años)

Los profesionales entrevistados afirman que los perceptores de la RMI no pueden sobrevivir con los ingresos derivados de esta prestación, por lo que asumen que tienen otras

actividades económicas informales con las que salir adelante, y aseguran que es inevitable que estén recibiendo ingresos en dinero negro provenientes de esas actividades. Tanto es así que, desde un reciente informe elaborado por la Fundación Luis Vives (2008: 33), se afirma que el conjunto de prestaciones económicas existentes no siempre consiguen garantizar la antes referida subsistencia digna. El que los trabajadores sociales hayan interiorizado que los solicitantes de la RMI han de mentir para conseguir la prestación incide en que algunos manifiesten que no se creen que la gente esté tan necesitada como dice, instaurándose de este modo la desconfianza como una parte de la relación entre los trabajadores sociales y los solicitantes de la RMI.

Es que ya, para empezar, el hecho de no tener ingresos y subsistir es inviable. Entonces, yo creo que ya viene muy contaminada desde esa base, porque no se puede sostener nadie así y esperar 3 meses a que te comuniquen que te conceden la RMI, porque si dijeras que vas a una ventanilla: “Me he quedado sin trabajo, no tengo nada”, lo justificas y te dieran mañana la ayuda... pero es que tienen que esperar 3 meses. Pues, tú misma, ya te estás creyendo que no es verdad que se estén sosteniendo esos 3 meses estas familias sin ingresos, pero les piden un papel, dos papeles, lo presentan y cuela. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años)

La trabajadora social cuyas palabras se reproducen en el anterior verbatim alude a la declaración jurada de ingresos que han de presentar los usuarios gitanos que desarrollan actividades en la economía informal. Una mediadora social gitana, a la que le pregunté, durante una conversación en octubre de 2007, por qué creía que los trabajadores sociales piensan que los gitanos les “mienten”, me aseguró lo siguiente: “Te obligan a mentir, porque si les dices que tienes cien euros mensuales de ingresos de la venta o de la chatarra, no te dan la RMI”. Palabras como éstas reafirman a algunos profesionales de ONG en la idea de que los gitanos se salen de los “trámites normalizados” con la intención de “optimizar sus ingresos a bajo coste” y, si bien esta informante justificaba el comportamiento de los gitanos perceptores de la RMI atribuyéndolo a la falta de coherencia de los baremos utilizados para gestionar la prestación, otras personas –incluidas otras mediadoras sociales gitanas– asumen “la mentira” como característica intrínseca del colectivo, afianzando así la desconfianza hacia él.

Almuerzo con Tania, mediadora social gitana de una asociación en la que he hecho trabajo de campo y le comento que estoy entrevistando a perceptores de la RMI gitanos. Actualmente ella se encuentra contratada en dos escuelas de la CAM para trabajar directamente con el alumnado gitano absentista. En cuanto le digo la temática de mi tesis, me dice “Ten cuidado con los gitanos, que mienten mucho”. (Registro de campo: conversación con mediadora social gitana contratada para los proyectos 3.1 y 3.2, zona sureste de Madrid, febrero 2008)

Algunos de los trabajadores sociales entrevistados se sienten escépticos y desmotivados con respecto al trabajo que realizan y al funcionamiento de las instituciones en que trabajan, manifestando una falta de esperanza en producir mejoras debido a la

imposibilidad de influir en un cambio de las condiciones macro-estructurales que implican un rediseño de las políticas sociales así como de las condiciones materiales de vida de algunos de los beneficiarios de la RMI. La intervención con gitanos supone, para los profesionales, encontrarse con excluidos que les hacen de espejo, esto es, que les hacen enfrentarse a las contradicciones que se derivan, por un lado, de la escasez de ayudas sociales y, por otro, a las que provienen de trabajar en un contexto institucional y político con el que no se sienten identificados.

2.8.2 Tensiones con el colectivo gitano en el marco de las instituciones públicas

Hablar de exclusión social cuando se trata de gitanos implica delimitarla a la manera de Karsz (2004: 76), es decir, reservarla para designar formas de actuar que responden a procedimientos oficializados y a condiciones particulares. Así, la exclusión social descansa en reglamentos y moviliza rituales, aparatos especializados, protocolos.

Siempre justificada, legitimada, obedece a juicios y corresponde a un orden de razones. Por supuesto, esto no implica en absoluto que sea justa, éticamente aceptable o políticamente defendible. Se trata aquí de legitimidad en el sentido sociológico del término: la exclusión aparece racionalizada por una maquinaria mental y consolidada por un dispositivo administrativo, institucional, jurídico” (Karsz, 2004: 76).

Cuando lo oficial, con sus largos y costosos procedimientos, entra en juego, es cuando el estereotipo del gitano “conflictivo” y “demandante” promueve tensiones y conflictos, tal como hemos adelantado más atrás. Aparte de ello, autores como Espluga, Lemkow, Baltiérrez y Kieselbach, (2004: 82) han recalcado que la minoría étnica gitana y los inmigrantes, con sus “redes familiares y pautas culturales propias”, son grupos en los que “la *diferencia* se convierte en *desigualdad social* por causa de los comportamientos y actitudes racistas de la población *integrada*”.

En los distintos espacios donde he realizado observación participante (en ONG, en reuniones profesionales, en la calle... es decir, en espacios donde se trabaja con gitanos) se hace continuamente referencia a cómo éstos no siguen las normas de la sociedad mayoritaria pero sí se llevan sus beneficios “pagados con los impuestos de todos”. A modo de ejemplo, expongo la siguiente situación, que sucedió en el registro civil central de Madrid, y es bastante representativa de cómo los estereotipos acerca de la población gitana producen incomodidad e inquietud en los funcionarios públicos:

Soy la segunda de una fila para pedir certificados de nacimiento y me encuentro detrás de un mostrador vacío, en la antesala de una habitación donde hay ocho escritorios con sus respectivos funcionarios detrás. Hay un hombre esperando detrás del escritorio. Me sitúo detrás de él, y

escucho que alguien llega a colocarse detrás de mí. Una voz femenina increpa al joven que acaba de llegar para que pase, que se salte el mostrador y vaya a uno de los escritorios donde no están atendiendo a nadie. Las dos funcionarias que tienen sus sillas vacías están charlando risueñamente entre ellas. Me doy la vuelta y veo que hay dos mujeres gitanas. La mayor, de unos 55 años, va vestida de luto y está acompañada por una joven, en vaqueros y camiseta, de unos 25-30 años. El joven, de unos 25 años, duda pero se atreve a sobrepasar el umbral que marca el escritorio. Para cuando ha dado un par de pasos, un funcionario le dice que tiene que esperar a ser llamado, ante lo cual retrocede y vuelve a hacer fila. La mujer gitana más mayor comienza a comentar con su acompañante lo bien que se lo pasan las dos funcionarias charlando entre sí, y critica que no estén trabajando mientras hay una fila fuera. Para cuando me llaman y me siento, las dos mujeres gitanas son llamadas también a sentarse en el escritorio de una de las funcionarias que previamente no atendía. El funcionario que me toca, de unos 45 años, a pesar de no ser él quien va a atender a las mujeres, no las pierde de vista. No deja de mirar hacia ellas, tenso, como si tuviera que proteger a sus compañeras más jóvenes (la mujer que va a atender a las gitanas tendrá unos 35 años). El funcionario me pregunta qué necesito de forma cuasi-automática, sin dejar de mirar a las mujeres. Le digo que quiero un certificado de nacimiento para mi hija, ante lo que no da muestra alguna de haberme escuchado. No responde ni verbalmente ni con gesto alguno, ignorando por completo mi demanda. Prosigue observando la interacción de las gitanas con su compañera con cara de sospecha, suspicazmente. La mujer gitana mayor sube el tono de voz, sin llegar a gritar, y escucho que le está diciendo a la funcionaria que la mandan de la planta de abajo para que “le arregle” lo que pone en uno de los papeles que con anterioridad parece haberle entregado. La gitana está hablando fuerte, demandando una solución, con tono de estar cansada de que le manden de un sitio a otro. La funcionaria le emite un papel, se lo da, y la gitana mayor se levanta y se marcha, seguida por la joven, que en el recorrido entre el escritorio y la puerta de salida (unos 3 metros), mira fijamente y con cara de mal genio a la funcionaria que les ha atendido. Cuando se van, la funcionaria se ríe y comenta con la que tiene a su lado –también en voz bastante alta: “¿Has visto la mirada que me ha echado la rubia? No saben leer y vienen aquí a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo”. Prosigue diciéndole algo así como que no cree que el papel que le acaba de dar le sirva para algo. Es en ese momento, después de que ha pasado al menos medio minuto desde que las mujeres dejaron la sala, cuando el funcionario que me tenía que estar atendiendo me mira y me vuelve a preguntar qué es lo que necesito. Cuando se lo digo de nuevo, me comenta en voz alta, como si fuera a encontrar en mí una interlocutora legítima a la que exponer su punto de vista: “Siempre son los mismos los que dan problemas”. Aprovecho para preguntarle si tienen más problemas con los gitanos que con otros grupos, a lo que me contesta que de diez gitanos que van a solicitar algo, ocho “dan problemas”. Tratando de que no se note que no comparto su punto de vista, le digo que yo he trabajado con ellos y que muchas veces llegan a la defensiva porque piensan que se les va a tratar mal por el hecho de ser gitanos. Ante esto, el funcionario me contesta: “Estamos tratando todo el día con gente que no es española, y no tenemos problemas con ellos”. Añade algo así como “Ellos (los gitanos) quieren ser españoles pero no saben utilizar las instituciones como todo el mundo ni respetar las normas ni los procedimientos generales”. Me llama a atención la puesta en cuestión de su españolidad, como si el no seguimiento de las normas burocráticas fuera razón suficiente para que la condición ciudadana quedara en suspenso. A su vez, entiendo que la representación colectiva del “gitano que da problemas” ha quedado automáticamente legitimada. La naturalidad con la que este colectivo es visto desde el conflicto es evidente, dado que el funcionario se permite compartir conmigo su opinión, expresada en tono nada disimulado.

La crispación en los cuerpos de los funcionarios se hace palpable en cuanto llegan las gitanas protagonistas del episodio relatado en el anterior verbatim, anticipando así el choque: las miradas vigilantes de uno de ellos y sus juicios sobre la conflictividad de los gitanos ya denotan que es un colectivo con el que no gusta trabajar. Por su parte, las gitanas cumplen el estereotipo de no adaptarse a los tiempos, ritmos y protocolos de cortesía a seguir con los trabajadores públicos (huelga decir que el funcionario que me atiende no se disculpa por ignorarme durante varios minutos), exigiendo efectividad, protestando abiertamente al ver a dos funcionarias charlar animadamente entre ellas sin atender al público, y mostrando su

enfado por tener que volver de otra planta del Registro a pedir una corrección en el documento que les han entregado previamente.

Dejando a un lado este caso concreto y volviendo al tema general aquí abordado, es decir, el de las tensiones que se generan en el contacto del colectivo gitano con las instituciones públicas, no hay conciencia hoy en día, ni entre los empleados de éstas ni, en particular, entre los trabajadores sociales, de la necesidad de discriminar positivamente al colectivo, enfatizándose su obligación de comportarse como ciudadanos, en el sentido ya expuesto en páginas precedentes. Así, entre la mayoría de profesionales entrevistados, no está legitimada la idea de que sea preciso un trato especial, preferente o adaptado a las necesidades de los gitanos, aduciendo que ello serviría únicamente para que continuasen teniendo más ventajas que otros sin dar lo suficiente a cambio. Actuaciones de esta índole sólo se justifican ante situaciones de vulnerabilidad extrema. Ello a pesar de que, desde finales de los 90, se sabe que “los recursos normalizados no están adaptados, no son accesibles a estos colectivos y, muchas veces, cuando consiguen acceder, no se adaptan a sus peculiares circunstancias” (Serrano y Arriba, 1998: 1999).

Si se juzga que no son situaciones de “extrema necesidad” o de vulnerabilidad social, se prima una intervención profesional que tiende a promover que los gitanos perceptores de la RMI (u otras ayudas sociales) “se esfuercen” por realizar los trámites que les conciernen, como si ello fuera ya un paso en su proceso de inserción social.

Una trabajadora social de IRIS, en el poblado chabolista de Santa Catalina, se enfada conmigo cuando se entera que le he dicho a una gitana que la podría acompañar a realizar alguna gestión en mi coche. Me explica que estoy frenando el proceso de integración de esa persona, a la que le vendría muy bien ir por sus propios medios (añade: “como todo hijo de vecino”) a realizar la gestión. Me explica que hasta coger el metro o sacar un metrobús ella sola sería una intervención social apropiada y con la que ella estaría de acuerdo, pero no con facilitarle la gestión llevándola en mi coche. (Registro de campo: observación en Santa Catalina, marzo 2008)

Pattaroni (2005) ha escrito sobre este fenómeno presentándolo como uno de los que afectan a la labor profesionalizada de los trabajadores sociales, que pecan de sobre-reflexionar acerca de todas sus actuaciones y a convertir cada pequeña interacción con la población con la que trabajan en una “intervención socio-educativa”. Así, cualquier actividad de la vida cotidiana, por nimia que sea: desde comprar un metrobús a ir al médico o solicitar una cita para el dentista, se considera que puede favorecer la “autonomía” de las mujeres gitanas, por ejemplo, y/o su manejo de los modos comunes de desenvolverse en la sociedad mayoritaria, ayudándolas a superar su “aislamiento cultural”. Se acepta que actividades de este tipo, y las intervenciones sociales dirigidas a fomentarlas, sirven para contrarrestar el asumido efecto negativo de las rentas mínimas u otros “tratos preferentes” que se piensa que afectan de

manera contraproducente al proceso de autonomización de estas poblaciones, en línea con lo que sostienen algunos autores de que estas políticas sociales han aumentado su cronificación y dependencia de las instituciones⁸⁷ (Estivill, 2003).

En resumen, se puede afirmar que la aparición de los gitanos en las instituciones públicas produce reacciones claras en quienes trabajan en ellas, que esperan que éstos se adapten a su forma de funcionar. El trabajo de campo realizado revela la existencia de tensiones interétnicas que afectan al uso que los gitanos pueden hacer de esas instituciones, así como al trato que les ofrecen sus funcionarios. Es evidente que, en general, las instituciones públicas (o, en particular, el sistema de Servicios Sociales vinculado a la RMI) no están dotadas de herramientas de intervención social que les permitan trabajar sin conflicto con el colectivo gitano, lo que genera mucha frustración y desasosiego entre los profesionales y supone un obstáculo para la correcta implementación de la RMI, sobre todo para que los usuarios gitanos se sientan con el poder suficiente para participar en el diseño de su proceso de inserción social.

2.9 Recapitulación

Se ha querido poner de manifiesto en este capítulo que uno de los problemas de la RMI, a parte de los anteriormente señalados, consiste en que es aplicada a un colectivo que históricamente ha sido visto como problemático en su relación con las instituciones públicas y que todavía sufre discriminación cuando se acerca hasta ellas. Las tensiones que se producen (y son percibidas por los gitanos) cuando éstos acuden a dichas instituciones afectan a sus formas de reaccionar, que son vistas a menudo como excesivas y exageradas. Debido a este conflicto, a veces encubierto y otras veces explícito, es difícil que se den espontáneamente prácticas de solidaridad y de compasión hacia el colectivo, que es mirado a través de estereotipos como los que se han mencionado más atrás. Los profesionales perciben a los gitanos perceptores de la RMI como situados en “la otredad”, que es leída en clave de atraso cultural, de resistencia al cambio y/o de dependencia de las instituciones públicas, y que se expresa a través de categorías esencializadoras y dicotómicas que están siendo, a su vez, retomadas por los miembros del colectivo gitano para interpretarse a sí mismos mediante recursos discursivos, corporales, etc. similares a los de los profesionales. Gullestad (2007: 14) hace referencia a que, en contextos coloniales, las ideas de la modernidad y del progreso son

⁸⁷ Para Estivill (2003: 38) la introducción de las rentas mínimas en algunos países latinos ha podido producir una regresión en ciertas comunidades gitanas en la medida en que, según este autor, éstas estaban en una fase de autonomización y habían iniciado pequeños negocios ligados a la venta ambulante.

predicadas sobre la base de la existencia de “los otros”, concebidos en términos de tradición, irracionalidad y diferencia cultural. En el capítulo sexto se abordará con más detalle cómo se entiende la cultura gitana; aquí solo se ha querido destacar que, en el ámbito de los Servicios Sociales, casi siempre se hace en términos negativos, lo que obstaculiza que se identifiquen como tal algunas capacidades de las personas gitanas (como las relacionadas con la autogestión de la información y de la toma de decisiones vitales) que despliegan en el día a día.

Este error de lectura, por el que unos y otros se perciben sobre la base de ciertas ideas preconcebidas y de ciertas actitudes exhibidas por ambas partes, se intensifica en los espacios burocráticos puesto que, en ellos, como en cualesquiera otros, tiene lugar lo que algunos autores han denominado “identidad situacional” (Barth 1976; Pérez-Agote, 1984: 37; Rivas y Jociles, 1993: 143; Jociles, 1995: 23 o Cátedra, 1997: 15). Se puede sostener, por ello, que “lo gitano” adquiere un significado propio como categoría de la intervención social que se construye, en especial, en esos espacios burocráticos. Lo ejemplificaré –en esta recapitulación final– a través del discurso de Tania, una mediadora social de 37 años, madre de dos hijos, que ha ido cambiando sus acepciones de “lo gitano”, cargándolas de estereotipos, a medida que se ha ido profesionalizando. Cuando la conocí, en mayo de 2006, llevaba muy poco tiempo empleada en una ONG que intervenía con gitanos chabolistas de Madrid. Tania, rubia y guapa, de ojos azules, con acento muy madrileño (a diferencia del acento extremeño o portugués común entre quienes viven en las chabolas), me comentó en la primera conversación que mantuvimos que, siendo perceptora de la RMI, les había dicho a los profesionales de los Servicios Sociales que estaba separada de su marido. Con la grabadora apagada, me pidió que no les contase a las profesoras de la ONG en la que trabajaba que su marido había vuelto a vivir con ella (para que ello, si acaso volvía a pedir la RMI, no obstaculizase su cobro, puesto que su marido estaba asalariado pero no consideraba que su relación fuera a durar mucho). En otro momento, cuando se le había terminado el contrato con esa ONG y no sabía cómo llegar a fin de mes, me manifestó que no tenía claro si volver a trabajar por tan poco salario como percibía como mediadora, y que estaba valorando pedir la RMI para tener tiempo de cuidar a sus hijos, quienes estaban teniendo bastantes problemas en la escuela (académicos y disciplinarios). Trabajó de mediadora social en una escuela dos años más tarde haciéndose cargo de los problemas de absentismo del alumnado gitano, pero tras seis meses de estar allí, el Área de Igualdad del Ayuntamiento, que en principio fomentó su contratación y la de otras mediadoras sociales gitanas, decidió no seguir contratándolas por no tener el graduado escolar. Tania consiguió un empleo en otra ONG, con buenas condiciones

salariales y un claro componente formativo. La animaron a ir a congresos para que se profesionalizase y, poco a poco, su identidad se fue construyendo cada vez más sobre la base de su inserción laboral. Hoy en día se siente apoyada como profesional y se dedica principalmente a asistir, dentro de los proyectos de integración de la ONG, a las profesoras responsables de las clases con gitanas beneficiarias de la RMI y a acompañar a éstas al ginecólogo a través del Programa Artemisa. A finales del 2008, cuando quedé con ella para almorzar y le comenté que estaba entrevistando a gitanos perceptores de la RMI, lo primero que me dijo fue: “ten cuidado con los gitanos, que son muy mentirosos”, recomendándome de esta manera adoptar hacia ellos una actitud de sospecha y precaución.

El significado de “lo gitano” se adquiere a través de las interacciones entre unos actores sociales y otros que, en este caso, están mediadas por la distribución de prestaciones sociales y económicas. Así, Tania, en su proceso de formación como mediadora (con asistencia a cursos, congresos, etc.), ha ampliado el significado de “lo gitano” y utiliza hoy en día esta categoría para referirse a esos “otros” culturalmente diferenciados que “mienten” cuando tratan con los profesionales y cobran prestaciones económicas que verdaderamente no necesitan; es decir, para referirse a “esos otros” de los que se ha distanciado al asumir su nueva identidad profesional.

En suma, la RMI es una política social difícil de catalogar. Por un lado, parece establecer unos requisitos objetivos de acceso a la misma, con lo que podría considerarse, en términos de Fassin, una “política de justicia” (2003: 66) dado que busca garantizar la cobertura de unos mínimos para solventar situaciones de vulnerabilidad social definidas a partir de requisitos de esta índole, esto es, exentos de interpretaciones subjetivas por parte de los profesionales. Por otro lado, como se verá más adelante, estos profesionales interpretan la ley de manera diferencial para el caso de los gitanos. Por tanto, la RMI es una política social que, desde esta vertiente, moviliza sentimientos y actuaciones profesionales que tienden a dar a cada sujeto “según su desgracia”, cayendo así dentro de las denominadas “políticas de piedad” (Fassin, 2003: 66). No obstante, aunque los gitanos son considerados como población-diana de la intervención social con colectivos vulnerables, a efectos prácticos, los profesionales de Servicios Sociales y algunos de las ONG donde he realizado trabajo de campo consideran que no es un colectivo lo suficientemente excluido como para establecer con él acciones de discriminación positiva (precisamente por desconfiar de que su “desgracia” sea verdadera), tal como se ha visto. El discurso “del sufrimiento” (Fassin, 2000: 65) de los gitanos, que analizaremos a fondo en el capítulo octavo, no convence a los profesionales, que no les tienen por sujetos legítimos de ser ayudados.

Capítulo 3: Concepciones de los profesionales sobre la exclusión social, la integración, el sujeto legítimo de la intervención social y el colectivo gitano

En los anteriores capítulos se ha querido dar cuenta de la forma de funcionamiento de la RMI, de la complejidad de los procedimientos que entraña y de algunos de los factores de índole más estructural que están dificultando su implementación como, por ejemplo, la ambigüedad en la redacción de la ley, la externalización/fragmentación de la intervención social en la Comunidad de Madrid o las jerarquías entre las diferentes instituciones y/o entidades que participan en la gestión e implantación de la ley de la RMI. En este quinto capítulo, en cambio, se analizan las concepciones de los profesionales que hacen referencia a la exclusión e integración social y a las características que se asocian al colectivo gitano. Estas concepciones guardan una estrecha relación con las estrategias concretas que estos profesionales despliegan en la aplicación de la RMI con los perceptores de la RMI y, en especial, con los de etnia gitana, puesto que éstos son los que, según expresan los entrevistados, les ocasionan más dilemas en la intervención social.

3.1 Exclusión, integración y sujeto legítimo de la intervención social

Las concepciones de la exclusión social y de la integración que se manejan en la Ley 15/2001 y en el Decreto 147/2002 van configurando una imagen del sujeto que legítimamente puede demandar la prestación. Esta imagen de lo que es estar socialmente excluido no sólo implica demostrar una necesidad económica o social, sino que naturaliza algunos valores morales que exaltan determinadas actitudes de los sujetos como, por ejemplo, la buena predisposición para participar en actividades de inserción, el deseo de cambiar la propia vida y de ascender socialmente a través de la incorporación al mercado laboral formal. De este modo, los sujetos que no cumplen lo que se espera de ellos (adhesión a dichos valores y/o demostración de las mencionadas actitudes) encuentran menor reconocimiento por parte de los profesionales y son objeto de una intervención profesional más severa.

En este apartado, vamos a analizar, en primer lugar, la visión de la exclusión y de la integración social que se desprende tanto de la ley RMI como de algunos artículos escritos por trabajadores sociales, y defendemos que la idea de sujeto excluido que estos textos amparan

se configura a partir de ciertos valores inherentes a la clase media, en la que podemos situar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social.

Mientras que en la exposición de motivos de la ley se mencionan las causas macro-estructurales que producen condiciones de vulnerabilidad social y se hace referencia a cómo “las nuevas formas de desarrollo” generan problemas de exclusión social y propician que “algunos sectores de la población se vean gravemente obstaculizados para incorporarse plenamente al desarrollo social a causa de problemas diversos”, en el resto del documento es destacable la tendencia a individualizar las causas de la exclusión social y a situar su origen en características personales de quienes están “en situación de exclusión social”. Así, cuando se mencionan los problemas que impiden la incorporación de estas personas al “desarrollo social”, cuatro de los cinco problemas enumerados son de índole individual: falta de adaptación a las nuevas exigencias del mercado de trabajo, problemas familiares y personales de diverso tipo, problemas de salud y, en especial, de salud mental, y como quinto problema se hace referencia al único que, como se ha dicho, es de índole social: la “persistencia de prejuicios y discriminación de ciertos grupos sociales”.

En la Comunidad de Madrid existen grupos de personas que tienen una acumulación de barreras y límites que les dificulta y, en ocasiones, les deja fuera de la participación en la vida social mayoritaria. Estas barreras vienen propiciadas por fuertes dificultades en el mundo de las relaciones familiares y sociales, bajos niveles culturales, dificultad para hacer efectivo el acceso a la salud, carencias laborales, dificultades para conseguir empleo y falta de acceso a una vivienda digna. Todos estos factores constituyen un evidente riesgo de marginación y exclusión social. Además, los cambios sociales, económicos y culturales acaecidos en los últimos años en nuestra región han hecho aflorar una gran diversidad de aspectos carenciales en personas, familias y grupos de población de la sociedad madrileña. (Orden 2675/2007, de 31 de diciembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales⁸⁸)

También en los documentos reguladores del programa predecesor (IMI) se hacía hincapié en las características personales de los “colectivos excluidos”⁸⁹:

Junto a las carencias económicas que presentan estos colectivos, encontramos otras muchas que hacen todavía más precaria su situación, y por tanto más urgente una intervención pública de choque: carencias de tipo social y laboral, de tipo educativo, de vivienda y alojamiento, sanitarias, de integración étnica, de calidad de la convivencia, del entorno afectivo, carencias en el orden psicológico, etcétera. (Decreto 73/1990)

Esta tendencia a situar en el individuo las causas de la exclusión social coincide con una visión carencial y multiproblemática de los sujetos excluidos. Se habla de ellos como personas con múltiples carencias, barreras y límites acumulados, o con problemas degenerativos (Nogués, 2007) y/o con deterioro físico o emocional (Fernández y Tapia,

⁸⁸ Por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos de integración y se aprueba la convocatoria, mediante tramitación anticipada, de dichas subvenciones para la realización de proyectos de integración en los años 2008 y 2009.

⁸⁹ La palabra “colectivo” ya no se utiliza en la documentación referente a la RMI, pasando a ser sustituida por expresiones como la de “sectores” o la de “personas en situación de exclusión social”.

2007). Se va definiendo así la exclusión social como algo individual que responde a situaciones intensas y/o graves, de extrema necesidad, enfermedad o pobreza absoluta. Consecuentemente, se enfatiza la utilidad y la necesidad de la Renta Mínima de Inserción en cuanto prestación económica que pretende dar cobertura a las necesidades de “los más excluidos” (Ley 17/2001:17), es decir, de las personas que carecen de recursos económicos para hacer frente a las exigencias básicas de la vida⁹⁰ (Ley 17/2001:17). En congruencia con ello, la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, cuando describe su actuación en materia de garantía de ingresos, asegura lo siguiente:

El objetivo general es mejorar la política de protección económica para poder dar cobertura a los hogares en situación de pobreza extrema en la Comunidad de Madrid, haciendo también hincapié en la intensidad de las situaciones de exclusión⁹¹.

Así, la Renta Mínima de Inserción no ha sido concebida para aquellas situaciones que no sean de gravedad o no se correspondan con una situación de pobreza extrema⁹². Fassin (2003: 54-55) analiza cómo se distribuyen los subsidios a los desempleados en Francia o las tarjetas de residencia a los inmigrantes que demuestran enfermedad y sostiene que “es el cuerpo el que da derecho, a título de enfermedad o de sufrimiento”; sin embargo, en el caso de la RMI, es el aspecto a la vez carencial y grave el que otorga legitimidad a los solicitantes de la prestación económica. Por tanto, parafraseando a Fassin, se podría decir que, estrictamente hablando, no es el cuerpo el que da derecho a la prestación, sino el cuerpo que sufre visiblemente y que tiene carencias graves.

Las reglas de justicia aparecen como normas con miras a atribuir recursos en función de criterios neutros: suma disponible por persona, composición del hogar, demandas particulares (...). Sin embargo, esos mismos criterios reposan sobre el reconocimiento de seres cuyo infortunio extremo justifica una medida que debe aparecer a la vez como urgente, indispensable y específica: la ley habla de “desamparo grave” para los fondos de emergencia social, de una “gravedad excepcional para la tarjeta de residencia”. (Fassin, 2003: 68)

En suma, no sólo los excluidos se representan como gravemente afectados por diversas carencias y problemas, sino que prima una visión de la exclusión social como una “incapacidad” que les aflige, lo cual no les permite poder “salir de su situación por sus propios medios” o hacer frente a sus obligaciones (Juan, 2008: 95). Esta concepción se

⁹⁰ En este sentido llama la atención cómo la renta mínima, en cuanto a su naturaleza jurídica se refiere, tenga “carácter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia”.

⁹¹ <http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266100977&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227679&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977>.

⁹² Llama la atención que en las “Jornadas para la Inclusión Social”, organizadas por la Fundación Luis Vives y por el Departamento de Rentas Mínimas de la CM, se proyectara el video “En el umbral” (2006), de la directora Pepa G. Ramos. Fue utilizado como herramienta para debatir sobre cómo la exclusión social afecta en la Unión Europea a muchas personas asalariadas, quienes son despedidas continuamente por el excedente de mano de obra capacitada. De este modo, desde la misma institución que suscribe una ley con un significado restringido de la exclusión social, se organizan talleres y seminarios en los que se ofrecen visiones más complejas del fenómeno.

maneja tanto en las investigaciones que sirvieron de base para la elaboración del Plan contra la Exclusión de la Comunidad de Madrid (Aguilar, Laparra y Pérez, 2001) como en los discursos de algunos trabajadores sociales entrevistados.

No puede concebirse la incorporación social sólo como acceso al empleo y a unos ingresos básicos. Se trata de una situación de la que no se puede salir sin apoyos, marcada por una dinámica de irreversibilidad al menos a corto plazo y por esa cierta incapacidad de las personas afectadas de salir de su situación por sus propios medios. (Aguilar, Laparra y Pérez, 2001)

Así, se va configurando una determinada imagen del sujeto al que la RMI pretende dar cobertura: el que “queriendo y no pudiendo trabajar por la situación de exclusión social en que se encuentra, está situado en la marginalidad y la pobreza” (Alonso, 2002: 186). El excluido es el que tiene múltiples problemas y carece de herramientas o de habilidades para afrontarlos.

Para mí, la exclusión es la dificultad para ver horizontes. Es una persona que no tiene herramientas ni referentes donde... Para mí un excluido es el que tiene las posibilidades de cambio muy reducidas y el horizonte muy pequeño de mejora de condiciones de vida, de mejora de bienestar personal, de satisfacción. Es mucho más que lo económico. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años)

Por tanto, la RMI se define como una política social dirigida a personas *en estado de* exclusión social, una especie de estado estático del que estas personas quieren pero “no pueden salir”, enaltecándose así el poder de la voluntad (el querer) como cualidad moral necesaria para “mejorar”.

[La ley] responde a un afán decidido del Gobierno Regional de ir extendiendo el ámbito de su política social hacia sectores cuyas necesidades no están todavía suficientemente protegidas, consciente de que la sociedad madrileña sólo alcanzará las cotas de bienestar social a las que es acreedora si se avanza hacia la consecución de un progresivo equilibrio entre los distintos sectores que la forman, para lo cual se hace indispensable satisfacer las necesidades de quienes no pueden salir de la situación de exclusión social en que se encuentran. (Ley 15/2001: 11)

En suma, la Ley 15/2001 se refiere a personas con problemas individuales y carencias graves que “no pueden salir” de la situación de exclusión social en la que se encuentran, siendo éstas, en última instancia, las acreedoras legítimas de la prestación. A este respecto, Castel (1995: 28) ha advertido del peligro de autonomizar las situaciones límites y de convertir la exclusión social en un estado que habría que tratar de subsanar en sí mismo. Pero una vez que se ha definido en estos términos, los profesionales de la intervención social entran en escena y son vistos como los encargados de apoyar a dichas personas para que logren salir de la situación de exclusión. Lo anterior, obviamente, es difícil de conseguir sin el interés de “los excluidos” por cambiar, presuponiéndose así en ellos una actitud que tienen que mostrar para poder ser ayudados.

La tendencia a situar en el individuo las causas de la exclusión social es coherente con los instrumentos para la inserción social que se derivan tanto del programa IMI como de la RMI (contrato social individual o programa individual de inserción, programación de acciones individualizadas para cada persona, seguimiento individualizado de las mismas, etc.), diseñados de una forma que “se adapta” a cada caso personal. El riesgo de individualización del conflicto social a través de instrumentos de intervención social como el “contrato”⁹³ ha sido puesto de manifiesto por autores como García García (2005) o Castel (1997); instrumentos que se entienden como herramientas para afrontar y solucionar las múltiples “carencias” de las personas a las que van dirigidos.

El PII es una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión personal, social y laboral, y contribuir a la inserción social de quienes “carezcan” de los recursos personales o sociales suficientes para desarrollar una vida independiente. (Decreto 147/2002: 56)

La labor de los profesionales se define en diversos textos como consistente en averiguar las demandas o deseos de cambio latentes en la persona excluida (Nogués, 2007; Fernández y Tapia, 2007). De este modo, el sujeto excluido, a la vez que como deteriorado, es concebido como multi-problemático y aquejado de toda una serie de carencias psico-afectivas, como alguien que quiere cambiar pero que no puede, siendo el profesional el encargado de “ponerse en contacto directo con los sentimientos y ansiedades de la persona” (Fernández y Tapia, 2007: 200) y de ser un “foco que va poniendo luz a lo que la persona o familia va iluminando a su vez” (Fernández y Tapia, 2007: 223⁹⁴). Así, desde una perspectiva que pretende hacer a la persona excluida protagonista de su propia vida, los profesionales quieren contribuir a encontrar los objetivos –supuestamente– perseguidos por los sujetos excluidos. Esto quiere decir que se están usando concepciones contradictorias de éstos, que pasan de atribuirles una situación de ansiedad y de multi-problematicidad a considerar que disponen de una motivación escondida o latente para desear un cambio propio y personal. Esta ambigüedad a la hora de definir a la persona excluida es un mecanismo retórico que conviene y legitima la intervención profesional que, a partir de ese momento, se articula como el dispositivo encargado de despertar la motivación o el deseo que esa persona, a pesar de las dificultades para expresarlo, tendría. La intervención queda materializada en un proceso de

⁹³ Foucault [1978] (1981: 20) sostiene que la teoría del contrato es la matriz teórica de un específico arte de gobierno.

⁹⁴ Gullestad (2007), en un interesante análisis de la documentación escrita y visual producida por los misioneros noruegos, ha estudiado las metáforas que utilizaron sobre la oscuridad de los africanos a los que iban a dotar de “luz” mediante la educación dada en las misiones que establecieron en Camerún, y la jerarquía y el paternalismo que guiaban sus actividades. La representación sobre la carencia educativa de los africanos legitima la actividad social de los misioneros, sin cuestionar en ningún momento los efectos más amplios que se derivan de sus acciones ni las contradicciones y tensiones inherentes a las mismas.

inserción social “adaptado” a las demandas, capacidades, habilidades y “potencialidades personales” de los sujetos (Fernández y Tapia, 2007: 235); y los profesionales se entienden como los encargados de “sacar” a estas personas de la situación en la que se encuentran, movilizándolo sus capacidades internas así como su motivación subyacente o escondida.

El problema es que la exclusión social tiene muchos ámbitos de actuación. No sólo concierne al empleo o a la familia o a cualquier tipo de situación que le pueda conllevar a una persona estar en una situación que no está bien vista por la sociedad o que se encuentra con una necesidad que hace que tenga un problema. No se puede decir: “Vamos a trabajar con formación para el empleo”. Vale, ése puede ser un recurso bueno para sacar a una parte de personas que pueden estar en situación de exclusión social. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Las diferentes representaciones que se manejan de los sujetos excluidos sitúan a los profesionales en relaciones jerárquicas también diferentes con respecto a ellos. Así, en caso de conceptualizarse al excluido como multi-problemático y al profesional como quien puede “ayudarlo” a salir del estado de exclusión social en el que se encuentra, la superioridad que se le otorga a éste último es patente⁹⁵. Gullestad (2007) plantea que la “bondad” de la intervención profesional no se cuestiona y siempre necesita la generación de un “otro” necesitado y poco evolucionado al que hay que asistir. Por ello resulta sorprendente que, en el caso de la RMI, después de haber dibujado al excluido como una persona con serias discapacidades sociales y personales, se pase a definir la intervención social en términos igualitarios y se afirme que el profesional y el sujeto excluido establecerán los objetivos de inserción “co-participadamente”, como si ambos estuviesen situados en posiciones sociales parejas. A continuación se le asignan al segundo características como la autonomía, la capacidad de discernimiento y análisis sobre su propia situación, a la vez que la aptitud para diseñar él mismo, en co-participación con los profesionales, los objetivos de su Programa Individual de Inserción. Agudo (2009) ha indicado que la palabra “coparticipación” se utiliza frecuentemente como una metáfora movilizadora en el mundo de las políticas sociales⁹⁶.

La tarea del profesional será categorizar y establecer conexiones hipotéticas entre los datos que nos suministra el cliente, para así dar nueva luz al problema y acercarnos al cambio deseado por ambos. (Rodríguez y Zamanillo, 1992: 50)

⁹⁵ Aznar (1991) sugiere que los mecanismos de contractualización vinculados a la RMI corren el riesgo de poder convertirse en una forma novedosa de legitimación de un modelo asimétrico de implementación del trabajo social.

⁹⁶ La co-participación puede ser vista como una palabra clave dentro del discurso de las políticas sociales (Williams, 1983, en Agudo, 2009: 71). Las palabras como ésta son agradables, persuasivas, políticamente correctas o, más bien, neutras, pues todos estamos de acuerdo acerca de ellas y todos las usamos. Entre ellas, además de “co-participación”, están palabras como “comunidad”, “familia”, “corresponsabilidad” y “cooperación”. Cuando resultan exitosas en disputas dentro del ámbito de lo político y atraen un apoyo generalizado, podemos denominarlas “metáforas movilizadoras” (Shore y Wright, 1997: 19-20), que son fundamentales en las “grandes narrativas del desarrollo social” (Mosse, 2005a: 8-9).

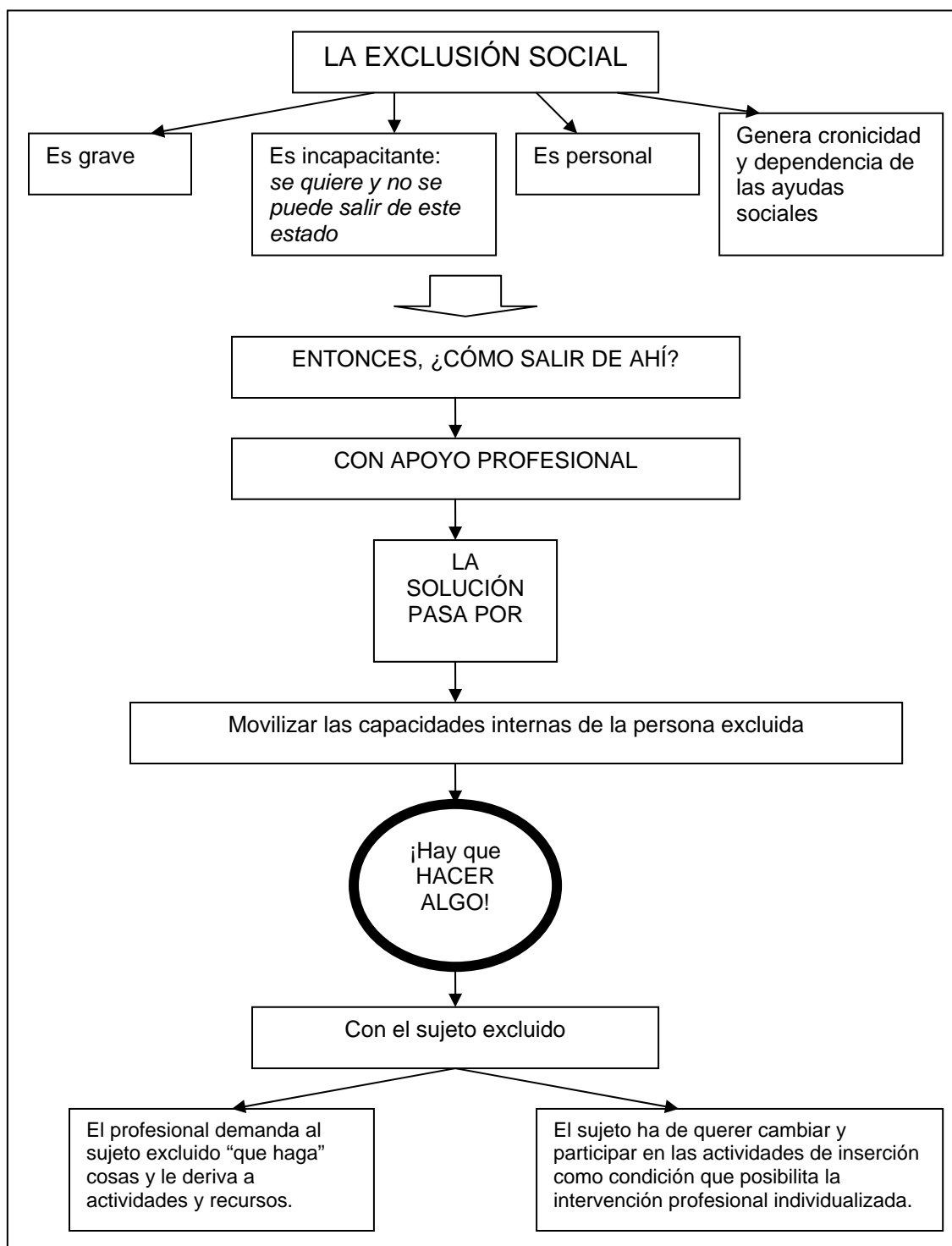
El profesional, situado así en el mismo nivel que el excluido y dispuesto a establecer una “co-participación” o negociación (obviando las diferentes condiciones sociales y materiales de existencia y la definición inferiorizante que se ha dado previamente del sujeto excluido), orienta su intervención social a establecer un vínculo de confianza con el usuario que sirva para concretar las “demandas expresadas y las expectativas depositadas por la persona en el profesional y la institución” (Fernández y Tapia, 2007: 233). No aparece, en los textos consultados, ninguna duda sobre esa milagrosa coincidencia de expectativas entre los profesionales y los sujetos excluidos.

Encontramos, en los discursos de la mayoría de los profesionales entrevistados, una concepción de la intervención social que se centra, por un lado, en movilizar al sujeto excluido, como si se encontrase –como se ha subrayado– en una especie de estado estático del que hay que ayudarlo a salir y, por otro lado, en una consideración de éste como contraparte que ha de participar activamente en su propio cambio personal. En la Figura 6, se presenta esquemáticamente la relación que, desde la perspectiva de los trabajadores sociales que intervienen con la RMI, se establece entre exclusión social e intervención profesional.

De la intervención profesional se espera que coadyuve a la integración, apareciendo la inserción laboral como condición necesaria para que los sujetos excluidos consigan características tales como la autonomía, la independencia y la libertad.

Con los hijos, el objetivo era que empezaran a... (titubea), ¡a ver cómo lo digo!, que empezaran a desear trabajar, o sea, que empezaran a ver que en el trabajo existen más oportunidades, o sea, la oportunidad de ser más autónomos y más independientes y más libres que no en la RMI, que no en la dependencia de las instituciones, sea del tipo que sea. Ése era el objetivo. Para eso a lo mejor había que empezar con unos talleres pre-laborales de no sé qué o con unas habilidades sociales... Con los padres que apoyaran eso, que los hijos entraran en algún tipo de formación o proceso ya de búsqueda, porque había situaciones distintas, para que el futuro de sus hijos no fuera el de ellos. (Entrevista a ex--trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años)

Figura 6: Resumen esquemático de la relación entre la definición de exclusión social y la conceptualización de la intervención social.



Fuente: Elaboración propia.

Esta visión de la integración social a través del empleo es la misma que promueven la Ley y el Decreto de la RMI.

Lejos de concebirse como una prestación asistencial pasiva, lo que se pretende con ella es eliminar las causas que puedan conducir a una exclusión progresiva, con el fin último de que la persona que la recibe, así como los miembros de su unidad de convivencia, encuentren ese

empleo adecuado que les conduzca a una realización personal y social. (...) En el supuesto de perceptores de la renta mínima de inserción se iniciará un programa de duración semestral que incluya el diagnóstico de su situación social y las medidas más eficaces para conseguir su incorporación laboral. (Decreto 147/2002)

El análisis de los documentos reguladores de la prestación IMI y de la RMI muestra que la integración social aparece conceptualizada en términos de un proceso lineal de evolución, que comienza con la detección de la persona con problemas, el "diagnóstico" de su situación social y el establecimiento de medidas/acciones de cumplimiento personal, y finaliza con la inserción laboral, que conduciría ineludiblemente a la salida de la situación de exclusión material y a la consecución de la realización personal y la cohesión social.

No se reduce a una concepción simplista de la integración por el dinero. Al contrario, la prestación económica se concibe al servicio de todo un profundo proceso de integración, que deberá ser definido a nivel individual y adaptado a las necesidades y peculiaridades de cada persona y de cada entorno social. (Decreto 73/1990)

García García (2005) ha señalado la similitud entre el modelo de atención de los Servicios Sociales y el de atención sanitaria en cuanto a la secuencia lógico-deductiva que va de lo general a lo específico, esquema cognitivo procedente del discurso científico que se materializa en el itinerario de atención. Este autor sostiene que la influencia positivista y neopositivista ha estado presente en el trabajo social en Occidente de manera muy marcada, haciendo referencia a la ideología del "progreso", definida como el propósito de proyección de cambios hacia el futuro:

Esto convierte al trabajo social en una tecnología que aplica, generalmente prescindiendo de la subjetividad de las personas con las que trabajamos, diseños de intervención social, objetivos generales, objetivos específicos, presuponiendo una secuencialidad lógica y deseada de nuestras proyecciones y nuestras acciones. (García García, 2005)

A su vez, esta concepción unilineal del progreso iría unida a la visión del conocimiento como verdad única que promueve el control sobre el entorno (García García, 2005). En este sentido, Arendt (2005 [1969]: 44-45) aborda la creencia decimonónica en el progreso como una de las supersticiones más complejas de nuestra época. La noción de que existiera algo semejante a un progreso de la Humanidad en su totalidad era desconocida antes del siglo XVII, pero desde entonces cambió hasta transformarse en opinión corriente entre los hombres de letras del siglo XVIII y se convirtió en un dogma casi universalmente aceptado durante el siglo XIX. Pero la diferencia entre las primeras nociones del progreso y la de su última fase es decisiva. En el siglo XVII, representado especialmente por Pascal y Fontenelle, se pensaba en el progreso como en una acumulación de conocimientos a través de los siglos, mientras que en el siglo XVIII la palabra implicaba una "educación de la Humanidad". Así, el perfeccionamiento humano a través de la educación supone la posibilidad de mejoras futuras,

dotando a la noción de progreso de un nuevo sentido temporal (futuro concebido siempre como una mejora de la situación presente). A partir de este momento, el movimiento adquiere un significado central en la noción de progreso.

Arendt (2005: 41) hace referencia a una idea de Proudhon que ha resultado ser muy esclarecedora para analizar los discursos referentes a la exclusión social provenientes de los profesionales, esto es, para apreciar que a partir del siglo XIX es la propia idea del movimiento la que se vuelve esencial en el concepto de progreso. Este movimiento no tiene ni principio ni fin, y lo importante es el movimiento en sí. La autora sostiene que la perpetua continuidad del progreso tiene que ver con algunas de las ventajas asociadas a su “creencia”, pues ésta apunta a un *continuum* de tiempo lineal y un constante progreso en la Historia. De este modo, la tranquilizadora idea de que “sólo necesitamos marchar hacia el futuro” ofrece la posibilidad de explicar el pasado sin romper el *continuum* temporal y sirve también como guía de actuación en el futuro. Además, aporta la seguridad de que no puede suceder nada nuevo y totalmente inesperado, nada que no sean los resultados “necesarios” de lo que ya conocemos (Arendt, 2005: 43).

En congruencia con lo anterior, ante la pregunta *¿qué hacer con las personas en situación de exclusión social?*, es común que los profesionales hagan referencia a la idea de movimiento como elemento que garantiza “el avance” de estas personas. Así, parece que hubiese que “activar” a las personas en situación de exclusión social y que la consecución de movimiento fuese, en sí misma, condición para la integración social.

Porque la primera pregunta es “¿está usted conforme con su vida así?” Porque, además de dinero, qué más cosas quiere hacer, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es entrar en una dinámica de ver en qué medida uno está satisfecho, está a gusto. No está a gusto porque no tiene dinero pero algo más... Quiero decir, tienes que entrar en una dinámica de intervención, no en una dinámica de: “¿Qué es que pide usted?” o “Yo creo que usted, además del dinero, usted lo que tiene que hacer es un curso de jardinería”. “¿Pero tiene habilidades o intereses? ¿O está en esa...?” Porque a lo mejor lo que hay que mandarle es a un proyecto que le dinamice mínimamente o que le ayude a ver qué más tiene que hacer para encontrarse incómodo con la situación en la que está. No sé cómo decirte: activarle desde otra óptica. Que trabajen [en los proyectos de integración] mucho más procesos de desarrollo personal, procesos de habilidades muy básicas, de activación como ciudadanos de... (Entrevista a técnica de la CM, 50 años)

Igualmente, se considera que el movimiento hacia la “evolución” que está experimentando parte del colectivo gitano (especialmente las mujeres) es imparable.

En unas jornadas para presentar un libro con el resumen de un proyecto de varias ONG de promoción de la mujer gitana en abril 2008, hablan las representantes del Ayuntamiento para animar a las mujeres a que sigan formándose. La representante de la Mesa de Igualdad, Asunción Miura, conocida del movimiento feminista proigualdad de Madrid, dice algo así como “Las mujeres gitanas habéis entrado en un camino que no tiene marcha atrás. Gitanas o payas somos mujeres que tenemos que ir hombro con hombro”. La directora de una ONG añade, “Queremos que os insertéis, no podemos poner os un caramelo en la boca y luego quitároslo”. (Registro de campo: observación participante en la presentación del libro *Artemisas*, abril 2008).

A este respecto, en los discursos de los profesionales se detecta una diferencia sobre qué pedir a las personas excluidas. En cuanto a aquellas que se consideran realmente necesitadas e incapacitadas para insertarse a través del mercado laboral y que no cuestionan los valores de autonomía, formación y empleo que los profesionales quieren que hagan suyos, no importa que “no hagan nada” o que únicamente asistan de vez en cuando a alguna actividad para la inserción social. En estos casos, basta con la participación social; apareciendo la idea de que ésta es el medio para la cohesión social y la configuración de los sujetos excluidos como ciudadanos. De este modo, el trabajo de las ONG consiste en construir para “su clientela” espacios de sociabilidad diferentes de aquellos en los que vive para hacer soportable una cotidianidad desesperante (Castel, 1997: 437). En términos de Berger y Luckman (1989, en Castel 1997: 437), se puede decir que este tipo de actividades de inserción intenta una “socialización secundaria” consistente en “vincular al individuo con un submundo institucional o basado en instituciones”. En cambio, a las personas excluidas a las que no se percibe como física o psíquicamente incapacitadas para acceder al empleo, se les pide que se conduzcan como sujetos autónomos y que construyan, en términos reflexivos y con apoyo profesional, un proyecto personal y profesional, un “itinerario de vida”. De esta manera, se cumple la “matriz contractual” señalada por Castel (1997: 474) a partir de su análisis de las políticas de inserción en Francia, según la cual a los individuos más desestabilizados se les exige que se comporten de un modo improbable incluso entre “población normalizada” (cual es hacerlo como “sujetos autónomos”). En el contexto español, la Fundación Luis Vives (2008), en un texto de síntesis de varios encuentros profesionales, indica que se suele acabar “desprotegiendo”, a través de la demanda de contraprestaciones, a quienes están menos preparados para incorporarse socio-laboralmente.

Por otra parte, con los usuarios de la RMI “que pueden” pero no demuestran tener la voluntad para trabajar o para establecer el mencionado proyecto vital de ascenso social, se despliegan las estrategias profesionales más insistentes para promover que “hagan algo”. En relación con ello, algunos autores han sugerido que la incomodidad que sienten los profesionales con respecto a estos usuarios “problemáticos” responde a una toma de conciencia de la inexistencia de actividades orientadas a la integración que sean adecuadas para ellos, revelando las carencias de los Servicios Sociales (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1993: 137-138).

Es que la definición de exclusión es compleja. O sea, yo creo que en estos casos [población gitana] no es la exclusión del que no puede, sino del que se encuentra incapacitado para aprovechar oportunidades. ¿Sabes lo que pasa? Que tú trabajas con otra gente y dices: “Este tío está en la puta calle [sin techo] y este otro tío [gitano] está desaprovechando las oportunidades

que tiene y que desde el sistema se le brindan.” (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

Por el camino, las nociones de integración, de inserción, de incorporación y/o de inclusión social aparecen sin definir, sustituyéndose las unas a las otras y siendo difícil encontrar estudios que reflexionen sobre los matices diferenciales que introducen estas expresiones (Renes y Lorenzo, 2007: 19)⁹⁷. En esta línea, autores como Autès (2004: 20) y Agudo (2009: 91) advierten que nuevas categorías de la acción pública han penetrado desde hace algunos años en las políticas sociales, entre ellas las de inserción o participación. Y Martínez Román (2001: 76), después de realizar una revisión bibliográfica para ver el sentido y la utilización de los términos “integración” e “inserción”, señala que aunque se usan indistintamente como si fueran sinónimos, hay una preferencia por el de “inserción”:

A causa de la existencia de un rechazo del término “integración”, adjudicándole connotaciones negativas relacionadas con tentativas de asimilación y homogeneización de las personas con dificultades a partir de un cierto modelo implícito basado en la población considerada ‘normal’ (Martínez Román, 2001: 76).

Esta puede ser una de las razones por las que, en algunos textos como el de Renes y Lorenzo (2007), se opta por sustituir la palabra integración, indistintamente, por las de inclusión, incorporación o inserción. Por su lado, Demazière y Dubar (1997) se refieren al “bricolaje intelectual” que supone la noción de inserción, y Zamanillo (2004: 61) sostiene que los trabajadores sociales de Servicios Sociales han de ampliar y matizar el concepto que utilizan de integración. Para Murard (2004: 108), este término si bien no aporta gran cosa en el plano teórico, sí permite interpelar a los trabajadores sociales, quienes deben favorecer “la inserción social” en detrimento de la “inserción profesional”, promoviendo una “economía solidaria” que permita no solamente integrar a los excluidos sino también ofrecer una alternativa al mercado⁹⁸. En los programas de rentas mínimas, la inserción aparece siempre asociada a la participación en distintas actividades que se supone que sirven para integrar a los beneficiarios de prestaciones sociales como la RMI. Así, es común la utilización del término inserción como parte del acervo profesional “técnico” o “experto”, haciendo referencia a un paso necesario en el camino hacia la integración, tal como se ha indicado ya antes (ver p.151). Aparece de forma implícita una suerte de esquema evolutivo, según el cual se comenzaría por encontrar empleo (inserción laboral) y se terminaría por estar “integrado” socialmente.

⁹⁷ En el “Documento provisional para debate 1. Cuestiones y retos claves en la inclusión social”, elaborado por Renes y Lorenzo (2007) para la Fundación Luis Vives y financiado por la Comisión Europea a través del Programa Comunitario de Acción para Combatir la Exclusión Social 2002-2006, se puede ver una combinación interesante de los términos inclusión, incorporación e integración social, sin que aparezca algún matiz que permita diferenciarlos.

⁹⁸ Traducción propia de los términos usados por el autor. Se detecta un paralelismo entre el desdoble de la categoría de inserción (entre inserción profesional e inserción social) y la distinción realizada por Arendt (1958) entre trabajo y obra.

Por otro lado, encontramos una división de los usuarios de los programas de rentas mínimas basada en las expectativas se tienen de sus capacidades. Los “empleables” son redirigidos a actividades formativas conducentes a la incorporación al mercado laboral; y con los casos “perdidos” (para la “verdadera integración”, que se consigue a través de la inserción laboral) se busca trabajar sus habilidades sociales en la línea de grupos de autoayuda o de establecimiento de relaciones sociales que suban la “autoestima” (de manera congruente con la lógica de la activación). Como ya se indicó, Martínez Román (2001: 78) se pregunta si esta concepción de la inserción no ha generado una segunda categoría de ciudadanos: la de aquellos no empleables para los que, por ello, se idean diferentes “dispositivos de inserción” a fin de mantenerlos ocupados.

Así, debido a que los profesionales de Servicios Sociales estiman que los gitanos tienen capacidades suficientes para que, con esfuerzo, tesón y motivación, puedan formarse e integrarse al mercado laboral formal, no son considerados como candidatos adecuados para las actividades vinculadas al ocio o al establecimiento de relaciones sociales, dirigidas principalmente a los colectivos “no empleables”⁹⁹. La “falta de motivación” del colectivo gitano o su negativa a participar en ciertas acciones propuestas por los profesionales son interpretadas por éstos como afrentas al criterio profesional y como rechazos a su integración, de ahí la representación del gitano –que se cuele por todos lados– como resistente al cambio, poco motivado, que utiliza los recursos y las ayudas que le interesan sin dar mucho a cambio.

3.2 La importancia del “hacer algo” como constitutivo del sujeto racional moderno

La labor de los profesionales, como ya se ha adelantado, pasa por ayudar a que se movilicen las capacidades de los sujetos. De este modo, la RMI parte de la idea de que la participación de éstos es necesaria para que la intervención social sea efectiva, de ahí que se sugiera en la ley de la RMI y en su decreto regulador que la elaboración del Programa Individual de Inserción ha de ser consensuada entre profesionales y usuarios de la prestación.

A pesar de las diferencias que muestran en otros aspectos, todos los profesionales entrevistados coinciden en dar gran importancia al hecho de que el sujeto excluido “se mueva” y “haga algo” como solución o mitigación de su situación de exclusión, de modo que

⁹⁹ Si bien los cursos a los que asisten las mujeres gitanas suelen estar legitimados, por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales, como actividades que promueven la participación social en un cierto sentido, esto es, como rutinas de socialización que generan “red social”, los profesores de dichos cursos consideran que las mujeres han de mejorar su nivel lecto-escritor y aprender unos “mínimos” (como hacer un curriculum vitae o utilizar tranquilamente las instituciones públicas siguiendo sus normas internas) de cara a buscar un empleo. De este modo, se comportan como si estos cursos fuesen un paso previo a la inserción laboral.

les incomoda “el estatismo” de algunos beneficiarios de la RMI –entre ellos, los gitanos–, quienes no se entusiasman con la idea de tener que construir en esos términos un proyecto individual de cambio. A este respecto, se puede sugerir como hipótesis que los profesionales comparten una creencia sobre el sujeto como actor libre de su destino, que va acompañada del enaltecimiento de valores como la disciplina, la autonomía, el esfuerzo, el ascetismo, la educación reglada, a la vez que de la percepción/asunción de que la racionalización y la planificación (con lo que estos procesos conllevan de internalización y control del tiempo) son elementos básicos para la “integración” del sujeto a la sociedad. La capacidad de los profesionales para lograr que los perceptores de la RMI se movilicen dota de reconocimiento y legitimidad a su labor profesional.

Nos encontramos de nuevo con la individualización de la cuestión social y el resurgimiento de una evaluación de comportamientos individuales cuando las instituciones se hacen cargo de las situaciones de vulnerabilidad (Rosanvallon, 1995). Con todo, la conminación a la autonomía de los usuarios de los programas de la RMI por parte de las instituciones sociales es paradójica, por un lado, porque los primeros son materialmente incapaces de responder al mandato de ser autónomos y, por otro, porque la interiorización de las normas que manejan esas instituciones con respecto a la autonomía puede llevar a los sujetos a desvalorizarse a sí mismos y volver a entrar en una forma de dependencia. Para Duvoux (2009: 15), el mandato o conminación a la autonomía¹⁰⁰ pone el acento sobre el reconocimiento de la singularidad del individuo, del que se espera que reflexione sobre su conducta en los mismos términos que lo hace el profesional y que se anime voluntariamente, con asesoría profesional, a “moverse” por su propio pie. Así, –concluye– el mandato a la autonomía está implícito en las políticas de inserción (2009: 17).

Una interpretación plausible de la frecuencia con la que aparece la idea de movimiento en los discursos profesionales proviene de Van Zanten (2007: 250), quien afirma que las personas de clase media y alta, entre las que se encontrarían los trabajadores/as sociales, son más propensas a adoptar una posición distanciada, informada, estratégica y políticamente consciente con respecto a su experiencia social, a la vez que tienden a concebirse a sí mismas como poseedoras de capacidades estratégicas, autoras de su propia vida y capaces de luchar contra las presiones sociales y de alterar el rumbo de las experiencias individuales. Esta autora relaciona la generalización contemporánea de la reflexividad, por un lado, con el aumento del conocimiento y de la penetración de la ciencia en los dispositivos de control ideológico y, por

¹⁰⁰ El término que utiliza el autor, en francés, es “injonction à l'autonomie”.

otro, con el aumento de la percepción social de los riesgos (sociales e individuales) a raíz de la desaparición de las certezas científicas, tecnológicas y sociales que caracterizaban a la sociedad industrial (Beck, Giddens y Lash, 1994; Beck, 1998). Las clases medias y altas están más familiarizadas con los conocimientos que producen las ciencias sociales, son también aquellas que creen en el conocimiento como elemento del progreso social, han mantenido una relación más estrecha con los dispositivos de control ideológico, sobre todo con los dependientes del Estado (la escuela, las industrias culturales, el sector del trabajo social), y las que se atribuyen a sí mismas un papel central en la sociedad debido a su posesión de un elevado capital cultural (Monjardet, 1984, en Van Zanten 2001: 251). Esto las hace ser más sensibles que otras clases sociales a los riesgos y a las consecuencias sociales de su propia acción y de la acción de las instituciones en las que participan.

Autores como Petersen (1997: 190-191) recuerdan las críticas hechas por algunos investigadores sociales (Lash y Urry 1994: 38-46, en Petersen 1997) al concepto de actor racional como dueño de su propia biografía de acuerdo a cálculos de riesgo y oportunidad, que desarrollan Giddens y Beck, así como a la idea de modernidad manejada por éstos, y echan en falta un análisis del rol que desempeñan los expertos en la administración de poblaciones y en la regulación de la identidad personal (Castel 1991: 281-298, en Petersen 1997: 192). En este sentido, en los discursos de profesionales entrevistados aparece una hipervalorización del sujeto auto-reflexivo y autónomo, de ahí que algunos de ellos consideren que su labor pasa por ayudar a la persona a que ella misma cuestione –en términos reflexivos– sus circunstancias.

Díaz de Rada (2005), pensando en la escuela, asegura que en la base del impulso universalista de las instituciones burocráticas se encuentra una visión instrumental de la enseñanza, que parte de una idea utilitaria de que la educación (o, en este caso, la intervención social) es un medio que los sujetos usan para cumplir con fines racionalmente definidos y universalmente reconocidos. El problema surge cuando los profesionales se encuentran con *usuarios* que no analizan sus conductas en términos racionales, y que no expresan o muestran interés por participar en las actividades de inserción que ofrecen las instituciones, bloqueando así las posibilidades de trabajo profesional dado que éste –como se ha dicho más atrás– necesita del compromiso del sujeto excluido como elemento básico para comenzar la intervención social (o lo que es lo mismo, para poder “consensuar” el PII).

Los trabajadores sociales que mantienen una concepción del sujeto como actor racional, libre de constricciones sociales, son los que entienden que las políticas sociales están justificadas en los casos de personas extremadamente necesitadas mientras que, para el resto,

son los valores del trabajo, el esfuerzo y la autonomía los que garantizan la cohesión social. Así, critican a quienes dependen de prestaciones económicas del Estado y cuestionan, apelando a principios liberales, la “dependencia” que ocasionan esas prestaciones y su efecto de restar iniciativa a los individuos (Juan, 2008; Burchell, 1993; Gordon, 1991; Rose, 1993, en Petersen, 1997: 193). Según Rose (1993, en Petersen 1997: 194), la racionalidad neoliberal ensalza al individuo emprendedor, dotado de libertad y autonomía, y la capacidad de cuidarse adecuadamente a sí mismo. También López Varas (1995), refiriéndose al contexto madrileño, sostiene que la clase media critica que el gobierno sea demasiado permisivo con las capas marginalizadas de la sociedad y particularmente con los gitanos.

En concordancia con estas ideas, algunos profesionales –como se ha apuntado antes– están en contra de las medidas de acción positiva para los más excluidos, y afirman que los mismos derechos y obligaciones deberían corresponder “a todo el mundo”. De este modo, asumen la filosofía de un ascenso meritocrático y paulatino a través del trabajo, el ahorro y el sacrificio que caracteriza la moral de las clases medias (López Varas, 1995: 74). Consecuentemente, los gitanos perceptores de la RMI con una larga historia de contacto con los Servicios Sociales son descritos como sujetos “cronificados”, tal como también se ha indicado, dejándose traslucir así una visión negativa de las políticas sociales redistributivas (Juan, 2008: 107).

La renta mínima se puede suspender si no cumplen el PII; hay gente que sí que cumple por la necesidad o por la personalidad, y otros que lo ven como una forma de cronificarse en el tiempo. (Entrevista a técnico de la CM, 37 años)

Los profesionales califican de conflictivas las relaciones que mantienen con las personas que se relacionan de una manera diferente con el conocimiento y con el mundo, relativizando así su forma de hacerlo; personas que no dotan de sentido a su experiencia en términos racionalizadores y reflexivos y que no creen en la educación y en el empleo como mecanismos de ascenso social. Estas personas, entre las que se encuentran los miembros del colectivo gitano beneficiarios de la RMI, son penalizadas de un modo persistente sea recordándoles sutilmente que se salen de la norma sea diciéndoles abiertamente que sus comportamientos y actitudes son errados, de manera que se aplica con ellas la metodología de intervención social más severa como, por ejemplo, el uso de amenazas sobre la posibilidad de suspender el cobro de la prestación económica a fin de forzar su participación en las actividades que se les destinan, tal como se detallará en el capítulo séptimo.

Aparece, entonces, una ambigüedad esencial que recorre los discursos de todos los profesionales entrevistados: que queriendo establecer una relación de ayuda con las personas

perceptoras de la RMI no cuentan con los medios para entender como válidas formas de concebir la exclusión social y el mundo de la intervención social diferentes a las suyas, ni para aceptar, sin caer en su estigmatización, que determinadas personas tienen contextos socio-históricos, económicos y culturales que dan sentido a su falta de “voluntad” o a su “incapacidad” para proyectar un cambio de posición social. Por otra parte, la falta de herramientas con que cuentan para “motivar” al colectivo gitano se expresa en informes técnicos que categorizan negativamente las características socio-culturales del mismo, naturalizando así su exclusión social y reificando las representaciones que manejan sobre él basadas en su “cultura” (Mosse, 2006: 953, nota a pie) y en su particular “idiosincrasia”.

Hay que tener en cuenta, por último, que los perceptores de la RMI gitanos que están en peores condiciones socioeconómicas no elaboran relatos sobre su vida basados en la esperanza del futuro que vendrá (momento en el cual todo “se arreglaría”). En cambio, los gitanos de clase media-baja suelen hablar desde lo que Murard (2004) denomina “fatalismo cultural”, y sus relatos aluden a un momento futuro en el que la “salvación” vendrá, organizándose alrededor de la espera de las distintas ayudas sociales que supuestamente les llegarán.

Las ayudas no crean una dependencia, dado que ésta existe ya. Son las modalidades de implicación que determinan la manera en la cual la ayuda se recibe (Nicole-Drancourt, 1991, en Murard, 2004: 111¹⁰¹).

Este es el mundo vivido de los excluidos, que se organiza en torno a la idea de obtener un lugar social gracias a la intervención de alguien del entorno: es el universo de la providencia. En definitiva, el lenguaje de la autonomía no es un elemento que dé sentido a sus discursos, aspecto que se tratará más detenidamente en el capítulo octavo.

3.3 El lenguaje de la autonomía en el ámbito de la intervención socio-educativa

En los foros de encuentro profesional, como es la ya referida Comisión de Población Excluida (CPE) de Villa de Vallecas, prima en la actualidad un lenguaje que opone la exclusión social a la autonomía personal, entendida ésta como el conjunto de habilidades sociales suficientes para desenvolverse en el mar de burocracia, gestiones y profesionales varios con el que los excluidos tienen que lidiar para solicitar cualquier prestación.

En junio 2010 me encontraba presente en una reunión de la mencionada Comisión en la que algunos miembros del “centro especial” para gitanos rumanos de Cruz Roja estaban presentes. En ella, representantes del EIPe (Equipo de Intervención en Población Excluida) contaron que para

¹⁰¹ Traducción propia.

cualquier gestión se necesitaba que la gente estuviese empadronada, a la vez que se precisaba apoyo profesional para hacerlo puesto que la población no iba a salir de sus chabolas para ello. Uno de los miembros de Cruz Roja manifestó estar preocupado por la duplicación de las acciones realizadas por distintas organizaciones allí presentes, y el otro añadió que “lo que hay que hacer es fomentar que (los excluidos) sean autónomos”. Acto seguido, su compañero completó la frase diciendo: “Otra cosa es que ellos no quieran”. Una monja que también participaba en la reunión, de unos 60 años, voluntaria de la Iglesia Santo Domingo de la Calzada, expresó que estaban teniendo muchos problemas para “concienciarles”, refiriéndose a los gitanos rumanos del Gallinero, asentamiento chabolista de Cañada Real. Ante su comentario, otra de las voluntarias de la misma parroquia afirmó con voz apesadumbrada: “Sacamos citas para que vengan a informarse de los trámites de empadronamiento ¡y no vienen!”. Declaró que hasta habían ido a las chabolas a decirles que fueran con ellas a informarse del padrón y que no lo habían conseguido, agregando que debía de ser porque “no les interesa”. Ante estas insinuaciones de falta de voluntad por parte de los gitanos del Gallinero, el médico que coordina estos encuentros expuso que un dilema clásico entre ellos, que había surgido históricamente una y otra vez, era el alusivo a los efectos que las distintas actuaciones profesionales tienen en las poblaciones-diana, y concluyó preguntándose: “¿Estamos haciendo a la gente más o menos autónoma?”. La médico del EIPE, también presente en la reunión, que trabajaba en un autobús itinerante por Cañada Real realizando curas y procedimientos sanitarios de emergencia, expresó que sí que había una cierta sensación por parte de los miembros del EIPE de que la población “les estaba usando”, pero matizó a continuación: “Pero para eso estamos y, además, no podemos pretender que todos los seres humanos tengan las mismas motivaciones”. Ésta ha sido la única vez, tras años de participar en estas reuniones, en que he visto que alguien ha intentado ampliar el horizonte hegemónico de la autonomía como valor. Ante los comentarios de esta médico, uno de los miembros de Cruz Roja, con actitud inquisitorial, rebatió su opinión afirmando que algunos gitanos rumanos vienen “de pedir ayudas sociales en Inglaterra” y que, si eran capaces de hacer eso, eran capaces de gestionar su inscripción en el padrón municipal. La directora de una asociación que trabaja con magrebíes y gitanas comentó con tono meloso: “¡Ay!, déjame que lleve de la mano un poco a las marroquíes (a empadronarse), que no tienen habilidades sociales.” (Registro de campo: observación participante en una reunión de la Comisión de Población Excluida, junio 2008).

He traído a colación este registro de campo para ejemplificar el individualismo que impera en la intervención social con colectivos en situación de exclusión social, que está sirviendo para estigmatizar todavía más a quienes ya de por sí se encuentran en posiciones sociales bastante infravaloradas. Murard (2003) señala que la autonomía, como ideal emancipador, ha adquirido una dimensión normativa que puede ser sumamente destructiva desde el momento en que las condiciones sociales o la falta de oportunidades no permiten su realización. La autonomía, entendida como aptitud reflexiva, deviene en capacidad de decidir en los conflictos de reglas y de interpretación que constituyen la vida social ordinaria. Pero “este ideal puede también devenir una norma: ¡sea autónomo!¹⁰²” (Murard, 2003:101-102).

El individualismo se ha vuelto un valor en la sociedad actual, colonizando el mundo de la intervención social y desplazando las reflexiones “sobre las condiciones de posibilidad que se requieren para ser un individuo” (Castel, 2004: 85).

Todos nosotros somos herederos de un discurso que data del siglo XVIII y según el cual la individualidad es una cosa positiva, discurso lanzado por el liberalismo, que era el progresismo de la época. ¿Qué es un individuo? Un ser emprendedor, libre y autónomo que construye su identidad contra las coacciones, contra la tradición, contra el absolutismo político (Castel, 2004: 85)

¹⁰² Traducción propia.

De ello se deriva una paradoja que también se refleja en el caso recogido en el registro de campo recién expuesto. Los profesionales se sienten utilizados y sospechan que pueden estar fomentando “la dependencia” de los gitanos usuarios de la RMI, a la vez que aspiran a sentirse útiles diciéndoles qué rutas han de seguir para conseguir ser autónomos (ante todo, empadronarse), lo cual implica que éstos reconozcan a los profesionales como interlocutores válidos (con autoridad suficiente para asesorar), con lo que pierden, en cierto sentido, su capacidad de autonomía. Los profesionales que trabajan en la arena de la intervención social con personas consideradas excluidas, por lo general, se resisten a establecer con ellos una relación de heteronomía (de fuerte dependencia) que, por otro lado, es necesaria para relacionarse con los sujetos a los que quieren asistir. En esta línea, Murard (2000: 106) considera que en la experiencia de la exclusión hay dos polos: el de la desafiliación, de la ruptura o de la pérdida de lazos sociales, y el de la dependencia, de la heteronomía, siendo ésta definida como el hecho de estar determinado por los otros, de estar a cargo de las instituciones y/o de la familia. Podríamos decir que los gitanos son percibidos como situados en una zona límbica que no permite considerarlos ni totalmente excluidos ni suficientemente autónomos como para no depender de las instituciones. Esta es una de las razones por las que los profesionales se resisten intervenir con ellos siguiendo estrategias que tienen reservadas para los sujetos que consideran gravemente excluidos, esto es, sin autonomía para solucionar su supervivencia en el día a día.

En todo caso, cuando los profesionales hablan de la autonomía se les olvida pensar en las habilidades reflexivas y cognitivas, en “las actitudes, en el saber estar” (Murard, 2000: 109) que hacen falta para entrar tanto en el mundo laboral como en el mundo de los procedimientos burocráticos a los que remiten continuamente a los sujetos en posiciones sociales más vulnerables. En definitiva, no reparan en que todo ello “no está dado”, sino que se construye en unas condiciones económicas, sociales, ideológicas, etc. que no son precisamente las propias de estos sujetos. Identifican la autonomía con una cuestión relativa a la reflexividad individual, a la voluntad personal, en el sentido de tesón, de capacidad de esfuerzo para superar desavenencias y para establecer un “plan” –recuérdese el nombre del actual contrato de inserción: programa individual de inserción– para salir de su situación actual, en la línea de un programa o proyecto vital. Es lo que se llama “inclusión activa” (René y Lorenzo, 2007: 24), que hace hincapié en que el acceso a las prestaciones depende estrictamente de la “voluntad de trabajar”, de manera que, de no darse ésta, se restringe el acceso a las mismas. Autores como Jover (2007), hablando sobre la sociedad contemporánea

en general, sostienen que se nos ha hecho creer que el problema del paro, por ejemplo, y su solución son cuestiones individuales que residen en la motivación de cada cual. Por ello, las políticas de empleo y formación se orientan sobre todo a cualificar técnicamente y a motivar psicológicamente a los desempleados para que luchen y sobrevivan en la “selva” del mercado de trabajo. Neyrand (2004: 3), por su parte, asegura que bajo el individualismo imperante en nuestra sociedad, el ciudadano autónomo se construye como aquel que es libre y está en condiciones de igualdad con otros ciudadanos.

Los profesionales que participan en la reunión de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas reseñada más atrás asumen que los gitanos rumanos con los que intervienen no realizan los trámites para solicitar el empadronamiento, documentación que les podría servir para demandar la RMI, debido a que no son conscientes de los beneficios que ello les reportaría, dejando traslucir la idea de que todo ser humano “libre” haría un cálculo estratégico (en este caso, las gestiones para demandar la RMI) para poder sortear las circunstancias a las que se enfrenta. Encontramos también en este ejemplo algo que Pattaroni (2005) considera propio de las relaciones que se establecen entre los profesionales de la intervención social y sus “clientes”, esto es, que los primeros buscan frecuentemente encontrar un punto medio entre la cercanía que valoran oportuna para ayudar y la distancia que estiman necesaria para no generar excesiva dependencia en “el otro” excluido como consecuencia de su asesoramiento profesional. En este ejemplo vemos que únicamente la paternalista¹⁰³ interpretación de la directora de una ONG alusiva a la “falta de habilidades” de las mujeres magrebíes le permite justificar las acciones de acompañamiento social que está realizando con esta población, que cataloga con la expresión “llevarlas de la mano”. Las mujeres magrebíes, de este modo, son representadas como merecedoras de la compasión de los profesionales y, al estar “realmente excluidas”, también de medidas de acción positiva o de trato diferencial, a diferencia de lo que suele suceder con las mujeres gitanas, con respecto a las cuales, al ser consideradas lo suficientemente autónomas o con capacidad para serlo, no está legitimado el que se las acompañe para realizar trámites burocráticos, tal como se ha visto a través de un caso expuesto más atrás. En lo que se refiere a estas últimas, se entiende que si no llevan a cabo esos trámites es porque “no quieren” o por las constricciones de vivir en un régimen familiar considerado “patriarcal”.

¹⁰³ ¿O es maternalista por tratarse, en este caso, de una relación entre mujeres?

3.4 *Recapitulación*

En este capítulo se ha mostrado cómo el discurso neoliberal, centrado en la creencia en el actor libre que, de manera reflexiva y planificada, decide el curso de su vida, ha calado en los profesionales del ámbito de la intervención social. De este modo, a los sujetos que no son considerados como “verdaderamente excluidos” se les conmina a ser autónomos, a moverse, a decidir con los profesionales cuál debe ser su trayectoria vital y qué van a hacer para superar su situación presente. Los beneficiarios de la RMI que no se piensan a sí mismos en estos términos, como es el caso de los gitanos de clase baja y media-baja), son calificados como dependientes o crónicos, calificando así carencialmente su “no-deseo de cambio”.

De manera general, se puede decir que los profesionales que trabajan en este terreno no suelen de plantearse que la idea de autonomía que manejan conlleva una serie de habilidades reflexivas y cognitivas, unas actitudes y una forma de estar en el mundo, que difícilmente pueden desplegar los sujetos que se encuentran en posiciones sociales vulnerables. Olvidan, por último, que el deseo se construye en unas condiciones socio-económicas, históricas y socio-culturales determinadas que, en lo que se refiere al “deseo de cambio” y, por tanto, al caso que se ha tratado en este capítulo, no son precisamente aquellas en que viven esos sujetos.

Capítulo 4: Lo gitano como categoría – problema de la intervención social

En este contexto de enaltecimiento de los valores de la libertad y la autonomía del sujeto racional moderno, los miembros del colectivo gitano que no comparten dichos valores y que no muestran, por un lado, que están “necesitados” (en el sentido de un cuerpo visiblemente sufriente) y, por otro, que no se esfuerzan “por salir” de su situación, no son considerados como perceptores legítimos de la RMI –tal como se ha visto en el anterior capítulo– ni de otras prestaciones sociales.

La imagen negativa del colectivo gitano coincide, además, con un panorama internacional propicio a actuaciones políticas tendentes a deportar a los gitanos inmigrantes que residen en asentamientos fuera de su país de origen. Deportaciones que han marcado el verano de 2010 y que sirven para intuir que se está estableciendo una tendencia internacional, al menos en Europa, proclive a la vigilancia y expulsión de los gitanos inmigrantes, vinculados en los medios de comunicación durante agosto 2010 con la delincuencia, la inmigración salvaje, la inseguridad y la violencia.

4.1 Las deportaciones de gitanos en Francia y en España

Agosto de 2010 es un momento clave para el esclarecimiento de algunas actitudes de la población general con respecto a las personas gitanas inmigrantes. En Francia se produjeron expulsiones de gitanos rumanos asentados en campamentos de caravanas; expulsiones que, como se descubrió, habían sido orquestadas a nivel político por el gobierno francés, que catalogó a los gitanos rumanos como “objetivo prioritario en la política de expulsión de inmigrantes problemáticos” (diario *El Mundo*, 14 septiembre de 2010: 27) y estableció, en una circular de carácter interno, un cupo de gitanos que habían de ser expulsados, lo que animó a actuaciones similares de otros países europeos, como Italia o España (diario *Público*, 22 de agosto de 2010: 8).

Si bien París se vio obligada a retirar la circular, calificada de racista por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivian Reding, así como por asociaciones católicas y por diversas ONG que intervienen con el colectivo gitano a nivel europeo (diario *Público*, 22 de agosto de 2010: 40; 13 de septiembre de 2010: 13; 14 septiembre de 2010: 14), los debates parlamentarios de la Unión Europea (UE) mostraron el problema que entrañaba la condena

pública y oficial de este tipo de actuaciones¹⁰⁴, de modo que, por ejemplo, la mencionada vicepresidenta tuvo que disculparse públicamente por haber lamentado que en Europa se pudiera asistir a deportaciones similares a las de la II Guerra Mundial (diario *Público*, 16 septiembre de 2010: 9). El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a París a suspender las expulsiones al considerar que infringían las reglas referidas a la libertad de circulación. El gobierno llevaba 11.000 expulsados en el año 2009 y 8.300 en 2010 (diario *Público*, 12 septiembre de 2010: 15). El debate sobre el racismo o la “xenofobia de Estado” (Thibon, 2010: 7, en prensa) quedó finalmente opacado por la petición de disculpas de Reding, olvidándose la postura racista del gobierno francés y centrándose los jefes de Estado en “discusiones bizantinas e ingenuas” sobre la corrección de los comentarios de ésta (Martín Seco, 2010: 4, en prensa), para terminar legitimando las “moratorias” que el gobierno francés podía imponer al derecho de circulación rumano y búlgaro (diario *El País*, 19 agosto de 2010: 27, sección Vida & Artes). Los veintisiete jefes de gobiernos de la UE eludieron poner por escrito su crítica a la estrategia anti-delincuencia del gobierno francés, contra la que sí se pronunciaron la Eurocámara y el Comité Antidiscriminación de la ONU (diario *Público*, 17 septiembre de 2010: 1-2). También se habló de la falta de firmeza del presidente de la Comisión Europea, Barroso (diario *El País*, 8 septiembre de 2010: 2 y 26), que no condenó la actuación de Francia.

En los medios de comunicación, los gitanos han sido vinculados, al menos en agosto de 2010, con la delincuencia, la inmigración salvaje, la inseguridad y la violencia: “en definitiva, a lo que compone el conjunto de miedos y fantasmas de una sociedad en crisis” (Nair, 2010: 8). Hay quienes prevén brotes xenófobos, como ocurriera en Italia con la quema de cinco campamentos gitanos en Nápoles en mayo 2008 (diario *El País*, 15 mayo de 2008: 2), tras lo que este país dotó de poderes especiales a la policía contra los gitanos (diario *El País*, 30 mayo de 2008: 5) para afrontar lo que se denominó “emergencia gitana” (diario *El País*, 31 mayo de 2008: 3).

La rectificación (de Reding) me parece un error; en el fondo, el gesto de Sarkozy es muy parecido al de los nazis: en ambos casos se trata de aislar a un grupo étnico y convertirlo en el chivo expiatorio de los males comunes, alimentando las pulsiones racistas latentes en un país; así se empieza a crear una ficción de unidad étnica y nacional que, en medio de una crisis económica, protege ilusoriamente contra las incertidumbres de futuro. Claro está que el propósito final de Sarkozy (...) es asegurarse los votos de los simpatizantes del Frente Nacional que le llevaron a la presidencia en 2007 y que pueden mantenerle en ella en 2012, pero un político capaz de agitar la

104 Desde diversos medios de comunicación se asoció este tipo de medidas a la necesidad del gobierno francés de “ganar popularidad con la expulsión de los gitanos” rumanos y búlgaros (Vázquez, 2010: 7, en prensa; diario *El Mundo*, 12 septiembre de 2010: 15; Rosa, 2010: 8, en prensa) y desviar la atención de temas más importantes en el contexto nacional, como los recortes públicos (Thibon, 2010: 7).

nitroglicerina del racismo y la xenofobia ante las narices de su electorado para mantenerse en el poder es un político capaz de cualquier cosa (Cercas, 2010: 14, en prensa).

En la misma línea que el gobierno francés, el Ayuntamiento de Madrid y el de Motril (Granada), ambos del Partido Popular (PP), comienzan a pagar “el billete a casa a los desalojados rumanos” (diario *Público*, 19 noviembre de 2010: 38; 21 de noviembre de 2010: 34) como estrategia para forzar el retorno a su país de estos gitanos. Varias ONG han denunciado que lo que los Ayuntamientos denominan “retorno voluntario”, refiriéndose a lo anterior, es una “expulsión encubierta”. Sacerdotes y voluntarios de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de la Iglesia de Entrevías denunciaban públicamente, en noviembre de 2010, el “sadismo” de las autoridades españolas, que no daban dinero para poder sufragarse la vuelta y, en caso de no coger los expulsados los billetes de autobús (después de derribar sus chabolas), eran dejados a su suerte. También han sido recriminadas de manera recurrente las redadas policiales en asentamientos gitanos rumanos (diario *Público*, 5 noviembre de 2010: 32; 21 noviembre 2010: 34; diario *El País*, 5 noviembre de 2010: 1, sección Madrid), algunas de las cuales han ocasionado contusiones a adultos y a niños.

Durante la reunión de la Comisión de Población Excluida, los médicos del Equipo de Intervención en Población Excluida denuncian haber atendido a varias personas agredidas por la policía. Las personas atendidas narraron cómo entraron en sus terrenos disparando armas al aire y pidiéndoles las tarjetas de residencia. Las de aquellos que las tenían fueron cortadas con tijeras. La médica expresaba preocupada haber visto a un bebé con fuerte contusión en el cráneo por la actuación de un policía que pateó el carrito en el que el bebé estaba. Sostiene haber pedido a la familia que denuncie pero ésta está tan asustada que se niega a hacerlo. (Registro de campo: observación en reunión de la Comisión de Población Excluida, abril 2008)

La Iglesia Católica de base y grupos de voluntarios asociados a la misma han liderando las denuncias sobre las expulsiones y derribos de viviendas de gitanos rumanos en Madrid. La imagen de los gitanos en los medios de comunicación es siempre la del chabolismo y la ocupación ilegal de tierras, justificándose así cualquier actuación gubernamental en congruencia con las medidas tomadas en Francia en el marco de un uso electoralista de la crisis económica (diario *El País*, 19 de agosto de 2010: 27). Hay quienes señalan que, en comparación con otros países europeos, España es “el país que sale mejor parado”:

En 2008 Italia empezó a fichar a los habitantes de los campamentos de nómadas y a tomarles las huellas digitales. En Alemania, existe la orden de expulsar “por etapas” a unos 10.000 romaníes sin permiso de residencia. En Reino Unido, se proyecta la creación de una nueva figura delictiva que permitiría a los policías detener a quienes se nieguen a expulsar de sus tierras a los 200.000 *gypsies* que las ocupan de forma ilegal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a la República Checa por matricular obligatoriamente a niños gitanos en escuelas especiales para discapacitados mentales. Pese a las ayudas sociales de la UE, en 2008 la ONU reclamó a Atenas que tomara “medidas urgentes” para mejorar la “desesperada” situación de los gitanos. En Suecia, los gitanos son una minoría reconocida, pero el 80% de los adultos están en paro y la mayoría de los niños no acaba la educación primaria. El Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012, con un presupuesto de 107 millones de euros a lo largo de tres años, prevé

acciones en materia de educación, sanidad y vivienda, así como a favor de las mujeres, para los 800.000 gitanos que viven en el país (Muchnik, 2010: 29, en prensa).

Si bien el gobierno español es positivamente valorado en lo referido al gasto que dedica a políticas de inclusión para el colectivo gitano, a nivel de política autonómica, la Comunidad de Madrid ha sido cuestionada en los últimos tiempos con motivo de lo que algunos han denominado la creación de guetos escolares para minorías étnicas. Así, esta Comunidad, a pesar de las críticas hechas a las escuelas segregadas para gitanos que fueron establecidas por el IRIS durante la década de los 90 en los asentamientos chabolistas, financió en 2008 un proyecto educativo pre-escolar de Cruz Roja dirigido únicamente a gitanos rumanos de Cañada Real, quienes, en lugar de ser escolarizados en escuelas públicas madrileñas, eran llevados a las instalaciones particulares de Cruz Roja. Ello ha sido denunciado por la Iglesia Católica de base como una nueva guetización y evidencia una actuación política congruente con la segregación y el rechazo que el colectivo gitano está sufriendo a nivel europeo.

Lo expuesto hasta ahora pone de manifiesto el racismo y la xenofobia existentes, que han sido reforzados recientemente por el endurecimiento de las acciones políticas de algunos gobiernos de la UE que, al promover las expulsiones de gitanos de sus territorios, han dado pábulo a los procesos estigmatizadores hacia este colectivo que también se detectan, por ejemplo, en informes “técnicos” sobre la intervención social con el mismo; aspecto éste que será analizado en el siguiente apartado, en el que se abordará la construcción de estereotipos negativos sobre la “cultura gitana” precisamente en estos informes “técnicos”, sobre todo en los adoptan un enfoque socio-sanitario. Ello es muy significativo porque –como se verá en el capítulo noveno– en los proyectos de integración en los que participan gitanas beneficiarias de la RMI, se está haciendo especial hincapié en la temática de los hábitos saludables, en la promoción del cuidado de la salud, para lo cual se invita a menudo a personal sociosanitario para que, en los cursos desarrollados por las ONG a los que asisten esas beneficiarias, imparta charlas relacionadas con esa temática, a la vez que se las invita a visitar los centros sanitarios de Atención Primaria. En estas charlas y en estos informes “técnicos”, elaborados conjuntamente por profesionales de Servicios Sociales, de ONG y de centros de salud que trabajan con el colectivo gitano en Madrid, se movilizan sin solución de continuidad los prejuicios propios de ese racismo y de esa xenofobia de los que estamos hablando.

4.2 Lo socio-cultural como raíz del problema de los gitanos: cuando la discriminación y estigmatización proviene de informes técnico-profesionales.

Para enfocar este tema desde otra perspectiva, se tratarán ahora las definiciones de “cultura gitana” que emanan de esos informes “técnicos” o técnico-profesionales. En ellos proliferan las representaciones del colectivo gitano como carente o falto de: formación, información, esfuerzo, capacidad de sufrimiento, responsabilidad, capacidades parentales correctas, etc. Y, en algunos publicados recientemente (SaludMadrid, MadridSalud, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid *et al.*, 2006), se asocia a este colectivo con:

- el uso inadecuado de los recursos sanitarios (abuso de las urgencias, acudir fuera de horario),
- la falta de hábitos saludables (como la alimentación equilibrada),
- la falta de comprensión de los ritmos y procedimientos del sistema sanitario,
- la sobreprotección de los menores, relacionada ésta con la “falta de responsabilidad” en el cuidado de sus hijos.

Estos rasgos se atribuyen principalmente a “factores socioculturales”, construyéndose una imagen eminentemente negativa y carencial de lo gitano.

Las mujeres gitanas, debido a su propia idiosincrasia y particular concepto de salud, no acuden regularmente a las revisiones ginecológicas, ya que les da miedo y/o vergüenza asistir. Además, por su tradición cultural, los casamientos se dan entre adolescentes, con la obligación de la joven de demostrar su fertilidad lo antes posible. La maternidad en menores de edad conlleva cierta falta de responsabilidad, quedando el cuidado de los bebés delegado en las abuelas. El control de embarazos y el posterior seguimiento pediátrico en los bebés es muy complicado en esta población. En muchas ocasiones se consiguen resultados, utilizando la RMI como medida de presión para mejorar la adherencia a los controles y seguimientos previstos. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 12)

Dichos “factores socioculturales”, que son entendidos normalmente en términos de tradiciones, creencias y religión (es decir, según una concepción repertorial y reificante de lo socio-cultural, próxima a la definición clásica de Tylor, 1871), son los que, desde este punto de vista, determinan los comportamientos “erróneos” del colectivo. La cultura aparece casi como un lastre, un elemento que perjudica a los sujetos y que los enmarca en el “atraso” y en la “tradición”, homologada ésta a las creencias infundadas. De este modo, no contempla ningún elemento empoderador o positivo en las variables culturales.

Los hábitos de higiene, en general, no suelen ser los más adecuados, aunque varían mucho entre los distintos grupos y zonas de los asentamientos. Estos hábitos suelen estar determinados por factores socioculturales (tradiciones, creencias, religión, etc.), por los recursos que ofrece la vivienda (...), y por los factores personales (en muchas ocasiones, la higiene no es considerada como una necesidad de primer orden para esta población). (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 20)

La imagen que los profesionales construyen de sí mismos se vincula, por el contrario, a la racionalidad científica (conocimientos “correctos”), erigiéndose así como personas legitimadas para “educar” y demandar un cambio de prácticas y de modo de vida, todo ello dentro de un discurso que da por sentadas las “buenas intenciones” de la intervención social. De este modo, nos encontramos con una tensión inherente a la construcción, por un lado, del colectivo en términos negativos y, por otro, de los profesionales en términos positivos¹⁰⁵.

El “problema gitano” se configuraba en los años 90, además de por su falta de acceso a la sanidad y a la escolarización, por sus hábitos de conducta problemáticos o desviados (Perales, 1991: 212-213), todo ello dentro del marco teórico de la marginación (Trigueros, 1995: 81-82, 99). No estando ya de moda este marco teórico, en los informes técnicos sobre el colectivo gitano que se están produciendo actualmente, el énfasis principal se pone en caracterizar a las familias gitanas excluidas por su “falta de motivación” para el cambio y en enumerar los comportamientos no “normalizados” de éstas en lo que se refiere al acceso al sistema sanitario y a la institución escolar. Así, se realizan recomendaciones que legitiman la intervención profesional (para informar, por ejemplo, sobre el uso “normalizado” de los recursos sanitarios y escolares) en el área de la promoción de la salud (dirigidas a recomendar el cambio de sus hábitos, principalmente los referidos a alimentación, la salud reproductiva, etc.). Se asume, por otra parte, la reproducción intergeneracional de la pobreza, que justifica la intervención social con los grupos más jóvenes de la población (que, en caso contrario, imitarían las conductas de sus progenitores). A su vez, en varios informes (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006; ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010), se vincula el colectivo gitano con el maltrato de género, la falta de responsabilidad en la educación de los hijos, el mal uso de los recursos y la excesiva permisividad. La intensidad de las acusaciones que se lanzan al colectivo gitano (como la naturalización de la violencia de género en los varones) contrasta con la falta de datos en los que se apoyan dichas aseveraciones.

En relación con este tema [los malos tratos], no existen registros con datos cuantitativos. Hay sospechas de casos de violencia doméstica, resultando muy difícil la intervención, ya que culturalmente este hecho es asumido como parte de la relación con la pareja y apoyado por la familia extensa. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 25)

¹⁰⁵ Gullestad (2007) ha analizado cómo la ideología de la cooperación al desarrollo está relacionada con la percepción de los “receptores” de ayuda al desarrollo dentro del imaginario del atraso y la irracionalidad, y cómo los profesionales de la cooperación se definen a sí mismos como aquellas personas encargadas de “educar” o “salvar” a dichas personas. La capacidad de acción/movilización que se le asigna a dichas personas es básicamente nula.

Los informes “técnicos”, principalmente el ya citado de SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros (2006), han dejado de ser lugares de análisis sociológico para convertirse en lugares de recopilación de las opiniones de los profesionales que representan a las diversas instituciones que participan en ellos. Se centran, así, en enumerar los defectos o los comportamientos tenidos por erróneos de la población (a lo que se llama “diagnosticar”) y en realizar listas de recomendaciones para acciones futuras. Por su parte, los puntos de vista de los excluidos sobre las distintas intervenciones sociales de las que son objeto no se incluyen en las evaluaciones de éstas, como tampoco se contempla en ellas un análisis a fondo de las distintas organizaciones que las ponen en marcha, por lo que es impensable encontrar crítica alguna de las actuaciones (o falta de actuaciones) que llevan a cabo. Desaparece, de este modo, cualquier posibilidad de dar cuenta de los comportamientos supuestamente erróneos que se mencionan, convirtiéndose los informes, como se ha resaltado, en compendios de las opiniones de los autores. En ellos aparece, por otro lado, lo que Caselles (2008: 239) denomina “sobrerrepresentación gitana desde el mito de colectivo problemático”. El mito (“la población gitana es un problema”, “carece de habilidades sociales”, “es de poco fiar” o “es más delincuente que el resto”) y la realidad (se la vigila más, hay con respecto a ella mayor distancia social, etc.) parecen reforzarse mutuamente (Equipo Barañí, 2001). La lectura de los informes sirve, así, para enmarcar la representación que de la comunidad gitana tienen los profesionales, elemento importante para contextualizar algunos de los conflictos entre profesionales y gitanos que surgen cuando se trata de implementar la RMI con ellos. De hecho, estos conflictos guardan una estrecha relación con la ya referida visión mitificada de los gitanos como personas aprovechadas, dependientes y, en cierto sentido, parasitarias de los recursos públicos, que genera reacciones exageradas en algunos profesionales con actitudes muy apegadas al cumplimiento de lo que consideran las normas sociales imperantes. En cualquier caso, la recomendación que aparece una y otra vez en estos informes (sea el de Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública y Alimentación, 2005; SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006; o el de ACCEM y la Fundación Secretariado General Gitano, 2010) es la de aumentar el número de profesionales que han de intervenir con esta población.

En definitiva, desde el año 2005 se da una tendencia a la producción de informes “diagnósticos” de la situación de varios de los asentamientos chabolistas madrileños, en los que, con todo, no se lleva a cabo un análisis en profundidad de las problemáticas que continuamente son referidas. De esta manera, a falta de análisis, es la fuerza acumulativa de algunas afirmaciones vertidas en ellos (que refuerzan los estereotipos que hemos identificado

en las páginas precedentes) la que está construyendo realidad, perfilando el marco de sentido a través del cual los profesionales de la intervención social y, en particular, socio-sanitaria perciben a los gitanos. Estos informes *exprés* son la forma que tiene la Administración local de acercarse a la población gitana y de proponer medidas de acción, aunando un conjunto de relatos e interpretaciones pseudo-científicas producidas fragmentadamente por las distintas instituciones participantes; lo que se acompaña de fuertes juicios de valor sobre la cultura gitana que no aparecen corroborados por datos empíricos. La lógica de redacción de estos informes es la siguiente: detección de problemas, enumeración de los mismos y recomendación de nuevas o más intervenciones profesionales, de modo que, como se ha indicado, sirven para dar continuidad o justificar la creación de nuevos dispositivos de intervención en las zonas a las que se refieran.

4.2.1 Un caso concreto: el informe de los asentamientos marginales del área 1

He elegido el informe *Situación de los asentamientos marginales del área sanitaria I*¹⁰⁶, producido en el 2006, para ejemplificar lo anteriormente dicho debido a la frecuencia con que en él aparecen nociones de sentido común, ya tratadas más atrás, que se refieren a la supuesta irracionalidad de la etnia gitana y a su falta de responsabilidad y de motivación para el cambio. Este informe fue elaborado por un equipo de profesionales del ámbito social y sanitario que han participado durante años en la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas, por lo que es sorprendente que de ellos provengan ideas como las indicadas.

En dicho informe se usan a menudo los términos “cultura” o “socio-cultural”, que se están volviendo recurrentes en el lenguaje de muchos/as profesionales. Ahora bien, ¿qué se entiende por ellos? Y, por otro lado, ¿están contribuyendo a una mejor comprensión de la situación de la población gitana? Es algo a lo que voy a tratar de responder a partir del análisis del mencionado informe, pues son los usos concretos que se hacen de estos términos en “textos técnicos” los que, como sostiene Meñaca (2004: 58), permiten ver si contribuyen a mejorar el entendimiento de los procesos de vulnerabilidad social (la relación entre procesos macro-estructurales y vivencias individuales de ésta), y las relaciones que se establecen entre los diferentes profesionales y la población con la que intervienen. Los profesionales del ámbito social y sanitario comparten determinadas nociones de “lo cultural”, la exclusión

¹⁰⁶ Dicho informe hace referencia a Cañada Real, el Cañaveral, Las Barranquillas, Los Trigales y Santa Catalina. En la página 9, cuando se trata de cuantificar la población de Cañada Real perteneciente a dicha área sanitaria, se trabaja únicamente con datos de la población empadronada, afirmando la dificultad de conseguir “información real” sobre las personas que allí residen.

social, el riesgo y el estilo de vida provenientes de la biomedicina; nociones que posibilitan aunar opiniones de profesionales muy diversos (trabajadores de la Administración, trabajadores sociales, médicos, enfermeros) y de ONG. Así, el citado informe está plagado de afirmaciones pseudo-explicativas sobre la relación entre la exclusión social y la idiosincrasia cultural de los gitanos. En términos de Bourgois (2003 [1996]: 324), se puede decir que en él se toman algunos síntomas individuales de la “situación de miseria social” (como la baja autoestima, la desmotivación, la participación en la economía informal o la falta de interés hacia la educación formal) como muestras que confirman ciertos estereotipos sobre la inmadurez e irracionalidad de la población excluida (Bourgois, 2003 [1996]: 158), consolidándose así un cierto “sentido común” profesional que responsabiliza a las víctimas por sus fallos y les ofrece únicamente soluciones individualistas y de raíz psicologista ante contradicciones culturales que deberían ser confrontadas y cambiadas (Bourgois, 2003 [1996]: 325).

Haré una lectura cronológica de este informe para poner de manifiesto que el efecto de las imágenes peyorativas y estigmatizantes de la población “en situación de exclusión social” que se maneja es acumulativo y va cobrando fuerza a medida que se avanza en la lectura del mismo. Lo que se dice, pero principalmente lo que hay que leer entre líneas, así como el “estilo de pensamiento” (Menéndez, 1998; Uribe, 2000) que enmarca las afirmaciones expresadas, van produciendo una representación culturalista y esencialista de los factores socio-culturales que inciden en las prácticas de la población gitana excluida, permitiendo que el lector cree, o más bien, recree ideas que ya manejaba previamente sobre la población gitana. En primer lugar, encontramos que los usos de “lo socio-cultural” que aparecen en el citado informe son eminentemente reduccionistas y carecen de valor explicativo, no dejando lugar a una conceptualización de la cultura como algo creativo, innovador, caracterizado por la diversidad; con lo que se condena a los sujetos al inmovilismo y se les niega su capacidad de innovación y de adaptación ventajosa a los cambios históricos y a las coyunturas (San Román, 1996).

El área sanitaria 1, a la que se refiere el informe que estamos analizando, es el área de la Comunidad de Madrid con mayor número de asentamientos chabolistas y poblados de

tipología especial¹⁰⁷, lo que se aduce como justificación para la elaboración del mismo, que surge del interés expreso por “abordar el trabajo sanitario con población en riesgo de exclusión social, desde un punto integral” y de la necesidad de fomentar el trabajo profesional desde la base de la colaboración, para así evitar la duplicidad de las actuaciones y favorecer la efectividad de las mismas (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006:1). Si bien en la presentación del informe se sostiene que sus propuestas de acción no pretenden perpetuar la situación de la población, “sino, por el contrario, contribuir al acercamiento de la población a situaciones de normalidad social” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 1), a lo largo del mismo se presenta a la población excluida desde una visión monolítica centrada en definirla como “multi-carencial”, vinculándola con prácticas como la delincuencia y el consumo de drogas, reproduciendo así el estigma social que recae sobre ella.

En muchos casos, la población que vive en estos asentamientos es una población que no existe oficialmente, se trata de una población no censada, asentada en suelo no urbanizable (sin luz, agua, alcantarillado, etc.), sin Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y en muchos casos sin documentación alguna, con problemas con la justicia, sin estudios, multi-racial pero con predominio de etnia gitana, con una alta prevalencia de drogas “ilegales”, etc.” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 2).

Se pasa después a vincular las “características de habitabilidad” de estos asentamientos con la frecuencia de importantes problemas de salud como la tuberculosis, hepatitis A, salmonelosis, sarna, etc., indicándose que la población residente requiere “de unos cauces de intervención especiales y adecuados a sus situaciones concretas” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 2). Las actuaciones que se señalan como ejemplo de lo que se ha realizado con la población de estos asentamientos recuerdan a los contenidos clásicos de la puericultura, como es el caso de la prevención de enfermedades infecciones transmisibles, los métodos de lactancia, la higiene del recién nacido y el niño pequeño, la atención y los cuidados del niño enfermo, etc. (Boltanski, 1969; Boltanski, 1975; Ariès, 1973; Bourdieu, 1966; Pérez Soler, 1979, 1979a; De Montlibert, 1980; Alluè, 2000: 65), especificándose que se han llevado a cabo actividades de educación para la salud con madres gitanas, una campaña de vacunación en Las Barranquillas

¹⁰⁷ Estos últimos son barrios de viviendas prefabricadas construidas fuera de los entornos urbanos para un colectivo específico. Estaban pensados para una duración determinada y como paso previo a la vivienda en altura. Al prolongarse esta situación (Cañaveral –también conocido como La Jungla– lleva constituido como barrio de tipología especial 18 años), se ha dado lugar al crecimiento de zonas de chabolas, cuyas condiciones y equipamientos no son los mismos. Cañaveral contaba en sus inicios con una escuela infantil, un equipo de apoyo y prevención de la delincuencia, un grupo de escolarización de adultos y una escuela taller de horticultura en colaboración con el INEM. Actualmente, el suministro de agua y luz se realiza, en muchos casos, a través de los enganches que los propios vecinos realizan, con los consiguientes riesgos por no cumplir unas mínimas condiciones de seguridad. La zona de chabolas no cuenta con alcantarillado, alumbrado público y servicio de teléfono. Hoy en día el número de chabolas es superior al número de viviendas de tipología especial (Consejería de Sanidad y Consumo, 2005).

en el año 2003 y otra contra el meningococo C en todos los asentamientos del área en el 2004 (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 3). De este modo, como se viene repitiendo, la imagen que se nos transmite de la población que habita en estos espacios es una extremadamente carencial (sin estudios, sin acceso a recursos institucionalizados de salud, con problemas con la justicia, con enfermedades, etc.)¹⁰⁸.

La estructura del informe, en cuanto al peso que tiene cada uno de sus epígrafes, es significativa de la importancia que se le da a lo socio-cultural como variable explicativa de las situaciones de exclusión social. Así, dicho informe cuenta con siete apartados, de los cuales el primero y el segundo ya han sido aquí tratados (presentación y justificación). El tercero, que tiene por título “Características generales de los asentamientos (ubicación y entorno)”, ocupa cuatro páginas, en las que se presenta la falta de infraestructura urbanística, esto es, los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y de electricidad, el alcantarillado, la recogida de basuras, los transportes públicos, etc. En él, cuando se pasa a describir el modo en que la población soluciona estos problemas, se introducen adjetivaciones como las siguientes:

Se realizan canalizaciones ilegales para las viviendas. Esta circunstancia conlleva distintos riesgos de contaminación de la misma; el primero motivado por la *falta de control* en el enganche, y el segundo, producido por el *mal tratamiento* que realizan del agua, ya que debido a las numerosas canalizaciones existentes, la presión con la que el agua llega a las viviendas *no es la más adecuada* y en muchas ocasiones (sobre todo en los meses de verano), se producen cortes en el suministro. La población en estos asentamientos, para evitar quedarse sin agua, la almacenan en grandes bidones en *condiciones inadecuadas* durante largos periodos de tiempo”. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 6)

El apartado cuarto, sobre las “características de la población”, se subdivide en 5 subapartados: a) número y distribución poblacional; b) características socio-culturales; c) características socio-económicas; d) características de las relaciones de convivencia, ocio y tiempo libre; y e) características de los menores, con la subdivisión entre “escolarización” y “cuidados”. Algunos antropólogos como Menéndez (1998) y Meñaca (2004) advierten de la importancia de no separar lo cultural de los factores macro-estructurales, como son los laborales, los socio-económicos y los histórico-políticos. De entrada, llama la atención que “lo socio-cultural” aparezca separado de lo “socio-económico” en estos subapartados, como si las

¹⁰⁸ En el ámbito sanitario se utilizan con frecuencia imágenes estereotipadas sobre la población gitana, y se hacen sin reparo afirmaciones sobre el déficit sanitario de la misma debido a su especial idiosincrasia cultural. En una obra que se esfuerza por no homogeneizar al colectivo (Laparra, 2007), llama la atención que el capítulo que Begoña Campos redacta sobre “la salud de la comunidad gitana” sea un compendio de la visión más “enfermiza” del colectivo, que se ve descrito como aquejado de todo tipo de enfermedades y problemas, que se vinculan a sus “tradiciones”, a los “condicionamientos culturales” y “representaciones sociales sobre la salud”. Tanto es así que la autora se ve obligada a sostener en algún momento que “la influencia de los rasgos culturales de la comunidad gitana en la salud presenta también rasgos positivos que es necesario tener en cuenta” (p.158), a los cuales dedica tres páginas. En todo caso, llama la atención la frecuencia con la que en el capítulo de Campos, referido –como se ha dicho– al ámbito sanitario, se acude a estereotipos sobre los gitanos, sobre todo si se compara con los capítulos de la misma obra en donde se estudian otros ámbitos (como la educación y la vivienda, por ejemplo), en donde esa frecuencia es menor.

prácticas, valores y formas de entender el mundo de las personas no guardasen relación alguna con la forma de generar recursos económicos. Por otro lado, es de destacar que en el subapartado a), que –como se ha indicado– versa sobre el volumen de población y su distribución, se señale que las 65 familias de etnia gitana de Las Barranquillas “se dedican principalmente a la venta de drogas”, adjuntándose una tabla en la que se incluye el número de familias de los cuatro asentamientos chabolistas a los que se refiere el informe, en tanto que no se indica igualmente el origen de los recursos económicos de las familias del resto de los asentamientos, lo que indudablemente contribuye a que se vaya construyendo una imagen estigmatizada de los gitanos como traficantes y vendedores de drogas.

La media página que se dedica al apartado b), destinado a enumerar las características socioculturales de la población de los cinco asentamientos, se utiliza para especificar que, salvo en Cañada Real (donde hay gitanos del Este de Europa y población no gitana de España, Marruecos, Rumania, Bulgaria y los Países Balcánicos), la mayoría de la población es española de etnia gitana, haciéndose referencia a su “carencia de estudios básicos, medios o superiores” así como al analfabetismo funcional, esta vez, de la población extranjera. Por otro lado, se sostiene que esta circunstancia se agrava en las mujeres “debido a su alto grado de aislamiento” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 10). Así, se continúa remarcando una imagen carencial de la población, centrada ahora especialmente en las mujeres. En todo caso, las características que, en este subapartado, se ligán a lo socio-cultural son las que tienen que ver con el nivel educativo y el grado de aislamiento de éstas. Además, se alude a la RMI exponiendo que esta prestación social es usada como método para “fomentar” la participación de la población en actividades educativas así como para “mejorar la adherencia a los controles (médicos) y seguimientos previstos” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 21). No deja de ser relevante que esta alusión a la RMI se haga en el mencionado subapartado puesto que ello sugiere que se establece una asociación implícita entre lo que se considera como una cultura específica del colectivo y la política “coercitiva” (a través de la RMI) que se plantea como medio para conseguir la adhesión a las actividades que se le proponen. De este modo, cuando se habla de la intervención social que se lleva a cabo con los gitanos, la RMI entra automáticamente en escena. Por otro lado, también es significativo que, a pesar de esta referencia a la RMI, las relaciones institucionales o profesionales con la población excluida no sean tenidas en cuenta en ningún apartado de este informe. Podría decirse que esta parte de la compleja ecuación de la intervención en materia de vulnerabilidad

social se omite del estudio, enfocándose todo el contenido del informe a caracterizar a la población que ocupa los asentamientos en los que se centra.

En el subapartado c), que consiste en una breve exposición de las características socio-económicas de esta población, se comienza indicando que sus ingresos son suficientes para “sustentar un nivel de vida aceptable, exceptuando a la población residente en zonas como la de los campamentos del proyecto APOI¹⁰⁹” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 10). Después se puede leer: “se observan algunas familias con un importante nivel adquisitivo” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 11), atribuyéndose esos ingresos a una combinación de prestaciones sociales y de actividades no regladas (chatarra, venta ambulante, venta de periódicos, etc.) o irregulares (construcción, guardas de obra). En este mismo subapartado se hace referencia a la existencia de actividades ilegales (mendicidad, tráfico y venta de drogas, robos, agrupación en torno a mafias) y se indica que los hombres cuentan con “un bajo nivel de motivación entre los mayores de 16 años hacia la búsqueda activa de un empleo normalizado”. En ningún momento se hace el esfuerzo de cuantificar qué parte de la población consigue sus ingresos de estas maneras, o de esclarecer qué relación puede tener la supuesta “baja motivación” con otras variables, como podrían ser, por ejemplo, las condiciones de vida, la relación con la sociedad mayoritaria o las instituciones sociales, o la vivencia individual de las situaciones de vulnerabilidad. De este modo, un subapartado que debería estar orientado a la descripción, se supone que lo más objetiva posible, de las actividades socio-económicas a las que se dedica la población de los asentamientos chabolistas está atravesado por frecuentes juicios ético-morales relativos a la actitud de ésta hacia (o más bien a su falta de interés por) la búsqueda de empleo, con lo que se abona de nuevo la imagen del colectivo cuya construcción estamos analizando. De hecho, hasta ahora lo que hemos encontrado es la enumeración de diferentes carencias que, según el informe, lo aquejan: educativas, motivacionales y económicas.

El apartado d), que trata sobre las relaciones de convivencia y el tiempo libre, hace mención a la organización de la población gitana en núcleos familiares extensos alrededor de un cabeza de familia varón, a los matrimonios a edades tempranas (especificándose que suelen ser “convenidos”), a la concentración espacial por nacionalidades y, para finalizar, a la ausencia de un concepto de ocio y tiempo libre entre la misma: “En cuanto al ocio y el tiempo libre, en general no conocen el significado de estos conceptos” (SaludMadrid, IRIS,

¹⁰⁹ Proyecto social de la Asociación ACCEM que consiste en diferentes campamentos donde se acogen a familias rumanas.

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 11). Se reproduce, así, la visión socialmente hegemónica sobre la población de etnia gitana que es, además, una visión homogeneizante. No se ofrece en el informe, en ningún momento, una descripción de la población gitana que permita ver diversidad interna en sus comportamientos¹¹⁰. Cuando se hace referencia a los gitanos, se identifica a los sujetos con su cultura, dando lugar a una visión inmovilista de los comportamientos individuales y no dejando espacio a una acción individual diferente, disonante o innovadora. Esto mismo (la homogeneización del colectivo en los “textos expertos”) ha sido denunciado por Abajo y Carrasco (2004) con respecto al ámbito escolar.

En cuanto al culturalismo implícito en la forma de enfocar al colectivo, sólo se dotan del rango de “costumbre” o de “tradición” a los comportamientos ritualizados, como el matrimonio o la ceremonia del pañuelo, o a aquellos otros que se hacen en comunidad (como ir a los hospitales juntos o acompañar a enfermos, por ejemplo), esto es, a los que de manera visible lo distinguen étnicamente de la sociedad mayoritaria o, dicho en otros términos, a los que son percibidos como costumbres discordantes con respecto a la misma¹¹¹. Estas ideas encajan con las de autores que consideran que “el proceso de modernización gitano” (García García, 2007: 28-29) es positivo, precisamente porque supone “la pérdida de sus costumbres y valores gitanos”, lo que daría cabida a la expresión de los deseos individuales. El grupo étnico aparece de nuevo concebido al estilo de una camisa de fuerza que impide la expresión de la individualidad de los sujetos que lo integran.

Puede entenderse como favorable la pérdida de algunas costumbres en el proceso de modernización, al igual que ha ocurrido con otras culturas. (...) Todos estos cambios forman parte de un proceso de modernización en el que se transforman los modelos familiares, va aumentando la libertad y los valores individuales, incluyendo los de la mujer. (García García, Á., 2007: 28-29).

El subapartado e), algo más largo que los anteriores, es el dedicado a las características de los menores de edad. Cuando se habla de la escolarización, se asegura que la mayoría de los niños/as de los diferentes asentamientos está escolarizada, siendo el nivel de absentismo alto únicamente en Las Barranquillas. Más tarde se atribuye el absentismo y el abandono

¹¹⁰ El trabajo de campo que se realizamos con población gitana para el estudio “Actitudes y pautas de comportamiento de la población gitana madrileña en torno a su salud” (2008) mostró cómo comportamientos como los enumerados ya no se pueden generalizar a toda la población gitana, habiendo, por ejemplo, mujeres que retrasan la edad de casamiento por varias razones, por lo que nos vimos obligados como investigadores a mostrar la diversidad interna existente dentro del colectivo, que entonces establecidos sobre todo en función de la pertenencia de clase (clase baja, clase media-baja y clase media). Para más información, se puede acudir a la publicación *online*:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161769242584&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914017

¹¹¹ Esas “costumbre” y “tradiciones” pueden ser manejadas, además, a nivel cognitivo y también práctico, como unidades discretas, al modo de los elementos de un repertorio o de un patrimonio cultural, por lo que también aparece aquí una concepción repertorial, patrimonial o reificada de la cultura. (Esto se discute más a fondo en la p.297.)

escolar en educación secundaria, sobre todo en el caso de las niñas, a factores como los casamientos tempranos, las precoces responsabilidades familiares, la “sobrepotección” de las familias y la colaboración en las actividades laborales de éstas (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 11-12). Así, se da por sentada la “sobrepotección” de los padres hacia los niños/as, no tratándose de explicar en absoluto en qué consiste y/o por qué se produce y legitimándose de nuevo, de este modo, una visión negativa de la población, en este caso, por exceso de protección, sin que se explicite en qué condiciones o bajo qué circunstancias se puede considerar que el exceso de protección es negativo¹¹². Las categorías que se usan, al no aparecer mínimamente complejizadas, no permiten pensar en la posible existencia de diversidad interna dentro de los grupos señalados y derivan la lectura hacia interpretaciones que relacionan la situación de los menores con la actuación “incorrecta” de sus padres. También en este subapartado se argumenta la existencia de problemas de integración escolar por “el propio absentismo, el desfase curricular o la higiene personal”, para afirmarse finalmente que “a las familias les sigue costando asumir la implicación necesaria en la educación de sus hijos, al no entrar ésta dentro de sus prioridades inmediatas” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 12). El tono paternalista es claro, a la vez que la progresiva culpabilización de los padres gitanos como irresponsables con respecto a la educación de sus hijos. Y lo mismo encontramos en un informe más actual (ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010: 62-64), en donde aparecen frases como: “La baja valoración de la educación y falta de motivación (por parte de algunas familias) para que sus hijos/as continúen estudios” o como esta otra: “La escasa valoración o la falta de motivación de algunas familias para que asistan a los centros.” Recomendándose, por tanto, trabajar principalmente la “motivación para la escolarización y la sensibilización de, en especial, las familias gitanas españolas” (ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010: 64).

El último subapartado, que trata sobre los cuidados de los niños/as, comienza volviendo a sacar a colación el tema de la sobrepotección. Se recrea la imagen de la “paternalidad irresponsable” por parte de las familias residentes en estos asentamientos:

La sobrepotección de los menores por parte de los padres, que les impide la realización de actividades ofertadas fuera de los asentamientos. En cambio y paradójicamente, en el interior de los mismos, los niños pueden moverse libremente a pesar de los riesgos del entorno (la chatarra, la basura, las drogas o el tráfico rodado) (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 12).

¹¹² No se encuentra en este informe la visión de “buenos protectores” vinculada a los gitanos que ha aparecido en algunas entrevistas a profesionales de Servicios Sociales, en las que han sostenido que, en comparación con otros grupos sociales, los niños gitanos están mejor cuidados por sus padres.

A continuación, además de mencionarse la falta de higiene personal “evidente” en los menores, se prosigue haciendo referencia a que éstos son utilizados para la mendicidad:

En muchas ocasiones se siguen utilizando a los menores para la mendicidad u otras actividades no regladas, asimismo, las niñas asumen responsabilidades importantes, como es el matrimonio o el cuidado de los hermanos menores a una edad muy temprana (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 12).

Los comportamientos de la población de estos asentamientos se han ido relacionando, de este modo, con actividades irregulares o no regladas, con estados carenciales (ya sea económicos, urbanísticos o educativos) y con unos cuidados parentales insuficientes o inadecuados, ya sea por sobreprotección, por un uso utilitario de los menores (mendicidad), por exponerlos a matrimonios precoces o por dotarles de responsabilidades familiares *excesivas* (cuidado de los hermanos). El informe nos lleva, de forma tácita o explícita, a ligar todo ello con la pertenencia a la etnia gitana, y a ésta con la posesión de una “cultura” que no es adecuada. No se introducen variables analíticas (como clase social, nivel de ingresos, condiciones laborales, estudios, etc.) que den sentido a estos “diagnósticos”, que se realizan en un lenguaje neutro y despolitizado que adquiere tintes de veracidad por la repetición y acumulación de las mismas aseveraciones, tal como ya se ha comentado más atrás. La problemática gitana se va presentando en “un estilo técnico”, esto es, con un lenguaje que aparentemente enuncia “hechos empíricos” (Agudo, 2009: 70), sin enmarcarlos en el contexto político e institucional que les da sentido (Mosse, 2005a: 37). Esos problemas no se “politizan”, puesto que se elude considerar las condiciones políticas, económicas, históricas y sociales (Agudo, 2009: 70) que pueden estar influyendo en los comportamientos o en los problemas de los que se habla.

Todas estas representaciones estigmatizantes de la población se producen a partir de descripciones y narraciones que caben en subapartados que ocupan muy pocas páginas. Sin embargo, a las “Características generales de los asentamientos” (esto es, al apartado tercero) se le dedican cuatro, incluyendo tablas sobre los materiales, el estado de conservación de las viviendas, su altura, utilización, posesión de electrodomésticos, gestión de residuos, etc. Sorprende, así, el contraste entre la brevedad y la falta de interés descriptivo-explicativo de los comportamientos de la población y de sus características económicas, familiares o personales, y el detallado recorrido por las viviendas y sus materiales constitutivos. Por otro lado, el apartado sexto, que trata de las “Características socio-sanitarias”, se divide en 8 subapartados: a) acceso a servicios públicos; b) hábitos relacionados con la salud; c) planificación familiar y salud materno-infantil; d) estado vacunal; e) consumo de sustancias tóxicas; f) situación en relación con los malos tratos en la familia; g) enfermedades más

prevalentes en los asentamientos y h) accidentes más frecuentes en los asentamientos. De entrada, podemos ver que la anterior es una lista de los aspectos socio-sanitarios considerados problemáticos en la población en cuestión. Con respecto al acceso a los servicios sanitarios generales, se afirma la lejanía de los asentamientos con relación a los centros de salud, y la dificultad existente para atender a parte de la población por esta distancia física y por estar en una situación no regularizada a nivel administrativo. A continuación se señala que “se detecta una utilización irregular por parte de esta población de estos servicios sanitarios públicos normalizados, observándose un abuso¹¹³ de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, existiendo por tanto pocas posibilidades de seguimiento y continuidad de los cuidados” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 18). Se pasa después a clasificar en dos categorías a la población que percibe prestaciones socio-económicas:

- Población regularizada legalmente, “que tiene la posibilidad de acceder a estos recursos y que en muchos casos se beneficia de los mismos (sobre todo de la RMI)”, entre la cual, según se dice, “se han observado casos de perceptores de estas ayudas que cuentan con una situación real desahogada¹¹⁴.”
- Y población no regularizada legalmente, “que debido a esta situación de irregularidad, no puede acceder a estos recursos, a pesar de que en muchas ocasiones su situación de precariedad es manifiesta”.

De este modo, se atribuye de nuevo a la población española (de hecho, a la población gitana, dado que al inicio del documento se afirma que la mayoría es de esta etnia) una situación económica desahogada, el uso inadecuado de los recursos públicos y una situación administrativa a menudo “irregular”. También se asocian los problemas de acceso a los servicios socio-sanitarios con “el agravamiento de la situación de exclusión social de esta población” y con cuatro obstáculos que se interponen para conseguir dicho acceso: aislamiento-problemas de movilidad; falta de documentación-dificultad para la realización de gestiones; factores socio-culturales; y trabas para la coordinación de recursos.

¹¹³ El “abuso” sería fácilmente explicable sobre la base de la distancia y la situación de falta de tarjetas sanitarias expresada por los profesionales en múltiples foros. Aun así, se hace hincapié en utilizar el término peyorativo “abuso” (desviación con respecto a la conducta conceptualizada como “normal”) para describir los comportamientos de esta población, en línea con los calificativos emitidos en el resto del documento.

¹¹⁴ Es la segunda vez (la primera vez fue en el primer párrafo del apartado 4.c) que se resalta que la población cuenta con un “nivel de vida aceptable” en términos económicos. Llama la atención que vuelva a ser en el apartado 6.a), destinado al “Acceso a los servicios públicos”, donde se exprese la “situación económica real desahogada” de algunos perceptores de prestaciones públicas. Se asocia así de nuevo a la población de estos asentamientos con el aprovechamiento vicario de las prestaciones públicas, en línea con el sentido de “irresponsabilidad” que se ha querido atribuir a todos sus comportamientos.

Con respecto a las dificultades para acceder a los centros de salud y, en concreto, a las ocasionadas por la falta de documentación o a los impedimentos para realizar gestiones, se señala que, gracias a los esfuerzos profesionales, se ha logrado “normalizar” a la población de estos asentamientos:

Es éste (falta de documentación y dificultades para la realización de gestiones) un tema que se lleva trabajando mediante varios dispositivos de Servicios Sociales desde hace años y por ello, se ha conseguido “normalizar” en este sentido a un importante número de los habitantes, alcanzando grandes avances gracias al esfuerzo de estos profesionales. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19)

Sin embargo, más adelante se habla de los inconvenientes que surgen cuando se trata de atender a las personas que no tienen tarjeta sanitaria, y se sostiene que es común que los profesionales sanitarios se vean en el dilema de tener que atenderlas en situaciones de excepción, cuando hay problemáticas graves, y que lo hacen debido a su voluntad de socorrer a esta población, en detrimento a veces –según se recalca– del tiempo que pueden dedicar a la que sí tiene dicha tarjeta.

El voluntarismo que consigue resolver en muchas ocasiones situaciones de enfermedad o riesgo grave, está amortiguando la verdadera dimensión de esta problemática, a costa de obligar a saturar agendas y a dedicar un mayor tiempo de atención a esta población que a la normalizada. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19)

Se desaprovecha este espacio del informe para tratar de analizar la posible relación de los supuestos usos irregulares o abusivos de las urgencias y, en general, del sistema sanitario con la organización institucional de éste y con un sistema político que ha excluido a la población en situación administrativa irregular del derecho a la salud. Se desperdicia también, de este modo, la ocasión de lanzar una “doble mirada”, es decir, a los “excluidos” pero también a los profesionales y/o a la organización del sistema sanitario español¹¹⁵ (Meñaca, 2004; Jociles y Rivas, 2009). De hecho, el informe se redirecciona, por un lado, hacia la dejadez o desmotivación de la población y, por otro, hacia las acciones y los esfuerzos realizados por los profesionales. No se cuestiona, así, las contradicciones o las incoherencias de las instituciones para las que trabajan ni se aprovecha la oportunidad de considerar a éstos (o de considerarse a sí mismos, puesto que los autores del informe son profesionales) como un elemento más a incluir en el análisis en cuanto actores institucionales que establecen relaciones con la población atendida a través de prácticas concretas.

En el primer subapartado del epígrafe sexto, el dedicado al tema del acceso a los recursos socio-sanitarios, se recupera el concepto de “características socio-culturales” de los

¹¹⁵ O al sistema educativo o al de atención a la familia, por ejemplo, concernidos igualmente por los aspectos tratados.

diferentes colectivos que componen la población, pero precisamente para identificarlas como obstáculos que dificultan un correcto acceso (un “acceso normalizado”) a dichos recursos. El único párrafo que compone este subapartado no tiene desperdicio:

Las características socioculturales de los distintos grupos de población que viven en estas zonas van a determinar la forma de utilización de los servicios socio-sanitarios. Así, el analfabetismo, el desconocimiento del idioma, la propia idiosincrasia y el particular concepto de salud de algunos grupos, influyen en la inadecuada comprensión de los procesos administrativos y ritmos del sistema sanitario, lo que determina que con gran frecuencia la única vía de atención sea la de la excepcionalidad (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19).

Las “características socio-culturales”, la “idiosincrasia” aparecen –sin ser definidas, sin embargo, en ningún momento– como sinónimos de creencias, que influyen en toda una serie de comportamientos erróneos y de carencias (falta de comprensión del sistema sanitario y de sus ritmos, falta de educación, falta de un concepto adecuado de salud, falta de capacidad para cuidar a los hijos, falta de motivación para la búsqueda de empleo, falta de escrúpulos a la hora de aprovecharse de los recursos públicos, etc.) que van definiendo a la población gitana en situación de exclusión social mediante una acumulación de imágenes negativas que la sitúan fuera de los parámetros de la “normalización” y la acercan a situaciones de excepción.

Si se lee entre líneas, se aprecia una concepción de la sociedad como un ente estático, en cuyo seno los individuos se comportaran de la misma manera y acataran las mismas normas a causa de una socialización idéntica. Según esta concepción, la integración descansa en la unidad de sus normas y de sus valores, y la sociedad se representa como un todo en equilibrio, con todas sus partes acopladas armónicamente (Elias, 1989: 28). Los colectivos socialmente excluidos y, entre ellos, los gitanos se presentan, en consecuencia, como elementos disonantes o perturbadores debido principalmente a sus “características socio-culturales”. El quebrantamiento de aquellas normas y del correcto uso de las instituciones públicas supone, de este modo, una ruptura de las reglas del juego que es interpretada como una molestia o, incluso, como un “estado de excepción”. Deja de estar legitimada, por tanto, la idea de discriminación positiva que –como se ha indicado en otro lugar– aparecía en los textos técnicos de los años 90.

En el subapartado siguiente, titulado “Dificultad en la coordinación de recursos”, es donde los profesionales sociales y sanitarios que intervienen con la población de estos asentamientos se incluyen a sí mismos por primera vez como elemento a analizar, y lo hacen

exclusivamente para señalar la falta de coordinación que existe entre ellos¹¹⁶ y el desconocimiento que tienen de las funciones y competencias de los distintos recursos¹¹⁷ mediante los cuales están interviniendo. Este subapartado, al que dedican tres párrafos, finaliza de la siguiente manera:

La falta de coordinación, y en muchas ocasiones, el desconocimiento de las competencias y actividades que llevan a cabo otros recursos, generan desconcierto en los profesionales a la hora de resolver las distintas situaciones que requieren derivación y/o coordinación, hecho que se ve agravado en situaciones de emergencias y alertas sanitarias. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 20-21)

Ahora bien, a pesar de destacar esta descoordinación, no reparan en los efectos que pudiera estar causando en la población o la posible influencia que pudiera tener en sus modos de conceptualizar y utilizar los distintos recursos públicos.

En los cinco siguientes apartados (6b, 6c, 6d, 6e y 6f) ya se establece sin titubeos (es decir, de forma patente y, a veces, incluso exagerada) una vinculación explícita entre “tradición cultural” o “idiosincrasia” de la población gitana y “los malos hábitos” relacionados con el cuidado de la salud, la planificación familiar, el estado vacunal de los niños/as, el consumo de sustancias tóxicas y los malos tratos. El siguiente es un ejemplo de cómo en este informe, como en otros del mismo tipo, se apuntala la estigmatización de los gitanos a partir de lo que se concibe como su cultura:

Lo más importante a destacar es la dificultad de los profesionales para conseguir una tasa de cobertura vacunal adecuada y correcta, pues está condicionada por la irregularidad de los documentos de esta población, por los cambios frecuentes de residencia, por la ausencia de motivación de los padres con creencias erróneas y miedos infundados sobre las consecuencias de la vacunación, (...) por las *actitudes culturales* frente a la salud donde prima la urgencia frente a la prevención. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 22; énfasis añadido)

Del mismo informe se puede extraer un segundo ejemplo:

En relación con este tema, no existen registros con datos cuantitativos. Hay sospechas de casos de violencia doméstica, resultando muy difícil la intervención, ya que *culturalmente* este hecho es asumido como parte de la relación con la pareja y apoyado por la familia extensa. Estos malos tratos dirigidos fundamentalmente a las mujeres, suelen provenir de varones entre 15 y 35 años. Los malos tratos hacia niños aparecen más disfrazados en castigos por mal comportamiento (simplemente porque al padre le parece que se lo merece). Aparte del maltrato, es preocupante el hecho de que existen familias en las que este comportamiento es la pauta de comunicación familiar habitual, y se observa que los niños lo reproducen sistemáticamente: insultos, agresiones

¹¹⁶ De la que se lleva hablando como problema en la intervención social con el colectivo desde los años 90, tal como se ha visto en otro lugar.

¹¹⁷ “Recursos”, en el lenguaje de los trabajadores sociales, son “los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales, etc., de que se dota a sí misma una sociedad para dar respuesta a las necesidades de sus individuos, grupos y comunidades, en cuanto integrantes de ella” (De las Heras y Cortajarena, 1978).

verbales, vocabulario malsonante, empujones... (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19; énfasis añadido)¹¹⁸

Y un tercer ejemplo es el que se expone a continuación:

Las mujeres gitanas, debido a su *propia idiosincrasia* y particular concepto de salud, no acuden regularmente a las revisiones ginecológicas, ya que les da miedo y/o vergüenza asistir. Además, por su *tradición cultural*, los casamientos se dan entre adolescentes, con la obligación de la joven de demostrar su fertilidad lo antes posible. La maternidad en menores de edad conlleva cierta falta de responsabilidad, quedando el cuidado de los bebés delegado en las abuelas. El control de embarazos y el posterior seguimiento pediátrico en los bebés es muy complicado en esta población. En muchas ocasiones se consiguen resultados, utilizando la RMI como medida de presión para mejorar la adherencia a los controles y seguimientos previstos. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19; énfasis añadido)

Por otra parte, se aprecia la contradicción de que no se tome en consideración el punto de vista de la población sobre la que se habla mientras que, en el apartado octavo, titulado “Propuestas de actuación”, se haga referencia a (y aun se subraye) que cualquier actuación profesional ha de tener en cuenta a la población con la que se trabaja puesto que:

(I)ntervenir sin antes escuchar a los principales beneficiarios puede ser contraproducente a medio y a largo plazo. Pueden generar rechazo, pasividad, o en el mejor de los casos, alimentar sentimientos de indefensión y generar actitudes dependientes, que actúan en contra del desarrollo comunitario. También se ha comprobado que si la población se siente protagonista de los cambios, apoyada y orientada por profesionales y técnicos, y hace suyo el proyecto de desarrollo comunitario, son muchas las posibilidades de éxito. (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 32)

La importancia de “escuchar a los principales beneficiarios” es, por tanto, meramente retórica, puesto que en el apartado de recomendaciones de dicho informe, por ejemplo, sólo se tiene en cuenta el criterio profesional para sustentar y justificar la creación de nuevos programas y dispositivos de intervención.

Poner en marcha programas educativos integrales en los que se incluyan objetivos y contenidos sobre la salud y el funcionamiento del sistema sanitario elaborados de forma conjunta por profesionales de los tres ámbitos: social, educativo y sanitario SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 35).

Indicar, por último, que a pesar de lo que pudiera sugerir la anterior cita, las actividades que se implementan para trabajar con la población gitana destacan por su monotonía y carencia de diversidad, y suelen reducirse a cursos de alfabetización y a charlas de promoción para la salud. Éstas son las que se idean para trabajar con la población gitana perceptora de la RMI. Así, tanto en este informe como en otro producido recientemente (ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010), se propone seguir con el formato

¹¹⁸ Algunas de las prácticas que se atribuyen a la población de estos asentamientos se basan en rumores, no en un conocimiento fehaciente de las mismas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la existencia de abusos sexuales, como se reconoce expresamente en el informe. “Respecto a los abusos sexuales, aunque en ocasiones se han escuchado rumores en los asentamientos, no se ha podido constatar la existencia real de este tipo de comportamientos” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006: 19).

de “charlas de sensibilización” sobre cómo usar los recursos públicos que se estaban implementando, sugiriendo incluso “ampliar o reforzar este tipo de iniciativas (cursos de alfabetización, apoyo a la lecto-escritura, etc.)” (ACCEM y Fundación Secretariado General Gitano, 2010: 63).

4.3 Recapitulación

La imagen negativa del colectivo gitano proviene de diferentes frentes. Por un lado, desde las expulsiones de gitanos llevadas a cabo en Francia en agosto 2010, se ha establecido un panorama internacional propicio al endurecimiento de las actuaciones políticas con respecto a los gitanos inmigrantes. Se intuye, así, una tendencia a la vigilancia y la expulsión, que ya ha favorecido algunas acciones punitivas contra gitanos rumanos en la Comunidad de Madrid. La dureza de las imágenes y de los prejuicios que se han ido conformando a nivel local y a nivel europeo a través de los medios de comunicación, al asociar a los gitanos con la violencia, la inseguridad y la delincuencia, se complementa con lo que –como se ha dicho– está ocurriendo en la Comunidad de Madrid en lo que atañe a la profusión de representaciones estereotipadas sobre la “cultura gitana” que se difunden desde los informes denominados “técnicos”, que elaboran profesionales del ámbito social y socio-sanitario que trabajan con el colectivo gitano.

Se ha visto que, desde el año 2005, se han producido una serie de informes sobre la situación de varios de los asentamientos chabolistas madrileños, en los que, a pesar de su autodenominación como “diagnósticos”, no se lleva a cabo un estudio en profundidad de las problemáticas que se abordan. La fuerza acumulativa de las afirmaciones que se expresan en ellos, junto con la ausencia de un análisis que merezca este nombre, están construyendo realidad, están perfilando el marco de sentido a través del cual los profesionales de la intervención social y socio-sanitaria perciben y hacen percibir a los gitanos. Estos informes *exprés*, que son la forma que tiene la administración local de acercarse a la población gitana y de proponer medidas de acción, consolidan fuertes prejuicios acerca la cultura gitana que no se acompañan, sin embargo, de datos empíricos que corroboren las aseveraciones que los contienen.

A causa de que los gitanos beneficiarios de la RMI se relacionan con profesionales socio-sanitarios o con profesionales de ONG que comulgan con algunas de las ideas vertidas en dichos informes, he considerado pertinente examinar, de manera más o menos detallada, uno de ellos: el que lleva por título *Situación de los asentamientos marginales del área*

sanitaria 1, que se elabora en 2006. A través de él he querido mostrar de qué modo estos informes, aunque aludan a ella sólo de soslayo, dan entrada una concepción de la RMI que la constituye como una “herramienta de captación” de una población considerada “desmotivada” y “difícil” con la que se estima necesario trabajar un cambio de hábitos. Por tanto, cuando el referido informe habla de la RMI, lo hace presentándola, explícita o implícitamente, como un instrumento coercitivo que posibilita hacer realidad la supuesta obligatoriedad de la asistencia a las distintas actividades educativas que se implementan para lograr el mencionado cambio.

A diferencia de los informes producidos en los años 90, en donde se recogía la necesidad de trabajar con el colectivo gitano teniendo en cuenta la discriminación histórica y racial que había sufrido y la falta de coherencia de las políticas públicas, y en donde se hacían claros esfuerzos por describir las formas de vida de estas poblaciones, hoy en día no es así, y el escaso calado de los análisis que se plasman en los informes actuales contrasta con la gran cantidad y magnitud de las recomendaciones y propuestas de acción. En estos informes se construyen imágenes de los beneficiarios de las políticas públicas mediante la enumeración de sus problemáticas, es decir, de una manera supuestamente técnica (Agudo, 2009: 70) que elude la politización y la crítica de las intervenciones profesionales salvo en lo que se refiere a la falta de coordinación interinstitucional que, como se ha dicho, lleva siendo expresada en este tipo de informes recurrentemente desde los años 90. Se trata de unas representaciones sociales que se hacen desde el individualismo (es decir, pensando en los gitanos como sujetos que contienen la razón de sus acciones en sí mismos), por lo que se puede traer hasta aquí la crítica que Elias (1988) hace de la concepción que Parsons maneja del individuo como entidad separada de la sociedad, lo que impide captar la interacción entre ambas entidades.

Puede decirse con seguridad que no será comprensible la relación entre los conceptos a los que llamamos “individuo” y “sociedad” mientras continuemos manejándolos como si se tratase de dos cuerpos con existencias separadas y, además, como dos cuerpos cuyo estado normal fuera el reposo y que, por así decirlo, sólo entrasen en relación *a posteriori*. (Elias, 1988: 16)

No se tiene en cuenta tampoco la relación Estado-profesionales ni la incidencia de esta relación en las poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, de modo que a los gitanos, por ejemplo, se les concibe como moviéndose entre el mundo de “su propia cultura” y el de “la sociedad mayoritaria”, para usar las expresiones utilizadas en la siguiente cita bibliográfica, pero se olvida con frecuencia que en ésta también se incluye la acción –intensa, además, en estos casos– de las instituciones públicas y de sus profesionales.

Todas estas circunstancias colocan al individuo gitano entre dos mundos contrapuestos: uno, el de su propia cultura, y otro el de la sociedad mayoritaria regida por unas normas que le son totalmente ajenas. En la sociedad dominante cada uno tiene que ser responsable de sus actos y las decisiones que tome influirán solamente en su persona, o como mucho, en su familia nuclear. El

reconocimiento del individuo estará en función de sus logros personales y su status dependerá de ello y no del "clan" al que pertenezca" (García García, Á., 2007: 28, en Laparra, 2007).

Así, se va produciendo un desplazamiento hacia la psicologización de la exclusión social, quedando ésta a menudo reducida a un problema de motivación de las personas gitanas, tal como se ha mostrado en los capítulos precedentes. El "problema motivacional" aparece a veces homologado a un problema de ignorancia o de incompreensión (ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006: 29), es decir, a una cuestión de *carencia*, mientras que otras veces se identifica con la "*resistencia* interna" del colectivo gitano (Villareal, Estivill, Aiguabella, 1997).

En general, contribuyen [los factores socio-culturales] a una inadecuada comprensión de las reglas y ritmos del sistema burocrático en el que todos nos movemos (ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006:29).

Esta misma idea de resistencia por parte de los gitanos a insertarse en el mercado laboral formal se encuentra en textos más antiguos que el del anterior verbatim (como es el caso del ya citado de Villareal, Estivill, Aiguabella, 1997), y en ellos, si bien se hace un esfuerzo por complejizar la explicación de las dificultades que la población tiene para implicarse en los proyectos de inserción laboral mediante los que se interviene con ella, se acaba recurriendo a su "falta de disposición al cambio" como causa última de esas dificultades. Una "falta de disposición" que es interpretada por los profesionales como resistencia, como tendencia a oponerse a los deseos de éstos y, en cierto sentido, como fuerza que distancia a las personas gitanas de su integración social y/o laboral. Se puede afirmar, entonces, que a través de la incorporación de este término –el de resistencia– al vocabulario de la intervención social se contribuye a afianzar los estereotipos sobre el colectivo gitano ya que, además de ser representado en términos carenciales, se le considera como resistente al cambio.

Se puede decir, de este modo, que cuando los profesionales no saben cómo intervenir con el colectivo gitano o cómo lograr que cambie de hábitos y/o de forma de acercarse a las instituciones públicas, aluden a esta resistencia como explicación última de estas situaciones que entrañan un no-cambio, pero entendiéndola en términos psicológicos, es decir, ubicándola en "la psique" o en lo que algunos han llamado "la caja negra de la personalidad del actor" (Parsons, 1966: 20, en Elias, 1988: 538, nota 8), lo que conlleva el riesgo de situar también su origen en el interior del individuo y, por tanto, de mermar la posibilidad de realizar un análisis socio-cultural complejo que dé cuenta de ella (Elias, 1988: 30).

Esta idea de la resistencia gitana al cambio se puede relacionar con una conversación que mantuve durante el trabajo de campo con Rosa, una trabajadora social de Servicios

Sociales de Villa de Vallecas, que tenía unos 45 años. Me comentó entonces, tras sacar a colación el tema de los gitanos, que los jóvenes de esta etnia con los que ella tenía contacto “no querían trabajar”. Después de que yo le expusiera que me interesaba entrevistar a alguno que cobrase la RMI, me contó que estaba tratando de incluir a uno de ellos en un grupo de “jóvenes en riesgo de exclusión social”, pero que éste se había negado. Ella exclamó que “¡no podía ser!”, que el chico le había dicho que con lo que ganaba chatarreando y con el ingreso de la RMI, no le merecía la pena buscar un trabajo cuyo salario no llegase a los mil euros. Rosa sostenía que no había derecho a que ese joven no quisiera cambiar, y se mostraba muy molesta con la imposibilidad de hacer que participase en las actividades que ella le proponía.

El *ethos* de los profesionales, al menos de los que se ocupan de las rentas mínimas, lleva a asumir como una obviedad que trabajar con los gitanos es difícil, sobre todo porque éstos no ven como interesantes las actividades que se les propone. De hecho, la RMI y los conflictos que surgen con su aplicación son reflejo de los dilemas que conlleva “motivar” a los gitanos hacia el trabajo asalariado o hacia el camino que lleva hasta él, a la vez que evidencian la dificultad de establecer una relación profesional con un colectivo cuyas formas de hacer, pensar y sentir se viven desde la idea de “atraso cultural” y de “resistencia al cambio”. Ello viene agravado, por un lado, por la escasez de estudios sobre la realidad gitana que sean sensibles a su complejidad y a la incidencia de la acción de los profesionales de la intervención social sobre ella, lo que promueve visiones eminentemente simplistas de la misma que se centran en las carencias de los gitanos y, por otro lado, por la estigmatización que proviene –como se ha dicho– de las representaciones sociales que se construyen, entre otros medios, a través de los informes “técnicos” que se están produciendo en los últimos años.

Capítulo 5: Estrategias profesionales en la aplicación de la RMI

Para comprender los discursos de los profesionales sobre la exclusión, la intervención social y la renta mínima de inserción, así como para desentrañar sus formas específicas de problematización, de acción y de justificación de las mismas (van Zanten, 2007: 248), ha sido necesario tener en cuenta la reflexividad de dichos profesionales, entendiendo por reflexividad la capacidad que tienen para reconocer, demostrar y dar visibilidad al carácter racional de sus prácticas concretas, sin que esto implique necesariamente una consciencia ni aun menos una atención permanente a esta dimensión (Garfinkel, 1967) o, en los términos de Giddens (1984, 1990), la capacidad tanto de los individuos como de las instituciones y de los sistemas sociales de proceder de manera continua a su autorregulación a través de un distanciamiento crítico (Van Zanten, 2007: 247).

Según el grado de reflexividad desplegado por ellos, se puede establecer dos tipos ideales de profesionales, que presentan claras diferencias en sus discursos. Por un lado, estarían los profesionales pertenecientes a lo que he denominado grupo fiscalizador, siendo aquellos que interpretan la ley de manera que construyen una idea de “contraprestación obligatoria” para obligar a los perceptores gitanos de la RMI a participar en actividades, a la vez que conciben su labor profesional como centrada en el control del cumplimiento de los requisitos y compromisos establecidos en el Programa Individual de Inserción. Por otro lado, se encuentran los profesionales pertenecientes a lo que he calificado como grupo negociador, quienes se intentan desvincular, al menos a través de sus discursos, de una posición de control sobre los beneficiarios de la RMI y, a su vez, definen su labor profesional alrededor de la movilización/acompañamiento a los sujetos en el diseño de una intervención social que esté acoplada a sus ritmos y demandas. Aunque a nivel analítico se pueden distinguir sendos grupos, en el plano empírico varios son los entrevistados que se podrían situar –según las ocasiones– indistintamente en uno o en otro. En todo caso, es una distinción que permite dotar de sentido a las diferentes formas de aplicar la ley por parte de los profesionales, que se

diferencian entre sí en cómo se posicionan ante distintas situaciones y/o en el grado de reflexividad que despliegan ante los siguientes elementos¹¹⁹:

- Conciencia y posicionamiento sobre la diferencia de poder/autoridad entre los profesionales y los usuarios de la RMI.
- Grado de cuestionamiento de los objetivos de la institución para la que trabajan.
- Capacidad de distanciamiento con respecto a dicha institución.
- Concepción de la intervención social y de las herramientas metodológicas para generar inserción social.
- Grado de conocimiento de la ley RMI.
- Concepción de la RMI: ¿contraprestación obligatoria o derecho social no condicionado?
- Concepción de los factores que ocasionan procesos de vulnerabilidad social.

Un argumento esgrimido frecuentemente por todos los profesionales entrevistados es el que plantea que la ley de la RMI ha ocasionado la pérdida de autoridad de los trabajadores Sociales de Servicios Sociales; argumento que, en algunos trabajos sobre las rentas mínimas, se ha calificado de “nostalgia del IMI” (Zamanillo, 2004). En los entrevistados que se ajustan al grupo fiscalizador, esta afirmación va unida a la caracterización del colectivo gitano – revisada en capítulos precedentes– que enfatiza el hecho de que no sabe respetar las normas sociales, lo que molesta enormemente a estos trabajadores sociales y desencadena algunas de las estrategias que usan con él. Para ellos, el haber perdido autoridad para demandar cambios en los sujetos que acuden a Servicios Sociales es parte de lo que consideran el declive o la crisis de su actividad laboral. Esta situación ocasiona que tengan que buscar nuevas formas para justificar el trabajo que realizan y, sobre todo, que no se sientan cómodos con el principio de la ley de la RMI que los insta a que sean agentes de cambio para promover la inserción laboral y social de los usuarios, puesto que ello conlleva que tengan que trabajar con perceptores que pueden cuestionar el sentido y/o la metodología de los Servicios Sociales y, de este modo, los objetivos que deben alcanzar.

¹¹⁹ Hay prevenir del posible efecto retórico que pueda producir la forma en que la que se presenta a los trabajadores sociales entrevistados. En primer lugar, se ha clasificado a éstos en dos grupos –tal como se ha dicho– a partir de la diferente manera en que aplican la RMI y, en segundo lugar, se ha contrapuesto las características de la intervención social desarrollada por cada uno de ellos (en cuestiones como, por ejemplo, el modo de interpretar la ley o el rol profesional que desempeñan con los gitanos usuarios de RMI). Si bien se puede ver en este ejercicio analítico una simplificación excesiva de la realidad, que peca además de un cierto énfasis dicotómico, la información recogida no permite identificar otros estilos de intervención intermedios aunque, cuando ha sido posible, se ha tratado de matizar los discursos de los entrevistados haciendo referencia a prácticas que no encajan (que desbordan) los rasgos básicos de los dos grupos señalados.

A fin de esclarecer las posiciones de los profesionales, se pueden incluir sus concepciones sobre cómo ha cambiado su autoridad con respecto a los usuarios de la RMI en el marco más amplio de la crisis de las instituciones sociales (Dubet, 2002, 2007), esto es, en el marco de una desmonopolización relativa de la competencia experta y de una extensión del círculo de quienes participan en las decisiones dentro de un proceso general de descentralización (Beck, Giddens y Lash, 2008). Dubet (2007) afirma que el carácter universal y sagrado de los principios que dirigen una institución (como es, en su caso, la escuela, pero también podría ser el trabajo social) ha ido cambiando. Antes, en lo que llama “el programa institucional”, la autoridad del profesional (como es, en su caso, el profesor, pero también podría ser el trabajador social) era carismática en la medida en que la obediencia que se le debía trascendía a su propia persona. En dicho programa, la principal virtud del actor social encargado de socializar al otro no era su competencia técnica y profesional, sino el hecho de que “creyera”, que tuviera una vocación, que encarnara los principios de la institución que fuere y se sacrificase por ellos (Dubet, 2007: 44-46). La relación de ayuda implicaba, a la vez, una autoridad y una voluntad de liberar al otro y de convertirle en igual. En este punto, Dubet sostiene que el “programa institucional”, con su encanto carismático, otorgaba a los profesionales el prestigio y la legitimidad suficientes como para que no tuvieran que dar explicaciones a los usuarios. Cuando decae este programa, nos encontramos con un proceso de declive que afecta a la naturaleza misma del trabajo sobre el otro y, al disminuir la legitimidad de las instituciones y de sus valores sagrado-institucionales, la vocación se transforma. Haciendo referencia a la ética protestante, Dubet señala que el individuo cumple su vocación a través del propio trabajo, conformándose así un *ethos* estrictamente profesional.

Entonces, la vocación se convierte en profesión y la profesión es percibida como modo de realización personal. El individuo quiere estar cualificado y ser competente y, en un nivel más subjetivo, quiere realizarse con su profesión (Dubet, 2007: 53).

Por tanto, se produce una transferencia de legitimidad mediante el desplazamiento de la vocación a la profesión. Ahora la autoridad del profesional llega a través de sus competencias, de sus cualificaciones, de su eficacia. Está conformado para ejercer eficazmente su oficio, para que los usuarios salgan adelante (Dubet, 2007: 53). Este tema, es decir, el del cambio en la legitimidad de las instituciones, es clave para entender los discursos profesionales sobre el trabajo con los usuarios la RMI y algunas actitudes de frustración o “queme” profesional. Así, los profesionales que intervienen en el ámbito de la RMI, para justificar el cumplimiento de su labor como tales, han de demostrar “avance” (en el proceso

de “integración”) por parte de los perceptores de ésta, lo cual se convierte en signo de la efectividad de su intervención y, por consiguiente, de su buen hacer. ¿Pero qué ocurre cuando lo que se espera de los beneficiarios de la prestación económica no acontece? ¿Cómo se justifica el trabajo propio cuando éstos no muestran “avance” o cuando no quieren adherirse a las actividades que les proponen los profesionales? ¿Cómo justificar la profesión cuando el espejo devuelve una imagen de quietud, estancamiento o pasotismo?

Los profesionales ponen en práctica diversas estrategias para generar reconocimiento y respeto hacia lo que hacen. Por un lado, los que se adscriben al grupo fiscalizador no se resisten a perder la autoridad sobre los usuarios de la RMI, y buscan la forma de conservarla aun a costa de interpretar interesadamente la ley en sus interacciones con ellos o de utilizar estrategias no del todo legítimas como, por ejemplo, actuar delante de esos usuarios como si todavía pudiesen decidir acerca de la extinción de la prestación económica, u omitir la negociación consensuada del programa individual de inserción para que se comprometan con actividades de inserción. Sostienen que hay un bien mayor que justifica sus actos, a saber, la “integración”, el “avance”, la “evolución” de los beneficiarios de la RMI. Así, sin reconocer nunca la desigualdad de poder con respecto a éstos, o las condiciones sociales, históricas y económicas que enmarcan las situaciones ante las que se ven enfrentados, se centran en presionar para que los perceptores de la RMI cumplan los compromisos del PII, erigiéndose en vigilantes de que ello sea así.

Por otro lado, los integrantes del grupo negociador no sólo son más conscientes de la asimetría de poder entre ellos y los perceptores de la RMI, sino que se muestran escépticos ante el uso de las relaciones de fuerza en la intervención social, tratando expresamente de desvincularse de la antigua “autoridad” que tenían sobre los perceptores de IMI y decantándose por utilizar estrategias que les permitan iniciar procesos consensuados de inserción social. Estos profesionales, cuando hablan del contexto madrileño de intervención social, hacen responsables de los obstáculos con que se encuentran a la saturación de los Servicios Sociales, a la falta de metodología adecuada y de tiempo para acompañar y promover verdaderos procesos de inserción social, y proponen una vuelta al trabajo de calle y al trabajo comunitario como salida a la excesiva individualización y burocratización que invaden actualmente su desempeño profesional. Traen a colación el contexto político en el que se encuadra su trabajo y critican la fragmentación y precarización de la intervención social en la Comunidad de Madrid, la dependencia de subvenciones públicas de las ONG y la politización electoralista del campo de la intervención social con colectivos vulnerables. En suma, analizan su trabajo teniendo en cuenta variables sociales, económicas y políticas, lo que

favorece que sus discursos salgan de la narración de los problemas cotidianos con los usuarios y se centren en críticas políticas e institucionales. De hecho, algunos de ellos han optado por abandonar los Ayuntamientos para los que trabajaban y dedicarse a la investigación social o a labores de diseño/evaluación/ejecución de la intervención social. En este sentido, suelen ser profesionales con aspiraciones profesionales más allá del trabajo en Servicios Sociales, preocupados por formarse continuamente y con tendencia a reflexionar sobre las contradicciones y cambios sociales que afectan al trabajo social¹²⁰. Aun así, más adelante se verá que algunos de estos profesionales, que expresan estar desesperanzados con la intervención que se realiza desde los Servicios Sociales, optan por no intervenir, generando de este modo un efecto de desprotección de los beneficiarios de la RMI, puesto que aunque lo hacen para mitigar las consecuencias no deseadas de sus actuaciones profesionales, ello entraña –en la práctica– no atenderles y/o ayudarles únicamente en lo que los mismos sujetos demandan.

Los representantes de ambos grupos de trabajadores coinciden, sin embargo, en afirmar que los cambios formales que ha traído la RMI no han modificado su práctica profesional y sostienen que hacen con la RMI lo mismo que hacían con el IMI. Lo siguiente es lo que asegura al respecto un ex-trabajador social de la zona sur-oeste de Madrid:

Se supone que con la RMI se ponía más serio todo ese asunto, y de si no cumplían plazos, no sé qué, todo como que entraba dentro de la lógica de la ley administrativa: “Se le requiere, se le no sé qué”. Más que con el IMI, que era un decreto simplemente. Pero el contrato era lo mismo. Es más completo con la RMI el PII, más apartados, pero la forma de aplicarlo por nosotros era la misma. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

Y algo parecido es lo que nos dice un trabajador social de la zona noreste del mismo municipio:

Sí que viví el cambio. Para mi trabajo, en principio no supuso nada porque el trabajador social tampoco vive la RMI como una prestación, sino es el tema del fin y del medio. Para mí, es un objeto de intervención. A través de la RMI podemos conectar más con la familia, ver el tema del trabajo, cómo va, o temas que le interese a la familia trabajar. Para mí, en ese sentido no supuso nada. Sé que legislativamente la RMI ya es una ley con un decreto, y el IMI no era una ley con derecho; básicamente eso. En cuanto diferencia de intervención, nada. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años.)

Igualmente, todos ellos sostienen que la población a la que atienden es la que no ejerce sus derechos.

Se ha establecido un derecho y la gente tiene más capacidad de reclamación. Eso en la teoría y en lo legal, en el derecho. En la realidad, trabajamos con la población que no ejerce sus derechos, (que) no tiene capacidad tampoco ni para poner una reclamación. Entonces, en la práctica ha

¹²⁰ Los planteamientos de algunos de estos profesionales del grupo negociador se acercan a los que cabe hacer desde las ciencias sociales críticas. De hecho, algunos de estos trabajadores sociales tienen, además de la carrera de trabajo social, una licenciatura o máster en ciencias sociales.

habido poco cambio. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-este de Madrid, 38 años)

Podemos comprobar así que, incluso en la experiencia de los trabajadores sociales encargados de implementarla, los elementos supuestamente novedosos y “empoderadores” de la RMI con respecto al IMI –que tratamos en el capítulo tercero– no son tales. Sí encontramos diferencias, sin embargo, entre los discursos de los dos grupos (el fiscalizador y el negociador) en lo concerniente a la interpretación de lo que supone la creación de un procedimiento sancionador regido por la Comunidad de Madrid; hecho que resta capacidad de decisión a los trabajadores sociales sobre las extinciones o suspensiones cautelares de la prestación. Algunos han entendido este cambio como una forma de controlar la “arbitrariedad” de la intervención social, la cual –según sostienen– era patente durante el periodo de implementación del IMI. Esto es lo que dice uno de ellos:

- E: Pero realmente los trabajadores sociales de distrito son los que les pasan las faltas y la información a la Comunidad de Madrid, ¿no?
- A: Sí, lo que pasa es que se lo ponen muy difícil ahora a los profesionales; o sea, yo he hecho entrevistas a trabajadores sociales por mi estudio este de la exclusión en los pueblos, y la gran queja de todos es que con el cambio de IMI a la RMI han perdido toda autoridad frente a las familias. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años.)

Y otro afirma lo siguiente:

- A: ¿No tenéis la opción de suspender una la RMI los trabajadores sociales?
- C: Antes sí que era responsabilidad nuestra. Ahora no. A través del procedimiento sancionador sí, pero eso es un mecanismo aparte. Antes era en los seguimientos que tú podías proponer una suspensión cautelar: “porque no aparece por los Servicios Sociales hace 6 meses”. Entonces, la Comunidad de Madrid lo hacía. Con la RMI tú sigues informando a través de las hojas semestrales, y si eso sucede, por ejemplo, hay pérdida de contacto con los Servicios Sociales, pues, aparte inicias un procedimiento sancionador. Como esto es de derecho, tiene un montón de (procedimientos). Se le cita, tiene derecho a plantear en la Comunidad cuáles han sido sus... Que todo está muy unido al derecho y a la expresión también de sus ideas. (Entrevista a trabajadora Social de Servicios Sociales, Ayuntamiento periferia de Madrid, 38 años)

En cambio, otros aseguran que hoy en día, con la poca claridad que introduce la ley y la falta de poder de los profesionales, es cuando la ejecución de la intervención social se ha vuelto ambigua. Los profesionales del grupo fiscalizador aseguran –como se ha visto– que la RMI les ha quitado autoridad respecto a los usuarios y ha distorsionado la capacidad de intervenir. De hecho, –como también se ha dicho– algunos tienen serias dificultades para asumir el cambio de roles en sus funciones devenido con la ley RMI y siguen mandando “notas” a la Comunidad de Madrid solicitando que se le extinga la prestación a algún perceptor de la misma, como hacían en el periodo IMI. Muestran así claras resistencias a implementar los cambios que regula la ley RMI.

“Yo he mandando miles de notas a la Comunidad de Madrid y no me hacen ni caso.” Le pregunto si con la RMI ha cambiado la intervención y me dice que sí, que con el IMI era mucho más fácil trabajar porque se podían hacer extinciones cada 3 meses, pero ahora es mucho más difícil. (...) Le comento si el IMI no le parecía más arbitrario, y me responde tajantemente: “¿Pero arbitrario por qué?”. Le comento que algunos profesionales dicen que tenían demasiado poder para decidir, y ella me dice: “No, es que tampoco es así, tú si no lo ves claro no lo ibas a extinguir, y si llega un día que dices ¡hasta aquí hemos llegado!, pues, es que lo estás viendo muy claro”. (...) Cuenta el caso de perceptores gitanos que tienen ingresos porque “las furgonetas las pagan al contado, porque como no tienen nómina...”, y continúa diciendo que ahora la situación sí que es arbitraria, porque “no puedes hacer nada: mandas notas [a la CM] pidiendo que se extinga y siguen cobrando. ¡Te llevas unos berrinches!” (Registro de campo posterior a entrevista con trabajadora social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 34 años)

Los que integran el grupo negociador, por el contrario, interpretan como beneficiosa la pérdida de poder para “castigar” y sostienen que ha facilitado que la intervención social tenga un nuevo carácter: está menos centrada en vigilar el cumplimiento de requisitos y más en detectar las necesidades de las personas y en el diseño conjunto de la intervención social. De este modo, estos profesionales utilizan los cambios introducidos por la ley RMI para transformar, si no su forma de intervenir (que, como se ha indicado, dicen que es similar), sí el discurso que despliegan sobre su labor profesional ante los perceptores de la RMI.

Sí que la hay (una diferencia) con la RMI. De momento es un derecho, y eso ya es un paso sustancial. Y aparte, en toda la parte de seguimiento, con el IMI nosotros podíamos proponer una extinción o una suspensión cautelar del IMI, y con la RMI no, que también eso ha dado otro carácter a la intervención. La intervención ahora con la RMI no está tan centrada en la extinción o no extinción de una prestación, aunque con el IMI nosotros no lo utilizábamos como arma amenazadora de la intervención, para nada, pero sí que hay ahí una parte sustancial en lo que es la ley. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 35 años)

El argumento imperante en el grupo fiscalizador es que se ha perdido una herramienta de intervención, es decir, la posibilidad de presionar o persuadir a través de la concesión/retirada de la ayuda económica a los usuarios más problemáticos y/o menos motivados para realizar actividades.

Yo antes veía problemas y aquí también los vi desde el principio. Me parecía más fácil (la RMI) para nosotros, en cierto modo, pero también nos dejaba sin esa referencia para el usuario, o sea, que podíamos persuadir en la dirección de buscar alguna otra acción, y yo creo que no tenemos ese lugar en el decreto, o sea, se nos pide que motivemos, que intentemos y que hagamos, y los proyectos a mí me parecen poco realistas. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años)

Conciben la RMI como un *toma y daca*, y remiten a la importancia que tiene el que los usuarios sepan que tienen obligaciones (“tienen que hacer algo a cambio”). En ningún momento cuestionan el control que implica la gestión de la RMI, sino que echan en falta una posición de poder menos ambigua sobre sus perceptores. El lenguaje jurídico-burocrático del procedimiento administrativo ha calado de tal manera en estos trabajadores sociales que, en la parte de la intervención social, se ocupan principalmente del cumplimiento de requisitos y de recordar a los beneficiarios la conveniencia de la contraprestación y, por ende, del

cumplimiento de los compromisos del PII. Así, cuando expresan la relación que éstos habrían de tener con las actividades de inserción, abundan en el uso de términos que denotan obligatoriedad y que entrañan una metáfora bélica (Lakoff y Johnson 1986), como “perseguir”, “dar tregua”, etc. Y algunos manejan interpretaciones parciales o incorrectas de la ley, como el siguiente trabajador social, que sostiene que ésta obliga a que se establezca un PII con toda la familia cuando, en realidad, es con la persona titular de la prestación.

N: Antes el IMI sí que establecía muy claramente que el trabajador social era el que marcaba las actividades y todo era un poco por decreto. La RMI nos ha metido en un marco muy ambiguo. Establece la obligatoriedad de que se establezca un programa individual de inserción con cada familia perceptora de la RMI.

A: ¿A nivel familiar?

N: A nivel familiar, y establece la obligatoriedad de reconocer actividades que coadyuven a la inserción de la familia, de las personas, que se establezcan actividades con cada uno de los miembros. Bien, ¿pero qué actividades son las que hay que marcar? La verdad es que esa es la pelea del PII, del programa de inserción, porque es que no se establece qué es lo obligatorio. Yo puedo poner en un PII que este señor se duche una vez a la semana, y yo puedo poner cualquier cosa, o puedo decirle que vaya a un proyecto de inserción. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años.)

Quienes integran el grupo fiscalizador hablan de la ley desde un posicionamiento que no cuestiona los valores ni los procedimientos de la institución para la que trabajan, y recalcan una y otra vez la pérdida que ha supuesto el que, en los documentos reguladores de la RMI, no se deje claro que las actividades de inserción tienen carácter de contraprestación. Por otro lado, en su trabajo y en su discurso, eluden lo relativo a la negociación consensuada del diseño de la intervención social, no dedicándole a ello ningún tiempo durante la entrevista con los solicitantes de la prestación económica, ni estableciendo, por tanto, estrategia metodológica alguna para llevar a cabo esa negociación, lo que también puede revelar un vacío de técnicas y/o herramientas que respondan a este nuevo aspecto de la ley. De hecho, algunos trabajadores, cuando se les pregunta por la negociación del PII, siguen asegurando – como ya se ha indicado más atrás– que la firma por parte de los perceptores es obligatoria, interpretando interesadamente la ley, ya que mientras ésta obliga a suscribir un PII a los titulares de la prestación económica, establece a la vez –como también se ha dicho– que éste ha de ser elaborado de forma consensuada.

Le pregunto a Rebeca, trabajadora social, cómo hace para que los perceptores firmen el PII, si utiliza alguna estrategia en concreto. Ella me mira y me responde que están obligados a firmarlo, porque si no se suspende la prestación. No comenta nada más del tema. (Registro de campo: notas tomadas durante entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, julio 2008)

La defensa de las normas por parte de estos profesionales constituye, de este modo, una protección ante la sospecha constante de ser engañados, desconfiando por principio de los perceptores de la RMI que no se adhieren a los compromisos del PII. Así, se refieren a su

trabajo en términos normativos, aduciendo que sólo quieren que esos perceptores se rijan conforme a las normas. Serrano y Arriba (1998: 188) utilizan el término “frente antidependencia” para referirse a los profesionales centrados en la fiscalización, lo que –según manifiestan– “provoca intervenciones desenfocadas y un excesivo protagonismo de las actividades de control” (Serrano y Arriba, 1998: 184). Para estos trabajadores sociales, las normas aparecen como únicas e universales, por lo que no dan importancia a su adaptación a las características individuales de cada perceptor (adaptación a la que, sin embargo, insta la ley), y emiten juicios morales duros hacia quienes no comparten valores y actitudes coherentes con la aceptación de que hay que insertarse en el mercado laboral formal y con la formación como mecanismo de ascenso social.

No sé, yo intento trabajar con ellos la sinceridad, o sea, ni tú creas que yo soy tonto, ni que trabajas por 30 euros al mes. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

Los trabajadores sociales encarnan lo que cabría llamar “valores de la normalidad”, instituyéndose como referencia válida para medir la conducta de los perceptores de la RMI. Y son los que forman parte del grupo fiscalizador quienes expresan las mayores tensiones cuando trabajan, por ejemplo, con el colectivo gitano y quienes radicalizan las estrategias que se utilizan para intervenir con esta población. Para ilustrarlo con un caso, se puede ver cómo el siguiente entrevistado se pone a sí mismo de ejemplo para explicarles a los gitanos beneficiarios de la RMI que si faltan a sus obligaciones, ello puede reportarles consecuencias negativas. Así, sostiene que las mismas normas que rigen su vida cotidiana son válidas para dichos beneficiarios y, por ende, son previsibles las mismas consecuencias ante su incumplimiento.

A la hora de ejecutar lo que yo he prometido que tengo que hacer, está claro, esto son las normas. Si yo falto al trabajo, yo tengo que presentar un informe, si yo dejo de venir al trabajo, yo no cobro. ¡Esto es así en todos los sitios! Pues, ellos tienen que entender que esta es la dinámica. Yo creo que cuanto más claro establezcas las normas con ellos, menos nos quemaremos pensando que hay cosas que no podemos resolver. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

Esta conducta etnocéntrica es congruente con el hecho de que estos trabajadores sociales no tomen nunca en consideración las diferentes posiciones sociales que ocupan ellos y los beneficiarios de la RMI, ni la incidencia de éstas en las formas de pensar, actuar y sentir de cada uno. Así, consideran que sus propios valores y sus normas son los “correctos” y los conciben como universales –como se ha señalado más arriba– y, por tanto, como perfectos para regir la intervención social no sólo con la población gitana, sino con todos los perceptores de la RMI. Fassin (2003: 56) recalca la importancia de tener en cuenta los

argumentos morales que fundan las decisiones políticas cotidianas y sus efectos en las maneras en que las personas presentan su reivindicación de existir socialmente. En cierto sentido, los profesionales que nos ocupan se erigen en “misioneros” cuyo objetivo es devolverle a la población “descarriada” su sentido moral, lo que implica cambiarles determinados hábitos (Cardoso de Oliveira, 1993: 26). Así, muestran, incluso en actos públicos, la desaprobación que les merecen las actitudes y/o comentarios de algunos beneficiarios de etnia gitana.

Asisto a unas jornadas organizadas por la fundación Luis Vives sobre el tema de la inclusión social. Cuando expone un trabajador social que lleva un grupo con gitanos, una mujer de la EMV (Empresa Municipal de Vivienda) levanta la mano y le dice “Es que lo que no habría que hacer es darle casa sin hacer nada a cambio”. A continuación, el trabajador social cuenta la anécdota de que un día un hombre gitano le dijo “Yo por menos de 1500 Euros no quiero trabajar.” El trabajador social cuenta en ese momento que le contestó que, si quería 1500 Euros al mes, que hubiese opositado como él. (Registro de campo tomado durante asistencia a jornadas sobre las políticas sociales en la CM relativas a la Inclusión social, Madrid, octubre 2007.)

Al estar tan seguros de sus verdades, estos profesionales del grupo fiscalizador no establecen “diálogo interétnico” alguno con la población gitana, que implicaría una conversación realizada “en términos argumentativos y democráticos” (Cardoso de Oliveira, 1993: 27). Sus presupuestos morales y lo que asumen como deberes éticos están en la base de la interpretación de tintes autoritarios que realizan de la RMI, que se focaliza en promover el compromiso de los perceptores gitanos con la participación en actividades de inserción. De este modo, ante las negativas de éstos a hacer lo que los trabajadores sociales les “mandan”, estiman que es así porque “tienen mucho morro” y entienden como un sacrilegio la falta de compromiso de algunos de ellos.

- A: ¿Y cómo haces cuando tienes que mandarles a un taller?
J: Pues, ahí es donde nos sentimos muy impotentes, porque yo ahora mismo tengo una de las mujeres, yo sé que vende con las hijas... Son 2 hijas de 20 años, que tendrían posibilidad de trabajo mejor que muchas mujeres inmigrantes. Son unas chicas muy normales en todos los sentidos, sólo que no tienen mucha formación, pero ninguna motivación y, además, las mandas...
A: ¿Trabajas con las hijas también?
J: Intento, intento. Estas hijas son de 20 años y que están inactivas. No hacen nada. “¿Qué hacéis en casa?”. “Ayudamos a mi madre”. “¿En qué?” “No, es que mi tía está enferma...”. Unas excusas tontísimas. Las mandas a un lugar... donde claro, como sólo puedes exigir, además, al titular, pues, una por razones de edad, que es la madre, a lo mejor, pues, tampoco va a encontrar muchas posibilidades, Pero, vamos, que no quieren. Están vendiendo, seguro, y esto es un complemento.
A: ¿Cómo lo llevas?
J: Mal, porque éticamente produce conflictos y porque no sé muy bien qué hacer con ellas. Yo, con la de las hijas, si me estoy planteando iniciar un procedimiento de expediente sancionador. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años.)

Estos trabajadores sociales consideran muy importante que los sujetos perceptores de la RMI se esfuercen a cambio de la prestación económica, y no tienen en cuenta las diferentes

posiciones que éstos ocupan en cuanto a actividad laboral, formación académica, habilidades institucionales, redes sociales, recursos económicos, etc., quedando “el esfuerzo” como único criterio para medir su grado de compromiso con la institución, tal como parece que ocurre también –según aseguran Lareau y Shumar 1996– con los educadores en la institución escolar.

Estas diferencias en recursos sociales [son] en general, invisibles para los educadores, quienes, con un modelo individualista [interpretan] que los esfuerzos de los padres para acudir a la escuela funcionan como un indicador de su grado de compromiso [personal] (Lareau y Shumar, 1996: 26, en Díaz de Rada, 2005)

Para Díaz de Rada (2005), el individualismo que de-socializa a los sujetos es inherente a la institución burocrática, principalmente en cuanto a que ésta “aspira a convencer a los sujetos de que su origen social es irrelevante para alcanzar el reino de la movilidad ascendente.” Así, los trabajadores sociales, que quieren que algo en la situación de los usuarios de la RMI cambie, los derivan a diversas actividades, siendo ello concebido en sí mismo –como se indicó en el capítulo tercero– como un paso que les permite avanzar. De este modo, el que los gitanos beneficiarios de la RMI, por ejemplo, rechacen asistir a las actividades que se les recomiendan o no muestren voluntad por adherirse a ellas ofende a algunos profesionales, quienes interpretan estas conductas como una afrenta moral a los principios que, según ellos, deberían regir los comportamientos de quienes reciben la prestación económica. Ello, parafraseando a Cardoso de Oliveira (1993), revela que el ámbito de aplicación de la RMI es idóneo para estudiar los fenómenos morales y éticos que surgen en las relaciones entre grupos y entre personas que se distinguen de acuerdo a auto-representaciones elaboradas en términos culturales:

Sólo me gustaría señalar que la mayor visibilidad de la cuestión moral en las áreas de fricción interétnica se debe a la comparación que inmediatamente podemos hacer entre distintas esferas de valor. (...) Debo insistir una vez más (...) en que los fenómenos morales y éticos ganarán en tangibilidad si son observados en el interior de sistemas interétnicos, eso, sin duda, porque se presentan en sus estados más críticos expresando las crisis de esos sistemas (Cardoso de Oliveira, 1993: 28).

A estos profesionales es a los que les molesta que se hayan generado adaptaciones al proceso general de la RMI para los beneficiarios que chararrean o trabajan en el mercado laboral informal, dado que tales adaptaciones suponen un cuestionamiento de sus principios morales de carácter universalista¹²¹. Este doble rasero burocrático importuna a dichos

¹²¹ Martín Estalayo (2011: 21) indica que, en ocasiones, los profesionales del trabajo social dejan en suspenso la ética profesional, sustituyéndola por su moral individual como base para la toma de decisiones en el contexto profesional. En este sentido, la agresividad con la que algunos trabajadores sociales entrevistados se expresan acerca de la conducta de algunos beneficiarios de la RMI gitanos pone de manifiesto que se están guiando de acuerdo a sus nociones de lo que está bien y lo que está mal, no de acuerdo a lo que está permitido o no por la legislación o la ética profesional correspondientes.

trabajadores sociales, que –como se ha visto en otro capítulo– consideran que a esos beneficiarios se les facilita en demasía la consecución de la RMI en comparación con otros que han trabajado en la economía formal, a los que se les requiere mucha más documentación. Penalizan, así, a las personas que no se comportan de acuerdo al papel tradicional del excluido, esto es, a las que no demuestran ostensiblemente estar necesitadas, sea a través de su sufrimiento o de un relato desdichado sobre las penurias de su vida.

Rebeca, trabajadora social de Servicios Sociales, me cuenta que tiene una mujer que cumple todos los requisitos menos uno, y que no le conceden la RMI por un tema de una sentencia que no ha salido. Con tono de enfado, me cuenta el caso de una mujer gitana, “rubia y guapa, que podría trabajar de lo que quisiera”, a la que la Comunidad de Madrid le ha aceptado como demostración de ingresos una declaración jurada “cutre” en la que dice que sólo tiene 10 euros al mes. Me dice que no le parece justo, y que se nota perfectamente que la mujer gitana maneja dinero. (Registro de campo: conversación con trabajadora social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, julio 2008)

En desacuerdo con el reparto de los recursos públicos que, en su opinión, beneficia a algunos gitanos perceptores de la RMI, ciertos profesionales han llegado a manipular la información que les dan sobre cómo conseguir, por ejemplo, vivienda de protección oficial cuando piensan que no la “necesitan”.

Juan, trabajador de la CM, me dice algo así como “Yo me planto. Yo con gitanos que ya sabía que tenían un piso y que estaban intentando conseguir otro les inventaba papeles hasta que se mareaban y se cansaban, hasta que me decían que ya tenían otro piso y que no necesitaban otro”. Más adelante añade: “Viven como reyes”. Cuenta que está muy molesto porque los gitanos saben cómo “jugar” para conseguir vivienda. Me habla del caso de un gitano al que conoce que reside en Cañada Real desde hace 3 años y que un día le llegó y le dijo: “Me van a dar un piso por estar empadronado en el Salobral.” (Registro de campo: conversación informal con trabajador social de IRIS que trabaja realojando gitanos, mayo 2006.).

Este desfase entre la exigencia de requisitos objetivos (de escasez económica) y la demanda de una cierta subjetividad (de actitudes, comportamientos y discursos coherentes con la visión más grave de la exclusión social) da la clave de lo que, en términos de Fassin –quien retoma la distinción de Simmel entre derecho y obligación–, podría llamarse “políticas de la obligación”, en las que “la realidad de un derecho” procede de una relación asimétrica entre obligante y obligado.

Ciertamente se podría argumentar el hecho de que beneficiarse con un mínimo de recursos para sobrevivir o con una tarjeta de residencia para curarse son derechos consagrados en las constituciones nacionales y en las convenciones internacionales, pero la realidad de ese derecho, procede más bien, en ambos casos, de una relación asimétrica entre obligante y obligado. (Fassin 2003: 75)

Así, cuando los perceptores cuentan con actitudes y deseos similares a los de los profesionales del grupo fiscalizador, pasan a ser valorados positivamente dentro de los Servicios Sociales. Contrariamente, si los perceptores no se adhieren a los valores normativos

ya mencionados, aparecen juicios morales negativos sobre ellos, pasando a ser considerados como los usuarios que demandan mucho pero no muestran esfuerzo a cambio.

Rebeca, trabajadora social, me cuenta el caso de una mujer gitana que fue a pedirle dinero para arreglarse la boca. Dice algo así como: “¡Fíjate!, llegó una mujer de 30 años que no tiene ningún diente a pedirme 3 millones de pesetas para ponerse unos implantes”. (Se ríe y pone cara de incredulidad) Continúa hablando, exclamando: “¡3 millones! Tenemos unas ayudas, pero no de tres millones, y no para poner implantes.” Me explica que hoy la he “pillado quemada” y se justifica diciendo que “a los que ve que lo necesitan” les “surte” de muchas cosas, pero que lo que le da “rabia” son “los que quieren aprovecharse”. (...) Continúa hablando acalorada de que hay algunas personas que con tal de no trabajar le quieren contar cualquier tipo de problema, de enfermedades, y le dicen que por menos de 1500 euros al mes no trabajan. Prosigue: “¡Y yo les digo que si se creen que lo que aquí piden lo saco yo de un cajón y se lo doy!, ¡les digo que es de todos los pringados que nos levantamos todas las mañanas a trabajar y cotizamos!” Cuando acaba la frase me explica que no se lo dice en esos términos. (Registro de campo: conversación con trabajadora social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, julio 2008)

El perceptor de la RMI no se concibe como un objeto pasivo de la intervención social, sino que es invitado a comportarse como un sujeto activo de la misma (Dubet, 2007: 56), exigiéndosele una actitud de previsión, de “dar algo a cambio”, de esfuerzo y de “querer mejorar”.

El relato prueba la buena fe y la buena voluntad del solicitante que acepta entonces descubrirse. Él otorga la contraparte necesaria del intercambio de prestaciones entre el Estado y sus sujetos. El dar para recibir del Estado. (Fassin, 2003: 61, 75)

Los profesionales que se ajustan al perfil fiscalizador son propensos a recordarles a los usuarios que no pueden percibir algo sin “hacer nada a cambio”, no reconociendo como parte del “hacer algo” las múltiples y variadas actividades laborales que desarrollan y reprendiendo, a partir de una representación del colectivo como “dependiente y cronificado”, la falta de esfuerzo para la consecución de formación y empleo. Consideran que la RMI “apalanca” a los sujetos, que les “cronifica” e impide que trabajen (recuérdese que los trabajos en la economía informal no son reconocidos como tales). La integración social pasa ineludiblemente por la inserción y la activación, a través de medidas de ayuda, disciplina y control, orientadas principalmente por la ética del trabajo (Serrano y Arriba, 1998: 49; Bauman, 2000). Bajo estos parámetros, “lo normal” (la actitud favorable hacia el empleo y las actividades de inserción) se constituye como un principio coercitivo. El poder de normalización obliga, por un lado, a compartir los valores de la sociedad mayoritaria pero, por otro, individualiza pues se pretende que cada sujeto se comporte como un ser racional, planificador y autónomo (Foucault, 2005: 188-189), pasando a ser desvalorizadas la “dependencia” y la pasividad. La misma tendencia individualizadora la hallamos cuando se habla de “la falta de motivación” de los perceptores de la RMI. Aunque se ha señalado a menudo la relación de ésta con la “obligación de participar”, incluso en textos escritos por trabajadores sociales (Martín Giner,

2007; Julià, 2008), este hecho no es tenido en cuenta por los profesionales que responden al perfil fiscalizador. De este modo, aunque hagan referencia a la multi-causalidad implicada en las situaciones que llevan a los individuos a hacer uso de prestaciones como la RMI, terminan cayendo en la tipificación de los beneficiarios en categorías estancas, como es la de “personas desmotivadas” (Julià, 2008). En concordancia con ello, se produce un discurso que ubica las causas de la exclusión social en características personales, como carencias afectivas o de habilidades sociales, sin prestar atención a otro tipo de circunstancias (socio-económicas, históricas, etc.) que pueden estar influyendo en dicha desmotivación.

Por otra parte, la categoría de gitano “aprovechado”, que también es frecuente, se relaciona con la visión de la labor del profesional como encargado de “poner límites”, de tener mano dura y de “educar” a los gitanos para que utilicen los “recursos” adecuadamente. Es una categoría que arrastra imágenes sobre un gasto excesivo de dinero y un consumo conspicuo (móviles, furgonetas, televisiones de plasma, etc.) por parte de éstos, así como críticas a su aparente falta de ahorro y planificación. Algunos profesionales, incomodados por la “acumulación” de recursos públicos por parte del colectivo gitano, tratan de poner freno a la misma, tal como se ha visto más atrás y puede verse de nuevo en el siguiente verbatim:

Rebeca me cuenta que llamó a la EMV¹²² para contarles que una gitana a la que atiende “maneja” dinero, pero que aun así le dieron un piso “nuevecito” con cuatro habitaciones. (Registro de campo: conversación con trabajadora social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, julio 2008)

Uno de los inconvenientes esenciales parece estar en que los miembros “problemáticos” del colectivo gitano (que dan fama al conjunto) no muestren signos de cumplir, en términos de Simmel, “las obligaciones del asistido” (Simmel, 1998, en Fassin, 2000a: 955), siendo la principal de ellas la manifestación de su buena voluntad a la par que solicitan las ayudas sociales bajo el principio de la solidaridad nacional (Fassin, 2000a: 956). Se puede traer a colación aquí la reflexión de Castel (1996) sobre las implicaciones del individualismo, que no son iguales para todos los ciudadanos, de manera que distingue lo que considera un “individualismo positivo” propio del liberalismo (del sujeto independiente, libre, autónomo), del “individualismo negativo”, que es el que de-socializa y aparece asociado a la gestión del pauperismo. La demanda de autonomía, que incluye en este caso el cumplimiento de las “obligaciones del asistido”, afecta en mayor medida a los ciudadanos de posiciones sociales bajas que solicitan ayudas sociales del Estado. Esta demanda de autonomía afecta negativamente a “los excluidos” debido a que son conminados, por parte de los profesionales, a asumir comportamientos que llevan implícita la asunción de ciertos valores (como la

¹²² Empresa Municipal de la Vivienda que, junto al IRIS, realoja a gitanos en la Comunidad de Madrid.

valoración del control del tiempo o la planificación del proceso de cambio vital), que se plantean en términos individuales y con los cuales dichos sujetos no se sienten identificados. Se les exige así (la autonomía se dibuja como una exigencia de carácter universal) una conducta individual intachable que, a la larga, termina por estigmatizarles aun más. En un sentido parecido se pronuncia Fassin:

Según la posición que el individuo ocupa en el mundo social, la conminación a ser independiente y autónomo no tendrá la misma significación, implicando de una parte las potencialidades de realización de uno mismo y del otro lado las coacciones de la construcción de una identidad impuesta (Fassin, 2000a: 955).

Este último autor señala que la intensidad de la demanda de autonomía se manifiesta con especial fuerza en los dispositivos de intervención social del Estado para los pobres y excluidos, donde se desarrolla el doble registro político de los derechos del ciudadano, por un lado, y de las “obligaciones del asistido”, por otro. Así, de quienes demandan la solidaridad nacional, se espera que, a cambio, hagan una contribución que esté a la altura de sus medios. La exposición oral de la situación personal es parte de ese pago o contraprestación, mediante la cual se quiere capturar el modo de existencia de los excluidos (Fassin, 2000a: 955-956). Castel, por su parte, recuerda que todo ello se puede ver claramente a través de “los procedimientos de contractualización de la RMI”.

Quien no puede pagar de otro modo debe hacerlo continuamente de su persona, lo que es un ejercicio agotador. Este mecanismo se observa bien en los procedimientos de contractualización de la RMI: el demandante no tiene nada más que aportar que el relato de su vida con sus éxitos y sus fracasos, y ese pobre material se escruta para extraer una perspectiva de rehabilitación a fin de “construir un proyecto”, de definir un “contrato de inserción”. Los fragmentos de una biografía hecha añicos constituyen la única moneda para acceder a un derecho (Castel, 1996: 473, en Fassin, 2000a: 956¹²³).

Así, se establece una relación de don y de contra-don entre los pobres y los poderes públicos que pone de manifiesto mucho más que intercambios materiales. En las sociedades contemporáneas, a cambio de los bienes que los pobres reciben, es “su vida misma, en tanto que relato”, adaptada por ellos y “puesta en orden” por los poderes públicos, la que se ofrece (Fassin, 2000a: 956)¹²⁴. Por otro lado, deben aceptar las vigilancias, observaciones y comentarios constantes de los profesionales de la intervención social por no adherirse a “la norma”, por “no desear hacer algo con sus vidas”, por no ser lo bastante “autónomos” o por no asumir determinados hábitos saludables, sea la dieta “sana” o dejar la automedicación. En el siguiente registro de campo podemos ver que las mujeres gitanas de un curso de

¹²³ Traducción propia.

¹²⁴ Fassin cita un libro de Geremek (1987) que muestra las permanencias y las transformaciones en la gestión de los pobres en Europa desde la Edad Media.

alfabetización son criticadas por no querer participar en una actividad organizadas para ellas por el IRIS.

Entra en el aula la coordinadora del IRIS de un poblado chabolista, Alicia, y le dice a la profesora de un proyecto de integración de una ONG, Isabel, que si puede contarle algo a las mujeres (todas perceptoras de la RMI). Isabel entra a la clase, donde hay 8 mujeres sentadas en círculo. Entra también Cecilia, trabajadora social del IRIS. En ese momento una de las mujeres saca dos cartas del pecho y se levanta para dárselas a Cecilia, a quien le pide que se las lea. Ésta le dice que luego se las lee, que se siente. La mujer se sienta. Isabel les dice a las mujeres que al igual que el año pasado, éste también se está organizando unas actividades por el día de la mujer, y que van a ser el martes de la semana que viene. Les dice que va a haber un desayuno, luego conversación con mujeres gitanas que se han insertado laboralmente y luego algún taller, y que se volverá a la hora de comer. No hay muestra de interés por parte de las mujeres. Nadie dice nada, y las tres portuguesas están con cara seria. Alicia les dice que habrá guardería para los niños de cero a tres años, pero no para aquellos que tengan plaza en algún centro del distrito o en la escuela infantil del poblado. Varias mujeres están hablando a la vez entre ellas. Isabel les pide que escuchen. Dos mujeres tienen cara de enfado. Una, de unos 20 años, protesta diciendo que, si ella no puede llevar a su hijo, no puede ir. Alicia repite: “Podéis ir con todos los niños que no estén ni en la escuela infantil de aquí ni en los colegios del distrito.” La mujer se pone a hablar con la de al lado. Alicia la mira y dice en tono bastante cortante: “¿Qué es lo que pasa?”. Ella dice: “Pero es que yo tengo que llevar a mi hijo”. Alicia le pregunta por la edad de su hijo. Ella contesta que tres años. Con todo duro, Alicia la increpa por tercera vez: “¿Pero yo que he dicho? ¿Que podéis llevar a los niños de cero a tres años! A los que no podéis llevar es a los que deberían estar en el colegio”. Otra mujer comenta que quién le va a dar la comida a los maridos. La reacción de Alicia es inmediata, y dice algo así como: “¡Es increíble!, vosotras sólo pensáis en la familia: hijos-familia-hijos, ¡ni un día para vosotras! ¡Mira que sois! No me puedo creer que no os apetezca tener un poco de tiempo para vosotras mismas. ¡Sois la monda!, ¿acaso ellos os dan explicaciones de lo que hacen?” Algunas mujeres asienten. (Registro de campo: observación en poblado chabolista, proyecto 3.2, zona sureste de Madrid, marzo 2008.)

El caso recién expuesto da para discutir diversos temas, como son, por ejemplo, la escasa voz que tiene la población sobre la que se interviene a la hora de definir cuáles son “sus necesidades”, o las críticas de que son objeto, en este caso, las mujeres gitanas por “no querer tener tiempo para sí mismas”; esto último en línea con la visión imperante sobre la necesaria individualización y el surgimiento del sujeto autónomo y emprendedor. Se cuestiona su pasividad a la vez que no se les pregunta en qué tipo de actividades les interesaría participar. De igual modo, en el registro de campo que se reproduce a continuación, se puede apreciar que una profesional (ahora una educadora) se siente molesta porque sus alumnas, perceptoras de la RMI, no están asistiendo a los talleres que ha organizado en colaboración con el centro de salud de la zona.

Entro donde está Verónica, profesora en un proyecto de integración de una fundación y dice: “Estoy desesperada, hoy hemos dicho que vamos a ir. Al final se escaquearán, pero hoy me han dicho todas que iban a ir (a la última sesión de los talleres de salud). Hoy las he amenazado y les he puesto un examen de nivel, pero es que estoy desesperada, porque hay una que llevaba siglos sin venir y hoy que viene me dice: ‘Es que yo no lo puedo hacer, es que no tengo gafas’, y le digo en el mismo tono, ‘¿Y yo qué quieres que haga? Llevas siglos sin venir. Antes de dejar de venir ya me decías que no tenías gafas, y ahora me vuelves a decir que no tienes gafas’”. Verónica resopla, con cara de enfado y frustración. (Registro de campo: observación en ONG, proyecto 5, zona sur de Madrid, junio 2008.)

Vigilados y regañados, los beneficiarios de la RMI tienen que dar constantes explicaciones sobre sus faltas de asistencia o sobre su falta de conocimiento sobre temas diversos. Por otra parte, las relaciones que tienen lugar en el despacho adoptan a menudo un carácter paternalista: a estas personas se les dice lo que tienen que hacer, se las aconseja, se las convence y se las reprende.

5.1 Estrategias del grupo fiscalizador para hacer cumplir el PII

Los profesionales que responden al perfil fiscalizador desarrollan diferentes estrategias para promover la participación en las actividades de inserción. La complejidad de la RMI y la ambigüedad de los deberes y derechos que entraña su aplicación sitúan a estos profesionales en una posición en la que las estrategias de presión hacia los perceptores de la RMI ya no pueden ser tan abiertamente mostradas como durante el periodo de aplicación del Ingreso Madrileño de Inserción, impeliendo así a que estos trabajadores sociales tengan que buscar nuevos resortes de poder.

a) **Una primera estrategia de presión consiste en reservarse información sobre el cambio de derechos/obligaciones que entraña la ley RMI.** La complejidad de ésta y del lenguaje jurídico-administrativo que se usa, así como la dificultad de comprender las diferentes instituciones que la ejecutan y su reparto de funciones, contrastan con el poco énfasis que los profesionales ponen en hacer comprensible a los beneficiarios de la RMI el nuevo marco legal de la prestación, centrando la intervención social en otros aspectos de la misma.

Esta estrategia consistente en no informar (o, a veces, en desinformar) se piensa que favorece la participación de los beneficiarios de la RMI en las actividades de inserción, bajo el supuesto de que la asistencia a las mismas es obligatoria. En el capítulo siguiente veremos que la mayoría de los perceptores gitanos entrevistados hablan de la RMI como si del IMI se tratase, no apreciando diferencia alguna (a parte del nombre) con respecto a la prestación anterior. Los profesionales, dejando que los perceptores de la RMI sigan actuando según las mismas premisas que con el IMI, no les explicitan las novedades de la actual prestación como, por ejemplo, que tienen derecho a consensuar el Programa Individual de Inserción (y, en su caso, no firmarlo si no estuviesen de acuerdo con las actividades en él escritas) o que únicamente los titulares de la prestación se encuentran obligados a cumplir las actividades que aparecen en dicho PII, tal como ya se ha remarcado en otros lugares de esta tesis doctoral.

Dada la alta tasa de analfabetismo funcional entre los gitanos/as que acuden a los Servicios Sociales (y, así, por ejemplo, en todas las ONG en las que se ha realizado trabajo de campo se estaban desarrollando proyectos de integración encaminados a la alfabetización de mujeres y hombres gitanos), se puede dar por sentado que no tienen la destreza suficiente para realizar una lectura en profundidad de la ley y del decreto que regulan la RMI, para comprender la relación de ésta con otras prestaciones sociales del Estado, ni para conocer a fondo las obligaciones y derechos que se derivan de ella o las infracciones que generan extinción o suspensión de la misma. La comprensión de las múltiples facetas de la prestación sólo es posible, de hecho, para las personas diestras en la lectura y el análisis de textos con formato jurídico-administrativo, por lo que esta estrategia de no informar produce una situación de desigualdad en el control de la información entre los profesionales y los beneficiarios de la RMI de posición social más baja, que permite redireccionar a estos últimos hacia “dispositivos adaptados” (Fassin, 2000a: 957) sin apenas resistencia. Desprovistos de la información necesaria, es imposible que los perceptores de la RMI participen en el juego en un plano de igualdad. La desinformación o no-información, por tanto, es un arma que permite a los profesionales ganar poder sobre los beneficiarios gitanos, pudiendo imponerles –bajo el amparo de la ilusión de obligatoriedad que crean y los precedentes históricos marcados por el IMI– la participación en actividades formativas.

¿Qué es lo que hay detrás del “velo de ignorancia” que separa al demandante de la institución? Es preciso distinguir aquí los criterios oficialmente enunciados y la manera en que son puestos en práctica. (Fassin, 2003: 66-67)

En términos de Foucault (2005:36), el saber prolonga y refuerza los efectos del poder. En este caso, los perceptores de la RMI no son informados de las “reglas del juego”. Y Fassin (2003), como se desprende de la cita anterior, también hace hincapié en la asimetría que se deriva de la diferente información que manejan los solicitantes de las ayudas con respecto a los encargados de distribuirlas, estableciendo una distinción entre lo que se enuncia formalmente en las políticas y la forma en que es llevado a la práctica.

Los solicitantes suponen más de lo que realmente conocen de los principios según los cuales serán juzgados (es evidente que ignoran largamente las reglas del juego y se equivocan sobre los valores de los agentes); sin embargo, los dispensadores disponen de un gran número de informaciones privadas, incluso íntimas, sobre las personas (sin que por ello, evidentemente, accedan de manera transparente a la verdad de su situación a la que no acceden sino en forma de discurso). (Fassin, 2003: 76)

Los perceptores de la RMI “entran en las reglas del juego” sin conocimiento suficiente de éstas, quedando a la deriva de las distintas estrategias profesionales que tienden a impulsar su participación en proyectos de integración. Aun así, varios trabajadores sociales que se ajustan al perfil fiscalizador consideran que los perceptores gitanos conocen al dedillo la ley y

saben cómo saltársela: por ejemplo, aduciendo algunas mujeres que han sido abandonadas por sus maridos, no teniendo así que solicitar la declaración de haber hecho la denuncia para conseguir la pensión de alimentos. Y otros estiman que los gitanos “ya saben que no se les puede obligar” a nada, por lo que es ocioso decirles algo al respecto:

La trabajadora de una ONG que trabaja con mujeres gitanas me dice que hay trabajadores sociales que le han comentado que mucha gente “ya sabe” que no se les puede obligar a los apoyos sociales y que no los quieren, y que se quedan sólo con los apoyos económicos. Me comenta que la gente se queda con “lo fácil”, con lo que no requiere esfuerzo, y añade que las actividades de inserción sí que requieren esfuerzo y voluntad. (Entrevista a trabajadora de ONG que imparte proyectos de integración, zona sur de Madrid, junio 2008.)

Conozcan o no conozcan la normativa sobre la prestación de la RMI, lo destacable es que los profesionales –como se ha dicho– no sólo omiten referirse a los nuevos aspectos de la ley en su trato con los perceptores gitanos, sino que se sorprenden cuando se les pregunta si existen campañas de difusión para la población general en las que se dé a conocer la existencia de esta prestación. Ante la inexistencia de campañas informativas que sean accesibles¹²⁵, aducen que ello es así para evitar el riesgo del “efecto llamada”, pues serviría de reclamo para aquellas personas que engañarían con tal de conseguir la prestación. De este modo, profesionales que, en principio, cuestionan la precariedad de la ayuda acaban hablando de ella en términos de escasez de recursos y de abundancia de beneficiarios de la misma, cuando realmente en la Comunidad de Madrid oscila entre 12.000 y 13.000 el número de ellos, que es bastante inferior a la estimación de las personas bajo el umbral de la pobreza residentes en esta Comunidad¹²⁶. Es como si no se quisiese ampliar la cantidad de personas perceptoras de la RMI más allá de la población tradicional de los Servicios Sociales, esto es, de la población en situación de exclusión más severa.

Si tienen dinero de sobra, no sería cuestión de animar a la gente, pero yo creo que a la gente que está en una situación muy precaria sí le dicen: “Vaya a Servicios Sociales”, y entonces ya lo vemos nosotros, y se lo proponemos. Yo tengo ahí dos rentas mínimas completas para que me traigan lo que falta para pedírselo a dos mujeres y pedírselo en estos próximos días, y ya se lo pides tú. Pero hacerlo así (mediante difusión a toda la población) me parece un poco riesgoso, porque habrá de todo, pero hay situaciones que se cuelan, que te van a decir que no tienen ingresos y que no tienen, y en algunos casos, no tenemos certeza ninguna, pero que en algunos casos sí crees que más o menos es verdad y que uno no puede estar sin ingresos. Pero hay gente que te crea dudas. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, zona centro de Madrid, 45 años)

¹²⁵ Se puede encontrar información sobre la RMI en la opaca web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), en el Plan Contra la Exclusión de la CAM y en los documentos reguladores.

¹²⁶ El 25 noviembre 2011, Milagros Hernández, concejala por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, publica en www.madriidiario.es: “las situaciones de pobreza en Madrid han crecido cuatro puntos porcentuales pasando de 9,5 al 13,3% de los madrileños. Y concretando en la ciudad de Madrid la pobreza severa afecta a más de 43.000 personas, ya que 9.600 familias madrileñas tienen ingresos inferiores a los correspondientes a la pobreza severa. Y el fenómeno de la pobreza cada vez afecta más a los menores, siendo el 14,6% de los menores de 16 años los afectados de pobreza en Madrid”. En línea con ello, en un informe de UGT, se afirma que en Madrid hay cerca de un millón de madrileños (983.000 personas) que viven con menos de 7.070 euros al año. Según datos de la UE recogidos en un informe de UGT, esto supone el 14,63% de la población de la CM (Fuente: www.madriidiario.es, 25 noviembre 2011).

Así, como se ha dicho, algunos profesionales expresan su disgusto por la propagación de información sobre la RMI.

Ya se ha corrido la voz de que, como figura en el reglamento, sólo los titulares están obligados. Bueno, no, pone que están obligados todos, pero sólo al titular se le puede hacer una medida coercitiva de suspensión o de extinción de la RMI por no hacer una actividad. Entonces, esto ya se sabe. Entonces, la ponen a la mujer, que al final es la que carga con la casa, con los niños y encima tiene que ir al proyecto. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

A la luz de los datos recabados, se puede afirmar que se han consolidado en la aplicación de la RMI un conjunto de malas prácticas que están entorpeciendo que adquiera el carácter de derecho que, en principio, se le supone bajo la actual ley. Para dar contenido a la anterior afirmación, cabe traer hasta aquí dos reflexiones teóricas que pueden enriquecer el material de campo que se está exponiendo. Por un lado, la de Cánimas (2008: 159-170) sobre la actual polisemia del concepto autonomía en el ámbito de la intervención social, y por otro, la de Tepichín (2009: 111-146) sobre cómo, para que la autonomía implique o propicie la participación social (uno de los objetivos de la ley de la RMI) y la toma de decisiones por parte de los beneficiarios de políticas sociales, ha de incluir un procedimiento de consentimiento informado. Todo ello en apoyo de la idea de que, si bien los profesionales demandan constantemente por parte del colectivo gitano muestras de buena voluntad que contradigan la visión del mismo como dependiente y poco proclive al cambio, no se le ofrece la información necesaria para que pueda comprometerse de manera informada y “autónoma” en la realización de las actividades que se firman en los programas individuales de inserción. Por tanto, el consentimiento informado (que, según Tepichín, promovería su implicación en el proceso de inserción y que pudieran decidir en un marco de reconocimiento real de su autonomía) no aparece en la práctica de los profesionales más fiscalizadores, negando así a estos solicitantes/beneficiarios de la RMI la posibilidad de disfrutar del derecho a negociar su proceso de inserción social.

Cánimas (2008) indica que la polisemia del término “autonomía” se muestra claramente cuando los profesionales de la intervención psico-socio-educativa lo utilizan sin especificar a qué tipo de autonomía se refieren, no siendo posible deducirlo del contexto discursivo en el que es usado. Ello –señala– “puede llevar a confusiones, a dificultar las buenas prácticas y la consecución de aquellos objetivos relacionados con ella, e incluso a conculcar algunos derechos” (Cánimas, 2008: 160). Autonomía, asegura este autor, proviene del griego *autós*, que puede traducirse por “el mismo”, “el propio”, “uno mismo”; y de *nomos*, que puede traducirse por “ley”, “norma”. Etimológicamente significa “darse la ley a sí

mismo”, algo que pueden hacer las personas como entes individuales o como conjuntos de seres que forman entidades políticas (Cánimas, 2008: 161-162). Distingue también entre autonomía personal o individual y autonomía política, refiriéndose la primera a la capacidad de autogobierno de las personas en tanto que seres individuales, mientras que la segunda alude a lo mismo pero en tanto que grupo o sujeto colectivo. Todo ello arroja luz sobre el sentido de las actividades que se realizan con el colectivo gitano al amparo de los proyectos de integración financiados por la RMI. Como se ha indicado más atrás, los gitanos incomodan a menudo a los profesionales al considerar que no actúan de manera suficientemente individualizada (les molesta, por ejemplo, que se pasen la información unos a otros), por lo que las actividades que llevan a cabo con ellos van dirigidas a favorecer, entre otras cosas, esa individualización (a promover la reflexividad del individuo fuera de las pautas normativas del colectivo de referencia), a la vez que incluyen contenidos de contención y auto-gobierno coherentes con los comportamientos de las clases medias –tal como ya se ha comentado–, en el sentido de animar la represión de emociones como la rabia, el genio y la explosividad en el contacto con las instituciones públicas.

A tenor del texto de Cánimas, podríamos preguntarnos qué tipo de autonomía buscan promover los profesionales que gestionan y aplican la RMI con los perceptores gitanos. ¿Pretenden dar cabida a pautas de comportamiento autónomas a pesar de que éstas puedan ir en contra del criterio profesional?, ¿o esperan simplemente que se comporten según la idea de autonomía que ellos manejan? Cánimas considera que, con el triunfo del liberalismo, en los Estados democráticos actuales casi todas las intervenciones psico-socio-educativas que pretenden fomentar la autonomía se orientan al terreno de lo personal, puesto que incluso las que podría pensarse que se dirigen al ámbito de lo político (como “empoderamiento de colectivos desfavorecidos”) tratan de fomentar una autonomía personal que ha de manifestarse en el “sujeto colectivo o comunitario”. La autonomía personal deriva del deseo de la persona de ser dueña de sus capacidades físicas, psíquicas, económicas y sociales; y consiste en servirse de ellas en la medida que sea. La autonomía política, en cambio, proviene del “orden social” (sea éste fruto del “pacto social”, de la “imposición de clase” o del “imperio”) y estriba en que los ciudadanos puedan actuar sin ser obstaculizados por quienes se hayan erigido como “sujeto colectivo” o Estado (Cánimas, 2008: 162)¹²⁷. Cánimas saca a colación la definición de autonomía que ofrece Tugendhat (2008), quien asegura que el sentido originario y fuerte de esta palabra es el referido a la capacidad reflexiva individual:

¹²⁷ Este autor sostiene (p.162, nota a pie 5) que la distinción entre la autonomía personal y la autonomía política coincide, a grandes rasgos, con la célebre distinción que Isaiah Berlin estableció en 1958 entre “libertad positiva” y “libertad negativa.

(La autonomía no hace referencia) a la voluntad en general, sino específicamente a esa capacidad humana de una voluntad reflexiva que está implicada cuando se puede decir “depende de mí” (Tugendhat, 2008: 40, en Cánimas, 2008: 163).

En el capítulo tercero (apartado 3.3.) y en el capítulo cuarto ya se ha tratado el hecho de que, en diversos foros profesionales, se está construyendo una imagen del colectivo gitano como carente de capacidad para decidir racionalmente, de modo que se sospecha su incapacidad para comportarse de una manera reflexiva. Aquí queremos remarcar la insistencia con que Cánimas sostiene que la falta de precisión en el empleo del término “autonomía” puede llevar a fortalecer ese prejuicio, que consiste en pensar que:

Una persona que tiene disminuida su autonomía física o económica también tiene disminuida su capacidad para decidir, una conexión que lamentablemente abunda en la historia de los servicios sociales, sanitarios y educativos (Cánimas, 2008: 165).

Este autor especifica que la autonomía no se ajusta a un sistema binario, sino a una “escala de grados y matices” (2008: 166), puesto que abarca muchos tipos de decisiones: desde las propiamente morales (alusivas a una concepción del bien y del mal) hasta otras mucho más terrenales, como la que consiste en decidir qué le apetece hacer a uno en un momento dado. Asegura que de los cuatro tipos de autonomía personal que se pueden distinguir (física, psíquica, económica y social), la psíquica es la única que responde al sentido originario del término, como capacidad o acto de toma de decisiones; y añade algo que es muy relevante para analizar las estrategias que los profesionales que trabajan con las rentas mínimas despliegan con los gitanos: que determinadas actitudes de los primeros pueden obstaculizar una toma de decisiones autónoma por parte de los segundos. Afirma, por último, que a la hora de valorar hasta qué punto se puede tomar una decisión, se debe tener en cuenta tres factores, que conjuntamente constituyen lo que se suele llamar responsabilidad (Cánimas, 2008: 166-167):

- a) el tipo de decisión que se ha tomado o se desea tomar;
- b) qué grado de libertad se da en este proceso;
- c) y qué capacidad se tiene de comprender la situación así como de imaginar y asumir las consecuencias de las posibles decisiones, lo que exige la posesión de competencias comunicativas y argumentativas.

Las personas gitanas beneficiarias de la RMI, de entrada, tienen poco nivel lector-escritor y provienen, en muchos casos, de posiciones sociales bajas. Por tanto, es una quimera pretender que sean totalmente autónomas en su trato con las instituciones públicas en cuanto que no cuentan con habilidades para leer documentos legales u oficiales. En varias ocasiones

he sido requerida por gitanos de asentamientos chabolistas para que les explique el contenido de alguna carta oficial que habían recibido; ocasiones en que han expresado los nervios que les causa gestionar o recibir este tipo de correspondencia o de documentación. Por tanto, me inclino a pensar que, sin el esfuerzo profesional por “traducir” los documentos oficiales o por esclarecer en qué consisten los procedimientos burocráticos, es difícil que puedan tomar decisiones autónomas, por ejemplo, sobre qué tipo de actividades están dispuestos a realizar en el contexto de un PII.

Por ello, Cánimas manifiesta que, más allá de si una persona es autónoma o no (si cuenta o no con capacidad reflexiva), la distinción importante es la que se establece entre “persona autónoma” y “elección autónoma”. Centrarse en exceso en “la persona autónoma” supone construir entidades metafísicas permanentes y, por tanto, estigmatizadas (Cánimas, 2008: 169), por lo que plantea que es necesario determinar el grado de autonomía o dependencia de una persona con relación a procesos administrativos concretos.

Cuando un profesional psico-socio-educativo se encuentre ante un usuario, debería considerar qué acciones y elecciones está realizando o desea realizar, y no tanto el hecho de que una persona sea dependiente y en qué grado (Cánimas, 2008: 169).

En cuanto a Tepichín (2009), aporta un matiz interesante en cuanto al esclarecimiento de lo que significa tomar decisiones autónomas y legítimas. Declara que sólo si las personas pueden rechazar o renegociar las decisiones que toman con los profesionales, entonces, “su consentimiento no es una formalidad, sino un consentimiento genuino, legitimador”. En cambio, si no se puede “hacer nada más que aceptar, su consentimiento no legitimará” (O’Neill, 1993: 413, en Tepichín, 2009: 120). Sostiene, así, que el consentimiento legítimo es la base de “arreglos, implícitos o explícitos” en los que los participantes tienen las condiciones para establecer sus propios términos, cambiarlos o negociarlos. En virtud de ello, el consentimiento legítimo refleja una capacidad para elegir, mientras que el consentimiento formal lo que evidencia es una falta de capacidad. La autora atribuye el concepto de consentimiento legítimo a la autonomía para participar en decisiones, dado que permite predicar la existencia de “libertad sin asignar capacidades racionales ideales o independencia ideal a otros, sin remitir a los deseos” (Tepichín, 2009: 120-121).

Después de este recorrido por el pensamiento de Cánimas y Tepichín, se aprecia de forma más clara que la estructura de gestión/aplicación de la RMI no está permitiendo fomentar procesos autónomos de participación en decisiones por parte de los beneficiarios gitanos. Es más, la relación asimétrica entre profesionales y beneficiarios se reproduce en ella, asumiendo estos últimos la firma del PII como una formalidad previa antes de la recepción de

la prestación económica. A ello contribuye la “estrategia de no-informar” que hemos tratado más atrás, que no es desplegada únicamente por los profesionales de Servicios Sociales del grupo fiscalizador, sino también por otros profesionales contratados que trabajan en contacto directo con los perceptores de la RMI.

Asisto a unas reuniones mensuales centradas en el tema de la exclusión social a las que acuden profesionales sociales y sanitarios. A la salida, en el café, hablando con educadores sociales contratados por Servicios Sociales y por una empresa subcontratada por parte de la Junta Municipal del distrito, una educadora social me cuenta que una cooperativa de intervención social que ha entrado a intervenir en Cañada Real con gitanas españolas está haciendo, entre otras actividades, “los talleres de habilidades sociales para las gitanas a las que les obligan a ir los trabajadores sociales”. (Registro de campo: notas tomadas después de observar en una reunión de profesionales sociales y sanitarios, julio 2008.)

Algunos trabajadores de ONG entrevistados dicen no informar a los perceptores de sus nuevos derechos y obligaciones por no ser ellos los encargados de esa tarea, y para evitar que dejen de asistir a sus actividades (se ha de recordar que los proyectos de integración financiados por la CM han de tener un 50% de población RMI, con lo que la no asistencia pone en riesgo su auto-reproducción). En este sentido, se amparan en la fragmentación de las funciones de intervención social entre distintas instituciones-organizaciones para no tener que ser quienes cuenten a los gitanos participantes en sus proyectos que cabe la posibilidad de no tomar parte en ellos.

Llego a una asociación que trabaja con mujeres (entre ellas hay muchas mujeres gitanas) para entrevistar a dos de las profesionales encargadas de impartir los talleres. Después de la entrevista, le pregunto a una de las profesionales si informan a las mujeres que la participación en proyectos no es obligatoria con la RMI, y me contesta que si informasen de eso “No asistiría nadie”. (Registro de campo: visita a ONG que imparte proyectos de integración, proyecto 4, zona sur de Madrid, agosto 2007)

Por tanto, los profesionales restringen la información sobre la RMI que le dan a los usuarios por motivos diferentes: los trabajadores sociales de Servicios Sociales no informan con el fin de promover la participación, logrando así que concurran a los proyectos de integración bajo la ilusión de que son obligatorios; y los profesionales de las ONG evitan hacerlo por miedo a perder participantes en las actividades que organizan, lo que llevaría a no poder justificar la necesidad de sus proyectos ante las entidades financiadoras. En general, como se ha repetido, transmiten la idea de que sin inscribirse en proyectos de integración no se consigue la prestación económica y, saltándose la parte de la negociación, derivan a las personas gitanas a programas de integración a pesar de haber otras actividades (talleres de

búsqueda de empleo, actividades de ocio y tiempo libre, etc.) a las que podrían acudir y existiendo incluso la posibilidad, en algunos casos, de no participar en ninguna¹²⁸.

T: Pues yo saco el papel, y en el papel pone “actividades a realizar”, y yo le digo: “A ver, la RMI tiene como objetivo que tú dejes de cobrarla, básicamente, y entonces tú tendrás que hacer alguna actividad que te pueda ayudar, en un momento dado, a salir de este tema”. (...) Y digo: “Entonces, tú, ¿qué actividades crees que te van a ayudar?”. Normalmente no te dicen nada. Lo que pasa es que muchos ya vienen con el rollo del IMI de que tenían que ir a los cursillos. Entonces, yo sinceramente, cuando les dices la palabra cursillo, ya les meto directamente y no pregunto más. Hay veces que sí que digo: “¿Y tú qué vas a hacer a cambio?”. Sé que esto no es legal usarlo, porque en ningún lado se establece la contraprestación. Existía en el IMI y en la RMI no. Ahora, yo al que parió la Renta Mínima me gustaría decirle si le parece educativo que alguien cobre sin hacer nada. Y cuando a una persona se le da 500 euros al mes, porque a mí esta mañana me ha pasado (con) una persona: “Es que es una mierda de paga, 500 euros al mes”. “Ya, pero es que la señora de la limpieza que trabaja en este centro cobra 650 euros, es que es el salario mínimo y trabaja 7 horas diarias. ¿Qué quieres? Si quieres dile a la señora de abajo que deje de trabajar.” Es que si yo le digo a una persona: “No es obligatorio que hagas nada por cobrar esto”, pues, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a su inserción social. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años.)

b) Junto con la *reserva de información*, otra estrategia utilizada por los profesionales fiscalizadores es el recurso a un lenguaje categórico (en términos de mandato como, por ejemplo, “tienes que”) para darles a entender a los beneficiarios de la RMI que los mínimos establecidos en el PII son obligatorios.

(Trabajador social simulando que habla con una perceptora gitana:) “Lo de que los niños vayan al colegio y vayan al seguimiento pediátrico lo voy a poner, pero esto no debería estar aquí. Tú como madre tienes estas obligaciones, cobres la RMI o cobres millones al mes”. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años.)

Los profesionales de ONG conocen esta estrategia y la critican, lo que les permite representarse como diferentes de los Servicios Sociales. Así, alegan que no sólo tienen mucho más trato con los perceptores de la RMI, sino que establecen relaciones de confianza con ellos, añadiendo que los gitanos o, más bien, las gitanas¹²⁹ a las que atienden acuden, sin embargo, a Servicios Sociales sólo para “fichar” o “rendir cuentas” del cumplimiento de las actividades y “los mínimos” establecidos en el Programa Individual de Inserción. De este modo, presentan los Servicios Sociales como un espacio de control y de restricción de comportamientos, en el que las personas no se sienten cómodas y no son capaces de expresar lo que piensan o sienten.

M: Hombre, aquí vienen dos veces a la semana; a Servicios Sociales van una vez cada dos meses. Y hay otra diferencia: nosotras no les damos ni quitamos nada.
A: ¿Lo tienen claro las gitanas?

¹²⁸ Sobre el reconocimiento legal de la posibilidad de no hacer actividades de inserción, la Comisión de Valoración de la RMI ha decidido que únicamente puede reconocerse este hecho a personas que estén muy cerca de la jubilación, que no tengan ninguna otra problemática más allá de que no tienen cobertura económica (cubriendo la RMI una garantía de ingresos hasta que pasen a conseguir una pensión no contributiva) o en los casos de problemas de salud mental.

¹²⁹ La mayoría de titulares de la RMI son mujeres.

M: Clarísimo. Entonces, hay cosas que a nosotras nos cuentan, miedos... no sólo de ellas, a lo mejor algo que pase en la familias, el no saber qué hacer: “Es que esto, ¿qué hago?”. Nosotras estamos mucho más en contacto. A Servicios Sociales van más a rendir cuentas: “Estoy yendo, no estoy yendo, la niña bien, aprueba, le he puesto las vacunas”. Es una relación diferente (Entrevista a trabajadora de ONG, zona sur de Madrid, 43 años.)

c) Una tercera estrategia, que conlleva más violencia, es el uso de la *amenaza directa* para forzar la participación de los perceptores de la RMI. En este caso, los trabajadores sociales actúan ante ellos como si tuvieran potestad para quitar rentas mínimas.

Rebeca me cuenta el caso de la esposa de un pastor evangélico que es perceptora de la RMI y dice que esta mujer miente cuando dice que su marido la ha abandonado. Continúa explicando que han hecho un acta notarial que dice que él le va a pasar a ella 50 euros al mes por cada niño, añadiendo en tono fuerte que, además de la RMI, también tiene beca de comedor y que, aunque vive entre ratas, tiene la tele de plasma y “se nota que maneja dinero”. Afirma que esta mujer llevaba a los niños únicamente a comer al comedor del colegio, pero que éstos no asistían a clase. Continúa diciendo, elevando aun más el tono, que “lo mejor es que un día viene y le dije: a mí no me haces ningún favor por llevar a tus hijos al colegio”. Aduce que la mujer le dijo que ello tenía que ver con “vivir sola”, a lo que ella le contestó que: “Todo el mundo en el barrio sabe que está viviendo con su marido”. Rebeca sostiene que lo que esta mujer quería era conseguir una vivienda de protección oficial. Y siguió: “Cuando le dije que, como no lleve a los niños al colegio, le voy a dejar sin la RMI, me amenazó”. (Registro de campo: notas tomadas después de entrevista a trabajadora Social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 34 años, julio 2008.)

La trabajadora social que interviene en el caso relatado en el anterior *verbatim* usa la información que le llega de los vecinos del barrio como prueba que apoya su amenaza de “dejar sin la RMI” a la mujer gitana de la que habla. Ello remite al interés que, como aseguran Fassin (2003) y Sennet (2003: 179), los profesionales muestran por conocer las biografías de los sujetos que tienen delante, aunque estos relatos de vida no cambien el curso de las decisiones que se toman (baste recordar, por ejemplo que, en lo que atañe a la RMI, es el incumplimiento de los requisitos objetivos el que puede conllevar la extinción de la prestación). Foucault (2005: 25) –haciendo referencia a las instituciones penales– afirma que, en estos casos, se toman en consideración las circunstancias en que se encuentra el sujeto y la apreciación que se hace de él más allá de la normativa vigente.

Amenazas como la expuesta más arriba, de “dejar sin la RMI” a las beneficiarias de la misma, son proferidas a veces también por trabajadores de ONG encargados de impartir los talleres de alfabetización dentro de los proyectos de integración.

Asisto a unas jornadas de género y mujer gitana en las que me encuentro con trabajadoras de varias ONG que conozco. En el descanso para el café, me acerco a un círculo en el que se encuentran varias y saco el tema de la RMI. Una de ellas, de una ONG con la que no he tenido casi relación, ante nuestra conversación, cuenta que le llegó una mujer al curso de alfabetización y le comentó que no llevaba a su niño al colegio porque éste lloraba. Ella le dijo a la mujer que, si no llevaba al niño al colegio, ya se encargaba ella de hablar con su trabajadora social “para que te quite la *remi*”. La representante de otra ONG que también realiza talleres de alfabetización le contesta: “Pero tú sabes que no puedes hacer eso, que ya no es tu función amenazar con eso, que ya es un derecho”. Ante lo cual la otra le replica: “Ya, pero funcionar, funciona, y a mí lo que me

interesa es que la niña vaya al colegio.” (Registro de campo: observación en jornadas de género y mujer gitana, Madrid, junio 2006)

Incluso cabe encontrarlas, de una forma más o menos velada, en mediadoras sociales gitanas contratadas por estas organizaciones.

Llego a una ONG en Villaverde a realizar, ante un grupo de gitanas, la devolución de una investigación sobre gitanos madrileños y hábitos de promoción de la salud. Cuando llego, la mediadora gitana me dice que no sabe cuántas mujeres van a venir a pesar de “haberles echado la bronca el otro día”, cuando se les dijo que si llegan muy tarde a los talleres, “avisarán” a su trabajadora social y añade: “Incluso puede que les retiren la RMI” (Registro de campo: observación en ONG, proyecto 8, zona sur de Madrid, abril 2007.).

El que las amenazas sean efectivas sirve, desde el punto de vista de los profesionales, para entender su utilización, de modo que actúan como si el fin (por ejemplo, que los niños vayan al colegio) justificara los medios. De hecho, consideran que la certidumbre de que van a ser penalizados es lo que lleva a los beneficiarios de la RMI a “corregir” la conducta y volver al cauce esperado por ellos.

Tú en grupo dices: “Que sepáis que ir a proyecto, ir a colegios y venir cada tres veces a mí, eso está sagrado, y está establecido en cada programa individual de inserción y el que no lo cumpla que sepáis que voy a informar al día siguiente de que no lo cumpláis. (...) Estas son las normas, pero que sepas que si tus hijos no van al colegio, mañana no cobras”. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años)

Así, unos y otros, profesionales de Servicios Sociales y profesionales de las ONG, asumen que la población gitana sólo se anima a participar en las actividades que se le proponen y a comportarse de “una manera normalizada” cuando se la obliga a ello, lo que hace comprensible, a sus ojos, el uso de esas estrategias. No relacionan, sin embargo, la imposición de la participación con la desmotivación aparente de estos usuarios de la RMI.

M: Sí que es verdad que hay trabajadores sociales que siguen usando el “le quito la RMI” como amenaza, que hoy en día no tiene sentido, pero bueno, lo usan. Sí que es verdad que cuando empiezan a venir es obligadas, porque les mandan...

A: A eso me refiero, a que eso no es consensuado: “Tengo que ir porque me quitan la paga”.

M: Pero luego acaban viniendo muchas porque les gusta. El inicio siempre es obligado. (Entrevista a trabajadora de ONG que imparte proyectos de integración, zona sur de Madrid, 43 años.)

d) Otra estrategia consiste en generar en los perceptores de la RMI la imagen de que si bien los trabajadores sociales de Servicios Sociales han perdido el poder de castigar y sancionar, sí pueden influir en las decisiones que tome al respecto la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la CM. De este modo, los profesionales de ONG afirman que si bien ellos no tienen capacidad para quitarles nada, están obligados a “informar” a los trabajadores de Servicios Sociales sobre su participación o falta de participación en los proyectos. Esta estrategia, junto con las descritas anteriormente, produce en los beneficiarios de la RMI una duda razonable, que generalmente ocasiona que hagan

aquello que se les sugiere por miedo a perder la prestación económica (aunque no de manera persistente, como los profesionales desearían, lo que contribuye a reforzar la imagen estereotipada del gitano resistente y problemático).

Llego a la ONG y una de las profesoras me dice: “A ver cuántas vienen hoy. El otro día ya les eché la bronca y les dije que no puede ser que viviendo al lado falten. Y les dije que puede que si siguen así hablo con su trabajadora social para que les quite la prestación” (Registro de campo: observación en asociación que imparte proyectos de integración, proyecto 8, zona sur de Madrid, abril 2008.)

Esta estrategia de persuasión crea, en los usuarios de la RMI, la idea de que los profesionales están conectados con quienes pueden “quitar” la prestación, pudiendo influir en la pérdida de la misma. A pesar de las diferencias ideológicas que se aprecian entre los dos perfiles de profesionales de los que estamos hablando, los que responden al perfil negociador también usan esta estrategia, y consideran que es su responsabilidad (a la vez que una garantía de la transparencia de sus acciones) informar a los perceptores sobre cuáles son sus obligaciones como profesionales.

En todo caso, ante esta diversidad de estrategias (algunas de las cuales contienen ideas contradictorias), los beneficiarios de la RMI terminan por no creer lo que los profesionales les dicen. Así, cuando algún profesional de ONG les comunica a las mujeres gitanas, por ejemplo, que no tienen por qué asistir a las actividades de los proyectos de integración, desconfían y se muestran dudosas a causa de la falta de información coherente sobre quién tiene el poder de extinguir la prestación económica y sobre la obligatoriedad o no de la participación, por lo que estas informaciones generan a menudo un efecto opuesto al previsible, esto es, que las gitanas que solían faltar asistan, “por si acaso”, con mayor frecuencia a las actividades de inserción.

Después de la entrevista, una profesora me cuenta que a una gitana estaba dejando de ir a los talleres y ella le dijo “De cinco días no has venido tres. No tienes por qué venir si no quieres, que no pasa nada.” Me dice que la mujer le miró con cara de duda, y que a partir de esa conversación volvió a las clases. Afirma que ella piensa que a las mujeres siempre les queda la duda de qué puede pasar si dejan de ir a los cursos. (Entrevista a trabajadora de ONG que imparte proyectos de integración, zona sur de Madrid, junio 2008, 45 años)

e) La última estrategia de los profesionales fiscalizadores que vamos a describir consiste en **informar a la CM cuando se enteran de que alguno de “los mínimos” de los PII, como la escolarización de los hijos o ciertos controles sanitarios, como las vacunas, no se está cumpliendo**, encendiendo así la chispa del procedimiento sancionador.

Es un requisito indispensable (la escolarización) y a veces nosotros también se lo pedimos. Hay profesionales que a nosotros nos envían esa documentación sin hablar con los usuarios porque saben en la mesa de absentismo que ese menor no está yendo. Entonces, hace una incidencia para incoar un procedimiento sancionador, porque ése es otro servicio, que nos hacen una comunicación de que esos menores no están acudiendo al colegio. Siguiendo paso: nosotros nos

ponemos en contacto a través de requerimiento de información y le pedimos que nos mande la matrícula de ese menor y que esté acudiendo regularmente a clase. Que debe personarse en el centro de Servicios Sociales a firmar el cumplimiento de las obligaciones del artículo... creo que es el 15. (Entrevista a técnico de la CM, 36 años.)

Estos profesionales aprovechan el miedo que a los perceptores gitanos les causa la recepción de cartas en formato oficial que no pueden comprender. La amonestación escrita que la Comunidad de Madrid les manda es usada también como herramienta para apoyar la ilusión de obligatoriedad de la participación en las actividades de inserción y para crear adhesión a los proyectos de integración.

- N: Aunque la falta de asistencia a proyecto de la RMI no constituye falta grave, sólo constituye falta leve. La acumulación de tres faltas leves sí que es una grave. Pero no obstante, cuando dejan de ir a un proyecto, yo informo, porque si yo prometo y luego no hago, ni para bien ni para mal, yo pierdo toda mi autoridad. Yo informo a la Comunidad de Madrid y ésta les envía una falta leve. A ellos les asusta. Es un documento de tres hojas llenas de leyes y de no sé qué, que es ilegible. En este caso me interesa que les asuste, porque tienen que entender que han incumplido lo que ellos firmaron.
- A: ¿Y ellos entienden eso cuando les llega la carta?
- N: El vocabulario no. A ellos lo que les interesa es: ¿qué ha pasado?, ¿por qué?, ¿por esto voy a dejar de cobrar? Y entonces, les digo: “Esto es que tú has faltado a las obligaciones que tú dijiste que ibas a cumplir y se te avisa de que con la acumulación de estas cosas podría ser que dejases de percibirla. Entonces, vas a seguir cobrando, pero que sepas que esto es una colleja que te han dado. Por favor, aplícate y empieza a ir al proyecto ya” Y entonces, ya vuelven. O sea, que sí que sirve. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años.)

A veces las dudas con respecto a quién tiene el poder de sancionar les surgen incluso a los propios profesionales, lo que demuestra que no está muy claro lo que se puede hacer en determinadas situaciones. La siguiente cita etnográfica corresponde a un trabajador social que transmite a una perceptora de la RMI, que se opone a hacer actividades de inserción, que si no firma el PII informará de ello a la Comunidad de Madrid, pero no está muy seguro de si dicho acto podría tener o no consecuencias.

- N: Todo esto es un poco... Hay gente a la que le vas dando tregua, gente que se te opone directamente a hacer nada, y entonces hay gentes de esas con las que me enfrento. O sea: “Vale, vamos a poner en un papel –que es lo que le hice a la señora de esta mañana– que tú no estás dispuesta a establecer ninguna actividad por recibir la RMI. Yo me eximo de cualquier responsabilidad. Yo la envío a la Comunidad de Madrid, que es la que decide, que son los que te pagan”. Entonces, nadie quiere firmar eso, porque eso significaría que no...
- A: ¿Porque ellos saben lo que eso podría ocasionar?
- N: Yo no sé qué es lo que pasaría en la Comunidad de Madrid si llegase un papel así. No sé lo que pasaría, pero ellos no están dispuestos a firmar ese papel tampoco. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, 38 años.)

Así, el (des)conocimiento sobre la prestación la RMI por parte de los profesionales se vuelve una estrategia que sirve para subordinar a los perceptores, quienes no cuentan con las herramientas para hablar de ella en términos de derecho. En otros ámbitos, como el escolar, ocurre algo parecido. Van Zanten (2007: 257), por ejemplo, haciendo referencia a los padres

de clase baja que buscan escuela para sus hijos, señala que el desconocer las posibilidades (regulares e irregulares) que existen para evitar las escuelas que no quieren, influye en que acepten la que la Administración les asigna.

En resumen, lo dicho en este epígrafe muestra una vez más que hay una distancia entre lo que las políticas enuncian “por arriba” y la manera en que se aplican “por abajo”. En este sentido, Fassin (2003: 71) anima a analizar lo que denomina “una configuración social” según la cual el Estado (en este caso el gobierno de la CM) formula discursos a los cuales se adhiere más el público al que se dirige que los propios agentes que ejecutan los programas y planes, esto es, invita a dar sentido, en este caso, al hecho de que la concepción de la RMI como derecho, promulgada intensamente en el preámbulo de la ley, no aparezca en los profesionales que se adscriben al grupo fiscalizador.

5.2 Una aplicación diferente: los trabajadores sociales que se desvinculan de la autoridad

Están, por otro lado, los trabajadores del grupo negociador, quienes ponen énfasis en la precariedad de la ayuda y en las condiciones sociales macro-estructurales que producen situaciones de vulnerabilidad social, entendiendo que estas circunstancias pueden llevar a la gente a mentir para poder subsistir.

Yo insisto con el tema de la vivienda porque me parece muy importante. Todo esto se acabaría y sería mucho más claro si la vivienda se contemplara en la RMI, que cuesta 800 euros el alquiler aquí, en L. (municipio de la CM), de una vivienda de 60 metros cuadrados. Entonces, si nos acabamos de hacer conscientes de esta situación, se entienden otras cosas. Si la vivienda entrara, si se contemplara dentro de la RMI... entonces sí que podríamos hablar del trabajo que saca la gente en limpio, y podríamos empezar a trabajar el pasar de la precariedad a los derechos sociales y laborales. Pero tal y como ves, se trata de sobrevivir, muchas veces de sobrevivir o de vivir en condiciones muy malas. Para aguantar ese tema de vivienda, pues, muchas veces tienes que compartir en la mayoría de los casos la casa para poder pagarla. Entonces, hay mucha gente que se pone de titular pero las habitaciones están todas alquiladas o están en habitaciones con sus hijos. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 38 años)

Tratan, así, de contextualizar las situaciones de los beneficiarios de la RMI y, al contrario de los que responden al perfil fiscalizador, no se sienten molestos por las estrategias desarrolladas y/o comentarios de éstos que no coinciden con su visión de la RMI y de la inserción social.

La mejor manera de ir quitando ese estereotipo es ir trabajando con la familia. El que me dijo que quería trabajar por 1200 euros es el gitano que estuvo trabajando en el Corte Inglés para una firma de ropa. La mejor manera de hacerle ver a esa persona que está totalmente desproporcionada es enfrentándole al mercado laboral, que viera exactamente cómo está el mercado laboral, en qué condiciones accede él y cuánto le pueden dar. A partir de ahí la experiencia me ha dicho que la gente no es tonta, y llegan a hacer sus cuentas y decir: “Este contrato de trabajo sí, porque llegamos a final de mes con estos gastos y nos permite un poco más para salvarnos las espaldas por si acaso viene algo”, y eso nos lo han dicho familias gitanas. (Entrevista a trabajador Social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 35 años)

Se distancian a menudo de una intervención social centrada en la inserción laboral, y cuestionan la escasa cuantía económica de la ayuda que gestionan, aceptando que, para subsistir, los perceptores de la RMI tengan que realizar trabajos en la economía sumergida. Lo que en el grupo fiscalizador enerva, esto es, que los perceptores de la RMI tengan ingresos no declarados, este otro grupo lo comprende tomando en consideración la escasez de la ayuda y la carestía de la vida, lo que evita que los culpabilice.

En la vida actual, pagando lo que se paga de vivienda, no es lógico tener una la RMI y no tener una actividad sumergida. Entonces, ¿cómo puedes montártelo o tirar para adelante? Ahí entran conflictos míos de decir: ¿qué prestación estamos aquí gestionando? ¡Si es impensable que la gente pueda vivir con esto! En muchos casos sabes que hay actividades sumergidas y que con eso se tira para adelante. Motivás a esa persona y le dices: “No es dinero suficiente y por eso lo que te hace falta es un trabajo, tal, tal, tal”. A veces no (se trata de) motivar a trabajar pero, por lo menos, darse ese espacio para: “A ver, no sabes leer o escribir, vete a este grupo, o un grupo de autoestima, según lo que necesites. Permítete al menos poder hacer cosas, ya que estás cobrando esto. Accede a grupos para ti, que te vengán bien, por otra parte”. Pero, vamos, que tú tampoco estás ahí todo el día: “trabajar es una maravilla.” (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años)

Estos profesionales no se sienten identificados con los objetivos de control social de la institución de Servicios Sociales para la que trabajan o trabajaron (aunque afirman haber ejercido en ocasiones las estrategias de control que ahora critican), y son favorables a que la RMI evolucione hacia una renta básica de ciudadanía no condicionada. Por tanto, son más proclives a entender los Servicios Sociales desde el principio de no reciprocidad, superando así la visión de la contraprestación que manejan los entrevistados del grupo fiscalizador.

Yo (con la RMI) vi algunos aspectos positivos y otros no tanto; lo positivo era que al ser una ley, ya no estaba tan sujeta a nuestra arbitrariedad porque me sentía incómodo con ese poder de decidir quién sí, quién no; quien lo demuestre documentalmente, sí no, no. Yo lo veo positivo en el sentido de que controle otro, porque si me toca también ayudar, yo no puedo controlar y ayudar a la vez. (...) Yo creo que sí, que afortunadamente fue ganando peso una corriente más de ayuda, más que de control. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

Asimismo consideran que el menor poder sobre la prestación económica de la RMI les ha permitido enfocar la intervención social en términos diferentes a los de la vigilancia del cumplimiento de los PII, aunque reconocen que todavía, según quienes sean sus supervisores, reciben presiones institucionales para que la intervención social siga centrada en ello. Así, estos trabajadores sociales tienen una visión de la intervención social más cercana al trabajo social comunitario, por lo que remarcan la importancia de negociar el proceso de inserción social con los beneficiarios, y han reivindicado ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales que les dejen más tiempo para negociar el Programa Individual de Inserción.

El consenso no se puede perseguir sin conocer bien a la familia. El PII en un principio se pedía que estuviese firmado un mes después de otorgada la RMI, y yo creo que la propia CM se ha dado cuenta de que para que se elabore un buen diagnóstico, se tiene que alargar ese plazo y han dado un plazo de 6 meses. Entonces, para cuando tú llegues a firmar ese PII, has podido conocer bien a la persona y a su entorno. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 38 años)

Aun así, algunos consideran que es difícil negociar el PII, dado que a los perceptores de la RMI no parece interesarles en absoluto.

Con los años, pero no porque fuera IMI o la RMI, porque a nivel práctico yo funcioné de la misma manera con uno y con otro, sino porque vas cambiando tu forma de trabajar. Con los años intenté incidir cada vez menos en la elaboración del PII, que fueran ellos quienes establecieran los compromisos, y los escribieran ellos, que fuera algo escrito por ellos. Pero el valor que tenía a nivel simbólico para el usuario era el mismo. Me di cuenta que ellos no le daban ningún valor: “¡Ah!, ¿que hay que firmar aquí?, ¿que tengo que poner ir a alfabetización cada no sé cuántos?” Pero no era vinculante para ellos. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

Coincide que los integrantes del grupo negociador son los que han estudiado y analizado más minuciosamente la ley de la RMI, detectando así cuáles son los vacíos y lagunas que tiene de cara a evitar las funciones relativas al control de los beneficiarios, mientras que los integrantes del grupo fiscalizador la han leído fijándose principalmente en lo que se plantea acerca de cómo promover y/u obligar el cumplimiento de requisitos. En términos de Dubet (2007: 50), se puede decir que aquellos primeros profesionales conforman una “contra-institución subterránea” que, en cierta medida, revierte los valores del “programa institucional”. En cuanto que consiguen escapar de una visión del sujeto individual como actor racional, están menos apegados a una idea rígida del cumplimiento de normas y reglas, siendo capaces de aceptar otros puntos de vista y otras actitudes diferentes a las suyas con respecto a las actividades de inserción y al uso de los recursos del Estado. Así, realizan un esfuerzo teórico y de distanciamiento con respecto a la institución para la que trabajan y optan por desvincularse de las funciones de control sobre la prestación económica, por lo que explicitan ante los perceptores de la RMI que ellos no van a influir en que se la “quiten”.

Desde roles de control, tú eres el que controla y vigila y ellos los que tratan de engañarte para obtener los recursos. De la otra forma tú les estás comunicando: “Mira, yo sé que tú tienes más recursos a parte de esto, no te preocupes por la RMI porque creo que debería ser universal y no voy a hacer nada por quitártela. Lo único no te cantéas (no des la nota)”. A partir de ahí se establece una mayor confianza que, para mí, más allá del conocimiento, se acerca mucho más a mi idea del trabajo social en cuanto que es una forma de legitimar socialmente al usuario, mucho más que una prestación económica, porque estás entablando un diálogo que aunque nunca va a ser horizontal, estás empoderando a la otra persona y estás dando valor a su historia, a su biografía y persona. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

El profesional cuyas palabras se reproducen en la cita anterior, en otra entrevista, se califica a sí mismo como trabajador social “guay”, lo que justifica argumentando que la

estrategia de distanciarse de cualquier medida punitiva relacionada con la suspensión de la prestación favorece que los beneficiarios de la RMI gitanos lo traten como si de un amigo se tratase y que su interacción con ellos se produce en términos pacíficos, limitándose, además, a las veces en que tienen que firmar la renovación de los PII.

Por otro lado, algunos profesionales que se ajustan al perfil negociador no dudan en expresar la frustración que les ocasiona ser trabajadores sociales en un entorno institucional que recurre a una metodología de intervención social que consideran poco transformadora.

Yo como no me siento muy identificado ni con la institución ni con su ideología ni con el trabajo que se hace, no me gusta ese trabajo. Muchas veces entro en ese trabajo o bien porque siento la presión desde arriba: “Tienes que controlar a tal familia por lo que sea”, o me llega algo de la CM, entonces, yo cambio consciente o inconscientemente el chip y me pongo en un rol de control. Pero tampoco me siento a gusto ni ahí, porque además no me lo creo, y la eficacia es cero siempre que lo he hecho. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

En todo caso, mientras que eluden controlar el cumplimiento de los requisitos que dan lugar al cobro de la ayuda económica, no cuestionan el hecho de que los perceptores de la misma tengan que establecer de manera obligatoria visitas a los Servicios Sociales. Es decir, no realizan una crítica profunda del modo en que se construye su labor profesional, si bien varios son los entrevistados que siguen esta línea de pensamiento que han terminado por abandonar los Servicios Sociales, lo que denota cierta incomodidad con la forma en que se trabaja desde ellos.

A: Yo tengo una crítica muy dura ahí con los profesionales, y es que como el trabajador social se ha institucionalizado tanto, ya no es una profesión en sí, sino que, en su imaginario, el trabajo social está totalmente vinculado a los Servicios Sociales. Entonces, si eso es así, realmente mis instrumentos de intervención son los que me dan los Servicios Sociales: las prestaciones. Si me quedo en eso, no voy a tener recursos para trabajar con la persona, o sea, es que son dos concepciones distintas. Entonces, yo ahí me lo empecé a cuestionar y empecé a poder hacer un encuadre con las familias, diciendo: “Mira, la ley dice que la RMI es una prestación por derecho, que te garantiza además dos derechos, por un lado, la cuantía económica y, por otro lado, los apoyos personalizados. Tú estás vinculado a nosotros por esta prestación, y tienes estos dos derechos, y yo vengo aquí por el segundo derecho que tienes. Así que si tú estás chatarreando, eso no me interesa. La ley me permite que yo no sea la que tenga que decidir si tú estás siendo fraudulento o no; si algún día cruzan datos y se enteran, no será por mí. Ahora, yo tengo que venir a verte y te voy a pedir que vengas a verme de vez en cuando y vamos a establecer un acuerdo, y si eso no se cumple, ¿qué puede pasar? Pues tendremos que valorarlo sobre la marcha. Desde luego yo no quiero que esté vinculado eso a que te quiten la RMI”. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años.)

Estos profesionales, por tanto, no se interesan por obligar a los beneficiarios de la RMI a cumplir las actividades, sino por el proceso de negociación de las mismas. El “obligar a hacer algo” ya no es lo que legitima su intervención profesional, sino la capacidad que muestren en establecer un vínculo con los sujetos para negociar las actividades respetando los

ritmos de las personas que tienen delante. Todo ello acompañado de una visión menos idealista de la inserción laboral como garante de la integración social.

S: Sí que es verdad que en la medida en que, por un lado, se fue flexibilizando la cosa, empezó a haber menos discurso de dureza hacia los usuarios de la RMI de lo que venía de la CM. Y dentro del propio centro hubo también críticas para relativizar el asunto y de rebajar las rigideces. Se empezó a ver más normal que alguien esté en la RMI sin hacer nada, porque además se entiende que esa persona o vive de eso o no vive de nada más. O sea, que es una falacia: no va a insertarse en el mundo laboral porque deje la RMI. Se empezó a ver más como una cuestión de población residual que no podía acceder a otras cosas. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años.)

Se puede decir que, en estos profesionales, se ha producido un desplazamiento desde una visión centrada en la inserción por el empleo hacia otra, más internalista y psicologicista, que prima el trabajo en habilidades sociales y, al mismo tiempo, provoca un efecto tranquilizador en ellos, dado que asumen que esta labor es a largo plazo y, por tanto, no esperan que los beneficiarios de la RMI experimenten cambios personales importantes en un futuro cercano.

Imponer. La experiencia nos ha dicho que no funciona. Lo que intentamos, en lugar de mandar a la gente de aquí para allá, es ver cuál es su centro de interés, su experiencia, su perfil, por dónde puede tener más posibilidades, en qué momento emocional está, si realmente necesitaría un reciclaje, qué ofertas hay, dónde podría hacerlo. Que todo eso lleva un camino largo para después llegar a término y consensuar. (Entrevista a trabajadora Social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 38 años)

El énfasis se sitúa, entonces, en trabajar con la persona para “movilizar” aquellas capacidades que tiene, poniendo el foco en las actividades educativas.

Lo que te digo es: “Aprovechate de que tienes a este chaval, y trabaja con el chaval y cámbiale. Edúcale desde una visión más amplia y dale herramientas que no le van a dar en su medio familiar ni en el entorno, para que él se vaya saliendo de eso. Desde luego a lo mejor tú no ves los frutos, pero la oportunidad que tienes, si tú la sabes aprovechar, a lo mejor algo le sirve”. (Entrevista a técnica de la CM, 50 años.)

Esta mudanza hacia una visión más psicologicista de la intervención es también patente en las líneas de financiación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que concibe los proyectos de integración sobre todo como espacios para trabajar el desarrollo personal, la autoestima y las habilidades sociales. Se considera así que, dada la inestabilidad del mercado laboral y las grandes carencias formativas y/o emocionales de los perceptores de la RMI, estas actividades de inserción social son un paso previo a la posibilidad de insertarse laboralmente.

Que trabajen mucho más procesos de desarrollo personal, procesos de habilidades muy básicas, de activación como ciudadanos... Nuestra voluntad cada vez más es independizarnos del fin laboral, porque es que los procesos son mucho más largos y el objetivo laboral, si es lo que marca nuestros proyectos, nos estamos equivocando. (...) En ésta (convocatoria para proyectos de integración) hacemos más hincapié todavía en desarrollo personal y en habilidades. Nosotros el mayor hincapié (que hacemos) es trabajar los procesos más básicos, de desarrollo personal y

de crecimiento personal, o sea, ni tocar tanto lo que es empleo ni alfabetización. (Entrevista a técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 50 años.)

Los integrantes del grupo negociador critican la intervención profesional basada en “quitar y poner” prestaciones, optando por “vincularse” a los perceptores de la RMI y por atender a sus intereses y demandas. Aunque siguen manteniendo el cambio de la persona y el logro de su autonomía como el fin de la intervención social, piensan en estos procesos fuera del lenguaje de la obligatoriedad.

La RMI puede ayudar a cubrir unas mínimas necesidades, pero muy mínimas, ¡que son 300 euros o 400 euros! Entonces, si tú eso lo pudieras llegar a entender así, desvincularías: que el que tú se la quites o se la des no va a conseguir nada. Entonces, pon la energía en trabajar y en vincularte y en ver qué está sucediendo realmente en la vida de esa persona, y qué quiere y qué no quiere. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años)

Buscan ayudar a los solicitantes/beneficiarios de la RMI a “ser conscientes” de que tienen un problema y a que se cuestionen su situación. Ahora bien, ello puede llevar bastante tiempo, durante el cual estos profesionales no son partidarios de presionarlos para que emprendan ningún proceso del que no estén convencidos. De este modo, el respeto de los ritmos de los usuarios evita lo que cabe calificar de “ocupacionalismo”.

Yo te pido que te lo cuestiones, que te revises, en qué área tú crees que no te va tan bien y que a lo mejor te conviene hacer alguna cosilla, sobre todo es en qué área a ti no te va tan bien y, entonces, vamos a trabajar esa área. Vamos a empezar por la que tú reconozcas que es un problema o no está del todo bien. (Entrevista a ex-trabajadora social de Servicios Sociales en mancomunidad madrileña, 37 años.)

Es frecuente que estos profesionales esperen que los perceptores de la RMI asuman una posición auto-reflexiva sobre su propia situación, y piensen que desde esta posición es desde donde puede provenir el cambio, de la misma manera que, en lo que a ellos se refiere, la autorreflexión les ha permitido darse cuenta de que también se equivocan y, por tanto, de que sus propuestas pueden resultar contraproducentes para los sujetos con los que intervienen:

El tema de Pablo: es una persona sin hogar que duerme en la calle, que le estamos proponiendo desde antes del verano alternativas de dormir en sitios incluso gratuitos, y lo está rechazando. Ahí evidentemente, y con los fríos que está haciendo, tengo ganas de decirle: “Te metes ahora mismo aquí”. Y él me está demostrando que no lo quiere. Entonces, yo ahora estoy en un momento que no le voy a proponer nada, porque cada vez que le propongo algo desaparece y lo que me interesa ahora es tenerle semanalmente cogiendo sus cosas, que las tengo ahí para que pueda estar en contacto con los Servicios Sociales y trabajar un tema que creía yo que es fundamental: su salud mental, su posible depresión. (Entrevista a trabajador Social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 35 años)

Este cuestionamiento del propio ejercicio profesional no aparece en ninguna de las entrevistas hechas a los profesionales fiscalizadores, quienes parecen saber en todo momento lo que necesitan los perceptores de la RMI.

O sea, yo me acuerdo que, cuando yo empecé a trabajar, tenía como una visión muy conductista del tema y era en plan de: “Es población gitana y, si no sabe leer o escribir, tiene que ir a alfabetización a la asociación Secretariado Gitano”. Como muy causa-efecto. Ahora como que lo dejo abierto, intento salir de prejuicios generalizados. Prefiero que me digan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y sobre todo qué les interesa. Cuando empecé era todo bagaje de antiguos compañeros, y era: “Tú ofrécele muchos cursos para que acepte alguno”. Y yo ahora quiero darle la vuelta a eso: “¿Estás haciendo otro tipo de actividad? Dime qué horarios.” Es ir directamente a eso en vez de presionar por ocupar su tiempo. Y ya se declara directamente, pero como dándolo por hecho también. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona noreste de Madrid, 33 años.)

Los trabajadores sociales que responden al perfil negociador tratan de evitar la visión de que “el excluido no sale de su estado porque no quiere”, contextualizando no sólo las situaciones en las que se encuentran los usuarios de la RMI, sino la falta de atractivo de las actividades que les ofrecen desde las instituciones.

Yo la gente que tengo en la RMI lleva años y no va a salir de la RMI. Pero no estoy entrando en un tema de por qué es que no quieren salir, no es una cuestión de voluntad, sino que es una estrategia de obtención de recursos para ellos como otra cualquiera. Pero aparte es una a las que se ven abocados porque tampoco están dentro de otros sistemas de obtención de recursos, de bienestar laboral formal, etc. Es que desde el tema del control... Si fuera bueno lo que ofreciéramos, ¿por qué tendríamos que estar controlando que lo eligieran? ¡Ellos sabrán lo que es bueno y lo que es malo! A lo mejor no es tan bueno lo que ofrecemos cuando tenemos que controlar que lo hagan o que no lo hagan. Sobre todo es cuestionarte por qué yo como trabajador social tengo que situarme en una figura de superioridad y de control y de paternalista, y de decir si esto es bueno o no para esta persona. (Entrevista a trabajador social de Servicios Sociales, zona sur-oeste de Madrid, 33 años)

Sostienen también que los bajos salarios de las actividades laborales remuneradas que ofrecen a los perceptores de la RMI son un factor que los desincentiva, comprendiendo, por tanto, que rechacen esos empleos y continúen cobrando la prestación económica y trabajando en la economía sumergida.

Hay otra cosa, unida a lo de las cuentas, que también es algo que a lo mejor cuesta entender, pero que realmente si te pones en el lugar de esa persona que está tomando esa decisión, es clarísimo y yo haría lo mismo. Por ejemplo, hay muchas familias que están cobrando la RMI y a nosotros nos llegó un tema de hacer cestas de navidad hace poquito y lo que pagaban era muy poco realmente y el horario era bastante amplio. Sí que hacen otra cuenta. Una señora dice, por ejemplo: “Yo estoy ganando de la RMI el tope porque tengo 3 hijos, 400 y pico euros, y como también voy a una casita y plancho, me gano otros 300 euros. Efectivamente, lo que voy a ganar haciendo cestas de navidad, estando todo el día fuera y viendo cómo resuelvo el tema de los hijos y perdiendo este trabajo que me está resolviendo, que solamente es para 15 días o para un mes o mes y medio, pues no lo cojo.” Entonces esas cuentas también hay que entenderlas y me parecen bastante lógicas. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 38 años)

Con todo, algunos de ellos oscilan entre la comprensión y la crítica al uso continuado de los recursos sociales, sosteniendo que la Renta Mínima provoca “dependencia” en los beneficiarios, que éstos se “acomodan” y “cronifican”, coincidiendo a este respecto con los argumentos que priman en el grupo fiscalizador. Piensan que la renta mínima ideal tendría

que ser temporal, cuestionan a quienes no hacen por “salir” de su situación y rescatan la importancia del empleo como factor de identidad social y promotor de relaciones sociales. Estos profesionales se enfrentan a un dilema: consideran que la RMI es un factor que desincentiva que los jóvenes quieran trabajar pero, por otro lado, no saben qué hacer para revertir esta tendencia¹³⁰. Ofrecen una perspectiva en cierto sentido desencantada, que muestra la falta de herramientas que tienen los Servicios Sociales para motivar a los perceptores gitanos que consideran “capacitados” para “hacer algo con su vida”, pues esas herramientas actúan desde la individualización de los problemas sociales y el seguimiento de casos esporádico (cada dos meses o tres).

En las gitanas hay cierta tendencia a que la renta es para siempre, y que es algo que está ahí. Sí se ve diferencia entre mujeres que no suelen ser gitanas, que en un momento determinado una mujer que se separa, se queda sola, a la vez se queda sin trabajo un año y se ve en la calle, y pide la RMI. Esas mujeres generalmente en un año o dos está fuera, están trabajando, y son rentas muy temporales, pero en las gitanas se cronifican... Yo veo también una diferencia entre mayores y menores. Las que son más mayores, yo personalmente pienso que está muy bien que cobren su renta, que mantengan sus mínimos y que puedan vivir lo mejor posible. Entre las jóvenes me da un poco más de rabia, porque se apalancan. A todos los vendría muy bien tener 400 euros al mes porque sí, y sí que es verdad, yo creo que hay veces que la renta dificulta el que salgan adelante. Por otro lado, no se la vas a quitar. Es por eso que queremos trabajar de cara a los niños. En algún momento hay que cortar, no le vas a quitar la renta a una mujer con 2 niños o 3, que tiene unas posibilidades muy limitadas, pero sí intentar que corten en algún sitio, e intentar que entiendan el valor del trabajo, no sólo económico, sino el salir de casa, tener contactos con otra gente, el conocer, la posibilidad de estar informadas, de estar más en el mundo. Eso es lo que intentamos con ellas. (Entrevista a trabajadora de ONG que imparte proyectos de integración, zona sur de Madrid, junio 2008.)

A diferencia de los que componen el grupo fiscalizador, estos trabajadores evitan – como se ha dicho– comunicarse con la Comunidad de Madrid para solicitar el inicio del procedimiento sancionador, de modo que únicamente informan de incidencias cuando los perceptores de la RMI pierden todo contacto con los Servicios Sociales.

Con la RMI, los que estamos en esa posición un poco más ambigua, sí que leímos al dedillo la ley, de no: “Yo no soy quien propone, yo informo”. Yo nunca hago una propuesta de extinción. Es decir que, además, ninguna familia me pueda reprochar: “porque tú has propuesto que me quiten la RMI”. No, yo he informado de lo que ha ocurrido y la CM que haga lo que quiera, que me da igual, que haga lo que quiera, pero yo no me meto. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años.)

Estos profesionales reconocen ante los usuarios a los que atienden que ellos están obligados a “informar” a la CM de las incidencias graves. La diferencia con la cuarta estrategia utilizada por el grupo fiscalizador estriba en que este otro no pretende dar a

¹³⁰ Cabe señalar aquí que no existe un movimiento asociativo reivindicativo donde confluyan los profesionales del trabajo social. Durante los años en que he realizado de trabajo de campo, ha habido dos conatos de formación de grupos de debate y crítica de los profesionales de Servicios Sociales y/o de la intervención social. Éstos se desactivaron rápidamente, y el más “oficialista” –donde asistían los trabajadores de Servicios Sociales menos “militantes”– terminó siendo un espacio de expresión de las quejas de éstos sobre las jerarquías internas de los Servicios Sociales y la excesiva burocratización del trabajo social, pero nunca se llegó a plantear una crítica profunda del trabajo social o alianza alguna con los beneficiarios de los Servicios Sociales.

entender que puede influir en quienes extinguen la prestación, sino –según sostienen– clarificar cuáles son sus funciones laborales. En todo caso, como se tratará en el capítulo siguiente, ello no es percibido así por los beneficiarios de la RMI gitanos, quienes se relacionan con la RMI y el rol profesional de los trabajadores sociales desde el miedo a éstos debido sobre todo a su historia con el IMI y a la desconfianza, el desconcierto y la desorientación que les causan los distintos estilos profesionales que perciben en el interior de los Servicios Sociales.

Si sabemos que es un caso de absentismo, te digo cómo lo plantearía yo: “Sabes que con el tema de la RMI es obligatorio, y en esto no puedo mentir. De la misma forma que tú me dices que no me mientes, yo tampoco puedo mentir a la CM y decirle que tus hijos están yendo al colegio”. Pero sin posicionarme en si está bien o no que vayan, que eso es meterme en el tema moral. “Simplemente en la ley dice que para cobrar la RMI, tus hijos tienen que estar yendo, y a mí me pide información la CM y yo no le voy a mentir. Si yo sé que no están yendo, yo se lo tengo que decir”. Esta estrategia, que yo a veces la veo desde fuera y me parece ridícula, a mí me sigue pareciendo la más coherente. Es transmitir que yo trabajo aquí para sobrevivir, igual que tú con la RMI. Yo puedo aliarme más contigo en ciertas cosas, pero dejaría de cumplir mi trabajo si ocultase, si mintiera... Yo no entro en si la RMI te la tienen que quitar o no, que yo es un tema del cual me distancio, y pongo a la institución en un sitio y a mí en otro. El problema creo que surge cuando el trabajador social se identifica con la institución y: “Yo soy quien te quita la RMI porque no has ido al colegio”. No, perdona, yo informo y ellos deciden. (Entrevista a ex-trabajador social de Servicios Sociales, zona suroeste de Madrid, 33 años.)

El anterior verbatim deja ver que esta estrategia produce incomodidad en algunos profesionales quienes, a pesar de utilizarla, no se quedan conformes con su uso. En todo caso, vemos el esfuerzo continuado por no culpar a los perceptores de la RMI y tratar de relativizar el peso de algunos de los comportamientos de éstos con los que no están de acuerdo. La coordinadora de una ONG cuenta, en el siguiente registro de campo, que le sirve pensar que los verdaderos “mangantes” son los que forman parte de los consejos de administración de las empresas para no sentirse molesta con algunas prácticas poco ortodoxas de las gitanas con las que trabaja.

Mientras hablo con la coordinadora de la ONG sobre la RMI, me cuenta que ella no amenaza en ningún momento a las gitanas con quitarles la prestación, sino que les dice que ellas tienen una responsabilidad y que a ella lo que le interesa es que vayan allí para mejorar. También les dice que igual que ella tiene la responsabilidad de ir a su trabajo para cobrar su salario todos los días, ellas tienen la responsabilidad de ir al proyecto y, si no van, ella “tiene que informar”. Sostiene que apela a su responsabilidad, a su compromiso, y añade: “No sé si lo haré bien, porque yo hay días que voy de un lado a otro... porque digo, puedo cabrearme porque son unos mangantes (los gitanos), porque tienen sus cosas por debajo de la renta mínima, su venta, sus cosas, pero luego pienso que los verdaderos mangantes son los que están en los consejos de empresa...” (Registro de campo: observación en fundación que desarrolla proyectos de integración, proyecto 5, zona suroeste de Madrid, junio 2008.).

Además de esforzarse por realizar un análisis macro-estructural de las situaciones con las que se enfrentan en el despacho, así como de la prestación y de la falta de coherencia de la aplicación de las políticas públicas en la CM, varios de los entrevistados que responden al

perfil negociador están participando en la elaboración de planes locales contra la exclusión social o en mesas profesionales de distrito¹³¹, abogando por mejorar el respaldo político y el establecimiento de pautas de actuación para no duplicar acciones. Es decir, tratan de incidir también desde el plano político, aunque reconozcan que no lo hacen con la continuidad e intensidad que el tema requiere.

Esto es una pelea que nosotros tenemos hace mucho tiempo: protocolos de coordinación en Leganés, tanto con empleo como con salud mental, con todas las delegaciones o con otras entidades, existen hace la pera. Se escribieron en su momento, se hace seguimiento de ellos, hay reuniones a los niveles que sea, pero no. A nosotros lo que nos parece que hace falta es un plan local definitivo. Esto, que ya se hablaba de planes locales que se están poniendo en marcha, nosotros es algo que defendemos desde hace un montón, porque eso sí que tiene el respaldo político. No tendría que ser la pelea concretita del trabajador que le toque o depender del humor del que esté o si de si me llevo bien contigo. (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, Ayuntamiento de la periferia de Madrid, 38 años.)

Algunos militan en asociaciones barriales de izquierdas que están insertas en procesos de crítica al desmantelamiento del Estado de Bienestar y a Servicios Sociales por no promover, entre otras cosas, acciones colectivas y reivindicaciones de derechos sociales de más amplio alcance, a la vez que por precarizar el ámbito de la intervención social a través de las subcontrataciones, llegando al punto de “perder la fe” en su trabajo. Así, he encontrado a varios trabajadores sociales “muy militantes” que están generando lo que se puede calificar de “efecto desprotector” de las personas de etnia gitana, puesto que si bien las ayudan a conseguir la RMI y les dicen abiertamente que, en lo que de ellos dependa, la van a seguir cobrando indefinidamente, su propio descreimiento con respecto a la capacidad de transformación social de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y del trabajo social que en ella se practica hace que no emprendan intervención social alguna con los perceptores de la RMI. Les exigen únicamente pasar a firmar los papeles de seguimiento trimestralmente, considerando que poco más pueden (o merece la pena intentar) conseguir.

Un caso que ilustra lo anterior es el de Raúl, trabajador social de 35 años que ha decidido no presionar en absoluto a Alma, sobre la que ya hemos hablado en páginas precedentes: mujer gitana joven, llegada de Extremadura y solicitante novel de la RMI. La frustración de Raúl con su trabajo y con la estructura de los Servicios Sociales hace que le pida a Alma que le vaya a ver únicamente cada tres meses para firmar la renovación del PII. Raúl, militante en varios colectivos sociales de su barrio, no hace ningún intento por convencer a Alma para que lleve a cabo alguna actividad orientada a su inserción. En una

¹³¹ En la ciudad de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento convoca “Las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales”, foros donde se pretende recoger la opinión de los ciudadanos sobre las necesidades de su barrio de cara a mejorar las actuaciones municipales en el distrito, a la vez que información relevante para detectar problemáticas que puedan estar surgiendo en los distintos distritos.

conversación informal, me cuenta que intentó apuntarla a un grupo organizado y coordinador desde una ONG y ella le dijo que estaba muy lejos y que, hasta que su hijo de un año no fuera mayor, no quería dejarle al cuidado de nadie. Raúl me dice que no hay ningún otro “recurso” que piense que le convenga a Alma, así que a parte de pedirle que solicite vivienda de protección oficial, no lleva a cabo ningún tipo de intervención social con ella. Se podría decir que éste sería un ejemplo extremo de la “intervención poco motivada” de los trabajadores sociales del grupo negociador más críticos con la institución en que trabajan y con la burocratización de los Servicios Sociales: su “queme” profesional y su descreimiento les lleva a no intervenir en absoluto. Por su parte, Alma, quien se ha separado de su marido hace poco, se siente sola y encerrada en casa, sin saberse mover por la ciudad y teniendo que hacer frente a un inminente proceso de desahucio.

5.3 Recapitulación

Se desprende de lo dicho que la RMI (principalmente en lo que se refiere a la información concerniente a ella, a las obligaciones que de la misma se derivan una vez se firma el Programa Individual de Inserción y a las diferentes formas de interpretarla, gestionarla y aplicarla por parte de los profesionales) ha producido un contexto social donde prima la falta de transparencia sobre el modo de funcionamiento de esta política social. Ello va en contra de lo que algunos autores consideran las “condiciones ideales” para la aplicación y garantía de los derechos sociales con grupos vulnerables (Pomykala y Holt, 2002: 35-42), pudiéndose incluso sostener que se están dando indicios de discriminación, indirecta en este caso¹³², hacia los perceptores de la RMI gitanos. Pomykala y Holt (2002) defienden que, como parte de la protección que los Estados deberían ofrecer a los colectivos vulnerables, tendría que estar la garantía de la transparencia de la información en la Administración Pública, a la vez que el desarrollo y control de los programas dependientes de ésta para superar la desigualdad social, dentro de los cuales se puede situar la Renta Mínima de Inserción. De este modo, la inestabilidad en la información sobre dichos programas, el trato desigual hacia los miembros del colectivo gitano, así como la falta de coherencia en las actuaciones profesionales, son elementos que obstaculizan el tratamiento igualitario de las minorías étnicas.

¹³² La discriminación indirecta ocurre cuando una legislación, regulación, política o práctica aparentemente neutral impacta negativa y desproporcionadamente a un grupo en particular.

En este apartado, se ha tratado de mostrar que la intervención que desarrollan los profesionales del grupo fiscalizador se centra en legitimar la idea de la participación obligatoria como base para lograr dicha participación por parte de los gitanos beneficiarios de la RMI en las distintas actividades de inserción que se les ofrece. Estos profesionales insisten, delante de dichos beneficiarios, en que todavía tienen cierto poder de influencia en caso de considerar que se les debería retirar la RMI, y se sienten incómodos, así, con la visión de ésta como un derecho social no condicionado. Por ello, expresan fuertes críticas hacia la forma en que está redactada la ley de la RMI y hacia los profesionales que no exigen nada a cambio de la prestación económica. No se resisten, por tanto, a perder la autoridad sobre los usuarios de la RMI, buscando conservarla aun a costa de interpretar interesadamente la ley en sus interacciones con ellos y utilizando estrategias no-ortodoxas como omitir la negociación consensuada del Programa Individual de Inserción para que se comprometan con actividades de inserción o amenazarles con “informar a la Comunidad de Madrid”. Desde su punto de vista, hay un bien mayor que justifica sus actos, a saber: la “integración”, el “avance” o la “evolución” de los asistidos. Así, sin reconocer nunca la desigualdad de poder con respecto a éstos o las condiciones sociales, históricas y económicas que enmarcan las situaciones ante las que se ven enfrentados, concentran sus energías en que los beneficiarios de la RMI cumplan los compromisos del PII y se sienten responsables de que ello sea así. De este modo, al asumir esta función de control, se alejan de las funciones de acompañamiento social que les atribuye la legislación madrileña sobre rentas mínimas.

Nos encontramos, por otra parte, con los profesionales del grupo negociador, que buscan distanciarse de las funciones de control y se centran en pactar el proceso de inserción con los beneficiarios de la RMI. Se alegran de haber “perdido autoridad” bajo la actual ley de la RMI aunque reconocen que ésta, a la vez, les ha dejado en una situación un tanto ambigua, ya que mientras que su forma de realizar intervención social bajo la RMI no se ha modificado desde la época de implantación del IMI, sí lo ha hecho su capacidad de sancionar a los beneficiarios, que se ha visto mermada bajo la actual ley RMI. Son personas críticas con la institución para la que trabajan y buscan “exculpar” algunas conductas de los beneficiarios de la RMI tomando en consideración factores como la exigüidad de la ayuda económica que reciben, la falta de recursos sociales de los Servicios Sociales o la precariedad de los puestos laborales a los que pueden acceder la mayoría de ellos. Se puede decir, por otro lado, que los trabajadores sociales de este grupo negociador han optado por una corriente del trabajo social “respetuosa” con las personas en situación de exclusión social, aunque manteniendo una concepción de éstas de carácter profundamente psicologista o internalista. En cierto sentido,

estos profesionales se erigen en mediadores que buscan entrar en contacto con la “conciencia” de los sujetos excluidos para, a partir de ahí, comenzar un proceso de cambio personal que será guiado por ellos. Por otro lado, algunos de estos profesionales han optado por dejar los Servicios Sociales o bien por renunciar a intervenir con los beneficiarios de la RMI. Sin embargo, esta postura en cierto sentido fatalista, a pesar de ir acompañada de discursos críticos acerca de la falta de capacidad de transformación social que tienen los Servicios Sociales o acerca del control que desde ellos se ejerce sobre los beneficiarios de la RMI, termina por dejar a éstos “a su suerte” y por ocasionar que la acción política se desarrolle fuera de la institución de Servicios Sociales.

Capítulo 6: Las experiencias y los puntos de vista de los gitanos sobre la RMI

La información sobre los aspectos novedosos y más empoderadores de la RMI, que dotarían de mayor capacidad de negociación y de autonomía a los beneficiarios de la prestación económica, no se pone a disposición de éstos, al menos de los aquí estudiados, es decir, de los de origen gitano, como se ha mostrado en el capítulo anterior. También se ha visto que ello está relacionado con el hecho de que la opacidad y falta de transparencia de la información transmitida por algunos profesionales que intervienen en el ámbito de esta política social se haya configurado como una estrategia para incrementar su autoridad y, de este modo, de apuntalar su poder sobre ellos.

Los gitanos entrevistados, por su parte, son conscientes de la existencia de distintos “estilos profesionales”, lo que expresan a través de la utilización de un léxico que remite al azar y a la suerte para relatar cómo, según el profesional que les “toque”, tienen mayores o menores probabilidades de que la prestación les sea otorgada (en el caso de estar pidiéndola por primera vez) o de poder negociar la no asistencia a los “cursillos” (cuando se trata de los proyectos de integración). Perciben, por tanto, una gran arbitrariedad en los modos de actuación de los trabajadores sociales de Servicios Sociales, lo cual –unido a la desconfianza incorporada (por la vivencia cotidiana de discriminación y racismo derivada de la pertenencia al colectivo gitano)– produce en ellos, cuando menos, una cierta intranquilidad a la hora de acercarse a los Servicios Sociales.

Los gitanos perceptores de la RMI reconocen la relación asimétrica de poder que tienen con los profesionales y, por lo general, viven la interacción con ellos como “un examen” en el que son juzgados o evaluados. Se entrevistó en sus discursos que temen salir de Servicios Sociales habiendo firmado algún papel que pudiera ir en su contra (haber sido “engañados”), sintiéndose inseguros en esa relación y recelosos de que de ella se desprendan consecuencias negativas para sus intereses y para su bienestar. La inconsistencia de la información que reciben de los distintos profesionales, la obligatoriedad (o, más bien, la ilusión de la obligatoriedad) de la participación en los proyectos de integración que algunos de ellos les transmiten, y la moralización de sus actitudes y de sus maneras de actuar que caracterizan también la actuación de esos mismos profesionales (regañándoles por “no querer trabajar”, por ejemplo) alimentan la sensación de incomodidad y la desconfianza cuando han

de tratar con los Servicios Sociales. El establecimiento de una negociación más o menos consensuada del PII deviene, en estas circunstancias, una utopía.

6.1 La clasificación de los beneficiarios gitanos de acuerdo a clases sociales

El discurso sobre la RMI de los perceptores gitanos se ha agrupado de acuerdo a su inclusión en distintas clases sociales: clase baja, media-baja y media¹³³. Esta tipología ha sido establecida atendiendo a la combinación de varios factores que se han considerado relevantes para la aparición de un lugar discursivo desde el que el sujeto puede concebir para sí un proyecto individualizado de ascenso social¹³⁴. Un factor clave que marca la diferencia entre unas clases sociales y otras, y entre las diferentes visiones de la RMI que expresan los beneficiarios gitanos, responde a la posición en la que se ubican para explicar y dar sentido a sus comportamientos. Y una pregunta que surge a este respecto es: ¿en qué medida los explican haciendo referencia a las costumbres o normas sociales colectivas (mediante frases como "así se ha hecho siempre" o "así lo hacemos los gitanos") o lo hacen a partir de decisiones individuales tomadas autónomamente en función de unas expectativas coherentes con un proyecto vital (como puede ser la inserción en el mercado laboral formal, el cambio de empleo, el acceso a mayor formación escolar, etc.)? La aparición de un lugar discursivo para un sujeto-individuo guarda relación con un proceso de individualización según el cual éste se concibe a sí mismo, al menos en parte, como artífice de su futuro. Ésta es una de las características principales que distingue a la clase media de la clase baja y de la media-baja, y

¹³³ En otro lugar (Ayala, Jociles, Pérez-Sutil, Villamil y otros, 2008) se exponen las razones por las que se consideran relevantes las distinciones de la población gitana según esta clasificación de clase baja, media-baja y clase media, categorías construidas a partir tanto de factores estructurales (ver siguiente nota a pie) como de ciertos discursos y prácticas de las personas de etnia gitana, que se mostraron como relevantes en la investigación, ya mencionada en la Introducción, que llevó por título *Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña* y fue realizada para el Instituto de Salud Pública. Esta distinción no es estrictamente equivalente a la que habitualmente se usa con la población mayoritaria paya, porque tiene en cuenta variables diferentes como, por ejemplo, el distinto valor que los de clase baja y media-baja otorgan al trabajo asalariado como elemento de reconocimiento social, o la influencia que la relación con las instituciones sociales tiene para quienes, residiendo en poblados chabolistas, se socializan en contacto casi permanente con los distintos profesionales de la intervención social. Esta clasificación de los sujetos gitanos en clases sociales se ha planteado, entonces y ahora, como una herramienta heurística de carácter flexible. De hecho, a través de ella no se ha pretendido teorizar sobre las clases sociales, sino dar algunas claves de interpretación, por un lado, para entender por qué se dan una serie de malentendidos en la comunicación entre los investigadores y los sujetos gitanos que suelen compartir una serie de condiciones económicas, urbanísticas, sociales, etc. y, por otro lado, para reducir y ordenar (de una manera coherente, exhaustiva y que conlleve, como se ha indicado, un cierto potencial heurístico) la heterogeneidad de prácticas y discursos en torno a la RMI que presentan los gitanos que han constituido las unidades básicas de análisis de la investigación que ha dado origen a esta tesis doctoral.

¹³⁴ Los factores relevantes tenidos en consideración para el establecimiento de las diferencias entre unas clases sociales y otras son principalmente: modo de residencia (nomadismo, sedentarización, residencia en chabola temporal o continuada, etc.), lugar de la misma (que incide en la posibilidad de movilidad para acceder a los recursos existentes, en este caso, en la Comunidad Autónoma de Madrid), actividades laborales de los miembros de la familia (mercado formal / mercado informal o naturaleza de esas actividades), formación escolar de los miembros de ésta (escolarización prolongada o no), existencia de un proyecto vital de ascenso social, uso estratégico de las instituciones en favor de ese proyecto y participación en el culto evangélico.

abre la posibilidad de que los miembros del colectivo gitano elaboren sus demandas de ayudas sociales en términos de ciudadanía, es decir, apelando a su condición de sujetos de derechos a la vez que dibujándose a sí mismos como individuos responsables que están cumpliendo, a la par, con las obligaciones asociadas a esos derechos.

Los sujetos de clase baja suelen concebir sus trayectorias vitales como una reproducción, de acuerdo a “las normas gitanas”, de los modos de vida heredados de sus padres, como es el caso de casarse mediante la boda gitana o de continuar ejerciendo las actividades económicas de la familia¹³⁵. De hecho, tienden a hacer referencia a las costumbres o a las normas grupales para explicar sus actos individuales, de manera que estas costumbres y normas son presentadas por ellos, a nivel discursivo, de un modo que hace pensar que ejercen (y, a través de ellas, “lo colectivo”) una fuerte presión sobre los individuos dificultando la puesta en práctica de acciones diferentes a las socialmente aceptadas. En suma, no se abre un lugar para el sujeto individual en el marco de estos discursos, en donde frases como “los gitanos lo hacemos así” se ofrecen a menudo como respuesta a preguntas que, en realidad, están dirigidas a las personas con las que se habla. Personas que también sostienen, por ejemplo, que “no es cosa de gitanos” saber de trámites burocráticos o administrativos como los que permiten obtener la RMI y que no se sienten cómodos en sus contactos con las instituciones públicas o con sus profesionales. Buscan, entonces, relacionarse con ellas sólo para cuestiones muy puntuales, y lo hacen en un contexto de relaciones de subordinación y dependencia.

En cambio, en los discursos de los gitanos beneficiarios de la RMI que han sido considerados como pertenecientes a la clase media-baja, sí hay un lugar para el sujeto individual en lo que concierne a ciertos ámbitos de prácticas y relaciones¹³⁶. Así, expresan, por ejemplo, que les gustaría formarse y encontrar un empleo en algún momento de sus vidas,

¹³⁵ Haciendo un esfuerzo clasificatorio, y aun a riesgo de simplificar las diferencias internas existentes en cada clase social, se puede decir que quienes se han considerado integrantes de la clase baja suelen ser personas con pocos ingresos socio-económicos, con nula o escasa formación escolar y con trabajos –en caso de realizarlos– que tienden a ser desempeñados por los varones y, por lo general, en la economía informal (chatarreo o venta ambulante sin permiso oficial, actividad como temporeros agrícolas, etc.). Es común que residan –aunque este aspecto no sea determinante– en asentamientos chabolistas y que no participen en la Iglesia Evangélica. Las personas pertenecientes a esta clase social que tienen más edad recuerdan haber vivido como nómadas en su juventud y la mayoría de ellas no ha estado escolarizada. No recurren a las instituciones públicas a no ser que sea estrictamente necesario (por ejemplo, en caso de enfermedad grave) y se sienten incómodas, como se verá en este capítulo, en su relación con ellas.

¹³⁶ Las personas de clase media-baja suelen tener unos ingresos económico y un nivel de escolarización escasos, pero relativamente superiores a los de clase baja (así, por ejemplo, algunas han estado escolarizadas y las más jóvenes saben leer y escribir). Los entrevistados encuadrables en esta clase social tienden a dar valor a la educación y a la inserción en el mercado laboral aunque, por lo general, se encuentran desempleados y desempeñando actividades de venta ambulante o de chatarreo a la vez que cobran la RMI, así como proyectan la formación escolar más bien como una aspiración para sus hijos, algunos de los cuales están cursando, de hecho, la enseñanza secundaria obligatoria. Es frecuente que residan en viviendas de protección oficial o, si no, en las chabolas o, incluso, en las casas bajas mejor dotadas dentro de los asentamientos chabolistas.

lo que pone de manifiesto que elaboran planes individuales orientados hacia un futuro distinto, aunque también –como se verá– muestran signos de que no se sienten preparados para dar comienzo a esos planes, es decir, para emprender los cambios (de rutinas, de conductas, de relaciones sociales, etc.) que su consecución implicaría. Al igual que los de la clase baja, delegan en otros (sobre todo en los profesionales de las instituciones públicas con las que entran en contacto) la gestión de los trámites burocráticos necesarios para relacionarse con ellas y poder acceder a los recursos que ofrecen, si bien tienen mayor conocimiento de las mismas y de la forma de proceder en estos casos. Por ejemplo, piden asesoría profesional para solicitar prestaciones sociales, para conseguir abogados de oficio o para averiguar qué hacer si reciben una carta de desahucio. Por otro lado, fuera de estos ámbitos de actuación, en los que tienen que relacionarse con las instituciones públicas y sus profesionales, suelen atribuir sus comportamientos individuales a las normas socialmente aceptadas dentro del colectivo gitano.

En suma, a medida en que los sujetos van elaborando proyectos de ascenso social, van restringiendo paralelamente la apelación a las “normas colectivas” para explicar sus formas de hacer, sentir y pensar. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que lo se ha denominado “proyecto de ascenso social” no es más que el establecimiento deliberado de un proceso a través del cual los sujetos buscan homologar su forma de vida a la de la sociedad mayoritaria, para lo que van desplegando estrategias que entrañan una mejora de su formación y/o de su desempeño laboral y, de este modo, de sus condiciones de vida. Este proceso de búsqueda de un cambio social, económico, residencial, experiencial, etc. va acompañado de un distanciamiento explícito con respecto a quienes califican de gitanos “cerrados” o “antiguos”, que asocian a la falta de “modernidad”, a la ignorancia y a la pobreza. Quienes en mayor medida han elaborado ese “proyecto de ascenso social” son los gitanos beneficiarios de la RMI que forman parte de la clase media¹³⁷.

Estos sujetos se conciben a sí mismos como integrados en la sociedad y capaces de establecer relaciones igualitarias con las instituciones públicas. Cuando se refieren a sus formas de hacer, sentir y pensar suelen catalogarlas como “normales” (es decir, se atribuyen a sí mismos “la normalidad”) y se defienden del estereotipo de “el gitano ignorante” que, según

¹³⁷ Estos sujetos tienen un nivel económico que, aunque no sea alto, les permite vivir de una manera desahogada cuando complementan sus ingresos con prestaciones como la RMI. A nivel educativo, suelen estar formándose para acceder a un empleo asalariado, por lo que intentan relacionarse con distintas instituciones y organizaciones que pueden ayudarles a conseguir este objetivo. Es común que se dediquen a actividades como el chararreo o la venta ambulante con permiso, y algunos lo hacen en la economía formal. La mayoría de las personas que se pueden encuadrar en esta clase media, al menos entre las entrevistadas, participan activamente en la Iglesia Evangélica. Residen a menudo en viviendas en altura, ya sean de su propiedad o compartidas con familiares, y tienen conocimientos suficientes sobre las características y el funcionamiento de las instituciones públicas como para relacionarse con ellas siguiendo sus lógicas internas y sintiéndose cómodas en esas relaciones.

dicen, es el que no quiere aprender ni progresar en la vida. Son personas que, por lo general, tienen expectativas de conseguir un empleo a través de una mayor y mejor formación, haciendo un uso estratégico de las instituciones para lograr sus objetivos (ya sea porque conciben los cursos de alfabetización vinculados a la RMI como una posibilidad de mejora laboral o, para poner otro ejemplo, porque utilizan sus alianzas con los trabajadores sociales para recibir subvenciones de diverso tipo), lo que muestra que se relacionan con ellas y con sus profesionales de una manera más igualitaria que los integrantes de la clase baja o de la media-baja. Las instituciones sociales, por tanto, dejan de ser concebidas por los sujetos de clase media como agentes externos que buscan imponer ciertos modos de pensamiento y acción que se ven como ajenos, para pasar a ser consideradas como aliadas o como colaboradoras estratégicas para la consecución de determinados fines elegidos por la persona. Es decir, las relaciones que establecen con las instituciones son vividas, en estos casos, como respondiendo más a lógicas de reciprocidad que a lógicas de imposición, de suerte que los gitanos beneficiarios de la RMI de clase media enfocan dichas instituciones no tanto en términos de dependencia como de posibilidades. Es preciso aclarar aquí que, dada la manera en que se ha establecido la categorización por clases sociales (ver notas a pie 134, 135, 136 y 137), es posible ser gitano de clase media y cobrar la RMI, puesto que el cobro de esta prestación responde a la imposibilidad de insertarse laboralmente en unos términos que no supongan la pérdida económica para la unidad familiar, pero no impide que se tengan otras fuentes de ingresos, por lo que es integrado por las familias gitanas como una de las vertientes de sus estrategias productivas, en particular, de la que –como se verá más adelante– se denomina combinación de ingresos (unos procedentes de la RMI y otros de actividades realizadas en la economía informal).

6.2 *RMI, desconfianza y contexto de percepción de los Servicios Sociales*

El discurso sobre la RMI de los perceptores gitanos de clase baja y media-baja contiene una visión de la misma que la presenta más como un derecho adquirido históricamente por ser “pobres” y “gitanos” que como una prestación social que se recibe por el cumplimiento de ciertos requisitos de acuerdo a la lógica de los derechos de ciudadanía. Estas personas no se refieren a ella con un léxico que haga referencia a derechos y obligaciones. Aunque sí utilizan frases como “tengo derecho a la paga” o como “sólo pido lo que me corresponde”, estos beneficiarios hablan de la RMI como si se tratase de algo que diesen por sentado por haber resistido ciertas situaciones de pobreza y exclusión (que les han

“dado derecho” a ella), por lo que nunca la mencionan como una prestación económica que conlleva ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que sea concedida. Es común, por tanto, que para justificar que les hayan concedido la RMI, aduzcan el hecho de que algunos de sus familiares y conocidos de etnia gitana también la reciben o la han recibido. El cobro de la RMI es percibido por estos beneficiarios como una obligación de asistencia por parte del Estado, viviéndose como una suerte de “donación” de los poderes públicos ante la prolongada vivencia de situaciones precarias y/o de vulnerabilidad social por parte del colectivo gitano, como “un regalo o una deuda” de esos poderes hacia él (Dubet y Véréttout 2001: 41).

Hablar de la RMI supone, en el caso de estos usuarios, hablar de los trabajadores sociales que la gestionan. A parte de esto, no es común que dediquen tiempo a conversar sobre esta política social ni sobre las instituciones que la gestionan, temáticas que no son consideradas relevantes. Por otro lado, la forma en que se refieren a la RMI tiene relación con el momento de sus vidas en que conocieron los Servicios Sociales, así como con las dinámicas que establecieron con ellos. La mayoría de los gitanos beneficiarios de la RMI de clase baja y media-baja, al menos de los que han sido entrevistados, no suelen guardar una memoria clara del tiempo en el que empezaron a contactar con esos Servicios Sociales y, en general, han tenido una experiencia prolongada con sus profesionales. Al contrario de lo que sucede con quienes se relacionan con esta institución social por situaciones repentinas de desempleo (con múltiples “entradas” y “salidas”), estos otros beneficiarios se caracterizan por llevar largos periodos de tiempo en contacto con ella, en ocasiones desde la década de los 90, periodo en el que el trabajo social madrileño tenía un claro cariz asistencialista. Suelen ser, por tanto, sujetos catalogados por los profesionales de la misma –como ya se ha dicho en varias ocasiones– bajo la categoría de “usuarios cronificados” o “usuarios acomodados”. Se tratará, a continuación, de dar algunas explicaciones que permitan contextualizar la peculiar relación que estos gitanos beneficiarios de la RMI de clase baja y media-baja mantienen con los Servicios Sociales.

Dado que, como se ha comentado, cuando son interpelados sobre la RMI y las instituciones que la gestionan, no dedican apenas espacio en sus discursos a tratar el tema (fuera de describir las características de sus trabajadores sociales y cómo consideran que les tratan), tendría poco sentido intentar analizarlos para inferir algo más que la propia constatación de la poca importancia que le conceden al mismo. Debido a ello, en este capítulo se ha optado, en su lugar, por reconstruir la experiencia de algunos casos paradigmáticos de gitanos beneficiarios de la RMI de las distintas clases sociales para dar sentido, por un lado, a esa ausencia en sus discursos de contenidos referidos a la RMI y, por otro, para contextualizar

sus narraciones y ciertas tácticas que desarrollan cuando se relacionan con los profesionales del trabajo social. Se pretende, de este modo, reflexionar sobre algunos elementos que permiten comprender la aparición de similitudes, por un lado, en la manera en que los integrantes de cada clase social se relacionan con los Servicios Sociales y con los profesionales que aplican la RMI y, por otro lado, en las argumentaciones que esgrimen cuando entran en contacto con éstos de cara a solicitar ayudas. Las referencias a las teorías de autores como Fassin (2000a, 2003, 2004) y Castel (1996) sirven para enmarcar algunas de las actitudes y comportamientos de estos gitanos beneficiarios de la RMI, en la medida en que arrojan luz sobre las demandas de ayudas sociales que, en general, provienen de personas que están en situación de exclusión social.

Un aspecto a resaltar que servirá para encuadrar los discursos de estos gitanos de clase baja y media-baja es que su subjetividad y auto-reconocimiento no depende de la valoración derivada de la inserción en la economía formal. La recepción de ayudas económicas y el extenso contacto con los Servicios Sociales no suponen, para ellos, signo alguno de descenso social o sentimiento de vergüenza. De hecho, los Servicios Sociales y sus profesionales forman parte de su cotidianeidad, de manera que hablar de éstos y de “la paga” les lleva a describirlos, a comparar los unos con los otros y a relatar cómo lidian con ellos. Es común que critiquen la fría actitud de los trabajadores sociales, así como el tener que “contar mentiras” para causarles empatía y convertirse en demandantes legítimos de la prestación económica (en un contexto, además, de reconocida escasez de recursos y de alta competitividad por ellos): “Estoy cansada de tener que contar cuatro mentiras para que me den una ayuda”, decía una gitana beneficiaria de la RMI, de 45 años, durante la entrevista que le hice.

A pesar de la retórica garantista que cabe encontrar en la regulación de la renta mínima de inserción, los gitanos se refieren a ella en unos términos que dejan ver que recibirla no está libre de contraprestaciones, es decir que saben que, a cambio de la prestación económica, se espera de ellos una contribución a la altura de sus posibilidades. Así, en primer lugar, y dado que el marco en el que se relacionan con los profesionales que gestionan la RMI es de desconfianza y de asimetría de poder, cuando se conversa con ellos sobre esta prestación económica, suelen exponer los distintos argumentos a los que tienen que recurrir para que éstos reconozcan como legítima su demanda. Son conscientes, por tanto, de que han de construir un relato creíble ante ellos. El hecho de que los demandantes de ayudas sociales tengan que contar de un modo socialmente reconocido su sufrimiento y su pobreza cómo condición *sine qua non* para conseguir el beneplácito de los profesionales ha sido remarcado

por autores como Fassin (2004: 258-261), quienes lo han presentado como una de las contradicciones de las políticas públicas actuales, a la vez que como un instrumento de la gobernabilidad contemporánea.

En nuestras sociedades, se espera de *los asistidos* que, a cambio de los bienes que reciben para sobrevivir, ofrezcan un relato coherente de su penuria. En lo que se refiere, en particular, a los solicitantes de la RMI, han de aportar “el relato sobre su vida, con sus éxitos y sus fracasos” (Castel 1996: 473) no sólo para justificar lo que demandan, sino para “manifestar su buena voluntad” (Fassin, 2000a: 956). Ello supone demostrar la necesidad de la ayuda que se está demandando a través de un proceso de victimización. Acercarse a Servicios Sociales implica “desnudarse” en el sentido de dar información íntima sobre uno mismo, para justificar niveles de pobreza y/o precariedad que doten de legitimidad a la demanda que se está efectuando ante la institución de que se trate. En cierto sentido, supone “feminizarse” en la medida en que hay que mostrar vulnerabilidad y ésta suele asociarse a lo femenino¹³⁸. Por otro lado, estos relatos si bien distan de ser decisivos en las deliberaciones profesionales, sí se presentan como una pieza clave del dispositivo de la intervención social pues, como asegura Fassin (2004: 248), “la administración se humaniza en esta individualización de los tratamientos”, dado que dichos relatos funcionan como “el *suplemento de alma* de la gestión de las demandas de ayuda”¹³⁹. Ahora bien, –como plantea el mismo autor– aquí cabe preguntarse qué necesidad hay de estos alegatos autobiográficos cuando ya se ha entregado la documentación que objetivamente muestra si se tiene derecho o no a las distintas ayudas.

El sujeto en contacto periódico con los Servicios Sociales es interpelado a hacer una presentación de sí mismo que pone de manifiesto que la relación que se urde alrededor de los pobres implica más que intercambios materiales (Fassin, 2000a: 956), dejando patentes los canjes de prestaciones económicas por relatos auto-biográficos que testifiquen la veracidad del sufrimiento alegado¹⁴⁰. En las conversaciones informales que he mantenido tanto con gitanos perceptores de la RMI de clase baja residentes en asentamientos chabolistas como con beneficiarios de clase media-baja, ha surgido a menudo el tema de que con los trabajadores sociales “hay que tener cuidado”, hay que medir lo que se les dice para evitar que “te quiten la

¹³⁸ Idea defendida en el informe inédito “El grado de satisfacción con las figuras profesionales de la intervención social por parte de las familias usuarias de los Servicios Sociales de Puente de Vallecas”, demandado por la Empresa de Educadores Sociales y realizado durante el año 2009 con Sergio García García.

¹³⁹ Traducción propia.

¹⁴⁰ En la obra recién citada, sostiene que el despliegue de un dispositivo de exposición del sufrimiento puede ser visto como un ejercicio de subjetivación impuesto a los pobres, denominando “política moderna de la piedad” a esta forma de acercarse a la gestión de la miseria (Fassin, 2000: 974, 981).

paga”. Por su lado, los trabajadores sociales expresan la sensación que tienen de que son ellos los que están siendo “engañados” por los gitanos, y que ante la más mínima concesión por su parte, éstos hacen todo lo posible para no asumir compromiso de cambio alguno. Ello no es más que otro ejemplo de la desconfianza desde la cual, como se ha dicho, se relacionan unos con otros. Así, una mujer gitana, de 32 años, me contaba durante una conversación que mantuvimos en la ONG donde trabajaba que los propios Servicios Sociales les obligan a mentir, puesto que si declarasen alguna entrada de dinero “en negro”, por ínfima que fuese, les sería negada la prestación económica, dejándoles en una situación familiar muy vulnerable.

La memoria histórica que los miembros del colectivo gitano en posiciones sociales más bajas guardan de la relación con los profesionales de la ayuda social no contribuye a crear un clima de confianza, ya que piensan que “dar” demasiada información a los Servicios Sociales (o a otras instituciones públicas) acaba yendo en su contra, pudiendo ser utilizada por éstas para aumentar la rigidez y/o vigilancia sobre el colectivo. En esta línea, Serrano y Arriba (1998) afirman que la declaración de ingresos en la economía informal fue utilizada, en el periodo de aplicación del IMI, como justificación para intensificar el control sobre las familias gitanas, siendo más exigentes en el tipo de documentación que se les pedía para la renovación anual de la prestación. Esto ha sido asumido por los gitanos beneficiarios de la RMI, quienes expresan que los trabajadores sociales “tienen la sartén por el mango”, por lo que no pueden controlar plenamente los resultados de la interacción con ellos. En lo que se refiere, en especial, a la entrega de “papeles”, sienten que están en desigualdad de condiciones (de saber, y por tanto, de poder) con respecto a los profesionales del trabajo social.

En la Comunidad de Madrid, donde los recursos públicos se están recortando cada vez más en consonancia con “los planes de ajuste que se están produciendo drásticamente en nuestro país” (Zamanillo, 2011: 7), las clases medias y altas están optando por el pago de los servicios sociales y sanitarios. La RMI queda situada como una prestación económica marginal y poco conocida en un contexto socio-económico donde priman los discursos políticos referidos a “la crisis” de las instituciones públicas y a la necesidad de establecer medidas de co-pago por parte de los ciudadanos¹⁴¹. Los llamados “derechos sociales de solidaridad” se alejan, en este contexto, de una concepción garantista, solidaria y universal de

¹⁴¹ Durante noviembre 2011 varios han sido los artículos periodísticos que han hecho referencia a que se van a producir recortes sociales. El Presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) afirmó, en entrevista al diario *El País* (Moreno, 2011), que iba a proceder a “recortar” todo menos las pensiones. Por su parte, CIU está intentando instaurar el co-pago en la sanidad catalana, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad le ha advertido que no tienen competencia autonómica en esta materia. Estos dos casos muestran la frecuencia con que los recortes sociales están presentes en el discurso político a nivel nacional y autonómico.

los mismos (como prestaciones, por ejemplo, conducentes a evitar la vulnerabilidad social) y van insertándose en el imaginario colectivo como recursos dedicados a paliar las situaciones de extrema necesidad¹⁴².

Ahora bien, los gitanos de clase media-baja y media no responden a la imagen de la exclusión social más severa, por lo que son evaluados con gran detenimiento por los profesionales para determinar si verdaderamente tienen derecho a la RMI, pensada desde esa visión reduccionista de los derechos sociales que se acaba de señalar. Varios de los profesionales entrevistados dicen “estar cansados” de que los gitanos obtengan prestaciones económicas únicamente por el hecho de su pertenencia étnica. Y, como se ha visto, la sospecha de que reciben ingresos en la economía informal enturbia constantemente su relación con estos perceptores de la RMI, lo que contribuye a complicar el establecimiento de una relación de confianza (Serrano y Arriba, 1998).

De hecho, ser beneficiario o demandante gitano de la RMI es suficiente para levantar sospechas, que llevan a los profesionales a indagar sobre la naturaleza de la demanda por considerar que los gitanos han mejorado bastante sus condiciones de vida, por lo que tal vez no tengan derecho a cobrar la prestación económica¹⁴³. San Román (2010, [1997]: 277) sostiene que los gitanos ya no responden únicamente a situaciones de grave marginación social y que “poco a poco ha ido creciendo un segmento social gitano acomodado”, pudiéndose decir que han dejado de ser los candidatos prototípicos para la recepción de ayudas sociales. Los profesionales consideran que la RMI hace un flaco favor a los gitanos, actuando como un freno al desarrollo de sus capacidades, habida cuenta que –como se ha visto en otro capítulo– es considerada una política social que produce dependencia y los sitúa en una situación de “precariedad –que también cabe calificar de– acomodada”, esto es, lo suficientemente estable como para que no tengan que esforzarse por cambiarla puesto que ello perjudicaría a nivel económico al conjunto de la unidad familiar.

“La paga” se presenta en los discursos de los gitanos de clase baja y media-baja como un subsidio de carácter vitalicio, un cuasi-derecho adquirido por haber vivido excluidos y

¹⁴² Cabe reseñar, por otro lado, que la legitimidad social de la RMI en el ámbito español es mucho menor que, por ejemplo, en el francés, siendo una desconocida para la ciudadanía española en general. El desconocimiento de la prestación predecesora, el IMI, fue detectado en una de las primeras evaluaciones oficiales que se realizaron de ella (Aguilar, Gaviria y Laparra, 1993). Esto mismo se pone de manifiesto actualmente con respecto a la RMI en el hecho, por ejemplo, de que en distintos foros profesionales se haga precisamente la propuesta de darla más a conocer. Del mismo modo, en varias de las jornadas tituladas “A Favor de la Inclusión Social” que organizaron conjuntamente durante el año 2007 la Fundación Luis Vives y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los distintos ponentes y algunos participantes hicieron hincapié en la necesidad de dar a conocer esta política social.

¹⁴³ Los gitanos perceptores de la RMI, por su parte, confirman en cierta medida las sospechas profesionales al expresar abiertamente que no tienen necesidad de trabajar “al estilo de los payos”, quienes se empeñan en “partirse los cuernos” en el precarizado mercado laboral formal.

marginados por la sociedad, lo que tiene que ver, a su vez, con su histórica relación con los Servicios Sociales –siempre mediada por dádivas– y entronca con las estrategias productivas desplegadas por la fracción del colectivo más vulnerable socialmente, tendentes a generar recursos combinando distintas actividades (entre ellas, las de la economía informal).

6.3 Estrategias productivas del colectivo gitano perceptor de la RMI

Los gitanos han tendido a generar sus ingresos económicos a través de trabajos por cuenta propia, y lo han hecho a partir de horarios flexibles y de un amplio margen de maniobra que les ha permitido adecuar esos ingresos a las fluctuaciones experimentadas por sus condiciones de vida. La adaptación que han llevado a cabo, a lo largo de su historia, a la necesidad de realizar múltiples actividades marginales ha ocasionado que, haciendo de la necesidad virtud, hayan pasado a valorar altamente ciertas características de las mismas, como la libertad de acción, la flexibilidad horaria y no tener que estar subordinados a un patrón. Actualmente siguen enarbolando esos valores para distinguirse de la forma de inserción laboral que consideran propia de los *payos*, más en la línea de desarrollar un trabajo asalariado “normalizado”.

En un poblado tan marginal como La Celsa, en el Madrid de aquel tiempo, el 100% de los peones eran *payos*, y el 100% de los chatarreros, gitanos. Algo más hay que las condiciones económicas de la gente. Para un gitano, el ser peón de albañil suponía una alternativa abierta como lo era el ser chatarrero. Para un *payo* no era una alternativa cultural existente, y se resistieron a ello con unas y dientes a pesar de que no existían razones ‘objetivas’ para ello (...) En los sesenta-setenta había bastante trabajo, incluso para quien no sabía hacer nada en especial. Y en esa coyuntura los gitanos ocupaban puestos asalariados pero lo combinaban con otras ocupaciones marginales. Los *payos*, tan pobres como ellos, elegían el peonaje eventual y precario antes que asomarse por el vertedero (...). Pero fíjense que un asalariado eventual y ocupando un puesto de condiciones precarias, como era el caso para la gran mayoría, ganaba mensualmente más o menos lo mismo que un chatarrero, una de las ocupaciones marginales menos rentables; además obedece a un *payo*, trabaja bastantes más horas, tiene que tomar transporte público, está toda la jornada laboral fuera de casa y, después de todo ello, por si fuera poco, ocupa uno de los puestos más bajos en la escala de prestigio que los propios gitanos mantenían respecto a las ocupaciones que se realizaban en aquel momento. Les costaba entender el inflexible empecinamiento de sus vecinos *payos* (San Román, 1997: 157-159).

San Román denomina “estrategias productivas flexibles” a la capacidad de los gitanos de desempeñar actividades económicas diversas, combinándolas y adecuándolas al momento histórico y al contexto físico, económico y social en que viven. Según asegura, “la combinación de ocupaciones integradas (conocidas, suficientes, normalizadas) con otras marginales y con algunas ilegales” ha sido común en el colectivo gitano (San Román, 1997: 160-161), siendo la alternancia de actividades en diferentes momentos del año la otra estrategia productiva desplegada por él. Ahora bien, aunque actualmente hay algunos gitanos *chabolistas* que migran a otras ciudades durante el verano para colaborar en labores agrícolas,

la mayoría de ellos no recurren a esta segunda estrategia, sino que combinan el cobro de la RMI con otras actividades en la economía informal (generalmente, la venta ambulante). Así, se puede afirmar –en concordancia con la citada autora– que esta combinación de actividades económicas ha compensado históricamente y sigue compensando la “escasez y agotamiento del mercado” (San Román, 1997: 163); y se puede afirmar también que, cuando se desarrolló el “esfuerzo integrador” de comienzos de los años setenta (San Román, 1997: 164), se les ofreció a los gitanos puestos de trabajo extremadamente precarios, por lo que se siguió propiciando que alternaran el empleo asalariado con las estrategias antes descritas.

Los gitanos los tomaban como lo que eran: trabajos desechados por los payos de los que no se podía realmente vivir. Y por lo tanto recurrían constantemente a la alternancia con otras ocupaciones (...). Su inestabilidad en el empleo, absolutamente comprensible, no era distinta a la inestabilidad que se les estaba ofreciendo. Simplemente no coincidían en fechas. Pero se hizo proverbial y muchos empresarios y capataces encontraron ahí una razón más para sus prejuicios, y eso a su vez incidía directamente en la precariedad de la oferta, en las condiciones, en el trato que se daba a los gitanos. Y éstos a su vez volvían a confiar más en sus estrategias de alternancia, combinación y movilidad (San Román, 1997: 167).

Podríamos decir que la RMI, y en sus tiempos el IMI, ha acentuado la precarización del colectivo, al entregarles unos ingresos económicos mínimos pero suficientes, que han coadyuvado a establecer a largo plazo una relación vicaria con las prestaciones económicas de los Servicios Sociales y desmotivado, por tanto, la inserción laboral. Por ejemplo, los cursos temporales de formación del INEM, que son remunerados, ofrecen salarios tan exiguos que algunos gitanos entrevistados, que estaban interesados en ellos, no los han visto como una verdadera oportunidad de inserción. Además de sentir que, después de realizarlos, no iban a poder insertarse laboralmente (por el racismo contra el colectivo y por la escasez de puestos de trabajo en la economía formal), los complicados mecanismos burocráticos de reactivación de la RMI (que pueden llevar hasta 4 meses) producen un efecto desincentivador que se refleja en afirmaciones del tipo “mejor quedarme como estoy que complicarme más la vida”. El caso es que combinar la RMI con el chatarreo u otra actividad les permite sostenerse económicamente¹⁴⁴, siendo una razón de peso para no embarcarse en actividades laborales temporales y precarias en la economía formal.

Cuando le ofrecemos a un gitano participar en un curso de formación profesional, lo que aquél se plantea, desde un estricto principio de racionalidad individual, es un balance entre lo que se le ofrece y lo que ya tiene. Debemos ser conscientes, entonces, de que lo que les estamos pidiendo es que participen en cursos de formación (pongamos para albañiles) durante dos años para ofrecerles después una situación laboralmente incierta y precaria, con muchas obligaciones y compromisos ante un jefe payo y que, eso sí, probablemente le reste capacidad para poder cumplir una serie de obligaciones que de acuerdo a su cultura son fundamentales (disponibilidad de cara a la familia, poder desplazarse cuando hay enfermedades, etc.). Teniendo en cuenta que todavía la

¹⁴⁴ Por lo general, las mujeres gitanas “trabajan” asistiendo a los proyectos de integración, encargándose del contacto institucional y del cuidado doméstico y familiar, mientras que los varones gitanos salen a realizar actividades diversas para complementar la RMI con los ingresos que ellos consiguen.

mayoría de los gitanos son capaces de ganarse la vida a partir de los espacios informales no regularizados y, en todo caso, en combinación con las prestaciones sociales, aunque no tengan un empleo estable es fácil entender que nuestra propuesta sea percibida como distante y poco útil. Como dijimos, esto no es más que un ejemplo de cómo los elementos culturales inciden en todo lo que estamos viendo. (Villareal, Estivill y Aiguabella, 1997: 74).

Hay que tener en cuenta que el nivel de vida de los gitanos que han sido realojados en barrios, que suelen asistir a los “cursillos de formación” ligados a la RMI mientras cobran la prestación, es relativamente aceptable hoy en día debido a esta combinación de ingresos y al hecho de ser beneficiarios de diversas prestaciones sociales. Así, la RMI ha estabilizado económicamente a la parte del colectivo gitano que más tiempo lleva en contacto con los Servicios Sociales, que ha sobrevivido “dignamente” gracias al cobro de la prestación, de otras ayudas sociales y a la realización de actividades en la economía informal. A su vez, ha provocado algunos efectos no deseados dado que, al ser interpretada por los solicitantes/beneficiarios de clase baja y media-baja como un ingreso familiar que el Estado otorga a “los pobres”, los miembros de la familia actúan sobre la base de las prescripciones establecidas para seguir recibiendo la prestación económica. Así, los jóvenes gitanos son aleccionados por sus padres para no buscar trabajo en el mundo asalariado puesto que, de hacerlo, los ingresos de su unidad familiar se reducirían, toda vez que el monto que se recibe por esta prestación se calcula de acuerdo al número de hijos y a los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, como también ocurría en el periodo IMI (ver Serrano y Arriba, 1998: 223). De este modo, una de las consecuencias negativas de la RMI, que crea mucha frustración –como se ha visto– en los distintos profesionales, es esa desincentivación de la búsqueda de empleo que desencadena en la juventud gitana. De hecho, y puesto que la RMI es una de las estrategias familiares de captación de ingresos, sólo en familias de etnia gitana en las que se enarbolan el valor del esfuerzo y del ascenso social a través de la educación (normalmente las de clase media), se está animando a los jóvenes y a las mujeres a que se integren laboralmente a pesar de que ello entrañe una pérdida de ingresos económicos.

6.4 La relación subjetiva con el trabajo

En suma, la realización de actividades en la economía formal no tiene sentido, salvo en casos como el recién expuesto, cuando supone más horas de trabajo y una cuantía económica menor que la obtenida de la combinación de ingresos. Para entender en su justa medida esta situación, vamos a indagar en este apartado –apoyándonos en los análisis de diversos teóricos que han abordado esta temática– en la relación subjetiva con el trabajo de

los gitanos beneficiarios de la RMI y en las razones por las que la inserción laboral no es el principal elemento que les otorga reconocimiento social.

Autores como Villareal, Estivill y Aiguabella sostienen que los gitanos encuentran obstáculos para pasar de la economía informal a la formal a la vez que “dificultades para adaptar los ritmos de producción, los sistemas de organización y los trámites organizativos que esta normalización conlleva” (1997: 73). Así, en línea con lo referido por San Román, aseguran que los gitanos tienen una “tendencia natural a buscarse la vida o, en términos más al uso en nuestro campo (la inserción socio-laboral), a autoemplearse” (1998: 72), y añaden:

La tradición, la memoria histórica y los modelos de referencia les orientan más a hacia el desarrollo de actividades de tipo autónomo e independiente. En este sentido, la propia concepción del trabajo aparece diferente de la concepción convencional entre la sociedad mayoritaria en muchos sentidos. Los modos de trabajar son distintos para los gitanos, desarrollándose muchas veces en familia o, como en el caso del temporero, sin que implique continuidad (Villareal, Estivill y Aiguabella, 1997: 72).

Estos autores indican que algunas de las actividades informales realizadas por los gitanos seguían en expansión a finales de la década de los 90, pero hacen hincapié en que, cuando éstas se formalizaron, resultaron expulsados de las mismas. En consonancia con lo anterior, San Román (1997: 175) argumenta que la oficialización de la venta ambulante y la formalización del chatarreo, acometidas en un intento de “regularización” por parte de los Ayuntamientos, no favorecieron a los gitanos menos acomodados.

Como se ha indicado más arriba, los gitanos encajan el cobro de la RMI en (y lo vivencian como parte de) las estrategias productivas de la familia. Así, en ésta se da una división sexuada de los roles laborales según la cual las gitanas, que habitualmente las son las titulares de la RMI, asumen que su función dentro del reparto de las responsabilidades económicas familiares consiste en ir a los “cursillos de formación”, a pesar de que en ocasiones expresen que “no sirven para nada”, y en lidiar con la burocracia relacionada con esta prestación. Dan por sentado que ése es “su trabajo”, mientras que sus maridos o compañeros se ocupan de conseguir ingresos mediante la realización de otras actividades (chatarreo, mercadeo ambulante, temporero, etc.). Por lo general, las gitanas perceptoras de la RMI de clase baja y media-baja no ven como una opción factible su inserción en el mercado laboral formal. El racismo y el rechazo social que perciben hacia el colectivo es un potente elemento desincentivador, a la vez que los roles de género que tienen asignados. Estas mujeres están habituadas a su “rutina” semanal, que consiste en la asistencia a los cursos y charlas que forman parte de los proyectos de integración (a los que tienen que asistir porque así lo han suscrito) y en la organización doméstico-familiar del hogar. Los bajos salarios que recibirían en el mercado laboral formal terminan por disuadirlas del intento de insertarse en él,

puesto que ello supondría una pérdida de calidad de vida y de ingresos habida cuenta que dejarían de percibir la RMI a la vez que tendrían que ocupar los puestos de trabajo reservados a la población menos cualificada.

Por otra parte, las beneficiarias gitanas de clase media que sí han intentado encontrar un empleo en la economía formal suelen contar su experiencia en los “cursillos” a los que asisten. En el relato de estas vivencias aparece el dolor, el cansancio personal y el agotamiento provocados por los obstáculos que encuentran en ese intento de inserción laboral, algunos de los cuales son comunes a toda la población en momentos de crisis, como ocurre con la alta competencia por puestos de trabajo escasos, pero otros tienen un carácter más exclusivo, como sucede con el rechazo ligado a su pertenencia étnica. Estas narraciones sirven, por tanto, de elemento disuasorio para las mujeres perceptoras de la RMI de inferior posición social que no se consideran preparadas para insertarse laboralmente.

En mi primera sesión de visita a un grupo de la ONG O (que trabaja con muchas mujeres gitanas), varias de ellas me cuentan que están buscando empleo y que no logran encontrarlo. Expresan que tienen que “disimular ser gitanas”, cambiándose el peinado o el estilo de pendientes que llevan, para poder así evitar el racismo con el que comúnmente se encuentran. Dicen que se visten “diferente”, se recogen el pelo y tratan de cambiar algo de acento. Aun así, experimentan rechazo social, y cuentan cómo se prefiere a población inmigrante para el desempeño, por ejemplo, de tareas domésticas o de cuidado de ancianos. (Registro de campo: observación en ONG que trabaja con mujeres gitanas, proyecto 4, zona sur de Madrid, junio 2007)

Algunas jóvenes gitanas beneficiarias de la RMI de clase media-baja expresan abiertamente su negativa a “trabajar como una paya”. Es el caso de Marta, mujer de 22 años, con buen manejo de la lectoescritura, madre de dos hijos y residente en una vivienda de protección social en un barrio de la zona sur de Madrid. Dice que no se plantea trabajar en la economía formal por menos de 1.000 euros, prefiriendo “quedarse como está”. Su “trabajo”, para seguir utilizando sus mismas palabras, consiste en “aguantar los cursillos” vinculados a la RMI, lo que le supone tener que asistir hasta tres días a la semana a las actividades organizadas por la ONG que desarrolla el proyecto de integración en el que participa. Mientras tanto, su pareja “chatarrea” para complementar los ingresos de la RMI. Por su parte, Alma, mujer de la que ya hemos hablado más atrás (de 21 años, madre de un hijo, separada de su pareja, llegada recientemente de Extremadura y residente en una casa ocupada en un barrio de la zona oeste de Madrid), manifiesta no tener problema alguno en salir a vender calcetines al lado de la parada de metro más cercana a su domicilio cuando con la RMI no es capaz de llegar a fin de mes. En cambio, no se siente preparada para buscar empleo en la economía formal. Afirma que vender calcetines no le supone mucho esfuerzo puesto que puede hacerlo acompañada de su hijo de un año, de cuyo cuidado ella es la única que se hace cargo dado que no cuenta con familiares en Madrid que puedan relevarla en esta tarea y, según asegura,

tampoco se siente cómoda ante la posibilidad de dejarlo en una guardería. La combinación de ingresos es una práctica legitimada para las gitanas beneficiarias de la RMI, quienes –como se ha visto– no tienen problema en dedicarse a actividades informales para complementar el cobro de la RMI, mientras que la inserción en la economía formal “les queda grande”, no sintiéndose preparadas para ello.

En resumen, el hecho de que la combinación de ingresos sea económicamente rentable para los gitanos beneficiarios de la RMI hace que éstos no estén predispuestos a insertarse en el mercado laboral formal si no se les ofrece salarios decentes que les permitan vivir igual o mejor que como viven mediante dicha combinación. Debido a esto, algunos trabajadores sociales entrevistados consideran que las expectativas de estos beneficiarios con respecto a la inserción laboral son desajustadas, ya que es muy poco probable, dada su falta de formación, que puedan conseguir los salarios que les compensen dejar de percibir la RMI. Por otro lado, los perceptores de clase media-baja no se suelen considerar capacitados para insertarse en la economía formal. Y en cuanto a los de clase media, aunque ya se encuentren involucrados en un proceso de ascenso social a través de la formación y/o de la búsqueda planificada de vínculos con las instituciones públicas y sus profesionales, también dicen que no buscan la inserción laboral, porque, –en su caso– a pesar de desear hacerlo, ello bajaría su nivel de vida debido a la pérdida que les supondría dejar de cobrar la RMI.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en Javier (de clase media, con 36 años, padre de seis hijos, dedicado a la venta ambulante y esposo de Felisa, de 34 años, que es la titular de la RMI dentro de la unidad familiar), quien declara que, si bien le gustaría tener un empleo, no lo buscará a no ser “que le den un salario digno”. Javier es otro caso que ilustra que los gitanos no se ajustan a la imagen de los demandantes de ayudas sociales que se muestran “agradecidos” por cualquier concesión que se le haga, que responden con gratitud y cierta sumisión a la “precaria estabilidad” de la que disfrutan; aspecto éste que les diferencia de otros beneficiarios entrevistados (como algunas mujeres inmigrantes que también cobran la prestación económica de la RMI). Es más, los perceptores gitanos de clase media expresan críticas abiertas a la escasez de las ayudas sociales y a la exigua cantidad económica que supone el cobro de la RMI, y lo hacen además recurriendo a un lenguaje que exige justicia y salarios dignos, en suma, lo que estiman sus derechos. De este modo, son el prototipo de beneficiarios desagradecidos y productores de un discurso que va a “contracorriente” con respecto a otros solicitantes de ayudas públicas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, lo que –no lo olvidemos– incomoda a algunos profesionales que trabajan con ellos.

Los de clase baja y media-baja, tal como se ha dicho más atrás, conciben la RMI como una pensión vitalicia que reciben (y deben recibir) por tradición. Ahora bien, aunque utilicen a veces la palabra “derecho”, con este término hacen referencia a una prestación que se obtiene como contrapartida al sufrimiento y precariedad que han experimentado históricamente o que es reclamable porque otros de su entorno social también la reciben, por lo que piden a las autoridades que se comporten con ellos como con sus conocidos y/o familiares. Así, cuando los beneficiarios más pobres dicen “tengo derecho a la paga”, ello no supone que encaucen su demanda de la prestación económica dentro de la lógica de los derechos de ciudadanía, derechos a partir de los cuales se ha configurado, sin embargo, la RMI, tal como se ha tratado en el capítulo primero. Por el contrario, los beneficiarios de clase media sí han adoptado un lenguaje para referirse a esta política social que moviliza cuestiones de derecho ciudadano, por lo que cuando hablan del “derecho a la RMI” incluyen también las obligaciones que entraña su disfrute. Unos y otros, por tanto, demandan lo que piensan que les corresponde, pero únicamente los beneficiarios de clase media lo hacen en los mismos términos que la institución de Servicios Sociales y sus profesionales. Es decir que, aunque todos pidan de alguna manera lo que piensan que se merecen, no todos lo hacen con un tono casi de súplica ni expresan agradecimiento por que se les conceda. Se puede afirmar, siguiendo la definición de la pobreza de Arendt (1967: 83-84) que, excepto los gitanos de clase baja, el resto no muestra signos de una pobreza suficientemente deshumanizante¹⁴⁵.

En otro orden de cosas, cabe decir que demandar ayudas sociales implica generalmente participar en un proceso discursivo de victimización (Fassin, 2004: 261), en el que son comunes las narraciones del sufrimiento que uno/a mismo/a está experimentando y que ha sido ocasionado, por ejemplo, por situaciones de pobreza, precariedad o enfermedad. Dicho proceso de victimización parece incompatible con discursos de demanda de ayuda expresados en términos de exigencia o de derecho a las ayudas sociales, como ocurre en los casos de gitanos de clase media y media-baja. Ahora bien, esta falta de victimización en sus discursos, junto con la diferente visión que tienen del trabajo asalariado, les genera conflictos en sus relaciones con los profesionales, quienes califican sus demandas de exigentes o desajustadas. Es más, cuando piden las ayudas sociales mediante la demostración de un cierto sufrimiento, sus relatos no producen el plus de veracidad que los profesionales esperan de las narraciones autobiográficas de los solicitantes en situación de exclusión social,

¹⁴⁵ Según esta autora “la pobreza es más que la simple falta, es el estado de necesidad constante y de miseria aguda donde la ignominia particular reside en su poder deshumanizador” (en Fassin, 2000: 975).

Volvemos ahora al caso de Javier y Felisa para ejemplificar algunas de las cosas que se acaban de decir sobre los gitanos beneficiarios de la RMI que forman parte de la clase media. Cuando se le pregunta a Javier (que ha vivido desde pequeño en pisos de protección oficial y cuyos padres se dedicaban también a la venta ambulante) por qué no busca un empleo en la economía formal, asegura que lo haría si consiguiera un salario de, al menos, 1500 euros y que, dado que sabe que su expectativa no puede ser cumplida, seguirá de momento como está, es decir, a la espera de “un salario digno”.

- J: A mí con 500 euros (de la RMI) no me da para vivir. Yo quiero trabajar, yo soy joven.
A mí me dan un suelo de 1500 euros, que no es mucho para mantener a 6 personas.
- F: Y ahora llega una nuera. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

Javier apela a la “necesidad” (de recursos económicos, claro está) como justificación de la demanda de la RMI, y matiza esta justificación haciendo referencia –como se ha dicho– a la “dignidad” que debe entrañar un trabajo asalariado para que quepa o no aceptarlo, a no estar dispuesto a dejarse “explotar” laboralmente. Así, afirma que él busca una inserción laboral que no conlleve una disminución de los ingresos económicos de su familia, es decir que rechazaría la RMI si le diesen un salario “digno” para mantener a ésta a pesar de que trabajar con contrato le supusiese la pérdida de los 500 euros mensuales que recibe con la prestación, pero ése –según indica– no ha sido el caso.

Mirándolo desde otra perspectiva, esta apelación a la “dignidad” es un elemento que suele ocasionar conflictos con los trabajadores sociales de Servicios Sociales que forman parte del grupo fiscalizador, dado que no ven con buenos ojos que los gitanos tengan expectativas demasiado altas con respecto a los salarios que se puede recibir en el mercado laboral en caso de insertarse en él. Es más, se puede decir que, en general, estos profesionales se sienten molestos cuando los solicitantes de ayudas sociales realizan su demanda recurriendo a un vocabulario que alude a la exigencia y/o a la reivindicación de derechos sociales. Es más, algunos de ellos consideran que discursos como el de Javier ponen de manifiesto el “morro” o la “cara dura” característicos de los gitanos; unos discursos que, según sostienen, “debería darles vergüenza” expresar porque dejan ver que “esperan demasiado del Estado y dan muy poco a cambio” (comentario de un trabajador social de Servicios Sociales realizado en unas jornadas sobre inclusión social celebradas en octubre 2007). En cambio, los gitanos beneficiarios de la RMI plantean a menudo que, para ellos, lo que sería una vergüenza sería “trabajar como payos” o dejar a sus hijos “descuidados” en instituciones educativas o en la casa de algún familiar, ejemplos que suelen traer a colación

las mujeres gitanas de clase baja y media-baja, quienes consideran estas prácticas como deleznales. De este modo, su relación subjetiva con el trabajo asalariado les distancia de los profesionales que piensan que la única opción para lograr su integración social pasa por él, por buscarlo y/o tenerlo. Los gitanos beneficiarios de la RMI no han interiorizado que, “para ser alguien en la vida”, tengan que insertarse en el mercado laboral formal, principalmente si, a efectos prácticos, dicha inserción les va a reportar una pérdida económica. De hecho, –como se ha apuntado– cuando se les pregunta por su futura inserción laboral, “hacen la cuenta” tomando en consideración la merma de dinero que implicaría dejar de cobrar la prestación.

En lo que se refiere a los gitanos jóvenes de clase baja residentes en asentamientos chabolistas, a menudo en situación de absentismo escolar, suelen considerar “exitosos” a quienes consiguen de forma rápida ingresos económicos, como ocurre, por ejemplo, con sus primos y tíos que saben dónde encontrar cobre o comprar y revender coches de segunda mano. Estos jóvenes no valoran que las instituciones de la sociedad mayoritaria, como es el caso de la escuela o las ONG, puedan ofrecerles elementos de ascenso social adaptados a las necesidades de sus familias y a su modo de subsistencia. En el mismo sentido planteado por Willis (1993) con relación a “los colegas” estudiados por él en Gran Bretaña, ellos ensalzan ciertos comportamientos que les permiten equipararse con su grupo de iguales y con sus familiares, a quienes ayudan normalmente a chatarrear o a realizar actividades de venta esporádica. Estas actividades, características de “lo gitano”, les permiten desenvolverse en sus particulares circunstancias y mantener el estatus de dignidad que el sistema escolar no sólo no les concede, sino que les cuestiona al intentar inculcarles y “reproducir a través de ellos los rasgos culturales, la ideología y los criterios de vida de las clases dominantes” (García Pastor, 2009: 89). La mayoría de las jóvenes gitanas entrevistadas de clase baja y media-baja organizan sus vidas alrededor de la espera de un casamiento propicio que marque el inicio de su adultez, centrada en el cuidado doméstico y de los hijos¹⁴⁶.

Quienes viven en situaciones vitales muy precarias (realizando actividades económicas marginales, sin saber leer o escribir, con pocas habilidades para relacionarse con las instituciones públicas y residiendo en las zonas más pobres de los poblados chabolistas,) dan por sentado el cobro de “la paga”. Estos beneficiarios de la RMI asumen, como

¹⁴⁶ A pesar de la primacía del matrimonio como momento patrón único que da sentido a los discursos de estas jóvenes algunos estudios recientes se han esforzado por dar cuenta de la diversidad interna dentro de sus discursos. En el informe de investigación del estudio titulado *Actitudes y pautas de comportamiento de la población gitana de Madrid en relación a su salud* (2008), citado previamente, se hizo un esfuerzo analítico por mostrar discursos de jóvenes gitanas residentes en poblado que no respondían a la imagen aquí presentada, esto es, que están interesadas en estudiar, en insertarse laboralmente y en retrasar la edad de su matrimonio, saliéndose de los discursos más *comunitarios*. En todo caso, hay que reconocer que eran discursos minoritarios.

contrapartida de ésta, el precio de vivir con su intimidad colonizada de manera que, por ejemplo, admiten en sus viviendas (y cuentan “su historia”) a cualquier persona desconocida que se acerca hasta ellas con actitud indagadora, como es el caso de quienes acompañan al trabajador social de IRIS que tiene el poblado asignado¹⁴⁷, como se ha podido comprobar durante el trabajo de campo. Cabe mencionar que el marco de desconfianza desde el que los solicitantes/perceptores de la RMI de clase baja se relacionan con los profesionales contrasta, por un lado, con la constante búsqueda de su asesoría profesional y, por otro, con la facilidad con que les dan información personal (y aceptan su presencia en los espacios de su vida cotidiana) aunque sean desconocidos

Me paseo por un poblado chabolista con una trabajadora social del IRIS, Elena. Ella está recogiendo el dinero para que los jóvenes del poblado vayan a una excursión. Es el primer o segundo día que voy al poblado con ella. Varias jóvenes se acercan a mí. Cuando Elena está un poco lejos hablando con una mujer, me saludan amablemente y me entregan a mí el dinero para ir a la excursión. Yo las miro sorprendida y en ese momento llega Elena y les dice: “¡Anda, mira que darle el dinero a una desconocida!” (Registro de campo: observación en poblado chabolista del distrito Santa Catalina, Madrid, junio 2006)

Los usuarios de clase baja conciben a los profesionales como si estuviesen “conectados” y, en ocasiones, regañan –por ejemplo– a sus profesores de los cursos de alfabetización por cuestiones que se refieren a la demanda de otras prestaciones sociales, que no caen bajo su competencia y sobre las que, por tanto, no tienen posibilidad de incidir. De este modo, en lo que concierne a los diferentes profesionales y a su relación con las distintas ayudas sociales, estos beneficiarios de la RMI muestran tener un pobre entendimiento de sus funciones y de su grado de autoridad (Sayad 2004: 191). El hecho de no distinguir entre las funciones de los profesionales hace que, a veces, realicen críticas a algunos que nada tienen que ver con el tema en cuestión, tal como se acaba de señalar más arriba y vuelve a aparecer en el siguiente verbatim:

Estoy hablando con Pedro en el aula donde imparte alfabetización a un grupo de hombres perceptores de la RMI cuando entran al aula dos gitanos y nos preguntan algo de unas cartas de realojo. Pedro les contesta que se lo tendrán que preguntar a la trabajadora social de IRIS, que es la que se encarga de eso. Uno de ellos, con cara de enfado, contesta casi gritando: “No sé a qué jugamos. Llevamos toda la mañana dando vueltas de un lado a otro. Primero me dicen que no necesito a las mujeres y ahora me dicen que sí”. Pedro le vuelve a repetir que tendrá que esperar a la trabajadora social. (Registro de campo: única observación realizada en grupo de varones gitanos del asentamiento El Cañaveral, zona sureste de Madrid, junio 2007).

¹⁴⁷ IRIS tiene oficinas en la mayoría de los poblados chabolistas; y en cada una de ellas hay un coordinador y un trabajador social que tiene asignado el poblado. En sus instalaciones cuentan con un aula o espacio educativo, que es cedido a otras entidades de iniciativa social que implementan proyectos de integración en ellas.

Los trabajadores sociales del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social de la CM)¹⁴⁸ se pasean por los asentamientos chabolistas a sus anchas, hablando con los beneficiarios gitanos con autoridad, entrando a sus casas sin casi preguntar, saludando a las madres de familia, por ejemplo, y dándoles, de viva voz y con muy poca privacidad, consignas sobre cómo han de mejorar ciertos aspectos de su vida o recomendaciones, por ejemplo, sobre la documentación que les tienen que llevar para solucionar algún trámite. Por otro lado, los beneficiarios de la RMI de clase baja que residen en estas zonas codifican la intervención social en términos asistencialistas, no entienden cómo funciona la RMI y, a través del “boca a boca”, van formándose la idea de que, “si aguantan durante unos cuantos años” viviendo en condiciones pauperizadas e incómodas (como, por ejemplo, residiendo en una chabola, manteniendo una relación prolongada con los trabajadores sociales, asistiendo a cursillos aunque no tengan ninguna motivación para ello y demostrando que tienen escasos ingresos), conseguirán ciertos beneficios sociales, como puede ser una vivienda de protección oficial. Saben, por tanto, que habrán de pasarlo mal durante largos periodos de tiempo, pero actúan convencidos de que la intervención de la Administración Pública llegará en algún momento, aunque no se sepa cuándo, y mejorará milagrosamente sus condiciones de vida. Así, no se conciben a sí mismos como sujetos reflexivos, estratégicos o con capacidad de cambio real de su situación actual: el cambio vendrá “de fuera”, principalmente de esa intervención de los poderes públicos.

A este respecto, llama la atención que pregunten a los trabajadores sociales que tienen su despacho en los asentamientos chabolistas en donde residen sobre cuestiones tan simples, al menos aparentemente, como las cartas que reciben o el médico al que han de ir para tal o cual dolencia, de manera que se podría inferir que no realizan ninguna gestión en el “mundo exterior” al poblado sin consultar con ellos. De esta manera, contrasta su fortaleza, autonomía y capacidad de adaptación para sobrevivir en situaciones adversas, con la adopción de comportamientos pasivos y, en cierto sentido, sumisos con relación a las instituciones sociales y sus profesionales.

En los relatos de los entrevistados de clase baja (y algunos de clase media-baja) se produce lo que Murard (2003) califica de “fatalismo cultural”, esto es, que los sujetos conciben la actuación externa como una “salvación” milagrosa que en algún momento vendrá. Son relatos que no hablan de las experiencias vividas ni proyectan estratégicamente el futuro,

¹⁴⁸ Ver nota 16 (p.20) para más información del IRIS. Si bien por Internet se hace referencia a la publicación de un informe del IRIS del 2007 y a una memoria de gestión correspondiente al año 2009, la página web de la Comunidad de Madrid no posibilita acceder a estos documentos. Por tanto, la última información a la que se ha tenido acceso es del año 2005.

organizándose alrededor de la espera de la asistencia pública (Murard, 2003: 113). En el caso de los entrevistados de clase baja, es común que cuando se les pregunta si cambiarían algún comportamiento de cara a su integración social (como por ejemplo, si cuidarían más su salud o la de sus hijos, o si se esforzarían por adquirir una mayor formación), respondan que lo harán cuando “les den vivienda”, es decir que están dispuestos a cambiar determinados comportamientos para adaptarlos a los que se identifican con los de la clase media cuando el Estado¹⁴⁹ les provea de condiciones de vida similares a las de ésta¹⁵⁰.

6.5 El nerviosismo ante los Servicios Sociales: la auto-representación de los beneficiarios de clase baja y media-baja como sujetos sin poder de negociación con respecto a los profesionales de Servicios Sociales

La relación con los Servicios Sociales y el tipo de demanda de ayuda que realizan los solicitantes/beneficiarios de la RMI (apelando, en unos casos, a la pobreza extrema o a “la necesidad” y, en otros, al cumplimiento cabal de los requisitos precisos para pedirla) guarda relación con variables como la posición social de los mismos, la edad, el género, el nivel educativo, el nivel socio-económico, el número de hijos que tienen, la ocupación laboral, el grado de conocimiento de los Servicios Sociales (medido sobre todo a través del tiempo de contacto con ellos), la participación o no en redes socio-familiares de apoyo (donde se transmite información valiosa) y la existencia o no de un proyecto individual de ascenso social a medio o largo plazo. O, dicho con otras palabras, las formas de pedir de ayuda y de relacionarse con los profesionales de la intervención social para llevar a cabo esa petición varían sobre todo en función de las variables recién enumeradas.

De este modo, las personas en situación de exclusión social severa, preocupadas por su subsistencia diaria y que todavía no han recibido la RMI, se relacionan con las instituciones sociales de las que depende su concesión de una manera poco coherente, principalmente en lo que se refiere a la presentación de sí que llevan a cabo ante los distintos profesionales. No suelen elaborar discursos auto-biográficos inteligibles, centrándose –como se verá– en narrar algunas experiencias personales trágicas que piensan que servirán para generar compasión en ellos. Estas personas no dan muestras de conocer cómo desenvolverse con estos profesionales, por lo que sus relatos ofrecen retazos dramáticos de momentos vitales que se exponen de

¹⁴⁹ Hablamos del Estado no como una entidad diferente a las Comunidades Autónomas o a los Ayuntamientos, sino como una entidad que los contiene y, por consiguiente, es equivalente a Administración Pública, en general.

¹⁵⁰ El verbo “dar” es utilizado recurrentemente por estos beneficiarios de la RMI para hacer referencia a su relación con las instituciones de protección social (“que me den”), y muestra que se sienten sujetos pasivos en lo que se refiere a la recepción de las ayudas sociales.

forma inconexa. En cambio, los beneficiarios de la RMI de clase media-baja y de clase media, con más nivel educativo y, generalmente, con una red social de apoyo que cuenta con experiencia acumulada en el trato con los Servicios Sociales, son capaces de articular sus relatos auto-biográficos en términos legibles y de cumplir el papel que se espera de ellos.

Se puede decir, así, que tanto los solicitantes/beneficiarios de clase media-baja como los de clase media son conscientes, aunque no lo expresen abiertamente, de la necesidad de realizar una “presentación de sí” (Fassin, 2004) que produzca una reacción favorable en los trabajadores sociales que gestionan la RMI y evalúan periódicamente sus progresos. La diferencia estriba en el grado de seguridad y confianza que unos y otros muestran a la hora establecer sus demandas en unos términos legítimos para la institución y en la manera en que se conciben como sujetos con poder de negociación ante los Servicios Sociales. Lo que algunos autores denominan la *cultura del asistido* incluye la disposición a producir un cierto tipo de narraciones, es decir, a presentarse a sí mismos de un determinado modo, que los solicitantes de ayudas sociales incorporan a partir de experiencias en este ámbito. A través de los relatos auto-biográficos, los sujetos buscan reconocimiento social ante las instituciones públicas, pero –como se ha indicado– sólo quienes tienen capital social y han establecido un contacto prolongado con ellas producen relatos coherentes, legibles para los profesionales de las mismas.

Los solicitantes/beneficiarios de clase baja no conocen bien el funcionamiento de la RMI ni saben cómo comportarse con los profesionales, por lo que quedan a merced de lo que unos y otros les dicen que tienen que hacer. Así, manifiestan e, incluso, somatizan indicios de sentirse como barcos a la deriva cuando se dan cuenta de que no entienden cómo funcionan las instituciones con las que tienen que relacionarse ni dominan los distintos protocolos que rigen en ellas: no distinguen la RMI de otras prestaciones sociales; todo lo que tenga que ver con la Administración Pública les provoca malestar e inseguridad; frente a la documentación oficial se paralizan; buscan el consejo de cualquier persona *paya* que tengan cerca; piden que se les traduzca lo que pone en los impresos más sencillos; cuando consiguen lo que precisan, se quejan de tener que realizar tantas gestiones; y a veces solicitan que se les escriba en un papel la información que deben aportar para que, en casa, los hijos que saben leer se encarguen de dársela.

Éste es el caso de Julia, una mujer de 45 años, perceptora de la RMI y madre de cinco hijos, que en el momento de la entrevista residía en el asentamiento El Cañaveral. Julia tiene varios hijos absentistas: un adolescente de 14 años y una niña de 5 años que, aunque está escolarizada, no suele asistir a la escuela infantil. Su rutina consiste en estar con su hija

pequeña en el poblado mientras hace quehaceres domésticos; una rutina que rompe una vez al mes cuando se acerca al barrio de Vicálvaro a cobrar la RMI y aprovecha para hacer “la compra grande”. Su marido, Rafael, de 50 años, se dedica a la chatarra, aunque durante varios meses ha estado sentado en la puerta de casa por una avería en su furgoneta, razón por la cual ha perdido muchos dientes, pero que no puede arreglar hasta no conseguir el dinero necesario para la reparación. Cuando se le pregunta por qué no hace algo por arreglarse la dentadura se ríe y dice que “eso no es cosa de gitanos” y que puede sobrevivir perfectamente a base de “nolotiles”. En una de las visitas al poblado, Julia se acercó a mí, con cara de preocupación, y me pidió que le leyera una carta que le había llegado “del abogado”. La carta exponía que su marido tenía que aportar cierta información de cara a un juicio que se iba a celebrar con relación a una tierra que tenía en herencia en Extremadura. Tras leerle la carta, Julia relajó su expresión de angustia y Rafael exclamó: “¡Ah!, sí, lo de la tierra de Cáceres. ¡Menos mal que estás aquí, que si no habría roto la carta directamente!”. Mientras les comentaba a dónde tenían que llevar la documentación, Julia no cesaba de suspirar, hablaba entre dientes, se quejaba de la mala suerte que tenían y maldecía el hecho de tener que desplazarse por este tema. Entre tanto llegó una mujer de unos 65 años vestida de luto, a la que antes había visto en la zona más pobre del poblado (con chabolas construidas de lona y palés de madera), donde vivían familias gitanas de origen portugués. La anciana, Victoria, después de saludar a Julia y Rafael, me pidió que me acercara a su casa a leerle una carta. Cuando llegamos, un hombre de unos 25 años me explicó, con acento portugués, que les había llegado de la cárcel donde estaba el hijo de Victoria. El joven resumió la situación con una frase lapidaria: “Le pillaron robando rollos de cobre en una obra y va a estar unos meses encerrado”. Ella me entregó la carta y me pidió que le dijera cuál era el horario de visitas y dónde estaba la cárcel a la que habían llevado a su hijo, así como que le apuntara en un papel el primer día (y la hora a la) que podía ir a verle, comentándole después al joven que no sabía cómo iba a hacer para pagar el transporte y llevarle algo de comida a su hijo¹⁵¹.

El anterior no es más que un ejemplo de que la vida de los gitanos de clase baja está centrada, por lo general, en las actividades de supervivencia diaria y en solucionar los múltiples problemas (familiares, judiciales, económicos...) que les surgen a raíz del desempeño de actividades en la economía informal (multas por falta de documentación en los vehículos o por venta ilegal, encarcelamientos por robos y trapicheos, etc.). Por otro lado, no manejan suficiente información sobre el funcionamiento de las diferentes instituciones ni

¹⁵¹ Reconstrucción basada en las observaciones hechas en el asentamiento de El Cañaveral en marzo de 2008.

tienen capacidad lecto-escritora para comprender documentos oficiales o, a menudo, texto escrito alguno, por lo que no saben desenvolverse cuando tienen que gestionar este tipo de documentación o de trámites. En cambio, los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase media-baja, si bien se auto-representan en las entrevistas y en las conversaciones informales como sujetos “que no saben nada”, cuentan con mayor grado de conocimiento acerca de las obligaciones derivadas del cobro de la prestación económica y sobre los procedimientos burocráticos que tienen que enfrentar cuando se relacionan con las instituciones públicas. Del mismo modo, a pesar de que dicen sentirse sin capacidad de negociación cuando se reúnen con sus trabajadores sociales, disponen de una red social y familiar que les permite acceder a información clave para solucionar sus dudas como, por ejemplo, la relativa a los profesionales que pueden asesorarles. A continuación, se exponen algunos casos que ejemplifican cómo los gitanos beneficiarios de la RMI de clase media-baja, aunque no lo reconozcan abiertamente, son capaces, a efectos prácticos, de negociar algunos aspectos de sus PII con los profesionales de Servicios Sociales.

Cuando le pregunté a Alma –de cuyo caso ya se ha hablado en capítulos anteriores– si sabía que el Programa Individual de Inserción que había firmado podía ser negociado (hay que decir que ni siquiera sabía cómo se llamaba), respondió exclamando: “¡sabía que Raúl me estaba engañando!”. Esta reacción espontánea es significativa del marco desde el que Alma interpreta las acciones de su trabajador social, al que –por otro lado– define como “simpático, cariñoso y amable”. Hay que tener en cuenta que Raúl, de 35 años de edad, es contrario a forzar a la población a la que atiende a que lleve a cabo actividades de inserción. Por ello, únicamente le ha pedido a Alma que pase cada tres meses por su despacho de Servicios Sociales: “para ir viendo cómo le va”. En suma, incluso habiendo dado con un trabajador social que le pide muy poco y al que dice tener estima, Alma siente que ha sido “engañada” por él por no haberla informado de que tenía la opción de no firmar el PII si no estaba de acuerdo con lo que allí ponía. Con todo, no le preguntó en su momento nada acerca de lo que estaba firmando porque, según asegura, estaba nerviosa y no quería poner en riesgo la concesión de la prestación económica, razón por la que ni siquiera se le ocurrió cuestionar lo que allí ocurría. Sostiene, por tanto, que “hubiera firmado cualquier cosa con tal de que le dieran la RMI”.

Las distintas experiencias que ha tenido con profesionales del trabajo social, y su percepción de que éstos actúan según diferentes estilos profesionales, la han llevado a creer que la RMI le será “dada” si el trabajador social “quiere”. Así, Alma reconoce que su trabajador social no le ha puesto objeciones para ayudarle a conseguir la RMI, aspecto por el

que dice estar agradecida¹⁵². Para ella, la concesión de la RMI guarda relación con la suerte y con las características personales de su trabajador social, no con el cumplimiento de los requisitos oficiales que regula la ley RMI ni con el objetivo gubernamental de luchar contra la exclusión social.

A mí me ha tocado todo fatal, fatal. ¡Menos mal que me han dado el IMI por Raúl!, que si no, no lo tengo. (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid.)

La referencia a “los nervios” como reacción al contacto con las instituciones públicas, que aparece en los discursos de algunos solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase media-baja y de clase baja cuando entran en contacto con sus trabajadores sociales, también se encuentra en entrevistados que nos narran lo que sienten cuando visitan los servicios sanitarios. De hecho, en situaciones en que he acompañado a algunas mujeres gitanas a consultas médicas, estos “nervios” se han corporeizado en forma de estatismo y de retraimiento que les ha obstaculizado la comunicación con los profesionales que las estaban atendiendo, mostrándose –además– cabizbajas, silenciosas y sumisas. Ello me lleva a pensar que, incluso en el caso de que los profesionales –ya sean sanitarios o del ámbito de la intervención social– se esforzasen por informarles de los males que padecen o de las novedades de la RMI, es difícil que en ese estado de “nervios” lograsen captar la información. Los “nervios” responden a una cierta incomodidad y a una cierta inhabilidad para expresarse adecuadamente en situaciones que experimentan como asimétricas, sobre todo en aquellas en que se está evaluando la veracidad de su discurso por parte de profesionales cuyo dictamen puede tener serias consecuencias en sus vidas o en que están hablando con ellos sobre cuestiones acerca de las cuales sienten que “no saben”. En cualquier caso, se trata de una incomodidad y una inhabilidad que vivencian no en todo tiempo y lugar, sino de manera muy localizada y sólo ante determinadas personas que representan una autoridad, como sucede en las oficinas de Servicios Sociales y de otras instituciones públicas. Por ejemplo, Alma no actúa en el despacho de Raúl como teniendo poder para negociar. Así, como se ha visto, firma dócilmente los papeles que él le rellena y se va a su casa sin entender bien lo que ha ocurrido. En cambio, la sensación de incomodidad y el nerviosismo de Alma desaparecen cuando está en su casa, incluso en las ocasiones en que está presente su trabajador social, como he podido comprobar cuando he acompañado a éste en alguna de las visitas a domicilio que le ha hecho.

¹⁵² Fijémonos en que el agradecimiento no es porque se le haya concedido la RMI, sino hacia una persona concreta (aquí su trabajador social) que la ha ayudado a conseguirla poniendo de su parte más de lo que es esperable en estos casos. Ésta es la diferencia entre “el agradecimiento” que siente Alma y el que suelen expresar los solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase baja.

En estas ocasiones se ha sentido dueña del espacio, ha dominado la interacción y ha hablado – tranquila, risueña y vivaracha– sobre su vida y sus circunstancias, a la vez que nos ha preparado un café y nos ha ofrecido unos bollos.

A medida que los gitanos se relacionan con las instituciones públicas o con personas que las conocen (lo que es más frecuente, como se ha dicho, en los de clase media), los discursos sobre la RMI incluyen nuevos argumentos, se vuelven más elaborados y el nerviosismo en el contacto con los profesionales disminuye, pues aumenta el saber acerca de lo que se espera de ellos y acerca de cómo se va a desarrollar la interacción. Tanto es así que podría decirse que la sensación de nerviosismo es, en buena parte, inherente a la experiencia de los gitanos de clase baja y media-baja. Y podría decirse también que los solicitantes/beneficiarios de la RMI que cuentan con una relación prolongada con los Servicios Sociales y otras instituciones públicas han adquirido un cierto capital social que, a medida que ascienden en posición social, contribuye a dotarles de tranquilidad y confianza cuando se relacionan con ellas.

6.6 *La petición de recursos sociales: estrategias de auto-presentación y legitimación ante los profesionales*

En este apartado, se tratará de reconstruir las circunstancias vitales en que tienen lugar las experiencias de los solicitantes/beneficiarios de la RMI, así como de dotar de sentido a las demandas de ayudas sociales que realizan; y se hará a partir de ciertas teorías ofrecidas por algunos autores que han abordado la temática de la exclusión social y la descripción de casos de beneficiarios y/o solicitantes de la RMI que se sitúan en distintas posiciones sociales. Se verá que la manera en que estos sujetos expresan y viven sus demandas varía en función de dichas circunstancias. Así, cuando se está en una situación de “precariedad estable”, es decir, cuando se está en posesión de una vivienda de protección oficial y se dispone de algunos recursos económicos¹⁵³, los gitanos que solicitan la RMI acuden a un discurso cuyos argumentos se centran en demostrar la existencia de una “necesidad”. En cambio, los usuarios de clase baja, que suelen encontrarse en situación de pobreza, elaboran discursos sobre su vida que resultan inconexos y son, como se ha dicho, difícilmente legibles por los profesionales.

Se ha destacado más de una vez en esta tesis doctoral que los solicitantes/beneficiarios de clase media y media-baja están habituados al trato con los profesionales y es frecuente que

¹⁵³ La “normalización” que han experimentado los gitanos que, desde hace décadas, cobran la RMI (antes el IMI), junto con la concesión que les han hecho de viviendas de protección oficial (por las que pagan un alquiler módico, que oscila entre los 60 y los 200 euros al mes), ha posicionado a estos beneficiarios de la RMI en una situación de relativo desahogo.

hayan participado en proyectos de integración durante bastantes años, por lo que cuentan con expectativas ajustadas sobre lo que pueden esperar de los Servicios Sociales. En cambio, las expectativas que tienen los solicitantes/beneficiarios que no cuentan con una vivienda adecuada ni con dinero suficiente para alimentar a sus familias suelen ser desmesuradas, ya que esperan de ellos una solución mágica (efectiva y rápida) para todos sus problemas. Una consecuencia de su desconocimiento de las funciones y de los modos de funcionar de las distintas instituciones sociales es que, con frecuencia, narran sus circunstancias personales más dramáticas para tratar de entablar una relación cercana con sus interlocutores, pero lo hacen de un modo tan crudo y deshilvanado que –como se viene apuntando– no responden al tipo de narraciones que esas instituciones esperan y están preparadas para comprender.

El caso de Sonia, gitana portuguesa casada con un gitano español drogodependiente, pone de manifiesto que, cuando no se cuenta con capital social que llegue hasta las instituciones sociales, y se ocupa una posición social baja (sin formación, sin habilidades lecto-escritoras, sin red social de apoyo), el contacto con ellas produce frustración cuando se percibe que no proveen de las ayudas que se les solicita. Además, este caso nos sirve para ver, en el plano de lo concreto, la dificultad que tienen los solicitantes/beneficiarios de la RMI en peor situación social para elaborar un relato sobre su situación vital que sea coherente e inteligible para los profesionales. Sonia no recibe ayuda social alguna, aunque está realizando los trámites oportunos para poder solicitar la RMI. Vive con sus cinco hijos y su marido en una casa ocupada (a la que ha entrado “de patada”) en el distrito madrileño de Vallecas, subsistiendo gracias a donaciones de comida de sus vecinas y al poco dinero que él consigue pidiendo en la calle y chatarreando. La apariencia física de éste está muy deteriorada por el consumo de drogas, y la casa en la que viven se encuentra medio derruida, no tiene servicios y está sucia y con humedades por todos lados. Su marido y ella dejaron la chabola que se habían construido en Cañada Real por estar situada en una zona donde hay venta y consumo de drogas, y ella tomó la decisión de irse de allí porque quería residir en un lugar que no fuera tan peligroso para sus hijos.

Cuando habla de su relación con los Servicios Sociales, Sonia lo hace desde la frustración que siente ante la falta de ayudas que recibe de éstos y las múltiples veces que ha tenido que contar su historia a los diversos profesionales “para nada”. Ante su caso, la burocracia de los Servicios Sociales se muestra inefectiva, lenta, excesivamente compartimentada y protocolizada. Sonia, que necesita ayuda para la subsistencia básica (alimentación y ropa para sus hijos, una vivienda apropiada, etc.), está desesperada ante los protocolos que tiene que seguir para poder cobrar la RMI. Su situación muestra los vacíos y

huecos de las políticas sociales de cara a la inclusión social, que no pueden hacer nada para mejorar sus circunstancias vitales (en este caso, además, porque su tarjeta de residencia se está tramitando por haberla perdido en un incendio). A su vez, deja en evidencia el sinsentido de las nuevas normativas de acceso a la vivienda pública para colectivos en situación de necesidad (poco conocidas por los propios trabajadores sociales) que impiden que las personas que están ocupando una vivienda –sea por el motivo que sea– tengan derecho a solicitar una de protección oficial¹⁵⁴. Sonia no sólo está preocupada por su supervivencia económica, sino que tiene una orden de desahucio pendiente y dice estar intranquila por la posibilidad de que la Comunidad de Madrid le retire la custodia de sus hijos en caso de “dejarla en la calle”.

- S: Ahora me tiene que llegar la orden del juez para echarnos. Tengo tres hijos ahora en el cole y estos dos hijos. No sé qué vamos a hacer. Como los del IVIMA son... tal. ¿Para qué tienen los pisos: para los que los necesitan o para los que no? No he echado papeles porque dicen que al estar aquí, de patada, no puedo echar papeles, que tengo que estar empadronada, que al ser de patada no puedo. El día 17 ya me van a hacer lo de la RMI. ¡Es que me la tienen que dar! Pero, la verdad, aquí sólo vienen (los profesionales), apuntan, me dicen cuatro tonterías y se van. Yo llevo aquí un año. Las niñas llevan siete meses en el colegio. ¿No era ya para que las dejen comer en el colegio (con beca)? Porque cuando quieren, lo hacen. Tengo a Estrella (trabajadora social) y aún no he hablado con ella. La que viene y anota es Patricia (educadora). Aquí sólo viene ella. Y nada más.
- A: ¿Cuál es la ayuda que necesitarías?
- S: Lo que yo necesito más es la vivienda. Aunque no tenga para comer, pero que mis hijos tengan un techo. Porque me van a echar a la calle, y después van a decir que quieren que los niños vayan limpios y duchados al colegio. ¡Cómo los voy a duchar!, ¿en la calle? Aquí hay agua, pero cuando me echen, les tendré que llevar al cole porque, si no, me echan a mí una multa. Pero después echan pegas de que están en malas condiciones. ¡Pero si no te dan un sitio para estar en condiciones! ¡Los pisos del IVIMA son para quienes los necesitan! Pero ya te he dicho que no me dejan pedirlos.
- A: ¿Entonces, quitarías a Patricia (educadora social)?
- S: Yo qué se, ¡en lo que más necesito no me ayudan!
- A: ¿Y con los niños qué hace (la educadora)?
- S: Nada. A mi marido le iba ayudar a meterse en el CAD (Centro de Atención a los Drogodependientes) porque está enganchado, pero él no quiere. Y con nosotros, nada. Ahora vivimos de pedir en el súper, y mi marido se pone por ahí, a pedir en algún semáforo. Muy mal, con tantos niños. Es que no me dan ayuda de ningún tipo. En la parroquia dicen que no tienen comida, que no tienen ropa. Hoy he ido y me he vuelto como he ido. (No te dicen:) “Toma esta ropa, esta leche”. Nada, no me han dado nada. (Entrevista a Sonia, gitana portuguesa, madre de cinco hijos, residente en casa ocupada en barrio de Vallecas)

Sonia se siente una persona sin poder, a expensas de decisiones que llegan de afuera. Su discurso se muestra incoherente, produciendo un relato auto-biográfico fragmentado, sin hilo conductor, que expresa su deriva vital y su desconocimiento de cómo funcionan las instituciones públicas. Así, trata de contar su historia, pero se detiene en algún acontecimiento concreto como, por ejemplo, la dificultad para lograr alimentos para sus hijos. Acto seguido,

¹⁵⁴ En entrevista telefónica con una persona encargada en el IVIMA de trabajar con gitanos, se confirmó que había introducido el Decreto 74/2009 de 30 de julio como medida para “desincentivar” que los gitanos ocupen viviendas. De este modo, se deja sin protección a personas verdaderamente necesitadas, como es el caso recién descrito de Sonia, cerrando las pocas vías que tiene para poder conseguir una vivienda pública.

mira a los ojos de su interlocutor para pedirle el favor de que la ayude, preguntándole si no conoce a alguien que se apiade de ella y que le pueda agilizar los trámites burocráticos que tiene pendientes. A continuación, protesta de lo injustas que son las instituciones públicas por no ayudarla, por no “darle vivienda” a pesar de no tener dónde meter a sus hijos. Su relato no adquiere sensación de totalidad, sino de hechos contados fragmentariamente para acercarse a la persona que le pregunta por ellos. Ofrece la imagen de una demandante de ayudas sociales de clase baja, sin capital social que pueda hacer valer ante los profesionales de las instituciones públicas, sin poder frente a éstas y sumamente desprotegida y frustrada por la situación en la que vive. Busca desesperadamente establecer alianzas personales con cualquiera que conozca, tratando de producir compasión a través de su miseria y demostrando no saber quién, de todas las personas que pasan a verla, tiene capacidad para echarle una mano. En ocasiones, habla como si no se creyese su propio relato, como si tarareara las distintas situaciones de miseria que ha vivido desde la distancia, como si se tratase de una melodía que toca para los visitantes. La asiduidad con la que narra su situación personal ha derivado hacia lo que algunos autores denominan “banalización del sufrimiento social” (Dejours, 1998; Fassin, 2004: 258), que permite entender por qué ciertos solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase baja comentan, sin ser preguntados y como si no fuera con ellos, sus múltiples penurias familiares.

Los verbos que Sonia utiliza para demandar ayudas (“me tienen que dar”, “¡es injusto si no me dan nada!”), denotan una posición desempoderada, estar a la espera de que alguien le haga el favor de gestionarle el acceso a los recursos sociales. Confía en que, entre las visitas de unos y otros, alguien la ayude. En este aspecto, su discurso se muestra también incoherente, dando bandazos desde la defensa de unas opiniones al apoyo de las contrarias. De este modo, cuestiona a todas las instituciones públicas (“no sirven para nada”) y dice que no la apoyan en absoluto, para cinco minutos después afirmar que, en el fondo, sí que le sirve de ayuda el hecho de que una educadora social subcontratada por la Junta Municipal del distrito donde vive se pase de vez en cuando a verla.

A: ¿Alguna cosa que, de los otros servicios o las ayudas, cambiarías?

S: No sé. Es que no sé las ayudas que hay. Los cheques de los niños de los pañales no me los dan porque me han dicho que los han quitado. Nada más, no sé. A mí lo que me duele es que no te den una vivienda. Hay a gitanos a los que, si no les dan vivienda, les dan dinero. Por lo menos que tenga lo básico para los niños. ¡A mí no me va a quitar los niños la Comunidad de Madrid! Luego me dirán que no puedo estar en la calle con ellos, ¡pero si son ellos los que me dejan en la calle!

A: ¿Los trabajadores sociales sirven para algo?

S: Sí, porque si no es una cosa, es en otra en la que te pueden ayudar. (Entrevista a Sonia, gitana portuguesa, madre de cinco hijos, residente en casa ocupada en barrio de Vallecas).

En suma, Sonia, que no se relaciona con los Servicios Sociales desde hace tiempo, no da signos de saber configurar un discurso sobre su situación adaptado a lo que éstos esperan. Denota, así, no haber acumulado un saber suficiente sobre cómo funciona esta institución y sobre los comportamientos adecuados para solicitar algo en ella.

Si pasamos ahora a considerar a los solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase media-baja, encontramos que éstos no actúan ni hablan de un modo que permita inferir que son conscientes de que han de cumplir lo que algunos autores han llamado “las normas de buena conducta de los beneficiarios del Estado Social” (Fassin, 2000a: 956), sin embargo, algunas de sus actitudes y prácticas sirven como evidencia de que han acumulado mayor grado de conocimiento sobre los Servicios Sociales y sobre la importancia de comportarse adecuadamente (es decir, siguiendo ciertas “normas de conducta”) en las relaciones con los profesionales a fin de producir una imagen o impresión en ellos que vaya a su favor. Confrontados con éstos, los solicitantes/ beneficiarios de clase media-baja adaptan su discurso a lo que piensan que se espera de ellos, pero resulta difícil saber si sus demandas de ayuda responden a “desvíos tácticos” (Fassin, 2000a: 956) que desplegaran para caer dentro de las categorías usadas por los profesionales para clasificar a los acreedores legítimos de las distintas prestaciones sociales.

Es el caso del discurso autoinferiorizante¹⁵⁵ que varias entrevistadas, ubicables en esta clase social, utilizan para hablar de sí mismas, principalmente cuando se les pregunta sobre cuestiones relativas a la gestión de la RMI y otros trámites administrativos que han de llevar a cabo en instituciones públicas. Se ha señalado con anterioridad que declaran estar nerviosas cuando se reúnen con los profesionales y que adoptan posturas subordinadas, que se reflejan incluso corporalmente, cuando se relacionan con ellos. Si a estos comportamientos añadimos algunos comentarios y peticiones que a menudo les hacen (como, por ejemplo, “es que yo no sé hacer eso” o “léeme esto y relléneme el papel”), se podría llegar a la conclusión de que estas mujeres son realmente torpes en todo lo que implica demandar ayudas sociales y realizar los trámites pertinentes. Sin embargo, –como se ha indicado para el caso de Alma– el cambio de forma de hablar y de actuar es notorio cuando están en otras situaciones o en otros espacios en los que se sienten cómodas, donde se expresan sin dificultad dejando ver que son mujeres

¹⁵⁵ A través de entrevistas y conversaciones mantenidas con residentes en poblados chabolistas y con otros que llevan poco tiempo viviendo fuera de ellos, se puede comprobar que estos gitanos de clase baja, cuando son interpelados a partir de temas que no tienen sentido en su día a día, tienden a calificarse a sí mismos de “dejados” (“los gitanos somos unos dejados”) para expresar que no atienden a dichos temas a pesar de ser prioritarios para sujetos con autoridad, como es el caso de los profesionales. Estas expresiones generalizadoras, que acaban reduciendo ciertas conductas a la pertenencia étnica y/o cultural de las personas, llevan a cabo una esencialización o “culturización” de los miembros del colectivo gitano a partir de ciertas preconcepciones estigmatizantes. Ser gitano pasa, por tanto, por no hacer cosas como ir al médico, “comer bien”, etc. (Ayala Rubio y Pérez-Sutil, 2007; Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villaamil y otros, 2008).

con capacidad de autonomía y decisión en otros ámbitos de sus vidas. Es por ello por lo que argumentamos que la autoinferiorización es, en cierto sentido, una táctica desplegada sobre todo por sujetos de clase media-baja y clase baja que permite no entrar en conflicto con los profesionales, si bien es común que a ojos de éstos no sea una actuación convincente o creíble. Se trata de una forma de hablar y actuar que se puede considerar como una táctica, y no tanto como una estrategia, siguiendo la distinción de De Certeau (1996), puesto que estos solicitantes/beneficiarios de la RMI no suelen desarrollarlas consciente ni deliberadamente como una forma de optimizar sus encuentros con los profesionales¹⁵⁶. No obstante, se detecta una diferencia destacable en el despliegue de esta táctica en sujetos de clase media-baja y en sujetos de clase baja, dado que mientras que, entre los primeros, todo indica que el discurso autoinferiorizante no se acompaña de prácticas que lo confirmen (es decir que la autoatribución de “torpeza” o de “no saber”, por ejemplo, no responde a lo que esos sujetos muestran saber hacer cuando actúan en el ámbito de que se trate, a pesar de lo cual nada indica que sean conscientes de esta incongruencia), entre los segundos, ocurre lo contrario, esto es, que su discurso autoinferiorizante suele corresponderse con prácticas que lo corroboran.

Paseo por el poblado chabolista y una chica de unos 20 años sale a mi encuentro y me pide que le lea una carta que le ha llegado de la Comunidad de Madrid. Le digo que le recuerdan que le han dado una subvención para montar un negocio. Se acerca un chico que parece de la misma edad, y me dice: “Nosotros somos muy buenos, hacemos todo lo que Elena y Pedro (trabajadores sociales de IRIS que trabajan en el poblado) nos dicen”. (Registro de campo: observación en asentamiento chabolista Santa Catalina, zona sureste de Madrid, junio 2006)

El caso de Sara, que se describe a continuación, sirve igualmente para ilustrar que algunos beneficiarios, cuando hablan con los profesionales, se presentan a sí mismos como personas desempoderadas, sin capacidad de actuación sobre sus propias vidas. Sara, una perceptora de la RMI de 23 años de clase media-baja, reside en una casa baja de Cañada Real, es madre de una hija de un año y está casada con un primo suyo. Afirma que está muy descontenta con su vida y que alguien “tiene que ayudarla a conseguir piso de protección oficial”. Cuando le hice la entrevista, me relató diversas calamidades personales con un tono psicologicista (resaltando los nervios, las angustias personales, la depresión), a través de las cuales expresaba la desazón con la que experimentaba sus circunstancias vitales. Si le preguntaba por su relación con los Servicios Sociales o con la institución sanitaria, solía

¹⁵⁶ De Certeau identifica las “tácticas” como un tipo de resistencia propio de los sujetos y de los colectivos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y las “estrategias” como aquellas otras que se orientan a cuestionar expresamente un determinado *status quo*, por lo que no se pueden desplegar en esas situaciones, tal como sostiene Jociles (2011) en su estudio sobre las resistencias que interponen –en su caso– las mujeres solas que están en proceso de adopción internacional ante ciertos planteamientos y demandas sostenidos por los profesionales que intervienen en dicho proceso.

entreverar sus respuestas con múltiples “yo no sé” y hacer referencia a los “nervios” que le entraban cuando tenía que lidiar con sus profesionales. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de observar a Sara en el desarrollo del proyecto de integración en el que participaba desde hacía varios años, o relacionándose con otras mujeres gitanas, se mostraba feliz y cómoda en contacto con las trabajadoras de la ONG que implementaba dicho proyecto, hasta el punto de decir que su profesora de alfabetización era una de sus mejores amigas. Se podría decir, a modo de hipótesis, que la autoinferización de Sara se desplegaba sobre todo cuando se enfrentaba a profesionales de quienes no sabía cómo iban a reaccionar o qué tipo de autoridad podían tener para apoyarla a conseguir la ayuda que solicitaba, en este caso, una vivienda de protección oficial, y a través de ella se ajustaba, de un modo casi automático a alguna de las categorías (como la de mujer soltera o la de mujer depresiva, por ejemplo) en las que dichos profesionales suelen encajar a quienes consideran “pobres legítimos” o “buenos pobres”¹⁵⁷.

Gitanas como Alma, de clase media-baja, no recurren como estandarte a la narración de situaciones de penuria o sufrimiento extremo (que, por otro lado, no podrían demostrar), sino que apelan a “la necesidad” económica como eje-guía de sus relatos de demanda de ayuda. Alma produce un discurso ordenado sobre su vida, parándose en los hechos que dan sentido a su demanda de escasez de recursos. Explica claramente los hechos relacionados con su descenso de poder adquisitivo, poniendo ejemplos como el haberse visto obligada a cambiar de marca de pañales (ya no usa Dodots) para su hijo o el haber tenido que dejar de comprar en Carrefour. Alma, a diferencia de Sonia, utiliza expresiones relativas a la planificación temporal de su vida diaria, lo que pone de manifiesto que no vive en una situación de incertidumbre. Donde Alma tiene dificultades es en la planificación de su vida en el mediano y el largo plazo puesto que, como se ha dicho ya en otro lugar, tiene que buscar vivienda por haber recibido una orden de desahucio.

¹⁵⁷ Que alguien diga que “está necesitado” de cara a conseguir ayudas sociales implica tratar de ser encajado dentro de la categoría de “buen pobre”; categoría que apunta a quien ni se aprovecha ni miente, a la vez que testimonia estar en una situación verdaderamente delicada. Siendo conscientes de esto, una estrategia discursiva común en las personas gitanas, al menos en las que han sido entrevistadas para el estudio que aquí se presenta, es la de distanciarse de los “gitanos aprovechados”, de esos otros que no son “buenos pobres”. Así, Alma critica a los gitanos que se benefician de múltiples recursos sociales, a quienes acusa de acumular, además de “chabolas buenas”, casas de protección oficial, trabajo en la economía formal, etc.: “Pues, no, los que tienen dinero no se pueden aprovechar de eso, porque hay otras personas que lo necesitan de verdad, como yo, y no tengo derecho. Porque a ver, ¿dónde me voy yo?, ¿a una chabola? Es que no hay ya, si no ¿tú te crees que si hubiera una chabola no me iba yo? Y saber que de aquí a 2-3 años tengo derecho a un piso (si estuviera en chabola)... Pero claro, hay otros con dinero, con mafia, que tienen las obras, van a la chatarra, van a trabajar. Después de que están montados les dan el IMI y luego les dan el piso. ¡A eso no hay derecho!”. (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid)

La RMI son 380 euros, que hoy en día te los gastas en nada. En comida se me va. Con el niño, en petisúis, en pañales, en toallitas.... El niño antes usaba Dodots, pero tuve que cambiar a los pañales baratos. La ropa me la dan a veces mis vecinas. Me adapto a lo que venga, pero a lo primero se pasa muy mal, hasta que planificas: dónde gasto este dinero, dónde este otro. Mi día a día lo vivo. Yo no sé si hoy me voy a ganar 20, 30 euros (vendiendo). (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid.)

A pesar de que dice estar sola y no tener apoyos, recibe dinero de su ex-compañero e información de una prima que vive en Madrid. A su vez, se relaciona con algunas vecinas y ha recurrido a un hermano de su madre, que también en Madrid, para que la ayudara a buscar una chabola. Por tanto, si bien asegura que no tiene a nadie, cuenta –a nivel práctico– con suficiente red social como para conseguir información valiosa y solucionar asuntos acuciantes. Un ejemplo de esto surgió cuando recibió la orden de desahucio, pues a raíz de recibirla, Alma se movilizó yendo a Servicios Sociales y pidiéndole ayuda a su ex-compañero, quien la llevó en su furgoneta a los distintos lugares donde tuvo que presentar documentación para que le fuese asignado un abogado de oficio. Esto es, contó con ayuda para realizar todas las gestiones pertinentes. Por otro lado, Alma no expresa los sentimientos frustración que produce una posición vital de extrema necesidad, como la que ocupa Sonia, y sabe de la existencia de las “normas de buena conducta”, mencionadas más arriba, que se esperan en la relación con los Servicios Sociales. Tiene miedo de que sus propios actos la traicionen, de no saber producir un relato que sirva para legitimar una demanda de ayuda a los ojos de su trabajador social. Sin embargo, es una mujer guapa, joven, muy vital... y sabe expresarse bien tanto oralmente como por escrito. A diferencia de Sonia, a quien se ve ajada y poco arreglada, ella se ocupa de su apariencia física, de manera que el cuidado corporal y estético es otro elemento que las distingue. Y si bien Alma dice que no se siente con capacidad para negociar nada con su trabajador social, ha logrado convencerlo de que su PII no incluya la asistencia a ningún “cursillo” ni comenzar de manera inmediata un proceso de búsqueda activa de empleo. Su auto-calificación como “gitana ignorante” es, en cierto sentido, una coartada que le sirve para relacionarse de forma más eficaz con determinados profesionales. Se podría decir incluso que busca esconderse detrás de la palabra “ignorante” para evitar las presiones para la inserción social que teme recibir de los trabajadores sociales. Su experiencia con alguno de los que ha tratado previamente la han puesto sobre aviso de “las reglas del juego” y, a partir de ella, ha armado su discurso de un modo que le permite defenderse de esas presiones. Así, aunque los “nervios” no dejan de aquejarla cuando se relaciona con las instituciones públicas, en general, y con los Servicios Sociales, en particular, en la práctica se desenvuelve bastante bien en esa relación y ha logrado los dos objetivos mencionados más arriba relativos a su PII.

Ella sabe que, para algunos profesionales, querer cuidar a su hijo es una razón suficiente para no participar en “cursillos”, por lo que ésta es la que aduce ante Raúl. De igual modo, estos profesionales asumen el que las mujeres se encarguen de los cuidados de la familia como una parte de la “cultura gitana”, por lo que ven plausible que no confíen en las escuelas infantiles para hacerse cargo de sus hijos cuando son menores de tres años. En consecuencia, Alma le dice a Raúl que cuando su hijo tenga tres años y deba ir a “la guardería”, se planteará buscar empleo. Por tanto, cabe concluir que la adaptación de esta beneficiaria de la RMI a las categorías que utilizan los Servicios Sociales indica que posee las competencias sociales necesarias para realizar sus demandas en los términos que espera dicha institución (Messu, 1991). En suma, Alma demuestra tener más conocimientos que Sonia sobre qué puede y no puede negociar en sus relaciones con los Servicios Sociales, y lo demuestra en la práctica puesto que, en la entrevista que se le hizo para esta investigación, expresó no tener ninguna habilidad ni saber para ello.

- A: Cuando me vine aquí, desde que me vi sola, fui a donde Raúl y le pedí ayuda.
- E: Me has dicho que fue por tu prima que pediste la RMI. Si no te hubiera contado tu prima que existía esa ayuda, ¿no tendrías ni idea?
- A: Nada, ni idea. Ella fue la que me dijo que había una ayuda. Nosotros la llamamos el IMI. Me dijo: “Mira, hay un IMI que te dan 500 euros, y con eso puedes tirar perfectamente el mes”. Y digo: “¡Ah, pues, sí!” Pero como estaba antes (viviendo) allí con la suegra, pues, allí no la pedía porque le tenía a él (al padre de su hijo) y tampoco me hacía falta el dinero. A ver si me entiendes. Para comer, de sobra tenía. Estaba bien. Pero desde que me vine aquí, a esta casa, necesitas comida, necesitas ropa, muchas cosas, ¿sabes? Y desde que me vi tan necesitada, pues, a mi prima, que se llama Telma, le pregunté. Y le dije: “¿Tú no tienes ninguna ayuda?”. “Sí, pues, los Servicios Sociales te dan una ayuda, que se llama el IMI, que te dan casi 500 euros al mes, que puedes tirar perfectamente”. Y fui donde José (su primer trabajador social). Una persona malísima, muy... A ver si me entiendes. Nada más ir a pedirle información, me dice: “Pues, trabaja”, dándome como esquinazo, como que no quería ayudarme. Y yo digo: “Pues, como me toque éste, yo no consigo nada”. Y luego me tocó una muchacha que se llama María, muy buena la muchacha. Me dio un papel con la dirección donde tenía que ir, me puso direcciones, me ayudó. Y luego me pasaron a Raúl, y desde entonces ya no me han vuelto a cambiar, ni quiero que me cambien, y ya está.
- E: Yo me acuerdo que Raúl me dijo que él trató de explicarte que te venía bien ir a cursillos. ¿Tú ya sabías que eso te lo iban a decir?
- A: Sí, sí.
- E: ¿Te lo dijo tu prima?
- A: Sí, porque ella va dos veces a la semana a la semana a los cursos, pero cuando los niños tienen tres años, cuando van al cole, tienes que ir a un curso. (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid.)

Por otro lado, aunque reconoce que no quiere trabajar, Alma elabora un discurso que ensalza las bondades de la inserción laboral haciendo referencia, sobre todo, a la “independencia” que le daría el poder ganar dinero en el futuro.

- A: La primera persona que quiere trabajar soy yo, porque ganas más dinero, eres independiente pero, claro, mi hijo está antes que nadie.
- E: ¿Pero si te ofrecieran un trabajo de 700 euros al mes lo cogerías?
- A: Lo cogería.
- E: ¿Lo cogerías aunque te quiten el IMI?

A: Pues sí, pero cuando mi niño tenga tres años. Pues, sí. Según qué trabajo, qué hora, para que pudiera trabajar y estar con mi hijo. Yo a mi hijo no lo dejaría doce horas (en la escuela infantil). (Refiriéndose a la entrevistadora:) Ya verás cuando tengas tú el tuyo. Si estuvieras sola, no lo dejarías ni por nada del mundo. ¡Un hijo es un hijo! (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid.)

Sin embargo, Alma –como otras perceptoras de la RMI entrevistadas de clase media-baja– no muestra signos, sino todo lo contrario, de creerse verdaderamente ese discurso. Así, me llamó la atención que, cuando le pedí que me relatara cómo fue el encuentro con su trabajador social en el que le solicitó la RMI, cambiara de acento y pasara a adoptar uno que sonaba a “más gitano”. El deje que utilizó evocaba el utilizado por las vendedoras gitanas en los mercadillos para convencer a los transeúntes de que les compren algo de mercancía. En cierto sentido, el acento gitano que ha aprendido en contacto con actividades como la venta lo usa para persuadir también a los profesionales que reparten ayudas sociales. Es una incorporación sutil, que se ha observado realizando acompañamientos con distintos gitanos perceptores de la RMI y/o solicitantes de ayudas sociales: una vez no se necesita convencer o persuadir, el acento cambia (sonando a menos “gitano”) y la “necesidad” se deja de aducir a modo de cantinela.

En suma, Sonia, Sara y Alma se presentan a sí mismas como merecedoras de las prestaciones y/o ayudas sociales que solicitan, pero lo hacen desplegando discursos de victimización diferentes. Sonia lo hace con retazos vitales, Sara catalogándose como depresiva y Alma adoptando un lenguaje proclive a mostrar la aceptación de los valores que piensa que tiene su trabajador social, esto es, afirmando ante él que sí quiere trabajar, aunque no en este momento.

A medida que se asciende en posición social y formación, los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase media incorporan a sus discursos la lógica de los derechos de ciudadanía y realizan afirmaciones sobre la importancia de asumir procesos de autonomización y responsabilización personal. Comienzan a hablar de ellos mismos como sujetos emprendedores y deseosos de cambio vital, y de los trabajadores sociales en clave profesional. Los solicitantes/beneficiarios de posiciones sociales más bajas establecen principalmente la distinción entre unos y otros trabajadores sociales en base a su actitud con respecto a la concesión de la prestación. Así, les catalogan, por un lado, de trabajadores sociales “buenos” o “simpáticos” si los perciben dispuestos a “darles” las ayudas que piden sin oponer obstáculos, o de “malos” o “antipáticos” si les ponen trabas o les reciben “de mala gana”. En cuanto a los de clase media, también consideran “buenos” a los trabajadores sociales que les facilitan la realización de las gestiones necesarias para conseguir las ayudas

pero, en este caso, consideran que ello forma parte de su labor profesional, por lo que los ven como merecedores de “agradecimiento” sólo cuando se implican en ella más de lo que es exigible que lo hagan.

Felisa y Javier, matrimonio de clase media gitano, del que ya se ha hablado previamente, son un buen ejemplo de cómo el ascenso social conlleva la adopción del lenguaje de “los derechos de ciudadanía”. No manejan una concepción de la RMI como pensión vitalicia e incluyen en su relación con los Servicios Sociales un discurso que dota de valor a la responsabilidad individual. Para ellos, lo que otorga legitimidad a su demanda de ayuda es, en sus palabras, “la verdad” que acompaña a todas sus peticiones, además del conocimiento de sus derechos y obligaciones. Ello les sitúa en una posición más simétrica con respecto a los trabajadores sociales que la de los entrevistados de clases sociales más bajas. Tanto Javier como Felisa se sienten, por tanto, con poder ante la institución a pesar de reconocer que siempre queda un resquicio de miedo o de “nervios” cuando se reúnen con su trabajador social. Aun así, y a diferencia de Alma y Sonia, dan muchos detalles sobre las funciones que diferencian a unos y otros profesionales y relatan sentirse cómodos en contacto con las distintas instituciones.

- A: ¿Alguna vez habéis ido a Servicios Sociales y os habéis puesto nerviosos?
- J Yo soy más nervioso que Felisa, en el sentido de que reivindico una cosa que me veo con derecho y me veo con tanto derecho que a lo mejor la pierdes (la razón) por las formas.
- F: Yo me desenvuelvo muy bien pero siempre me gusta tirar de Cristina (educadora social subcontratada por la Junta Municipal).
- J A veces pierdes los papeles porque dices: “¡Que verdaderamente me hacen falta (los recursos que solicitan)!”. Soy una de las personas que tienen que tomar un poco de conciencia y ser más humanitarios, y hay casos que te enfadas y dices: “Óscar (trabajador social de Servicios Sociales), esto creo que es así, de esta manera, y a usted le pagan para que haga esta gestión, y nada más exijo que la realice. No te exijo nada más que realices la gestión y des unos informes verídicos a los de arriba, que para eso te pagan. Y no me vayas a venir con la historia de que te falta un papel y me quitéis los 500 euros que es de lo que vivo”. Entonces, fue una ocasión que sí que reivindicé un poquito. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

El verse como sujetos conocedores de sus derechos les otorga seguridad a la hora de transmitir su demanda de ayuda, aspecto éste que no aparece, como se ha visto, en los solicitantes/beneficiarios de la RMI de menor posición social. Cuando se relacionan con los profesionales exigen un servicio “profesional”, por lo que ya no delegan en otros las distintas gestiones como un acto de dependencia, sino que buscan obtener un servicio público de calidad. De este modo, se puede afirmar que el hecho de que los solicitantes/beneficiarios conozcan cómo funcionan las instituciones públicas y los procedimientos para solicitar las ayudas cambia la actitud con la que se acercan a ellas. Por otro lado, Javier y Felisa muestran, a través de su discurso, que han establecido relaciones de alianza y de amistad con diversos

profesionales, en quienes se apoyan en caso de necesitar consejo con respecto a cualquier trámite o procedimiento burocrático. De este modo, otros elementos que les distinguen de los perceptores de la RMI de inferior posición social son, por una parte, que han incluido a los profesionales, en términos de una cierta igualdad, dentro de su red social y, por otra parte, que cuentan con información que les dota de cierta capacidad de maniobra y reivindicación de sus derechos.

- A: ¿Y te funcionó reivindicar?
J: Pues, sí, de hecho, como vas con la verdad, pues, tienes acceso a todos lados. Y vio mi verdad y me ayudó. Y estoy agradecido. Pero ya tuve que reivindicar porque, a lo mejor, se cree que no sabes un poquito de tus derechos, ¿eh?
F: Pero eso pasa en todos lados, que por ser gitanos se piensan que somos ignorantes.
J: Estoy agradecido porque desde esa vez tomó su opinión y sacó su conclusión y me solucionó el problema.
F: Podemos ser más ignorantes pero no tontos. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

Este matrimonio, por tanto, habla del derecho a la RMI relacionándolo con otros derechos sociales, como el de la vivienda o el más amplio de la protección social. A diferencia de otros beneficiarios de la RMI, son capaces de salirse de su situación personal para mostrar que tienen una idea del funcionamiento general de los derechos de protección social existentes en la Comunidad de Madrid y en el Estado. Este aspecto no aparece en los perceptores de clase baja y media-baja, quienes –como se ha visto– hacen referencia principalmente a su situación de penuria y a la información recibida de familiares y conocidos a través del “boca a boca”, de manera que se presentan a sí mismos como sujetos “a la deriva” e inermes ante las decisiones de los profesionales aunque, como se indicó, en el caso de beneficiarias como Alma esta pose discursiva es la táctica que le posibilita escapar de las presiones profesionales hacia la inserción porque, en la práctica, esta beneficiaria ha logrado negociar ciertos aspectos con relación a su PII. En cambio, Felisa y Javier saben qué pueden esperar de las instituciones públicas, lo que posibilita que sus relaciones con (y lo que consigan de) ellas no quede a la merced de los diferentes estilos profesionales. En su discurso, a diferencia de Alma, Sonia y Sara, se describen como sujetos con poder. Exigen ser atendidos adecuadamente como ciudadanos con derecho a la RMI. Felisa, por su parte, se está formando voluntariamente en informática, después de haber participado durante tres años en un programa orientado a mujeres, en el que concurrían inmigrantes, gitanas y *payas*, que se desarrollaba en el centro de Servicios Sociales de su distrito y era llevado a cabo por educadoras sociales que habían sido subcontratadas por la Junta Municipal. Está inmersa en un proceso de ascenso social que se refleja tanto en sus prácticas como en su lenguaje; así, por ejemplo, se inscribe en nuevos cursos cuando considera que ya ha cumplido ciertos objetivos

formativo-laborales que se había propuesto o, para poner otro ejemplo, se refiere a su tiempo de formación como “ocio”, no como “trabajo”. Además, Felisa y Javier aseguran que se sienten orgullos de fomentar que sus hijos estudien la secundaria, si bien confiesen que no están logrando que asistan regularmente al IES en que están matriculados.

Si nos fijamos en otro aspecto de los discursos de Javier y Felisa, podremos apreciar que han asumido como propios ciertos valores de clase media desde los que otorgan sentido a sus vidas. Felisa, por ejemplo, cuando contaba en la entrevista que estaba haciendo averiguaciones para sacarse el graduado escolar en una escuela para adultos, lo argumentaba diciendo que quería ir a los cursos “para distraerse un poco” y “pasárselo bien”, poniendo de manifiesto –como se ha indicado– que concibe la formación como parte de su tiempo de ocio. En este sentido, mientras que las mujeres gitanas de clase baja y media-baja no suelen hablar en términos que permitan identificarlas más allá de su papel de madres y cuidadoras, Felisa y otras perceptoras de la RMI de clase media que también han sido entrevistadas se presentan a sí mismas a partir de una idea de gitana moderna, que ha hecho suyos el deseo de cambio, la valoración positiva del aprendizaje y el disponer de tiempo para el disfrute personal. En comparación con Sonia y con Alma, Felisa se ha autodefine como alguien con motivaciones de ascenso social, y lo hace en términos de sujeto individual, aspecto definitorio de las personas incluidas dentro de lo que se ha considerado clase media gitana. Finalmente, no hay que olvidar que los discursos de estos perceptores de la RMI han sido conformados, sobre todo, a través de un contacto cotidiano con las profesionales que gestionan la RMI y/o que trabajan impartiendo formación en proyectos de integración, lo que les hace ser conscientes del valor que éstos conceden a la constitución de un proyecto de cambio personal conducente a la inserción laboral y a una determinada forma de concebir y experimentar el tiempo y la propia vida. Los discursos de estos usuarios, por tanto, no pueden de ser leídos fuera de esa relación con la intervención profesional.

Otro caso de gitana beneficiaria de la RMI que voy a comentar aquí es el de Rosario, mujer de 30 años, con dos hijos, que se desenvuelve de manera muy competente en los cursos de la RMI (al menos en los en los que he realizado observación participante). Se trata de un caso que deja ver tendencias diferentes al recién expuesto de Felisa a pesar de compartir con ésta algunos de los valores de clase media que se han reseñado, si bien no todos –como se verá–. Es una mujer que no duda en afirmar que quiere que su hija se eduque todo lo que pueda, a la vez que sostiene que ella quiere trabajar “fuera de casa”. Vive en un piso de protección oficial por el que paga menos de cien euros al mes y acude dos días a la semana a clases de alfabetización en su barrio (zona suroeste de Madrid), asistiendo también algunas

semanas a las actividades complementarias que convoca la misma entidad que organiza esas clases. Rosario es el prototipo de mujer gitana de clase media-baja que vive en una situación de precariedad estable. Esta beneficiaria de la RMI ha asumido, en contacto prolongado con los Servicios Sociales y las entidades de iniciativa social, la inserción laboral como parte central de los discursos que elabora sobre su propio futuro aunque, en la práctica, revela signos de no estar preparada para emprenderla. Así, por ejemplo, cuando a Rosario le surgió la oportunidad de desempeñar un trabajo como limpiadora, que ella manifestaba frecuentemente que quería realizar como complemento a la RMI, dio múltiples excusas que pospusieron indefinidamente la fecha de su incorporación al mismo de manera que acabó por no hacerlo nunca. Lo que busco con la exposición de este incidente no es destacar que Rosario “mintiera” sobre su deseo de trabajar (tal como algunos profesionales tienden a interpretar cuando se enfrentan a incidentes similares, tal como se ha visto en otro capítulo), sino poner de manifiesto que lo que, a nivel discursivo, se expresa como algo deseable (como un sueño, un deseo o una aspiración) a menudo no resulta o lo más factible o lo más conveniente a nivel práctico, puesto que Rosario, por ejemplo, aunque no disfrute de una situación económica boyante, tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, que no serían compensados por el salario que recibiera trabajando en el sector de la limpieza, máxime cuando ello le supondría, además, tener que abandonar una vida que está organizada alrededor de los cursos de la RMI y de sus actividades domésticas (compra, cocina, cuidado de hijos, etc.). Por otro lado, los cambios a este respecto se materializan cuando las mujeres han interiorizado previamente un proyecto de vida que incorpora un amplio abanico de valores de clase media (es decir, no sólo el de inserción laboral sin también el de autonomía personal o el de “independencia” a través del trabajo asalariado, para enumerar únicamente dos más) y ello se ha acompañado con la aparición de la idea de “sujeto individual” con tiempo para sí mismo, que aleja a la mujer del rol de cuidadora y de la responsabilidad no-compartida de las labores domésticas. Rosario no se ve capaz de salir de su ámbito de acción, el del barrio, de lo que ya sabe hacer y constituye su rutina diaria, a pesar de que hable de ello como si se tratase de uno de sus anhelos y sepa que es lo legitimado por las profesionales con las que se relaciona y hacia las cuales siente un gran afecto. En resumen, no puede cambiar lo suficiente como para culminar lo que, tal vez un tanto a la ligera, dice desear.

Es común que, en el marco de interacción con los profesionales, mujeres como Alma o Rosario se atrevan a “soñar en voz alta”. Así, expresan deseos, expectativas futuras, motivaciones sobre sí mismas que muestran que están visualizando, al menos utópicamente, un cambio de vida. Ello podría ser considerado en sí mismo como una de las consecuencias

“positivas” de los proyectos de alfabetización o, en general, de formación en los que estas mujeres gitanas se integran a través de la RMI, dado que ellas, debido a las frecuentes interpelaciones de las educadoras acerca de su potencial para cambiar, para realizar cosas diferentes a la que ya realizan, se sienten invitadas a soñar, a verse a sí mismas emprendiendo procesos de cambio personal que tal vez puedan culminar con la inserción laboral. Por tanto, declaraciones acerca de “querer cambiar”, como la que hacía Rosario en el incidente expuesto más arriba, hay que tomarlas más bien como quimeras, como utopías o como ensoñaciones sobre la propia capacidad de transformarse; quimeras, utopías o ensoñaciones que se generan y se despliegan en un contexto donde es muy valorado el deseo de dar forma a un proyecto de cambio personal. Cabría incluso decir que estas quimeras, utopías o ensoñaciones se han constituido a través de un “diálogo interétnico realizado en términos argumentativos y democráticos” entre los profesionales y los beneficiarios de la RMI, para expresarlo con palabras de Cardoso de Oliveira (1993: 27). Este “diálogo persuasivo”¹⁵⁸ de los profesionales (y, en especial, de las educadoras y profesoras que imparten los cursos de los que se ha hablado) es el marco social en que se han ido construyendo los sueños y los deseos de cambio de estas mujeres gitanas que, a nivel práctico, no se pueden materializar porque no son coherentes ni con su experiencia ni con sus posibilidades prácticas, socio-culturales y/o económicas.

En todo caso, todos los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI expresan sentirse “juzgados” en su contacto con los Servicios Sociales. De hecho, la relación con éstos está mediatizada por la concepción que manejan de los trabajadores sociales como agentes con algún tipo de influencia en la concesión/retirada de la prestación económica, lo que revela el calado del discurso de los profesionales del grupo fiscalizador. De este modo, dichos solicitantes/beneficiarios desarrollan, delante de esos trabajadores sociales (y otros profesionales del ámbito de las políticas sociales), formas de presentarse a sí mismos como merecedores legítimos de la RMI que varían dependiendo, principalmente, –como se ha visto– del mayor o menor capital social y del mayor o menor capital cultural que tienen en su haber.

¹⁵⁸ Cardoso de Oliveira (1993: 27) distingue entre el diálogo persuasivo, mediante el que se trata de convencer a través del ejercicio de la argumentación a los interlocutores, y el no-diálogo, mediante el que no se establece ningún tipo de comunidad de comunicación y se centra en imponer autoritariamente ciertos valores y hábitos a “los otros”.

6.7 RMI y profesionales

Las imágenes que los gitanos beneficiarios de la RMI manejan sobre los profesionales del trabajo social ocupan gran parte de sus discursos cuando son interpelados sobre esta prestación social. Tanto es así que podría decirse que no disponen de una representación sobre ella más allá de los relatos que elaboran acerca de los profesionales que la gestionan y aplican. Hablar de la RMI implica, por tanto, hacerlo sobre los trabajadores sociales de Servicios Sociales; un hablar que va conformando narraciones que suelen incluir las expectativas que dichos beneficiarios tenían, en un primer momento, con respecto a estos profesionales y la frustración que les causó después y/o les sigue causando el “trato” recibido por su parte. Para los beneficiarios de la RMI de clase baja y media-baja, la distinción entre unos trabajadores sociales y otros reposa en el grado de dificultad que éstos les ponen de cara a conseguir las ayudas sociales. En cambio, los beneficiarios de clase media que han sido entrevistados dedican más tiempo a explicitar qué actitudes personales deben tener los “buenos trabajadores sociales”; actitudes que han de ser, según ellos, coherentes con el desempeño de las tareas de ayuda e intervención social que ejercen (aceptación de los comportamientos del excluido, escucha respetuosa, sin enjuiciamiento ni moralización en caso de no estar de acuerdo con él, actitud cercana y empática, etc.). Para comprender por qué las expectativas que estos beneficiarios de clase media proyectan en los profesionales no son satisfechas, a continuación vamos a presentar ciertos planteamientos teóricos que tratan de dar cuenta de las dificultades que entraña la institucionalización del “cuidado”, algunas de las cuales atañen al papel del trabajador social.

En el ámbito de aplicación de las políticas públicas para la inclusión social se produce hoy en día una tendencia a la tecnificación y la protocolización (Zamanillo, 2011), que busca profesionalizar el “trabajo de cuidado” (Pattaroni, 2005)¹⁵⁹; trabajo que requiere la escucha de quien demanda ayuda para poder establecer cuáles son sus “necesidades” y qué cauces de acción hay que abrir para satisfacerlas. Ello ha comportado la creación de protocolos de intervención social con el fin de tecnificar (de objetivar, en definitiva) ese trabajo, lo que ha supuesto el establecimiento de mecanismos (o, mejor dicho, de barreras) que distancian al profesional de la persona que demanda la ayuda. La asunción de estos protocolos –o, si se quiere, de estas pautas técnicas– como un elemento identitario ha supuesto que algunos profesionales (los que equiparan el “ser profesional” a “ser objetivo”) se sientan incómodos ante los beneficiarios o demandantes de prestaciones sociales que buscan en ellos a alguien

¹⁵⁹ Este autor sostiene que esta tendencia es la reacción del Estado de Bienestar ante las acusaciones que ha recibido de ejercer el paternalismo a través de sus acciones de intervención social.

socio-afectivamente cercano, esto es, que muestre una actitud semejante a la de un amigo o a la de un familiar. Estos profesionales prefieren desenvolverse “con profesionalidad”, lo que conlleva, desde su punto de vista, hacerlo a través de herramientas que les permitan objetivar su trabajo como, por ejemplo, el establecimiento de metas redactadas en contratos de integración y de los tiempos para su consecución, para así evitar unas relaciones demasiado cálidas con los usuarios de los Servicios Sociales. En este contexto, surgen los interrogantes acerca de cuál es la distancia personal idónea que han de mantener para poder realizar lo que autores como Kittay (2002) califican como un “buen trabajo de cuidado”: ¿qué actitudes personales hacen falta para poder ayudar a quien lo necesita?, ¿puede este tipo de trabajo profesionalizarse y seguir conservando un potencial ético, crítico y transformador? o ¿cómo mantener “la objetividad” cuando un profesional se está confrontado cotidianamente con discursos de vulnerabilidad social en un contexto institucional de escasez de recursos?

Pattaroni asegura que el cuidado se inscribe en las políticas sociales de lucha contra la exclusión social “a precio de un doble movimiento: una limitación de sus pretensiones éticas y una asociación directa a una política de responsabilización de la persona¹⁶⁰” (2005: 178). Es esta asociación del cuidado con “la responsabilización de la persona” la que, según este autor, contribuye a delimitar pragmáticamente tanto sus manifestaciones prácticas como el alcance ético de las profesiones dedicadas al cuidado. En cuanto a Kittay (2002), en la definición del cuidado que cito a continuación, muestra la polisemia del término; una polisemia que Paperman (2005), por su parte, considera lo más interesante del concepto.

Considerado como trabajo, es la tarea que consiste en preocuparse de ti y de los otros cuando están en situación de necesidad. Uno se da cuenta de su importancia sobre todo en su ausencia y uno tiene principalmente necesidad de él cuando no lo puede ofrecer en retorno. Como actitud, *el cuidado* denota un vínculo positivo, afectivo, una inversión en el bienestar del otro. El trabajo de *cuidado* puede ser cumplido sin la actitud apropiada. No obstante, sin una actitud de *cuidado*, la disponibilidad al otro, esencial para comprender aquello de lo que tiene necesidad, no es posible. Lo anterior quiere decir que el trabajo que no está acompañado por la actitud de *cuidado* no puede ser un buen *cuidado*. (Kittay, 2002: 259-260, en Pattaroni, 2005: 178¹⁶¹).

La extensión de esta práctica tecnificada del trabajo social, que ha venido de la mano del aumento de las tareas “de gestión de recursos” (Zamanillo, 2011: 7) que realizan sus profesionales, es probablemente la responsable de que los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI se quejen, cada vez más, de la frialdad del trato que reciben por parte de los trabajadores sociales; y ello se produce al mismo tiempo que esperan de éstos que sean

¹⁶⁰ Traducción propia.

¹⁶¹ Traducción propia. Cursivas del autor.

cálidos, agradables, empáticos... y, sobre todo, que desvelen información personal sobre sí mismos como contrapartida a la que solicitan de ellos.

6.7.1 La demanda gitana como demanda desadaptada: la búsqueda de alianzas personales con los profesionales del trabajo social

Los gitanos en situación de exclusión social (es decir, los que más atrás se han identificado como pertenecientes a las clases bajas y medias-bajas) se conforman, por varios motivos, como un colectivo que incomoda a la institución de Servicios Sociales más moderna, técnica y profesionalizada. Por un lado, se debe a que algunos de ellos expresan su demanda de ayuda económica a través de un vocabulario en cierto sentido arcaico, con claras remembranzas al asistencialismo que ha marcado la intervención social con este colectivo. Así, suelen pedir –directamente y sin matizaciones– que se les ayude, utilizando la expresión “dadme” para demandar la RMI sin agachar la cabeza, sin sentirse avergonzados, esto es, no ajustándose a la imagen que se espera del que solicita prestaciones sociales.

Como ya se ha indicado, los gitanos de clase baja y media-baja solicitantes/beneficiarios de la RMI no se conciben a sí mismos como sujetos con capacidad para establecer una relación simétrica con los profesionales, por lo que intentan relacionarse con ellos desde lo personal. Los discursos que despliegan para entablar estas relaciones se enmarcan dentro de lo que se puede calificar como estrategias discursivas de súplica, basadas en una llamada a la humanidad y a la empatía del trabajador social (“como buena persona”) y orientadas a obtener, en contrapartida, su reconocimiento y ayuda. Estos beneficiarios de la RMI apelan a los sentimientos y a la sensibilidad de estos profesionales con las vistas puestas en recibir un trato personalizado y compasivo. El caso es que se sienten más cómodos en las interacciones cara a cara en las que pueden buscar alianzas personales. En este sentido, se puede decir que se desenvuelven bien en situaciones que implican utilizar algunas de las cualidades, como la locuacidad y la capacidad de persuasión, que han adquirido en las actividades económicas que han desempeñado históricamente como ocurre, por ejemplo, con la venta ambulante (de caballos, de ropa, de alimentos, de flores, etc.), es decir, se encuentran más a gusto cuando pueden desplegar lo que ellos mismos denominan el “arte de camelar”, el arte de seducir adulando, que conlleva ciertos parámetros comunicativos que resultan molestos, por el contrario, a los profesionales. En consecuencia, el “camele” o la “venta” de su miseria en términos étnicos y personalizados no produce empatía ni compasión en ellos, que esperan hallar a sujetos “neutros” que reconozcan la importancia de los procedimientos estandarizados que han de cumplir todos los ciudadanos. Sin embargo, los gitanos de estas

posiciones sociales (bajas y medio-bajas) buscan relacionarse con los profesionales dentro de un modelo de las relaciones de cuidado que, en términos de Pattaroni (2005), cabe calificar de “régimen de familiaridad”, basado en el acercamiento al otro desde una relación íntima, que presupone que la función del trabajador social se basa en la escucha y en actitudes humanas que escapan del establecimiento de protocolos y que se centran en establecer una relación de cercanía y de pseudo-amistad.

Con respecto a la súplica como estrategia discursiva desplegada en la petición de la RMI, Fassin (2000a: 961) argumenta que ésta es una forma antigua y convencional de demanda por la cual un sujeto interpela a una autoridad para obtener un favor. Bajo esta estrategia, el demandante espera ser tratado según un “régimen de excepción”, que supone hacerlo sobre la base de su sufrimiento y situación personal, no según lógicas abstractas o universales (Fassin, 2000: 961), como serían las que rigen los requisitos de acceso a la RMI.

La súplica (...) se presenta como una llamada a una humanización de las relaciones de dominación que se traduce por un tratamiento personalizado y discrecional del demandante sobre la base del conocimiento y del reconocimiento de su sufrimiento (Fassin, 2000: 961).

Ahora bien, los trabajadores sociales más identificados con un rol técnico-profesional consideran este reclamo de excepcionalidad como la antítesis de una correcta actuación profesional. En este sentido, es frecuente que los gitanos de clase baja y media-baja hagan referencia a la solicitud de la RMI como si de “un favor” se tratase, es decir, como si su concesión dependiese del criterio personal del trabajador social. No conciben el cometido de éste como una profesión, sino como una tarea de carácter humanitario centrada en la voluntad de ayudar al prójimo. Estos usuarios demandan un modelo de cuidado centrado en el buen trato, en la calidez y en la falta de enjuiciamiento, por lo que rechazan a los profesionales más identificados con su rol técnico, a los que califican continuamente de “fríos” y “antipáticos”. Nos encontramos, en definitiva, ante formas diferentes de entender lo que supone la relación de cuidado, lo que está en la base de las desavenencias y conflictos que hay entre trabajadores sociales y estos usuarios gitanos.

Según Pattaroni, el cuidado se sitúa en el interior de las diversas maneras en las que uno se presenta al otro. Se incluyen en este campo léxico nociones como las de caridad, servicio, solidaridad, amistad, responsabilidad e, incluso, la de benevolencia. Estas nociones apuntan hacia “gestos de cualidades variables que inscriben la relación con el otro dentro de universos prácticos, políticos y morales diferenciados” (Pattaroni, 2005). En esta línea de pensamiento, los gitanos de clase baja y media-baja no reconocen como trabajo de ayuda, con el que identifican a los trabajadores sociales, la relación que algunos de éstos tratan de

establecer a través de contratos de integración o protocolos técnicos. En términos de Pattaroni, esperan ser atendidos dentro de lo que este autor ha denominado el “horizonte de la solicitud o de la atención”, centrado en “la familiaridad” (Thévenot, 1994, en Pattaroni, 2005: 186), esto es, en las relaciones de cercanía como base para constituir la “relación de cuidado” entre el demandante de ayuda y el trabajador social. No se sienten a gusto, por tanto, con las acciones profesionales pautadas a partir de objetivos técnicos, que se incluyen dentro de otra manera de implementar el trabajo de cuidado, denominada por Pattaroni como “horizonte de la responsabilización”. Para los beneficiarios gitanos, recibir ayudas sociales implica asumir que entran en una relación asimétrica con respecto a los profesionales o, dicho en términos de Fassin (2000a: 961), dejarse cuidar implica permitir que la autoridad se haga cargo de la situación personal.

La súplica introduce una relación de subjetivación (por la singularización de su caso, la persona se constituye como sujeto que defiende él mismo su demanda frente a la autoridad) a la vez que se sujeta (al solicitar que se hagan cargo de su situación particular, la persona se reconoce como sujeto y se somete a la benevolencia de la autoridad) (Fassin, 2000a: 961¹⁶²).

En este sentido, Pattaroni señala que el cuidado es menudo una relación asimétrica, puesto que quien se encuentra en una situación de necesidad no es capaz de devolver en ese momento un cuidado equivalente. Esta asimetría es precisamente la que conlleva un problema en el proceso de institucionalización del trabajo de cuidado, dado que el marco institucional “hace surgir una fuerte exigencia de respeto a la autonomía de aquel que es ayudado”¹⁶³ (Pattaroni, 2005: 180-181). La tecnificación del trabajo social supone que hoy en día se busque, a través de herramientas como las señaladas (contrato de integración o PII, por ejemplo), simetrizar todo lo posible la relación con los solicitantes/beneficiarios de ayudas sociales¹⁶⁴, por lo que se podría decir que las expectativas, en este caso, de los gitanos de clase baja y media-baja sobre el trato que han de recibir por parte de los profesionales no pueden ser cumplidas. En cuanto a las expectativas de los solicitantes/beneficiarios de clase media, si bien manejan una representación de los profesionales como técnicos que gestionan prestaciones sociales, no dejan de valorar positivamente el que les dispensen un “trato

¹⁶² Traducción propia del siguiente texto: “La supplique introduit une relation de subjectivation (par la singularisation de son cas, la personne se constitue comme sujet détenant lui-même sa demande face à la autorité) en même temps que d’assujettissement (en sollicitant la prise en compte de sa situation particulière, la personne se reconnaît comme sujet s’en remettant à la bienveillance de l’autorité)” (Fassin, 2000: 961).

¹⁶³ Con el movimiento que se ha producido en el trabajo social, tendente a la búsqueda de autonomización y responsabilización de las personas en dificultad (Donzelot y Jaillet, 1998), se asume que esta transformación de la relación de cuidado implica una “pedagogía de la autonomización y de la responsabilización”.

¹⁶⁴ Algunos autores, que reflexionan sobre los dilemas éticos de la intervención social (principalmente del trabajo social), han indicado que los protocolos técnicos sirven para defenderse del temor al desconocimiento y al malestar que se produce por la falta de explicaciones acerca de un fenómeno social dado (Vicente, 2011: 56).

humanitario” (esto es, que tengan “buen corazón” o trabajen “de buena gana”). Se puede decir, con todo, que si bien otorgan su reconocimiento a los profesionales que son “humanitarios”, han asumido como propia –como se ha visto en páginas precedentes– el moderno lenguaje que identifica las prestaciones con “derechos de ciudadanía”; un lenguaje que varios autores (Breviglieri, Pattaroni y Stavo-Debaugé, 2004) sostienen que responde a la adopción, por parte de las instituciones públicas, de herramientas y discursos que provienen de la economía de mercado.

Nos encontramos, por tanto, con una dificultad estructural para el desarrollo de una buena relación entre los solicitantes/beneficiarios gitanos de la RMI de clases baja y media-baja y los profesionales que se identifican más con su rol técnico, puesto que las dos partes de la relación hablan, en cierto sentido, idiomas diferentes. Los gitanos de clase social baja y media-baja no han incorporado –como ya se ha dicho– la lógica de los derechos de ciudadanía y, por tanto, buscan establecer un vínculo con los profesionales de carácter familiar, tratando de establecer alianzas personales y relaciones de cuasi-amistad con ellos porque entienden que así éstos se verán comprometido a ayudarles de alguna manera, como si se tratase de un favor personal. Esta estrategia de vinculación con los profesionales implica no valorar su autoridad técnico-profesional, sino sus cualidades socio-afectivas, lo que a éstos no gusta debido a que les trae reminiscencias de un trabajo de corte asistencialista del que se piensan alejados. Además, –como también se ha indicado– la demanda que hacen algunos gitanos mediante un lenguaje alusivo a la “justicia” y a la “dignidad” tampoco es bien recibida por estos profesionales, en los que despierta el prejuicio del “gitano aprovechado” que busca “parasitar” a las instituciones sociales. En consecuencia, la interrelación de los solicitantes/beneficiarios gitanos, cualquiera sea su origen social, y los profesionales supone, para los primeros, una decepción por un trato que no reciben y, para los segundos, un dilema ético del que, desde mi punto de vista, “sólo se podrá salir a través de la reflexión profesional, individual y colectiva, [acerca] de las limitaciones de su práctica profesional y de los hábitos que han adquirido con este colectivo” (Martín Estalayo, 2011: 26-28).

6.7.2 Trabajadores sociales vs. educadores sociales

Los gitanos perceptores de la RMI y, en particular, los de clase baja y media-baja consideran, sin grandes retóricas o elaboraciones discursivas, que los trabajadores sociales tienen la obligación de ayudar a “los pobres”, categoría en la que se incluyen, y que deben hacerlo de buen talante, por lo que se ofenden cuando que no son bien recibidos en los Servicios Sociales. Los beneficiarios de clase media complejizan esta categorización –como

se tratado en el apartado anterior– incluyendo en ella también el correcto desempeño de sus funciones profesionales.

Después de que la trabajadora social que está dando la charla ha hecho algunas afirmaciones un tanto moralizantes sobre los comportamientos de “algunas personas gitanas”, una gitana perceptora de la RMI interviene diciendo: “¡Estáis ahí para ayudarnos, no para ponernos cara de perro cada vez que vamos a los Servicios Sociales!”. (Registro de campo: observación durante una charla de educación para la salud impartida por la trabajadora social de un centro de salud, zona suroeste de Madrid, actividad anexa al proyecto 5, mayo 2008)

Por ello, reaccionan con enfado cuando encuentran actitudes reticentes por parte de algunos trabajadores sociales a la hora de gestionar las ayudas sociales que les demandan. Estos solicitantes/beneficiarios de la RMI califican de “malos trabajadores sociales” a los que les sermonean, les ponen “cara de perro” –para usar una expresión extraída del anterior verbatim– cuando les ven llegar a sus despachos o les recuerdan con tono paternalista que “tienen que esforzarse por buscar trabajo”, e identifican estos comportamientos como trabas a la gestión/concesión de las prestaciones que solicitan. Los gitanos perceptores de la RMI esperan de las profesiones de la intervención social que vayan acompañadas de cierta conducta moral (Tronto, 1993: 178, en Haber, 2005: 172, nota a pie de página), expresando su convicción de que estos profesionales deben mostrarse agradables en el desempeño de su labor y deben esforzarse en ayudar “de buena voluntad”. “de buena gana” o “de corazón”. Critican, en consecuencia, –como se ha visto– a los que priorizan los trámites burocráticos (“los papeles”) sobre una atención personal y personalizada. Alma, gitana de clase media-baja de la que se ha hablado varias veces en este capítulo, relata en el siguiente verbatim las razones por las que aprecia a su actual trabajador social:

E: ¿Y tu idea acerca de para qué debería servir un trabajador social?

A: Te voy a decir dos ejemplos: Raúl y José. Raúl –no es porque me estés grabando, te lo digo personal a ti– es una persona buenísima, cariñosa, atento con mi niño. Cuando voy allí (a su despacho), le deja a mi niño que entre al ordenador. El otro no. El otro es, para mí, una persona que... antes que nada tiene que escuchar, no nada más que (decir todo el tiempo): “¡A trabajar, a trabajar, a trabajar!”. No es para que diga siempre: “¡Vete a trabajar, vete a trabajar!”. (Entrevista a Alma, gitana perceptora de la RMI de 21 años, madre de un hijo, residente de casa ocupada en barrio de zona oeste de Madrid)

Un buen profesional es, para Felisa y Javier (gitanos de clase media, cuyos discursos volvemos a recuperar aquí), el que da muestras de preocuparse por ellos. Así, en contraposición a su trabajador social, describen a Patricia, su educadora social, como una

persona que les ayuda “de corazón” y disfruta cuando lo hace. A continuación, expresan en sus propios términos por qué la valoran tanto a ella como el trabajo que realiza¹⁶⁵:

- J: Patricia viene a casa, se preocupa. Estoy contento con ella. ¡Es que tiene unos detalles!
- F: Patricia me ha ayudado a llevar los papeles de los niños: “Te falta este papel, pásate por el colegio”.
- J: Le sale a la chica de corazón.
- F: Muy maja. Ya son varios años, y ya los aprecias.
- J: Es humanitaria, le gusta llevar a la gente y yo se lo agradezco. Ella es de corazón. Se lo merece, es de puta madre. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

Si las relaciones con los trabajadores sociales de Servicios Sociales se dibujan generalmente como distantes, esporádicas, incómodas y asimétricas, las que establecen con los educadores sociales suelen definirlas recurriendo a un lenguaje propio de la amistad, la familia y las relaciones de confianza y cercanía. El que los educadores sociales se relacionen con los gitanos perceptores de la RMI sin que medie la idea de obligatoriedad ni la posibilidad de transacciones económicas, favorece que esas relaciones puedan tener un carácter más igualitario. En el siguiente verbatim, Javier reconoce que, incluso conociendo sus derechos, se siente “intimidado” cuando va al despacho del trabajador social. Es decir que, aunque él no menciona “los nervios” como reacción al contacto con sujetos dotados de autoridad, sigue experimentando cierta sensación de intranquilidad.

Porque a un trabajador social vas y estás como más intimidado, muchas veces voy por obligación, pero no voy a gusto. Sin embargo, una educadora es diferente, te da confianza, tratas con ella, es una amiga. (Entrevista a Javier, beneficiario de la RMI y residente en vivienda en altura, padre de 6 hijos, casado, se dedica a la venta ambulante)

La inaccesibilidad que perciben con respecto a los trabajadores sociales, a los que a veces no pueden llegar cuando los necesitan, contrasta con la cercanía que los gitanos perceptores de la RMI (y, en especial, las gitanas) descubren en los educadores sociales subcontratados por Servicios Sociales. Así, establecen con frecuencia una diferencia cualitativa entre ellos según el tipo de vínculo que suelen mantener con unos y con otros.

- J: Los trabajadores sociales se creen ministros. No es normal que, cuando quieres pedir cita, es peor que si fuera un ministro. Es de un mes para otro. Si hay hueco, con suerte a lo mejor antes. Y el tiempo que te atienden no es igual que cuando vas a ver a la educadora, que te tiras un rato hablando y se tira toda la mañana con nosotros. Los otros (los trabajadores sociales), en 10 minutos o 15 te despachan. Te rellenan un papel, ¡y hala! Y cualquier cosilla es: “Venga, firma aquí”, como en el IMI, ¡y hala! Y si necesitas algo, un papel o algo para los coles, vas a la educadora. Todo con Patricia.
- F: Tienen más carga de trabajo los trabajadores sociales
- A: ¿Para qué vais a ver a los trabajadores sociales?

¹⁶⁵ Patricia es una educadora social que puede ser calificada como militante. Muy crítica con la estructura de Servicios Sociales y con la propia empresa de intervención social para la que trabaja. Sostiene que no le importa desvelarse completamente delante de sus usuarios. No le gustan algunas actitudes de sus jefas directas dentro de los Servicios Sociales, y no duda en afirmar que éstas son racistas con los gitanos. Es una persona extremadamente reflexiva que, además de ser educadora social, está terminando una licenciatura en ciencias sociales.

F: A firmar lo de la RMI, y lo demás lo tratamos con Patricia. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

El escaso tiempo que los trabajadores sociales pueden dedicar a los demandantes/beneficiarios de la RMI es compensado con la atención que reciben por parte de esa otra figura profesional, los educadores sociales, nueva en el ámbito de los Servicios Sociales.

E: No fue: “Te voy a poner un educador”, sino: “Vas a tener un educador porque él va a tener más tiempo que yo, y así él te va llamando cada semana, tienes más días para verle a él”. Primero me lo explicó y luego me lo dijo.

A: ¿Y tú qué pensaste?

E: Pues, mejor para mí, porque así iba a tener más tiempo para hacer las cosas. (Entrevista a Ester, perceptora de la RMI de 30 años, divorciada, madre de un hijo, residente en piso de protección oficial).

Cabe señalar, incidentalmente, que los educadores sociales indican, en las entrevistas que les he hecho, que la dinámica de la RMI llega a contagiar su trabajo y que, a veces, les lleva meses convencer a los solicitantes/beneficiarios que no están obligados a participar en las actividades o eventos que les proponen y que el que acepten o rechacen hacerlo no tendrá consecuencia alguna en la prestación económica.

Las relaciones con la institución de Servicios Sociales, como estructura jerárquica, son conceptualizadas por parte de los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI como relaciones superficiales, mientras que las que han establecido con los educadores sociales son caracterizadas a partir de elementos que las denotan como vínculos densos, tales como la co-presencia, la posibilidad de intimar y compartir experiencias, la existencia de cierta horizontalidad, etc. De hecho, en su definición de las mismas aparecen referencias constantes a la accesibilidad, flexibilidad o disponibilidad de los educadores sociales, lo que –como se ha dicho– forma parte de un modelo de cuidado basado en la familiaridad y en la simetría como cualidades esenciales para establecer una relación de confianza previa a “ser cuidado”:

La llamo y la digo: “Patricia, me han llamado del instituto”, y ella se presta en seguida: “No te preocupes, yo mañana voy, te llamo y te digo”. Vamos, yo con Patricia en este aspecto sí: para lo que la he necesitado”. (Entrevista a Felisa, beneficiaria de la RMI, 34 años, madre de 6 hijos, residente en vivienda en altura.)

Así, la relación de carácter personal que establecen con el educador social, es decir, el hecho de que esa relación vaya más allá de “lo profesional”, hace que estos perceptores de la RMI duden de que se sintieran bien en caso de que se cambiase a la persona que desempeña dicho papel. Sin embargo, los trabajadores de las ONG y de las otras entidades que implementan proyectos de integración no son tan valorados como los educadores sociales (contratados, como se ha dicho, por los Servicios Sociales dependientes de las Juntas

Municipales). Y ello es así, desde mi punto de vista, porque estos trabajadores no terminan de desvincular sus prácticas de las que han constituido las señas de identidad de los trabajadores sociales de Servicios Sociales (como las referidas a su actitud “moralizadora”, que les recuerda constantemente a sus “asistidos” que no están haciendo lo que deberían).

Los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI manejan, por tanto, concepciones radicalmente opuestas de los trabajadores sociales y de los educadores sociales, que guardan relación con la división de funciones que unos y otros han ido adquiriendo en los Servicios Sociales y con la capacidad/posibilidad de los educadores sociales de plegarse a un modelo de cuidado centrado en ofrecer un trato cercano, cálido y empático, características que los gitanos identifican como centrales al desempeño de las profesiones que se ocupan del “ayudar”. Preocupados por “socializar a la población para que pueda acceder a la vida social de forma normalizada” (Julià, 2011: 11), despliegan actitudes que son valoradas de una manera positiva por los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI como, por ejemplo, la alta disponibilidad para escuchar y atenderles en cualquier momento, la capacidad de entrega, la simpatía y la actitud de preocuparse por sus destinos. En suma, los gitanos reconocen que estos educadores “se esfuerzan” y “se preocupan de verdad” por ellos¹⁶⁶.

Los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI que han tenido un trato prolongado con los Servicios Sociales hablan con indiferencia de “los trabajadores sociales de zona” (es decir, del centro de Servicios Sociales que les corresponde), a los que visitan trimestralmente para los seguimientos prescriptivos. Son los gitanos que los profesionales califican de “asiduos” de estos Servicios y sobre los cuales no albergan expectativas de que cambien. Y ellos hablan de los trabajadores sociales únicamente para referirse a los “papeles” y a los trámites que tienen que llevar a cabo, haciéndolo desde un marco discursivo que viene delimitado –como se ha insistido– por la desconfianza y la asimetría de poder.

Decir, por último, que es común que los gitanos sostengan que, mientras que los educadores sociales son efectivos y les solucionan rápidamente sus trámites, se requiere

¹⁶⁶ Hay que tener en cuenta a este respecto que las características del trabajo de los educadores sociales guardan relación, entre otras cosas, con la carga de trabajo que tienen, que es menor que la de los trabajadores sociales, tal como algunos gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI, como es el caso de Felisa, por ejemplo, también reconocen. Así, en términos propios de los profesionales, se puede decir que la “cartera de casos” de los primeros suele ser de una treintena de casos, en tanto que los segundos pueden llegar a responsabilizarse de más de trescientos expedientes familiares de la RMI. Además, los primeros realizan labores de acompañamiento social intensivo, en tanto que los segundos no sólo deben hacerse cargo del elevado volumen de expedientes mencionado (que implican reuniones bimestrales o trimestrales con los beneficiarios titulares de la prestación, aparte de con otros equipos profesionales del distrito que trabajan también con dichos beneficiarios), sino también –y paralelamente– de la gestión de otros recursos como, por ejemplo, los relativos a la tercera edad. Por otro lado, mientras que los educadores son contratados anualmente, y en ocasiones se les renueva el contrato según los resultados de los sondeos de opinión de los usuarios, los trabajadores sociales suelen contar (o solían contar hasta hace poco) con estabilidad laboral, que no depende (o dependía) de las valoraciones de los usuarios. De este modo, es más comprensible que sean los primeros quienes se esfuerzan por mostrar, entre otras cosas, una actitud de entrega a su trabajo y a los perceptores de las prestaciones sociales de las que se ocupan.

mucho tiempo de antelación para tener cita con un trabajador social. De este modo, quienes en su distrito tienen la opción de tener servicios de educación social, no dudan en recurrir a ellos para casi todo, como ocurre en el caso de Javier y Felisa, tal como ellos mismos relataban en el siguiente verbatim.

- A: ¿Entonces, tú no estabas muy convencida (de acudir a los servicios de la educadora social)?
F: No, a lo primero no
J: No sabíamos la función que tenía. Yo creía –como pensamos los gitanos ignorantes–: ¿y esta señora a qué va a venir aquí a enterarse de nuestras cosas?
F: A cotillear o algo.
J: Pero luego vi que es una labor.
F: Como un apoyo.
J: Y, de hecho, ahora lo veo fenomenal.
F: Sí, está muy bien.
J: Y ha arreglado muchos papeles que no teníamos arreglados.
F: Sí, porque muchas veces dices: “Tengo que ir a arreglar un papel donde la asistenta”, y te cuesta más que con una educadora. (Entrevista a Javier –36 años, ocupado en la venta ambulante– y a Felisa –34 años, beneficiaria de la RMI–, 6 hijos)

6.8 **Recapitulación**

Todos los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI entrevistados reconocen tener miedo (que varía en grados, pero siempre está presente en la sensación de malestar que experimentan ante la autoridad) a las posibles consecuencias de la interacción con los profesionales. Los de clase media-baja y clase baja dicen sentirse juzgados por la institución y temer que “les quiten la paga”. De hecho, en estos casos, la situación en que se encuentran de demanda de una prestación económica, junto con el hecho de que no disponen de medios para saber qué consecuencias se derivarán de la relación con los distintos profesionales, enturbia la posibilidad de que establezcan una relación simétrica con dichos profesionales. Ahora bien, hay que tener en cuenta también, como no se ha dejado de señalar en este capítulo, que estos solicitantes/beneficiarios de clase baja y media-baja no buscan establecer una relación de esta índole, sino que los profesionales muestren preocupación y calidez a la hora de acercarse a ellos.

Los solicitantes/beneficiarios de clase media hablan de sí mismos como personas con conocimiento y con poder de negociación con los trabajadores sociales y, en general, con las instituciones públicas. Aun así, si se lee entre líneas, se puede ver que equiparan su relación con los Servicios Sociales con la que suele establecerse con los organismos judiciales, que exigen siempre de los usuarios que demuestren “la verdad” de lo que alegan en sus demandas mediante la documentación oficial pertinente. Se refieren a sí mismos –como se ha dicho– como sujetos con capacidad de negociación y con suficiente conocimiento como para ir a los Servicios Sociales y demandar lo que consideran que son “sus derechos”. Aseguran asimismo

que saben cuándo pueden “reivindicar” esos derechos y qué es lo que ellos, de forma “responsable”, tienen dar a cambio. La retórica a la que recurren estos solicitantes/beneficiarios de la RMI varía con respecto a la utilizada por los de clase baja o los de media-baja, erigiéndose a través de ella en sujetos reflexivos que se ven a sí mismos, en tanto que individuos, como protagonistas de un proyecto de vida centrado en la formación y, si viniera al caso (ver más atrás las condiciones que ponen para ello), la futura inserción laboral. Por otro lado, conciben a los trabajadores sociales a partir de su “profesión”, considerándolos como gestores y administradores de la burocracia que se ocupa del reparto de los derechos sociales.

Hoy en día se insta a la población gitana, de acuerdo con las tendencias teóricas predominantes en el trabajo social, a responsabilizarse de su destino y a configurarse como sujetos autónomos que deben diseñar reflexivamente sus procesos de cambio personal. Sin embargo, con independencia de la clase social en la que se los inscriba, los gitanos no han interiorizado que, para obtener reconocimiento social o –recuperando la frase ya usada más atrás– “para ser alguien en la vida”, tengan que esforzarse o sacrificarse estoicamente en aras de una inserción laboral que, a efectos prácticos, les reportaría una pérdida económica –tal como se ha visto–, además de la imposibilidad de que las mujeres pudieran encargarse del cuidado de sus hijos y del mantenimiento del hogar. Su relación subjetiva con el trabajo les distancia de los profesionales que piensan que la única opción para lograr su integración social pasa indefectiblemente por la inserción laboral. Ello, unido a otros tres hechos correlacionados (que no participar en la economía formal no signifique, para los gitanos, “vergüenza” alguna o disminución de su estima personal, que la combinación de ingresos sea, para ellos, una estrategia legítima de captación de recursos económicos, y que el recibir una prestación económica del Estado no lo vivan como una suerte de estigma social), no deja de ocasionarles conflictos y tensiones con los distintos profesionales, a la vez que puede dar claves para entender los términos en que elaboran sus demandas de ayudas sociales.

La escasez de recursos ha convertido (y sigue convirtiendo, pues cada vez es mayor la desdotación económica de los Servicios Sociales) las demandas de ayuda en una especie de concurso moral, en el que las personas sienten que tienen que “venderse”, sea como el usuario más honorable o más sincero (el que “dice la verdad”), el que tiene una carencia (el que “tiene una necesidad”) o el más miserable (el que “más sufre”). En congruencia con ello, además de demostrarse que “se es pobre”, debe añadirse a ello –como se ha tratado también en este capítulo– que “se es un buen pobre”, es decir, que se realiza todo lo que se puede para mejorar la propia situación, que se hace con empeño y esfuerzo y, sobre todo, que “no se es un

parásito” del Estado. Todo lo cual ha pasado a formar parte del acervo cultural de los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI de clase media.

Cuando los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI no pueden mostrar que se encuentran en una situación de miseria (como en el caso de Javier y Felisa), la legitimidad de sus demandas provienen de la demostración de la “normalidad” de la conducta individual y familiar. Y si bien se quieren distinguir, al igual que otros solicitantes/ beneficiarios pertenecientes a las clases baja y media-baja, de los gitanos que “mienten” para conseguir ayudas, ellos lo hacen sobre base del desvelamiento de una trayectoria personal de “esfuerzo por superarse”, por conseguir ingresos y por acumular un cierto grado de conocimiento que les permita no caer dentro del saco de los que tildan de “gitanos ignorantes”. En cambio, como se ha visto en los casos de solicitantes/beneficiarios de clase baja y media-baja, uno de los cuales es el de Alma, la auto-representación como “ignorantes” y torpes puede entenderse como una táctica que se despliega en contacto con los profesionales y que sirve para esconderse de la exigencia de autonomía y responsabilización personal (en los términos de la ética del trabajo) que les proponen algunos profesionales. En estos casos, las demandas de ayuda se centran en “la necesidad” económica o en “el sufrimiento extremo” y en mostrar la indefensión en que se encuentran mediante el recurso a auto-representaciones inferiorizantes.

Finalmente, también se ha visto en este capítulo que los solicitantes/beneficiarios de la RMI de etnia gitana construyen un enemigo que condensa todas las cualidades negativas de las que ellos se quieren distanciar. Son “esos otros” que no merecen la RMI, que mienten y buscan aprovecharse del sistema de protección social. A la vez que se contraponen a “esos otros”, se identifican con algunas de las categorías que consideran que son legítimas para los profesionales con los que entran en contacto, como las de “madre soltera”, “mujer excluida”, “persona depresiva” o “ciudadanos normales”, con lo que van adoptando un lenguaje propio de los Servicios Sociales. No se pretende decir con ello que los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI sean estrategias que buscan aprovecharse de éstos o “engañar” a “sus” trabajadores sociales, sino dar sentido a las categorías que usan y a las tácticas que despliegan cuando tratan de dotarse de reconocimiento social ante ellos (incluso cuando recurren al aparente retruécano de restarse a sí mismo inferiorizándose) y ganar, de esta manera, su beneplácito. Se podría decir, a este respecto, que fenómenos como la auto-victimización o como categorizaciones de este tipo son, en cierto sentido, elementos inherentes al funcionamiento de los Servicios Sociales.

Capítulo 7: Las actividades educativas con gitanos en los grupos de la RMI

Las actividades educativas que se implementan con la población gitana beneficiaria de la RMI se concentran en dos temáticas principales: por un lado, la alfabetización, que no ha variado desde el comienzo de la intervención social con el colectivo gitano y, por otro lado, la educación para la salud, cuyos contenidos recuerdan a los clásicos de la puericultura como es el caso, por ejemplo, de la prevención de enfermedades transmisibles, los métodos de lactancia, la higiene del recién nacido, la atención y los cuidados a los niños enfermos, etc. (Boltanski, 1969; Boltanski, 1975; Ariès, 1973; Bourdieu, 1966; Pérez Soler, 1979, 1979a; De Montlibert, 1980; Alluè, 2000: 65), siendo común que se realicen “talleres” o “charlas” periódicas sobre los hábitos de vida saludables en los centros de salud de la Comunidad de Madrid próximos a los lugares donde están radicadas las entidades de iniciativa social a las que asisten los beneficiarios de la RMI. Hay que tener en cuenta, además, que esta última temática, esto es, la educación para la salud, se imparte dentro de la dinámica general de los grupos de alfabetización, de manera que se presenta como un “extra” o un complemento a la formación en lectoescritura que constituye el núcleo de los mismos.

El tema de la igualdad de género se trabaja, sin embargo, de manera transversal en esos grupos de alfabetización y, por tanto, en los proyectos de integración que son organizados y desarrollados por esas entidades de iniciativa social. El énfasis que se está poniendo en fomentar debates sobre este tópico, principalmente con mujeres gitanas, guarda relación con la construcción que, desde distintas instituciones académicas y profesionales, se ha llevado a cabo de estas mujeres como “motor de cambio” del colectivo gitano (Cardiel, 2007: 65-66; San Román, 2010 [1997]: 276-277; Grañeras, 2011; en prensa).

Pero sin la menor duda, han sido las mujeres gitanas, de una en una, en grupos o a través de sus propias organizaciones, las que han dado un empuje más firme para lograr una integración social y gitana simultáneamente, las que actualmente crean una dinámica de cambio desde dentro, desde lo que son y quieren ser, más transparente, más eficaz y más convincente (San Román, 2010: 277).

Se las piensa, de este modo, como más receptivas a los valores y conocimientos transmitidos por los profesionales y las instituciones sociales, además de como más abiertas al cambio (de los comportamientos concebidos como “atrasados”). Ello podría explicar, en parte, que con el sector del colectivo gitano con el que más se interviene sea el de las mujeres y que, por tanto, en la mayoría de los proyectos de integración, sean ellas las que participen. Hay que recordar aquí que, en el marco de la división del trabajo existente en las familias

gitanas, las mujeres se han especializado en establecer y mantener las relaciones con el mundo de los Servicios Sociales, lo cual puede estar contribuyendo, como asegura la asociación Presencia Gitana (1990), a “redefinir los roles que tradicionalmente se asignaban a determinados hombres” como representantes de esas familias ante la sociedad y las autoridades *payas*. Actualmente, son las mujeres gitanas las que se encargan del contacto con las instituciones y las ONG, continuándose de esta manera, como se ha dicho, con una división de los roles sexuales en el seno de los grupos domésticos gitanos “aunque con un importante cambio en sus contenidos” (Serrano y Arriba, 1998: 116).

7.1 La mujer gitana como terreno abonado para la intervención social

Frente a la representación social que, como se ha visto a través del análisis de los informes “técnicos” que se ha presentado en el capítulo cuarto, se construye del colectivo gitano como resistente al cambio, la imagen que se maneja de la mujer gitana enfatiza, por el contrario, su receptividad a ese mismo cambio, su deseo de mejora y su apertura al trabajo con los Servicios Sociales y con las entidades de iniciativa social. Esta visión de la gitana como “referente de cambio” o como “persona moderna” se ha difundido en diversas jornadas de formación promovidas por distintas instituciones públicas. En estas jornadas se suele alabar públicamente a las gitanas que se están formando profesionalmente, poniéndose como ejemplo del cambio del colectivo gitano a las mediadoras sociales, quienes a menudo figuran como ponentes invitadas para narrar su experiencia de inserción laboral.

Algunas mujeres gitanas mediadoras sociales exponen su visión sobre qué les ha supuesto el acceso al mundo laboral, y cómo por ello “no han dejado de ser mujeres”. Después de sus exposiciones, hay una ovación entre las asistentes, mayoritariamente gitanas y profesionales. (Registro de campo: observación en encuentro de formación organizado por varias ONG y el Ayuntamiento de Madrid, junio 2007)

En una reciente aportación al diario *El País* (28 de enero de 2011), la jefa del Área de Estudios e Investigación del IFIIE (Instituto de Formación, Investigación e Innovación Educativa), del Ministerio de Educación, sostiene que las mujeres y las niñas gitanas son el “motor de cambio” de su comunidad; y en el libro *Nosotras las Artemisa* (2008: 15), apoyado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, se argumenta que “las mujeres representan un claro referente en el cambio de la cultura gitana”. Una imagen parecida aparece en una guía de actuación con la juventud gitana de la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG) donde, después de señalarse la discriminación y el control en razón del género que sufren las jóvenes gitanas, se afirma que son éstas “las que más participan y las que están transformando su realidad” (Martínez Ten, Tuts y Pozo, 2003: 23); lo cual se atribuye a

causas como la “solidaridad de género” o el hecho de que las mujeres compartan “espacios de socialización”:

La mujer gitana es un motor de cambio en la comunidad gitana. Entre ellas existe un fuerte lazo de solidaridad por el género que les permite compartir espacios de socialización con otras mujeres fuera del espacio familiar. Las jóvenes están realizando un gran esfuerzo por “salir de casa”, avanzar y promocionarse, y pueden jugar un papel fundamental en cualquier proyecto de participación social (Martínez Ten, Tuts y Pozo, 2003: 23).

Es indudable el esfuerzo institucional desarrollado para difundir esta imagen de la mujer gitana. No obstante, no se analiza en ninguna de éstas u otras obras, por un lado, la relación que puede haber entre la presencia femenina en “los espacios de socialización” de las ONG (en aquellos que las mujeres comparten “fuera del espacio familiar”, como se dice en la anterior cita bibliográfica) con el uso de la RMI como instrumento para compeler a que acudan a ellos y, por otro, las consecuencias que esta “imposición de la intervención profesional” (Nogués, 2007) pueda estar ocasionando. Tampoco hay estudios, salvo el de Abajo y Carrasco (2004), que vayan más allá de la consideración de la identidad cultural como factor explicativo de los comportamientos de las mujeres gitanas, es decir, que tomen en consideración una gama más amplia de factores y las interrelaciones entre ellos a la hora de dar cuenta de los cambios experimentados por estas mujeres, tales como, por ejemplo, el género, la pertenencia étnica, la clase social, el contacto prolongado con las instituciones públicas o el lugar de residencia. De hecho, sólo he localizado un trabajo, en concreto una guía de la FSGG, donde se matiza que “son aquellas jóvenes con mayores oportunidades educativas, culturales y económicas las que tienen más oportunidades para elegir entre las diversas opciones vitales” (Martínez Ten, Tuts y Pozo, 2003: 12), a la vez que se recoge en él que, en la construcción de la identidad gitana, “influye fuertemente el origen familiar, el territorio o el lugar en el que se vive y el estatus social” (Martínez Ten, Tuts y Pozo, 2003: 22). Sin embargo, incluso en esta obra, el peso explicativo se termina poniendo en la identidad cultural de los gitanos.

La representación social de la mujer gitana como “motor del cambio” guarda relación, desde mi punto de vista, con la división de roles sexuales que actualmente se da en las familias gitanas beneficiarias de la RMI, en las que –como se viene diciendo– son los varones los que trabajan fuera de casa en el chatarreo u en otras actividades económicas, y las mujeres las que se encargan del contacto con las instituciones públicas que implica la demanda de la RMI y de otras ayudas sociales. Es más, las mujeres son los miembros de la unidad familiar a los que la RMI ha podido “captar”, convirtiéndose en el público mayoritario de la intervención social vinculada a esta política social, debido a que ellas suelen ser las titulares

de la misma y sólo a quienes figuran como tales se les puede “obligar” a firmar el PII y a participar en las actividades que se establezcan de cara a la inserción social. Por tanto, se puede decir que las políticas sociales están fabricando “públicos cautivos” para los distintos dispositivos orientados a dicha inserción (Sassier, 2004: 100), como es el caso, que se acaba de mencionar, de las mujeres gitanas beneficiarias de la RMI. No es casualidad, de este modo, que los Servicios Sociales hayan promovido discursos positivos sobre ellas coincidiendo, además, con el hecho de que sus profesionales manejen la idea de que “es muy difícil trabajar con los hombres”.

Camino con una educadora social por Santa Catalina mientras conversamos. Le pregunto por qué piensa que hay tantos grupos que trabajan con mujeres gitanas y tan pocos con hombres. Me responde algo así como que ella se ha estado preguntando lo mismo, y que cree que es porque las mujeres son más fáciles de captar al ser las que están en contacto con las instituciones y en el ámbito doméstico, por lo que pueden acceder a ellas si realizan visitas para solucionar cualquier papeleo, mientras que los hombres se encuentran chararreando o realizando actividades fuera de casa (Registro de campo: observación en el poblado chabolista de Santa Catalina, septiembre 2008).

Todo acontece como si la intervención social enalteciera, piropeándolas como “modernas”, “abiertas” y palancas del cambio, a la única parte del colectivo gitano a la que ha tenido y tiene acceso. Ello se ve reforzado por el establecimiento, desde diferentes políticas de inclusión social, de las mujeres gitanas como grupo prioritario de la intervención social. Las mujeres son consideradas como un colectivo especialmente afectado por los procesos de empobrecimiento (Martínez Román, 2001: 74), por lo que intervenir con ellas se vuelve una cuestión prioritaria. Por otro lado, se puede sostener como hipótesis que la imagen de la mujer gitana como “agente de cambio” está sirviendo a las instituciones públicas y a las ONG como un elemento a partir del cual, por un lado, trabajar con las mujeres “de puertas para afuera” (sobre todo en actos públicos organizados por las asociaciones gitanas y por las administraciones públicas, en los que se trata de transmitir una idea positiva sobre el colectivo gitano como alineado con la corriente general de “la modernidad”) y, por otro lado, introducir una intensa labor de concienciación sobre la desigualdad de género “de puertas para adentro” (como sucede con frecuencia en los cursos de alfabetización), que se orienta a transformar unas relaciones entre hombres y mujeres que se perciben como desiguales. Ello, sin embargo, acaba por introducir un elemento desestabilizador, antes que nada, en la pareja gitana y, por extensión, en el colectivo gitano, dado que la mayor parte de los proyectos de integración (con sus correspondientes cursos de alfabetización) y de las jornadas de formación vinculadas a la RMI se orientan a las mujeres y, por otro lado, en estos espacios socio-formativos es común, como se acaba de decir, que se trabajen dichas cuestiones relacionadas con la desigualdad de

género, por lo que está recayendo sobre ellas la acción más intensiva dirigida a crear conciencia sobre esa desigualdad.

Sara, perceptora de la RMI de clase media-baja de 23 años, de la que ya se ha hablado en el anterior capítulo, es un ejemplo de la desazón que lo que cabe llamar “un exceso de conciencia” sobre la desigualdad de género puede ocasionar en algunas mujeres gitanas que no tienen las condiciones socio-económicas para emprender cambios vitales coherentes con un discurso de emancipación. Se siente profundamente molesta por tener que cuidar sola de su hija durante gran parte del día mientras su marido chararra, a la par que piensa que él no le puede dar lo que ella necesita: a nivel económico, porque no consigue suficiente dinero para alquilar un piso y, a nivel emocional, porque no la cuida a ella como cree que debería hacerlo ni le dedica a su hija el tiempo que estima necesario. Sara considera que su marido podría hacer más por “colaborar en casa”, y esta conciencia de desigualdad, junto con la situación en la que vive (escasez económica, soledad, imposibilidad de moverse por sí sola para visitar a su familia al no tener cerca transporte público, etc.), hacen que únicamente visualice como opción para mejorar su situación vital la ayuda “externa” de las instituciones sociales.

La sobrerrepresentación de las mujeres en los dispositivos asistenciales del Estado ha sido tratada por autores como Murard (2003: 209). Parafraseándole, se podría decir que mientras el Estado Social es “feminista”, la parte penal se encuentra básicamente habitada por los hombres. En el caso que nos ocupa, el trabajo de intervención social (principalmente socio-educativo y asistencial) que la Administración Pública y las ONG realizan con las mujeres gitanas se halla sobredimensionado con respecto al realizado con los varones debido, desde mi punto de vista, a la incapacidad de estas entidades de relacionarse con estos últimos. De hecho, los espacios socio-educativos relacionados con la RMI se presentan como una prolongación del espacio doméstico dado que están feminizados, habitados únicamente por mujeres, de manera que los varones gitanos no los consideran como lugares de participación en la vida pública, sino más bien como sitios donde sus mujeres pasan unas horas al día que no tendrán consecuencia alguna en sus vidas. Los gitanos beneficiarios de clase baja y media-baja entienden su participación, por tanto, como un peaje que han de pagar por recibir la RMI, mientras que los profesionales la consideran como un paso “previo” a la verdadera integración, puesto que asumen como una evidencia (por tanto, como algo de lo que se parte, pero que no se somete a interrogación) que las mujeres viven en un sistema patriarcal donde prima una “ideología machista traumática” (San Román, 1997: 87-88) favorecida por su excesiva dependencia con respecto a los hombres gitanos, por su falta de formación y por su dedicación exclusiva a los cuidados domésticos. Por ello, estiman que cualquier espacio fuera

de esa unidad familiar servirá para socializar a las mujeres en valores e ideas diferentes. Así, los grupos de alfabetización dirigidos a gitanas beneficiarias de la RMI se encuentran plagados de charlas y talleres que a menudo se orientan a promover debates sobre la desigualdad de género, o se invita, por ejemplo, a agentes de igualdad del Ayuntamiento a hablar de estas cuestiones, haciéndose hincapié también en ellas en las distintas jornadas a las que asisten estas mujeres varias veces al año.

De este modo, a nivel público, se dibuja a las mujeres como agentes de cambio social (con poderío y capacidad de transformación) pero, a nivel privado, los profesionales las conciben como la “parte débil” u oprimida del colectivo gitano, construyéndose estampas contradictorias –en cierto sentido “bipolares”– de ellas. Esta combinación de ideas contrapuestas sobre las mujeres gitanas se encuentra asimismo en algunos textos académicos:

No es un azar que las mujeres que tienen a su cargo la mayoría de las tareas domésticas y que se ven afectadas por las consecuencias de la discriminación en razón de su género se vean limitadas en sus derechos y en su intervención colectiva (OIT, 1995). Pero al mismo tiempo, en muchos países del Sur, se constata que en muchos proyectos, las mujeres son el principal sujeto de dinamización (Estivill, 2003: 113).

El Observatorio de la Exclusión Social (2009) hace referencia a lo llama “la receptividad” de las gitanas, asociándola al rol como “transmisoras de valores” que las mujeres desempeñan en la unidad familiar; visión que coincide con la que mantienen algunas entidades de iniciativa social:

En determinados grupos, la mujer constituye una oportunidad de cambio para todo el conjunto de la comunidad (por ejemplo en la etnia gitana) por ser más receptiva a entrar en procesos de formación básica y ocupacional y por ser transmisora de nuevos “saberes” y valores sociales en la institución de la familia (Ayuntamiento de Madrid, CASM, Barró y Fanal, 2008: 15)

Las mujeres que participan en los proyectos de integración suelen sostener, delante de las profesionales, que realizan las actividades de cuidado del hogar y de educación de los hijos porque así se ha hecho siempre y, porque en caso de querer cambiarlo, tendrían muchos problemas con sus maridos y/o compañeros. No tienen reparo en decir que a ellas les gusta cuidar de sus hijos, ni en distinguirse orgullosamente así de las mujeres *payas*. Las asociaciones e instituciones públicas que trabajan con gitanas perceptoras de la RMI tienden a alabar las capacidades de éstas como madres y educadoras cuando la valoración adquiere una cierta proyección pública al hacerse en distintos foros y en –las ya mencionadas– jornadas formativas. En cambio, de puertas para adentro, las profesionales de esas asociaciones e instituciones critican que las mujeres se concentren en el cuidado doméstico puesto que, según sostienen, ello las encasilla en su rol de género tradicional. En todo caso, como se viene remarcando, las mujeres gitanas son construidas en positivo, configurándose como el reverso

de la construcción de que son objeto los varones gitanos: como machistas, inaccesibles, atrasados y resistentes al cambio.

En la práctica, las mujeres gitanas beneficiarias de la RMI están siendo objeto de un intensivo proceso educativo de carácter resocializador. En los cursos de alfabetización donde se ha realizado observación participante, es común que se regañe a estas mujeres, con tono paternalista, por desarrollar el rol, mencionado más arriba, que lleva a pensarlas como “cuidadoras sumisas a los mandatos de sus maridos”, a la vez que se enfatiza la importancia de su labor como educadoras y transmisoras de valores, lo que las sitúa como responsables del devenir que tome la vida de sus hijos. Así si, por un lado, se las insta a desarrollar una conciencia emancipadora con respecto a ese rol de género que se les atribuye, por otro lado, al concebírselas como referentes para los niños, se despliega con respecto a ellas un aparato de intervención socio-educativa que incide en el abordaje de temáticas relacionadas con la puericultura y la crianza infantil. Por tanto, puede plantearse la duda acerca de si el discurso que producen las diversas organizaciones, y las temáticas sobre las que pivotan las actividades que ofertan a los beneficiarios de la RMI, no están reproduciendo, a nivel práctico, una división de los roles de género que perpetúa una visión de la mujer gitana como cuidadora y educadora, obstaculizando así una verdadera transformación de esos roles¹⁶⁷. Ello conlleva, además, el peligro de que las mujeres sean culpabilizadas en caso de no conseguir que sus hijos se comporten del modo que, desde una perspectiva externa, se considera correcto, es decir, que se las acuse de “falta de responsabilidad” y de no cumplir adecuadamente su función maternal como transmisora de valores.

En cuanto a las imágenes ambivalentes sobre las mujeres gitanas, Neyrand (2004: 6) pone sobre la mesa las contradicciones que, en nuestra época, se dan con relación a la emancipación de la mujer y a las imágenes que se ofrece sobre la igualdad de género. Afirma que, en las sociedades contemporáneas, a la vez democráticas y liberales, el afianzamiento de las teorías feministas (Cova, 1999; Thébaud, 2001) y la emancipación de las mujeres de las restricciones que impedían la plena consecución de su autonomía participan de un movimiento que ha supuesto el desarrollo histórico de dos tendencias contradictorias que se remontan al comienzo del siglo de las luces. La primera es la tendencia hacia la afirmación de un espacio privado, el doméstico, que se constituye como tal con la industrialización y la

¹⁶⁷ En tanto que, como se verá después, los cursos organizados para hombres gitanos suelen enfocarse a otros temas como, por ejemplo, el autocontrol de las emociones. No habiendo realizado trabajo de campo en grupos de hombres gitanos perceptores de la RMI tan exhaustivamente como en grupos de mujeres (de hecho, sólo en dos de ellos), sí quiero mencionar, no obstante, que esta selección de las temáticas a tratar con los grupos de hombres parece estar vinculada con la imagen del gitano rudo, pasional e irracional que no sabe controlar su genio ni sus emociones.

diferenciación de roles familiares y profesionales que trae consigo la incorporación de los varones al trabajo asalariado. La constitución de este espacio privado ha estado acompañada, en los siglos XVIII y XIX, de la emergencia de la burguesía y, en este contexto social, de representaciones sociales elaboradas por médicos, higienistas y filántropos en función de las cuales se recluía a las mujeres en tareas relacionadas con el cuidado de los niños y el mantenimiento de la casa; tareas que pasaron a convertirse en una suerte de especialidad femenina, a la vez que se consolidaba lo público y lo profesional como propios del hombre-padre. Según Neyrand, esta asignación de tareas ha sido tal que ha conllevado la estigmatización (como soltera, como prostituta o como monja) de las mujeres que se han apartado de ellas. Es, por tanto, dentro del hogar donde se ha ido conformando la subjetividad femenina, esto es, en el marco de la crianza de los niños, de la gestión de las relaciones familiares, del cuidado de los cuerpos y de los corazones¹⁶⁸ (Neyrand, 2004: 2-3). La segunda tendencia apuntada más arriba se refiere al ideal democrático, individualista e igualitario que promovió la filosofía de las luces, y que entrañó el surgimiento de una concepción política de la vida social diferente a la existente hasta entonces, pues la figura del ciudadano autónomo, libre y situado en condición de igualdad con respecto a los demás se erigió en el núcleo de la sociedad. Así, durante este periodo histórico, se producen las condiciones que impulsan un desplazamiento de las imágenes sobre la sociedad, puesto que se pasa de una concepción de la familia como “célula base” de ésta, en la que cada uno ocupa un lugar específico en buena medida en función de su sexo, al desarrollo de una *sociedad de los individuos* (Elias, 1991, en Neyrand, 2004), en la que se presupone la igualdad de todos sus integrantes más allá de las diferencias y, en particular, más allá de la diferencia sexual.

En congruencia con estas ideas, encontramos que en los espacios socio-educativos promovidos a través de los programas de la RMI se están ofreciendo – tal como se ha apuntado más arriba– representaciones sociales contradictorias de la mujer gitana. Así, por un lado, se la vincula con su rol doméstico-maternal pero, por otro, se la equipara al resto de individuos que conforman la sociedad cuando se la presiona cotidianamente para que se configure como un sujeto autónomo con capacidad de transformación. Entonces: ¿las actividades y los discursos que se están generando desde los espacios socio-educativos antes mencionados están permitiendo una concepción de las mujeres gitanas que las sitúe fuera del espacio doméstico? Y de ser así, ¿en qué términos se las conceptúa y qué consecuencias tiene esta concepción para las beneficiarias de la RMI?

¹⁶⁸ Traducción propia.

La fórmula que distintas organizaciones que trabajan en el ámbito de la RMI están utilizando para tratar el papel de las mujeres gitanas en el espacio público consiste en reconocer, en espacios también públicos (es decir, a través de eventos como las jornadas y los actos festivo-culturales que, como se ha dicho, organizan para ello), su valía como educadoras y transmisoras de valores. Es común que, durante estos eventos, los profesionales den comienzo al abordaje del tema de las relaciones de género valorando de una manera positiva el rol “tradicional” que estas mujeres desempeñan, lo que es congruente con su idea de que se trata de un tema difícil de trabajar con ellas, por lo que intentan con este rodeo un acercamiento no conflictivo al mismo. Una vez que las halagan en estos términos, organizan debates y charlas que, mediante el cuestionamiento –implícito o explícito– de los valores que estas mujeres han incorporado en su desempeño, precisamente, de ese “rol tradicional”, buscan resocializarlas en valores de género más igualitarios y, a la vez, inciden en la capacidad que tienen para, en caso de adquirir la formación necesaria, insertarse en el mercado laboral (más adelante se verá que en estas jornadas se presenta públicamente a mujeres gitanas que ya están trabajando). Y se enfatiza a menudo en estas sesiones, como se ha señalado en el capítulo tercero, la importancia que tiene el hecho de que las mujeres consigan ser autónomas como condición para poder emprender procesos de cambio personal, lo que los profesionales consideran imprescindible para que se reconozcan como sujetos de nuevos derechos, entre ellos, el derecho a la igualdad de género.

7.2 La resocialización de la mujer gitana en los cursos de alfabetización la RMI. Los contenidos más frecuentes

Serrano y Arriba (1998) refieren, con respecto a las actividades educativas llevadas a cabo en el periodo en el que se aplicó el IMI, que el proyecto de resocialización de las mujeres gitanas era parte de la intervención que se estaba desplegando con ellas:

El trabajo social se orienta, con frecuencia, a la producción de un cambio de valores en relación con los roles sexuales, la formación de las mujeres o la distribución de las responsabilidades domésticas (Serrano y Arriba, 1998: 117).

En cuanto a los espacios socioeducativos vinculados a la RMI, los profesionales consideran que en ellos, ante todo, se ha de perseguir la adquisición de habilidades básicas para moverse en la sociedad mayoritaria, así como de un saber-estar y un sabe-hacer mínimos para que alguien pueda desarrollarse como sujeto autónomo: realización de gestiones burocráticas, prácticas saludables que se tienen que llevar a cabo con los niños (vacunación, control sanitario de los menores, alimentación equilibrada, etc.) o con los adultos (planificación familiar, por ejemplo)... y, sobre todo, toma de conciencia de la desigualdad de

género como paso previo al cambio de roles en la familia. A este respecto, los profesionales llevan a cabo sus intervenciones dando por sentada la existencia de una suerte de cadena de transmisión de saberes que irían de los profesionales a las mujeres gitanas, y de éstas a sus hijos, como si lo que ellas escuchan o aprenden lo fuesen a transferir a éstos de una forma casi automática.

Por otra parte, las actividades a las que se invita a participar a las beneficiarias de la RMI están organizadas alrededor de bloques temáticos que no han cambiado desde principios de los años 90. Como consecuencia, algunas de las mujeres gitanas entrevistadas, que reciben la prestación desde hace bastante tiempo, dicen estar cansadas de acudir a charlas que vuelven una y otra vez sobre los mismos temas; y algunos profesionales no dejan de confesar que, debido a ello, estas mujeres “llega un momento en que ya prácticamente saben todo”:

Con las mujeres gitanas se lleva unos seis años, prácticamente desde el principio que se puso en marcha el IMI. Están acudiendo aquí a las charlas que las imparten las educadoras sobre alimentación, higiene, cuidado de los niños, planificación familiar, y está teniendo bastante éxito. Ellas están bastante contentas, lo que pasa es que ya llega un momento en que prácticamente saben todo. Date cuenta que hay mucha gente que lleva en el IMI desde el principio (Entrevista a trabajadora social de Servicios Sociales, en Serrano y Arriba, 1998: 115).

Se trabaja a veces, dentro de estas actividades, el “uso normalizado” de las instituciones públicas, como es el caso de la sanidad, por ejemplo, con charlas donde se explican las normas y ritmos de éstas y en las que se hace hincapié en cuestiones que se perciben como delicadas, como el “uso excesivo” de las urgencias por parte del colectivo gitano o los conflictos derivados de la presencia de la familia extensa en los hospitales cuando un gitano cae enfermo. Sin embargo, los temas que se abordan con mayor frecuencia tienen que ver, como se ha subrayado, con la igualdad de género. Uno de los más tratados es el que se refiere a la precocidad de los matrimonios gitanos, sobre el que, durante el trabajo de campo, he recogido puntos de vista muy diversos entre las mujeres. Todas reconocen que las gitanas “se escapan” muy jóvenes para evitar la influencia familiar en la elección de su pareja puesto que, como es sabido, cuando una de estas jóvenes comunica a sus familiares que ha mantenido relaciones sexuales con el hombre con el que “se ha escapado”, la familia se ve obligada a aceptarlo y a facilitar la unión de la pareja. Consideran que esta costumbre, ampliamente extendida en el colectivo, es una manera legítima de elegir a un compañero sexual y ahorrarse, al mismo tiempo, el coste de una boda gitana. Se trata de un posicionamiento que, sin embargo, se convierte a veces en el eje de acalorados debates con las profesionales que trabajan con estas mujeres; unos debates que suelen plantearse en términos culturalistas, es decir, como una oposición entre “costumbres gitanas y *payas*”. Es más, como las profesionales juzgan desde esta perspectiva la precocidad de las alianzas matrimoniales de

las jóvenes gitanas, una reacción habitual de las mujeres es la de defenderse acudiendo a los mismos parámetros, es decir, enarbolando el valor de “la costumbre” o “la cultura gitana” como principal, cuando no único, argumento. En estos casos, la “cultura gitana” y, en general, “la cultura” se identifica con costumbres, creencias y tradiciones colectivas en cierto sentido ritualizadas, obviándose que es algo más que reglas y diferencias, y que puede ser más fértil considerarla, por ejemplo, como el juego que permite subvertir lo reglado que se produce cuando los individuos se interrelacionan en la vida social (Díaz de Rada, 2010: 24, 32, en Díaz Viana, 2011: 381). Por otra parte, las profesionales critican la “costumbre” de la que estamos hablando debido a las consecuencias que, desde su punto de vista, conlleva para las jóvenes gitanas y tratan de convencer a las madres, esto es, a las beneficiarias de la RMI con las que están interviniendo, de la necesidad de que ofrezcan a sus hijas “una oportunidad mejor”, de darles libertad para no tener que “escaparse”, de no abocarlas a una práctica que agravaría la desigualdad de género.

Estos intentos de las profesionales de la intervención social de promover un cambio de conciencia y de identidad en la mujer gitana a través de la transmisión de valores menos sexistas se están convirtiendo, sin embargo, en contextos propicios para una moralización que se escuda en un lenguaje culturalista y para la construcción de un discurso profesional sobre “el cambio esperado de la mujer gitana” que no admite fisuras. El énfasis en lo cultural como variable explicativa principal, cuando no única, de los comportamientos del colectivo gitano, a la vez que el manejo de una concepción de la cultura que la presenta con una camisa de fuerza que constriñe los comportamientos de los sujetos, obstaculizan la producción de análisis complejos por parte de las profesionales que posibilitaran descubrir, por ejemplo, qué características tendrían que tener las charlas y debates que se organizan, y en qué circunstancias se tendrían que producir, para que pudieran tener unos efectos sobre las beneficiarias de la RMI (generalmente de clase baja y media-baja) que fueran más allá del fortalecimiento de sus estrategias de defensa. Así, no se tienen en cuenta, por ejemplo, los diferentes niveles socioeconómicos o las distintas condiciones de vida de las mujeres, manejándose imágenes unificadoras y armónicas del colectivo gitano y, en particular, de las mujeres gitanas que acaban presentándolas como un todo homogéneo (Cantón y Gil, 2011: 83).

No obstante, una mirada cuidadosa permite descubrir la existencia de una gran diversidad interna en los grupos de mujeres gitanas que participan en las actividades de las que estamos hablando. Así, aunque la opinión sobre la discriminación de género que afecta a éstas es bastante homogénea entre las profesionales, puesto que asumen, sin más

cuestionamiento, que están dominadas por sus obligaciones con el marido, los hijos y la suegra, he podido apreciar, en los grupos de mujeres gitanas en los que he realizado observación participante, que éstas responden a diferentes posiciones de género. Ello se plasma, por ejemplo, en que unas mujeres reconozcan haberse casado demasiado pronto y afirmen que, de ser posible volver al pasado, no lo harían de la misma manera; en que otras apoyen a sus hijas casadas, que tienen entre 14 y 18 años, a que sigan en “el instituto”, descargándolas de las labores domésticas y del cuidado de sus hijos mientras estudian; o en que otras sostengan que, a pesar de que han tratado de convencer a sus hijas de que no repitan sus errores, ellas “se han escapado” siendo muy jóvenes. Se puede plantear aquí, como ya lo han hecho algunas autoras que han estudiado la manera en que se trabaja la diversidad cultural en la escuela (Vásquez y Martínez, 1996; Bertely, 2000, 2000a; Jociles, 2006), que ciertas formas de intervención socio-educativa que adoptan rasgos de lo escolar (como es el caso de “los cursos” dirigidos a beneficiarios de la RMI) parten de la presunción de homogeneidad cultural por parte de los alumnos como condición *sine qua non*, puesto que la aplicación sin estridencias de los formatos y de las herramientas de intervención socioeducativa que se tienen (enseñanza centralizada, uso de libros de texto, realización de actividades iguales por los alumnos, desarrollo del mismo ritmo de aprendizaje, etc.) depende precisamente de esa presunción de homogeneidad. Se puede sugerir, por tanto, que aunque la diversidad de modos de hacer, pensar y sentir de las mujeres gitanas pueda emerger en estos espacios educativos ligados a la RMI, las profesionales que imparten “los cursillos” no están predispuestas a percibirla ni pueden, por tanto, dar cuenta de ella. De este modo, cuando las mujeres hacen comentarios que, desde la posición externa de una investigadora, están ejemplificando puntos de vista y experiencias distintas con respecto a las cuestiones que las profesionales están trabajando, éstas no sólo no recogen dichos comentarios espontáneos como ejemplos de la diversidad interna existente dentro del colectivo gitano, sino que remiten a “la cultura gitana” como paraguas condensador y, por tanto, unificador de toda esa diversidad.

Un aspecto de “la cultura gitana” a menudo criticado por las profesionales que participan en los mencionados cursos y/o charlas pero que no es cuestionado, por el contrario, por las mujeres gitanas es el relativo a la “ceremonia del pañuelo”. Aunque se reconozca que el colectivo gitano, al menos en España, ha cambiado mucho en cuanto a la edad media en que se celebra el matrimonio y a la forma de establecer la relación de pareja (escaparse, boda, “juntarse”, etc.), tanto estas últimas como las primeras se radicalizan al debatir este tema desde un enfoque “cultural”. Cuando las profesionales afirman que determinadas “costumbres” perjudican a las mujeres gitanas, éstas responden diciendo que *las payas* no

pueden entender los ritos gitanos, es decir, utilizan la cultura como una barrera, como una instancia que las dota de un conocimiento que las *payas* no pueden tener. Las profesionales aseguran, adoptando actitudes maternalistas, que están preocupadas por los efectos de la discriminación de género sobre las mujeres gitanas, pero sobre todo sobre las hijas, acerca de las cuales opinan que están “repitiendo los mismos pasos” que sus madres. Así, no dudan en relacionar los matrimonios precoces con el abandono escolar y con la experiencia temprana de la discriminación de género, sosteniendo que el matrimonio precoz recluye a las jóvenes en el ámbito doméstico y frena, por tanto, sus potencialidades de educación y mejora personal.

Si tratamos de ir más allá de las auto-representaciones culturalistas que asumen las gitanas, encontramos que las beneficiarias de la RMI tienen experiencias y expresan puntos de vista muy diversos acerca de las cuestiones de género. Aunque casi todas reconocen asumir el trabajo reproductivo en el seno de la familia (compra, limpieza, cocina, cuidado de los hijos), hay temas sobre los que no están de acuerdo como, por ejemplo, la edad a las que les gustaría que se casasen sus hijas, el tipo de formación que deberían recibir éstas y el tiempo que tendrían que estar en contacto con la escuela, el uso de las nuevas tecnologías por parte de las jóvenes y su relación con el cambio de valores de género (cuestión que suelen abordar cuando hablan de las “fugas” o “escapadas” con novios de su elección), la inserción laboral de la mujer gitana, etc. En un taller sobre género que impartió en noviembre de 2007 una agente de igualdad del Ayuntamiento de Madrid durante un curso de alfabetización impartido en una ONG de la zona sur de Madrid, tuve la oportunidad de observar que, cuando el debate sobre los roles de género se plantea desde las experiencias vividas por las mujeres gitanas, se produce una gran riqueza de discursos. La agente de igualdad comenzó el taller preguntando a las mujeres qué consideraban que les había aportado la edad y la madurez. Todas ellas, residentes en el barrio madrileño de Usera (en donde vivían en pisos en altura desde hacía casi una década), relativamente jóvenes (entre 25 y 35 años) y con alto nivel lecto-escritor, manifestaron estar preocupadas por el efecto que el uso de las nuevas tecnologías y, en particular, de los teléfonos móviles estaba teniendo en sus hijas adolescentes. Sin embargo, no había acuerdo en cuál era la edad “ideal” para que sus hijas se casaran, ni en la importancia que había que dar a que terminasen o no la ESO; de hecho, algunas de ellas estaban preocupadas por la mala influencia que las compañeras *payas* del instituto de secundaria podían tener sobre sus hijas, a pesar de lo cual eran partidarias de que continuaran en él.

Una de las mujeres, una madre de unos 35 años, sostuvo que está apoyando a su hija a que siga escolarizada aun a sabiendas de que “lo que hay en el instituto es mucho puterío y follero.” (Registro de campo: observación en un curso de la RMI organizado en una ONG, proyecto 5, zona sur de Madrid, noviembre 2008).

La agente de igualdad también les preguntó qué cambios percibían entre las vidas de sus madres y las de ellas, y fue recogiendo la síntesis de sus comentarios en una pizarra. Al final de la sesión les mostró, a partir de lo que habían dicho y de las diferencias entre sus discursos, cómo estaban todas inmersas en un proceso de cambio con respecto a las vidas de sus madres. Ello pone de manifiesto que cuando se plantean los debates fuera de un marco culturalista, la diversidad interna existente en los grupos de mujeres gitanas tiene la oportunidad de revelarse. Por el contrario, en debates en que se pone a las mujeres en la posición de tener que defenderse de las críticas de las profesionales a lo que, en la práctica, es tratado por éstas como un atraso cultural, “lo gitano” surge como parapeto tras el que escudarse y “su cultura” como emblema que hay que salvaguardar, por lo que caen en las mismas dicotomías irreductibles en las que las profesionales incurren cuando comienzan este tipo de debates.

Hay que destacar que si bien el tema de la igualdad de género es un contenido relevante y transversal a muchas de las actividades vinculadas con los grupos de alfabetización que se desarrollan en los PII, las reacciones de las mujeres gitanas son muy diferentes en unos grupos y otros dependiendo de factores como, por ejemplo, la edad y la posición socio-económica. Así, los debates que presencié entre las mujeres gitanas jóvenes del barrio de Usera antes mencionadas, todas las cuales actuaban según valores de clase media, no tuvieron nada que ver con aquellos otros que, también durante el trabajo de campo que realicé en los cursos de alfabetización ligados a la RMI, surgieron dentro de los grupos de mujeres gitanas de clase baja del poblado chabolista La Jungla. Para estas últimas, residentes en chabolas y con pocas expectativas de ascenso social a través de la formación (en concreto, de la ofrecida desde la RMI, única en la que participaban), el tema de las relaciones de género suscitó principalmente gestos de aburrimiento así como movimientos corporales, expresiones faciales, resoplidos, etc. que comunicaban que tenían que escuchar el tema por obligación. Las gitanas de clase media-baja y de clase media no tienen problema en hablar (ni siquiera en debatir públicamente acerca) de sus situaciones personales, de sus aspiraciones y de sus deseos de cambio. Ahora bien, mientras que no se sienten molestas, por lo general, por los comentarios que sobre ello les hacen, habitualmente con un tono “maternal”, las profesionales de las ONG que trabajan con ellas, cuando se trata de profesionales “externas”, más propensas a analizar abierta y crudamente ideas sobre la discriminación de género a partir de teorías feministas, no es infrecuente que sean poco receptivas a este tipo de análisis y respondan a ellos mediante argumentaciones que se escudan en la legitimidad de “sus costumbres”.

La autoestima y el cuidado de los niños también son temas que forman parte frecuentemente de los cursos y las charlas orientados a las mujeres gitanas beneficiarias de la RMI. En cuanto a la autoestima, es común que las profesionales se centren en que han de dedicar un tiempo para cuidarse, en que tienen que darle importancia a “sus necesidades”, en que pueden hacer cosas fuera de su rol como cuidadoras. Así, tratan de concienciarlas de que son sujetos individuales que han de “hacer algo para sí mismas”. El cuidado de los niños ocupa también jornadas específicas dentro de estos cursos y charlas, siendo el tema de los límites en la educación los que suelen centrar los debates; unos debates que producen, por lo común, pocos conflictos si son las propias profesoras de los cursos de alfabetización quienes los propician, pero si son planteados por profesionales “externas”, a menudo son vividos, también en este caso, como intromisiones en su intimidad llevadas a cabo por mujeres *payas* a quienes no reconocen autoridad sobre estos temas, sobre todo si son jóvenes y sin hijos.

Estefanía, una de las profesoras (de la fundación donde hago trabajo de campo), me cuenta que en el día anterior, que se dedicó a trabajar cuestiones de igualdad de género a través de la asistencia a unas jornadas organizadas por agentes de igualdad del Ayuntamiento, las mujeres reaccionaron muy mal, porque se tomaron lo que allí se dijo como críticas directas a su forma de vida. Añade que ellas sí pueden conversar con las mujeres sobre estos temas, porque tienen ya una “relación de cercanía”, lo cual hace que no se sientan insultadas. (Registro de campo: conversación con profesora contratada en una fundación que trabaja con mujeres gitanas, proyecto 5, zona sur Madrid, marzo 2008).

Algunas mujeres gitanas tienen la sensación de estar siendo constantemente juzgadas por parte de los profesionales de las instituciones públicas. Protestan, se defienden de ello (eso sí, también en términos culturalistas) y dicen “cuidar de sus hijos mejor que las *payas*”, lo que argumentan aduciendo, por ejemplo, que no se ven en los medios de comunicación casos de gitanas que maltraten o asesinen a sus hijos. En una visita a una fundación del sur de Madrid, a la que fui en mayo 2008 como etnógrafa contratada por el Instituto de Salud Pública de la CM para estudiar las “pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña” (como introduje en la p.1), fui recriminada por una beneficiaria de la RMI, de unos 40 años, pastora evangélica, después de haberle expuesto, en una conversación que tuvo lugar en un curso de alfabetización en el que introduje en qué consistían las áreas temáticas que se iban a abordar en ese estudio: higiene, cuidado infantil, consumo de sustancias adictivas, etc.). La mujer me increpó diciéndome que estaba harta de tanta investigación “estúpida que no servía para nada”, añadiendo que lo que verdaderamente necesitaban los gitanos era que el gobierno les ayudase a encontrar trabajo, puesta que la discriminación racista que sufrían estaba obstaculizando que las mujeres gitanas (entre ellas, algunas de las allí presentes) pudiesen, a pesar de estar buscándolo, encontrar un empleo.

7.2.1 La autonomización de la mujer como etapa necesaria en “la evolución hacia la liberación femenina”

La concepción de la mujer como la parte cambiante y flexible del colectivo gitano está en la base de los programas que tienen como objetivo los cambios que se tratan de incentivar en él:

Las mujeres gitanas están desempeñando un papel muy significativo en el cambio en positivo dentro de la comunidad y son especialmente ellas las que están ayudando a flexibilizar todas las costumbres (Ayuntamiento de Madrid, CASM, Barró y Fanal, 2008: 10)

No obstante, se piensa que su potencial para el cambio puede verse mermado por los obstáculos que históricamente arrastran. En este sentido se pronuncia la obra de la que provienen los fragmentos antes citados; en la que, por otro parte, se indica que “la mujer gitana sufre una triple discriminación”: como gitana frente a los *payos*, como mujer frente a los varones y la que deriva de la posición que ocupa dentro de la comunidad gitana. “Todo esto –como se continúa diciendo– ha dificultado en gran medida el desarrollo de sus potencialidades: autonomía, desarrollo personal, acceso a los estudios, etc.” (Ayuntamiento de Madrid, CASM, Barró y Fanal, 2008: 16). En el imaginario de los profesionales que trabajan con ellas existe un esquema prefijado sobre cómo se ha de llevar a cabo “la liberación” y la emancipación de las mujeres gitanas. La individualización de éstas a través de su toma de conciencia como “personas” (persona-mujer/versus/madre-esposa) parece ser la condición imprescindible para que dé comienzo esa liberación, a lo que habría que añadir la formación, que se considera, además, un elemento coadyuvante de lo que se califica como “acceso normalizado” a las instituciones mayoritarias (escuela, sanidad, etc.). En otro orden de cosas, se aprecia una correlación entre las concepciones que los profesionales manejan sobre los diferentes perfiles de mujeres y las expectativas que albergan con respecto a ellas. Así, con respecto a las que tienen un nivel educativo muy bajo, asumen que la propia participación en las actividades ligadas a la RMI ya es de por sí positiva, puesto que implica salir del ámbito doméstico y entrar en contacto con otras mujeres, de modo que de ellas no esperan nada más que su presencia en las mismas.

Charlando con la directora de una ONG, ésta me dice que el hecho de que las mujeres gitanas de clase baja salgan de sus cuatro paredes para juntarse con otras mujeres que están en su misma situación es por sí mismo “liberador”. Afirma que, a pesar de las diferencias internas entre las gitanas con las que trabaja, se puede decir que, en general, “las gitanas están como nuestras abuelas”, y que es ahora cuando están comenzando a cambiar. (Registro de campo: conversación informal con directora de ONG que trabaja dando clases de alfabetización a mujeres gitanas, proyecto 1, zona sureste de Madrid, abril 2007.).

En cuanto a la individualización de las mujeres, ésta se trabaja como parte de un currículum oculto que se despliega en sesiones dedicadas a la educación infantil y a los

hábitos de cuidado saludables (la autoestima incluida). De este modo, es común escuchar a las profesionales repetir, como si de un *mantra* se tratara, la importancia que tiene para la autoestima acostumbrarse a “sacar un tiempo para una misma”, para “cuidarse”. De hecho, se actúa como si existiera una manera única de convertirse en una mujer independiente, trabajadora y libre, que coincide –además– con el proceso de cambio experimentado por la clase media *paya*. Las mujeres gitanas son interpeladas persistentemente a través de esta idea de que el cambio es necesario, de suerte que, en los cursos de formación, las profesionales insisten en decirles que, en realidad, “ya están inmersas en un proceso de cambio imparable” similar al que ellas vivieron hace años. Se está produciendo, así, en estos cursos y charlas de los que estamos hablando, una “educación moral cerrada” o, como diría Adela Cortina, “centrada en transmitir las propias convicciones de las profesionales e intentando que las mujeres gitanas las incorporen” (Cortina, 2007, en Zamanillo, 2011: 13), que no reconoce que el cambio de estas mujeres pueda tener lugar en los términos que ellas decidan y se les niega, en consecuencia, la posibilidad de conceptualizarse de un modo creativo.

En el momento de debate, tras una actividad del curso, una mujer gitana expresa que, por formarse como mediadora, no quiere perder “ni sus valores ni su cultura”. “No quiero dejar de ser quien soy”, concluye. Ante esto, una profesional le espeta: “¡Vais a cambiar como todas hemos cambiado!”. (Registro de campo: observación en un curso para mediadoras gitanas en salud organizado por la FSGG, noviembre 2007).

Las profesionales recuerdan a menudo a las mujeres gitanas que, si cambian de prácticas (en lo que se refiere al cuidado doméstico y familiar o en lo relativo a la inserción laboral), no lo harán a costa de un proceso de “pérdida cultural”. No se sabe si a veces, con este tipo de advertencias, están expresando un cierto sentimiento de culpa causado por la evidencia de sus prácticas asimilacionistas, de las que han sido acusadas por algunas personalidades gitanas (Heredia, 1983), o están respondiendo a la preocupación del colectivo gitano por la pérdida de valores que puede conllevar la inserción social, tal como han sostenido otros autores (García Pastor, 2009; Laparra, 2007; Serrano y Arriba, 1998). El caso es que algunas de estas profesionales aseguran que “el necesario proceso de modernización” de este colectivo pasa inevitablemente por esa inserción social, identificando de nuevo, en sus argumentaciones, “lo cultural” con un lastre para el cambio, con algo que hay que “tirar por la borda” de cara a modernizarse.

La comunidad gitana está inmersa en un proceso de cambio que permite dos lecturas en cierto sentido contradictorias: a) Pueden interpretarse estos cambios en la estructura de la familia gitana como un síntoma de desestructuración social que pone en riesgo su propia cultura y la transformación de sus costumbres. b) Puede entenderse como favorable la pérdida de algunas costumbres en el proceso de modernización, al igual que ha ocurrido con otras culturas. Esta segunda versión viene a decir que todos estos cambios forman parte de un proceso de modernización en el que se transforman los modelos familiares, va aumentando la libertad y los valores individuales, incluyendo los de la mujer (García García, Á., 2007: 28, en Laparra, 2007).

En los grupos de mujeres considerados de “más nivel educativo”, las expectativas de las profesionales sobre cómo trabajar temas relacionados con la individualización (sobre todo la toma de conciencia de las necesidades que se tienen como persona) a veces chocan con los intereses de las propias mujeres. Un ejemplo de esto ocurrió en un taller financiado por el Ayuntamiento de Madrid para trabajar cuestiones de relajación y meditación como base para incrementar la autoestima de éstas. Esta sesión fue organizada de una manera precipitada, debido a un error del organismo financiador, por la ONG en la que en ese momento estaba realizando trabajo de campo. De la noche a la mañana, llegó a la sede de esta ONG una persona a dar una “sesión de autoestima”, que consistía en ejercicios de relajación y meditación que había que realizar en silencio, según dijo la monitora, para “tomar conciencia del propio cuerpo” desde el contacto con “una misma”. Comenzado el taller y tras varios minutos con música tranquila de fondo, las mujeres gitanas se pusieron nerviosas y empezaron a protestar, a la vez que algunas de ellas no dejaban de decir “esta actividad es una tontería”. La monitora detuvo la sesión y dio inicio a un debate improvisado que suscitó mucho interés por parte de las mujeres, de modo que si bien habían reaccionado mal a la imposición de la actividad prevista, participaron vivamente, sin embargo, en el debate que después se generó acerca de los cambios estéticos y corporales que se estaban produciendo en nuestra sociedad. La cordial relación que terminaron estableciendo con la joven profesional encargada de la “sesión de autoestima” no es ajena al hecho de que ésta, en todo momento, se mostrara respetuosa, tranquila y tuviera en cuenta las opiniones de las mujeres acerca de lo que estaban haciendo, de modo que incluso el tema tratado en el debate provino de la sugerencia de una de ellas.

En otro orden de cosas, hay que resaltar una fuerte tendencia a que, en los cursos y charlas ligados a la RMI, se acometan actividades de “promoción personal” que –como se ha dicho– implican la toma de conciencia de su individualidad por parte de las participantes o, en términos de Álvarez-Uría (2006), la proposición de actividades centradas en la “psicologización del yo”:

Proceso de apertura en el interior de la subjetividad de una especie de subsuelo, de un *alma* entendida como fuente y raíz de todas las cosas, un principio vital inmaterial susceptible de ser explorado y analizado como si se tratara de un océano profundo y desconocido, una especie de *terra ignota* que es posible recorrer y cartografiar, un mundo íntimo que merece la pena explorar con sistematicidad, hasta el punto de convertir la existencia del individuo en una especie interminable de inmersión en las profundidades del yo psicológico. Ya no se trata del *homo clausus*, de la preferencia por el *yo* frente al *nosotros*, ni tampoco del sujeto ensimismado, orgulloso de su autosuficiencia, sino del individuo que convierte el *yo* en un perímetro amurallado porque, consciente o inconscientemente, considera que en su interior se esconde un tesoro cuyo hallazgo dará sentido a la existencia. (Álvarez-Uría, 2006: 106-107)

La actividad descrita más arriba, tendente a fomentar una actitud meditativa, pretendía potenciar el encuentro con “un espacio interior al individuo” (Álvarez-Uría, 2006: 129). Ahora bien, con ella como con otras actividades de su misma naturaleza, se corre el peligro de transformar problemas colectivos en conflictos psicológicos (Castel, 1986), y más en el caso del colectivo gitano, aquejado de obvios problemas objetivos que van desde el racismo a las dificultades en el acceso a la vivienda o a la educación. En congruencia con este énfasis en la individualización, en el desarrollo de varios proyectos de integración vinculados a la RMI en los que he realizado observación participante, las profesionales les han dicho a las mujeres gitanas que “una ha de estar bien para poder cuidar al resto”; es decir que, ante la dificultad para promover en ellas la individualización que se busca, su rol de cuidadoras vuelve a ser usado como una coartada para motivarlas a quererse a sí mismas, esto es, para insistir en autonomizarlas como sujetos con necesidades y deseos propios. El lema del Proyecto Artemisa, encaminado a fomentar la asistencia a revisiones ginecológicas por parte de las gitanas y financiado por el Área de Igualdad de Ayuntamiento de Madrid, es el siguiente: “Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás”. Así, el cuidado de una misma se presenta como un nuevo ámbito en el que las mujeres han de mostrar responsabilidad.

En este proceso, se ha pasado por interiorizar su situación en cada una de las mujeres (lo que yo deseo para mí y lo que tengo); concienciarse de esta situación (con lo que tengo, ¿qué puedo hacer?); actuar (si yo no estoy bien, no puedo hacer bien a los de alrededor) (Ayuntamiento de Madrid, CASM, Barró y Fanal, 2008: 18).

En suma, el proyecto resocializador de la mujer gitana que se impulsa desde las actividades de inserción social ligadas a la RMI pasa por: a) la toma de conciencia sobre las desigualdades de género existentes en el hogar gitano; b) la individualización de la mujer (que ha de quererse y cuidarse de forma consciente y distanciada de las necesidades familiares); y c) el asumir para sí un proceso de cambio personal similar al que llevaron a cabo las profesionales que están a cargo de los proyectos de integración. En congruencia con ello, éstas tienden a dirigir el sentido de ese cambio hacia una idea específica de la emancipación, no dejando espacio para que las mujeres mismas lo orienten, en caso de quererlo, hacia una dirección novedosa y creativa.

7.2.2 Un inciso: las mediadoras sociales como emblema de la modernización de la mujer gitana

Las mediadoras sociales gitanas se han erigido en el emblema del cambio gitano para muchas profesionales que trabajan en entidades de iniciativa social, convirtiéndose en un ejemplo que constata, en carne y hueso, la veracidad y la posibilidad de dicho cambio. En

algunas jornadas de formación a las que he asistido, se ha invitado a mediadoras sociales gitanas españolas y europeas para que hablen a los grupos de beneficiarias la RMI; jornadas que han sido organizadas por organismos de la Administración Pública junto con las dirigentes de distintas ONG. De hecho, las administraciones públicas se han servido de las entidades ciudadanas para llegar a abordar problemas que difícilmente podrían haber enfrentado por sí mismas (Cardiel y Laparra, 2007: 208), apuntándose el mérito (en este caso, poniendo su logotipo en el folleto de las jornadas de igualdad de género) de la promoción del cambio y de la “integración” de las mujeres gitanas. Se establece así una cierta relación de dependencia entre esas administraciones y las asociaciones que implementan proyectos de integración ligados a la RMI; relación de dependencia o alianza, según se mire, en la que las mediadoras sociales gitanas son parte de una estrategia institucional para potenciar de forma dirigida el cambio del colectivo¹⁶⁹. Tal vez debido a ello, en varias entrevistas a dirigentes de asociaciones que trabajan con mujeres gitanas, las entrevistadas han hecho referencia a las mediadoras sociales como ejemplo del cambio gitano; e, igualmente, algunos representantes de la Iglesia Evangélica de Filadelfia (conocida entre los gitanos como “el culto”), también entrevistados, han señalado que éstas representan el proceso de modernización e integración gitanos, coincidiendo así con la visión imperante en el mundo asociativo y de las instituciones públicas.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las gitanas que se han formado como mediadoras sociales, cuando comenzaron su formación para ello, se encontraban ya inmersas en procesos de ascenso socio-económico que acercaban su posición social a la de las profesionales de ONG que las motivaron a formarse. La distancia de estas mediadoras sociales con respecto a las mujeres gitanas con las que tienen que intervenir –principalmente en asentamientos chabolistas– queda patente en el siguiente ejemplo:

Tania –mediadora social de clase media, con acento castizo, rubia, con ojos azules y vestida elegantemente– se pasea, con cara de desagrado, entre las chabolas de La Jungla. Hace esfuerzos por no ensuciar sus zapatos de tacón mientras la trabajadora social de IRIS nos acompaña en una “visita guiada” por el poblado (Registro de campo: observación durante un paseo guiado por La Jungla, marzo 2008).

Basándose en un estudio que versa sobre las prácticas médicas del colectivo gitano en Cataluña y en la vecina región francesa de Perpiñán, Ramírez Hita (2003) mantiene que los líderes de las asociaciones gitanas y los mediadores interculturales están vinculados a la Iglesia Evangélica de Filadelfia. La conexión entre los procesos de ascenso social iniciados

¹⁶⁹ Aquí se podrían rescatar las reflexiones de algunos autores sobre la instrumentalización del movimiento asociativo por parte del Estado (Pere, 2005: 276; San Román, 1997: 248), así como las que se refieren a la importancia que, para las líderes de ONG, supone el establecer alianzas con cargos de la Administración de los que depende la financiación de sus entidades (Ramírez Hita, 2003: 120).

por gitanos beneficiarios de la RMI y la participación en el mundo asociativo y en el “culto” es un aspecto que también se ha descubierto como relevante en la investigación realizada para esta tesis doctoral. De manera que se puede establecer, a modo de hipótesis, que son las mediadoras sociales que cuentan con un cierto estatus dentro del culto evangélico (como esposas del pastor, por ejemplo) y que participan con asiduidad en esta institución religiosa las que aplican un estilo educativo de tintes “evangelizadores” u “occidentalizadores”, para usar las expresiones de Cantón y Gil (2011: 97), cuando intervienen en los proyectos de integración con beneficiarias de la RMI.

Como parte de la estrategia institucional de promoción del cambio de las mujeres gitanas, las mediadoras sociales –tal como ya se ha comentado más atrás– son literalmente paseadas por Madrid, a través de diferentes eventos institucionales y culturales, como ejemplo del éxito de las políticas de integración desplegadas con el colectivo gitano. De este modo, se han convertido en la cara pública de las gitanas que han promocionado. En cuanto a las funciones que estas mediadoras desempeñan con beneficiarias de la RMI, están la de acompañarlas a revisiones ginecológicas, la de asesorar a las familias gitanas que tienen hijos absentistas en las escuelas públicas o la de apoyar a las profesoras de los cursos de alfabetización mediando en los debates que puedan surgir. Si bien hay estilos profesionales muy diferentes, que dependen –desde mi punto de vista– más de la personalidad de las mediadoras que de su formación, se hace patente que las que forman parte de la Iglesia Evangélica despliegan una fuerte tendencia a “evangelizar” a las mujeres tratando de persuadirlas de que han de abandonar la “oscuridad de sus tradiciones” (Cantón y Gil, 2011: 97) para sumarse a la modernidad de los gitanos y gitanas ya “integrados” (que suelen identificar con los que participan en “el culto”).

He podido comprobar, observando su quehacer en diferentes espacios sociales donde lo desarrollan, que las mediadoras sociales, a pesar de contar con una formación específica más bien exigua (la mayoría de ellas, de menos de un año), muestran una gran autoridad a la hora de expresar sus conocimientos y opiniones, que se refleja en la forma que tienen de hablar a las mujeres beneficiarias de la RMI, por ejemplo aconsejándoles sin rodeos lo que tienen que hacer para modernizarse y progresar. Así, les dicen cosas similares a las que las profesionales les transmiten, aunque frecuentemente con un tono aun más moralizador que el de éstas. Se reafirma, por tanto, la idea –expuesta más atrás– de que las mediadoras gitanas han interiorizado ciertos valores de clase media; unos valores en los que es probable que se hayan socializado a través de su participación en “el culto” y de su inmersión en una vida profesional, lo que les ha llevado a producir un discurso sobre las características de la

“integración gitana” que está en la línea de lo que algunas autoras califican de “construcción étnica de la pertenencia” (Cantón y Gil, 2011: 88), centrada en resaltar las consecuencias positivas que “la integración” tiene y tendrá para los gitanos.

Cabe señalar que la cultura gitana es re-significada por los participantes en “el culto” (que suelen formar parte de la clase media y la clase media-baja) mediante su encuadre en un marco de sentido en donde se combina una defensa de la inserción laboral “normalizada” y un discurso étnico-político centrado en un gitano que está en proceso de cambio y es concebido como sujeto de derechos sociales. Este gitano “integrado” se confronta continuamente con la imagen del gitano socialmente estigmatizado: el “sucio y pelúo”¹⁷⁰, esto es, el gitano chabolista y, por tanto, pobre en el que se recrean los medios de comunicación. Aparece así una nueva representación de los gitanos como “portadores de una cultura valiosa” que los identifica, además, como “actores capaces de definir su propio destino (Cantón y Gil, 2011: 98). San Román (1997) hace, en cierto sentido, referencia a ello con su noción de “miliciancia étnica”:

He utilizado durante años militancia étnica para referirme a la estrategia política y reivindicativa, especialmente pero no sólo nacionalista, que refuerza, codifica y utiliza como arma ideológica tanto la identidad étnica como sus símbolos culturales. Es la versión política más potente de la etnicidad y es un derecho político practicado y reconocido en el contexto de otros derechos y libertades democráticas (San Román, 1997: 204).

A pesar de su coincidencia con los discursos de los profesionales, las mediadoras gitanas no se pliegan del todo al proyecto de cambio diseñado tanto para ellas como para las demás gitanas por las distintas instituciones sociales. Así, están construyendo una forma particular de ser mujeres gitanas, que es rechazada abiertamente por algunas profesionales de ONG. Un ejemplo de este rechazo lo encontré en unas jornadas de promoción de la igualdad de la mujer gitana¹⁷¹, organizadas en mayo de 2007 por el Ayuntamiento de Madrid. Se invitó a varias mediadoras sociales gitanas a hablar de su experiencia de inserción en el mercado laboral y de cómo hacían para compaginar su trabajo de mediación con el de madres y esposas. Resultó muy significativa la reacción que las profesionales *payas* presentes en el acto tuvieron ante el discurso de Estefanía, una mediadora que, desde la tribuna de invitados, expresó lo que, para ella, era ser una “mujer moderna”. Estefanía, de clase media y esposa de

¹⁷⁰ Este término lo escuché por primera vez de una gitana residente en La Jungla (empleada, soltera, y en espera de piso de protección oficial) para referirse a las gitanas portuguesas del mismo poblado, de apariencia sucia, dejada, despeinada... y que conseguían sus ingresos de la RMI y de la mendicidad por Madrid. Varias mujeres gitanas españolas se negaron a compartir aula de alfabetización la RMI con las “pelúas” portuguesas. Más adelante encontré en San Román (1997: 82) la referencia a ese término, el cual “implica una visión peyorativa, clasista, que acompaña a la pobreza”, que sirve para señalar diferencias internas (económicas, de estatus) entre los gitanos.

¹⁷¹ Las jornadas “Gitanas hacia la igualdad” fueron organizadas por la Mesa por la Igualdad de Mujeres Gitanas (Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ayuntamiento de Madrid) y tuvieron lugar los días 6 y 7 de mayo de 2007.

un pastor evangélico, trabajaba en ese momento en una asociación madrileña que implementaba PII vinculados a la RMI. En su disertación, sostuvo que ella “no había dejado de ser buena madre ni buena esposa por trabajar como mediadora”, y que se esforzaba mucho por no descuidar a su marido y a sus hijos. Expuso que, a parte de ser mediadora, seguía limpiando y cocinando en casa, y no dudó en calificarse a sí misma de “referente” para su comunidad, lo que ejemplificó diciendo que muchas “mozas” de su barrio querían hacerse mediadoras como ella. Cuando dio por terminada su intervención con la frase: “no he dejado de ser gitana”, las mujeres que formaban parte del auditorio (incluidas las de un poblado chabolista) le dedicaron una gran ovación, eso sí, ante las caras de sorpresa y desagrado de varias profesoras de alfabetización de asociaciones madrileñas, que movían la cabeza de un lado para otro con cara de incredulidad y frustración. Más tarde, algunas de estas profesionales –con las que estuve conversando durante estas mismas jornadas– no vacilaron en criticar a “el culto”, por un lado, por no permitir lo que –según ellas– es una verdadera emancipación de la mujer gitana, puesto que supedita la inserción laboral al cumplimiento del rol tradicional femenino en el seno de la familia y, por otro lado, porque entra en contradicción y, por tanto, obstaculiza en algunos casos el proceso de cambio ideal que estiman más pertinente para las gitanas beneficiarias de la RMI.

Finalmente, hay que traer a colación que, a pesar de este tipo de malentendidos, las mujeres que participan en “el culto”, al igual que algunas jóvenes entrevistadas cuyos padres trabajan en fundaciones gitanas como la FSGG, están inmersas en procesos de individualización y de ascenso social, es decir, en procesos semejantes a los que las profesionales promueven (y desean promover) entre las beneficiarias de la RMI. Esas jóvenes se están formando en el ámbito de la intervención social con la esperanza de trabajar en organizaciones similares a aquellas en que trabajan sus padres y realizan, por ejemplo, ciclos formativos de la formación profesional reglada y prácticas en los Servicios Sociales. Cardiel y Laparra (2007: 207) presentan lo anterior como una tendencia inversa a la patrimonialización por parte del Estado del asociacionismo gitano. Así, estas jóvenes gitanas (y también jóvenes gitanos) ven la intervención social como un nicho laboral al que podrán entrar avalados por su formación y por su pertenencia étnica, además de por la presencia de sus familiares, para lo que despliegan lo que –con palabras de los mismos autores– puede denominarse una estrategia de patrimonialización étnica de esa intervención social. Llama la atención, en todo caso, la distancia social, económica y cultural que separa a estas (y a estos) jóvenes de los gitanos de clase baja y sin recursos con los que dicen que quieren trabajar.

7.2.3 Algunas hipótesis sobre la participación en “el culto” y el cambio de roles de género de las mujeres gitanas

Si bien la participación en la Iglesia Evangélica no es objeto de esta tesis doctoral, lo cierto es que a través de esa participación se está generando un discurso específico sobre la pertenencia étnica a la vez que sobre el individuo gitano como sujeto político, es decir, con capacidad de queja y demanda colectiva ante las instituciones. Las personas que participan en “el culto” desarrollan, por lo general, un discurso coherente con un proceso de ascenso social que han asumido voluntariamente. Al mismo tiempo, y a pesar del desacuerdo con ellos de muchos profesionales *payos*, la participación en este espacio religioso está sirviendo de marco para la reconfiguración de ciertos valores de género asociados a la mujer gitana. De este modo, la comunidad gitana está generando una estrategia propia de ascenso social con la Iglesia Evangélica como mediadora, siendo ésta una institución que goza de gran legitimidad entre los gitanos, sean éstos creyentes o no. Es decir, la integración en “el culto” es entendida aquí como un elemento de ascenso social característico del colectivo gitano, a través del cual se está resignificando valores y representaciones de lo gitano para promover un cambio de conductas que propicie el abandono de determinados hábitos, como el consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas, muy asociados con determinados espacios de ocio (bares, discotecas, etc.). De la misma manera, “el culto” está incentivando la adquisición de ciertas ideas y prácticas que favorecen la adaptación a la sociedad mayoritaria, entre ellos, la revalorización de la mujer gitana y la motivación de sus miembros para buscar activamente la inserción laboral.

“El culto”, por tanto, puede ser analizado como una institución que favorece el cambio social mediante la promoción de comportamientos que estimulan el que se asuman como propios valores coherentes con la integración en la sociedad mayoritaria. En este sentido, está posibilitando ciertas transformaciones que los gitanos evangélicos denominan con los términos de “civilización” o de “adaptación”. Entre ellas, las hay que afectan tanto a la manera de hablar o de vestir... como a las formas de ocio y de actividad laboral socialmente aceptadas. Y todo ello se produce a través de un lenguaje que apela al “amor al prójimo” y que exalta la bondad inherente a todo ser humano. Todas las personas “cristianas” (que es el apelativo con el que se autodenominan) que he entrevistado elaboran un discurso articulado alrededor de una idea muy particular de cambio social que rechaza, por ejemplo, a los gitanos “sucios” y “analfabetos” y busca intencionadamente una visión del colectivo gitano “normalizada”, es decir, mediada por los cambios de comportamiento ya descritos.

Yendo más allá, cabe sostener la hipótesis de que “el culto” está impactando a (calando en) la población porque no plantea un cuestionamiento explícito de los valores asumidos por los miembros del colectivo gitano, como –por ejemplo– el “respeto” debido por los jóvenes a los mayores, la autoridad masculina o la centralidad de la virginidad femenina. Estos valores, que –como se acaba de decir– no son cuestionados de manera expresa, son en cierta medida reconfigurados. Así, por ejemplo, sin contradecirlos, desde la Iglesia Evangélica se van transmitiendo mensajes acordes con la inserción laboral de la mujer gitana, como se hace a partir del hecho –ya señalado– de que algunas pastoras sean mediadoras sociales. Y, para poner otro ejemplo, se van introduciendo del mismo modo ideas acordes con el discurso socio-sanitario predominante, como es el caso de la importancia de la planificación familiar. Por tanto, “el culto” es una institución que tiene impacto en las subjetividades y las vidas de los gitanos porque es una plataforma –no ajena, además– que está instrumentalizando valores tradicionales a favor del cambio, es decir, generando transformaciones sociales a partir de valores de esa naturaleza. Con esto quiero decir que, aunque en algunas iglesias (de las que conforman la red de la Iglesia Evangélica) se siga hablando –por ejemplo– de la “fragilidad femenina”, ello no tiene que entenderse sólo como algo negativo puesto que, como se ha dicho, a través de ciertas concepciones tradicionales de las relaciones sociales, se están introduciendo nuevas configuraciones de género más coherentes con un cambio social que incluya la inserción educativa y laboral de la mujer gitana. En este sentido es en el que la participación en “el culto” es un elemento que posibilita a muchas mujeres (y a sus familias) el ascenso social, a pesar de que –al menos, aparentemente– pudiera parecer lo contrario.

Otro elemento que puede conferirle efectividad a esta institución religiosa es la multidimensionalidad de sus relaciones. Funcionando sobre la base del “amor al prójimo”, actúa como una familia que se brinda apoyo desde el primer momento en que se participa en/de ella; apoyo que adopta multitud de formas, tales como estancias prolongadas con enfermos, acompañamiento a los hospitales, préstamo de dinero a los necesitados, atención en crisis matrimoniales, etc. El pastor, que muchas veces realiza trabajo de calle, va a las casas de los feligreses, los acompaña cuando lo necesiten o, para poner un último ejemplo, propone actividades para favorecer la cohesión de los diferentes grupos de edad. Otro elemento, relacionado con el anterior, que contribuye asimismo a entender el relativo éxito de “el culto”, tiene que ver con la no separación de lo espiritual, lo asistencial y lo emocional en las figuras del pastor y de la pastora, puesto que ello favorece que problemas relativos a esas tres dimensiones puedan ser resueltos a través de las mismas personas. Por otra parte, la Iglesia Evangélica es muy valorada también por su capacidad de “educar”, “calmar”, “apaciguar” a

los/las jóvenes, socializándolos en un valor muy apreciado por nuestros entrevistados, que es el “respeto” a los mayores.

- J. Hoy los jóvenes no tienen respeto a nadie. Antes te decía algo una persona mayor, y no sabías dónde meterte. Y ahora se ríen. La verdad es que sí, que en este pueblo hay mucha libertad pero hay cosas que ya se pierden: muchas costumbres.
- A. ¿Tú crees que a los jóvenes les está viniendo bien lo del culto?
- J. A los de mi suegro sí. A él le han salido un poco torcidos, sobre todo uno, que anda bastante descarriado. Y nada, se acercó mi chico y le llevó al culto y ahora es una maravilla. El evangelio es maravilloso. Para la juventud nos ha ayudado mucho. (Julia, 49 años, clase media, residente en casas ocupadas hasta que le otorgan un piso de realojo en el barrio de Fuencarral, 10 hijos.)

Los cambios de conducta que ocasiona en personas “descarriadas” como, por ejemplo, en las que habían empezado a consumir hachís, así como otras “evidencias reales”, entre las que se incluyen las “sanaciones”, son un incentivo a la participación grupal en la Iglesia Evangélica, que se legitima a los ojos de sus feligreses como institución educativa que promueve cambios profundos en la vida de las personas. Las conductas que Dios, a través de la Iglesia Evangélica –por usar el mismo lenguaje que los entrevistados que practican “el culto”–, señala como inadecuados son: el consumo de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y cualquier otro tipo de droga), el “ir de fiesta” (forma de ocio que se asocia al consumo de esas sustancias), la pérdida de la virginidad previa al matrimonio (en ambos sexos), el aborto, el adulterio, el maltrato físico, el maltrato psicológico o el “jurar” (insultar o maldecir), por ejemplo¹⁷². El “culto” puede ser considerado un espacio social donde se constituyen subjetividades predisuestas al cambio de hábitos (principalmente, los relacionados con esos “consumos” inadecuados, pero no solamente con ellos) y a la asunción de estrategias de mejora (psíquica, económica, social, etc.) de uno mismo, sea por medio de la educación o del empleo. Es decir, tal como lo expresan sus practicantes, “el culto” promueve la transformación de las “actitudes” necesarias para emprender una “vida cristiana” basada en “el amor” y en la evitación del conflicto.

No tener ese genio que muchas veces te sale. No tenerlo, retenértelo y comérselo. Te va una persona, te insulta, te das media vuelta y te vas. Ahí estás demostrando que eres un cristiano. (Entrevista a Fermín, candidato a pastor, 37 años, 4 hijos, clase media)

A partir de un lenguaje que apela a “la modernidad”, a la “adaptación” a la sociedad mayoritaria y a una revalorización del colectivo gitano y, en general, del ser humano, la Iglesia Evangélica impulsa la aparición de un sujeto con expectativas de ascenso social y otorga legitimidad a las trayectorias individuales que buscan la adquisición de formación y

¹⁷² Varios de los comportamientos que el culto evangélico rechaza coinciden con los que son rechazados por todo el colectivo gitano –creyente o no creyente–: drogas, sexualidad fuera del matrimonio –en este caso, más general, restringida a las mujeres– y aborto.

credenciales académicas, la inserción en el mercado laboral formal (tanto de hombres como de mujeres) y el abandono de la residencia en (y los comportamientos asociados a) los asentamientos chabolistas, que son percibidos como guetos

La participación en la Iglesia Evangélica está suponiendo “la puesta en marcha de nuevas estrategias de movilización étnica y de visibilización política de la minoría gitana”, así como “la producción de discursos religiosos y culturales legitimadores de cierta clase de acción política y simbólica” (Cantón y Gil, 2011: 83). Es frecuente encontrar, por tanto, que las demandas políticas hechas en términos de reivindicación de derechos sociales sean emitidas por gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI que forman parte de esta Iglesia. Cantón y Gil (2011) sostienen que la creación en Andalucía (comunidad autónoma donde llevan a cabo su estudio) de las Asociaciones Culturales Cristianas y de la Federación que las aglutina (la FACCA) está convirtiendo a los líderes del “culto” y de estas asociaciones en agentes mediadores, que han pasado de ser “pastores de almas” a trocarse en “gestores de recursos” que han entrado con fuerza en el ámbito de la intervención social, sobre todo en áreas como la educación, la gestión de drogodependencias o la inserción laboral.

Entre los integrantes de la Iglesia Evangélica, a diferencia de lo que ocurre con los gitanos de clase media no evangélicos, se está produciendo un discurso colectivo de cariz étnico que se centra, a nivel práctico, en la reivindicación política y, a nivel ideológico, en las ideas de ciudadanía y derechos sociales. En este sentido, me atrevo a lanzar la hipótesis de que la participación en “el culto” de personas que están en proceso de ascenso social promueve un empoderamiento de carácter colectivo que tiene una orientación claramente política. A este respecto, Donzelot (2006: 96-97), haciendo referencia al concepto de *empowerment*, asegura que si éste se limita a la esfera individual, sólo lleva hasta una política que favorece la adaptabilidad de los individuos y a una racionalización del individualismo; añadiendo que la significación fuerte del término es la que se refiere al empoderamiento colectivo. En este mismo orden de ideas, en primer lugar, sostiene que la noción de ciudadanía tiene que entrar a formar parte de un movimiento colectivo para tener potencial político, es decir, para que contribuya a que “la gente pueda pedir cuentas” a las instituciones prestatarias de servicios; y, en segundo lugar, defiende la constitución de una “comunidad cívica”, esto es, de una agrupación de sujetos que, más allá de la pertenencia étnica, salvaguarde sus intereses y tenga la capacidad de hacer valer su poder en la reivindicación de determinados servicios ante esas mismas instituciones. El *empowerment* estaría relacionado, por tanto, con una definición del poder “como una asociación para la acción” (Donzelot, 2006: 99).

La participación en “el culto” y la propagación de nuevas representaciones sobre “lo gitano” que emanan de él constituyen las bases de un movimiento colectivo de resignificación política de lo étnico que está generando sujetos empoderados y organizados a nivel colectivo. Así, se está dibujando desde este movimiento, al menos a nivel discursivo, a un sujeto con capacidad para demandar el cumplimiento de los derechos sociales sobre la base de la legitimación de representaciones como las de “el gitano integrado”, “el gitano culto” o “el gitano normal”, que manejan los integrantes de esta comunidad religiosa. Por último, decir que con estas notas sobre la Iglesia Evangélica y su influencia en sus adeptos se ha buscado, ante todo, presentar parte del contexto en el que adquieren sentido los discursos de algunas mediadoras sociales gitanas que, como se ha visto, instan a las beneficiarias de la RMI a adaptarse al ideal del “gitano moderno e integrado”.

7.3 Alfabetización e infantilización: consecuencias corporales de la práctica de la lectoescritura en los grupos RMI

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, durante la convocatoria del 2010-2011, financió 52 proyectos para la –que se conoce en el argot profesional como– población RMI, siendo 5 de ellos para mujeres gitanas, 5 para jóvenes gitanos y otros 5 para población gitana en general. Los proyectos en los que participan las gitanas beneficiarias de la RMI de clase baja y media-baja, denominados “cursos de alfabetización” por la mayoría de las profesoras que los imparten, reciben el nombre oficial de “proyectos de desarrollo personal para personas en exclusión” y forman parte de la subcategoría de “proyectos para personas con problemas moderados de exclusión social”, estando definidos en el folleto *Proyectos de Integración 2010-2011* que edita dicha Consejería como aquellos que incluyen actividades de adquisición de hábitos y de habilidades sociales para “la promoción personal y social”.

La mayor parte de los gitanos participantes, ya no sólo en los “proyectos de desarrollo personal”, sino en los “de integración para población en exclusión moderada”, en general, son mujeres porque –como se ha dicho– las titulares de la RMI y, de este modo, las que firman el PII (Programa Individual de Inserción) suelen ser ellas. En los primeros, que se dirigen sobre todo a las que tienen menor nivel educativo, se desarrollan contenidos variopintos que –como también se ha señalado– van desde la alfabetización a los hábitos saludables, pasando por los derechos de la mujer o la definición de lo que es violencia de género, siendo por ello que son conocidos como “cursos de alfabetización”; y las mujeres se comprometen a participar en ellos, particularmente en las actividades que tienen que ver con el aprendizaje de la

lectoescritura, acudiendo una media de 2-3 veces a la semana a las sedes de las ONG que los imparten. Y aquí aparece el aspecto que se va a tratar en este apartado: cuando la lectura y la escritura entran en escena, esto es, cuando los grupos de la RMI adoptan formas marcadamente escolares, es cuando las beneficiarias de origen gitano no sólo cambian de comportamientos con respecto a los que son habituales en ellas, sino que terminan somatizando esos cambios de una manera altamente visible.

Las aulas de alfabetización, en el tiempo previo al comienzo de las tareas más escolares, son espacios de oralidad en los que las mujeres ponen en común cuestiones que afectan a su vida cotidiana, entre ellas las quejas y las angustias que les causa la burocracia asociada a la RMI. Los “papeles” son, para ellas y sus familias, una fuente constante de preocupación de modo que a menudo convierten esos momentos que anteceden a las clases en ocasiones para compartir sus tribulaciones por “no saber qué hacer” cuando los reciben, así como para solucionar dudas acerca de ellos preguntando a otras beneficiarias de la RMI o a las profesoras de los cursos. Su inquietud por lo que esos documentos puedan “querer decir” o les piden que hagan es otra muestra más de que, al menos las mujeres gitanas que participan en esta modalidad de cursos, que suelen inscribirse en la clase baja y en la media-baja, no hablan correctamente el “lenguaje de las instituciones” con las que se relacionan (Sayad, 2004: 183¹⁷³).

Los cambios en la conducta y, sobre todo, en la hexis corporal de las participantes en estos cursos que tienen lugar cuando comienzan las clases y, por tanto, cuando se embarcan en las tareas de lectoescritura, marcan bien a las vistas que entran en un espacio social distinto. Así, a diferencia de la actitud ruidosa, dinámica y resuelta que adoptan en esos momentos previos que mencionábamos, cuando todas hablan a la vez, ríen y conversan sobre distintas temáticas, la entrada en una situación escolar les produce quietud, ansiedad, torpeza y, por lo general, una mezcla de silencio y risas a voz baja que, desde mi punto de vista, expresan la vergüenza y/o la incomodidad que experimentan ante su repentina conversión en alumnas. Así, todo ocurre como si la lectoescritura conllevara o arrastrara tras de sí la entrada en un estado estático e infantilizado (en un silencio escolar, cabría decir), que se acompaña de un lenguaje colonizado por expresiones del tipo “yo no sé” y de una actitud de constreñimiento y demanda constante a los profesionales de las soluciones correctas de los ejercicios. Las mujeres gitanas decididas, gamberras y ruidosas (en movimiento), que opinaban alegremente de todo y de nada, pasan de repente a mostrarse inseguras,

¹⁷³ Traducción propia. Sayad se refiere a los inmigrantes, pero su comentario se ajusta también a lo que le sucede a estas usuarias de la RMI.

avergonzadas y torpes (estáticas). Enfrentarse al papel y al lápiz tiende a infantilizar a estas mujeres, al menos en el sentido –ya señalado– de que no dudan en comportarse como niñas que necesitan y demandan la ayuda de “la profe” para todo. Esta infantilización de las gitanas beneficiarias de la RMI (que probablemente no sea más que la infantilización que genera cualquier espacio escolar¹⁷⁴) toma una forma más dramática en las mujeres de clase baja más mayores, quienes no son capaces de reírse (aunque sea en sordina) de su torpeza, de manera que no encuentran otro cauce de expresión que no sea la frustración o el apocamiento cuando tratan de realizar actividades que conllevan, por ejemplo, la caligrafía. En cambio, las de clase media-baja y, por lo general, las más jóvenes, que tienen un mayor nivel de lectoescritura, se toman más a la ligera este contexto escolar, y aprovechan para convertirse de vez en cuando en alumnas traviesas y risueñas que se entretienen pintando o conversando con su compañera de al lado. De este modo, cuando tienen que empezar a escribir, se ríen con la vecina de mesa, juegan a pintar en el papel de ésta (“se chinchán”) y repiten, con todo cantarín, frases como “¡es que no sé!, profe” cada vez que tienen la más mínima dificultad.

Con todo, lo más habitual y extendido entre las mujeres que participan en estos cursos de alfabetización es, como se ha dicho, el retraimiento que se visibiliza, sobre todo, a través de las posturas corporales descritas. Unas posturas corporales que he tenido la ocasión de observar en las gitanas de asentamientos chabolistas a las que he acompañado a consultas médicas y que, en otro lugar (Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villamil y otros, 2008), he calificado de posturas de “nerviosismo o vergüenza”, puesto que, al llegar a estos espacios “de vigilancia” (Foucault, 2002) o “de autoridad”, reducen sus movimientos, agachan la cabeza, sólo hablan cuando se les pregunta y no hacen preguntas cuando no comprenden algo¹⁷⁵.

Estoy en una clase de alfabetización la RMI en Cañada Real (zona de Valdemingómez) y los primeros diez minutos la profesora (denominada “monitora” por la directora de la ONG, aunque en realidad es trabajadora social) charla con las mujeres de sus familias, sus hijas, las últimas bodas, etc. Reina el ruido, todas quieren hablar, se ríen. Cuando Marta, la profesora, les pregunta por qué sílaba se quedaron en los ejercicios durante la sesión anterior, el silencio se adueña momentáneamente del aula. Algunas mujeres ponen cara de aburrimiento, otras hablan entre sí y se ríen en voz baja, y una de ellas reprende a su compañera de pupitre porque: “¡Seguro que no has hecho los deberes!”. La profesora les dice que abran sus carpetas y le digan por dónde se quedaron el día anterior. Les va repartiendo unas hojas en blanco y comienza un dictado. (Registro de campo: observación en clase de alfabetización, proyecto 1, zona sureste de Madrid, febrero 2007).

¹⁷⁴ Escolar no es lo mismo que educativo, al menos cuando los fenómenos de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje son abordados desde la antropología (ver, por ejemplo, García Castaño y Pulido Moyano, 1994: Díaz de Rada, 2008: 24-27; Jociles 2008:126-132; o Jociles y Charro, 2008: 124-124; para citar a antropólogos españoles que han tratado el tema, por lo demás muy trabajado en la antropología de la educación sobre todo norteamericana).

¹⁷⁵ Este mismo hecho ha sido descrito por Boltanski (1974: 77), quien reflexiona sobre la escasa relación que se establece entre el médico y los pacientes de las clases bajas, haciendo hincapié en el “monólogo” del médico y en la actitud silenciosa del paciente, quien pocas veces se atreve a perturbar al profesional con sus cuestiones.

En relación con la torpeza y con la posición corporal de inseguridad que adoptan las mujeres gitanas en estos espacios infantilizados e infantilizadores que se constituyen en los cursos de lectoescritura, se puede traer a colación las reflexiones de Sayad (2004) sobre el “cuerpo vergonzoso” y sobre la manera en que las relaciones contradictorias con el propio cuerpo reflejan los dilemas de los grupos dominados. Este autor sostiene que la relación de uno mismo con su cuerpo y la representación que desea darle a éste son formas particulares de experimentar la posición social que ocupa a través de la experiencia de discrepancia entre el cuerpo ideal y el propio cuerpo:

Visto y nombrado por otros, el cuerpo dominado es un cuerpo vergonzoso, un tímido, torpe cuerpo con poca auto-seguridad, un cuerpo que es experimentado con intranquilidad. Es un cuerpo que se traiciona a sí mismo (Sayad, 2004: 260)¹⁷⁶.

Así, las mujeres muestran (con sus cuerpos, con sus prácticas y, a veces, también con sus discursos) que se sienten incómodas con el “formato escolar” que toman las clases de estos grupos de alfabetización ligados a la RMI. De hecho, cuando terminan las actividades de dictado y lectoescritura, retornan a una posición corporal confiada que se expresa mediante el aumento de la oralidad, de la seguridad en el habla y mediante el cese de los comportamientos infantiles: entonces vuelve la risa, la algarabía¹⁷⁷ y el ruido propio de las clases populares (Bajtín, 1974; Ayala Rubio y García García, 2009).

En los grupos de alfabetización se concentran mujeres con competencias en lectura y escritura muy distintas. Por ejemplo, en el grupo al que se hace referencia en la cita etnográfica de más arriba, ubicado en Valdemingómez (Cañada Real), había mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 50 años, algunas con bastante destreza lectora e, incluso, matemática y otras con graves problemas de motricidad gruesa que les dificultaba, por ejemplo, poder repasar unas letras impresas en un cuaderno de caligrafía. Se hace difícil, para las profesoras de estos cursos, atender a la variedad de niveles y de capacidades que presentan las diferentes mujeres, lo que aparece con frecuencia en sus quejas a la forma que tienen los Servicios Sociales de “derivarles sin criterio alguno” a mujeres de posiciones sociales y niveles educativos muy heterogéneos.

¹⁷⁶ Traducción propia.

¹⁷⁷ En el diccionario de la RAE se puede leer el origen de esta palabra, y es curioso que una de sus acepciones signifique “lengua árabe” y otra “griterío”.

7.4 El “control blando” en los espacios educativos asociados a la RMI y algunas tácticas de resistencia de las alumnas

En estos espacios educativos, lo que se les pide a las mujeres es que adopten una determinada relación con el conocimiento, esto es, que se adhieran a los contenidos trabajados sea en los clases de lectoescritura sea, para poner otro caso, en los talleres de educación para la salud. Uno de los signos de inserción social que buscan los profesionales que intervienen a través de estos espacios educativos es el reconocimiento por parte de las mujeres de las “verdades” que repetidamente les tratan de transmitir, como –por ejemplo– que la automedicación “es mala”, que la ingesta excesiva de carne y de alimentos fritos “es perjudicial para la salud” o que la edad temprana de matrimonio es lesiva para las mujeres.

Se expuso en el capítulo anterior que la relación de los gitanos beneficiarios de la RMI con los educadores sociales y/o con los profesores de los grupos de alfabetización es más cercana que la que se establece con los trabajadores sociales. Ahora bien, aunque los primeros tratan de distanciarse del “ethos burocrático” de los trabajadores sociales (Cortina, 1998, en Martín Estalayo, 2011: 25; Cortina, 2003), a los que valoran como alejados de sus asistidos, no se puede decir que los profesionales encargados de intervenir socio-educativamente en los grupos ligados a la RMI no ejerzan control alguno sobre “sus alumnas”; un control que, en su caso, está relacionado con las temáticas que seleccionan y con la metodología pedagógica que utilizan.

Los grupos de alfabetización ligados a la RMI suelen estar organizados de acuerdo a un esquema educativo tradicional, en el que uno o varios expertos (docentes) seleccionan y trabajan un tema con los educandos (discentes). En ellos, se realiza una intervención pedagógica centrada en la transmisión de contenidos educativos que aparecen ordenados por bloques temáticos y que casi nunca son considerados de interés prioritario por las mujeres gitanas. Enseñar contenidos conlleva, por lo común, un hablar tecnificado, universalista, sin sujetos, que simplifica las “verdades científicas” y las reduce a conocimientos asépticos distanciados de la cotidianeidad de los educandos. Se dan por sentado, entonces, saberes que han tardado siglos en ser generados y contrastados como, por ejemplo, la idea de que poner límites educativos es beneficioso para los niños o como la importancia que se otorga a esterilizar los biberones, que forman parte de la puericultura derivada de las prácticas de la clase media europea y que empezó a construirse a finales del XIX (Boltanski, 1969), siendo presentados, además, al margen del contexto socio-histórico en que se originaron.

Estos saberes objetivados suelen ser tratados oralmente por los educadores u otros “expertos” mediante el formato de la charla, dándose por supuesto que estas mujeres

escucharán y retendrán la información que se les transmite. Es más, se espera que se relacionen cómodamente con contenidos que apenas tienen nada que ver con sus experiencias cotidianas, con los que han de trabajar de una manera abstracta y cosificante a la que no están acostumbradas (Lahire, 1993)¹⁷⁸ y presuponiéndoles una serie de saberes escolares que, por muy sencillos que sean a ojos de las profesionales, ellas no tienen. Un ejemplo sencillo de ello lo encontramos en el hecho de que algunas profesoras de los cursos de alfabetización piensen que es fácil para las alumnas transformar frases escritas de singular a plural, y sólo se dan cuenta de que esto no es así cuando comprueban que no logran comunicarles cómo hacerlo por más que lo intenten, puesto que estas mujeres no saben cómo reaccionar ante instrucciones, como las de ejercicios de esta índole, que no entienden.

Los profesionales que imparten estas actividades expresan frecuentemente, en las entrevistas, su sensación de estar exponiendo una y otra vez los mismos contenidos sin que hagan mella en las mujeres, al menos en el sentido de que los olvidan fácilmente y no los integran en su vida cotidiana, lo que deducen del hecho de que las mujeres no suelen hacer ninguna referencia a ellos cuando narran lo que hacen en su día a día. Éstas, por su parte, son presionadas a memorizar la información que “se les repite” y se les pide que se esfuercen por retener las “cuestiones básicas”, que suelen ser simplificaciones, a veces excesivas, de las temáticas planteadas. Por ejemplo, en un curso de alfabetización desarrollado en el barrio de Usera, donde realicé observación participante en 2008, una de las profesoras del mismo invitaba a sus alumnas a que aprendieran a distinguir al menos entre los alimentos “buenos para salud” y los “malos para la salud. En el siguiente verbatim se puede ver que lo que se espera de las mujeres es que suscriban ciertas consignas para demostrar así que han “captado” los contenidos que las maestras se esfuerzan por transmitir.

Estoy en una sesión de lectoescritura organizada por una fundación que trabaja con el colectivo gitano. Después de un rato de actividades de escritura y de matemáticas, en las que cada mujer ha trabajado individual y silenciosamente con documentación que tienen en sus respectivas carpetas (distribuidas y catalogadas según sus niveles de conocimiento), la profesora dice que van a repasar temas de “hábitos saludables” que ya vieron la semana anterior. Previamente les indica que harán un breve descanso, en el que las mujeres hablan entre ellas, se ríen y se cuentan anécdotas familiares. Cuando acaba el descanso, la profesora les reparte unas hojas con preguntas como: “¿Qué tipo de cosas son malas para tu salud?”, “¿Qué comidas tienen más grasa?”. Las mujeres se ponen a leer el papel en silencio. Al rato algunas le preguntan a la profesora qué quieren decir las preguntas y si hay que escribir la respuesta. Llama la atención que mientras antes han mostrado buenas capacidades lecto-escritoras y matemáticas, ahora no puedan entender este tipo de preguntas. La profesora les dice que escriban las respuestas. Varias mujeres miran el papel como ensimismadas, sin comenzar a escribir. Después le vuelven a decir que no entienden qué es lo que hay que hacer. La profesora, con tono de desesperación, les dice: “¡Pero, chicas, si es lo que estuvimos el otro día viendo!: que fumar es malo, que comer mucha grasa también”. Ante ello

¹⁷⁸ Bernard Lahire (1993) trata estas cuestiones con relación al aprendizaje de la lengua en niños/as de las clases populares escolarizados en la escuela primaria francesa.

algunas exclaman, “¡Ah, lo de siempre! Lo de que no hay que fumar y que estamos gordas porque comemos fatal” (Registro de campo: observación en grupo de alfabetización la RMI, proyecto 5, zona sur de Madrid, febrero 2008).

Las mujeres gitanas beneficiarias de la RMI reconocen que no responden a las expectativas que se depositan en ellas, y tienden a culpabilizarse por “no recordar” las temáticas que han sido tratadas en sesiones anteriores de los cursos, lo que pone de manifiesto que parten de la idea de que su papel en ellos consiste en memorizar y en repetir los contenidos estudiados.

Una profesora de alfabetización de un grupo la RMI de la zona sur de Madrid, con la que estoy charlando, me dice –delante de su coordinadora– que está cansada de tener que repetir una y otra vez las mismas cosas. La coordinadora insiste en que las mujeres “ya se lo saben”, y la profesora del curso continúa diciendo que ha tenido que “repasar de nuevo” la pirámide de los alimentos porque no la recuerdan. En la sesión que observo a continuación, esta profesora pregunta a sus alumnas los nombres técnicos de los alimentos mediante la siguiente fórmula: “¿Qué dijimos la semana pasada de comer hidratos de carbono todos los días?”. Las mujeres se quedan calladas y ninguna responde. Al final una dice: “Que comemos muy mal: filetes fritos y patatas”. (Registro de campo: observación en grupo de alfabetización, proyecto 5, zona sur de Madrid, marzo 2008).

Asumen, por tanto, que el problema es de ellas por ser incapaces de desempeñar su rol escolar, calificándose a sí mismas de “torpes” y “cabezotas”.

Durante el verano me paso por casa de Juana, gitana de 40 años, ya abuela, que después de invitarme a un refresco me pregunta por la profesora de alfabetización con el siguiente añadido: “Pobrecita, le damos mucho trabajo con lo torpes y cabezotas que somos”. (Registro de campo: observación en Cañada Real-Valdemingómez, alumna de proyecto 1, agosto 2006)

En los grupos de alfabetización donde se ha realizado observación participante se suele desarrollar un esquema vertical de comunicación, según el cual los profesionales, por su posición de expertos, asumen toda la responsabilidad de la transmisión de la información (Ayala Rubio y García García, 2009). Se responsabilizan o, más bien, se hiper-responsabilizan de la organización de las clases (de preparar la información, de transmitirla, de mantener el orden, de lograr que las mujeres interioricen los contenidos, etc.) y su manera de dotarse de reconocimiento profesional pasa por lograr que las mujeres hayan entendido los contenidos transmitidos. Así, cuando comprueban que ciertos contenidos no han hecho mella en ellas, se muestran frustrados y agotados.

Una de las educadoras de la fundación le dice a la coordinadora, en un descanso entre los dos cursos de alfabetización, que está agotada de tener que repetir una vez tras otra la pirámide de propiedades de los alimentos a las mujeres gitanas. Afirmo que no sabe cómo hacer para que se lo aprendan, y que ellas no son capaces de recordarlo de una semana a la otra. La coordinadora de la ONG le dice que está segura de que se lo saben, que ella misma lo ha trabajado varias veces con las mujeres y “es pan comido”. La educadora, con tono de enfado, le contesta que no es así, que le acaba de preguntar a uno de los grupos por ese tema y que se han quedado calladas (Registro de campo: observación en fundación que imparte proyectos de alfabetización en zona sur de Madrid, proyecto 5, mayo de 2008).

Estos cursos de alfabetización pueden ser calificados de híbridos porque, por un lado, funcionan como un aula escolar tradicional, es decir, organizada por edades y niveles de

conocimiento de los alumnos pero, por otro, están pensados como lugares de encuentro –de carácter horizontal– de las mujeres gitanas, como espacios de socialización y de afianzamiento del tejido social de los perceptores de la RMI. Por ello es por lo que se alternan las sesiones que, tienen el formato de charla con otras que adoptan el de “debate libre”, en las que se busca que las mujeres opinen y se expresen libremente. En cuanto a la tarea específica de alfabetización, se suele llevar a cabo mediante la utilización de material escolar, que se trabaja de forma individual y se clasifica en archivadores según el nivel académico de cada mujer. Cada una tiene, por lo general, una carpeta con fichas referidas a las distintas áreas educativas: escritura, matemáticas básicas, comprensión lectora, etc. Cuando llega el momento de escribir, leer o hacer cuentas, las profesoras les dicen a las mujeres qué actividades deben hacer y pasan por sus pupitres para supervisar sus ejercicios y resolver dudas. A veces se dedican varias sesiones seguidas a una temática específica. En estos casos, las educadoras o profesoras introducen los contenidos, después suelen pasar hojas de ejercicios y/o promover algún debate relativo a esa temática, y más tarde puede haber charlas (de una hora de duración cada una, aproximadamente) impartidas por profesionales externos al PII de que se trate, a quienes se invita a hablar sobre cuestiones concretas relacionadas, por ejemplo, con la prevención de la salud, la crianza de los niños o el uso “normalizado” del sistema sanitario, tal como se ha visto en apartados anteriores.

Si bien algunos educadores sociales que hemos entrevistados aseguran que no se sienten cómodos encarnando la función de profesor o de experto cuando trabajan con los beneficiarios de la RMI en estos cursos, y dicen que quieren trabajar con ellos de una manera más horizontal, ocurre que los objetivos y los contenidos que deciden transmitir les ponen en la tesitura de tener que ser ellos los que se encarguen de pensarlos, organizarlos y transmitirlos. El papel de profesor les lleva, por ejemplo, a centrarse en controlar que el ambiente sea el adecuado para comunicar esos contenidos, por lo que suelen llamarles la atención a las mujeres que hablan demasiado o que interrumpen su exposición. El ruido, la oralidad y el movimiento corporal se vuelven obstáculos para ellos, por lo que les piden frecuentemente que “se tranquilicen”, “que escuchen”, “que paren un poquito de hacer lo que están haciendo” o “que se comporten”. Se las reprende y, en general, se las trata como si fuesen niñas y ellas, en consecuencia, acaban convirtiéndose en niñas traviesas que se divierten fastidiando al profesor, por lo que el ruido, las bromas entre las alumnas o los móviles que vibran o suenan también acaban por dificultar la labor profesional. Tras presenciar algunas de estas sesiones de los cursos de alfabetización, uno/a tiene la tentación de pensar que los comportamientos infantiloides de algunas beneficiarias de la RMI

responden, en realidad, a una táctica orientada a obstaculizar que la clase transcurra ordenadamente (De Certeau, [1980], 1990: 61, en Bessin y Roulleau-Berger, 2002: 7), es decir, actúan como si hubieran resuelto que, dado que no pueden dejar de asistir a estas clases, sí pueden –al menos– obstaculizar su buen funcionamiento.

Según algunos autores, estas tácticas pueden ser interpretadas como armas específicas de los dominados (Bessin y Roulleau-Berger, 2002: 7) que son utilizadas para protestar por lo que consideran ciertas imposiciones: en el caso de las mujeres gitanas, para protestar por la imposición de su participación, a la vez que por las formas que tienen los profesionales de hacer y de ver el mundo. Sirven, además, para expresar que no están interesadas ni motivadas por los contenidos que se imparten. Las protestas de las mujeres no tienen, por lo común, un trasfondo colectivo, es decir, no expresan críticas reflexionadas colectivamente sobre aspectos que les gustaría cambiar, sea sobre las dinámicas establecidas en las aulas o sobre los contenidos educativos propuestos. Sin embargo, he podido detectar en algunos grupos de alfabetización que las tácticas individuales de protesta o incomodación se están transformando en pequeñas resistencias colectivas. Así, algunas mujeres que se quejaban sólo fuera de las aulas por el aburrimiento que les suscitaban los contenidos trabajados en las clases, por el hastío que sentían a causa de la repetición constante de los mismos o, sobre todo, porque consideraban que los profesionales se entrometían demasiado en sus vidas personales y domésticas, están comenzando a exponer sus quejas delante de ellos. Este tipo de protestas más reflexionadas y de carácter más colectivo las he observado únicamente en los grupos que concentran alumnas más formadas, de menor edad, con prolongada participación en los grupos educativos asociados a la RMI y/o que participan en el culto evangélico.

Cabe decir, por otro lado, que en estos grupos se despliega un control que cabe calificar de “blando”, en la medida que implica una directividad de baja intensidad que se plasma sobre todo en un asesoramiento en lo cotidiano que parte del supuesto de que el profesional sabe (como profesional que es) lo que es mejor para las alumnas. Éstas, confrontadas a unas temáticas que perciben como lejanas a sus preocupaciones vitales y a unas charlas cuyos formatos (principalmente charlas/exposiciones a partir de PowerPoints) y cuyo vocabulario (técnico y complejo) les resultan ajenos y/o difíciles de descifrar, no tienen problema en relajarse y dejar que los profesionales hagan su papel. La reacción más común, por tanto, salvando las excepciones indicadas más arriba protagonizadas por las mujeres más jóvenes e instruidas, consiste en invisibilizarse y en evadirse mentalmente del lugar mientras manipulan sus móviles, pintan en los pupitres o lanzan miradas perdidas al vacío. Los resultados de otras investigaciones en las que he participado (Ayala Rubio y García García,

2009; Ayala Rubio, 2009) me llevan a pensar que las dinámicas de obligatoriedad que, en la práctica, están en la base del reclutamiento de titulares gitanos de la RMI para las actividades de los proyectos de integración y, por ende, de estos cursos de alfabetización, sitúan a estas alumnas inexorablemente en una posición pasiva con respecto a los profesionales. Las solicitantes/beneficiarias de la RMI de clase baja y de clase media-baja, como se ha visto en capítulos anteriores, han incorporado la asimetría de poder con respecto a ellos, por lo que con frecuencia asumen que su papel es “aguantar” las múltiples interpelaciones que les dirigen así como su insistencia en tratar temáticas que no son habitualmente de su interés.

Se trata de una pasividad que, al interiorizarse, termina por ser trasladada a otros ámbitos de relaciones con las instituciones públicas, de modo que los usuarios de la RMI terminan por esperar, como si fuese de lo más natural, que éstas les orienten y/o les digan lo que deben hacer en los aspectos más diversos de esas relaciones. Por ejemplo, una joven gitana de 16 años, que no estaba asistiendo a la escuela secundaria, se justificaba por ello del siguiente modo: “Como no me ha llegado la carta de la Comunidad de Madrid, no voy al instituto” (Registro de campo: conversación informal en asentamiento La Jungla, octubre 2007). Decir, por último, que las mujeres gitanas de clase baja, con pocos recursos discursivos, son las más proclives a adoptar esta actitud pasiva y a des-responsabilizarse de lo que ocurre en los grupos de alfabetización vinculados a la RMI, delegando cualquier tipo de decisión en los profesionales.

7.5 *Maternalismo y moralización en los grupos RMI: lo que implica educar*

Analizamos a continuación algunas prácticas y situaciones de la intervención profesional en las que la moralización de los gitanos beneficiarios de la RMI es una práctica común. En los cursos donde acuden mujeres gitanas es donde los profesionales (también mujeres, por lo general) despliegan una actitud más maternalista y moralizante, haciendo a menudo comentarios sobre esferas privadas de sus vidas. Todo ocurre como si la asociación que habitualmente se establece entre la mujer gitana y el rol de cuidadora diera una patente de corso para sacar a la luz los recovecos de sus vidas familiares. En cambio, cuando se trata de grupos de gitanos varones, no se trabajan temas de esta naturaleza, sino relacionados con la contención de impulsos y la modelación del carácter, y a veces también con el establecimiento de límites a los hijos, los hábitos saludables y el uso “normalizado” de las instituciones públicas. Pero volviendo a las mujeres gitanas, las profesionales insisten en organizar sus vidas y en asesorarlas en diferentes facetas: les recomiendan qué comer, cómo cocinar los

alimentos, a qué tipo de actividades deberían dedicar su tiempo libre, cómo tratar a sus maridos, etc. Las educadoras y las profesoras despliegan una cierta actitud de superioridad, que se ha optado por calificar de maternalista (en lugar de paternalista) por provenir de mujeres, sermonean frecuentemente a las usuarias por no hacer “lo que más les beneficiaría” y emiten observaciones que denotan su desacuerdo con los comportamientos de éstas. Esta actitud aparece, unas veces, abiertamente en forma de regañina por alguna conducta de las gitanas y, otras veces, lo hace de manera velada y/o sutil cuando las profesionales tratan de seducirlas para que asistan a ciertas actividades que les convienen “por su bien”. Es común ver, por ejemplo, que gitanas adultas y con responsabilidades en sus familias son instruidas sobre cosas tan nimias como la preparación de los bocadillos para sus hijos o sobre cómo planificarse el tiempo para poder “superar la pereza” y asistir a ciertas actividades que, generalmente, han no sido organizadas o propuestas por ellas.

La educadora les comenta: “Yo os digo que os organicéis para ir, que luego solas os da pereza ir”, sugiriéndoles que vayan al Día del Niño que se celebra en el distrito. Lo dice con paciencia, con tono de madre abnegada cansada de repetir lo mismo, y añade: “Organizaos, haceros unos bocatas y os vais con los niños”. (Registro de campo: observación en grupo la RMI con sede en Servicios Sociales, zona sureste de Madrid, proyecto 10, septiembre 2009.)

La actuación de la educadora que aparece en la anterior cita etnográfica va más allá de informar sobre la posibilidad de animar a las mujeres a que acudan a una serie de actividades: supone una moralización, aunque “blanda”, leve y sutil, de sus maneras de ser y/o hacer que se entrevera en los argumentos que dirige a convencerlas y motivarlas para que lo hagan. Al haberse generalizado y, en cierto modo, naturalizado la intromisión de los profesionales de la intervención social en la intimidad y en la cotidianeidad de estas mujeres, no es fácil distinguir cuáles son los límites entre darles consejos útiles y entrometerse en sus vidas. El siguiente verbatim proporciona otro ejemplo de ello:

Una de las profesoras de grupo la RMI, trabajadora social de unos 30 años, me dice que las mujeres gitanas tienen una “ausencia total de límites”. Explica que trabajan con ellas “todo el tema de las habilidades sociales”. La mediadora social continúa afirmando que “son culturas muy diferentes”, y cuando se refiere a la educación infantil, declara: “Les decimos una y otra vez que determinadas cosas son malas a largo plazo para los niños, que tienen consecuencias, pero por aquí les entra y por aquí les sale” (Registro de campo: observación en asociación de zona sur de Madrid, proyecto 8, zona sur de Madrid, marzo 2008)

Algunas ideas, como la de “autoestima” o la de “empoderamiento” de la mujer, que vertebran ciertas actividades que organizan para ellas, incluidas las que tratan sobre “hábitos saludables”, son utilizadas a veces como coartadas para justificar el enjuiciamiento profesional de las conductas de las beneficiarias de la RMI. El verbatim que se expone a continuación sirve para ejemplificar, de manera bastante extensa, este uso de las actividades,

que se revela a través de los comentarios que profiere una trabajadora social de un centro de salud que fue invitada a dar una charla a las mujeres gitanas que estaban asistiendo semanalmente a las sesiones de educación para la salud que se estaban impartiendo en ese centro.

Entramos al aula, después de esperar sentadas en las escaleras cinco minutos porque antes estaba cerrada. También lo hace una mujer que dice, al presentarse, que es trabajadora social, que se llama Concha y que una doctora amiga suya, la que les lleva las dietas, le ha pedido que dé la charla. Hay cinco mujeres gitanas, la mediadora social, la profesora del grupo la RMI y yo. Después de decir en qué dos centros de salud trabaja, comienza asegurando que hay gente “que lo que busca es el dinero”, y que aunque ella entiende que el dinero es importante para comer, también hay que desarrollar la curiosidad, las ganas de tener información. Prosigue afirmando que “la mujer puede florecer en cualquier edad”, ya sea a los quince, veinte o setenta años, “pero que, si no es curiosa, no es mujer”. Varias mujeres se ríen. Continúa contando que conoce a muchas mujeres guapas, “con melenas estupendas, pero que no saben leer ni escribir”, y que a ella le cuesta mucho “convencerlas”, pero que tener información es como tener “los ojitos bien abiertos”. Continúa contando que a ella la va a ver gente y que “si no tienen derecho a las ayudas, no hay que mirar sólo en esa dirección”. Las mujeres la interrumpen para contarle algunos casos de familiares y personas allegadas, y le preguntan si tienen derecho a ayudas sociales. Concha insiste en que ella no lleva el tema de la RMI y del cheque bebé, que eso lo deben preguntar en Servicios Sociales. A la vez que contesta algunas de sus preguntas, Concha va emitiendo frases sobre los “derechos limitados” con que se cuenta y sobre cómo los profesionales tienen que tratar de estar comunicados entre sí para que las familias no reciban recursos por duplicado. Varias veces les dice que pregunten lo que quieran. Sin embargo, cuando una de las mujeres expresa no saber si su padre tiene derecho a una ayuda y haberse sentido maltratada por su trabajadora social de Servicios Sociales, quien “le tiene manía”, Concha le responde: “Esa palabra, manía... Yo quiero hablar de emociones destructivas, de palabras que cada vez que las pronunciamos nos destruyen. Cuando sacamos esa palabra, manía, por la boca, ya nos está haciendo mal”. Concha prosigue diciendo: “A veces las personas van en busca de un dinero y, si no lo consiguen, se bloquean”. Ante eso, la gitana anterior, de unos 35 años y madre de dos hijos, llamada Aurora, le repite que tiene claro que su trabajadora social “le tiene rencor”, ante lo que Concha exclama: “¡Otra palabra! Los trabajadores sociales no somos perfectos, somos humanos. Pero la RMI no es eterna, y tenemos que hacer por vivir de nosotras mismas, por trabajar, por ir creciendo, formándonos, para que no nos pase lo mismo que les ha pasado a nuestros padres, que ahora por no haber cotizado a la seguridad social, tienen unas pensiones no contributivas de 300 euros”. Continúa diciendo que, al final, recogerán lo que han cosechado en su vida y que “la RMI tiene unos requisitos y, si no los cumples, no es que te tengan manía, sino que hay unas leyes y están para cumplirlas”. Sostiene que las mujeres son responsables de tener esa información, y que “cuando vamos a los sitios, vamos ya bloqueados, no escuchamos, porque vamos con la cabeza caliente”. Aurora se defiende replicándole que la trabajadora social a la que se refería no la escucha, porque su hermana cometió un error y, a partir de ahí, “les ha cogido manía”, atendiéndoles “desde la puerta, como a los perros: en dos minutos” e invitándolas a que cojan cita “para dentro de tres meses”. Concha le contesta diciéndole que es fácil mirar los fallos ajenos, pero que también tienen que preguntarse en qué fallan ellas, porque “a lo mejor tenemos que desarrollar un poco de paciencia y hay que saber esperar”. Aurora le responde sin apenas esperar a que termine: “¡Si sigo esperando, mi padre se muere antes de tener la pensión! Voy a coger otra cita y le voy a pedir a Sara, la mediadora, que me acompañe, que ella habla muy bien”. Concha le pregunta que por qué no va su padre solo a reunirse con la trabajadora social, y Aurora le contesta que ella es la hija mayor y le ayuda con las gestiones, porque él “no sabe hablar”. Ante esto, Concha le dice: “A lo mejor es un error que le lleves tú a todos los lados”. Aurora, sin responder a este comentario, expone que su padre quiere ir a un centro de día y le pregunta a Concha si hay posibilidades de conseguirle una plaza. Ante las evasivas de Concha a esta pregunta, Aurora sube el tono y le dice que las trabajadoras sociales “están allí para ayudarles” y que, si no sirven para eso, que deberían hacer otro trabajo. Varias de las mujeres asienten, y una exclama “¡Para eso están!”. Concha declara que ella no puede aceptar que los trabajadores sociales sean la causa de todos sus problemas, y sostiene que ellos actúan con unos criterios profesionales. Viendo que el ambiente se ha caldeado, intenta cambiar de tema diciendo: “Vamos a dejar que hablen otras mujeres. No seamos egoístas”. La mediadora social gitana interviene y le pregunta qué es lo que

hace exactamente un trabajador social de centro de salud. Cuando Concha se lo explica, Soledad, mujer gitana de unos 50 años, cuenta el caso de su padre, hombre muy enfermo que está a cargo de su hermana menor y que, según dice, necesita que le ingresen “porque está mal de la cabeza”, lo que supone mucha carga para su hermana. Soledad le pide que le haga el favor de buscarle un centro para su padre, aunque especifica que él no quiere ser ingresado. Concha interviene afirmando que, efectivamente, es mucha carga para su hermana, pero que si él no quiere ser ingresado, no se le puede obligar. Le pregunta si está con psiquiatra, a lo que Soledad responde que “con todo”. Concha le dice entonces: “A veces lo que te queda es que vayas a Servicios Sociales y, aunque la ley de dependencia no está clara, demandar una ayuda a la cuidadora y al dependiente grave”. Soledad comenta que el problema es que “se le cruzan los cables y le amarga la vida a su hermana”, a lo que Concha replica con estas palabras: “Claro, entiendo que ella quiere que desaparezca el problema, pero a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos es que hay determinadas cosas que no deberíamos aguantar ni de nuestra familia. Lo mismo hasta podríamos denunciarlas”, añadiendo: “No tenemos que aguantar todo, tenemos que crecer en autoestima”. Les pide a las mujeres que “confíen en las profesionales”, porque lo que hacen “es para bien”. La mediadora vuelve a preguntar que, entonces, ella qué hace, a lo que responde: “Yo doy información, le digo a la gente qué pensión puede que le den y qué recursos sanitarios tenemos aquí, pero es la gente la que tiene que recorrer el camino. Yo no lo puedo recorrer por ti” (Registro de campo: charla de trabajadora social de centro sanitario, barrio suroeste de Madrid, proyecto 5, marzo 2008).

La intervención, altamente moralizante, de la trabajadora social que se recoge en la anterior cita etnográfica nos muestra con detalle, además de algunas de las estrategias profesionales que hemos tratado en apartados y en capítulos precedentes, las reacciones que provocan en las beneficiarias de la RMI ciertos comentarios basados en imágenes estereotipadas del colectivo gitano. Y constituye un nuevo ejemplo de que el espacio reservado, según se supone, a la “educación para la salud” es aprovechado para culpabilizar a las mujeres de cuestiones como ser excesivamente dependientes de ciertas prestaciones sociales o no querer “crecer en autoestima” y conocimientos. La guinda del pastel la puso la trabajadora social que protagoniza el caso reseñado inculcando a la hermana de una de las asistentes por dejarse “maltratar” por su padre, como si la “falta de autoestima” fuese la causa de que esta mujer estuviera sobrecargada de tareas de cuidado, de manera que, por otro lado, aparece también en esta cita una constatación empírica más de que esta “falta de autoestima” (o de voluntad para adquirirla o “subirla”) ha pasado a formar parte del conjunto de coerciones que reciben las mujeres gitanas en estos espacios socioeducativos.

Las profesionales hablan a menudo, en dichos espacios, sobre los comportamientos que las gitanas deberían cambiar dando consignas acerca de cómo deberían hacerlo, y les recuerdan cuáles son sus “responsabilidades” sea como madres, como beneficiarias de una prestación por la que tendrían que “dar algo a cambio” o como “ciudadanas”, lo que conllevaría el deber de acoplarse a las normas generales de las instituciones públicas.

Estamos en unas sillas esperando, a la entrada del centro de salud, a que lleguen varias mujeres gitanas que habían dicho que iban a asistir a la charla sobre educación para la salud. Una de ellas, joven de 22 años, perceptora de la RMI, dice: “¡Ya está bien!, ¡cada vez venimos menos a estas charlas! No sé por qué no las quitan. Venimos a la fuerza”. Asegura que se siente enferma pero que no ha faltado porque tiene mucho miedo a que le quiten “el IMI”. Ante sus comentarios, la

profesora del grupo de alfabetización, que está presente, quien en otras sesiones me había comentado que estaba cansada de que faltaran a clase cuando querían, le contesta: “Me parece muy bien que hayas venido. Esto es una contraprestación, un toma y daca. Si estás enferma, es justificable que no vengas, pero tienes que traer un justificante médico”. La mujer le responde que ella no va al médico para cada pequeña cosa. (Registro de campo: observación en centro de salud durante una actividad relacionada con la RMI, zona sur de Madrid, proyecto 5, mayo 2008).

Las profesionales, por tanto, contribuyen a generar en estos espacios educativos una representación de lo que implica ser ciudadano relacionada con los derechos y las obligaciones que se piensan (o, simplemente, se tratan) como ligadas a las distintas prestaciones sociales. Así, les recuerdan a las mujeres beneficiarias de la RMI que su derecho a recibir ésta está condicionado, le ha sido otorgado porque han asumido unos compromisos que deben cumplir; y algunas consideran que, para inculcar una cierta conciencia ciudadana en estas mujeres, es necesario “machacar” continuamente en las clases ciertos y temáticas. La insistencia y la repetición se conciben, por tanto, como elementos que facilitan el trabajo pedagógico en estos cursos de alfabetización. En el fragmento de diario de campo que se reproduce a continuación, una profesora y una mediadora social gitana explican que han de ser insistentes e intercalar pronósticos amenazantes en sus alocuciones como estrategias –que suponen efectivas– para concienciar a las mujeres gitanas sobre la necesidad de educar adecuadamente a sus hijos.

Una de las profesoras de alfabetización, de unos 50 años, me comenta que hacen hincapié en trabajar contenidos como los nutrientes de los alimentos o acerca de cómo preparar desayunos equilibrados para los hijos de las mujeres gitanas del grupo la RMI. Afirma: “Insistimos mucho en que le den la oportunidad de una vida laboral a sus hijos para que no estén asentados en la RMI como ellas”. La mediadora social, presente en la conversación, pastora del culto evangélico, añade: “Y les decimos que, si no dejan que sus hijos vayan al colegio y se preparen, puede pasar que tengan que meterse en las drogas”. Me explica que, en la sesión anterior, vieron un video con ellas sobre las 3000 viviendas de Sevilla, en el que aparecían niños gitanos de diez años que ya tenían problemas de drogadicción. (Registro de campo: conversación con profesora y mediadora social gitana, proyecto 8, asociación de zona sur de Madrid, marzo 2008).

Esta insistencia permitió que consiguieran, según dijeron más tarde las profesionales de la anterior cita etnográfica, que las mujeres con las que trabajaban asistieran a revisiones ginecológicas. De hecho, la mediadora social usa de una manera habitual su relación de cuasi-amistad con ellas para pedirles que, como “favor personal”, asistan a esas revisiones. Busca, de este modo, que se impliquen en este tipo de actividades apelando para ello a un compromiso personal y afectivo. En cuanto a la profesora, sostuvo en mi presencia que la mediadora social “es muy buena” poniendo como ejemplo de ello la perseverancia de que hacía gala para convencer a las mujeres de que fueran al ginecólogo. “Las ha llamado mucho” añadió, expresando de esta forma que, uno o dos días antes de la cita médica, suele llamarlas para que “no la dejen plantada” y pedirles que “no la hagan quedar mal” ante unas personas “que han reservado tiempo para ellas”.

La insistencia como metodología profesional, así como la insistencia con que se repite años tras año la presencia de ciertos temas en las charlas y talleres de los proyectos de integración, guarda relación con la sinergia que se ha establecido entre profesionales del ámbito de la intervención social y del ámbito sanitario en ciertos foros de encuentro y/o de coordinación inter-profesional, como es el caso de la Comisión de Población Excluida de Villa de Vallecas, de la que ya se ha hablado con relación a otra cuestión. En las reuniones de estos foros, el personal sanitario se pone de acuerdo con el personal de las ONG que desarrollan proyectos de integración con respecto a los contenidos que los primeros van a impartir los días en los que son invitados a dar charlas sobre “promoción de hábitos saludables” en los referidos proyectos. Así, en una de estas reuniones, celebrada en junio de 2007, una médica, tras la programación de contenidos para las sesiones del año venidero, planteó que había que trabajar con las mujeres gitanas el objetivo de “que sean capaces de cuidar a los niños” debido, según afirmaba, a “su dificultad para el ejercicio de sus funciones maternas”. La misma médico enfatizó después que su cometido en los talleres que impartía era “estrictamente técnica” y consistía en “trabajar la parte sanitaria”, de suerte que conseguía presentar, de manera deliberada o no, como una verdad técnica la falta de habilidades maternas que, según decía, tenían estas mujeres y disfrazar como conocimientos científicos lo que no eran sino sus prejuicios sobre el colectivo gitano. Ello apunta a que la insistencia en trabajar ciertas temáticas responde, así, a la fortaleza con que en los profesionales están arraigados algunos prejuicios de índole carencial sobre el colectivo. Por otro lado, en estos espacios de encuentro, la RMI es enfocada como una herramienta que permite captar a las asistentes a estos talleres y charlas; y, así, cuando alguien preguntó en la referida reunión cómo se conseguía que esas mujeres quisieran participar, la contestación que se obtuvo fue que “la mayoría son perceptoras de la RMI y saben que es muy importante asistir”.

Los profesionales de la intervención social no sólo piden a las mujeres gitanas que se involucren en las jornadas de puertas adentro de las ONG, sino que participen también en otras actividades organizadas con motivo de distintos festejos, como el día de la mujer trabajadora o el día del niño, por ejemplo, que suelen conllevar excursiones de varias horas y/o la intervención en debates sobre cuestiones como la violencia de género, los derechos humanos, etc. Estas actividades, que pueden considerarse anexas a los cursos de alfabetización, sirven –como se ha comentado en otro capítulo– para dar publicidad a la entidad financiadora de los proyectos de integración, por lo que la Comunidad de Madrid insiste en que la población gitana esté presente en ellas. Así, los profesionales de la Comunidad de Madrid con responsabilidad en el ámbito de la exclusión social, como es el

caso de los profesionales del IRIS, se sienten con autoridad para presionar a las gitanas destinatarias de esos proyectos de integración para que asistan a las jornadas y actos anuales más importantes. En la siguiente cita etnográfica, podemos ver que la educadora de la ONG que implementa uno de estos proyectos de integración en la zona este de Madrid no quiere enemistarse con la coordinadora del IRIS, por lo que no protesta cuando ésta, sin advertencia alguna, entra a su clase para instar a las mujeres en el sentido señalado.

Estamos en una sesión de alfabetización. Cada mujer está trabajando en sus hojas de caligrafía. La coordinadora del IRIS entra, interrumpiendo la actividad, y le dice a la educadora que quiere comentarles algo a las mujeres. No se disculpa por la interrupción y directamente procede a hablarles a éstas. La coordinadora les dice que les va “a venir muy bien asistir a la actividad”, que habrá música y comida, que se lo pasarán muy bien y que hasta les pondrán un autobús. Después de que varias mujeres pongan algunas pegas para asistir a esta actividad organizada por el IRIS, aduciendo cosas como: “¿Quién le va a cocinar a mi marido?” o “¿Dónde vamos a dejar a los niños?”. La coordinadora de IRIS reacciona regañándolas fuertemente y diciendo: “¡Es increíble! Vosotras sólo pensáis en familia: hijos, familia-hijos... ¡Ni un día para vosotras! ¡Mira que sois! No me puedo creer que no os apetezca tener un poco de tiempo para vosotras mismas. ¡Sois la monda! ¿Acaso ellos os dan explicaciones de lo que hacen? Que se hagan un bocata y ¡ya está!”. Algunas mujeres asienten, otras la ignoran mirando en otra dirección y una de ellas le pregunta si podría hablar con sus maridos y decirles que “están obligadas a ir porque, si no, les quitan la paga”. Ante ello, la coordinadora del IRIS le dice que sí, que podría hacer eso. (Registro de campo: observación en curso de alfabetización que se imparte en poblado chabolista La Jungla, proyecto 3.2, zona este de Madrid, marzo 2008).

En la anterior cita etnográfica se puede apreciar la falta de voz que tienen estas mujeres a la hora de definir cuáles son “sus necesidades”, así como la crítica de que son objeto cuando no se plantean tener “tiempo para sí mismas”, entendido éste –no hay que olvidarlo– según la definición que emana de las profesionales, que entronca con los procesos de individualización cuyas principales características se han tratado en capítulos precedentes. Por otro lado, esta misma cita etnográfica sirve para reflexionar sobre el juego que hay alrededor de la supuesta obligatoriedad de las actividades vinculadas a la RMI y las estrategias que utilizan las mujeres gitanas para tener algún margen de negociación en ellas: en ella se ve que una de las mujeres gitanas de clase baja le pide a la coordinadora del IRIS que le diga a sus maridos que ir a la actividad que está proponiendo es “obligatorio por cobrar la paga”. El hecho de que esta mujer insinúe esta posibilidad a la profesional indica a las claras que sabe que, en estos ámbitos, se está jugando continuamente con la “ilusión de la obligatoriedad” de la asistencia a las actividades. Le propone, entonces, “engañar a sus maridos” y poder desatender, de este modo, sus obligaciones domésticas durante un día para ir a la actividad propuesta o, más bien, casi exigida por la coordinadora. Se puede ver, de este modo, que el marco de obligatoriedad de la RMI (cuya retórica les han transmitido los profesionales) puede ser modificado creativamente por las gitanas perceptoras de la misma, mostrando con ello, al mismo tiempo, poseer cierto grado de autonomía y gran capacidad de

adaptación a las circunstancias más diversas. Por último, la cita etnográfica sirve también para debatir la idea de la “falta de motivación” de los gitanos beneficiarios de la RMI para participar en las actividades que se les proponen así como para cambiar sus vidas en un sentido “más moderno”.

Esta “falta de motivación”, prejuicio asumido por la mayor parte de los profesionales, es, como se ha tratado en otro lugar, el producto de una red de intervención social que mantiene la coartada de la obligatoriedad de la asistencia como contraprestación a la RMI, lo que dificulta el desarrollo de herramientas o de pedagogías de intervención social de índole más participativa y más respetuosas con los puntos de vistas de los colectivos con los que se interviene. Ello, junto a la ausencia de espacios donde los profesionales debatan y compartan los dilemas que surgen en su trabajo con la población gitana (Zamanillo, 2011; Martín Estalayo, 2011), contribuye a que se sigan reproduciendo las mismas acciones sin que se transformen ni se cuestionen, como se ha visto ya en el capítulo 4, donde se planteaba, entre otras cosas, la existencia de una cierta “ceguera selectiva” por parte de estos profesionales que no facilita que se consideren a ellos mismos como elementos a tener en cuenta en los análisis de las causas de esa “falta de motivación” del colectivo gitano. Así, por ejemplo, se ha visto en este mismo apartado que no suelen preguntar a las gitanas beneficiarias de la RMI que participen en los cursos de alfabetización qué es lo que les interesa hacer o saber de cara a determinar los contenidos o las actividades a incluir en esos cursos.

7.6 Recapitulación

En este capítulo se ha pretendido mostrar, a través de la descripción de algunas de las actividades que se desarrollan en los proyectos de integración y de la moralización subyacente o explícita que tiene lugar en estos espacios educativos, la fuerza que toma el proceso resocializador de las gitanas beneficiarias de la RMI. La selección de contenidos que se imparte, así como el lenguaje del autodisciplina y de la contención al que se recurre para hacer referencia a las cualidades personales necesarias para el auto-cuidado, a la vez que la intromisión frecuente en la vida íntima de las mujeres, ponen de manifiesto que detrás de las charlas sobre violencia o desigualdad de género, de las jornadas sobre cuidados infantiles o de los talleres sobre educación para la salud, para enumerar una sola actividad más, se está generando un campo de intervención social propenso al disciplinamiento y al control de la población, en este caso, gitana.

Por otro lado, el esquema vertical de comunicación que se establece en esos talleres y charlas, que entraña que la autoridad se ubique únicamente en el profesional (en su rol de

“asesor”) y la capacidad de cambio en el receptor de la información transmitida, hace que lo que se califica de “falta de motivación al cambio” sea –como se ha visto en páginas precedentes– la única razón explicativa de la inexistencia de interés o deseo explícitos de cambiar por parte de la población que asiste a ellos, lo que lleva fácilmente a culpabilizarla. Ante esta “falta de motivación”, los profesionales contraatacan repitiendo de nuevo los talleres y las charlas, es decir, actuando como si esa población sufriese anualmente de una suerte de sordera. Un aspecto problemático de esta situación consiste en que acaba calando en las mujeres que participan en las actividades, de manera que las de posición social más baja, que antes no comparten los valores transmitidos a través de esas actividades, terminan entendiendo sus comportamientos como erróneos, y las que ocupan mejores posiciones sociales, que sí los comparten, terminan viéndolos reforzados. Así, este marco de representación de las mujeres, en el que se las considera como “las que no entienden” o “no saben” y en el que son objeto de continuos juicios morales por lo que hacen o dejan de hacer, ha incidido en las mujeres gitanas, quienes en sus discursos reproducen la misma imagen sobre sí mismas. Además, para establecer buena relación con las profesionales y/o para dotarse de reconocimiento delante de éstas, se refieren en esos mismos términos a sus compañeras gitanas de proyecto de integración. Así, una de las sesiones que formaban parte del curso de alfabetización desarrollado por una ONG de la zona suroeste de Madrid en febrero de 2008, sesión que versaba sobre la dieta saludable, consistió en que las mujeres tenían que visitar a un médico de un centro de salud. Sólo una de las quince mujeres de ese curso la RMI acudió y, ante la no-asistencia del resto, no se resistió a comentar: “¡Es que no entienden que esto es importante!”. Es decir, no sólo es común que las mujeres se refieran a ellas mismas mediante un lenguaje minusvalorador (que las posiciona como sujetos sin información y sin saber y, por tanto, sin poder), sino que adoptan ese lenguaje para hablar de sus compañeras, con el riesgo de que ello fomente, en lugar de la acción colectiva, la descolectivización o individualización de los grupos de mujeres que acaban expresándose en los mismos términos que los profesionales.

Alrededor de la RMI se ha establecido, como también se ha visto en este apartado, una red de profesionales que desarrollan distintos tipos de actividades orientadas a convencer y a persuadir “insistentemente” a esta población de la necesidad del cambio personas que tienen que emprender en cuestiones como el cuidado infantil, la planificación familiar, la dieta, la higiene buco-dental, las posturas corporales o la autoestima. La insistencia en este un cambio personal, planeado en términos de “responsabilidad” individual, hace que se opaquen los factores sociales, económicos o históricos como variables a ser tenidas en cuenta para

comprender y analizar los comportamientos del colectivo con el que se interviene socioeducativamente. De hecho, los profesionales “tienden a configurar un modelo único de compromiso de la persona en el mundo” (Pattaroni, 2005: 183) centrado en la capacidad de auto-regulación o auto-gobierno como clave de la inserción en la sociedad (Ehrenberg, 1996).

El problema social de la exclusión social y la falta de condiciones de vida saludables se ha transformado, en definitiva, en un problema de índole individual que depende, para su solución, de la asesoría profesional y de que la población sepa los comportamientos personales que ha de adoptar “responsablemente”. Por ello, sostengo que los espacios educativos vinculados a la RMI no son lugares adecuados para producir cambios en las gitanas beneficiarias de la RMI a no ser que éstos sean cambios conducentes a afianzarlas en una posición de defensa, apuntalando así las representaciones sociales culturalista y dicotómicas como únicas lentes a través de las cuales profesionales y gitanas beneficiarias de la RMI se perciben mutuamente; aspecto éste que, junto con la ilusión de la obligatoriedad de la asistencia a las actividades de los proyectos de integración, están en el origen de bastantes malentendidos.

Conclusiones¹⁷⁹

A lo largo de este trabajo de investigación se ha analizado, desde una perspectiva socio-antropológica, la gestión y aplicación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid (CM) con el colectivo gitano español.

Desde el origen de los programas de rentas mínimas en el plano europeo, el debate sobre la contraprestación o, en otras palabras, sobre el compromiso que se les puede exigir a los demandantes/perceptores de estas prestaciones ha estado presente en la implantación de estas políticas sociales. En momentos de bonanza económica, los distintos gobiernos eran proclives a exigir únicamente ciertos compromisos “ligeros” a cambio de la recepción de la prestación económica, mientras que a partir de los años 80, en un momento histórico caracterizado por la crisis del empleo y de la Seguridad Social, se configuró una atmósfera favorable a pedir a los perceptores de estas prestaciones sociales que se comprometieran en la realización de actividades de cara a su integración o inserción social. Progresivamente, desde distintas instituciones de la Unión Europea, se ha instado a los gobiernos nacionales a elaborar planes de lucha contra la exclusión social y a configurar los programas de rentas mínimas de tal manera que pudieran dotar de cobertura o protección social a los ciudadanos en situación de exclusión social. Estas prestaciones sociales se han ido convirtiendo, así, en derechos sociales garantizados, pensados para favorecer la integración social de los ciudadanos que acceden a ellas. De este modo, a la vez que se ha ampliado el objetivo político de las políticas de rentas mínimas (instituyéndose como derecho social e incluyendo el acceso a los apoyos sociales para la inserción social), se ha propiciado un contexto político en el que los gobiernos se han sentido instados a justificar delante de la ciudadanía general que, a través del reparto de este tipo de prestaciones económico-sociales, no están fomentando la “dependencia” de los beneficiarios de las mismas, en línea con la tendencia internacional a demandarles mayores cotas de activación y/o de responsabilización, entendida la primera –como se ha visto– como la disposición favorable de los usuarios a esforzarse y a realizar actuaciones que promuevan su inclusión social. A éstos se les interpela, entonces, a ser autónomos en el diseño y negociación de los itinerarios que van a recorrer de cara a encontrar empleo y/o a insertarse socialmente. Por tanto, se puede decir que ha ganado terreno un léxico que apuntala lo que algunos autores han denominado “lógica de la activación”.

¹⁷⁹ Quisiera reseñar que el carácter de recapitulación final que han adquirido estas conclusiones guarda relación con el interés por favorecer que los/as investigadores/as extranjeros, a los que únicamente se les han remitido el resumen y las conclusiones de esta tesis en su lengua, puedan tener una cierta idea de conjunto de las temáticas abordadas en la misma.

A pesar de la existencia de un contexto favorable a la exigencia de obligaciones por parte de los beneficiarios de estas políticas, se ha mostrado que en el caso del programa de rentas mínimas de la Comunidad de Madrid aparece un matiz que suaviza la posibilidad de esa exigencia; matiz que se encuentra en la ley y en documentos redactados por el Servicio de Prevención de Exclusión de Rentas Mínimas de la CM (2005: 4-6), y que consiste en que, aun en el caso de que los beneficiarios de RMI incumplan los compromisos estipulados en sus Programas Individuales de Inserción (antiguos contratos de integración), no por ello tienen que dejar de cobrar la prestación económica. Por tanto, se puede decir que, en el caso madrileño, la correlación entre prestación económica y contraprestación no está tan clara en lo que se refiere a la RMI.

Lo anterior es coherente con algunos aspectos novedosos de la ley de RMI como, por ejemplo, el hecho de que se inste a los trabajadores sociales a que negocien los contenidos del Programa Individual de Inserción con los beneficiarios de la prestación a la vez que se les recomienda, desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y desde el Plan contra la Exclusión Social, que los apoyos sociales sean tolerantes con los ritmos de los beneficiarios. Se interpela, entonces, a los trabajadores sociales de Servicios Sociales a centrarse en una negociación del itinerario de inserción que sea respetuosa con las posibilidades y deseos de las personas perceptoras de las prestaciones económicas y a dejar más de lado la función de control del cumplimiento de los requisitos; función que, como se ha visto, era parte esencial de su labor durante el periodo (comprendido entre 1990 y 2001) en el que aplicaban el programa de rentas mínimas predecesor a la RMI, es decir, el del IMI.

Sin embargo, se ha encontrado una fuerte resistencia de algunos trabajadores sociales que aplican la RMI a adoptar esta nueva perspectiva sobre la Renta Mínima como derecho social no condicionado, utilizando aún hoy en día la lógica de la contraprestación como telón de fondo para valorar la actuación de los usuarios, de quienes siempre esperan que “den algo a cambio” de la prestación dependiendo de sus posibilidades. Se puede considerar que esta dificultad de los profesionales para adaptarse y aplicar las nuevas regulaciones de la RMI es, en cierta medida, una herencia del pasado, que proviene de los estilos de intervención adquiridos durante el periodo de aplicación del IMI. Como resultado de ello, se constata la dificultad que tienen algunos trabajadores sociales de salir de una visión reduccionista de la inserción social que la identifica con la participación voluntaria por parte de los afectados por la exclusión social en alguna actividad que promueva su integración.

Cabe recordar que, durante la implantación del IMI, los trabajadores sociales tenían capacidad para decidir que los usuarios dejaran de cobrar la prestación económica, por lo que

contaban con más autoridad que en el actual periodo de aplicación de la RMI. No obstante, el contexto social e ideológico en el que tenía lugar la intervención social estaba menos profesionalizado y favorecía, por tanto, que distintos actores sociales preocupados por la vulnerabilidad social de ciertos grupos y colectivos estableciesen sinergias y colaborasen entre sí. Era común ver a trabajadores sociales, a voluntarios y a miembros de la Iglesia Católica trabajando conjuntamente para reivindicar derechos sociales para estos grupos. Ello promovía el ejercicio de un trabajo social comunitario que se esforzaba por definir las necesidades desde la perspectiva de las poblaciones con las que se iba a trabajar y que buscaba acercarse a éstas desde análisis que tendían a buscar y explicar la complejidad de sus comportamientos y actitudes. Existía, además, entre los profesionales y otros actores sociales, un cierto consenso sobre la importancia de iniciar medidas de “discriminación positiva” como un modo de compensar las situaciones de penuria y exclusión social por las que estaban pasando colectivos como, por ejemplo, el colectivo gitano.

Por el contrario, en el contexto actual de aplicación de la RMI, a pesar de que la ley que la regula establece un nuevo derecho social de las personas excluidas a ser “acompañadas” por los profesionales de cara a favorecer su inserción social, se ha visto que la forma de interpretar y aplicar dicha ley por parte de los distintos profesionales configura un panorama nada halagüeño para el desarrollo de ese objetivo. De hecho, estos profesionales interponen una cierta resistencia a aplicar este derecho social de forma no condicionada, lo que dificulta la implantación de los aspectos más novedosos de la ley de RMI. A ello hay que añadir las dificultades que se derivan del hecho de que en la actualidad la intervención social se haya externalizado, abaratado y fragmentado, de manera que los profesionales que trabajan en unas condiciones laborales más precarias (los de las ONG subcontratadas por la Administración) han terminado por ser quienes asuman la labor de acompañamiento social. Algo pasa cuando el Estado le otorga a la parte más débil de la cadena de la intervención social la labor más delicada relacionada con el cuidado a las personas excluidas.

La retórica de la crisis económica está sirviendo hoy en día para justificar un recorte de los Servicios Sociales, que están quedando reducidos a sus aspectos más básicos y rayando con labores benéfico-asistenciales. La saturación y la escasez forman parte de los discursos de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales, quienes manifiestan no tener tiempo para realizar el seguimiento de las actividades de los Programas Individuales de Inserción con la frecuencia que consideran necesaria, lo que contribuye a producirles “queme”, cansancio o “falta de fe” con respecto al trabajo que realizan. Además, las condiciones estructurales en que desarrollan su trabajo influyen en que estos profesionales hayan pasado de ser referentes

de la intervención social a ser considerados, por la mayor parte de los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI, como gestores de prestaciones económicas y sociales que dedican su tiempo primordialmente a labores burocráticas. Así, los propios profesionales del trabajo social se perciben a sí mismos cada vez más como sujetos desvinculados de la población con la que intervienen, pero también de los cargos políticos que diseñan las políticas sociales orientadas a la inclusión social.

Se puede decir que, en el panorama actual de aplicación de la RMI, la transformación del trabajo social hacia el tratamiento individualizado de la exclusión social, así como el incremento de las labores de carácter administrativo, han facilitado que estos profesionales organicen su discurso sobre la exclusión social en torno a una visión multi-carencial de los sujetos excluidos, así como que gane espacio en él una tendencia a psicologizar, esto es, a situar en algún lugar interno de los sujetos, las causas de su situación de exclusión y/o vulnerabilidad social.

A la actual fragmentación institucional, con externalización/subcontratación de servicios a través empresas de intervención social, se añade un contexto político-institucional nada proclive a aceptar o a promover críticas a las actuaciones de la Administración Pública (o de los proyectos financiados por ella), con la subsecuente pérdida de potencial transformador del actual trabajo social que se realiza en los Servicios Sociales. En un contexto político donde prima –como se ha señalado– la instrumentalización política de la intervención social, la profesionalización de ésta y la falta de debates con potencial de transformación social, es la Iglesia Católica de base la que está adoptando el posicionamiento más crítico en los distintos espacios de encuentro entre profesionales de la intervención social de la Comunidad de Madrid en los que se ha realizado observación participante. En suma, el actual clima político no es propicio para promover cambios estructurales, sino para ejecutar soluciones puntuales que sirven, sobre todo, para aumentar la popularidad del gobierno local y/o autonómico ante el electorado. En un contexto como éste, las personas con más autoridad dentro de las instituciones públicas no se atreven a expresar críticas de calado ni a tomar la iniciativa para mejorar situaciones de gran desigualdad, limitando su papel a estar presentes en dichos espacios de encuentro profesional para recoger la información pertinente, a tratar de contener las actitudes rebeldes de algunos de sus trabajadores y a actuar de manera que parezca que sí se están haciendo cosas por solucionar “los problemas diagnosticados”.

Todo lo mencionado tiende a restar complejidad a la mirada con la que los trabajadores sociales que aplican la RMI analizan la exclusión social. De esta manera, es común que afirmen, cuando hacen referencia al cobro de la RMI por parte de los gitanos, que

éstos se han "cronificado" en las instituciones debido a esta política social. Expresan, sin tapujos, no estar dispuestos a avalar esta tendencia con sus comportamientos. De este modo, transgreden las recomendaciones que desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales les hacen llegar, poniendo énfasis delante de los gitanos beneficiarios de RMI en la importancia de "dar algo a cambio" de la prestación económica. Se va constituyendo, consecuentemente, una atmósfera de la intervención social propicia a condicionar el disfrute de los derechos sociales a ciertas conductas/actitudes de los demandantes, lo cual supone un freno al potencial innovador de la ley de RMI. Se va configurando, por otra parte, una representación del sujeto legítimo de la intervención social, del excluido ideal al que todo profesional querría ayudar: aquel que "se mueve" y "hace algo" voluntariamente por solucionar o mitigar su situación de exclusión y que, además, se apoya en la asesoría "técnica" del profesional que orienta su proceso de inserción social.

Los profesionales de la intervención social comparten una concepción del sujeto como un individuo que fragua libremente su destino, que va acompañada del enaltecimiento de valores como la disciplina, la autonomía, el esfuerzo, el ascetismo, la educación reglada, a la vez que de la percepción/asunción de que la racionalización y la planificación (con lo que estos procesos conllevan de internalización y control del tiempo) son elementos básicos para la "integración" del sujeto a la sociedad. Los profesionales insisten, entonces, en movilizar a los excluidos, aspecto éste que dota de reconocimiento y legitimidad a su labor profesional. Por tanto, los beneficiarios de RMI que son percibidos como vagos o "estáticos", que "no hacen nada para salir de su situación" (entre ellos, los gitanos, que no se entusiasman con la idea de tener que construir en esos términos un proyecto individual de cambio) son catalogados como "poco motivados" o como "resistentes al cambio".

Si todos estos elementos configuran un panorama poco alentador para la realización de acciones de intervención social coordinadas, reflexionadas y con potencial de transformación social, la conceptualización del colectivo gitano como molesto, difícil, conflictivo y resistente al cambio produce tensiones añadidas cuando éste ha de ser atendido en las instituciones públicas. Los trabajadores de éstas no están preparados para ofrecerles un trato adaptado a sus necesidades sino que hacen hincapié en que los gitanos deben comportarse de manera "normalizada", esto es, de igual manera que la población mayoritaria. De este modo, en contra de lo recomendado por algunas autoras (Pomykala y Holt, 2002: 38) que subrayan la importancia de establecer medidas de discriminación positiva para favorecer la inclusión social del colectivo gitano, o por otros autores que advierten que el carácter incondicional de un derecho no debe confundirse con la uniformidad de su puesta en práctica (Castel, 2006:

25), en la Comunidad de Madrid (o, más en concreto, en el contexto de la distribución de los derechos sociales en esta comunidad autónoma) se ha impuesto la óptica de la “normalización”, que se traduce en demandar que todos los ciudadanos hagan lo mismo y en ofrecerles, a cambio, el mismo trato. Se da, por tanto, una tendencia a la aplicación homogénea de los derechos sociales.

En otro orden de cosas, nos encontramos con que, en el ámbito de la intervención social, se presenta a los gitanos, de un lado, como un colectivo “cronificado” y con problemas de exclusión cultural (analfabetismo, inadaptación a la sociedad mayoritaria, falta de formación escolar, etc.) y, de otro, como colectivo inteligente, que protesta y demanda en exceso para conseguir cosas, que demuestra conocer sus derechos y que lo expresa de una manera agresiva (lenguaje inapropiado, petición excesiva, etc.). Ello es así, entre otras cosas, porque los gitanos cuestionan la forma de entender el mundo de los profesionales, guiada por valores como el ascenso social meritocrático, la ética del trabajo y la necesidad del esfuerzo personal como actitud para desenvolverse en la vida social.

Estos profesionales, por otra parte, mantienen interpretaciones distintas de la RMI, y así pueden enfocar su vertiente sancionadora desde una visión “ligera” de la ley (por la que evitan que se sancione a los beneficiarios a no ser que vean un claro fraude por su parte) o desde una visión “dura” de la misma (por la que buscan que se sancione a quien cometa la más mínima infracción, comunicándola a la Comunidad de Madrid en cuanto aparece y solicitando que se inicie el procedimiento correspondiente). La falta de coherencia en la legislación genera confusión en los profesionales y hace que, en ocasiones, quieran actuar como lo hacían con respecto al IMI. Así, algunos trabajadores sociales expresan que se sienten molestos debido a que la nueva legislación les ha situado en una posición incómoda y poco clara ante los beneficiarios de RMI, en cuanto que ha mermado la capacidad que antes tenían para imponer sanciones en caso de descubrir incumplimientos de los requisitos para recibir la prestación económica.

Por su lado, los gitanos no suelen comportarse según lo que se espera de los ciudadanos a la hora de solicitar diferentes ayudas sociales (vivienda o RMI, por ejemplo), es decir, a la hora de relacionarse con la Administración Pública para tramitar la solicitud de las mismas. No ocupan los espacios como el resto y, cuando están en ellos, “se hacen notar”, contraviniendo el carácter anónimo propio del trato en las instituciones públicas. En consecuencia, los trabajadores de éstas se tensan, se preparan para el conflicto; conflicto que es abonado por las prenociones que unos y otros traen. Así, dichos trabajadores actúan según la idea de que los gitanos formularán sus peticiones “fuera de tono” o a través de exigencias; y

los gitanos, estando seguros de que se les tratará mal y se les informará peor que al resto, tienden a la sobreactuación, al dramatismo y/o a la demanda exagerada (en contenido y en tono), reafirmando su imagen de maleducados y conflictivos.

Por ello, los profesionales se relacionan con los gitanos desde la desconfianza y la sospecha. De esta manera, si juzgan que se encuentran ante gitanos beneficiarios de RMI que no sufren situaciones de “extrema necesidad”, priman una intervención profesional que busca responsabilizarlos (hacerles partícipes de su destino) a través de la participación en alguna actividad, por muy nimia que ésta sea (comprar un metrobús, ir al médico, solicitar cita para el dentista, etc.) y lo justifican argumentando que cualquier cosa que hagan puede favorecer “su individualización” y promover el que aprendan las habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad. De quienes no perciben como física o psíquicamente incapacitados para acceder a un empleo, esperan que se conduzcan como sujetos autónomos y que construyan, con apoyo profesional, un proyecto personal y laboral, un “itinerario de vida”. En todo caso, cuando los profesionales hablan de la autonomía no mencionan “el saber estar” que hace falta para entrar tanto en el mundo laboral como en el mundo de los procedimientos burocráticos a los que remiten continuamente a los sujetos en posiciones sociales más vulnerables. En definitiva, no reparan en que ello “no está dado”, sino que se construye en unas condiciones económicas, sociales, ideológicas, etc. que no son precisamente aquellas en que viven los gitanos beneficiarios de RMI.

En los discursos de los profesionales entrevistados para esta tesis doctoral se han detectado concepciones contradictorias de la exclusión social. En ocasiones, conciben al excluido desde una perspectiva multicarencial que le sitúa en una posición de cuasi-discapacidad para enfrentar su futuro y, en otras, le adjudican capacidades similares a las de los propios profesionales, como las de discernimiento, de planificación y de reflexividad para concebir un plan vital que le permita “salir” de su situación. Como consecuencia de esta visión, los gitanos de clase baja y media-baja, que no valoran la inserción laboral como un elemento de reconocimiento social y que no se refieren a sí mismos ni a su destino en términos individuales y/o reflexivos, no pueden sino cuestionar el concepto central alrededor del cual se organiza la intervención profesional y son difícilmente transformables en víctimas. Se cumple, de esta manera, la “matriz contractual” señalada por Castel (1997: 474) según la cual a los individuos más desestabilizados se les exige que se comporten como “sujetos autónomos”. Con todo, la “conminación a la autonomía” de los beneficiarios de la RMI es paradójica, de un lado, porque éstos son materialmente incapaces de responder a dicho mandato y, de otro, porque la interiorización de las normas que permiten alcanzar la

autonomía tal como la entienden las instituciones públicas puede llevar a los individuos a desvalorizarse a sí mismos, entrando así en una nueva forma de dependencia. En el caso que nos ocupa –el de la aplicación de la RMI al colectivo gitano–, el mandato a la autonomía nutre el histórico conflicto con este colectivo y afianza algunas prácticas profesionales que tienden a penalizar ciertas actitudes de éste y a explicar cualquier comportamiento “disonante” por su parte –en el sentido de no “normalizado”– de acuerdo a “sus características socio-culturales”, naturalizando así su exclusión social y reificando las representaciones que se manejan sobre él basadas en “su cultura” y en su particular “idiosincrasia”. Además, ello viene agravado, por un lado, por la falta de estudios sobre la realidad gitana que sean sensibles a su complejidad y a la incidencia de la acción profesional sobre ella, lo que suscita visiones de ésta eminentemente simplistas; y, por otro lado, por la estigmatización que proviene de las representaciones sociales que se construyen desde ciertos informes “técnicos” que se han elaborado en los últimos años. Se puede decir, así, que la construcción de “el otro gitano” que proviene de las instituciones públicas impone límites a la interpretación de algunos comportamientos del colectivo gitano (por los estereotipos que entraña) a la hora de trabajar con él, dado que impide la realización de análisis complejos que permitan dar cuenta de sus actitudes y comportamientos, a la vez que evita que se incluya el trabajo profesional como variable que guarda relación con esas actitudes y comportamientos. En suma, todo ello influye en que los profesionales no muestren disposiciones proclives a invertir en el bienestar de los gitanos solicitantes/perceptores de RMI ya que, como se ha señalado, no suelen considerar a este colectivo como acreedor legítimo de las ayudas sociales del Estado.

Los profesionales ponen en práctica diversas estrategias en su relación con el colectivo gitano para generar reconocimiento y respeto hacia lo que hacen. Por un lado, los que integran el grupo que se ha calificado de fiscalizador se resisten a perder la autoridad sobre los beneficiarios de RMI, y buscan la forma de conservarla aun a costa de interpretar interesadamente la ley en sus interacciones con ellos o de utilizar estrategias no del todo legítimas. Por ejemplo, no promueven que las personas del colectivo gitano reciban una información clara y coherente de sus nuevos derechos, tienden a actuar delante de ellos como si todavía tuviesen poder para decidir acerca de la extinción de la prestación económica, u omiten la negociación consensuada del Programa Individual de Inserción (PII) para que los solicitantes de la prestación económica se comprometan con actividades de inserción que estos profesionales consideran pertinentes. Sostienen que hay un bien mayor que justifica sus actos, a saber, la “integración”, el “avance”, la “evolución” de los gitanos beneficiarios de RMI, argumentación que les permite desarrollar las estrategias referidas sin embarcarse, por

ello, en dilemas éticos. Así, sin reconocer la desigualdad de poder implicada en la relación que mantienen con estos beneficiarios, o las condiciones sociales, históricas y económicas que enmarcan las vidas de éstos, se centran en vigilarlos para que cumplan los compromisos del PII. Interponen, por tanto, fuertes resistencias a implementar los cambios que la ley de RMI introduce con respecto al IMI e insisten, delante de dichos beneficiarios, en la importancia de que cumplan con sus obligaciones, para lo cual presentan como una condición *sine qua non* que muestren interés por “activarse”. Echan en falta una posición de poder menos ambigua sobre los solicitantes/perceptores de RMI y critican el vacío que deja la ley a este respecto. Estos trabajadores sociales encarnan lo que cabría llamar “valores de la normalidad”, instituyéndose a sí mismos como referencia válida para medir las conductas de esos solicitantes/perceptores. En consecuencia, son los que experimentan las mayores tensiones cuando trabajan con el colectivo gitano y los que radicalizan las estrategias que utilizan para intervenir con él. En cierto sentido, estos profesionales se erigen en “misioneros” cuyo objetivo es devolverle a la “gente descarriada” su sentido moral, lo que implica cambiarles los hábitos que la desvían de él.

Los trabajadores sociales de Servicios Sociales que caen bajo “el perfil negociador” no sólo son más conscientes de la asimetría de poder existente entre ellos y los perceptores de RMI, sino que se muestran escépticos ante el uso de la fuerza en la intervención social, tratando expresamente de desvincularse de “la autoridad” que tenían sobre los perceptores de IMI y centrándose en utilizar estrategias que les permitan iniciar procesos consensuados de inserción social. Estos profesionales, cuando hablan del contexto madrileño de intervención social, hacen responsables de los obstáculos con que se encuentran a la saturación de los Servicios Sociales, a la carencia de una metodología adecuada y a la falta de tiempo para acompañar y promover verdaderos procesos de inserción social, proponiendo una vuelta al trabajo de calle y al trabajo comunitario como salida a la excesiva individualización y burocratización que invade actualmente su desempeño profesional en los Servicios Sociales. Por otro lado, enfocan su trabajo teniendo en cuenta un marco interpretativo más complejo acerca de la realidad en que viven los solicitantes/beneficiarios de RMI y, en particular, los de origen gitano, lo que favorece que sus discursos salgan de la narración de los problemas cotidianos que se originan en sus relaciones con ellos y elaboren críticas políticas e institucionales que dan sentido a los dilemas prácticos y éticos a los que se enfrentan.

Por otro lado, aunque una parte de estos profesionales sigue manteniendo que el fin de su intervención social es “el cambio de la persona” y la promoción de su autonomía, piensan en estos procesos fuera del lenguaje de la obligatoriedad. Se puede decir que, en ellos, se ha

producido un desplazamiento desde una visión centrada en la inserción por el empleo hacia otra más internalista y psicologicista, que prima el desarrollo de las habilidades sociales de las personas con las que trabajan. Sin embargo, algunos de estos profesionales expresan sentirse desesperanzados con respecto a los Servicios Sociales, y consideran que la mejor estrategia de intervención social es la no actuación o, lo que es lo mismo, actuar de forma tal que los usuarios les identifiquen lo menos posible con “la institución”. Podría decirse, entonces, que su “falta de fe” en la capacidad de transformación y de actuación de los Servicios Sociales les sirve de coartada para desplegar menos esfuerzo en trabajar con los usuarios que los que componen el grupo fiscalizador. Ello permite que, en el interior de los Servicios Sociales, se perpetúen ciertas dinámicas de intervención social por parte de los profesionales que son perjudiciales para esos usuarios.

En todo caso, ante esta diversidad de estrategias (algunas de las cuales revelan ideas contradictorias) y de “estilos profesionales”, los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI terminan por no creer lo que les dicen los profesionales. Así, cuando algún profesional de ONG les comunica a las mujeres gitanas, por ejemplo, que no tienen por qué asistir a las actividades de los proyectos de integración, éstas desconfían y se muestran dudosas a causa de la falta de información coherente sobre quién tiene el poder de extinguir la prestación económica y sobre la obligatoriedad o no de la participación, por lo que estas comunicaciones generan a menudo un efecto opuesto al previsible, esto es, que las gitanas que solían faltar asistan, “por si acaso”, con mayor frecuencia a dichas actividades.

Todos los elementos señalados hasta ahora recrean la relación de desconfianza desde la que los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI y los profesionales se perciben mutuamente, lo que dificulta cualquier repretensión de establecer una relación con tintes simétricos que pudiera dar cabida a un proceso de inserción social en el que estos solicitantes/beneficiarios participaran autónomamente, esto es, habiendo decidido reflexionada y conscientemente su participación en las distintas actividades de inserción social.

No sorprende, por tanto, que los gitanos perceptores de RMI manifiesten tener miedo a las posibles consecuencias de su interacción con los profesionales. Los de clase baja y media-baja narran sentirse juzgados por los Servicios Sociales, y expresan tener miedo a que “les quiten” la prestación económica. Sin embargo, como se ha señalado, estos gitanos no aspiran a establecer una relación simétrica con los trabajadores sociales, sino a que éstos les muestren una actitud de ayuda que, para ser valorada, ha de ser expresada mediante un trato cálido y cercano. Buscan, en consecuencia, que se les atienda de acuerdo a un modelo de *cuidado* que,

en términos de Pattaroni (2005), se base en “la familiaridad“, que presupone que la función del trabajador social consiste en escuchar y desplegar “actitudes humanas”, que los gitanos asocian a una relación de cercanía con tintes de pseudo-amistad. El objetivo de la simetría, muy presente en los discursos de los profesionales que se identifican con un rol “técnico”, es en sí mismo un elemento que nutre el desencuentro con los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI de las posiciones sociales más bajas, ya que estos profesionales consideran su reclamo a la excepcionalidad como la antítesis de una correcta actuación profesional, a la vez que estos solicitantes/beneficiarios de clase baja y media-baja rechazan, por su parte, a los profesionales más identificados con su rol técnico, calificándoles frecuentemente de “fríos”, “antipáticos” y “malas personas”.

Otro elemento que añade tensión a la relación profesionales-usuarios de RMI consiste en la forma en que los gitanos de clase baja y media– baja expresan su demanda de ayuda. Éstos enuncian su demanda utilizando un lenguaje que alude a la “justicia” y a la “dignidad”, lo que tampoco es bien recibido por algunos profesionales, en quienes despierta el prejuicio del “gitano aprovechado” que “parasita” a las instituciones públicas. En definitiva, la manera que tienen estos usuarios de “contarse a sí mismos” y de “construir sus argumentos” cuando solicitan la RMI desentona con el discurso actualmente legitimado en los Servicios Sociales. Nos encontramos, por tanto, ante una relación que decepciona a los gitanos por un trato que no reciben y que, para los profesionales, entraña un dilema ético, ya que lo que consideran una buena práctica profesional no tiene nada que ver con lo que de ellos esperan los gitanos con los que trabajan.

Los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI de clase media, en cambio, hablan de sí mismos como personas con poder de negociación con los trabajadores sociales y, en general, con las instituciones públicas. Aun así, se refieren a los Servicios Sociales como si se tratara de instituciones judiciales, con respecto a las cuales las personas deben demostrar siempre “la verdad” de lo que dicen a través de documentación oficial. En todo caso, estas personas saben cuándo pueden “reivindicar” sus derechos ante los profesionales y consideran que han de dar algo a cambio de recibir la RMI. Se refieren a sí mismas como sujetos con poder, con capacidad de negociación y con suficiente conocimiento como para ir a los Servicios Sociales y demandar lo que estiman que es “su derecho”. La retórica que utilizan es diferente, y conciben a los trabajadores sociales desde la perspectiva de su “profesión”, que los identifica como administradores de los derechos sociales.

La escasez de recursos ha convertido la demanda de ayudas sociales en una especie de mercado moral, donde las personas deben “venderse” como el solicitante/beneficiario más

perfecto, más honorable, más sincero (el que dice “la verdad”) o más miserable (el que “más sufre”). En este contexto socio-ideológico, demostrar que se hace todo lo posible para mejorar, que se hace con empeño y esfuerzo y que no se es “un parásito del Estado”, ha pasado a formar parte del acerbo cultural de los perceptores de RMI de clase media. Así, cuando “el discurso del sufrimiento” no convence a los profesionales, los gitanos se describen a sí mismos mediante “el discurso de la normalidad”, con el que tratan de presentarse como ciudadanos dignos de recibir las ayudas sociales.

Se puede decir, así, que la auto-victimización de los solicitantes/beneficiarios de RMI y la auto-denominación según las categorías que piensan legítimas para las instituciones públicas son, en cierto sentido, elementos inherentes al funcionamiento de éstas. Con esto no se pretende presentar a los demandantes de ayudas sociales como estrategias que buscan “engañar” a los Servicios Sociales, sino dar sentido a las categorías que utilizan y a las poses tácticas que despliegan cuando tratan de dotarse de reconocimiento frente a éstos y ganar, a la par, el beneplácito de los trabajadores sociales.

El marco de aplicación de la RMI dibuja, de este modo, una atmósfera poco propicia para promover procesos de cambio personal y social empoderadores. Esto se debe sobre todo a que la intervención social que se realiza –para atajar problemas de vulnerabilidad social que, en muchos casos, son resultado de condiciones de índole estructural– tiene un carácter eminentemente individual y, por consiguiente, no favorece el desarrollo de “comunidades de pensamiento” por parte de los gitanos solicitantes/beneficiarios de RMI, o por parte de los propios profesionales, con capacidad para decidir autónomamente sobre los distintos aspectos concernientes a esta política social. Ello se ve acrecentado por ciertas tácticas desplegadas por los solicitantes/beneficiarios de clase baja y media-baja como la que consiste, por ejemplo, en adoptar un discurso auto-inferiorizante con el objeto de eludir la moralización que suele acompañar a la conminación de los profesionales a que “hagan algo” para “salir” de la situación de exclusión social; discurso que acaba por generar en los trabajadores sociales una actitud de desconfianza hacia su veracidad.

En el marco de aplicación de la RMI, prima una falta de transparencia sobre el modo de funcionamiento de esta política social, principalmente en lo que se refiere a las obligaciones que se derivan de haber firmado el Programa Individual de Inserción. De este modo, las condiciones en que ésta se implementa van en contra de las que autoras como Pomykala y Holt (2002: 35-42), por ejemplo, consideran ideales para garantizar los derechos sociales de los grupos vulnerables, detectándose incluso indicios de discriminación indirecta hacia los gitanos perceptores de RMI. Estas autoras sostienen que es obligación de los

Estados proteger a los colectivos vulnerables garantizando la transparencia de la información que reciben cuando se relacionan con la Administración Pública, a la vez que cae bajo su responsabilidad la evaluación de la forma en que se aplican los programas orientados a superar la desigualdad social, uno de los cuales es, sin duda, el de la Renta Mínima de Inserción. Sin embargo, en un contexto de instrumentalización político-electoralista de la intervención social –como es el que caracteriza hoy en día a la Comunidad de Madrid–, de profesionalización de ésta y de falta de debates con potencial de transformación social, los profesionales no tienden a evaluar a fondo las contradicciones que están implicadas en la aplicación de la RMI ya que ello supondría asumir que se están llevando a cabo actuaciones que, a menudo, conculcan el derecho de los gitanos a decidir en qué tipo de proceso de inserción social quieren comprometerse, en el caso, por supuesto, de que quieran hacerlo.

Por otro lado, se ha mostrado en esta tesis doctoral que las mujeres gitanas titulares de la prestación económica conforman el público –un público que cabe calificar de cautivo– de las entidades de iniciativa social que implementan los proyectos de integración. Los profesionales consideran que, en estos espacios socioeducativos vinculados a la RMI, se ha de perseguir que las beneficiarias de ésta adquieran habilidades básicas para moverse en la sociedad, así como un saber-estar y un sabe-hacer mínimos para que puedan desenvolverse como sujetos autónomos: realización de gestiones burocráticas, prácticas saludables que deben llevar a cabo con los niños (vacunación, control sanitario, alimentación equilibrada, etc.) o con los adultos (planificación familiar, por ejemplo)... y, sobre todo, toma de conciencia de la desigualdad de género como paso previo al cambio de roles en la familia. Se puede decir que no se deja un espacio de la vida de estas mujeres sin cubrir y que el énfasis en promover una transformación de su identidad está convirtiendo estos espacios socio-educativos en lugares propicios para la construcción de un discurso profesional sobre “el cambio esperado de la mujer gitana” que no admite cuestionamientos.

El recurso a “la cultura” como variable explicativa principal, cuando no única, de los comportamientos del colectivo gitano, a la vez que el manejo de una concepción muy reduccionista de la misma obstaculizan que los profesionales responsables de estos espacios socioeducativos puedan captar la diversidad interna de los discursos y de las prácticas de las mujeres que participan en ellos, por lo que acaban por fortalecer las estrategias de defensa de éstas consistentes en justificar cualquiera de sus comportamientos como parte de la “tradición” o “costumbre” gitanas. Así, los profesionales no tienen en cuenta, por ejemplo, las distintas condiciones de vida de las mujeres gitanas, manejando imágenes sobre ellas que acaban presentándolas como un todo homogéneo. La “cultura gitana” sirve, así, como

paraguas condensador y/o aglutinador bajo el cual la diversidad del alumnado que participa en estos espacios socioeducativos se traduce en rituales y tradiciones “culturales”.

En otro orden de cosas, la fuerte tendencia a organizar actividades de “promoción personal” para que las mujeres gitanas tomen conciencia de su individualidad o, en otras palabras, la recurrente propuesta de actividades centradas en la “psicologización del yo”, guardan relación con el acento que se pone en la individualización de los sujetos en situación de exclusión social que se ha observado en los distintos proyectos de integración.

En suma, el proyecto re-socializador de la mujer gitana que se impulsa desde las actividades de inserción social ligadas a la RMI pasa por promover la toma de conciencia sobre las desigualdades de género que les afectan, por suscitar la individualización de la mujer (que ha de quererse y cuidarse de forma consciente y distanciada de las necesidades familiares) y, por último, por conminarla a asumir para sí misma un proceso de cambio personal similar al que llevaron a cabo las profesionales que están a cargo de los proyectos de integración. En congruencia con ello, se puede decir que éstas orientan el sentido del cambio de las mujeres gitanas hacia una idea específica de la emancipación, no dejando espacio para que ellas mismas lo orienten, en caso de querer hacerlo, hacia una dirección novedosa y creativa. Harían falta, con todo, nuevas investigaciones para estudiar cómo están recibiendo, reinterpretando y/o reaccionado las gitanas beneficiarias de RMI ante la intensa exhortación a su “liberación” que proviene de los distintos profesionales que trabajan con ellas.

La aplicación de la RMI, lejos de favorecer “la autonomía” de sus beneficiarios gitanos, ha contribuido a consolidar ciertas malas prácticas que están conculcando y/o entorpeciendo que esta política social adquiriera el carácter de derecho que, en principio, se le supone bajo la actual ley. De hecho, se puede decir que, si en el contexto de esta aplicación, los profesionales no buscan expresamente incluir a dichos beneficiarios en procesos de toma de decisiones autónomas, genuinas y que provengan de consentimientos legítimos, su implicación en proyectos de inserción (la firma del PII, en este caso) es una mera formalidad que no implica compromiso ni cambio alguno por su parte y que sigue reproduciendo, por tanto, la “natural pasividad” con la que se desenvuelven en los espacios donde se encuentran con los profesionales. Se les niega, entonces, el disfrute del derecho a negociar su proceso de inserción social y a recibir unos apoyos sociales dibujados “a su medida”, a la par que se refuerzan unas relaciones sociales asimétricas y desiguales que terminan engrosando los prejuicios socioculturales desde los que unos y otros se miran recíprocamente desde hace décadas.

Hace falta, por tanto, promover actuaciones que permitan superar la visión que se maneja acerca de lo que es la integración y asumir que no hay un protocolo uniforme para tratar a los excluidos. La individualización implicada en el tratamiento del que es objeto la exclusión social, junto con la conminación a la autonomía y el temor de los profesionales a que se fomente la “cronicidad” de los usuarios de RMI, son factores que obstaculizan la capacidad de repensar y de reinventar la intervención social que se está realizando hoy en día. Además, ante la fuerza con la que algunos profesionales se han adueñado de las teorías del déficit cultural como marco interpretación de los comportamientos “gitanos”, se torna urgente revisar las críticas a estas teorías (como las que les dirigió Labov ya en los años 60 del siglo pasado) como punto de partida para hacer frente a los arraigados estereotipos que se continúan difundiendo hoy en día sobre la población gitana. De lo contrario, las coerciones y moralizaciones que –como se ha visto– tienen lugar en los espacios socioeducativos asociados a la RMI pueden terminar por enquistar a los beneficiarios gitanos en sus posiciones de defensa y por apuntalar de manera irremediable el enfoque culturalista como única lente desde la que profesionales y gitanos beneficiarios de RMI se perciben mutuamente.

La aplicación de la RMI a un colectivo étnica y culturalmente diferenciado se presenta, entonces, como un marco de análisis interesante para reflexionar sobre cuestiones más amplias como, por ejemplo, la forma en que se constituye la ciudadanía (en este caso, la potestad de ser protegido y cuidado por los poderes públicos) y la manera en que se excluye a algunos sujetos de ciertos derechos sociales a partir de la particular interpretación que los distintos profesionales llevan a cabo de las políticas sociales. Nos hallamos, de este modo, ante cuestiones de justicia social, es decir, que se refieren a las condiciones en que se justifica ideológica, social y políticamente que se apliquen medidas de discriminación positiva para ciertos ciudadanos que se catalogan como excluidos y, en última instancia, ante debates acerca de cómo las sociedades democráticas deben conformar y garantizar los medios de protección social “mínimos” para todas las personas que lo necesitan. En todo caso, la falta de (re)conocimiento por parte de la sociedad, en general, de políticas sociales como la RMI y las frecuentes críticas –que se han podido recoger durante el trabajo de campo– a que se le conceda la prestación económica al colectivo gitano sugieren que estas políticas sociales no forman parte de los derechos que los madrileños están dispuestos a defender y dejan entrever que el fantasma de la dependencia y el racismo continúan habitando entre nosotros.

Por otro lado, resulta también preocupante la “falta de fe” que expresan los trabajadores sociales más críticos dado que su descreimiento acerca de la capacidad de transformación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está abonando el terreno

para que se consoliden las prácticas de sus compañeros del grupo fiscalizador. Se puede decir, en consecuencia, que están haciendo un flaco favor a los solicitantes/beneficiarios de RMI con los que trabajan al no emprender procesos de crítica y/o reflexión en el seno de los Servicios Sociales y no generar, por tanto, espacios profesionales de debate que traten de cambiar la intervención social de carácter más autoritario en el marco de aplicación de la RMI. Las actitudes de este tipo, junto con la ausencia de una evaluación rigurosa de los límites con que se encuentra la implantación de las novedades que introduce la ley de RMI, dificultan los debates políticos y sociales que pudieran abrir el camino para una revisión y una mejora de la RMI.

Finalmente, y para anticipar una posible respuesta a la pregunta que algunos amigos trabajadores sociales me harán (“¿y, entonces, qué hacemos?”) me atrevo a decir, en línea con las ideas de algunos teóricos del trabajo social, como Donzelot Breviglieri, Zamanillo o Martín Estalayo, por ejemplo, que hace falta, por un lado, revitalizar la capacidad crítica de los profesionales de la intervención social de cara a politizar su trabajo y poder convertirse, así, en agentes de cambio con herramientas teóricas y prácticas que les permitan asumir lo que Martucelli (2003: 64-65) llama el “desafío de la integración” y, por otro, dotar de legitimidad social a los estudios sobre la implantación de las políticas sociales que se dirigen a proteger a los ciudadanos en peor posición social. Sería un sinsentido que, en una sociedad donde cada vez más ciudadanos se encuentran desempleados y donde los recortes sociales afectan a cada vez más facetas de sus vidas, las discusiones relativas a los derechos sociales y a la protección social como uno de tales derechos no formen parte del *ethos* de los profesionales que intervienen en el ámbito de la exclusión social ni de los políticos que nos representan ante los poderes públicos. En los tiempos que corren no se puede trabajar en intervención social, sea desde el trabajo social, la educación o el diseño de políticas públicas, sin asumir la responsabilidad de los propios actos. De este modo, los que disfrutan de los beneficios de vivir en una sociedad democrática deberían luchar para que a quienes no gozan de ellos les sean reconocidos, al menos, unos derechos fundamentales (que algunos han denominado “la última malla de protección social”) sin culpabilizarles por encontrarse en una situación de exclusión social que les dificulta, cuando no les imposibilita, el defenderlos por sí mismos.

Bibliografía

- Abad, L.; Garrido, M.; Fuentes, R.; García, I. (2008), "Etnografía de los centros sanitarios en la provincia de Cuenca. Análisis del Continuum confianza-conflicto", en Flores, J.A. (coord.), *Etnografías en Castilla-La Mancha*. Ciudad Real, Biblioteca Añil.
- Abajo, J. E. (1997), "La escolarización de los niños gitanos: el desconcierto de los mensajes doble-vinculares y la apuesta por los vínculos sociales y afectivos". Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Abajo, J.E.; Carrasco, S. (eds.) (2004), *Gitanas y gitanos en la encrucijada: experiencias de éxito y continuidad educativa para repensar el cambio social y cultural*. Madrid, Instituto de la Mujer, CIDE.
- Abrahamson, P. (1997), "Exclusión social en Europa: ¿vino viejo en odres nuevos?", en Moreno, L. *Unión Europea y Estado de Bienestar*. Madrid, CSIC.
- Abramovitz, M. (2000), "Trabajo social y Transformación", en *Cuadernos Andaluces de Bienestar Social-CAB*, Vol.IV, nº6-7, pp.3-34. Granada, Escuela Universitaria de Trabajo Social.
- ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) (2006), "Análisis de la realidad de la Cañada Real Galiana (Villa de Vallecas)". Documento mimeografiado.
- ACCEM, Fundación Secretariado General Gitano (2010), *Informe diagnóstico sobre la Cañada Real Galiana*. Madrid.
- Agudo, A. (2006), "La confluencia de relaciones intra-domésticas y redes sociales en procesos de acumulación de (des)ventajas", en González de la Rocha, M. (coord.), *Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades*. México, CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata, pp.397-437.
- Agudo, A. (2009), "Conocimiento, lenguaje, poder e intermediación. Perspectivas contemporáneas en la antropología de las políticas públicas". *Estudios Sociológicos*, vol.27, nº79 (ene.-abr.), pp.63-110.
- Aguilar, M.; Gaviria, M.; Laparra, M. (1993), *El Programa Ingreso Madrileño de Integración (IMI). Primera evaluación*. Consejería de Integración Social, Comunidad de Madrid.
- Aguilar, M.; Gaviria, M.; Laparra, M. (1995), *La caña y el pez. Estudio sobre los salarios sociales en las comunidades autónomas 1989-1994*. Madrid, Fundación FOESSA.
- Aguilar, M.; Gaviria, M.; Laparra, M. (1995a), "Exclusión social y políticas de integración en la Comunidad de Madrid", *Economía y Sociedad*, nº12, pp.217-232.
- Aguilar, M.; Gaviria, M.; Laparra, M. (1995b), "Aproximación teórica al concepto de exclusión", en F. Álvarez-Uría (ed.), *Desigualdad y pobreza hoy*. Madrid, Talasa, pp.133-200.
- Aguilar, M.; Gaviria, M.; Laparra, M. (1996), "Los programas de renta mínima de inserción en España 1989-1995. Pobreza, necesidad y discriminación". *II Simposio sobre Igualdad de la renta y la riqueza*. Madrid, Fundación Argentaria-VISOR.
- Aguilar, M.; Laparra, M.; Pérez, B. (2003), *La exclusión multidimensional en el espacio urbano: Investigaciones de base para la elaboración del Plan contra la Exclusión de la Comunidad de Madrid*. Universidad Pública de Navarra y Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
- Alfonso, P. (2008), "Expertas en mediación social. Una propuesta necesaria", en Ayuntamiento de Madrid, CASM, Asociación Barró y Asociación Fanal, *Nosotras las Artemisa*. Madrid, pp.231-236.
- Alluè, X.. (2000), "¿De qué hablamos los pediatras cuando hablamos de factores culturales?", en J.M. Comelles y E. Perdiguerro, *Medicina y Cultura. Estudios entre la antropología y la medicina*. Barcelona, Bellaterra, pp.55-71.

- Almond, G.; Lasswell, (1999), "Le comportement agressif des clients envers les agents du secours public", *Politix*, nº46, pp.147-165.
- Alonso, J. M. (2002), "Nuevos derechos en la Comunidad de Madrid para las personas socialmente excluidas. Breve apunte sobre la Ley de Renta Mínima de la Comunidad de Madrid", *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, nº35, pp.185-198.
- Álvarez-Uría, F. (2006), "Viaje al interior del yo. Psicologización del yo en la sociedad de los individuos", en Álvarez-Uría, F. (coord.), *Pensar y resistir. La sociología crítica después de Foucault*. Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- Angel Díaz de Rada, (2008), "¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se practica en las instituciones escolares?", en Jociles, M.I; Franzé, A. (eds.), *¿Es la escuela el problema?. Perspectivas socio-antropológicas de etnografía y educación*. Madrid, Trotta.
- Antón, A. (2003), *Rentas básicas y nuevo contrato social*. Madrid, Fundación Sindical de Estudios.
- Aparicio, M.V. ; Fernández ; García Nieto ; Rojo ; Salinas (eds.) (1989), *Renta mínima y salario ciudadano*. Cáritas.
- Ardèvol, E. (1987), "Vigencias y cambio en la cultura de los gitanos", en San Román, T. (ed.), *Entre la marginación y el racismo, reflexiones sobre la vida de los gitanos*. Madrid, Alianza, pp.61-108.
- Ardèvol, E. (1987), *Antropología urbana de los gitanos de Granada: Una aproximación de la antropología aplicada al trabajo social*. Ayuntamiento de Granada.
- Arendt, H. (1967), *Essai sur la Révolution*. Paris, Gallimard.
- Arendt, H. (2005 [1969]), *Sobre la violencia*. Madrid, Alianza.
- Ariès, P. (1973), *El niño y la vida familiar en el antiguo régimen*. Madrid, Taurus.
- Arriba, A. (1998), "Los 'usos' de las rentas mínimas de inserción en España". Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Documento de trabajo 98-01.
- Arriba, A. (1999), "Procesos de implantación de políticas de rentas mínimas en España." Unidad de políticas comparadas, Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Documento de Trabajo 99-09.
- Arriba, A. (2001), "Procesos de implantación de políticas de rentas mínimas de inserción en España", en Moreno, L. (ed.), *Pobreza y Exclusión: la "malla de seguridad" en España*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp.175-221.
- Arriba, A. (2002), El concepto de exclusión en política social. Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Documentos de trabajo.
- Arriba, A. (2002a), "El concepto de exclusión en política social". Unidad de políticas comparadas, Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Documento de trabajo 02-01. <http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0201.pdf>
- Arriba, A. (2007), "La última red de protección social en España: prestaciones asistenciales y su activación". *Política y Sociedad*, Vol.44, nº2, pp.115-133.
- Arriba, A.; Pérez, B. (2007), "La última red de protección social en España: prestaciones sociales y su activación", en *Política y Sociedad*, Vol.44, nº2, pp.115-133.
- Arriba, A.; Serrano, A. (1998), "Rentas mínimas de inserción: un análisis de su aplicación", en *Actas del V Congreso estatal de Intervención Social: Calidad y responsabilidad compartida. Retos del bienestar en el cambio de siglo*, Mesa redonda: *Rentas mínimas y políticas activas de empleo: una complementariedad necesaria*, pp.1836-1846.
- Astier, I. (1995), "Du recit privé au récit civil : la construction d'une nouvelle dignité ?". *Lien social et politiques*, nº34, pp.121-130.
- Astier, I. (1997), *Revenu minimum et insertion*. Paris, Desclée de Brouwer.
- Astier, I. (1998), "RMI : du travail social à une politique de l'individu". *Esprit*, Vol.3-4, pp.142-157.

- Astier, I.; Duvoux, N. (2006), *La société biographique : une injonction à vivre dignement*. Paris, L'Harmattan, coll.
- Autès, M. (2004), "Tres formas de desligadura", en Karsz, S. *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Barcelona, Gedisa.
- Avenel, C. (2002), "Le travail social à travers les pratiques d'attribution des aides financières". *Recherches et Prévisions*, nº67.
- Avenel, C. (2003), "Quelle démarche d'évaluation pour le travail social ? Pour une approche noble de la mission", *Informations sociales*, nº110.
- Ayala Cañón, L. (1994), "Social needs, Inequality and the Welfare State in Spain: Trends and prospects". *Journal of European Social Policy*, Vol.4, nº3, pp.159-179.
- Ayala Cañón, L. (1994a), "Los sistemas generales de rentas mínimas en Europa: logros, límites y alternativas". *Documentación Social, la pobreza en España hoy*, nº96, pp.223-275.
- Ayala Cañón, L. (2000), *Las rentas mínimas en la reestructuración de los Estados de Bienestar*. Madrid, Consejo Económico y Social.
- Ayala Cañón, L. (2007), "Políticas redistributivas, desigualdad y pobreza: ¿hacia un nuevo modelo?", ponencia impartida en el seminario *Estrategias y políticas de inclusión en la Comunidad de Madrid* realizado el 18 de octubre de 2007, organizado por la Fundación Luis Vives, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Ayala Cañón, L. (2007), "Políticas redistributivas, desigualdad y pobreza: ¿hacia un nuevo modelo?", ponencia impartida en el seminario *Estrategias y políticas de inclusión en la comunidad de Madrid* realizado el 18 de octubre de 2007, organizado por la Fundación Luis Vives, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Ayala Cañón, L. (2008), "Crecimiento económico, políticas públicas y bienestar: ¿El cambio de un modelo?", en Hernández Pedreño, M. (coord.), *Exclusión social y desigualdad*. Murcia, Universidad de Murcia, pp.59-79.
- Ayala Cañón, L.; Rodríguez Coma, M. (2007), "Las nuevas estrategias de empleo en los programas de garantía de rentas", *Revista Española del Tercer Sector*, nº5, abril, pp.59-85.
- Ayala Rubio, A. (2009), "Secretos a voces: exclusión social y estrategias profesionales de construcción de la obligatoriedad en la intervención social vinculada a la Renta Mínima de Inserción (RMI) con el colectivo de etnia gitana", *Cuadernos de trabajo social*, nº22, pp.19-40.
- Ayala Rubio, A.; García García, S. (2009), "Gestión de cuerpos y actuación de resistencias en una política social. La aplicación de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid", en *Revista de Antropología Experimental*, nº9, Texto 2, pp.17-36. Universidad de Jaén.
- Ayala Rubio, A.; Jociles, M.I.; Pérez-Sutil, R.; Villaamil, F. (2008), *Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña*. Servicio Madrileño de Salud, Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención, Comunidad de Madrid.
- Ayala, A.; Pérez-Sutil, R. (2007), "La investigación cualitativa como instrumento de intervención socio-sanitaria: las lógicas de prevención de la salud de la población gitana", actas del *Congreso Anthropos 2007: I Congreso Iberoamericano de Antropología*. La Habana (Cuba).
- Ayuntamiento de Madrid (1996), *Informe técnico sobre el documento "Revisión del Programa IMI 1990-1995, Conclusiones"*. División de Reinserción, Departamento de Prevención y Familia, Área de Servicios Sociales.
- Ayuntamiento de Madrid (2010), *Memoria de actividades. Ejercicio 2010*. Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
- Ayuntamiento de Madrid, CASM, Asociación Barró y Asociación Fanal, (2008), *Nosotras las Artemisa*. Financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

- Aznar, M. (1991), "Tres reflexiones en torno a la Renta Mínima de Inserción", *El Boletín del CEBS*, nº26.
- Bajtín, M. (1974), *Rabelais y su mundo*. Barcelona, Barral.
- Barth, F. (1976), *Los grupos étnicos y sus fronteras*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Bartolomé, M. (1997), "Marginación y diferencia sociocultural: aproximación educativa al problema", en M.C.Jiménez (coord.), *Lecturas de pedagogía diferencial*. Madrid, Dykinson, pp.53-85.
- Basaigoiti, M.; Bru, P.; Alves, M. (coords.) (2009), *De la exclusión a la ciudadanía: análisis de los factores, barreras y oportunidades*. Elaborado por el Observatorio de la Exclusión Social y los procesos de inclusión social de la Comunidad de Madrid. Madrid, Asociación Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción.
- Bauman, Z. (2000), *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*. Barcelona, Gedisa.
- Beck, U. (1998), *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona, Paidós Ibérica.
- Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (2008), *Generación global*, Barcelona, Paidós Ibérica.
- Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (1994), *Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge, Polity Press.
- Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (2008), *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid, Alianza.
- Berger, P.; Luckman, (1989), *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Berlin, I. (1958), "Two concepts of liberty", (trad. castellana de Bayón, J. (2004), "Dos conceptos de libertad", en *Cuatro ensayos sobre la libertad*. Madrid, Alianza).
- Berna, D. (2010), "Diálogos identitarios desde la precariedad y la resistencia entre los adolescentes gitanos gays". *Revista de Estudios de Juventud*, nº89, pp.187-200.
- Bertely, M. (2000), *Familias y niños mazahuas en una escuela primaria mexiquense: etnografía para maestros*. México, Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México.
- Bertely, M. (2000a), *Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. México, Paidós.
- Bessin, M. (2005), "Envisager la mixité dans le travail social", *Chantiers Politiques*, nº 3, 2nd semestre, pp.79-89.
- Bessin, M., Bory, S., Cardi, E., Herman, N., Murard, N.; Steinauer, O. (2009), *Le genre de l'autonomie: une recherche sur la sexualisation des interventions sociales*. Recherche menée en réponses à l'appel d'offre *Genre et politiques sociales* lancé par la Drees-MIRE, sous la direction scientifique de Marc Bessin et Numa Murard.
- Bessin, M.; Roulleau-Berger, L. (2002). "Les armes du faible sont-elles de faibles armes ?" *L'Homme et la société*, 2002/1, nº143-144, pp.3-11.
- Boltanski, L. (1969), *Puericultura y moral de clase*. Barcelona, Laia.
- Boltanski, L. (1975), *Los usos sociales del cuerpo*. Buenos Aires, Periferia.
- Bouget, D. (1999), "A theory of poverty and social exclusion", *Journal of European Social Policy*, Vol.2, pp.190-191.
- Bourdieu, P. (1966), "Condition de classe et position de classe", *Archives Européennes de Sociologie*, nºVII, pp.201-229.
- Bourdieu, P. (2007[1980]), *El sentido práctico*. Argentina, Siglo XXI.
- Bourgois, P. (2003 [1996]), *In search of respect. Selling crack in El Barrio*. Cambridge University Press.
- Breviglieri M., Pattaroni L., Stavo-Debaugé J. (2004), "Quelques effets de l'idée de proximité sur la conduite et le devenir du travail social". *Revue Suisse de Sociologie*, Vol.29, nº1, pp.141-157.

- Breviglieri, M. (2005), "Bienfaits et méfaits de la proximité dans le travail social", en Ion, J., *Le travail social en débat(s)*. Paris, La Découverte, coll. Alternatives Sociales, pp.219-234.
- Burchell, G. (1996), "Liberal government and techniques of the self", en Barry, A.; Osborne, T.; Rose, N. (eds), *Foucault and political reason: liberalism, neoliberalism and rationalities of government*. Chicago, University of Chicago Press, pp.19-36.
- Bustelo (2000). *De otra manera: ensayos sobre política social y equidad*. Santa Fe (Argentina), Homo Sapiens Ediciones.
- Cabases, J. M.; Monserrat, J. (1990), "Análisis económico de la implantación de la renta mínima garantizada", IV Jornadas de Economía de los Servicios Sociales: *Nuevas necesidades, nuevas prestaciones*. Vitoria-Gasteiz.
- Campos, B. (2007), "La salud de la comunidad gitana", en Laparra, M. (coord.), *Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación*. Madrid, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp.149-174.
- Camps, V. (1998), "Ciudadanía: derechos y deberes". *Revista de Servicios Sociales y Política Social*, nº41, pp.9-16. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social. Madrid.
- Canales, M.; Peinado, A. (1994), "Grupos de discusión", en Delgado, J.M.; Gutiérrez, J. (coords.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Síntesis.
- Cánimas, J. (2008), "¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía?", en *Revista de Servicios Sociales y Política Social*. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, nº84, pp.159-172.
- Cantón, M. (1999), "El 'culto' gitano y los procesos de deslegitimación: definiciones y competencias", en Rodríguez Becerra, S. (ed.), *Religión y Cultura*. Junta de Andalucía, Fundación Machado, Vol.1, pp.165-180.
- Cantón, M. (2007), *De la Sospecha a la Movilización Étnica. Pentecostalismo Gitano y Etnogénesis en Andalucía. Más Allá del Espíritu. Actores, Acciones y Prácticas en Iglesias Pentecostales. Michoacán y Chiapas*, México, CIESAS. Conacyt.
- Cantón, M. (coord.) (2004), *Gitanos pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía*. Sevilla, Signatura.
- Cantón, M.; Gil, P.R. (2011), "Políticas, resistencias y diásporas religiosas en perspectiva transcultural: gitanos evangélicos en España e indígenas católicos en México", *Revista de Antropología Social*, Nº20, pp.77-108.
- Cantón, M.; Marcos, C.; Mena, I.; Medina, S. (2004), "Gitanos pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía". *Relaciones: Estudios de historia y sociedad*, Vol.27, nº105, pp.279-283.
- Cantón, M.; Mena, I.R. (2004), *Gitanos Pentecostales. Una Mirada Antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía*. Sevilla, Signatura Demos.
- Cardiel, B. (2007), "Educación y comunidad gitana", en Laparra, M. (coord.), *Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones.
- Cardiel, B.; Laparra, M. (2007), "Participación social y política de la comunidad gitana", en Laparra, M. (coord.), *Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación*. Madrid, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp.171-195.
- Cardoso de Oliveira, R. (1993), "Etnicidad y las posibilidades de la ética planetaria". *Antropológicas*, nº8: 20-33.
- Cáritas (1989), *Dossier sobre renta mínima y salario ciudadano*. Madrid, Servicio de Documentación de Cáritas Española.

- Cáritas (1990), *Dossier sobre renta mínima y salario ciudadano*, Vol.II. Madrid, Servicio de Documentación de Cáritas Española.
- Carro, R. (2003), *Manual renta básica*. San Sebastián, Tercera Prensa.
- Casassas, D.; Raventós, D. (eds.) (2011), *La renta básica en la era de las grandes desigualdades*. Barcelona, Montesinos-Red Renta.
- Caselles, J.F. (2008), "Factores sociales de la exclusión social del Pueblo Gitano", en Hernández Pedreño, M. (coord.), *Exclusión social y desigualdad*. Universidad de Murcia.
- Castel, R. (1986), "De la peligrosidad al riesgo", en Varela, J.; Álvarez-Uría, F. (eds.), *Materiales de Sociología Crítica*. Madrid, La Piqueta, pp.219-243.
- Castel, R. (1990), "Les situation-limite du processus de marginalisation: de la vulnérabilité à la désaffiliation", ponencia presentada en *EC Conference on Poverty, Marginalisation and Social Exclusion in the Europe of the 90s*, Sassari Alghero, 23-25 de abril de 1990, en Serrano y Arriba (2001), p.260.
- Castel, R. (1992), "La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales", en Álvarez-Uría, F., *Marginación e inserción*. Madrid, Endymion, pp.25-36.
- Castel, R. (1995), "De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso", *Revista Archipiélago*, nº21, pp.27-36. Barcelona.
- Castel, R. (1996), *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. París, Fayard.
- Castel, R. (1997), *La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado*. Buenos Aires, Paidós.
- Castel, R. (2004), "Encuadre de la exclusión", en S. Karsz. *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Barcelona, Gedisa.
- Castel, R. (2006), "Crítica social. Radicalismo o reformismo político". *Pensar y resistir. La sociología crítica después de Foucault*. Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- Castel, R., Lae J.F., (dir.) (1992), *Le revenu minimum d'insertion, une dette sociale*, París, L'Harmattan.
- Cátedra, M. (1997), *Un santo para una ciudad: ensayo de antropología urbana*. Barcelona, Ariel.
- Cebrián, A. (1992). *Marginalidad de la población gitana española*. Murcia, Universidad de Murcia.
- CERC, (1991), *Atouts et difficultés des allocataires du RMI*. París, La Documentation Française.
- CERC, (1997), *Minima sociaux: entre pauvreté et insertion*. París, La Documentation Française.
- Châtel, V.; Soulet, M..H. (2002), " Faire face et s'en sortir. Pratiques et tactiques des demandeurs d'aide au guichet des organismes sociaux ". *Res Socialis*, Vol.2. Fribourg, éditions universitaires, pp.91-97.
- Chopart, J-N. (dir.) (2000), *Les mutations du travail social. Dynamique d'un champ professionnel*. París, Dunod.
- Comisión de las Comunidades Europeas (1989), "Anteproyecto de la Comisión sobre la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales. Adoptado el 17 de mayo de 1989", *Revista de Economía y Sociología del Trabajo*, 4-5 junio. (En Cáritas, 1989, p.49).
- Comisión Europea (1993), *Libro verde sobre Política social europea. Opciones para la Unión*. (En García, Losa y Esteban, 2005, p.33).
- Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (1989), "Dictamen sobre la pobreza". *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 28 agosto. C 221/10 (En Cáritas, 1989, pp.27-31).
- Commissariat Général du Plan (1998), *Évaluation des politiques publiques*, París, Commissariat Général du Plan.
- Comunidad de Madrid (1990), *Ingreso Madrileño de Integración*. Madrid, Consejería de Integración Social.

- Comunidad de Madrid (1993), *El Programa Ingreso Madrileño de Integración (IMI). Primera evaluación*. Consejería de Integración Social, Madrid. Elaborada por Aguilar, M.; Gaviria, A.; Laparra, M.
- Comunidad de Madrid (1997), Programa “*Ingreso Madrileño de Integración*” (IMI), *Memoria de Gestión*, 1996, Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (mimeografiado).
- Comunidad de Madrid (2002), *Plan contra la Exclusión Social de la Comunidad de Madrid 2002-2006*. Consejería de Servicios Sociales
- Comunidad de Madrid (2010), *Balance de Gestión de la RMI*. Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
- Comunidades Europeas (1993), “Dictamen sobre la exclusión social”. Bruselas, Comité Económico y Social. SOC, 257, CES 1014/93.
- Consejería de Familia y Asuntos Sociales (2010), *Balance Anual de Gestión de la RMI 2010*. Comunidad de Madrid.
- Consejería de Sanidad y Consumo (2005), *Acceso a los servicios sanitarios de la población en los asentamientos marginales en la Comunidad de Madrid. Cañaveral, Mimbreras, Salobral, Plata y Castañar, Santa Catalina, Vereda del Pan y Agua, Quinta, Pitis y Barranquillas*. Comunidad de Madrid, Dirección General de Salud Pública y Alimentación. Elaborado por EDIS.
- Consejería de Sanidad y Consumo (2005), *Acceso a los servicios sanitarios de la población en los asentamientos marginales en la Comunidad de Madrid. Cañaveral, Mimbreras, Salobral, Plata y Castañar, Santa Catalina, Vereda del Pan y Agua, Quinta, Pitis y Barranquillas*. Elaborado por EDIS. Madrid, Dirección General de Salud Pública y Alimentación, Comunidad de Madrid.
- Consejo de Europa (1987), *Actas del Coloquio conmemorativo del XXV Aniversario de la Carta Social Europea*, celebradas en Granada, 26 de octubre de 1987 (En Cáritas, 1989).
- Cortina, A. (2003), “Ética pública (de los derechos a las responsabilidades)”, en Fontanela, E.; Guzmán, J. (coords.), *Economía ética y bienestar social*. Madrid, Pirámide.
- Cortina, A. (2007), “Razones del corazón. La educación del deseo. Reflexiones para la educación del nuevo siglo”, *III Ciclo de conferencias Santillana* para el ciclo de otoño 2000. (En Zamanillo, 2011:13. Fuente: <http://www.oei.es/noticias/spip.php?article821>).
- Cova, A. (1999), “Les féministes du passé et l’apologie de la maternité”. *Panoramiques Repenser la maternité*, n°40, 2º trimestre.
- De Certeau (1990 [1980, 1996]), *La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer*. México, Universidad Iberoamericana.
- De Gaulejac, V. (1996), *Les sources de la honte*. Paris, Éditions Desclée de Brouwer.
- De Gaulejac, V.; Taboada-Leonetti, I. (1994), *La lutte des places*. París, Desclée de Brouwer.
- De las Heras, P. ; Cortajarena, E. (1979). *Introducción al Bienestar Social*. Madrid, Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales.
- De Montlibert, C. (1980), “L’éducation morales des famills. L’estension du métier de puériculture”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n°32-33, abril-junio, pp.65-76.
- Dejours, C. (1998), *Souffrance en France. La banalisation de l’injustice social*. París, Le Seuil.
- Demazière y Dubar (1997), *Analyser les entretiens biographiques : l’exemple des récits d’insertion*. París, Nathan.
- Día de Rada, A. (2005), “¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se practica en las instituciones escolares?”, en A. Franzé, M.I.Jociles, B.Martín et al. (eds), *Actas de la Primera Reunión Científica Internacional de Etnografía y Educación*. Ulio de 2004. Valencia: Germanía, 25.
- Díaz de Rada, A. (2010), *Cultura, antropología y otras tonterías*. Madrid, Trotta.

- Díaz Viana, L. (2011), "De tonterías nada: la dimensión ética del concepto antropológico de cultura". *Revista de Antropología Social*, Vol.20, pp.377-384 (reseña).
- DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) (1988), "Resolución sobre la lucha contra la pobreza en la Comunidad Europea", 16 oct., Doc A2-171/88 (en Cáritas 1989, pp.46-48).
- Domenach, Dubar, Grand, Chauvière *et al.* (1984), *El trabajo social en cuestión*. Barcelona, Nova.
- Donzelot, J. (1977), *La police des familles*. Paris, Minuit.
- Donzelot, J. (2006), "Comunidad cívica y magistratura social: dos respuestas a la crisis urbana", en Álvarez-Uría, F. (coord.), *Pensar y resistir. La sociología crítica después de Foucault*. Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- Donzelot, J.; Jaillet, M.-C (1998), "Europe-États-Unis: convergence et divergence de politiques d'insertion", *Esprit*, Vol.11, pp.70-89.
- Dubé F., Véretout A., (2001), "Une réduction de la rationalité de l'acteur. Pourquoi sortir du RMI ?", *Revue Française de Sociologie*, Vol.42, nº3, pp.407-436.
- Dubé, F. (2002), *Le déclin de l'institution*. París, Seuil.
- Dubé, F. (2007), "El declive y las mutaciones de la institución". *Revista de Antropología Social*, Universidad Complutense de Madrid, Vol.16, pp.39-66.
- Dubois, V. (1999), *La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère*. París, Economica.
- Dubois, V. (2003), "Le rapport des assistés aux organisations sociales : domination, tactiques et logiques identitaires", *Pyramides*, Vol.7, pp.33-44.
- Dubois, V.; Dulong, D. (2003), "Les ruses de la raison juridique. Le contrôle sur place des bénéficiaires de prestations familiales". *Recherches et Prévisions*, nº73, septembre.
- Durán, M. A. (1988), "La mediación invisible: de las utopías sociales a los programas políticos en material de salud. Visión sociológica", en De Miguel, J.M.; Yuste, F.J.; Durán, M.A., *El futuro de la salud*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp.119-144.
- Duvoux, N. (2007), "Le RMI et les dérives de la contractualisation", en Paugam, S. (dir.), *Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales*. Paris, PUF, pp.451-470.
- Duvoux, N. (2009), *L'autonomie des assistés. Sociologie des politiques d'insertion*. París, Presses Universitaires de France.
- EDIS-Cáritas (1989), *Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid*. Madrid, Popular.
- Elias, N. (1988), *El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México, Fondo de Cultura Económica, D.L.
- Elias, N. (1991), *La société des individus*. Paris, Fayard.
- Equipo Barañí, (2001). *Mujeres gitanas y sistema penal*. Madrid, Metyél.
- Equipo IMI (1991). *Ingreso Madrileño de Integración, Vol.3: La Exclusión*. Madrid, Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid.
- Escobar, A.; González de la Rocha, M. (2000), "Logros y retos: una evaluación cualitativa del Progreso en México", en Secretaría de Desarrollo Social, *Progreso: más oportunidades para las familias más pobres. Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación, impacto a nivel comunitario*. México, Progreso, pp.1-132.
- Escobar, A.; González de la Rocha, M. (2004), "Evaluación cualitativa de mediano plazo del Programa Oportunidades en zonas rurales", en Hernández, M.; y Hernández, B. (eds.), *Evaluación externa del impacto del Programa Oportunidades 2004. Aspectos económicos y sociales*, Vol.4. México, INSP, CIESAS, pp.247-318.
- Espada, C.J. (1999), *Derechos sociales del ciudadano*. Madrid, Acento.
- Espluga, J.; Lemkow, L.; Baltiérrez, J.; Kieselbach, T. (2004), *Desempleo juvenil, exclusión social y salud: investigaciones, experiencias y acciones institucionales en España*. Barcelona, Icaria.

- Esteban, M.L. (2004), *Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio*. Barcelona, Bellaterra.
- Estivill, J. (2003), *Panorama de lucha contra la exclusión social: conceptos y estrategias*. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.
- Estivill Pascual, J. (1991), "Estrategias de Lucha contra la pobreza. Rentas Mínimas de Inserción", en *I Encuentro Internacional sobre Política Social, Documentos de Bienestar Social*, nº37, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, pp.253.
- Estivill, J. (1993), "Los prolegómenos de las rentas mínimas en España y en Euskadi", en Moreno, L. (ed.), *Intercambio social y desarrollo del bienestar*. Madrid, CSIC, pp.289-319.
- Euzeby, Ch. (1989), "En ingreso mínimo garantizado: experiencias europeas" en *Jornadas sobre Prestaciones no contributivas y lucha contra la pobreza*, 4 y 5 de mayo de 1989, Instituto Sindical de Estudios.
- Fassin, D. (2000), "Entre politiques du vivant et politiques de la vie. Pour une anthropologie de la santé". *Anthropologie et Sociétés*, Vol.24, nº1, pp.95-116.
- Fassin, D. (2000a), "Le supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence". *Annales, Histoire, Science Sociales*, Año 55, nº5, p. 955-981.
- Fassin, D. (2001), "The biopolitics of otherness: Undocumented foreigners and racial discrimination in French public debate". *Anthropology Today*, Vol.17, nº1.
- Fassin, D. (2003), "Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia". *Cuadernos de Antropología Social*, nº17, pp.51-80.
- Fassin, D. (2004b), "Le corps exposé. Essai d'économie morale de l'illegimité", en Fassin, D.; Memmi, D. (dirs.), *Le gouvernement des corps*. Editions de L'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Fassin, D. (2005), "Compassion and repression: the moral economy of immigration Policies in France", en *Cultural Anthropology*, Vol.20, nº3, pp.362-387.
- Fassin, D.; Aïach, P.; Boulenger, B.; Bretin, H.; Cèbe, D.; Kessar, Z.; Klingberg, S.; Philippe, C. (2004), *Des maux indicibles. Sociologie des lieux d'écoute*. Paris, La Découverte, collection "Alternatives sociales".
- Fassin, D.; Memmi, D. (dirs.) (2004), *Le gouvernement des corps*. Editions de L'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Fernández Enquita, M. (1996), *Escuela y etnicidad. El caso del pueblo gitano*. Madrid, CIDE, MEC.
- Fernández Torres, M.J. (2008), "El racismo como forma de exclusión del pueblo gitano. Aspectos jurídicos", en Hernández Pedreño, M., *Exclusión social y desigualdad*. Universidad de Murcia.
- Fernández, C., Tapia, P. (2007), "Los itinerarios de inserción social y el trabajo en red", incluido en el material del curso *La integración social en la Comunidad de Madrid: el Plan Regional contra la Exclusión Social* Organizado por el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) y por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (Dirección General de Voluntariado y Promoción Social), mayo y octubre, pp.195-266..
- Foucault, M. (1981 [1978]), "La Gubernamentalidad", en Foucault, M. et al., *Espacios de poder*. Madrid, La Piqueta.
- Foucault, M. (2002 [1975]), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Fundación Luis Vives (2008). *Proyecto "A favor de la inclusión social: sensibilización, movilización y debate"*. Informe de aprendizajes y propuestas de futuro.
- Fundación Secretariado General Gitano (2007), *Estudio sobre el empleo en la población gitana de la comunidad de Madrid*.
- Gabilondo, A. (1990), *El discurso en acción. Foucault y una onotología del presente*. Barcelona, Anthropos.

- Gamella, J. F. (coord.) (1996), *La población gitana en Andalucía*. Sevilla, Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
- Gamella, J. F. (coord.) (1996), *La población gitana en Andalucía*. Sevilla, Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
- Gamella, J.F. (1998), *La imagen infantil de los gitanos: estereotípos y prejuicios en escuelas multiétnicas*. Valencia, Fundació Bancaixa.
- Gamella, J.F. (1998), *La imagen infantil de los gitanos: estereotípos y prejuicios en escuelas multiétnicas*. Valencia, Fundació Bancaixa.
- Gamella, J.F. (2000), *Mujeres gitanas: matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía*. Sevilla, Junta de Andalucía.
- Gamella, J.F. (2000), *Mujeres gitanas: matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía*. Sevilla, Junta de Andalucía.
- Gamella, J.F. (2006), "Oficios tradicionales gitanos en Andalucía (1837-1959)", *Gitanos, pensamiento y cultura*, nº32-33, pp.64-73. Madrid, Fundación Secretariado Gitano.
- Gamella, J.F. (2006), "Oficios tradicionales gitanos en Andalucía (1837-1959)", *Gitanos, pensamiento y cultura*, nº32-33. Madrid, Fundación Secretariado Gitano, pp.64-73.
- García Castaño, J.; Pulido Moyano, R. (1994). *Antropología de la educación. El estudio de la transmisión-adquisición de cultura*. Madrid, Eudema.
- García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (1986), *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid, Alianza.
- García García, Á. (2007), "La familia en la comunidad gitana", en Laparra, M. (coord.), *Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación*. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, pp.25-44.
- García García, S. (2005), "Hermenéutica de la queja (o análisis del micropoder en los Servicios Sociales)", en *Trabajo social hoy*, nº44, pp.49-64.
- García Pastor, B. (2009), "Ser 'gitano' Fuera y dentro de la escuela: Una etnografía sobre la educación de la infancia gitana en la ciudad de Valencia". Madrid: Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares, CSIC.
- García Roca (1989), "Rentas mínimas garantizadas." *Revista de Serveis Socials*. Valencia.
- García Serrano, C.; Marbán Gallego, V.; Rodríguez Cabrero, G. (2009), *La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta ambulante de la población gitana*. Madrid, Ministerio de Sanidad y Política Social. Fuente: http://www.msc.es/politicaSocial/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/venta_ambulante.pdf.
- García, M.B.; Losa, A.; Esteban, M. (2005), *El ingreso mínimo de inserción en la región de Murcia*. Murcia, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
- Garfinkel, H. (1976), *Studies in ethnomethodology*. New Jersey, Englewood Cliffs, Armand Colin.
- Gaviria (1996), *La séptima potencia*, Madrid, Ediciones B.
- Geremek, B. (1987), *La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours*. Paris, Gammimard.
- Giddens, A. (1984), *The Constitution of society: Outline of a theory of Structuration*. Cambridge, Polity Press.
- Giddens, A. (2004 [1990]), *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Giménez Adelantado, A. (2003), "Gitanos en la escuela, historia de un desencuentro", en Barañano, A.; García García, J.L., *Culturas en contacto: encuentros y desencuentros*, pp.207-213.
- Giménez Adelantado, A. (2003a), *The education of Gypsy childhood in Europe*. Informe final del proyecto de investigación OPRE ROMA. Disponible en www.opreroma.uji.es.

- Giménez Adelantado, A. (2008), "Improving the schooling of Gypsy/Roma children through a better understanding of their social dynamics", en *Social Sciences and Humanities*. European Comission.
- Gimeno, J.A. (coord.) (2004), *Exclusión social y Estado de Bienestar*. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces S.A.
- Gobierno Vasco (1991), *Plan Integral de Lucha contra la Pobreza*. Vitoria-Gasteiz, Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
- Gobierno Vasco (1993), "Informe de evaluación del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi 1988-1992". Vitoria-Gasteiz, Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
- Gobierno Vasco (1993), *La inserción, a debate*. Vitoria-Gasteiz, Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
- Goizueta, I. (1991), *Ingreso Madrileño de Integración*, Vol.3, La exclusión. Elaborado por el Equipo IMI. Consejería de Integración Social, Comunidad de Madrid.
- González de la Rocha, M. (2006), *Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades*. México, CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata.
- González de la Rocha, M. (2006a), "Los hogares en las evaluaciones cualitativas: cinco años de investigación", en González de la Rocha, M. (coord.) (2006), *Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades*. México, CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata, pp.397-437.
- González Temprano, A. (dir.) (2003), *La consolidación del Estado del bienestar en España: 1993-2000*. Madrid, Consejo Económico y Social.
- Gordon, C. (1991), "Government Rationality: An Introduction", en Burchel, G.; Gordon, C.; Miller, P. (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago, University of Chicago Press.
- Grañeras, M.; Parras, A. (2010), *Gitanos: de los mercadillos a la escuela y del instituto al futuro*. Madrid, Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación.
- Gullestad, M. (2007), *Picturing pity. Pitfalls and pleasures in cross-cultural communication. Image and word in a North Cameroon mission*. Marianne Gullestad. New York y Oxford, Berghahn Books.
- Haber, S. (2005), "Éthique du care et problématique féministe dans la discussion américaine actuelle", en Paperman, P. ; Laugier, S., (coords.) *Le souci des autres. Éthique et politique du care*. París, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Heredia, J.D. (1983), *Nosotros los gitanos*. Barcelona, Ediciones 29.
- Hernández Jiménez, E y Quintana Vior, P y Rodríguez Díaz, F.J. (coords.) (2000), *Marginación e intervención social. Actuaciones y necesidades del colectivo gitano en riesgo de exclusión social*. Universidad de Oviedo. Servicio de publicaciones.
- Hernández Pedreño, M. (2008), *Exclusión social y desigualdad*. Murcia, Universidad de Murcia.
- Ibáñez, J. (1986), "Cómo se realiza una investigación mediante grupos de discusión", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F., *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid, Alianza.
- Iglesias, J. (1998), *El derecho ciudadano a la renta básica*. Libros de la catarata.
- Iglesias, J.; Busqueta, J.; Sáez, M.; (2001), *Todo sobre la renta básica, introducción a los principios, conceptos teorías y argumentos*. Barcelona, Virus.
- IRIS, EDES, Asociación El Fanal, ACCEM y otros. (2006), *Análisis de la realidad de Cañada Real Galiana (Villa de Vallecas)*. Documento mimeografiado.
- Irvine, I.; York, D. (1995), "Learning styles and culturally diverse students: A literature review", en Banks, J.; Banks, C. (coords.), *Handbook of research on multicultural education*. Nueva York, Mc. Millan: 484-497.

- Jociles, M. I. (2011), "Resistiéndose ante el conocimiento experto: monoparentalidad adoptiva y tácticas para legitimar la solidaridad como motivación para adoptar", *Cultura y Educación*. (Aceptado en noviembre de 2011).
- Jociles, M.I. (1995): "Lo extraño está en nosotros: La identidad étnica en dos zonas fronterizas (la Terra Alta y el Bajo Aragón catalanoparlante)", *Revista de Antropología Social*, Vol.4, pp.19-42.
- Jociles, M.I. (2006), "Diferencias culturales en la educación. Apuntes para la investigación y la intervención", *Gazeta de Antropología*, n° 22. Granada, Universidad de Granada.
URL: http://www.ugr.es/~pwlac/G22_27Marialsabel_Jociles_Rubio.html.
- Jociles, M.I. (2008), "Panorámica de la antropología de la educación en España: estado de la cuestión y recursos bibliográficos", en Jociles, M.I.; Franzé, A. (eds.), *¿Es la escuela el problema? Perspectivas socioantropológicas de etnografía y educación*. Madrid, Trotta.
- Jociles, M.I.; Charro, C. (2008), "La construcción de los roles paternos en los procesos de adopción internacional: el papel de las instituciones intermediarias", *Política y Sociedad*, Vol.45-2.
- Jociles, M.I.; Franzé, A. (eds.) (2008), *¿Es la escuela el problema? Perspectivas socioantropológicas de etnografía y educación*. Madrid, Trotta.
- Jociles, M.I.; Rivas, A.M. (2009), "Entre el empoderamiento y la vulnerabilidad: la monoparentalidad como proyecto familiar de las MSPE por reproducción asistida y adopción internacional", *Revista de Antropología Social*, nº18, pp.127-170.
- Join-Lambert, M.Th, et al. (1997), *Politiques sociales*. Paris, Presses de la Fondation Nationales de Sciences Politiques.
- Jover, D. (2007), "Retos y realidades de la inserción sociolaboral", *Revista Española del Tercer Sector*, nº5, ene-abril.
- Juan, E.M. (2008), "La respuesta de los servicios sociales ante los procesos de exclusión social: historia de tres mujeres". *Revista de servicios sociales y política social*, nº 81, pp.91-108. (Ejemplar dedicado a: Viejas y Nuevas Pobrezas)
- Julià, A. (2011), "El educador social, una figura profesional surgida de diversas prácticas e identidades profesionales", en *Actas de I Congreso estatal del educador social*. Murcia, pp.31-47.
- Julià, R. (2008), "La inserción sociolaboral como ámbito de intervención. Una propuesta teórica para la reflexión profesional". *Revista de servicios sociales y política social*, nº81, pp.133-148. (Ejemplar dedicado a: Viejas y Nuevas Pobrezas).
- Karsz, S. (2004), "La exclusión. Concepto falso, problema verdadero", en Karsz, S. *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Barcelona: Gedisa.
- Kittay, F. (2002), "When caring is just and justice is caring: justice and mental retardation", en Kittay, F.; Feder. E.K. (eds), *The Subject of Care. Feminist Perspective on Dependency*. Lanham (Md), Rowman and Littlefield Publishers, pp.257-276.
- Laborde, J-P. ; Lafore, R. (1991), "Les problèmes juridiques de la réglementation et de la mise en oeuvre d'un revenu pour chacun". (Ponencia Nacional). Tema XIII. Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Atenas, septiembre de 1991.
- Labov, W. (1985 [1969]), "La lógica del inglés no standard", en *Educación y sociedad*, nº4.
- Lafore, R. (1989), "Le trois defis du RMI", *Actualité juridique du droit adminitratif*, nº50, p.563.
- Lafore, R. (1989a), "Droit révolutionnaire", en Laroque, M., *Le Revenue Minimum d'insertion, droit revolutionnaire et prestation social d'un nouveau type*. Droit Social, p.597.
- Lafore, R. (2009), "Le RSA : la dilution de l'emploi dans la assistance?", *Revue de droit sanitaire et social*, nº2, p.223.
- Lahire, B. (1994), *Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de "l'échec scolaire" à l'école primaire*. Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
- Lakoff, G.; Mark,J. (1986). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid, Cátedra.

- Lamo de Spinoza, E. (1989), *Delitos sin víctima. Orden social y ambivalencia moral*. Madrid, Alianza.
- Laparra, M. (2001), "Una perspectiva de conjunto sobre el espacio social de la exclusión" () en Moreno, L. (ed.) *Pobreza y exclusión. La "malla de seguridad" en España*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pp.53-79
- Laparra, M. (2005), "La Europa de los gitanos: identidad, participación y políticas sociales en la Europa ampliada y su incidencia en España", *Documentación Social, Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada*, nº137.
- Laparra, M. (coord.) (2007), *Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera aproximación*. Madrid, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Laparra, M.; Aguilar, M. (1996), "Siete años en el camino de la renta mínima de inserción", *Temas para el debate*, nº17, pp.47-51.
- Laparra, M.; Aguilar, M.; Pérez, B. (2003), "La garantía de ingresos mínimos en el Plan contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid", en Aguilar, M.; Laparra, M.; Pérez, B. (coords.), *Investigaciones de base para la elaboración del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid*. Comunidad de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
- Laparra, M.; Aguilar, M.; Pérez, B. (2003b), "El acompañamiento social y el Plan contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid", en Aguilar, M.; Laparra, M.; Pérez, B. (coords.), *Investigaciones de base para la elaboración del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid*. Comunidad de Madrid, Universidad Pública de Navarra, Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
- Laparra, M.; Gaviria, M.; Aguilar, M. (1996), "Peculiaridades de la exclusión social en España. Propuesta metodológica y principales hipótesis a partir del caso de Aragón". *Pobreza, necesidad y marginación*. Madrid, Fundación Argentaria, pp.65-102.
- Laparra, M.; Gaviria, M.; Aguilar, M. (1997), "Peculiaridades de la exclusión en España. La sociedad exclusógena: precariedad, exclusión y marginación". *La Cristalera, revista de Asuntos Sociales*, 7, pp.15-21.
- Lareau, A.; Schumar, W. (1996), "The Problem of Individualism in Family-School Policies". *Sociology of Education*, Vol.69, Extra Issue: Special Issue on Sociology and Educational Policy: Bringing Scholarship and Practice Together, pp.24-39.
- Lash, S.; Urry, J. (1994), *Economies of signs and space*. London, Sage.
- Levy, S.; Rodríguez, E. (2005), Sin herencia de pobreza: El Programa Progres-Oportunidades de México. México y Washington, Planeta, Banco Interamericano de Desarrollo.
- Levy, S.; Rodríguez, E. (2005). Sin herencia de pobreza: El programa Progres-Oportunidades de México. México y Washington, D.C, Plantea/Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ley 15/2001, de 27 de Diciembre de 2001, de Renta Mínima en el Decreto 147/2002, de 1 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la CAM (BOCM de 14 de Agosto de 2002).
- Llinàs, P.; Ardèvol, E. (1988), *Imatges de la dona gitana (Camp de la Bota, 1981-1988), amb fotografies de Pepa Llinàs*, Barcelona, Las autoras-Instituto de la Mujer.
- López Varas, M. (1995), "Los gitanos en el epicentro de los discursos de exclusión". *Revista Archipiélago*, nº21. Barcelona, pp.71-80.
- López, M.P.; Salles, V. (eds.) (2006), *El Programa Oportunidades examinado desde el género*. México, COLMEX/UNIFEM, Oportunidades.
- Martín Estalayo, M. (2011), "Los dilemas éticos en la profesión de trabajo social", en Zamanillo (dir.), *Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del trabajo social*. Talasa ediciones, pp.19-44.
- Martín Giner, A. (2006), "Intervención social con familias gitanas excluidas", *Trabajo Social Hoy*, nº47, pp.105-120.

- Martín Giner, A. (2007), "La Renta Mínima de Inserción: contradicciones e incertidumbres", *Cuadernos de Trabajo Social*, Vol.20, pp.297-307. Universidad Complutense de Madrid.
- Martínez Buján, R. (2010), *Bienestar y cuidados: el oficio del cariño. Mujeres inmigrantes y mayores nativos*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- Martínez Román, M. A (1997), "Pobreza y exclusión social como formas de violencia estructural. La lucha contra la pobreza y la exclusión social es la lucha por la paz", *Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social*, nº5, pp.17-36. Universidad de Alicante.
- Martínez Román, M. A. (2001), "Género, pobreza y exclusión: diferentes conceptualizaciones y políticas públicas", en Tortosa, J.M. (coord.) (2001), *Pobreza y perspectiva de género*. Barcelona, Icaria, pp.65-87.
- Martínez Ten, L.; Tuts, M.; Pozo, J. (2003), *Guía para la promoción de la participación social de la juventud gitana*. Fundación Secretariado General Gitano e Instituto de la Juventud.
- Martínez Veiga, U. (1999), "Pobreza, segregación y exclusión espacial", *Revista internacional de ciencias sociales*, nº119, pp.35-50.
- Martucceli, D. (2003), "Integración y globalización", en Delgado, M.; Actis, W.; Martucceli, D.; Palacín, I.; Sáez, P., *Exclusión social y diversidad cultural*. San Sebastián, Tercera Prensa.
- Menéndez, E. L. (1998), "Sujeto y estructura o la difícil superación de los maniqueísmos", en *Manual sobre drogodependencia*. Barcelona, Grup Igia (en prensa).
- Meñaca, A. (2004), "Salud y migraciones. Sobre algunos enfoques en uso y otros por utilizar", en Fernández Juárez (coord.), *Salud e interculturalidad en América Latina. Perspectivas antropológicas*. Ecuador, Abya-Yala.
- Messu, M. (1991), *Les assistés sociaux. Analyse identitaire de un groupe social*. París, Privat.
- Milano, S. (1990), *Los ingresos mínimos garantizados en la C.E.E.* Vitoria-Gasteiz, Departamento de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno Vasco.
- Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública; Fundación Secretariado Gitano (2005), *Salud y Comunidad Gitana. Análisis de propuestas para la actuación*.
- Ministerio de Sanidad y Consumo; Fundación Secretariado Gitano (2006), *Guía para la actuación con la comunidad gitana en los servicios sanitarios*.
URL: <http://www.gitanos.org/publicaciones/guiasalud/index>.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Dirección General de Inclusión Social (2005), *III Plan Nacional de Acción Para la Inclusión Social del Reino de España 2005-2006*.
- MIRE (1991), *Le RMI à l'épreuve des faits*. París, Syros Alternatives.
- Molleda, E. (2007), "¿Por qué decimos que 'no podemos hacer intervención social?'", *Cuadernos de Trabajo Social*, nº20, pp.139-155.
- Molleda, E. (2008), "¿Qué hacer para hacer bien? Ética y trabajo social". *Revista de Servicios Sociales y Política social*, nº83 (tercer trimestre). Madrid, pp.139-150.
- Molyneux, M. (2006), "Mothers at the service of the new poverty agenda: PROGRESA/Oportunidades, Mexico's Conditional Transfer Program", *Journal of Social Policy and Administration*, Vol.40, nº4, pp.425-449.
- Monreal, P. (1996), *Antropología y pobreza urbana*. Madrid, Los libros de la Catarata.
- Monreal, P. (1999), "¿Sirve para algo el concepto de cultura de la pobreza?" *Revista de Occidente*, nº215, pp.75-88.
- Montoya, J.M. (1988), "El pueblo gitano ante la escuela", en Peña, B. (coord.) *La escuela ante la inadaptación social*. Madrid, Fundación Banco Exterior, pp.137-160.
- Moreno, L. (2000), *Ciudadanos precarios. La "última red" de protección social*. Barcelona, Ariel Sociología.
- Moreno, L. (ed.) (1993), *Intercambio social y desarrollo del bienestar*, Madrid, CSIC.

- Moreno, L. (ed.) (2001), *Pobreza y Exclusión: la "malla de seguridad" en España*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Moreno, L.; Pérez Yruela, M. (eds.), (1992), *Política social y Estado de Bienestar*. Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid.
- Mosse, D. (2005), *Cultivating development. An Ethnography of Aid Policy and Practice*, Londres, Pluto Press.
- Mosse, D. (2006), "Anti-social anthropology? Objectivity, objection, and the ethnography of public policy and professional communities". *Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol.12, pp.935-956.
- Moulière, M.; Rivard, T.; Thalineau, A. (1999), *Vivre le RMI des deux côtés du guichet*. Paris, Syros.
- Murard, N. (2003). *La morale de la question sociale*. La Dispute, París.
- Neufeld, M.R.; Thisted, J.A. (2004), ""Vino viejo en odres nuevos": acerca de educabilidad y resiliencia". *Cuadernos de Antropología Social*, nº19, pp.83-99.
- Nicole-Drancourt, C. (1991), *Le Labyrinthe de l'insertion*, Paris, La Documentation Française.
- Nogués, L., Rodríguez A. (2007), "El acompañamiento social de familias gitanas con trayectorias de marginación y exclusión residencial", en *Revista de Documentación social*, nº145, 2007 (Ejemplar dedicado a: Re-pensar la intervención social / coord. por Germán Jaraíz Arroyo, Esteban Ruiz Ballesteros), pp.133-152. Incluido en el Curso: *La integración social en la Comunidad de Madrid: el Plan Regional contra la Exclusión Social*. Organizado por el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) y por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (Dirección General de Voluntariado y Promoción Social). Mayo y Octubre 2007.
- Olmeda, G. (1997), "La renta mínima garantizada. A caballo de la asistencia, la seguridad social y la política de empleo", *Revista de Treball, Economia i Societat*, nº7, pp.33-56. Comité economic i social de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana.
- O'Neill, O. (1993), "Justicia, sexo y fronteras internacionales", en Nussbaum, M.; Sen, A., *La calidad de vida*. México, FCE.
- Ortí, A. (1986), "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta y la discusión de grupo", en García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F., *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid, Alianza.
- Otegui, R. (2002), *Informe del estudio FIPSE. Investigación cualitativa sobre conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con la transmisión de VIH-SIDA en la población gitana*. Madrid, FIPSE.
- Paíno; Rodríguez; Carbonero (2000), "Cuestiones y conceptos básicos", en Hernández Jiménez, E.; Quintana Vior, P.; Rodríguez Díaz, F.J. (coords.), *Marginación e intervención social. Actuaciones y necesidades del colectivo gitano en riesgo de exclusión social*, pp.17-27.
- Paperman, P. ; Laugier, S. (dir.) (2005), *Le souci des autres. Éthique et politique du care*. París, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Parlamento Europeo (1989), "Resolución sobre la dimensión social del mercado interior", en *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 15 marzo. Doc A 2-399/88 (En Cáritas, 1989, pp.43-44).
- Parsons, T. (1966), *Societies, evolutionary and comparative perspectives*. New Jersey, Englewood Cliffs.
- Pattaroni, L. (2005), "Le care est-il institutionnalisable ?", en Paperman, P. ; Laugier, S. (dirs.), *Le souci des autres. Éthique et politique du care*. París, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Paugam S. (1993), *La société française et ses pauvres*, Paris, PUF, Recherches politiques.
- Paugam, S (1996), "La constitution d'un paradigme", en Paugam, S. (dir.) *L'exclusion, l'état des savoirs*. París, La Découverte, pp.7-19.

- Paugam, S. (1991), *La Disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté*, París, PUF.
- Paugam, S. (2007b), *Las formas elementales de la pobreza*. Madrid, Alianza.
- Paugam, S. (dir.) (1996b), *L'exclusion, l'état des savoirs*. París, La Découverte.
- Paugam, S. (dir.) (2007), *Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales*. París, PUF.
- Perales, J.A. (1991), "Los gitanos", en Goizueta, I. (dir), *Ingreso Madrileño de Exclusión (IMI), Vol.3, La exclusión*, pp.205-230. Elaborado por el Equipo IMI. Consejería de Integración Social, Comunidad de Madrid.
- Pérez Eransus, B. (2005), *Políticas de activación y rentas mínimas*. Madrid, Cáritas Española.
- Pérez Soler, A. (1979), *Mitos en puericultura*. Barcelona, Medicina y Técnica.
- Pérez Soler, A. (1979a), *Mitos en medicina infantil (Mitología pediátrica)*. Barcelona, Médica y Técnica.
- Pérez-Agote, A. (1984), *La reproducción del nacionalismo. El caso vasco*. Madrid, CIS.
- Pérez-Tolón, L., Ardèvol, E. (1991), "A su propio ritmo: gitanos de hoy; un modelo de colaboración en antropología visual". *Gazeta de Antropología*, nº8, Granada.
- Perret, B. (2001), *Evaluation des politiques publiques*. París, La découverte.
- Perrin, G. (1989), "La Seguridad Social y la pobreza en los países desarrollados". *Revista Seguridad Social*, nº41, pp.7-36.
- Petersen, A. (1997), "Risk, governance and the new public health", en Petersen, A.; Burton, R. (eds.), *Foucault, health and Medicine*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Philips, S. (1972), "Participant structures and communicative competence. Warm Springs children in community classroom", en Cazden, C.B.; John, U.P.; Hymes, D. (eds.), *Functions of language in the classroom*. Nueva York, Teachers College Press.
- Pinilla, R. (2006), *Más allá del bienestar. La renta básica de ciudadanía como innovación social basada en la evidencia*. Icaria, Barcelona.
- Pisarello, G; de Cabo, A. (2006), *La renta básica como nuevo derecho ciudadano*. Madrid, Trotta.
- Pomycala, A.; Holt, R. (2002), "Mujeres gitanas: una prioridad para la política europea de Salud Pública". *I Tchatchipen, Revista Trimestral de Investigación Gitana*, nº40: 35-42. Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales.
- Porras, M. (1998), "Políticas sociales contra la exclusión social", ponencia realizada el *V Congreso estatal de Intervención Social: Calidad y responsabilidad compartida. Retos del bienestar en el cambio de siglo*, Mesa redonda: lucha contra la exclusión social, desarrollo local e inserción socio-laboral, pp.1587-1609.
- Poveda, D. (2011), "La educación de las minorías étnicas desde el marco de las continuidades-discontinuidades familia-escuela". *Gazeta de Antropología*, nº17.
- Ramírez Hita, S. (2003), *Gitanos y salud. Articulación de prácticas y saberes médicos entre los gitanos de Perpignan*. Tesis de doctorado, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
- Renes, V.; Lorenzo, F. (2007), *Cuestiones y retos clave en la inclusión social. Documento provisional para debate 1*. Fundación Luis Vives.
- Renes, V.; Lorenzo, F.; Chahin, A. (2007), *Poniendo en práctica la Estrategia Europea para la Inclusión Social. Del plano europeo al plano local. Cuaderno Europeo 4*. Fundación Luis Vives.
- Rivas, A.M. (2000), "De la injusticia al trabajo: la experiencia del parto en un grupo de jóvenes de Madrid", *Culturas del Trabajo: representaciones y prácticas*. RDTP. Madrid, CSIC, pp.145-159.
- Rivas, A.M. (2004), "Del trabajo como valor de inscripción social al trabajo como factor de desestructuración social: el caso de los trabajadores y trabajadoras desplazados por la deslocalización industrial dentro del estado español", *Cuadernos de Relaciones Laborales*. Universidad Complutense de Madrid, Vol.22, nº2, pp. 63-82.

- Rivas, A.M. (2005), "De la dignidad de los trabajadores en tiempos de flexibilidad laboral." *Anales de la Fundación Joaquín Costa*, nº22-23, pp.109-120.
- Rivas, A.M.; Jociles, M.I. (1993), "La creación simbólica de fronteras entre los antropólogos del Estado Español", *Revista de Antropología Social*, nº2, pp.137-148.
- Rodríguez, A.; Zamanillo, T. (1992), "Apuntes para una valoración diagnóstica", *RTS: Revista de Treball Social*, nº127, pp.48-54.
- Romaní, O. (1992), "Marginación y drogodependencias. Reflexiones en torno a un caso de investigación-intervención", en Álvarez-Uría (ed.), *Marginación e inserción*. Madrid, Endymión.
- Romaní, O. (1996), "Antropología de la Marginación. Una cierta incertidumbre.", en Prat Caros, J.; Martínez Hernández, A. *Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat*. Barcelona, Ariel, pp.303-318.
- Rosanvallon, P. (1995), *Réflexions sur la question sociale. Repenser l'État-providence*, París, Le Seuil.
- SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros. (2006). *Situación de los asentamientos marginales del área sanitaria 1*. Documento mimeografiado.
- Sama, S. (2001), "Etnografía en Évora. Encuentros y desencuentros en la escuela", *Revista Diálogo Gitano*. Secretariado Nacional Gitano, nºespecial, pp.15-17.
- Sama, S. (2009), Tesis doctoral "Espacios vividos, espacios creados: Los gitanos de Évora". Universidad Complutense de Madrid. Vinculada a los proyectos: "Antropología Urbana en la Península Ibérica: perspectiva comparativa" (PB98-0771) y opre-roma "Gypsie Childhood Education in Europe (V Programa Marco UE, HIPSE-CT-1999-00033). Directoras: María Cátedra Tomás (UCM) y Ana Gilménez Adelantado (UJI).
- San Román (2003), "Las dos caras del encuentro. Dominación y dependencia", *Revista Gitanos, Pensamiento y Cultura*. Revista bimestral de la Fundación Secretariado General Gitano, nº17-18, pp.26-27.
- San Román (2006), "¿Acaso es evitable? El impacto de la Antropología en las relaciones e imágenes sociales", *Revista de Antropología Social*, Vol.15, pp.373-410. Universidad Complutense de Madrid.
- San Román, T. (1976), *Vecinos gitanos*. Madrid, Akal.
- San Román, T. (1991), "La marginación como dominio conceptual. Comentarios sobre un proyecto en curso", en Prat, J.; Martínez Veiga, U; Contreras, J; Moreno, I. (eds.), *Antropología de los pueblos de España*. Madrid, Taurus, pp.151-158.
- San Román, T. (1993), "La universidad y el bienestar social", *Antropología*, Vol.6, pp.131-141.
- San Román, T. (1997), *La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*. Madrid, Siglo XXI.
- San Román, T. (1999), "El desarrollo de la conciencia política de los gitanos", revista *Gitanos*, abril, Revista bimestral de la Asociación Secretariado General Gitano, nº0, pp.36-41. Transcripción de la ponencia del mismo título en las Jornadas *Integración y Exclusión social de minorías: el pueblo gitano*, organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, octubre 1998, Valencia.
- San Román, T. (2010), "Educar para la escuela o educar ¿para qué vida?", *Revista A Fondo*, revista trimestral de la Fundación Secretariado Gitano, nº56, pp.46-49.
- San Román, T. (2010a), *La diferencia inquietante: viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*. Madrid, Siglo XXI, Posdata, pp.275-281.
- San Román, T. (ed.) (1984), *Gitanos de Madrid y Barcelona*. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona.
- San Román, T. (ed.) (1986), "Reflexiones sobre marginación y racismo", en San Román, T. (ed.) *Entre la marginación y el racismo*. Madrid, Alianza.

- San Román, T. (ed.) (1987), *Entre la marginación y el racismo, reflexiones sobre la vida de los gitanos*, Madrid, Alianza.
- Santiago Torres, J.D. (2000), "Propuestas para una intervención integral con la comunidad gitana", *Revista Trimestral de Investigación Gitana, I Tchatchipen*. Barcelona, Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, nº32: 18-27.
- Sassier, M. (2004), "La exclusión no existe, yo la encontré" en Karsz, S. (ed.), *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Barcelona, Gedisa.
- Sayad, A. (2004), *The Suffering of the Immigrant*. Polity Press, UK.
- Sennett, R. (2000), *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*. Barcelona, Anagrama.
- Serrano, A.; Arriba, A. (1998). *¿Pobres o excluidos? El Ingreso Madrileño en perspectiva comparada*. Madrid, Fundación Argentaria.
- Serrano, A.; Arriba, A. (2001), "El Ingreso Madrileño de Integración: revisitando sus características y algunos tópicos", en Moreno, L. (ed.), *Pobreza y Exclusión: la "malla de seguridad" en España*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pp.257-289.
- Servicio de Prevención de la Exclusión y Prevención de Rentas Mínimas de la C.M. (2005), "Los programas individuales de inserción: marco conceptual y normativo. Textos para estudio y debate", Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid.
- Servoin y Shore, C.; Wright, S. (1997), "Policy: A New field of Anthropology", en Shore, C.; Wright, S. (eds.), *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*. Londres y Nueva York, Routledge, pp.3-39.
- Simmel, G. (1998 [1908]), *Le pauvres*. Paris, PUF.
- Standing, G. (1990), "El camino hacia el subsidio activo ¿Otra forma de protección social o una amenaza para la ocupación?", *R.I.T.*, Vol.109, nº4, pp.499.
- Stoffaës, Christian. (1974), "Vers un revenue minimum garanti généralisé?" *Droit Social*, nº11, pp.158-159.
- Tepichín, A.M. (2009), "Autonomía para participar en decisiones: elemento central para el combate a la pobreza con equidad de género". *Estudios Sociológicos*, Vol.XXVII, nº79, enero-abril, pp.111-146.
- Tezanos, J.F. (ed.) (2004), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Tercer foro sobre tendencias sociales. Madrid, Sistema.
- Thébaud, F. (2001), "Féminisme et maternité : les configurations du siècle", en Knibiehler Yvonne (dir.), *Maternité: affaire privée, affaire publique*. Paris, Bayard.
- Thévenot, L. (1994), "Le régime de familiarité: des choses en personne". *Gèseses*, nº.17, pp.72-101.
- Tortosa, J. M (coord.) (2001), *Pobreza y perspectiva de género*. Barcelona, Icaria.
- Trigueros, I. (1995), *Manual de prácticas de Trabajo Social en el campo de la marginación. Los gitanos*. Madrid, Siglo XXI.
- Tronto, J. (1993), *Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*, Londres-New York, Routledge.
- Tugendhat, E. (2008), "Libre albedrío y determinismo", en *Antropología en vez de metafísica*. Barcelona, Gedisa.
- Tylor, E.B. (1871), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom*, Vol.I-II. New York, J.P. Putnam's sons.
- Uribe, J.M. (2000), "'La culpa fue de Darwin' o 'el amor al chocolate es cultura'. Para un debate sobre el papel de la antropología de la medicina", en J.M.Comelles y E. Perdiguer (eds.) *Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina*. Bellaterra.
- Van Parijs, P.; Vanderborght, Y. (2006), *La renta básica, una medida eficaz para luchar contra la pobreza*. Barcelona, Paidós Ibérica.

- Van Zanten, A. (2007), "Reflexividad y elección de la escuela por los padres de clase media en Francia". *Revista de Antropología Social*. Universidad Complutense de Madrid, Vol.16, pp.245-278.
- Vanlerenberghe, P. (1992), *RMI, le pari de l'insertion*. Paris, La Documentation française.
- Vásquez, A.; Martínez, Y. (1996), *La socialización en la escuela. Una perspectiva etnográfica*. Barcelona, Paidós.
- Verdès-Leroux, J. (1978), *Le travail social*. Paris, Minuit.
- Vicente, M.C. (2011), "Las complejas e ineludibles relaciones entre ética, teoría y técnica", en Zamanillo (dir.) *Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del trabajo social*. Madrid, Talasa, pp.45-79.
- Villareal, F., Estivill, J.; Aiguabella, J. (1997), "Experiencias de formación e inserción laboral y población gitana: encuentro de Madrid 20, 21 y 22 de febrero de 1997". Madrid, Asociación del Secretariado General Gitano.
- Villatoro, P. (2004), *Programas de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de cinco experiencias*. Serie políticas sociales 87. Santiago, CEPAL.
- Viveret, P. (1989), "L'évaluation des politiques et des actions publiques", rapport au Premier Ministre, Paris, La Documentation Française.
- Vrancken, D.; Macquet, C. (2006), *Le travail sur Soi. Vers une psychologisation de la société?* Paris, Belin.
- Weller, J.-M. (1999), *L'Etat au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics*. Paris, Desclée de Brouwer.
- Willis, P. (1988), *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera*. Madrid, Akal.
- Willis, P. (1993), "Producción cultural no es lo mismo que Reproducción cultural, que a su vez no es lo mismo que Reproducción Social, que tampoco es lo mismo que Reproducción", en Honorio Velasco et al. (eds.), *Lecturas de Antropología para educadores*, Madrid, Trotta.
- Zamanillo (dir.) (2011), *Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política del trabajo social*. Madrid, Talasa.
- Zamanillo, T. (coord.) (2004), *Análisis diagnóstico de la investigación-acción con profesionales que realizan el acompañamiento social a beneficiarios de la RMI*. Convenio entre la Consejería de Servicios Sociales y la Universidad Complutense de Madrid. Documento mimeografiado.
- Zoyem, J-P. (1999), "Contrat d'insertion et sortie du RMI: évaluation des effets d'une politique sociale".
- Zoyem, J-P. (2002), "Contrats d'insertion et sorti du RMI: évaluations des effets d'une politique sociales", *INSEE, Économie et stadistiques*, nº346-347, pp.75-86.

Prensa

- Cercas (2010), "La política chic", diario dominical *El País Semanal*, p.14.
- Cortina, A. (1998), "Ética de las profesiones", diario *El País*, 20 de febrero. (En Martín Estalayo, 2011, p.25).
- García Herrero, G. (2011), "El escenario de la bondad", diario *El País*, 16 de agosto, p.26.
- Gracia, J. (2011), "Política y miopía", diario *El País*, 16 de agosto, p.23.
- Grañeras, M. (2011), "Retos y deudas: mujeres y niñas ante la educación", diario *El país*, 28 de enero. Sección sociedad.
- Martín Seco, J.F. (2010), "Razones para una huelga", diario *Público*, 25 septiembre, p.4.
- Morán, C. (2011), "Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad", diario *El País*, 16 de agosto, pp.26-27.

- Moreno, J. (2011), "Mi prioridad son las pensiones, a partir de ahí habrá que recortar todo", entrevista a Mariano Rajoy, diario *El país*, p.17.
- Muchnik, N. (2010), "El chivo expiatorio", diario *El País*, 8 de septiembre.
- Nair, S. (2010), diario *El País*, 25 septiembre, p.8.
- Pantoja, F. (2009), "La sociedad está pidiendo dureza cuando no se han otorgado posibilidades de igualdad", periódico quincenal *Diagonal*, nº107, 22 de julio.
- Diario *Público* (2011), 11 agosto, Madrid.
- Rosa, I. (2010), diario *Público*, 13 septiembre, p.8.
- Thibon, N. (2010), diario *Público*, 17 septiembre, p.7.
- Vázquez, D. (2010), "Corrupción sin fronteras, diario *Público*, 16 septiembre, p.7.

Anexo: Guiones de entrevistas

Guión de entrevista a perceptores de RMI

Bloques temáticos:

- 1) Historia personal (procedencia geográfica, estudios, estado civil, formación, experiencia laboral, expectativas vitales a mediano-largo plazo, etc.)
- 2) Historia de relación con las instituciones (momento de contacto con los Servicios Sociales, percepción/solicitud de distintas prestaciones sociales).
- 3) Historia de relación con la RMI (forma de solicitarla, lugar, recuerdos sobre el momento de entrar en contacto con la institución, relación con los profesionales con los que entró en contacto para ello, ¿fue fácil el proceso de solicitud?, ¿qué actividades incluye su Programa Individual de Inserción?, ¿cómo se desarrolló el momento en el que se firmó el PII?, etc.).
- 4) El objetivo de la RMI (¿Para qué sirve la RMI?, ¿para quiénes está destinada?, ¿a qué tipo de personas debería cubrir/proteger? Obligaciones que se asocian a la RMI)
- 5) Experiencias con los profesionales (relación con trabajadores sociales, profesionales de ONG, educadores subcontratados por las Juntas Municipales, mediadoras sociales gitanas. Descripción de las relaciones que establece en los proyectos de integración, en caso de que asista a alguno).
- 6) Experiencias concretas en contacto con institución públicas (percepción de la calidad o no del trato que se recibe. Influencia de la pertenencia étnica).

Guión de entrevista a gitanos no perceptores de RMI

Bloques temáticos:

- 1) Historia personal (procedencia geográfica, estudios, estado civil, formación, experiencia laboral, expectativas vitales a mediano-largo plazo, etc.)
- 2) Historia de relación con las instituciones (momentos vitales en los que sí se ha solicitado alguna ayuda social, por ejemplo, vivienda. En caso de no haberlos, demandar relato de experiencia con alguna institución pública, como sanidad, y pedir ejemplo de la forma de relación que se estableció con sus profesionales).
- 3) Historia de relación con la RMI (pedir concepción de la RMI que se maneja y evocar el caso de algún familiar que sí la cobre. ¿Para qué sirve la RMI?, ¿para quiénes está destinada?, ¿a qué tipo de personas debería cubrir/proteger?).
- 4) Experiencias concretas en contacto con institución públicas (percepción de la calidad o no del trato que se recibe. Influencia de la pertenencia étnica).

Guión de entrevista a cargos políticos/funcionarios/sindicalistas que diseñaron y supervisan cumplimiento de la RMI actualmente

- 1) Biografía personal y trayectoria previa al presente cargo.
- 2) Descripción del trabajo que realiza actualmente.
- 3) Relación con el momento de diseño/negociación de la actual ley de RMI.
- 4) Novedades de la RMI con respecto al IMI.
- 5) Ventajas/inconvenientes de la actual ley de RMI (cambio en el trabajo social, nuevos derechos, etc.)
- 6) La red de intervención social que aplica la RMI. (Distinción de funciones, complejidad de las relaciones interinstitucionales, etc.).
- 7) Efectos de la RMI (positivos, inesperados, en el colectivo gitano...)
- 8) Forma de implantación de la RMI por los trabajadores sociales de Servicios Sociales
- 9) Uso de la RMI como forma de “presión” a los gitanos. (¿Hay cobertura legal?/¿hay evaluaciones que indiquen lo anterior?)

Guión de entrevista para trabajadores sociales de Servicios Sociales

- 1) Biografía personal y trayectoria previa al presente cargo.
- 2) Descripción del trabajo que realiza actualmente.
- 3) Relación con el momento de diseño/negociación de la actual ley de RMI.
- 4) Novedades de la RMI con respecto al IMI (acompañamiento social, negociación del Programa Individual de Inserción, etc.).
- 5) Forma de aplicar la actual ley de RMI con el colectivo gitano (cambio en el trabajo social, información sobre sus nuevos derechos a los usuarios gitanos, forma de elaborar el Programa Individual de Inserción, manera de establecer compromisos de cara a actividades de inserción, ¿peculiaridades del trato con los usuarios gitanos?, legitimidad del uso de la RMI como forma de “presión” a los gitanos, ¿hay cobertura legal? Dilemas que surgen en el trabajo cotidiano con el colectivo gitano, etc.)
- 6) La red de intervención social que aplica la RMI. (Distinción de funciones, complejidad de las relaciones interinstitucionales, colaboración con otras instituciones/ONG, etc.).
- 7) Efectos de la RMI e ideas de fondo de esta política social (efectos positivos, inesperados, la “cronicidad” o “dependencia” que algunos dicen genera, su potencial transformador con respecto a situaciones de exclusión social, su potenciar para “integrar”, legitimidad de las políticas sociales protectoras no condicionadas o no, importancia de la contraprestación por parte de los usuarios...).

Guión de entrevista para trabajadores de ONG que imparten proyectos de integración a población gitana beneficiaria de RMI (mediadoras sociales gitanas)

- 1) Biografía personal y trayectoria previa al presente cargo.
- 2) Descripción del trabajo que se realiza actualmente (toma de decisión y proceso de formación en caso de ser mediadora).
- 3) Relación con el momento en el que se empezó a intervenir profesionalmente con población gitana (relación con la RMI y su nueva regulación como elemento facilitador u obstaculizador del trabajo de intervención con el colectivo).
- 4) Novedades de la RMI con respecto al IMI, en caso de conocerlas (negociación del PII, importancia de la contraprestación, forma de vincular a los usuarios gitanos de RMI a los proyectos de integración).
- 5) Relación con los trabajadores Sociales de Servicios Sociales (reuniones de coordinación, forma de intervenir conjunta –de haberla– con los gitanos, diferencias entre el trabajo de Servicios Sociales y el de las ONG en el trato con los gitanos)
- 6) Las actividades educativas que se organizan para los usuarios gitanos (características de la población que asiste, temáticas que se trabajan, receptividad por parte de la población gitana perceptora de RMI a las mismas, grado de participación, beneficios de contar con una mediadora social en la ONG, etc.).
- 7) Efectos de la RMI e ideas de fondo de esta política social (efectos positivos, inesperados, la “cronicidad” o “dependencia” que algunos dicen genera, su potencial transformador con respecto a situaciones de exclusión social, su potenciar para “integrar”, legitimidad de las políticas sociales protectoras no condicionadas o no, importancia de la contraprestación por parte de los usuarios...).